

GACETA
del SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Creado por Decreto de 8 de diciembre de 1870

DÉCIMA ÉPOCA

LIBRO 81
TOMO II

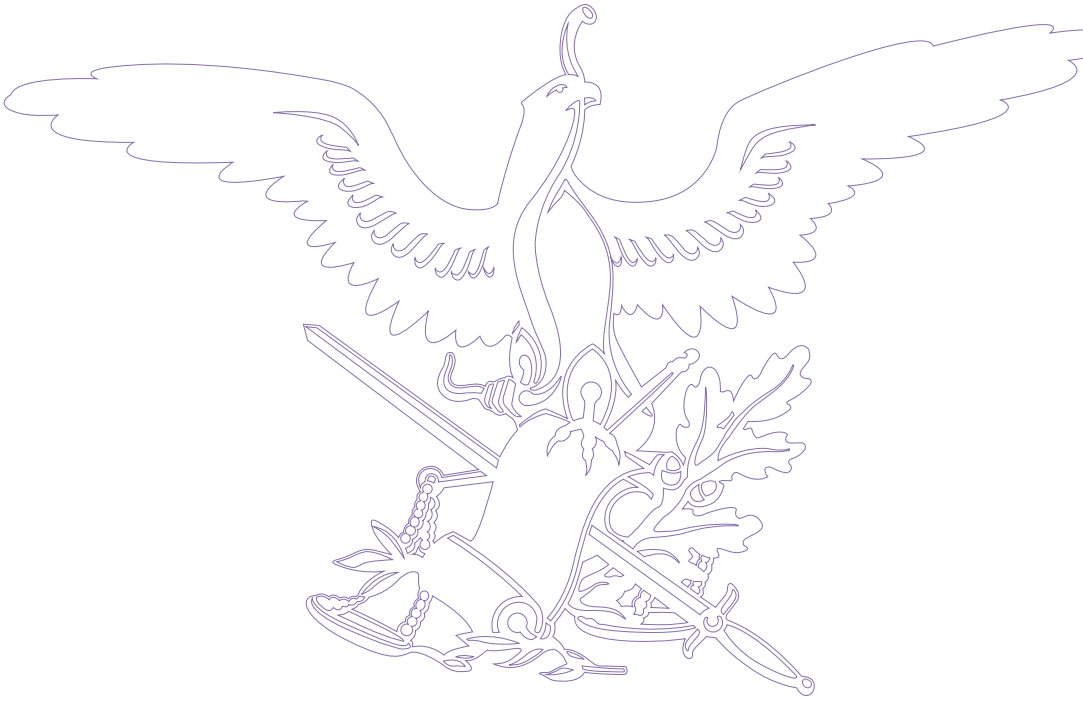
Diciembre de 2020

Plenos de Circuito (2), Tribunales Colegiados de Circuito y Normativa, Acuerdos Relevantes y Otros

GACETA

DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

La compilación y formación editorial de esta Gaceta
estuvieron a cargo de la Dirección General de la Coordinación
de Compilación y Sistematización de Tesis
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación



GACETA

del SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Creado por Decreto de 8 de diciembre de 1870

DÉCIMA ÉPOCA

LIBRO 81
TOMO II

Diciembre de 2020

Plenos de Circuito (2), Tribunales Colegiados de Circuito y Normativa, Acuerdos Relevantes y Otros

DIRECTORIO

Dirección General de la Coordinación
de Compilación y Sistematización de Tesis

Dr. Ricardo Jesús Sepúlveda Iguíniz
Director General

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ministro Arturo Zaldívar
Presidente

PRIMERA SALA

Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá
Presidente

Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo
Ministra Norma Lucía Piña Hernández
Ministra Ana Margarita Ríos Farjat

SEGUNDA SALA

Ministro Javier Laynez Potisek
Presidente

Ministro Luis María Aguilar Morales
Ministra Yasmín Esquivel Mossa
Ministro José Fernando Franco González Salas
Ministro Alberto Pérez Dayán

Cuarta Parte
PLENOS DE CIRCUITO (2)



Sección Primera
JURISPRUDENCIA

JUICIO DE NULIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE IMPONE MULTA A UN SUJETO OBLIGADO POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE LA MATERIA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 20 DE OCTUBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS PEDRO DANIEL ZAMORA BARRÓN, JORGE MEZA PÉREZ Y ROGELIO CEPEDA TREVIÑO. PONENTE: ROGELIO CEPEDA TREVIÑO. SECRETARIA: ADAIRIS RODRÍGUEZ ROCHA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—**Competencia.** Este Tribunal Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, es legalmente competente para conocer del presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Ter, fracción I y 55 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de la denuncia sobre la posible contradicción de tesis, en materia administrativa, entre las sustentadas por dos Tribunales Colegiados de este Circuito.

SEGUNDO.—**Sesión vía remota.** La resolución de la presente contradiccion de tesis se llevará a cabo vía remota, mediante videoconferencia, haciendo uso de medios electrónicos, dada la contingencia por la que atraviesa actualmente el país por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19.

Lo anterior se funda en el artículo 27, fracción IV, y en el diverso 30 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Dicha disposición ordena celebrar las sesiones por videoconferencia, cuando exista una situación de contingencia previamente declarada por el Consejo de la Judicatura Federal.

La referida contingencia sanitaria es un hecho notorio para la comunidad internacional y ha sido reiteradamente reconocida por el Consejo de la Judicatura Federal. Particularmente conviene destacar el reconocimiento de la contingencia que se hace en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Además, en el artículo 27, fracción III, de este último Acuerdo General, se afirma expresamente que las sesiones ordinarias de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Plenos de Circuito (durante el período de vigencia del Acuerdo, el cual la reanudación de las actividades jurisdiccionales de este Órgano Colegiado) se deben celebrar, invariablemente, por videoconferencia.

TERCERO.—**Legitimación del denunciante.** La denuncia proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues, en el caso fue realizada por los quejosos en los asuntos que la motivaron.

CUARTO.—**Posturas contendientes.** Con la finalidad de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente relatar brevemente las consideraciones en que se basaron las resoluciones de los Tribunales Colegiados contendientes, para después proceder a su análisis.

I. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito resolvió los amparos directos 107/2019 y 122/2019, promovidos por ************, ********** y ************, en los que fue negada la protección constitucional, por las siguientes consideraciones.

• Determinó que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, expedida mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, especifica que las determinaciones de los órganos garantes estatales pueden combatirse vía recurso de inconformidad, o bien, directamente por medio del juicio de amparo, excluyendo la posibilidad de promover en su contra el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de que se trate.

• Agregó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 77/2016, sostuvo medularmente

que el medio ordinario de defensa que procede contra las resoluciones dictadas por los organismos de transparencia gubernamental, como lo era la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, no era el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Estatal, sino el recurso de inconformidad ante el órgano garante, cuya interposición era optativa para el interesado; mientras que el medio extraordinario de defensa lo era el juicio de amparo.

• Puntualizó que la determinación de la multa era impuesta al sujeto titular de la autoridad obligada, sin embargo, su entero debía salir indefectiblemente de su peculio; de ahí que, la impugnación de la multa reclamada no confería únicamente legitimación al particular, sino también al sujeto obligado.

II. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito resolvió los amparos directos 77/2019, 102/2019 y 114/2019, promovidos por **********, ********** y **********, en los que se concedió la protección constitucional, por las siguientes consideraciones:

• Determinó que en el caso no se actualizaba de forma patente e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 56, fracción IX, en relación con el 17 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, ya que la procedencia del juicio contencioso administrativa respecto del acto impugnado en esos casos (imposición de multas) debía estudiarse atendiendo a las características particulares del reclamo; por lo que era necesario verificar si efectivamente la multa constituía un aspecto ajeno a la decisión vinculada con la materia de transparencia y acceso a la información.

• Puntualizó que era necesario el análisis de la naturaleza de los actos impugnados y lo alegado respecto de ellos, lo cual, no podía ser materia de estudio en un simple auto de trámite como lo era un auto de admisión o desechamiento de demanda.

QUINTO.—**Existencia de la contradicción de tesis.** En sus criterios más recientes el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Suprema Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "***tesis***" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes **sobre un mismo punto de derecho**, **independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales**.

Ello con la finalidad de definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis.

Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010 y la tesis aislada P.XLVII/2009, ambas emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan 'tesis contradictorias', entendiéndose por 'tesis' el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de **ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son**



exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, **lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia**. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.', al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que 'al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes' se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en 'diferencias' fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. **De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución**." **(Novena Época, con número de registro digital: 164120. Instancia: Pleno, tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXXII, agosto de 2010, materia común, tesis: P./J. 72/2010, página 7).**

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.', sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan." (**Novena Época, con número de registro digital: 166996. Instancia: Pleno, tipo de tesis: aislada. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXX, julio de 2009, materia común, tesis P. XLVII/2009, página 67).**

De conformidad con los criterios transcritos, para que exista contradicción de tesis no es necesario que coincidan las cuestiones fácticas analizadas por los órganos jurisdiccionales terminales, pero sí coinciden –como en el caso, según se verá enseguida– sin duda es de mayor entidad jurídica dilucidar la

cuestión de incertidumbre legal que se genera en el ámbito espacial y temporal de los justiciables hipotéticos. Lo anterior, por las decisiones jurisdiccionales diferenciadas.

Así también, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la condición para que se dé la contradicción, está más ligada con el fin que con el medio y, **por tanto, su esencia radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica, que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito**; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad.

Por ello, en las contradicciones de tesis las consideraciones jurídicas de los Plenos de Circuito deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes, es decir maximizar la certeza jurídica en la aplicación del derecho.

Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 23/2010, de rubro siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.'. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto

'contradictorio' ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los tribunales colegiados de circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes." (Novena Época, con número de registro digital: 165076. Instancia: Primera Sala, tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXXI, marzo de 2010, materia común, tesis 1a./J. 23/2010, página 123).

Ahora bien, del análisis a las ejecutorias en que se sustenta la presente contradicción se advierte que el **Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Este (sic) Cuarto Circuito**, al resolver los juicios de amparo directo 107/2019 y 122/2019, negó el amparo a los quejosas, en contra del desechamiento de la demanda de nulidad, determinando que contra la sanción económica impuesta a un sujeto obligado por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no resulta procedente el juicio de nulidad, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, al estimar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, establece el recurso de inconformidad como medio de defensa, seguido ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información o bien a través del juicio de amparo, ante las autoridades federales.

Por su parte, en **relación con ese mismo punto jurídico** –desechamiento de la demanda de nulidad presentada ante el Tribunal de Justicia Administra-

tiva del Estado, promovida en contra de la sanción económica que le fue impuesta a un sujeto obligado, por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Nuevo León– el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito, al resolver los amparos directos 77/2019, 102/2019 y 114/2019, determinó que era procedente conceder el amparo, bajo la premisa de que derivado de la complejidad del asunto, tal circunstancia no podía analizarse en el acuerdo de admisión o desechamiento, sino que la naturaleza del acto y de la autoridad debía ser analizado en el juicio de nulidad.

Del contexto comparativo anterior se advierte que, existe una diferencia sustancial entre los criterios, no solo porque con los mismos hechos y aplicación del derecho adjetivo, en un supuesto se negó el amparo y, en el otro, se concedió la protección constitucional, sino porque el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito es categórico en establecer que contra la multa impuesta a un sujeto obligado, por parte de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado, resulta procedente el recurso de inconformidad como medio de defensa, seguido ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información o bien a través del juicio de amparo, pero no el juicio de nulidad; mientras que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito, concediendo el amparo,determinó que para poder tomar una decisión en cuanto a la improcedencia el juicio de nulidad, en contra de ese mismo acto y autoridad, era necesario el análisis de la naturaleza de la autoridad y los actos impugnados y lo alegado respecto de ellos, lo cual no podía ser materia de estudio en un simple auto de trámite como lo era un auto de admisión o desechamiento de demanda.

Como se contextualiza el punto de derecho a dilucidar, ambos tribunales, analizaron los mismos hechos; esto es, sujetos obligados a quienes se les impuso una multa por incumplimiento a la ley de transparencia –incluso mismos quejosos en dos amparos directos– que previamente acudieron a impugnarla a través del juicio contencioso administrativo y en uno de esos juicios, se reitera, (ventilado ante el Primer Tribunal Colegiado) la protección constitucional le fue negada al estimar correcto el desechamiento de la demanda de nulidad, mientras que el otro Tribunal Colegiado (Tercero), concluyó conceder la protección federal, al estimar que la causal de improcedencia, no era notoria y manifiesta.

De ahí que apelando a la esencia de los fines de la resolución de las contradicciones de tesis, a saber, cómo ya se argumentó, generar certeza jurídica, es que conforme a la sensibilidad obligada del juzgador constitucional, ello lleve a concluir a este Pleno de Circuito, que no obstante que superficialmente pareciera que no se trató del mismo punto jurídico a dilucidar, en su esencia y conclusión denegatoria de amparo y por otra parte de tutela constitucional, sí existe un punto jurídico en pugna de necesario discernimiento. En efecto, tal diferendo consiste **en determinar si resulta procedente o no el juicio de nulidad, en contra de una resolución emitida por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, por medio de la cual se impone una multa como sanción a un sujeto obligado por incumplimiento a la ley de transparencia o si es admisible la demanda de anulación contenciosa e implícitamente viable en forma posterior la eventual procedencia del juicio natural contra tales autoridades y acto consistente en la multa controvertida. Ante el diferendo jurisdiccional, se procede a determinar qué criterio jurídico de los dos tribunales debe prevalecer.**

SEXTO.—**Determinación del criterio que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia.** Del contenido del apartado anterior se afirma que la contradicción de tesis es existente, así lo que se debe dilucidar es **si resulta procedente el juicio de nulidad, en contra de una resolución emitida por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, por medio de la cual impone una multa como sanción, a un sujeto obligado, por incumplimiento a la ley de transparencia.**

En efecto, como antecedentes que dieron origen a la presente contradicción de tesis, se tiene que servidores públicos del Municipio de Melchor Ocampo, Nuevo León, promovieron juicio de nulidad en contra de las resoluciones emitidas por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, a través de las cuales se les impuso una sanción consistente en una multa por incumplimiento a sus obligaciones como sujetos obligados en materia de transparencia.

La Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, desechó la demanda de nulidad al no encuadrar su procedencia en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa en el Estado de Nuevo León. Determinación que fue confirmada por la Sala Superior de ese Tribunal.

Ante ello, se promovió juicio de amparo directo, determinando el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito, que contra la multa impuesta a un sujeto obligado, por parte de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado, resultaba procedente el recurso de inconformidad como medio de defensa, seguido ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información o bien a través del juicio de amparo, pero no el juicio de nulidad.

Mientras que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito, a quién correspondió conocer de un diverso juicio de amparo directo respecto de los mismos actos, determinó que para poder tomar una decisión en cuanto a la improcedencia el juicio de nulidad, era necesario el análisis de la naturaleza de los actos impugnados y lo alegado respecto de ellos, lo cual no podía ser materia de estudio en un simple auto de trámite como lo era un auto de admisión o desechamiento de demanda.

Dado que para resolver la presente problemática es necesario abordar diversos tópicos, el estudio del asunto se ira abordando en forma temática:

1. **Inatacabilidad de las resoluciones emitidas por los organismos garantes**.

Ahora bien, a fin de abordar la problemática que nos ocupa, es importante acudir al contenido del apartado A del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice:

(Reformado primer párrafo, D.O.F. 11 de junio de 2013)
"**Artículo 6o.** La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

(Adicionado, D.O.F. 11 de junio de 2013)
"Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

(Adicionado, D.O.F. 11 de junio de 2013)

"El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

(Adicionado, D.O.F. 11 de junio de 2013)

"Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

N. de E. por decreto de reformas publicado en el D.O.F. de 11 de junio de 2013, este párrafo con sus respectivas fracciones pasó a ser apartado "A".

(Reformado primer párrafo, D.O.F. 29 de enero de 2016)

"A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

(Reformada, D.O.F. 7 de febrero de 2014)

"I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

(Adicionada, D.O.F. 20 de julio de 2007)

"II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

(Adicionada, D.O.F. 20 de julio de 2007)

"III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

(Reformada, D.O.F. 7 de febrero de 2014)

"IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.

(**Reformada, D.O.F. 7 de febrero de 2014)**

"V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

(Adicionada, D.O.F. 20 de julio de 2007)

"VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

(Adicionada, D.O.F. 20 de julio de 2007)

"VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

(Adicionada [N. de E. con los párrafos que la integran], D.O.F. 7 de febrero de 2014)

"VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.

"El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

"En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

(Reformado, D.O.F. 29 de enero de 2016)

"El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley.

(Reformado, D.O.F. 29 de enero de 2016)

"El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

"La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.

"Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El consejero jurídico del Gobierno



podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia.

"El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República.

"En caso de que el presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.

"Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del título cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio político.

"En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género.

"El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley.

"El organismo garante tendrá un consejo consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.

"La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.

"Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.

(Reformado, D.O.F. 29 de enero de 2016)
"El organismo garante coordinará sus acciones con la Auditoría Superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de las entidades federativas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano."

En lo que nos interesa, se advierte que con la reforma en materia de transparencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce, al artículo 6o., apartado A, de la Constitución, se estableció que toda la información que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, **es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional.**

Que a fin de garantizar lo anterior, se contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, **responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información**

pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

Además, que tal organismo conocería de los recursos que interpongan los particulares, respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información; así también que de oficio o a petición fundada, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

De igual modo, se estableció que **las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados**.

Prohibición que se encuentra inmersa en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 157, primer párrafo;[1] regla que es repetida en el artículo 182[2] de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, **que contempla que las resoluciones de la Comisión de Transparencia y Acceso a la información Estatal, son inatacables para los sujetos obligados**.

Es oportuno precisar que en términos del artículo 6o., apartado A), fracciones I y VIII, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los diversos numerales 23, 41, fracciones II, III y IV, de La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información,[3] y 54, fracción II, de la

[1] "**Artículo 157.** Las resoluciones del organismo garante **son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.**
"Únicamente el consejero jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos que se establecen en el capítulo IV denominado 'Del Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional', en el presente Título, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional."

[2] "**Artículo 182.** Las resoluciones de la Comisión **son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados**."

[3] "**Artículo 23.** Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal."

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León,[4] debe entenderse por **resoluciones de los organismos garantes de la Federación y las Entidades Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información,** las dictadas al conocer y resolver los **recursos de revisión** interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal, y en el ámbito local, así como al conocer y resolver los **recursos de inconformidad** que interpongan los particulares, en contra de las resoluciones emitidas por los organismos garantes de las entidades federativas **que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información**.

Mientras que son **sujetos obligados**, toda autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las entidades federativas y municipal.

Sobre este contexto normativo, cabe sentar el principio o principios de inatacabilidad, definitividad y vinculatoriedad para los sujetos obligados, de las resoluciones del organismo garante del cumplimiento del derecho de acceso a

---

"**Artículo 41.** El Instituto, además de lo señalado en la Ley Federal y en el siguiente artículo, tendrá las siguientes atribuciones:
"II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal en términos de lo dispuesto en el capítulo I del título octavo de la presente ley;
"III. Conocer y resolver los recursos de inconformidad que interpongan los particulares, en contra de las resoluciones emitidas por los organismos garantes de las entidades federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información en términos de lo dispuesto en el capítulo II, del título octavo de la presente ley;
"IV. Conocer y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en el capítulo III del título octavo de la presente ley."

[4] "**Artículo 54.** El Pleno de la Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
"...
"II. Conocer y resolver los recursos interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones, acciones u omisiones de los sujetos obligados en el ámbito local, en términos de lo dispuesto en el capítulo I del título octavo de la presente ley."



la información pública y a la protección de datos personales en posesión de aquéllos, en los términos que establece la ley.

En tanto que, solamente está previsto que **puedan ser impugnados excepcionalmente**, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6o., apartado A), fracción VIII, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recién transcrito, a través del **recurso de revisión, por conducto del consejero jurídico del Ejecutivo Federal,** en casos en que pueda ponerse en **peligro la seguridad nacional**.

Lo anterior desde luego implica que, para los sujetos obligados, ese tipo de resoluciones **sean inatacables;** pues así fue la voluntad expresa del constituyente permanente contemplarlo en la reforma constitucional de transparencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil catorce, antes referida.

Empero, este Pleno de Circuito considera que en el caso planteado, **en tratándose de multas impuestas en materia de transparencia y acceso a la información, a sujetos obligados, que como persona particular tiene la obligación de cubrirla con sus propios recursos, no se actualiza la regla constitucional de inatacabilidad antes explicada**.

En efecto, debe destacarse que a la impugnación de la multa que, aunque aplicada a un sujeto obligado, debe ser pagada del patrimonio de la persona física que lo representa, por lo que como se dijo, no le es aplicable la regla general de inatacabilidad relacionada con el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, cuando se impone una multa a un sujeto obligado, por motivo de su incumplimiento a la ley de transparencia, la motivación de la misma no se sustenta en razones vinculadas con la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información que constituyen la materia sustancial de la prohibición constitucional de impugnación, en favor de los gobernados titulares del derecho a la información; sino que como se dijo, obedece al incumplimiento que como sujeto obligado tiene en materia de transparencia.

Además, cuando el particular que representa al sujeto obligado sancionado es quien acude a inconformarse por el agravio que en su patrimonio personal le irroga la multa, no puede considerarse que comparece también con el carácter de sujeto obligado a quien le aplica sin más los principios de vinculatoriedad, definitividad e inatacabilidad de referencia.

Pues en este caso le asiste la legitimidad que corresponde a un particular para defenderse frente a un acto autoritario susceptible de lesionar su esfera de derechos humanos, dado que en este supuesto no se identifica con ninguno de los previstos como sujetos obligados, relacionados a alguna entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.

Por tanto, en el supuesto delimitado, se debe privilegiar el derecho fundamental de acceso a la justicia tutelado en el artículo 17 constitucional, con base en el cual, en tal supuesto, la persona afectada acude en defensa de sus intereses, por el agravio que resiente por la imposición de una sanción económica en materia de transparencia y acceso a la información, en su calidad de sujeto obligado.

De ahí que, cuando se trata de resoluciones emitidas por los organismos garantes en las que se imponga una multa a un sujeto obligado, con motivo del incumplimiento en materia de transparencia, sí cuente con legitimación para impugnar únicamente lo relativo a la imposición a la multa, pero de ninguna manera podrán cuestionar la determinación que en materia de transparencia emita el organismo garante, pues en esos casos opera la inacatabilidad de las resoluciones para los sujetos obligados.

2. Procedencia del juicio de nulidad.

Abordado el anterior tema, es importante analizar en qué casos resulta procedente el juicio de nulidad, ante el Tribunal Contencioso del Estado.

A manera de antecedente, es importante acudir al capítulo de sanciones que contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nuevo León, pues con fundamento en los preceptos establecidos en el referido capítulo, los organismos garantes pueden sancionar a los sujetos obligados, como fue en el caso de los antecedentes que dieron origen a esta contradicción de tesis.

El capítulo de la ley de la que se ha hablado, en lo que interesa dispone lo siguiente:

"**Artículo 197.** Se consideran como causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente ley:

"**I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en esta ley;**

"II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes que reciban en los términos de esta ley; o bien, al no difundir la información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la presente ley;

"III. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente ley;

"IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus servidores públicos o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;

"V. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en esta ley;

"VI. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la presente ley;

"VII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones;

"VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos;

"IX. No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o actos de autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable;

"X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del derecho;

"XI. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o confidencial;

"XII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las características señaladas en la presente ley. La sanción procederá cuando exista una resolución previa de la comisión, que haya quedado firme;

"XIII. Entregar información clasificada como reservada o confidencial conforme a lo dispuesto por esta ley;

"XIV. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando la comisión determine que existe una causa de interés público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia;

"XV. No atender los requerimientos establecidos en la presente ley, emitidos por la comisión; o

"XVI. No acatar las resoluciones emitidas por la comisión, en ejercicio de sus funciones."

"**Artículo 198. Las conductas establecidas en el artículo anterior, cometidas por sujetos obligados que tengan el carácter de servidores públicos, se sancionarán de la siguiente manera**:

"**I. Multa de ciento cincuenta a doscientas cincuenta cuotas, tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I, III, V y VI del artículo 197 de esta ley;**



"II. Multa de doscientos cincuenta a ochocientas cuotas, en los casos previstos en las fracciones II y IV del artículo 197 de esta ley;

"III. Multa de ochocientos a mil quinientas cuotas, en los casos previstos en las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI del artículo 197 de esta ley; y

"IV. Arresto Administrativo, hasta por treinta y seis horas, al que incumpla con lo dispuesto en la presente ley o con una resolución, acuerdo o mandato de la comisión.

"Se aplicará multa adicional de hasta cincuenta cuotas por día, a quien persista en las infracciones citadas en los incisos anteriores."

"**Artículo 206. Las multas se harán efectivas ante la autoridad estatal competente en materia de recaudación fiscal, para lo cual se le deberá informar de las que hubieren sido impuestas**. Dichas multas tendrán **el carácter de créditos fiscales**, debiendo dicha autoridad fiscal presentar informes mensuales a la comisión sobre el estado que guarda la ejecución de las multas.

"Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos."

"**Artículo 207.** En todo lo no previsto por esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, y en defecto de ésta, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León."

Como se ve, los dispositivos en cita establecen un mecanismo de sanciones para los sujetos obligados que incurran en alguna de las fracciones señaladas en el artículo 197 de la ley estatal, las cuáles en tratándose de conductas cometidas por los sujetos obligados que tengan el carácter de servidores públicos, se sancionarán con multas por diversas cantidades atendiendo a la infracción y arresto hasta por treinta y seis horas.

Así también que **las multas se harán efectivas ante la autoridad estatal competente en materia de recaudación fiscal**, **las cuales tendrán el carácter de créditos fiscales**, y no podrán ser cubiertas con recursos públicos.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León,[5] **el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado es competente para conocer de los juicios promovidos contra actos que causen agravio en materia fiscal emitidos por autoridades administrativas, fiscales o entidades de la administración pública paraestatal o de los Municipios del Estado,** como pudiera ser el caso, pues se trata de una multa impuesta como sanción económica.

Por su parte, el artículo 1o. del citado ordenamiento legal[6] establece, entre otras cosas, que dicha ley tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, el cual está dotado de facultades para conocer y resolver los conflictos y controversias que se susciten entre los particulares y el Estado, los Municipios, sus organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal, cuando estas últimas realicen funciones administrativas de autoridad; el procedimiento para su resolución y ejecución, y los recursos que los particulares y las autoridades podrán interponer en contra de los fallos que pronuncie.

---

[5] "**Artículo 17.** El Tribunal será competente para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos o resoluciones que se indican a continuación, dictados, ordenados, ejecutados o que se pretenda ejecutar, por autoridades administrativas, fiscales o entidades de la Administración Pública Paraestatal o de los Municipios del Estado de Nuevo León, cuando estas últimas actúen en carácter de autoridad:
"...
"IV. Que causen un agravio en materia fiscal o administrativa, distinto a los precisados en los incisos anteriores, así como todos aquellos actos realizados por cualquier autoridad administrativa, estatal o municipal, fuera del procedimiento de ejecución fiscal;"

[6] "**Artículo 1o.** Esta Ley tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, dotado de facultades para conocer y resolver los conflictos y controversias que se susciten entre los particulares y el Estado, los Municipios, sus organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal cuando estas últimas realicen funciones administrativas de autoridad; el procedimiento para su resolución y ejecución; los recursos que los particulares y las autoridades podrán interponer en contra de los fallos que pronuncie.
"Asimismo, el Tribunal de Justicia Administrativa será el órgano competente, a través de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas, para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves o que constituyan hechos de corrupción, así como a los particulares que participen en los actos vinculados con dichas responsabilidades, fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales, así como conocer de los asuntos derivados de las sanciones administrativas que emitan otras autoridades."



En ese contexto, de la interpretación literal de los mencionados numerales 1 y 17 de la referida legislación, se aprecia que conforme al primero de ellos, el legislador dejó en claro respecto de cuáles autoridades tiene competencia el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, para conocer y resolver en torno a los actos que emitan, como lo son **el Estado, los Municipios, sus organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal** cuando estas últimas realicen funciones administrativas de autoridad; mientras que en el segundo de los preceptos se establecen los tipos de actos o resoluciones respecto de los cuáles será competente para conocer y resolver el mencionado tribunal.

Por otra parte, el artículo 3, fracción XVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,[7] expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, de observancia general en la República, define **que los organismos garantes –como la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León– son aquellos con autonomía constitucional**, especializados en materia de acceso a la información y protección de datos personales en términos de los artículos 6, 116, fracción VIII, y 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso ñ), de la Constitución Federal.

A su vez, el artículo 38[8] de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, indica que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, es un órgano autónomo, especializado, independiente, imparcial

[7] "**Artículo 3.** Para los efectos de la presente ley se entenderá por:
"...
"XVI. **Organismos garantes:** Aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la información y protección de datos personales en términos de los artículos 6o., 116, fracción VIII y 122, apartado C, BASE PRIMERA, Fracción V, inciso ñ) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;"

[8] "**Artículo 38.** La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información es un órgano autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 6o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como por lo previsto en las demás disposiciones aplicables."

y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por tanto, el acto impugnado, consistente en una multa impuesta por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Estatal, no encuadra en los supuestos del numeral 17 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Nuevo León, ya que el mencionado organismo garante del Estado de Nuevo León emisor de dicha multa, no se encuentra previsto en el artículo 1 de la citada ley, pues sólo se hace alusión al Estado, los Municipios, sus organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal cuando estas últimas realicen funciones administrativas de autoridad, **pero no de organismos constitucionalmente autónomos**, como lo es la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información.

A manera de explicación, es importante resaltar que en relación con el tema de los organismos constitucionalmente autónomos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el principio de división de poderes, contenido en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,[9] como un mecanismo de racionalización del poder público por la vía de su límite y balance, con el fin de garantizar el principio democrático, los derechos fundamentales y sus garantías, a través de un régimen de cooperación y coordinación de competencias, a manera de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público.

Que tal principio es evolutivo y a través de su desarrollo se han establecido nuevos mecanismos para controlar el poder, con la finalidad de hacer más eficaz el funcionamiento del Estado.

---

[9] "**Artículo 49.** El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
"No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar."

Así también señaló que los órganos constitucionales si bien forman parte del Estado Mexicano, no existe a su favor una delegación total de facultades de otro cuerpo del Estado, **sino que su función es parte de un régimen de cooperación y coordinación a modo de control recíproco para evitar el abuso en el ejercicio del poder público; además que dichos órganos cuentan con garantías institucionales, las cuales constituyen una protección constitucional a su autonomía y, en esa medida, se salvaguardan sus características orgánicas y funcionales esenciales; de forma que no podría llegarse al extremo de que un poder público interfiera de manera preponderante o decisiva en las atribuciones de un órgano constitucional autónomo pues, de lo contrario, se violentaría el principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución Federal.**

Las anteriores consideraciones se encuentran en la jurisprudencia que en seguida se transcribe:

"GARANTÍA INSTITUCIONAL DE AUTONOMÍA. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el principio de división de poderes, contenido en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un mecanismo de racionalización del poder público por la vía de su límite y balance, con el fin de garantizar el principio democrático, los derechos fundamentales y sus garantías, a través de un régimen de cooperación y coordinación de competencias, a manera de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público. Dicho principio es evolutivo y a través de su desarrollo se han establecido nuevos mecanismos para controlar el poder, con la finalidad de hacer más eficaz el funcionamiento del Estado; de ahí que se haya dotado a ciertos órganos, como los constitucionales autónomos, de las facultades necesarias para alcanzar los fines para los que fueron creados y en atención a la especialización e importancia social de sus tareas. **Ahora bien, los órganos constitucionales autónomos forman parte del Estado mexicano sin que exista a su favor una delegación total de facultades de otro cuerpo del Estado, sino que su función es parte de un régimen de cooperación y coordinación a modo de control recíproco para evitar el abuso en el ejercicio del poder público; no obstante, debe advertirse que cuentan con garantías institucionales, las cuales constituyen una protección constitucional a su autonomía y, en esa medida, se salvaguardan sus caracterísi-**

cas orgánicas y funcionales esenciales; de forma que no podría llegarse al extremo de que un poder público interfiera de manera preponderante o decisiva en las atribuciones de un órgano constitucional autónomo pues, de lo contrario, se violentaría el principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución Federal." (Décima Época, con número de registro digital: 2015478. Instancia: Segunda Sala, tipo de tesis: aislada. Fuente: *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 48, Tomo I, noviembre de 2017, materia constitucional, tesis 2a. CLXVI/2017 (10a.), página 603).

En conclusión, son órganos públicos que ejercen una función primordial del Estado, establecidos en los textos constitucionales y, por tanto, tienen relaciones de coordinación con los demás poderes tradicionales u órganos autónomos, **sin situarse subordinadamente en algunos de ellos**.

Entonces si por mandato constitucional las Comisiones de Transparencia y Acceso a la Información de los Estados, son organismos constitucionalmente autónomos, **y por ello, éstos se encuentran a la par de los órganos tradicionales**, es que se reitera que el juicio de nulidad que se interponga en contra de las resoluciones emitidas por éstos, resulte improcedente.

Pues como se dijo anteriormente, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, únicamente tiene competencia para conocer y resolver los conflictos y controversias que se susciten entre los particulares y el Estado, los Municipios, sus organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal cuando estas últimas realicen funciones administrativas de autoridad, pero no para las resoluciones emitidas por organismos autónomos.

Es ilustrativa la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo siguiente:

"TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE IMPONE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A SUS SERVIDORES PÚBLICOS.—De las disposiciones contenidas en el Título Segundo, Capítulo II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se advierte que los medios de defensa ordinarios previstos

en su artículo 25, entre ellos, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, son inaplicables tratándose de resoluciones del órgano de control de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que impone sanciones a sus servidores públicos por faltar a las obligaciones establecidas en el artículo 8o. de la referida ley, ya que el diverso precepto 28 prevé que en caso de que sea revocada o modificada dicha resolución 'se ordenará a la dependencia o entidad' que restituya al servidor público en el pleno goce de sus derechos, por lo que es indudable que la procedencia de tal juicio está referida sólo a resoluciones dictadas por órganos de la administración pública federal. Por otra parte, si bien es cierto que el artículo 11, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece que procede el juicio de nulidad contra las resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (ahora Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos), también lo es que no debe interpretarse en forma aislada, sino en relación con el 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que dicho Tribunal sólo tiene competencia para dirimir conflictos suscitados entre los órganos de la administración pública federal del Poder Ejecutivo Federal y los particulares, pero no para resolver controversias entre éstos y el Presidente de la República, o con los otros Poderes de la Unión. En atención a lo expuesto, se concluye que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa carece de competencia para conocer del juicio promovido contra las resoluciones dictadas por la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por sí o a través de la Dirección de Quejas, Denuncias e Inconformidades que impongan sanciones administrativas a sus servidores públicos." **(Novena Época, con número de registro digital: 175182. Instancia: Segunda Sala, tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXIII, abril de 2006, materia administrativa, tesis 2a./J. 49/2006, página 285).**

A manera de ejemplo se citan diversas tesis de Tribunales Colegiados, en las que se determinó la improcedencia del juicio de nulidad, en contra de las resoluciones emitidas por órganos constitucionalmente autónomos:

"TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS PROMOVIDAS CONTRA LAS

RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, AL SER ÉSTE UN ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO. El artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone una restricción competencial para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme a la cual, **se acotan sus atribuciones para conocer sólo de controversias relativas a actos emitidos por las autoridades de la administración pública federal**. Consecuentemente, carece de facultades para conocer de las demandas promovidas contra las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al ser **éste un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión**, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, según lo previsto en los artículos 6o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal, 3, fracción XIII y 37 de la Ley General y 17 de la Ley Federal, ambas de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que pueda inferirse que esa competencia pueda derivar de diversas leyes de carácter federal, pues acorde con los principios de interpretación conforme y supremacía constitucional, resulta aplicable la norma que sea compatible con la Carta Magna, la que, en el caso, impide considerar procedente la vía contenciosa administrativa para impugnar las resoluciones emitidas por un organismo constitucional autónomo." **(Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, con número de registro digital: 2020767. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, tipo de tesis: aislada. Fuente: *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 71, Tomo IV, octubre de 2019, materias constitucional y administrativa, tesis I.5o.A.13 A (10a.), página 3640).**

"JUICIO DE NULIDAD. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE EMITA EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN LA QUE IMPONE UNA SANCIÓN EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.—La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J.



49/2006, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIII, abril de 2006, página 285, de rubro: 'TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE IMPONE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A SUS SERVIDORES PÚBLICOS.' estableció la pauta para apreciar que a partir de lo que dispone el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo tiene competencia para dirimir conflictos suscitados entre los órganos del Poder Ejecutivo Federal y los particulares. Asimismo, que la procedencia del juicio de nulidad en términos del artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos contra las resoluciones dictadas en términos de ese ordenamiento, **sólo es aplicable a las emitidas por los órganos de la administración pública federal**. En ese sentido, si conforme al artículo 102, apartado B, constitucional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos **es un organismo autónomo** que de acuerdo con el numeral 3, fracción VIII, de la citada ley es autoridad facultada para, en el ámbito de su competencia, aplicarla y que su reglamento interno prevé que su órgano interno de control ejercerá las facultades y atribuciones a que hace referencia la aludida ley, se concluye que es **improcedente el juicio de nulidad que se promueva contra la resolución definitiva que emita el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que impone una sanción en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos**." **(Novena Época, con número de registro digital: 160545. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, tipo de tesis: aislada. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro III, Tomo 5, diciembre de 2011, materia administrativa, tesis I.10o.A.59 A (9a.), página 3779, Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito).**

"COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. CONTRA SUS RESOLUCIONES ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO POR EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS Y, POR TANTO, ÉSTAS SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO.—De conformidad con el artículo 17 Bis de la Constitución

Política del Estado de San Luis Potosí, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública es un organismo público autónomo con la competencia que dicho precepto le otorga, por lo que no forma parte de la estructura administrativa del Poder Ejecutivo. En congruencia con lo anterior, contra sus resoluciones es improcedente el recurso de revisión previsto por el artículo 90 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios, pues de acuerdo con su precepto 1o., esta legislación es aplicable a los actos, procedimientos y resoluciones de las administraciones públicas estatal y municipal centralizadas, así como a los organismos descentralizados de los mismos órdenes de gobierno respecto de sus actos de autoridad, de modo que quedan excluidos de ella los organismos públicos autónomos como la referida comisión. En consecuencia, sus resoluciones son impugnables mediante el juicio de amparo, al no actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." **(Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Novena Época, con número de registro digital: 167770. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, tipo de tesis: aislada. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXIX, marzo de 2009, materia administrativa, tesis IX.2o.34 A, página 2700).**

En consecuencia, con base a las anteriores consideraciones, es que este Pleno estime que es improcedente el juicio de nulidad en contra de las resoluciones emitidas por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, en la que se impone como sanción por incumplimiento a la ley, una multa a un sujeto obligado.

3**. Medios de defensa que prevé la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.**

Para abordar esta temática es importante traer a colación el contenido del artículo 142,[10] que **contempla la posibilidad de que el solicitante de la infor-**

[10] "**Artículo 142.** El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el organismo garante que corresponda o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.
"En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al organismo garante que corresponda a más tardar al día siguiente de haberlo recibido."

mación interponga un recurso de revisión ante el organismo garante a fin de combatir diversos actos, entre los cuales se encuentran (artículo 143): **I.** La clasificación de la información; **II.** La declaración de inexistencia de información; **III.** La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; **IV.** La entrega de información incompleta; **V.** La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; **VI.** La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley; **VII.** La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado; **VIII.** La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante; **IX.** Los costos o tiempos de entrega de la información; **X.** La falta de trámite a una solicitud; **XI.** La negativa a permitir la consulta directa de la información; **XII.** La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o **XIII.** La orientación a un trámite específico.

Dicha ley establece que ese recurso **será resuelto por el organismo garante** (artículo 146),[11] y la cual será vinculatoria, definitiva e inatacable para los sujetos obligados.

Por su parte los artículos 158, 159 y 160,[12] disponen **que los particulares** podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de los organismos garan-

[11] "**Artículo 146.** El organismo garante resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de cuarenta días, contados a partir de la admisión del mismo, en los términos que establezca la ley respectiva, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo de veinte días.
"Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones."

[12] "**Artículo 158.** Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de los Organismos garantes ante el Poder Judicial de la Federación."
"**Artículo 159.** Tratándose de las resoluciones a los recursos de revisión de los Organismos garantes de las Entidades Federativas, los particulares podrán optar por acudir ante el Instituto o ante el Poder Judicial de la Federación."
"**Artículo 160.** El recurso de inconformidad procede contra las resoluciones emitidas por los Organismos garantes de las Entidades Federativas que:
"**I.** Confirmen o modifiquen la clasificación de la información, o
"**II.** Confirmen la inexistencia o negativa de información.
"Se entenderá como negativa de acceso a la información la falta de resolución de los Organismos garantes de las Entidades Federativas dentro del plazo previsto para ello."

tes mediante dos vías: a **través del recurso de inconformidad ante el instituto o bien ante el Poder Judicial de la Federación**.

Para el caso de que el particular opte por interponer el recurso de inconformidad, la resolución del instituto será definitiva e inatacable para el organismo garante y el sujeto obligado de que se trate; **pero los particulares podrán impugnar las resoluciones del instituto ante el Poder Judicial de la Federación (artículo 180)**.[13]

Lo hasta aquí expuesto nos permite concluir que, de las disposiciones normativas contenidas en el ordenamiento general referido –lo que se reitera en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, en sus artículos 183 y 184–[14] se observa que el legislador estableció un sistema de impugnación a fin **de que los particulares puedan controvertir las resoluciones emitidas por los órganos constitucionales autónomos especializados en materia de acceso a la información**, ya que confirió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la facultad para analizarlas a través del recurso de inconformidad; y, paralelamente, definió que la vía de impugnación de la resolución dictada por tal instituto sería impugnable ante el Poder Judicial de la Federación.

Ese tema en particular fue analizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 77/2016, **en la que incluso el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, basó sus ejecutorias.**

En el criterio de referencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que interesa sostuvo lo siguiente:

---

[13] "**Artículo 180.** La resolución del instituto será definitiva e inatacable para el organismo garante y el sujeto obligado de que se trate.
"Los particulares podrán impugnar las resoluciones del Instituto ante el Poder Judicial de la Federación."

[14] "**Artículo 183.** Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de la Comisión ante el Poder Judicial de la Federación."
"**Artículo 184.** El recurso de inconformidad ante el instituto o cualquier otro medio de impugnación contra las resoluciones a los recursos de revisión emitidas por la comisión procederá en los términos previsto por la Ley General."

"Sin embargo, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, expedida mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, aclara que las únicas vías para impugnar las determinaciones de los organismos constitucionales autónomos de las entidades federativas en esa materia son, por una parte, el recurso de inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, por otra, el juicio de amparo ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.

"…

"Ahora, de las disposiciones normativas contenidas en el ordenamiento general referido, se observa que el legislador estableció un sistema de impugnación a fin de que **los particulares puedan controvertir** las resoluciones emitidas por los órganos constitucionales autónomos especializados en materia de acceso a la información, ya que confirió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la facultad para analizarlas a través del recurso de inconformidad; y, paralelamente, definió que la vía de impugnación de la resolución dictada por tal instituto sería el juicio de amparo.

"Por otro lado, según se aprecia de la exposición de motivos contenida en la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expidió la ley general en cuestión, el legislador decidió distribuir competencias entre el gobierno federal y el estatal; homologar procesos y procedimientos relativos al ejercicio del derecho de acceso a la información pública en las entidades federativas; detallar procedimientos para que todos los órganos garantes resuelvan los recursos de revisión; especificar el procedimiento de segunda instancia respecto de las resoluciones emitidas por éstos; y otorgarle un ámbito de aplicación nacional con el propósito de que los criterios generales en materia de transparencia y acceso a la información obligaran a todos los órdenes de gobierno a fin de lograr una adecuada armonización y homogeneidad de las reglas, principios, bases, procedimientos y mecanismos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información.

"…

"Así, la ley general puntualiza que las determinaciones de los órganos garantes estatales pueden combatirse vía el recurso de inconformidad, o bien, directamente por medio del juicio de amparo; con ello, **excluye la posibilidad de promover en su contra el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de que se trate y, paralelamente, elimina la posibilidad de que ello constituya un requisito para agotar el principio de definitividad**.

"…

"Lo anterior, porque ahora es indudable que el medio ordinario de defensa que procede contra las resoluciones indicadas no es el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo estatal, sino el recurso de inconformidad ante el órgano garante federal, cuya interposición es optativa para el interesado; mientras que el medio extraordinario de defensa sigue siendo el juicio de amparo."

Como se (sic), en dicha ejecutoria se determinó que las resoluciones de los organismos constitucionales autónomos de las entidades federativas de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, son impugnables mediante el recurso de inconformidad ante el organismo garante federal –siendo este medio optativo– o a través del juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, excluyendo la posibilidad de promover en su contra el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de que se trate.

Ahora, si bien en el caso que nos ocupa, no estamos ante la presencia de una resolución emitida por los órganos especializados en materia de acceso a la información **que pretenda ser atacado por un particular como solicitante de información en materia de transparencia**, que fue la materia de la contradicción de tesis de referencia, respecto del cual, el particular puede acudir al recurso de inconformidad o bien al juicio de garantías, tal como lo dispone la ley y como lo interpretó el Máximo Tribunal.

Sino que **se trata de la impugnación de una resolución emitida por un organismo garante, a través de la cual se le impuso una multa a un sujeto obligado por incumplimiento a la ley de transparencia**.



No obstante, dicho criterio resulta orientador para determinar qué; de igual forma, contra la multa impuesta a un sujeto obligado por parte de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, también resulta aplicable la regla que opera como medio de impugnación para los solicitantes en materia de información; esto es, que en su contra se pueda promover el juicio de amparo ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.

Primero, porque como se vio en el punto anterior, contra las resoluciones de las Comisiones de Transparencia de los Estados, al ser organismos autónomos; además, por el hecho de que cuando el sujeto obligado acude a impugnar la multa impuesta, no lo hace como representante de algún ente público, sino como particular, por el agravio que en su patrimonio personal le irroga la multa, al salir de su entero la cantidad de la multa impuesta, como lo dispone la ley.[15]

Además, tal como se estableció en la contradicción de tesis, de la exposición de motivos contenida en la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expidió la ley general en cuestión, el legislador decidió distribuir competencias entre el Gobierno Federal y el Estatal; homologar procesos y procedimientos relativos al ejercicio del derecho de acceso a la información pública en las entidades federativas; detallar procedimientos para que todos los órganos garantes resuelvan los recursos de revisión; especificar el procedimiento de segunda instancia respecto de las resoluciones emitidas por éstos;[16] y otorgarle un ámbi-

[15] **Ley General.** "**Artículo 206.** ... Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos."
Ley Estatal. "**Artículo 206.** Las multas se harán efectivas ante la autoridad estatal competente en materia de recaudación fiscal, para lo cual se le deberá informar de las que hubieren sido impuestas. Dichas multas tendrán el carácter de créditos fiscales, debiendo dicha autoridad fiscal presentar informes mensuales a la Comisión sobre el estado que guarda la ejecución de las multas. **Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.**"

[16] Al respecto, en la parte conducente de la exposición de motivos se asentó:
"Se busca tener el ordenamiento legal que pueda distribuir competencias en las entidades federativas a efecto de que los Congresos Locales se encuentren en posibilidad de emitir sus propios ordenamientos legales relacionados con el acceso a la información pública, utilizando como mínimo los principios, bases y procedimientos establecidos en el instrumento legal que se presenta.
"El presente ordenamiento busca homologar los procesos y procedimientos del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en los Estados de la República y del Distrito Federal con la finalidad de que los ciudadanos puedan contar con una herramienta efectiva que promueva la participación ciudadana y por ende se desemboque en una rendición de cuentas efectivas.

to de aplicación nacional con el propósito de que los criterios generales en materia de transparencia y acceso a la información obligaran a todos los órdenes de gobierno a fin de lograr una adecuada armonización y homogeneidad de las reglas, principios, bases, procedimientos y mecanismos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Por lo que la intención del legislador, fue que las controversias que se suscitaran por los organismos autónomos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, fueran resueltas por medio del juicio de garantías ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.

Punto de vista que se reiteró por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 525/2019, pues en la misma se estableció que uno de los objetivos esenciales de la reforma constitucional en materia de transparencia fue que la resolución es únicamente se pudieran impugnar vía juicio de amparo.

Ahora, si bien en dicho criterio se hizo énfasis en que las resoluciones emitidas por los organismos de transparencia, únicamente podrán ser impugnadas por los particulares, con la intención de no alargar los procedimientos en materia de acceso a la información y tutelar de mejor manera ese derecho, lo cierto es que como ya se explicó en el cuerpo esta sentencia, en el caso que dio origen a la presente contradicción, no se trata de una resolución que impone una obligación a un sujeto obligado, en donde por mandato constitucional, su impugnación se encuentra prohibida; sino, lo que pretendió impugnar, fue la multa por incumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia; lo cual, como se explicó, sí es impugnable.

Razón la anterior, por la que la mencionada contradicción de tesis, no deja sin materia la presente, pues en aquélla, **se analizó el medio legal procedente,**

"...
"Por lo anterior, a continuación se citan diversos puntos que se atendieron en la presente iniciativa; entre ellos podemos referir a los siguientes aspectos de manera enunciativa:
"...
"11. Se detallan los procedimientos para resolver los recursos de revisión para todos los organismos garantes, de cualquier ámbito, así como aquellos recursos relacionados con las materias de seguridad nacional y asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

contra las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en Posesión de Particulares, estimándose que debía entenderse derogado el artículo 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, que establece la posibilidad que las resoluciones del instituto, podían ser impugnadas por los particulares a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque este era contrario al marco constitucional y legal que rige en la actualidad, conforme al cual, los particulares sólo podían impugnar sus resoluciones a través del juicio de amparo, y en el presente caso, el motivo que dio origen a la contradicción, lo fue la impugnación de la multa impuesta a un sujeto obligado, por incumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia.

Dicha contradicción de tesis dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 31/2020 (10a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes el nueve de octubre de dos mil veinte, a las 10:19 horas con número de registro digital: 2022203, de título y subtítulo siguiente:

"JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI), EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES.

"Criterios discrepantes: Los Tribunales Colegiados contendientes analizaron si las resoluciones que emite el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, son impugnables a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos del artículo 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, llegando a soluciones contrarias.

"Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que el juicio de nulidad es improcedente, porque de acuerdo con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, la única vía para combatir estas resoluciones es el juicio de amparo.

"Justificación: Es así, porque uno de los objetivos esenciales de la aludida reforma constitucional en materia de transparencia, fue que los particulares únicamente pudieran impugnar las resoluciones de dicho Instituto vía juicio de amparo, con la clara intención de no alargar los procedimientos en materia de acceso a la información y tutelar de mejor manera ese derecho; en ese sentido, si el Poder Reformador de la Constitución otorgó competencia al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para conocer de la materia de protección de datos personales en posesión de los particulares, en tanto se determina la instancia responsable encargada de atender los temas en esa materia, debe entenderse derogado el artículo 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, porque al ser de contenido previo a la mencionada reforma, resulta contrario al marco constitucional y legal que lo rige en la actualidad, conforme al cual los particulares sólo pueden impugnar sus resoluciones a través del juicio de amparo."

Criterio el anterior, que robustece aún más la decisión de este Pleno de Circuito, en el sentido que las resoluciones emitidas por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, en las que se reclame por parte de sujeto obligado, la imposición de una multa como sanción por incumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, debe ser impugnada a través del juicio de amparo.

En mérito de lo aquí expuesto debe prevalecer, con el criterio de jurisprudencia, la tesis que sustenta el Pleno de este Cuarto Circuito en Materia Administrativa, en los siguientes términos:

JUICIO DE NULIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE IMPONE MULTA A UN SUJETO OBLIGADO POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE LA MATERIA.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si las resoluciones de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, que imponen multas a los sujetos obligados por incumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Estatal, son impugnables a través del juicio contencioso administrativo ante el

Tribunal de lo Contencioso Administrativo estatal, o bien, mediante el juicio de amparo, llegando a soluciones contrarias.

Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, decide que es improcedente el juicio de nulidad, al ser la Comisión de Transparencia estatal un organismo constitucionalmente autónomo; además, porque de acuerdo con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, la única vía para combatir las resoluciones emitidas por los organismos garantes, es el juicio de amparo.

Justificación: De conformidad con el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las resoluciones emitidas por los organismos garantes son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados; sin embargo, en tratándose de multas impuestas en materia de transparencia y acceso a la información, a sujetos obligados, que como persona particular tiene la obligación de cubrirla con sus propios recursos, no se actualiza la regla constitucional de inatacabilidad, la cual se creó con la intención de que los sujetos obligados no atacaran las resoluciones en las que se les impone una obligación en materia de transparencia, con el fin de no entorpecer ese derecho. Ahora bien, si las Comisiones Estatales de Transparencia y Acceso a la Información son organismos públicos autónomos, contra sus resoluciones es improcedente el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, puesto que en términos de los artículos 1o. y 17 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Nuevo León, éste es un órgano jurisdiccional con competencia para dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre los particulares y el Estado, los Municipios, sus organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal, de modo que quedan excluidos los organismos públicos autónomos como es la referida Comisión. Además, acorde a lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 160 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 183 y 184 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Estatal, las resoluciones que emitan los organismos garantes, pueden ser impugnadas por los particulares mediante el juicio de amparo; regla que de igual forma, le resulta aplicable al sujeto obligado que acude a impugnar una multa que le es impuesta por incumplimiento a la Ley de Transparencia Local, al ser acorde al marco constitucional que rige actualmente en el sentido de que las resoluciones en esa materia, sólo pueden impugnarse a través del juicio de amparo.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Sí existe la contradicción de tesis denunciada.

SEGUNDO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en términos del último considerando de esta resolución.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; envíese la jurisprudencia que se sustenta al Pleno y a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito; remítase de inmediato la indicada jurisprudencia y la parte considerativa de este fallo a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su publicación en el *Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta*; y, en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de tres votos, lo resolvió el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, integrado por los Magistrados Pedro Daniel Zamora Barrón (presidente), Jorge Meza Pérez y Rogelio Cepeda Treviño (ponente), quienes firman electrónicamente en unión con el secretario de Acuerdos del Pleno Omar Castro Zavaleta Bustos, que autoriza y da fe.

"**En términos de lo previsto en los artículos 97, 98, fracción III, 104, 110, 113, 118 y 119 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción XXI, 100, 116 y 120 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el diverso 8, párrafo tercero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.**"

Nota: Las tesis aisladas y de jurisprudencia 2a. CLXVI/2017 (10a.), I.5o.A.13 A (10a.) y 2a./J. 31/2020 (10a.) citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas

en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 10 de noviembre de 2017 a las 10:21 horas y del viernes 4 de octubre de 2019 a las 10:14 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 79. Tomo I, octubre de 2020, página 668, respectivamente.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

JUICIO DE NULIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE IMPONE MULTA A UN SUJETO OBLIGADO POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE LA MATERIA.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si las resoluciones de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, que imponen multas a los sujetos obligados por incumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Estatal, son impugnables a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo estatal, o bien, mediante el juicio de amparo, llegando a soluciones contrarias.

Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, decide que es improcedente el juicio de nulidad, al ser la Comisión de Transparencia estatal un organismo constitucionalmente autónomo; además, porque de acuerdo con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, la única vía para combatir las resoluciones emitidas por los organismos garantes, es el juicio de amparo.

Justificación: De conformidad con el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las resoluciones emitidas por los organismos garantes son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados; sin embargo, en tratándose de multas impuestas en materia de transparencia y acceso a la información, a sujetos obligados, que como persona particular tiene la obligación de cubrirla con sus propios recursos, no se actualiza la regla constitucional de inatacabilidad, la cual se creó con la intención de que los sujetos obligados no atacaran las resoluciones en las que se les impone una obligación en materia de transparencia, con el fin de no entorpecer ese derecho. Ahora bien, si las Comisiones Estata-

les de Transparencia y Acceso a la Información son organismos públicos autónomos, contra sus resoluciones es improcedente el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, puesto que en términos de los artículos 1o. y 17 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Nuevo León, éste es un órgano jurisdiccional con competencia para dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre los particulares y el Estado, los Municipios, sus organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal, de modo que quedan excluidos los organismos públicos autónomos como es la referida Comisión. Además, acorde a lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 160 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 183 y 184 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Estatal, las resoluciones que emitan los organismos garantes, pueden ser impugnadas por los particulares mediante el juicio de amparo; regla que de igual forma, le resulta aplicable al sujeto obligado que acude a impugnar una multa que le es impuesta por incumplimiento a la Ley de Transparencia Local, al ser acorde al marco constitucional que rige actualmente en el sentido de que las resoluciones en esa materia, sólo pueden impugnarse a través del juicio de amparo.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
PC.IV.A. J/50 A (10a.)

Contradicción de tesis 8/2019. Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 20 de octubre de 2020. Unanimidad de tres votos de los Magistrados Pedro Daniel Zamora Barrón, Jorge Meza Pérez y Rogelio Cepeda Treviño. Ponente: Rogelio Cepeda Treviño. Secretaria: Adairis Rodríguez Rocha.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver los amparos directos 107/2019 y 122/2019, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver los amparos directos 77/2019, 102/2019 y 114/2019.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de diciembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

PENSIONES OTORGADAS AL AMPARO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA. SU INCREMENTO DEBE EFECTUARSE ANUALMENTE EN EL MES DE FEBRERO, CONFORME AL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) CORRESPONDIENTE AL AÑO CALENDARIO ANTERIOR.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. 20 DE OCTUBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ NÚÑEZ (PRESIDENTE), SERGIO GARCÍA MÉNDEZ, ARCELIA DE LA CRUZ LUGO Y GUILLERMO ERIK SILVA GONZÁLEZ. PONENTE: GUILLERMO ERIK SILVA GONZÁLEZ. SECRETARIO: CARLOS ALÁN GONZÁLEZ ARCE.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—**Competencia.** Este Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito es competente legalmente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios emitidos por Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo de este Cuarto Circuito.

Asimismo, este Pleno de Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver del asunto con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19.

La resolución de la denuncia de contradicción de tesis se llevará a cabo de manera virtual y remota, haciendo uso de medios electrónicos, dada la con-

tingencia por la que atraviesa actualmente el país por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19.

SEGUNDO.—**Legitimación.** La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que el numeral 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República señala que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el fiscal general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de Circuito correspondiente; asimismo, el diverso artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo establece que las contradicciones a que se refiere la fracción III del artículo 226, podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el fiscal general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Magistrados de Tribunal Unitario de Circuito, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron; y en el caso concreto, la denuncia de contradicción de tesis se formuló por la apoderada de uno de los quejosos en los juicios de amparo en los que se emitieron los criterios contradictorios.

TERCERO.—**Criterios contendientes en la posible contradicción de tesis.** Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima necesario conocer los argumentos y consideraciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo determinó, al resolver el juicio de amparo directo número 1006/2018, en sesión plenaria de trece de junio de dos mil diecinueve, en lo que interesa, estableció:

"En otro contexto, en el tercer motivo conceptual, sostiene la apoderada jurídica del aquí inconforme, el tribunal de origen infringe sus derechos constitucionales, al efectuar una cuantificación incorrecta de la condena, pues inclu-

yó el incremento correspondiente a los años dos mil catorce, dos mil quince y sucesivos, a pesar de que se efectúa en febrero de cada año, conforme al numeral 145 de la Ley del Seguro Social vigente al treinta de junio de mil novecientos noventa y siete.

"Es infundado el anterior argumento, habida cuenta que si bien, como lo alega la parte quejosa, el artículo 145 de la Ley del Seguro Social[1] señala que las pensiones aumentarán en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, ello se explica porque tal indicador se publica en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda, conforme al segundo párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación.[2]

"Es decir, el porcentaje relativo al mes de enero, se conoce en los primeros diez días de febrero de cada año y así sucesivamente; de ahí que si el numeral 145 de la Ley del Seguro Social alude al mes de febrero de cada año, ello responde a que es en esa data que se conoce el factor aplicable al mes anterior (enero), a partir del cual deben computarse los incrementos.

"Luego, si en el laudo reclamado el incremento que se tomó en cuenta al cuantificar la pensión se ordenó desde el mes de enero de cada anualidad, ello se estima apegado a derecho, atendiendo a la forma en la cual se calcula y publica el índice del cual se obtiene la tasa aplicable.

"Igual criterio sustentó este Tribunal Colegiado, al fallar el juicio de amparo directo 292/2017, en sesión de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, 1483/2017, resuelto en sesión de quince de marzo y 1558/2017, en sesión de catorce de junio, ambos de dos mil dieciocho."

---

[1] "Artículo 145. Las pensiones por invalidez y vida otorgadas serán incrementadas anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor."

[2] "Artículo 20. ...

"En los casos en que las leyes fiscales así lo establezcan, a fin de determinar las contribuciones y sus accesorios se aplicará el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el cual será calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y se publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda. ..."

Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 416/2019, en sesión de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, consideró lo siguiente:

"El peticionario del amparo refiere toralmente en el sexto motivo de disenso, que la autoridad responsable conculcó en su perjuicio las garantías de legalidad, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley consagradas en los artículos 14, 16 y 123 constitucionales, en relación con los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que efectuó una cuantificación incorrecta, dado que aplicó los incrementos al monto de la pensión a partir del uno de enero; no obstante que los mismos se efectúan en el mes de febrero de cada año.

"Es fundado lo alegado por el inconforme en la medida siguiente:

"En efecto, la Junta estimó procedente condenar al instituto demandado, al otorgamiento de la pensión de vejez en favor del actor, ahora tercero interesado, en los términos que se leen de la parte considerativa del laudo, transcrita en el considerando cuarto de la presente sentencia y en lo que interesa determinó:

"'... y hasta que la demandada dé cumplimiento a la presente resolución y se cuantifica de la siguiente manera, así como aplicando los debidos incrementos:

"'2016 - $**********

"'2017- 3.9%= $**********

"'2018- 3.9%= $**********

"'31 de marzo al 31 de diciembre del 2016= 270 días x $********** = $**********

"'Año 2017- 12 meses X $********** = $**********

"'Año 2018- 6 meses X $********** = $**********

"'TOTAL= $**********' (énfasis añadido)



"Lo determinado por la responsable deviene ilegal, en el sentido de aplicar los incrementos a la pensión a partir del mes de enero de los años dos mil diecisiete y dieciocho, pues lo hizo multiplicando el factor de variación por doce meses, en el primer caso por doce meses y en el segundo por seis, lo que implica que aplicó el incremento a partir del mes de enero de cada uno de esos años.

"En efecto, el artículo décimo primero transitorio de las reformas y adiciones de la Ley del Seguro Social, conforme al decreto publicado el veinte de diciembre de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, respecto a la actualización de la pensión conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, en febrero de cada año, establece lo siguiente:

"'Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. ... Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Presidencia de la República.—Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que el honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente: Decreto. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: Se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.—Artículo único: Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 1995, en los términos siguientes: ... Décimo primero. La cuantía de las pensiones otorgadas al amparo de la legislación vigente hasta el 30 de junio de 1997 será actualizada anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año calendario anterior. Esta disposición se aplicará a partir del 1o. de febrero de 2002 ...' (publicación del Diario Oficial de la Federación de 20 de diciembre de 2001).

"De acuerdo con la transcripción del artículo décimo primero transitorio de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil uno, se determinó que las pensiones otorgadas conforme a la legislación del instituto con vigencia al treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, serían actualizadas en el mes de febrero de cada año, de manera que la Junta, al realizar los cálculos de la pensión de vejez, debió acudir a dicha disposición legal.

"Así es, pues el artículo décimo primero transitorio de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil uno, establece, en lo que interesa, que la cuantía de las pensiones otorgadas al amparo de la legislación vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, será actualizada anualmente en el mes de febrero correspondiente al año calendario anterior, y esa disposición aplica desde el uno de febrero de dos mil dos, disposición que es de orden público y de observancia obligatoria.

"Similar criterio sostuvo este tribunal, al resolver los amparos directos 833/2017-I y 1796/2017-I, en sesiones de uno de diciembre de dos mil diecisiete y once de mayo del año en (sic) dos mil dieciocho, respectivamente."

Ahora, tal como se ve de la transcripción de las prestaciones reclamadas en el juicio de origen, que obran a foja sesenta y siete del expediente formado con motivo de la presente contradicción de tesis,[3] el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Circuito estimó, a propósito de la modificación de una pensión de incapacidad, **los incrementos a dicha pensión debían efectuarse en enero** conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Lo anterior, al interpretar que el artículo 145 de la Ley del Seguro Social, vigente a partir del uno de julio de mil novecientos noventa y siete, alude al mes de febrero de cada año, debido a que el porcentaje de inflación relativo al mes de enero se publica en los primeros diez días de febrero.

Mientras que el diverso Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Cuarto Circuito estimó, al resolver sobre el otorgamiento de una pensión de vejez también bajo el amparo de la Ley del Seguro Social derogada, según se advierte de la transcripción efectuada en la ejecutoria correspondiente que

[3] "a) El pago correcto de la pensión de incapacidad parcial permanente, que me otorgó el Instituto Mexicano del Seguro Social, a partir del día 15 de abril de 1991, mediante resolución No. **********, dictada en fecha de 5 de julio de 1991, bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, así como los incrementos anuales."

obra a foja dieciocho del expediente de contradicción,[4] determinó que **los incrementos a esta pensión debían efectuarse en el mes de febrero**, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, correspondiente al año calendario anterior.

Esto, de conformidad con el artículo décimo primero transitorio de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil uno, pues ahí se estableció que la cuantía de las pensiones otorgadas bajo la legislación derogada serían actualizadas en esos términos, a partir del uno de febrero de dos mil dos.

CUARTO.—**Existencia de la contradicción de tesis.** Conforme a los criterios previamente relatados, se concluye la existencia de la contradicción de tesis denunciada.

Cabe mencionar que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la existencia de la contradicción de criterios se encuentra condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien, sostengan "tesis contradictorias".

Entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.

Esto, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho, como en los de hecho.

---

[4] "A. El otorgamiento de la pensión de vejez, de la cual es merecedor mi representado y actualmente le fue negada por el IMSS, de conformidad con el artículo 138 de la Ley del Seguro Social.
"... .
"F. Otorgamiento de la atención médica, clínica y farmacéutica de conformidad con la Ley del Seguro Social."

Luego, considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia.

Por tanto, se precisa que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas.

Lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.

En ese sentido, la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que se pronuncien:

1) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y

2) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

La finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis, y no para buscar diferencias de detalle que impidan analizar dicha cuestión.

Las anteriores consideraciones tienen sustento en la jurisprudencia P./J. 72/2010, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, visible en la página siete del Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, de rubro y texto:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan 'tesis contradictorias', entendiéndose por 'tesis' el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.', al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que 'al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes' se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en 'diferencias' fácticas que desde el punto de

vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Establecido lo anterior, es necesario precisar que no constituye un impedimento para estimar actualizada la contradicción de tesis, el hecho de que los criterios discrepantes se basen en diferentes disposiciones jurídicas de la Ley del Seguro Social.

En efecto, de la confrontación de las ejecutorias de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se advierte que se trataron pensiones distintas, e incluso acciones diferentes, así como el fundamento legal utilizado, pues, se reitera, el Tercer Tribunal Colegiado se pronunció sobre la modificación de una pensión de incapacidad, tomando en cuenta el artículo 145 de la Ley del Seguro Social vigente a partir de julio de mil novecientos noventa y siete; mientras que el Primer Tribunal Colegiado lo hizo sobre el otorgamiento de una pensión de vejez, de conformidad con el artículo décimo primero transitorio del decreto que modificó diversas disposiciones de la citada legislación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil uno.

Sin embargo, el problema jurídico analizado por los Tribunales Colegiados de Circuito fue el mismo, a saber, a partir de cuándo deben incrementarse las pensiones otorgadas con base en la Ley del Seguro Social derogada.

En efecto, deben dejarse de lado las cuestiones fácticas diferentes, sobre las acciones intentadas, así como los requisitos particulares de las mismas, ya

que la contradicción se centra en el análisis efectuado sobre el actuar de la Junta responsable, es decir, si fue correcto que condenara a incrementar las pensiones en enero.

Es así, ya que debe privilegiarse la razón de ser de las contradicciones de tesis, consistente en determinar la solución correcta de un caso, a fin de uniformar criterios y salvar la seguridad jurídica.

De lo contrario, sería un error que si dos Tribunales Colegiados de Circuito sostienen criterios distintos respecto de una misma cuestión jurídica, no se resuelva cuál de las conclusiones de los Colegiados es la correcta, o incluso si la correcta es otra solución, dado que entonces la seguridad jurídica quedaría en entredicho al quedar vigentes dos criterios diversos.

Máxime que el problema jurídico puede plantearse desde una óptica estrictamente positivista, como un problema de elección de norma aplicable, es decir, la elección de una disposición normativa distinta respecto de una misma hipótesis, pues ello deja al descubierto que cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito realizó su propia interpretación de las mismas y llegó a conclusiones opuestas, revelando justamente la existencia de la contradicción en estudio.

Se invoca el criterio 1a. LXIX/2003, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y ocho del Tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, de rubro y texto:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE AUN CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONTENDIENTES DISCREPEN RESPECTO DE CUÁL ES LA NORMA APLICABLE A LA HIPÓTESIS PROCESAL QUE RESOLVIERON.—El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001 determinó que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas

de las sentencias respectivas; y c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos. Ahora bien, el hecho de que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes hayan discrepado respecto de cuál era la norma aplicable a un supuesto específico que resolvieron, no es obstáculo para determinar la existencia de la contradicción de tesis planteada, pues la elección de una norma procesal distinta respecto de una misma hipótesis, implica que cada uno de dichos órganos jurisdiccionales realizó su propia interpretación y llegó a conclusiones opuestas."

Igualmente, se invoca por ilustrativo el diverso criterio 1a. CCXXXI/2007, también emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cuatrocientos diecinueve del Tomo XXVII, enero de dos mil ocho, Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, de rubro y texto:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PROCEDE SU ESTUDIO CUANDO LOS TRIBUNALES SE APOYAN EN DIFERENTES DISPOSICIONES JURÍDICAS DE UNA MISMA LEY PARA LLEGAR A SU CRITERIO.—Cuando ante la misma legislación dos tribunales sostienen criterios distintos debido a que cada uno, utilizó, diversas disposiciones, en realidad se está decidiendo de manera diferente sobre una misma cuestión jurídica, generándose inseguridad para los gobernados, porque existen dos criterios con conclusiones diversas y dependiendo del tribunal al cual toque conocer será el sentido de la resolución. Al respecto, debe tomarse en cuenta que las contradicciones de tesis tienen como razón de ser la generación de seguridad jurídica y una de las situaciones que pretenden lograr es que, independientemente del tribunal al cual toque resolver, se tenga certeza de cómo se decidirá el conflicto de derecho. Así las cosas, debe privilegiarse esa razón de ser, pues considerar la inexistencia de la contradicción en esas situaciones implicaría que, a pesar de que dos Tribunales Colegiados de Circuito sostienen criterios distintos respecto de una misma cuestión jurídica, no se resuelva cuál de las conclusiones de los colegiados es la correcta o incluso si el criterio a seguir es otro distinto, con lo que la seguridad jurídica quedaría en entredicho."

QUINTO.—**Materia de la contradicción.** En las relatadas consideraciones, la presente contradicción de tesis versará sobre el mes en que deben efectuar-

se los incrementos a las pensiones de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

SEXTO.—**Criterio que debe prevalecer.** Este Pleno de Circuito determina que el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, es en el sentido de que el incremento anual a las pensiones otorgadas al tenor de la Ley del Seguro Social anterior, debe aplicarse en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor relativo al año calendario previo.

Para resolver la problemática jurídica que nos ocupa, es necesario destacar que la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, respecto al incremento periódico de las pensiones otorgadas conforme a ese ordenamiento legal, establecía en los artículos 75, 76, 172 y 173, que la cuantía relativa debe ser revisada cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, aumentándose con el mismo incremento porcentual que corresponda al salario mínimo general del Distrito Federal.

A partir del uno de julio de mil novecientos noventa y siete, entró en vigor la "nueva" Ley del Seguro Social, la cual dio pie a un cambio sustancial a la manera en que debía aumentarse el monto de las pensiones otorgadas acorde con tal normatividad, pues al respecto prevé que será actualizado anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año calendario anterior, según deriva de los numerales 68, 69, 145, 157, 164 y 170, que dicen:

"Título segundo
"Del régimen obligatorio

"Capítulo III
"Del seguro de riesgos de trabajo

"Sección cuarta
"Del incremento periódico de las pensiones

"Artículo 68. La cuantía de las pensiones por incapacidad permanente será actualizada anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año calendario anterior."

"Artículo 69. Las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes del asegurado por riesgos de trabajo serán revisadas e incrementadas en la proporción que corresponda, en términos de lo dispuesto en el artículo anterior."

"Sección quinta
"De la cuantía de las pensiones de invalidez y vida

"Artículo 145. Las pensiones por invalidez y vida otorgadas serán incrementadas anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

"Capítulo VI
"Del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez

"Artículo 157. Los asegurados que reúnan los requisitos establecidos en esta sección podrán disponer de su cuenta individual con el objeto de disfrutar de una pensión de cesantía en edad avanzada. Para tal propósito podrá optar por alguna de las alternativas siguientes:

"I. Contratar con la institución de seguros de su elección una renta vitalicia, que se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, y ..."

"Sección tercera
"Del ramo de vejez

"Artículo 164. Los asegurados que reúnan los requisitos establecidos en esta sección podrán disponer de su cuenta individual con el objeto de disfrutar de una pensión de vejez. Para tal propósito podrá optar por alguna de las alternativas siguientes:

"I. Contratar con una compañía de seguros pública, social o privada de su elección una renta vitalicia, que se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, y ..."

"Sección sexta
"De la pensión garantizada

"Artículo 170. Pensión garantizada es aquella que el Estado asegura a quienes reúnan los requisitos señalados en los artículos 154 y 162 de esta ley y su monto mensual será el equivalente a un salario mínimo general para el Distrito Federal, en el momento en que entre en vigor esta ley, cantidad que se actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, para garantizar el poder adquisitivo de dicha pensión."

Posteriormente, el veinte de diciembre de dos mil uno se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, y en lo que interesa, en el artículo décimo primero transitorio se estableció que la cuantía de las pensiones otorgadas en términos de la legislación derogada (vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete), sería actualizada anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año calendario anterior, además, esa disposición se aplicaría a partir del uno de febrero de dos mil dos.

El precepto legal en cita prevé:

"Décimo primero. La cuantía de las pensiones otorgadas al amparo de la legislación vigente hasta el 30 de junio de 1997 será actualizada anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año calendario anterior. Esta disposición se aplicará a partir del 1o. de febrero de 2002."

Lo anterior evidencia que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley del Seguro Social, las pensiones otorgadas al amparo de tal ordenamiento legal deben actualizarse de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor y no en términos del incremento que tuviera el salario mínimo, como se venía realizando, además, de la interpretación sistemática de los aludidos preceptos es dable concluir que la actualización correspondiente debe efectuarse anualmente en el mes de febrero; lo mismo ocurre con la cuantía de las pensiones otorgadas bajo la legislación derogada, pues a partir del uno de febrero de dos mil dos, aquélla

debe actualizarse anualmente en el mes de febrero conforme al aludido índice correspondiente al año calendario anterior, según lo previsto por el artículo décimo primero transitorio del decreto publicado el veinte de diciembre de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación.

De ahí que se concluye que en estricto apego a la letra de la legislación aplicable, las pensiones otorgadas con base en la Ley del Seguro Social derogada, **deben incrementarse cada año en el mes de febrero** conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, al igual que las otorgadas por la Ley del Seguro Social vigente.

Cabe destacar que en relación con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, al resolver el amparo en revisión 220/2008, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó su naturaleza y al efecto precisó, esencialmente, lo siguiente:

• La inflación es un fenómeno económico que consiste en el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios que se expenden en una economía.

• Entre los efectos negativos que ocasiona dicho fenómeno, se encuentra la pérdida del valor adquisitivo de la moneda.

• El Índice Nacional de Precios al Consumidor es el instrumento estadístico que permite medir el fenómeno de la inflación en un determinado periodo, a partir del cual el Banco de México diseña la política monetaria orientada a mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda.

Además, el propio Pleno del Alto Tribunal del País ha establecido que para actualizar el valor de un bien o de una operación que ha variado por el transcurso del tiempo y el cambio de precios en el país, es factible utilizar como referente el Índice Nacional de Precios al Consumidor, tal como se advierte de la tesis P. XXVII/2003,[5] de contenido:

[5] Novena Época. Registro: 182533. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XVIII, diciembre de 2003, materia común, página 19.

"SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO SU CUMPLIMIENTO CONLLEVE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR EL VALOR DE UN BIEN INMUEBLE, EL MONTO A CUBRIR SERÁ EL QUE RESULTE DE ACTUALIZAR EL VALOR QUE TENÍA, DESDE EL MOMENTO EN QUE SE REALIZÓ EL ACTO RECLAMADO HASTA LA FECHA EN QUE SE EFECTÚE EL PAGO, CONFORME AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 7o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.—De conformidad con el artículo 80 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de carácter positivo, la sentencia que concede el amparo tendrá por objeto restituir al gobernado en el pleno goce de sus garantías violadas, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por lo que en el supuesto de que el cumplimiento del fallo protector conlleve la obligación de pagar al quejoso el valor del bien inmueble materia de la litis, la cantidad de dinero que las autoridades responsables deberán pagar será la que resulte de actualizar el valor que tenía el referido bien, desde el momento en que se realizó el acto declarado inconstitucional hasta la fecha en que se efectúe el pago correspondiente, ya que la restitución al quejoso en el pleno goce de sus garantías individuales violadas lleva implícito el deber de actualizar ese valor, para que el monto resultante tenga un poder adquisitivo análogo al que tenía en la época en que se emitió el acto reclamado. Ahora bien, ante la falta de norma expresa que establezca la forma en que debe actualizarse el monto de las obligaciones monetarias que deben cubrirse en cumplimiento de una ejecutoria de amparo debe aplicarse, por identidad de razón, el mecanismo de actualización que prevé el artículo 7o., fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, conforme al cual, para determinar el valor de un bien o de una operación que ha variado por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país en un periodo determinado, se utilizará el factor de actualización que se obtiene de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo, en el entendido de que para conocer el valor de las obligaciones contraídas con anterioridad al 1o. de enero de 1993, es necesario convertir su monto a pesos actuales, considerando para ello que un peso actual equivale a mil pesos de los anteriores, ya que de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1992, por el que se crea una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos, la nueva unidad monetaria equivale a mil de la unidad anterior."

De ahí que se concluye que la cuantía de las pensiones otorgadas conforme a la Ley del Seguro Social derogada, se aumenta anualmente en el **mes de febrero**, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año calendario anterior, es decir, el incremento debe aplicarse en febrero de cada anualidad.

Es oportuno precisar que la Junta al dictar el laudo de veinte de marzo de dos mil dieciocho, señalado como acto reclamado en el amparo directo 1006/2018, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, determinó que procedía condenar al Instituto Mexicano del Seguro Social a modificar la resolución en la que otorgó a la parte actora una pensión de incapacidad permanente parcial, así como al pago de las diferencias en el monto de la pensión por el lapso comprendido del veintisiete de marzo de dos mil catorce al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, y al calcular las aludidas diferencias, aplicó el incremento relativo a cada año completo, lo que implica que actualizó la cuantía de la pensión a partir de enero de cada anualidad; empero, el que a la fecha de emisión del laudo la responsable conociera los factores de incrementos que estimó aplicables, ello de manera alguna la autoriza a realizar la actualización ni el aumento a partir del mes de enero, como lo avaló el mencionado órgano jurisdiccional, pues la Ley del Seguro Social es clara al establecer que el incremento relativo debe aplicarse cada año en el mes de febrero.

Se considera que **la actualización de las pensiones debe hacerse efectiva anualmente en febrero**, ya que en los primeros diez días de enero de cada año, es cuando se tienen los datos indispensables para calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor del año calendario previo, esto es, la inflación acumulada en ese lapso, lo que se robustece con la circunstancia de que la disposición transitoria de mérito entró en vigor el uno de febrero de dos mil dos, fecha en la que ya se conocía la información necesaria para determinar el factor de incremento relativo.

De manera que para determinar cuál es el factor correspondiente al año calendario anterior, es decir, el porcentaje en que habrá de incrementarse la cuantía de la pensión, es necesario conocer la mecánica con la que se realiza



la publicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor y definir el concepto de año calendario.

Así, acorde con el segundo párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, tal indicador se publica en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda,[6] por ejemplo, el porcentaje relativo al mes de enero, se conoce en los primeros diez días de febrero de cada año y así sucesivamente.

Luego, en relación con el concepto de "*año calendario*", debe establecerse que, acorde con las definiciones de "*año*"[7] y "*calendario*"[8] contenidas en el *Diccionario de la Lengua Española*,[9] en relación con lo previsto por el primer párrafo del

---

[6] (Reformado, D.O.F. 30 de diciembre de 1983)
"Artículo 20. ...
(Reformado, D.O.F. 12 de diciembre de 2011)
"En los casos en que las leyes fiscales así lo establezcan, a fin de determinar las contribuciones y sus accesorios se aplicará el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el cual será calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y se publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda. ..."

[7] "Del lat. *annus*.
"1. m. Astron. Tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol y que equivale a 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos.
"2. m. Periodo de doce meses, a contar desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ambos inclusive.
"3. m. Periodo de doce meses, a contar desde un día cualquiera.
"4. m. Curso académico, de los varios en que suele dividirse el estudio de una materia, o de cada una de las etapas educativas.
"5. m. Persona que resultaba emparejada con otra al echar damas y galanes la víspera de año nuevo.
"6. m. pl. Día en que alguien cumple años. Celebrar los años. Dar los años.
"7. m. pl. Edad (□ tiempo vivido). Está muy joven para sus años.
"8. m. pl. Década del siglo. La España de los años noventa."

[8] "Del lat. *calendarium*.
"1. m. Sistema de representación del paso de los días, agrupados en unidades superiores, como semanas, meses, años, etcétera.
"2. m. Lámina o conjunto de láminas en que se representa gráficamente el calendario.
"3. m. Almanaque.
"4. m. Distribución de determinadas actividades en distintas fechas a lo largo de un año. Calendario de trabajo, de actividades.
"5. m. *desus*. Data (□ indicación del lugar y tiempo)."

[9] https://dle.rae.es/

artículo 11 del Código Fiscal de la Federación,[10] se considera que "*año calendario*" es el periodo de doce meses, comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre, de modo que la duración de un "*año calendario*" coincide básicamente con el de un ejercicio fiscal.

Con base en lo expuesto, se concluye que el Índice Nacional de Precios al Consumidor de determinado año calendario, se calcula conforme al procedimiento que prevé el artículo 6, fracción I, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, que establece:

"Artículo 6. Cuando esta ley prevenga el ajuste o la actualización de los valores de bienes o de operaciones, que por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país han variado, se estará a lo siguiente:

"I. Para calcular la modificación en el valor de los bienes o de las operaciones, en un periodo, se utilizará el factor de ajuste que corresponda conforme a lo siguiente:

"a) Cuando el periodo sea de un mes, se utilizará el factor de ajuste mensual que se obtendrá restando la unidad del cociente que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de que se trate, entre el mencionado índice del mes inmediato anterior.

"b) **Cuando el periodo sea mayor de un mes se utilizará el factor de ajuste que se obtendrá restando la unidad del cociente que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo**.

"II. Para determinar el valor de un bien o de una operación al término de un periodo, se utilizará el factor de actualización que se obtendrá dividiendo el

[10] "Artículo 11. Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calcularán por ejercicios fiscales, estos coincidirán con el año de calendario. Cuando las personas morales inicien sus actividades con posterioridad al 1o. de enero, en dicho año el ejercicio fiscal será irregular, debiendo iniciarse el día en que comiencen actividades y terminarse el 31 de diciembre del año de que se trate."

Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo."

Del dispositivo legal reproducido se obtiene que mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor mensual puede determinarse el factor de inflación de cualquier periodo, que en la especie corresponde a un año, para lo cual debe considerarse el valor del índice del mes más actual del lapso y dividirlo entre el citado índice del mes más antiguo, al resultado se le resta la unidad del cociente (1) y para obtener el porcentaje relativo, debe multiplicarse por 100 (cien), lo que para óptima apreciación se ilustra con la siguiente fórmula:

Porcentaje de incremento anual (factor) = (valor del índice en el mes más reciente/valor del índice en el mes más antiguo) – 1 (uno) x 100 (cien).

Sin que obste que el referido precepto legal se encuentre inmerso en una legislación de naturaleza fiscal, habida cuenta que lo relevante es que esa norma contiene un principio de actualización para determinar el valor de un bien o de una operación que ha variado por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país en un periodo determinado, lo que denota que su aplicabilidad no es exclusiva del ámbito fiscal.

Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 135/2019 (10a.),[11] aplicable por analogía, de título y subtítulo, así como el texto:

"PENSIONES OTORGADAS POR EL ISSSTE. LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS OMITIDOS POR EL INSTITUTO DEBEN ENTREGARSE ACTUALIZADAS.—De acuerdo con el marco normativo que rige las pensiones otorgadas conforme al antiguo régimen conocido como de reparto o de beneficios definidos, corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado efectuar los incrementos de las pensiones que prevé el artículo 57 de su legislación vigente hasta el 4 de enero de 1993,

[11] Décima Época. Fuente: *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 71, Tomo II, octubre de 2019, materia constitucional, página 1932, con número de registro digital: 2020857 y en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 18 de octubre de 2019 a las 10:28 horas.

esto es, cuando aumentan los sueldos básicos de los trabajadores en activo, en tanto que en términos de la legislación en vigor hasta el 31 de marzo de 2007, tal aumento debe aplicarlo anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del 1 de enero de cada año; sin que, por tanto, sea necesario que previamente lo solicite el pensionado. De ahí que cuando el Instituto omite dar cumplimiento a la normativa en comento y el pensionado reclama (ya sea ante el propio Instituto o con posterioridad en el juicio contencioso) tanto los incrementos omitidos como las diferencias que de ellos deriven, en caso de resultar procedente dicho reclamo, el mencionado Instituto quedará constreñido a entregar las diferencias debidamente actualizadas, conforme al procedimiento que establece el artículo 6, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, habida cuenta que la inobservancia de la ley por parte de esa dependencia conlleva que el pensionado no pueda disponer de las cantidades respectivas en el momento en que legalmente tiene derecho a ello y conforme a la realidad económica existente."

Por tanto, si las pensiones deben ser actualizadas anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor relativo al año calendario anterior, entonces, para obtener la inflación de ese periodo (año previo al en que se incrementa la cuantía), deben tomarse en cuenta los valores del índice de enero y diciembre, los cuales se extraen de las publicaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los diez primeros días del mes posterior del que desea conocerse el índice y realizar la operación matemática.

Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor de enero de determinado año, se obtiene de la publicación efectuada a más tardar el diez de febrero de la misma anualidad y el relativo a diciembre del propio año deriva de la publicación realizada en el mes de enero del año siguiente.

Es oportuno destacar que lo anterior de manera alguna implica que los pensionados dejen de percibir un mes de actualización de su pensión, esto es, el relativo a enero del año en que aplica el incremento, ya que la cantidad correspondiente será pagada en enero en la anualidad siguiente y así sucesivamente.



En las relatadas consideraciones, se concluye que acorde con el artículo décimo primero transitorio del Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil uno, la cuantía de las pensiones otorgadas al amparo de la legislación de seguridad social derogada, debe actualizarse anualmente en el mes de febrero de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año calendario inmediato anterior, que se obtiene de la manera precisada.

Consecuentemente, este Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito determina que el criterio que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, es el siguiente:

PENSIONES OTORGADAS AL AMPARO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA. SU INCREMENTO DEBE EFECTUARSE ANUALMENTE EN EL MES DE FEBRERO, CONFORME AL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) CORRESPONDIENTE AL AÑO CALENDARIO ANTERIOR. De la interpretación literal del artículo décimo primero transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2001, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, deriva que la cuantía de las pensiones otorgadas al amparo de la legislación vigente hasta el 30 de junio de 1997, debe actualizarse anualmente en el mes de febrero (al igual que las otorgadas por la Ley del Seguro Social vigente), acorde con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) correspondiente al año calendario anterior, que comprende de enero a diciembre del año previo al en que se aumenta la pensión, el cual se calcula conforme al procedimiento que establece el artículo 6, fracción I, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, esto es, el valor del índice del mes más actual del lapso (diciembre), se divide entre el citado índice del mes más antiguo (enero), al resultado se le resta la unidad del cociente y, para obtener el porcentaje relativo, debe multiplicarse por cien.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 226, fracción III, 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.—Existe la contradicción de tesis.

SEGUNDO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno de Circuito, en términos del último considerando de esta resolución.

TERCERO.—Se aprueba la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución, por tanto, dese la publicidad que corresponda, en términos del artículo 27 del Acuerdo General Número 17/2019, de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación en el *Semanario Judicial de la Federación* y en su *Gaceta*, de las tesis que emiten la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes y remítase en el plazo establecido por el artículo 219 de la Ley de Amparo, la tesis de que se trata, a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis para efectos de su publicación.

Así, lo resolvió el Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, por unanimidad de cuatro votos de los Magistrados Luis Alfonso Hernández Núñez (presidente), Sergio García Méndez, Arcelia de la Cruz Lugo y Guillermo Erik Silva González (ponente), quienes firman de manera electrónica para los efectos legales, en unión del secretario de Acuerdos Ricardo Iván Hinojosa Santos, que autoriza y da fe, se deja la correspondiente evidencia criptográfica de las firmas electrónicas.

En términos de lo previsto en los artículos 116, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PENSIONES OTORGADAS AL AMPARO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA. SU INCREMENTO DEBE EFECTUARSE ANUAL-

MENTE EN EL MES DE FEBRERO, CONFORME AL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) CORRESPONDIENTE AL AÑO CALENDARIO ANTERIOR. De la interpretación literal del artículo décimo primero transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2001, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, deriva que la cuantía de las pensiones otorgadas al amparo de la legislación vigente hasta el 30 de junio de 1997, debe actualizarse anualmente en el mes de febrero (al igual que las otorgadas por la Ley del Seguro Social vigente), acorde con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) correspondiente al año calendario anterior, que comprende de enero a diciembre del año previo al en que se aumenta la pensión, el cual se calcula conforme al procedimiento que establece el artículo 6, fracción I, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, esto es, el valor del índice del mes más actual del lapso (diciembre), se divide entre el citado índice del mes más antiguo (enero), al resultado se le resta la unidad del cociente y, para obtener el porcentaje relativo, debe multiplicarse por cien.

PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
PC.IV.L. J/21 L (10a.)

Contradicción de tesis 3/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 20 de octubre de 2020. Unanimidad de cuatro votos de los Magistrados Luis Alfonso Hernández Núñez (presidente), Sergio García Méndez, Arcelia de la Cruz Lugo y Guillermo Erik Silva González. Ponente: Guillermo Erik Silva González. Secretario: Carlos Alán González Arce.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 416/2019, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 1006/2018.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de diciembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. SE INTERRUMPE CON LA SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO DE AUDIENCIA PARA FORMULAR LA IMPUTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 13 DE OCTUBRE DE 2020. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS REFUGIO NOEL MONTOYA MORENO, JOSÉ ELÍAS GALLEGOS BENÍTEZ, MARÍA TERESA ZAMBRANO CALERO Y JUAN CARLOS ZAMORA TEJEDA. DISIDENTES: MARÍA DEL CARMEN CORDERO MARTÍNEZ, JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ SIMENTAL Y CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA, QUIENES FORMULARON VOTO PARTICULAR MINORITARIO. PONENTE: REFUGIO NOEL MONTOYA MORENO. SECRETARIOS: MARTHA CECILIA ZÚÑIGA ROSAS Y JULIO CÉSAR MONTES GARCÍA.

CONSIDERANDO:

8. PRIMERO. —**Competencia.** Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero y quince de diciembre, ambos de dos mil quince; por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este Circuito y corresponde, exclusivamente a este órgano, dilucidarla y determinar, en su caso, cuál será el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

9. SEGUNDO.—**Legitimación.** La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

10. TERCERO.—**Criterios Contendientes.** Para determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se impone analizar las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados de Circuito basaron sus resoluciones.

A. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, al resolver el amparo en revisión 226/2019, en sesión de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve.

"En sus agravios, la parte recurrente aduce esencialmente que la acción penal se encuentra prescrita, toda vez que los hechos que se le imputan ocurrieron el veintisiete de mayo de dos mil quince, por lo que el plazo de tres años para que operara la prescripción feneció el veintisiete de mayo de dos mil dieciocho, acorde a las reglas del artículo 111 del Código Penal del Estado de Chihuahua.

"Sin embargo, la solicitud de orden de aprehensión y la formulación de imputación se realizaron, respectivamente, hasta el once y el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, de modo que transcurrió en exceso dicho plazo. Además, sostiene que fue erróneo lo dicho por el Juez de Distrito en cuanto a que la fiscalía solicitó audiencia para formular imputación previo a que transcurrieran los tres años, pues ello no suspende el plazo para la prescripción, sino sólo su puesta a disposición ante el Juez de Control, según su interpretación del numeral 115 del propio código. Aunado a lo anterior, de acuerdo con la tesis aislada XVII.1o.P.A.32 P, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Circuito la prescripción de la pretensión punitiva sólo se interrumpe con la aprehensión del imputado o su comparecencia ante la autoridad judicial, todo lo cual ocurrió una vez vencido el plazo de tres años.

"No le asiste razón a la parte inconforme, toda vez que la fiscalía ejerció la acción penal antes de que venciera el plazo de tres años para que prescribiera,

pues los hechos que se le atribuyen ocurrieron el veintisiete de mayo de dos mil quince, en tanto la citación para audiencia de formulación de imputación se solicitó el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, hecho que constituye el ejercicio de la acción penal a partir de una interpretación del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua.

"Para sustentar la decisión de este tribunal colegiado de Circuito, es conveniente explicar en qué consiste la prescripción de la acción penal, cómo se computan los plazos para que opere dicha figura según la codificación sustantiva, el momento en que se ejerce la acción penal de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales del Estado, y los efectos que ésta produce.

"**Prescripción de la acción penal**

"Conforme al artículo 105, párrafo primero, del Código Penal del Estado de Chihuahua, la prescripción de la acción penal extingue la pretensión punitiva por el transcurso del tiempo y produce sus efectos oficiosamente.

"Esta figura se funda en la autolimitación del Estado que se impone para perseguir las conductas que pueden constituir un delito, pues es una consecuencia ante la inactividad de la autoridad encargada de investigar y perseguir las conductas delictuosas. Al mismo tiempo, constituye una garantía al derecho a la seguridad jurídica de las personas.

"Así también ha recogido el derecho jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde la Sexta Época, en la tesis siguiente:

"'PRESCRIPCION DE LA ACCION Y DE LA PENA.'

"**Plazos para la prescripción de la acción penal**

"Los numerales 108 y 111 del código en mención prevén reglas para computar los plazos de prescripción de la acción penal. El primero de ellos indica cuándo empieza a transcurrir ese lapso; el segundo señala el momento en que concluye o, lo que es lo mismo, el instante en que opera la institución jurídica relativa.

"Tales reglas, aplicadas a los delitos instantáneos para los que se establezca pena privativa de libertad –artículo 108, fracción I, y 111, fracción I, que al caso interesan– revelan que la prescripción inicia desde el momento en que se consuman y opera en un **plazo de, cuando menos, tres años**. El lapso puede exceder de esa temporalidad cuando el término medio aritmético de la pena, incluidas las modalidades del delito, sea superior; en este caso, la prescripción se configurará transcurrido un tiempo igual al de esta última operación.

"**Ejercicio de la acción penal**

"Antes de estudiar esta figura, es importante puntualizar que la legislación adjetiva aplicable al caso es el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua –que correctamente empleó la autoridad responsable– y no el Código Nacional de Procedimientos Penales que invocó el Juez de Distrito; sin que esto tenga el alcance de revocar el fallo impugnado, como se verá en párrafos subsecuentes.

"Se emplea el ordenamiento invocado en primer lugar, porque de acuerdo con el artículo segundo transitorio, párrafo segundo, del decreto por el que se expidió el segundo de ellos, éste entraría en vigor en las entidades federativas de acuerdo con la Declaratoria que emitiera el órgano legislativo respectivo. En el caso del Estado de Chihuahua, la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso local declaró el inicio de su vigencia en todo el territorio de esa entidad, a partir de las cero horas del trece de junio de dos mil dieciséis. Además, en términos del artículo tercero transitorio del decreto aludido, los procedimientos penales en trámite a la fecha de su entrada en vigor, seguirían su curso conforme a la legislación aplicable al momento de su inicio.

"De ello se sigue que si, en el caso, el procedimiento penal comenzó con la denuncia presentada por la víctima de iniciales **********, el ocho de julio de dos mil quince, bajo el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua publicado en el medio oficial de difusión el nueve de agosto de dos mil seis, entonces ésta es la normatividad que rigió el dictado del acto reclamado.

"Así se deduce del acta de denuncia relativa que obra en el cuaderno auxiliar del juicio de amparo indirecto, la cual constituye un documento público

con valor pleno de acuerdo con los preceptos 129 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del artículo 2o., párrafo segundo, por ser copia certificada que forma parte de una carpeta de investigación.

"Precisado lo anterior, debe partirse de que la acción penal es la potestad jurídica de poner en marcha la actividad jurisdiccional respecto de una relación de derecho penal concreta. Esta figura ha sido definida por la Primera Sala del Alto Tribunal del País como el derecho que tiene el Estado de acudir ante los órganos jurisdiccionales para que apliquen la ley a un hecho que estima delictuoso; ello en la contradicción de tesis 83/2005-PS, de la que emanó la jurisprudencia 1a./J. 152/2005,32 (sic) que ahora se reproduce:

"'ACCIÓN PENAL. LA CONSIGNACIÓN INTERRUMPE SU PRESCRIPCIÓN.'

"Sobre esa base, de una interpretación sistemática y teleológica –en aras de cristalizar el ejercicio de la acción penal– de los artículos 226 *a contrario* (sic), 274, 275, párrafo primero, 276 y 278 del Código de Procedimientos Penales local, este tribunal colegiado de Circuito determina que **la acción penal se ejerce a través de la solicitud de audiencia para formular imputación**.

"Cierto, dicha solicitud constituye la actuación procesal por la cual el Ministerio Público hace del conocimiento del juzgador que los resultados de su investigación son suficientes para comunicarlos a la persona investigada de manera formal, a través de la formulación de imputación.

"En esa petición, el órgano acusador debe precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho previsto en la ley como delito, la persona a quien se atribuye su comisión y su forma de intervención. En esa medida, tal petición de audiencia representa la judicialización de la investigación y da lugar a que se active el aparato jurisdiccional.

"El criterio apuntado se robustece con la facultad expresa que introdujo el legislador de no ejercer acción penal, *antes* de formular la imputación; lo que, en sentido contrario, revela que esa fase es por la cual se ejerce aquélla. No se



pasa por alto la existencia del criterio aislado 1a. LXXXI/2012 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la República, donde indicó expresamente que el ejercicio de la acción penal se materializa a través de la acusación, la que, a su vez, sólo puede formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso. Tesis que a la letra se reproduce:

"'EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN CORRESPONDE AL FISCAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 21, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.'

"Sin embargo, ello no influye en lo aquí razonado, habida cuenta que esa conclusión se hizo con base en una interpretación de los artículos 127, 131, fracción XVI, y 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo contenido es distinto a lo dispuesto por la legislación local que se analizó en líneas precedentes. Máxime que, en todo caso, únicamente constituye un criterio orientador, más no vinculante, en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo y de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 195/2016 (10a.), de la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, cuyo epígrafe y texto dicen:

"'TESIS AISLADAS. LAS EMITIDAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN CARÁCTER ORIENTADOR, NO GENERAN DERECHOS NI SON SUSCEPTIBLES DEL EJERCICIO DE IRRETROACTIVIDAD.'

"Efectos del ejercicio de la acción penal

"Ahora, es menester precisar que los preceptos 114 y 115 del código penal en cita, regulan los supuestos normativos para que se den la *interrupción* y la *suspensión* de la prescripción. La primera provoca la pérdida del tiempo transcurrido hasta ese día y, por tanto, se inicia el cómputo de un nuevo plazo, desde cero. En cambio, la suspensión sólo paraliza el lapso para la prescripción, por ende, al finalizar el tiempo de suspensión, aquél volverá a contarse a partir de donde se encontraba cuando se suspendió.

"Luego, si la jurisprudencia 1a./J. 152/2005 antes transcrita, dispone que la consignación –y, por tanto, el ejercicio de la acción penal– es apta para *inte-*

rrumpir el plazo para la prescripción, y este tribunal colegiado de Circuito determinó que la pretensión punitiva se ejerce con la **solicitud para fijar audiencia de formulación de imputación**, sólo resta establecer que esta última actuación **también *interrumpe* la prescripción**.

"Esta conclusión se robustece si se considera que, de permitir que continúe el plazo para la prescripción aún ante la petición de audiencia aludida, ello equivaldría a sancionar a la fiscalía por motivos de otro órgano del Estado, como sería la dilación que provocara el tribunal de control al fijar una fecha lejana para verificar la audiencia dada su carga de trabajo. Esto desnaturalizaría la figura de la prescripción, cuyo propósito –como ya se indicó– es sancionar la inactividad de la fiscalía. Además sería incongruente, pues implicaría que el derecho prescribe mientras se ejerce.

"Esta interpretación se ajusta al derecho interamericano de derechos humanos, en la medida que no se sacrifica el derecho al proceso debido en pro del formalismo y la impunidad, lo que conduciría '*a la violación de la obligación internacional del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos y menoscaba el derecho de la víctima y de sus familiares a saber la verdad de lo sucedido, a que se identifique y se sancione a todos los responsables y a obtener las consecuentes reparaciones*'."

"Denuncia de posible contradicción de criterios

"Por las razones anteriores este tribunal colegiado de Circuito no comparte lo que postuló el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Décimo Séptimo Circuito al resolver el amparo en revisión 139/2016, que dio origen a la tesis aislada XVII.1o.P.A.32 P (10a.) –que cita la parte recurrente en su escrito de agravios– en el sentido de que sólo *i)* la aprehensión o, bien, *ii)* la comparecencia de la persona investigada ante la autoridad judicial, son aptas para *interrumpir* el plazo de prescripción. Por ello, el escenario donde la persona indiciada no comparezca a la audiencia de formulación de imputación, se determine su sustracción de la acción de la justicia y se libre orden de aprehensión en su contra, permite que el lapso para la prescripción siga corriendo.

"...

"Sin embargo, este tribunal colegiado de Circuito parte de la premisa de que la acción penal se ejerce a través la solicitud para audiencia de formulación de imputación, por lo que *interrumpe* el plazo para la prescripción.

"En ese orden de ideas, lo procedente es denunciar la posible contradicción de tesis ante el Pleno del Decimoséptimo Circuito, en términos del artículo 226, fracción III, de la Ley de Amparo.

"**Caso a estudio**

"En el **caso concreto**, la autoridad responsable acompañó a su informe con justificación las constancias que a continuación se reproducen:

"...

"Esas documentales tienen eficacia demostrativa para tener por ciertos los siguientes datos, relevantes para el estudio del asunto:

"• El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Peligro Contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, presentó escrito ante el Juez de Control en turno del Distrito Judicial Bravos, en el que pidió se fijara día y hora para celebrar audiencia de formulación de imputación contra **********, por los delitos de usurpación de profesión, lesiones y responsabilidad profesional y técnica.

"• El dieciséis de mayo siguiente, la Jueza provisional de Control del Distrito Judicial Bravos señaló las doce horas con cuarenta y cinco minutos del diez de julio de ese año para que tuviera verificativo la audiencia solicitada.

"• El once de febrero de dos mil diecinueve, el fiscal mencionado solicitó al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, librara orden de aprehensión contra **********, con el propósito de lograr su comparecencia a la audiencia de mérito.

"• La audiencia de que se trata se llevó a cabo el veintiséis del mes y año citados, en la que se formuló imputación a la persona aludida por los delitos

de lesiones imprudenciales y responsabilidad profesional y técnica, respecto de los hechos acontecidos el veintisiete de mayo de dos mil quince.

"• El uno de marzo de dos mil diecinueve se solicitó su vinculación a proceso por los delitos antes indicados, y en esa data se emitió el acto reclamado.

"Así, a pesar de que la fiscalía solicitó citación a audiencia para formular imputación a la parte quejosa, a quien le atribuyó los delitos de: *i)* usurpación de profesión, *ii)* lesiones y *iii)* responsabilidad profesional y técnica, lo cierto es que en el acto reclamado sólo se le vinculó a proceso por los últimos dos. De ahí que sólo se examinarán las reglas de la prescripción respecto de ellos, por ser el aspecto que le depara perjuicio.

"Máxime que así estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 65/2008, en cuanto a que el plazo para que opere la prescripción está condicionado a la conducta típica que se atribuya en la etapa procesal en análisis. Jurisprudencia que dice:

"'PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PARA SU CÓMPUTO DEBE ATENDERSE A LA PENALIDAD APLICABLE AL DELITO ESTABLECIDO EN CADA FASE QUE INTEGRA EL PROCEDIMIENTO PENAL.'

"Cabe establecer que el delito de **lesiones** se le imputó a título de **imprudencia** conforme al artículo 18, fracción II, del Código Penal local, y en ese sentido se vinculó a proceso. Por ello, la pena de prisión correspondiente en términos del numeral 73, párrafo primero, del mismo código para los delitos imprudenciales es de seis meses a cinco años de prisión. Su **media aritmética es de dos años, ocho meses**. Y para el delito de **responsabilidad profesional y técnica**, por su parte, el artículo 318 del código en cita **no establece pena de prisión**, aun a título doloso.

"La participación atribuida –y reconocida así en el auto de vinculación, en grado probable– fue como coautor, de conformidad con las fracciones I y III del numeral 21 del propio código, por lo cual no existe alguna regla especial en cuanto a su punibilidad.

"Debe acotarse que, conforme a la tesis aislada que postuló la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Séptima Época y que más adelante se transcribe, la figura prevista en el artículo 228 del Código Penal Federal no constituye propiamente un delito, sino una agravante al que resulte consumado, en función de una circunstancia personal: la profesión.

"'MÉDICOS, AGRAVANTE DE LA PENA DE OTRO DELITO COMETIDO POR LOS, Y NO DELITO AUTÓNOMO.'

"En el mismo sentido existe el siguiente criterio aislado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte y que a continuación se inserta:

"'RESPONSABILIDAD MÉDICA. CIRCUNSTANCIA AGRAVADORA Y NO TIPO PENAL AUTÓNOMO.'

"Ello es relevante en la medida que el precepto que se interpretó en esos criterios es esencialmente igual a la conducta atribuida a la parte quejosa bajo la denominación de responsabilidad profesional y técnica, enunciada por el artículo 318 del Código Penal del Estado de Chihuahua.

"Ello se ve en el cuadro siguiente:

"...

"Por tanto, si la conducta típica que se imputó al solicitante del amparo fue la de lesiones imprudenciales, entonces la sanción que prevé el artículo relativo a la responsabilidad profesional y técnica se trata de una agravante a aquélla.

"Esta consideración no implica hacer una reclasificación jurídica. En cambio, su utilidad radica exclusivamente en que, para contar el tiempo para que ocurra la prescripción, se debe acudir a las reglas aplicables para el delito de lesiones imprudenciales.

"En ese sentido, el Código Penal local sanciona el delito de que se trata con pena de prisión y su media aritmética es de dos años, ocho meses. Luego,

el plazo para su prescripción debe ser de tres años, puesto que –como quedó establecido previamente– no puede ser menor. Por ello, ese es el lapso que debe transcurrir para que opere dicha figura jurídica en el caso singular, a partir de que se haya consumado la conducta.

"Sobre esa base, este tribunal colegiado de Circuito concluye que **la acción penal se ejerció antes de que se materializara esa institución jurídica**.

"Ello, porque los hechos por los que se investigó al ahora disconforme, sucedieron el veintisiete de mayo de dos mil quince. De ahí que el lapso de tres años para que prescribiera la acción penal feneció el veintiséis de mayo de dos mil dieciocho. Sin embargo, el agente del Ministerio Público solicitó hora y fecha para celebrar audiencia de formulación de imputación el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, esto es, previo a que venciera el plazo de que se trata.

"Luego, si la legislación procesal prevé que la solicitud de citación a audiencia de formulación de imputación es la forma de ejercer la acción penal, entonces es incongruente considerar –como propone la parte recurrente– que esa solicitud no interrumpe la prescripción de la pretensión punitiva, toda vez que sería tanto como estimar que el derecho prescribe mientras se ejerce.

"De ahí que, al haberse interrumpido el plazo para la prescripción con la solicitud de audiencia, el cómputo volvió a iniciar a partir de esa data. Así, se tornan irrelevantes las circunstancias de que la orden de aprehensión se solicitó con posterioridad a que venció el plazo para la prescripción de la acción penal y que la audiencia se verificó todavía después –nueve meses y veintiséis días a partir de la solicitud para la audiencia de formulación de imputación–. De estimar lo contrario, se otorgaría a la persona imputada la facultad para disponer de la prescripción de la acción penal, pues bastaría su incomparecencia a la audiencia respectiva para que ello ocurriera. También significaría sancionar a la autoridad ministerial por causas no atribuibles a ésta –como sería que el tribunal de control fijara una fecha lejana para verificar la audiencia dadas sus cargas de trabajo– lo cual desnaturalizaría la figura de la prescripción, cuyo propósito –como ya se indicó– es sancionar la inactividad de la fiscalía.

"Como corolario, fue correcta la decisión alcanzada por el Juez de Distrito.



"Por último, este tribunal colegiado de Circuito no advierte queja deficiente que suplir en relación con lo decidido por el Juez de Distrito acerca del acto reclamado, el cual satisfizo los criterios de forma y fondo para su dictado.

"**Decisión**

"En esa tesitura, ante lo **infundado** de los agravios, lo procedente es **confirmar** la negativa de amparo decretada en la sentencia recurrida."

B. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión penal 139/2016, en sesión de cuatro de julio de dos mil dieciséis.

"Ahora bien, es importante tener en cuenta, que de acuerdo al contenido de la demanda de amparo, como se asentó líneas precedentes, el quejoso reclamó la orden de aprehensión que fue solicitada por el agente del Ministerio Público en contra de **********, por el delito previsto en el artículo 329 del Código Penal del Estado, que está dentro del capítulo denominado elaboración o alteración y uso indebido de placas engomados (sic) y documentos de identificación de vehículos automotores.

"Bajo este supuesto, el Juez de Distrito sí se encontraba obligado a estudiar aun de manera oficiosa el tema de fondo relativo a la prescripción de la acción penal.

"Esto es, debió haber estudiado la demanda como un todo, sin dividirla, y entonces entrar al estudio de la figura de la prescripción de oficio alegada por el quejoso.

"El mandamiento de mérito encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 62/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que se identifica con número de registro digital: 192973, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,* Tomo X, noviembre de 1999, visible en la página 316, que a la letra dice:

"'PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y OFICIOSO.'

"El tema de la prescripción fue abordado por el a quo Federal, con motivo del concepto de violación planteado por la parte quejosa.

"Al respecto, consideró:

"...

"El Tribunal Colegiado en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, supliendo la expresión de los agravios planteados por la parte recurrente, considera que en el caso, efectivamente se extinguió la acción penal por prescripción y que por ende correspondía a la Juez de garantía acceder a la petición del defensor llevada a cabo en audiencia de diez de junio de dos mil quince.

"Para estar en posibilidad de explicar las razones en que se apoya la conclusión que antecede, es necesario tener en cuenta lo que disponen los artículos 105, 106, 107, 108, 111, 113, 114 y 115 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, los cuales expresan lo siguiente:

"...

"Ahora bien, el Juez de garantía del Distrito Judicial Morelos, que libró la orden de aprehensión en contra de **********, por el delito previsto en el artículo 329 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, señaló lo siguiente:

"...

"Partiendo de estas consideraciones, contrario a lo resuelto en la audiencia de diez de junio de dos mil quince, se estima que en el caso no resulta aplicable lo previsto por el artículo 115 del Código Penal del Estado, que la Juez de garantía tomó en cuenta para rehusarse a decretar la extinción de la acción penal por prescripción.

"En efecto, la prescripción es personal y extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad, y para ello bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley.

"Asimismo el delito previsto en el artículo 329 del Código Penal del Estado de Chihuahua, no se encuentra dentro de aquellos que han sido estimados como imprescriptibles.

"En relación a esta norma jurídica es oportuno destacar, que los hechos por los que se estimaron satisfechas las exigencias previstas en el artículo 16 constitucional para librar la orden de aprehensión cuestionada, ocurrieron aproximadamente a las dieciocho horas con quince minutos del **dieciocho de agosto de dos mil diez**, a la altura del kilómetro 53+200 del camino nacional (45) México-Ciudad Juárez, tramo Chihuahua entronque el Sauz, cuando al percatarse de un automóvil de la marca Volkswagen tipo Jetta color negro, con placas de circulación ********** para el Estado de Chihuahua, el cual excedía los límites de velocidad, por lo cual procedieron a marcarle el alto respectivo, y al entrevistar al conductor y solicitarle la exhibición de la documentación del automotor, éste manifestó que tenía placas sobrepuestas, ante ello procedieron a verificar el padrón vehicular, detectando que fueron dotadas para un automóvil de la misma marca y línea, pero modelo mil novecientos ochenta y seis, con número de serie **********, el cual correspondía físicamente con el número que se encontraba en el tablero del automotor, sin embargo, al verificar el número de serie confidencial el cual se encontró en la pared de fuego o bota-aguas, le corresponde el diverso número **********, relativo al automotor modelo mil novecientos noventa y uno.

"Ahora bien, el artículo 329 del Código Penal del Estado de Chihuahua, vigente en la época de los hechos antes detallados, establecía lo siguiente:

"...

"El dieciocho de diciembre de dos mil trece, se reformó el artículo en comento, para señalar:

"...

"De lo anterior se desprende que no obstante la reforma descrita, la conducta relativa a la posesión y utilización de placas de circulación continuó siendo sancionada como delito, sin embargo, a partir del dieciocho de diciembre

de dos mil trece, la pena fue reducida, ya que originalmente se previó una sanción de dos a seis años, y en la actualidad se aplica de dos a cinco; en tal virtud, la última señalada es la que debe servir de parámetro para el cómputo de la prescripción y no la que fue tomada en cuenta por la Juez de garantía para resolver, pues al respecto refirió que 'el plazo medio aritmético es de la pena que debiera establecerse, en este caso cuatro años.'

"Aunado a lo expuesto, se reitera que la prescripción es de análisis oficioso; asimismo, los plazos para que opere serán continuos; en ellos se considerará el delito con sus modalidades y en el caso, al tratarse de un delito instantáneo, se contará a partir del momento en que el mismo quedó consumado.

"Cuando se trata de un delito previsto con una sanción privativa de libertad, prescribe en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, incluidas las modalidades del delito cometido, pero en ningún caso será menor de tres años.

"En otro aspecto, la prescripción de la pretensión punitiva **se interrumpe** con la aprehensión del imputado o su comparecencia ante la autoridad judicial, si en virtud de la misma queda a su disposición.

"El plazo de prescripción volverá a correr, a partir del día en que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, si se encuentra privado de libertad.

"Fuera de esta circunstancia, volverá a correr en un plazo igual al de la medida cautelar impuesta; si la misma no estuviera determinada en tiempo, será en un plazo de cuatro meses. Si no se hubiese decretado medida cautelar, **el plazo volverá a correr a partir de su última comparecencia ante la autoridad que procesalmente lo tuviera a su disposición**.

"Ahora bien, el artículo 115 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, hace referencia a la Suspensión de la Prescripción, y para ello, prevé diversas hipótesis que por su naturaleza es posible establecer que se trata de procedimientos en los que el imputado se encuentra judicializado, esto es, que ya compareció ante un Juez de garantía.

"Dentro de estos casos se encuentra a manera de ejemplo el trámite del procedimiento de extradición internacional o con entidades federativas o el distrito federal; cuando se toma un criterio de oportunidad; por la suspensión del proceso a prueba; y por formas alternativas de justicia.

"Luego, el tribunal considera que la fracción III de dicho numeral, en la que se prevé: 'III. Por la declaración formal de que el imputado se ha sustraído a la acción de la justicia. En este caso, el término de la suspensión no podrá exceder de un tiempo igual al de la prescripción de la acción; sobrevenido éste, continuará corriendo ese plazo.' de igual manera se vincula con tales procedimientos.

"Se explica.

"Para que se actualice la hipótesis antes descrita, en principio, debe estarse dentro de alguno de los supuestos en los que el legislador previó la suspensión del procedimiento, esto es, por ejemplo en la extradición internacional, la adopción de un criterio de oportunidad, por la suspensión del proceso a prueba, o bien dentro de alguna forma alternativas de justicia; luego, la posibilidad de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia a que se refiere la porción normativa, se actualiza y vincula únicamente con tales procedimientos especiales y modos alternos de terminar con la causa penal.

"Veamos, el tribunal manifiesta que con las disposiciones del Código de Procedimientos Penales del Estado, puede constatar la coherencia de la conclusión antes señalada, ya que el artículo 209, dispone:

"...

"En este sentido, cuando el imputado no comparece a la audiencia de formulación de imputación y se determina que se sustrajo de la acción de la justicia, o bien, cuando teniendo en cuenta esta condición procesal se libra una orden de aprehensión, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 161 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua, produce como único efecto, que el término de la prescripción continúe transcurriendo, pero no se traduce en una forma de suspensión del mismo.

"Así, bajo tales hipótesis, se reitera, no se suspende la causa en la etapa de investigación, tampoco implica que el imputado se encuentre judicializado, contrario a ello, es con motivo del mandamiento judicial, que se activa el poder del Estado para ejercer la búsqueda de la persona, es decir, la acción persecutoria prevista en el artículo 21 de la Constitución Federal.

"Cabe comentar que es criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecer que la prescripción de la acción penal, supone una inactividad del Ministerio Público en relación con su facultad, durante todo el tiempo que la ley señala como suficiente para su extinción, esto es, representa una condición objetiva necesaria para que se ejerza el poder punitivo estatal, cuyo fundamento radica no sólo en la autolimitación del Estado para ejercer su poder sancionador, sino también en la seguridad que todas las personas deben tener ante éste.

"Al final de cuentas es brindar certeza jurídica al gobernado.

"Además se considera, que la prescripción de la acción penal, más que un beneficio para el inculpado, constituye una sanción para la autoridad ministerial ante su inactividad o deficiente desempeño, porque la potestad sancionadora del Estado no puede extralimitarse del tiempo prefijado que condiciona su validez. Precisamente en aras de velar por dicha certeza jurídica.

"Por este motivo, la regla aplicable es la prevista en el artículo 114 del Código Penal del Estado; dispositivo que establece: la prescripción de la pretensión punitiva se **interrumpe con la aprehensión del imputado** o su comparecencia ante la autoridad judicial, si en virtud de la misma queda a su disposición.

"Al respecto, resulta aplicable en la parte que interesa, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 15/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,* Décima Época, que se identifica con el número de registro digital: 2003877, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, visible en la página 497, que a la letra dice:

"'PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O DE COMPA-

RECENCIA NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPERE AQUÉLLA, SIN EMBARGO, SI SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN, EL TIEMPO QUE ÉSTA SUBSISTA DEBERÁ DESCONTARSE DEL NECESARIO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y PUEBLA).'

"También robustece lo expuesto, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación,* Quinta Época, que se identifica con el número de registro digital: 299382, Tomo CVI, visible en la página 1446, que a la letra dice:

"'PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL (LEGISLACION DE JALISCO).'

"Es importante enfatizar que en el caso, la Juez de garantía en la audiencia acogió el argumento de la defensa en cuanto a que desde el veinticuatro de marzo de dos mil once, diverso resolutor, cuando pretendía llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación, declaró la sustracción de la acción de la justicia por parte de **********.

"Asimismo, el Ministerio Público para apoyar sus razonamientos en cuanto a la aplicación del artículo 115, fracción III, del Código Penal del Estado, citó aplicable al caso, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito que se identifica con el número XVII.2o.P.A.15 P (10a.), Décima Época, con el número de registro digital: 2009266, publicado en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,* Libro 18, mayo de 2015, Tomo III, visible en la página 2291, que a la letra dice:

"'PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EL LIBRAMIENTO DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA EL INCULPADO POR NO ACUDIR ANTE EL JUEZ DE GARANTÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, NO SUSTITUYE IMPLÍCITAMENTE A LA DECLARACIÓN FORMAL DE QUE ÉSTE SE HA SUSTRAÍDO A LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DEL CÓMPUTO DE AQUÉLLA.'

"Además, de la tesis 5355 del Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, Séptima Época, que se identifica con el número de registro digital: 910296, Tomo II, Penal, P.R. TCC, visible en la página 2754, que a la letra dice:

"'PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, SUSPENSIÓN DE LA.'

"Con base a todo lo anterior, el tribunal tiene en cuenta que al momento en que la Juez de garantía reanuda la audiencia, entre otras consideraciones apoya su determinación en que '*en el caso particular ha ocurrido se encontraba suspendido en virtud de la declaratoria de sustracción de la justicia*', afirmación con la que se estima acogió lo expresado por el Ministerio Público; sin embargo, la no comparecencia a la formulación de imputación y en su caso el libramiento de la orden de aprehensión correspondiente, dejan sub júdice la continuación del procedimiento hasta la aprehensión del imputado, pero no lo suspenden para efectos de la prescripción.

"Ahora bien, el Constituyente ha diseñado supuestos jurídicos bajo la cobertura de una regulación especializada en materia penal, en los que la actuación del Estado debe mostrarse más represiva con el fin de lograr el enjuiciamiento y reparaciones relacionados con ciertas conductas delictivas que por su impacto social dentro del ámbito nacional e internacional, han merecido un tratamiento distinto.

"Sobre el particular el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, penúltimo párrafo dispone, que si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro Juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal.

"De igual manera, el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone una regulación distinta en relación con la figura de la prescripción tratándose de las responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, y patrimonial del Estado, expresando:

"...

"Otro supuesto que es objeto de un tratamiento diferente, son las figuras delictivas imprescriptibles.

"El veintidós de abril de dos mil dos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los de Lesa Humanidad, a la que México se encuentra vinculada, que en sus artículos I y IV, dispone:

"...

"Al ratificar la Convención, el Gobierno de México formuló la declaración interpretativa siguiente:

"...

"Por su parte, el artículo 105 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, reproducido líneas precedentes, establece que tratándose de los delitos de extorsión; desaparición forzada de personas; tráfico de influencias, previsto en el artículo 265; cohecho, en el supuesto que prevé el artículo 269, fracción II; peculado, en la hipótesis señalada en el artículo 270, fracción II; concusión, de acuerdo con el artículo 271, fracción II; homicidio calificado; tortura y, enriquecimiento ilícito, de acuerdo con el numeral 272; así como aquellos previstos en los artículos 171, 172, 173, 174, 175, 178 y 184 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, cometidos en contra de personas menores de edad o de las que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de resistirlo, son imprescriptibles.

"La violación a los derechos humanos que se tutelan en los casos materia de tratamiento especial antes enunciados, es potencialmente superior en grado en la lesión que producen otros ilícitos; de ahí que para que el Estado Mexicano cumpla con los deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario acotar la regulación de la figura de la prescripción, ya que por virtud de la misma se produce la extinción de la acción penal, las penas y medidas de seguridad.

"A manera de ejemplo, se cita el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se precisó que tratándose del delito de desaparición forzada de personas, el plazo para que opere la prescripción inicia hasta que aparece la víctima o se establece su destino.

"Tales consideraciones derivan de la tesis P./J. 87/2004, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, que se identifica con el número de registro digital: 180653, Tomo XX, septiembre de 2004, visible en la página 1121, que a la letra dice:

"'DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL PLAZO PARA QUE OPERE SU PRESCRIPCIÓN INICIA HASTA QUE APARECE LA VÍCTIMA O SE ESTABLECE SU DESTINO.'

"Como puede apreciarse, a través del citado criterio se ha establecido un entorno jurídico en el que resulta viable garantizar el respeto y protección de los derechos humanos proyectados en un ámbito en el que no es relevante la temporalidad, sino aspectos distintos – la localización de la víctima–; asimismo, un campo espacial más ensanchado, esto es, no en relación a la persona individual, sino como parte de un núcleo social a nivel nacional e internacional.

"Inclusive, dentro del ámbito del derecho de acceso a la información la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha conceptualizado los delitos o crímenes de lesa humanidad, bajo las siguientes consideraciones:

"Tesis 1a. X/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, que se identifica con el número de registro digital: 2000209, Libro V, febrero de 2012, Tomo 1, visible en la página 650, que a la letra dice:

"'DELITOS O CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE LOS INVESTIGA.'

"De ahí que la determinación de estimar imprescriptibles algunos delitos, se traduce en una garantía para resguardar el acceso a la justicia de las víctimas y la sociedad en general, como mecanismo que fortalece el estado democrático de derecho de México.

"Es ilustrativo al caso, la tesis 1a. CCCXLII/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,* Décima Época, que se identifica con el nú-

mero de registro digital: 2010414, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, visible en la página 949, que a la letra dice:

"'ACCESO A LA JUSTICIA. EL DEBER DE REPARAR A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ES UNA DE LAS FASES IMPRESCINDIBLES DE DICHO DERECHO.'

"Teniendo en cuenta lo anterior, se reitera que la no comparecencia a la formulación de imputación y en su caso el libramiento de la orden de aprehensión correspondiente, fuera de los supuestos de tratamiento especial enunciados, dejan sub júdice la continuación del procedimiento hasta la aprehensión del imputado, pero no lo suspenden para efectos de la prescripción.

"Se advierte, que el espíritu del legislador al redactar el artículo 115 del Código Penal del Estado de Chihuahua, fue acotar que dentro de los procedimientos especiales y formas alternas de solución de conflictos, que materialmente producen una suspensión del procedimiento por sujetar al imputado a ciertas condiciones procesales, es dable que se actualice la figura de la sustracción de la justicia y por este motivo se decreta la prescripción de tal condición suspensiva, que es distinta a la prescripción de la sanción punitiva que nos ocupa.

"Tal aseveración se robustece de acuerdo a la última parte del artículo 115, fracción IV del citado ordenamiento legal, en la que se dispone:

"...

"El Ministerio Público durante la audiencia leyó las primeras líneas del criterio del Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito que se identifica con el número XVII.2o.P.A.15 P (10a.), Décima Época, con el número de registro digital: 2009266, publicado en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,* Libro 18, mayo de 2015, Tomo III, visible en la página 2291, antes descrito en que apoyó su razonamiento, que se identifica con el rubro: 'PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EL LIBRAMIENTO DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA EL INCULPADO POR NO ACUDIR ANTE EL JUEZ DE GARANTÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, NO SUSTITUYE IMPLÍCITAMENTE A LA DECLARACIÓN FORMAL DE QUE ÉSTE SE HA SUSTRAÍDO A LA

ACCIÓN DE LA JUSTICIA, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DEL CÓMPUTO DE AQUÉLLA.', señalando al respecto lo siguiente:

"...

"La lectura incompleta de la tesis en comento, produjo la errónea apreciación en la Juez de garantía en cuanto a que el imputado se sustrajo de la acción de la justicia por no comparece a la cita a la audiencia de formulación de imputación, y esto produjo la suspensión del procedimiento; sin embargo, el tribunal colegiado fue claro al sostener que esta condición únicamente da lugar a la interrupción del plazo para la prescripción.

"Cabe destacar que el diverso criterio del Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, tampoco apoyaba la petición del Ministerio Público, atendiendo a que en la legislación sustantiva y procesal penal para el Estado de Chihuahua aplicada por la Juez de garantía, no se establece como causa de suspensión del procedimiento la sustracción de la acción de la justicia.

"Sólo resta mencionar que el Juez de garantía no tomó en cuenta lo previsto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se dispone que 'A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna' –interpretado a contrario sensu–, toda vez que resultaba benéfico al imputado, aplicar la penalidad de dos a cinco años que actualmente contempla el artículo 329 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que daría un término medio aritmético de tres años y medio, en lugar de los cuatro años que sirvieron de parámetro para contabilizar la prescripción.

"De ahí que al llevar a cabo tal precisión, el tribunal encuentra que la prescripción de la acción punitiva en realidad se actualizó desde el dieciocho de enero de dos mil catorce, esto es, seis meses antes de lo que había señalado el Juez de garantía.

"Por ende, a la fecha en que se emite esta sentencia resulta evidente que se extinguió la acción penal por prescripción.

"Lo expuesto conduce a estimar fundados los agravios suplidos en la queja deficiente, que resulta bastante para modificar la sentencia de amparo y conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el siguiente efecto:

"Que el Juez de garantía emita una nueva resolución, en la que determine prescrita la acción punitiva ejercitada por el Ministerio Público en contra de **********, por el delito previsto en el artículo 329 del Código Penal para el Estado de Chihuahua y ordene el sobreseimiento en la causa penal 1978/2010; en consecuencia, la cancelación de la orden de aprehensión de dieciocho de abril de dos mil once.

"No pasa inadvertido para este órgano colegiado, que la Juez de garantía que resolvió respecto de la solicitud de sobreseimiento, es una funcionaria distinta al Juez que libró la orden de aprehensión, lo cual no puede entenderse como impedimento para el cumplimiento del fallo protector, toda vez que en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades.

"Entonces, lo ordenado se encuentra dentro de las atribuciones de cualquiera de los jueces de garantía, no obstante que uno de ellos no hubiera sido llamado como autoridad responsable.

"Finalmente y dado el sentido del fallo, resulta innecesario analizar el resto de los agravios planteados, dado que la concesión del amparo produce al quejoso el mayor beneficio que es posible alcanzar al actualizarse una causa de sobreseimiento en el proceso penal.".

11. CUARTO.—**Existencia de la contradicción de tesis.** Es de atenderse la jurisprudencia P./J. 72/2010 (9a.),[1] del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS

[1] *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,* Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, con el número de registro digital: 164120.

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."

12. De dicho criterio se desprende que para que exista la contradicción de criterios, es necesario que los órganos involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan:

I. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

II. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.

13. Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo que los criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, sobre todo cuando se trate de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos contendientes, pues lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, salvo cuando la variación o diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.

14. Por tanto, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, porque no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los órganos en contienda, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

15. Además, es pertinente destacar que es innecesario que los criterios divergentes estén plasmados en tesis redactadas y publicadas en términos de

los artículos 218 a 220 de la Ley de Amparo, sino que basta que se encuentren en las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano contendiente de que se trata.

16. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 94/2000 (9a.) (sic),[2] de la Segunda Sala, cuyo título y subtítulo (sic) es: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY."

17. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que como la finalidad de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos a fin de generar seguridad jurídica; y para que exista una contradicción de tesis, debe verificarse:

I. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

II. Que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

III. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

18. Lo expuesto deriva de la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, (10a.),[3] de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRA-

[2] *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,* Novena Época, Tomo XII, noviembre de 2000, página 319, con el número de registro digital: 190917.
[3] *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,* Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 122, registro 165077.

DICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."

19. En ese tenor, **se tiene por cumplido el primero** de los requisitos necesarios para la existencia de la contradicción de tesis, a saber, que los tribunales hayan ejercido su arbitrio judicial para resolver una cuestión litigiosa sobre un mismo punto de derecho, pues se advierte que los órganos jurisdiccionales contendientes examinaron un mismo problema jurídico, relacionado con **la prescripción de la acción penal y su interrupción** en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua.

20. Respecto al **segundo requisito**: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos**,** este Pleno de Circuito, considera que **también se encuentra satisfecho**, debido a que existe diferencia en la resolución adoptada por los Tribunales ante una misma situación jurídica, pues sobre el particular los Tribunales contendientes llegaron a soluciones contradictorias, en cuanto a la prescripción de la acción penal y su interrupción.

21. Como se puede advertir, el **Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito**, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, parte del supuesto que **se interrumpe la prescripción de la acción penal**, a partir de que el Ministerio Público **solicita fecha para la celebración de la formulación de la imputación** contra una persona, ya que la misma se puede considerar como una consignación ante el Juez de Control, en la que se ejercita dicha acción penal.

22. En cambio, el **Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito**, con sede en esta ciudad, considera que el plazo de la prescripción penal **se interrumpe con la aprehensión del imputado, o su comparecencia ante la autoridad judicial**, cuando se emite una orden de aprehensión en su contra, por no haber comparecido a la audiencia de formulación de imputación; esto es, **implícitamente** dicho Tribunal Colegiado **estimó** que **la solicitud** del Ministerio Público **de la audiencia de formulación de la imputación**, no tiene como efecto interrumpir la prescripción de la acción penal; con lo que se satisface el segundo de los requisitos, pues se advierte un **punto de toque y diferendo de criterios interpretativos.**



23. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 93/2006,[4] sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 2/2006-PL, que es del tenor siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO.—De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el Órgano Reformador de la Constitución pretendió remediar con la instauración del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición."

[4] *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,* Novena Época, Tomo XXVIII, julio de 2008, página 5, con el número de registro digital: 169334.

24. Cabe aclarar que si bien la denuncia de contradicción también se hizo respecto a la suspensión del plazo para la prescripción; sin embargo, sobre el particular no existe discrepancia entre ambos Tribunales Colegiados contendientes, debido a que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, no abordó dicho tópico, siendo analizado únicamente por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, con sede en esta ciudad; ante ello, no se advierte **punto de toque y diferendo de criterios interpretativos,** por lo que no será motivo de estudio por parte de este Pleno de Circuito.

25. En cuanto al **tercer requisito**, consistente en que **pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver**, debe decirse que el mismo también se cumple, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la siguiente pregunta:

26. ¿El Ministerio Público interrumpe la prescripción de la acción penal, cuando solicita audiencia para formular imputación, o bien, la interrupción sólo se logra con la aprehensión del imputado o su comparecencia ante la autoridad judicial, sin (sic) en virtud de la misma queda a su disposición?

27. Habiendo quedado acreditados los requisitos de procedencia de las contradicciones de tesis, se considera que en el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada, en atención a que los órganos colegiados abordaron el estudio de la misma cuestión jurídica y llegaron a diferentes conclusiones a través de argumentos distintos.

28. QUINTO.—**Determinación del criterio que debe prevalecer.** Debe subsistir con carácter de jurisprudencia, el criterio contenido en esta ejecutoria, de conformidad con los siguientes discernimientos.

29. Conforme al artículo 21, párrafo primero, constitucional,[5] al Ministerio Público le corresponde investigar delitos junto a la policía, bajo su conducción

[5] "**Artículo 21.** La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función."



y mando; en el párrafo segundo,[6] se establece que el ejercicio de la acción penal compete al Ministerio Público, con las excepciones previstas en la ley.

30. En la contradicción de tesis 83/2005-PS,[7] la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la ***acción penal*** es el derecho que tiene el Estado de acudir ante el órgano jurisdiccional para que aplique la ley; y el ***ejercicio de la acción penal*** se da cuando el Estado reclama al órgano jurisdiccional la aplicación de la ley, cuando le exige el reconocimiento de su derecho, del que tiene de acudir ante él para que aplique la ley a un hecho que estima delictuoso; tal como se establece en el artículo 21, párrafo, segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

31. Además, en dicha contradicción, se sostiene el criterio que la ***prescripción*** de la acción penal supone una inactividad del Ministerio Público con relación al derecho de persecución del cual es titular, durante todo el tiempo que la ley señala como suficiente para su extinción; por lo que el fundamento de la prescripción **radica** no sólo en la autolimitación del Estado para ejercer su poder represivo, sino también en la seguridad que todos los hombres deben tener ante el propio Estado.

32. En ese sentido, la **prescripción de la acción penal**, más que un beneficio para el imputado, constituye una consecuencia o sanción para la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos, ante su inactividad, como lo determina la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la contradicción de tesis anteriormente señalada.

33. El análisis sistemático de los artículos 105,[8] 106,[9] 108,[10] 114[11] y 115[12] del Código Penal del Estado de Chihuahua, permite establecer que la prescripción de la acción penal extingue la pretensión punitiva y la potestad de

[6] "**Artículo 21.** ...
"El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial."
[7] Resuelta el veintiocho de septiembre de dos mil cinco, bajo la ponencia de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
[8] "**Artículo 105. Efectos y características de la prescripción**
"La prescripción es personal y extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad, y para ello bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley.

ejecutar las penas y las medidas de seguridad, para lo cual bastará el transcurso del tiempo señalado en la ley; pero además, refiere a los delitos que son imprescriptibles; por lo que su resolución se emitirá de oficio o a petición de parte.

34. Además, prevén que los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva serán continuos, tomando en cuenta el delito con sus modalidades.

35. Se establecen los momentos a partir de cuándo comienzan a contarse los plazos de prescripción, dependiendo que el delito sea instantáneo; perma-

---

"Los delitos de extorsión; tráfico de influencias, previsto en el artículo 265; cohecho, en el supuesto que prevé el artículo 269, fracción II; peculado, en la hipótesis señalada en el artículo 270, fracción II; concusión, de acuerdo con el artículo 271, fracción II; homicidio calificado; tortura, y enriquecimiento ilícito, de acuerdo con el numeral 272; así como aquellos previstos en los artículos 171, 172, 173, 174, 175, 178 y 184 de este Código, cometidos en contra de personas menores de edad o de las que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de resistirlo, son imprescriptibles."

[9] "**Artículo 106. Prescripción de oficio o a petición de parte**

"La resolución en torno de la prescripción se dictará de oficio o a petición de parte."

[10] "**Artículo 108. Plazos para la prescripción de la pretensión punitiva**

"Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva serán continuos; en ellos se considerará el delito con sus modalidades y se contarán a partir de:

"**I.** El momento en que se consumó el delito, si es instantáneo;

"**II.** El momento en que cesó la consumación, si el delito es permanente;

"**III.** El día en que se realizó la última conducta, si el delito es continuado;

"**IV**. El momento en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si se trata de tentativa; y

"**V**. El día en que el Ministerio Público haya recibido el oficio correspondiente, en los casos en que se hubiere librado orden de reaprehensión o presentación, respecto del procesado que se haya sustraído de la acción de la justicia."

[11] "**Artículo 114. Interrupción de la prescripción**

"La prescripción de la pretensión punitiva se interrumpe con la aprehensión del imputado o su comparecencia ante la autoridad judicial, si en virtud de la misma queda a su disposición.

"El plazo de prescripción volverá a correr, a partir del día en que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, si se encuentra privado de libertad. Fuera de esta circunstancia, volverá a correr en un plazo igual al de la medida cautelar impuesta; si la misma no estuviera determinada en tiempo, será en un plazo de cuatro meses. Si no se hubiese decretado medida cautelar, el plazo volverá a correr a partir de su última comparecencia ante la autoridad que procesalmente lo tuviera a su disposición."

[12] "**Artículo 115. Suspensión de la prescripción**

"El cómputo de la prescripción se suspenderá:

"...

"**III**. Por la declaración formal de que el imputado se ha sustraído a la acción de la justicia. En este caso, el término de la suspensión no podrá exceder de un tiempo igual al de la prescripción de la acción; sobrevenido éste, continuará corriendo ese plazo."

nente; continuado; tentativa; o cuando el Ministerio Público reciba el oficio en caso de reaprehensión o presentación.

36. Dichos plazos podrán interrumpirse con la aprehensión del imputado o su comparecencia ante la autoridad judicial, sin que, en virtud de la misma quede a su disposición.

37. Sin embargo, el plazo de prescripción volverá a correr, a partir del día en que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, si se encuentra privado de libertad. Fuera de esta circunstancia, volverá a correr en un plazo igual al de la medida cautelar impuesta; si la misma no estuviera determinada en tiempo, será en un plazo de cuatro meses. Si no se hubiese decretado medida cautelar, el plazo volverá a correr a partir de su última comparecencia ante la autoridad que procesalmente lo tuviera a su disposición.

38. Asimismo, el cómputo de la prescripción se suspende, entre otros, por la declaración formal de que el imputado se ha sustraído de la acción de la justicia, en cuyo caso, el plazo de la suspensión no puede exceder del tiempo igual al de la prescripción de la acción, pero sobreviniendo éste, continuará corriendo ese plazo.

39. En consonancia, los artículos 274,[13] 275, párrafo, primero,[14] 276[15] y 278, fracción I,[16] del Código de Procedimientos Penales del Estado, establecen, en

[13] **"Artículo 274. Concepto de formulación de la imputación.**
"La formulación de la imputación es el acto procesal que corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público, mediante el cual comunica al imputado, en presencia del Juez, que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados."
[14] **"Artículo 275. Oportunidad para formular la imputación.**
"El Ministerio Público deberá formular la imputación en un plazo que no podrá exceder de ocho días cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial."
[15] **"Artículo 276. Solicitud de audiencia para la formulación de la imputación.**
"Si el Ministerio Público deseare formular imputación a una persona que no se encontrare detenida, solicitará al Juez la celebración de una audiencia, mencionando la individualización del imputado, de su defensor si lo hubiese designado, la indicación del delito que se le atribuyere, la fecha, lugar y modo de su comisión y el grado de intervención del imputado en el mismo.

principio, que **la formulación de la imputación** es el acto procesal que corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público, mediante el cual, comunica al imputado que desarrolla una investigación en su contra, en relación con uno o más hechos, ante la presencia judicial; la cual se llevará a cabo en el plazo que el propio ordenamiento señala.

40. Cuando el Ministerio Público estime oportuno formular la imputación a una persona que no estuviera detenida, solicitará al juzgador la celebración de una audiencia, a la que será citado el imputado, con la indicación que deberá comparecer acompañado de su defensor, con el apercibimiento con que de no acudir, se ordenará su aprehensión.

41. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,[17] sostuvo que cuando el Ministerio Público realiza una investigación en contra de una persona respecto de uno o más hechos señalados como delitos, y dicho servidor público considera oportuno formalizar el procedimiento a través de la intervención judicial, para que en presencia del Juez se le haga del conocimiento del imputado la investigación condigna y, subsidiariamente poder tener la posibilidad de solicitarle a la referida autoridad jurisdiccional la aplicación de las medidas cautelares personales que procedan, debe solicitar al juzgador la celebración de una audiencia para que el Ministerio Público le comunique al investigado la "*formulación de la imputación.*"

42. Cabe hacer mención que la aludida Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 119/2018,[18] al analizar, entre otros tópicos, la acusación penal a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales, sostuvo lo siguiente:

"A esta audiencia se citará al imputado, a quien se le indicará que deberá comparecer acompañado de su defensor. Al imputado se le citará bajo el apercibimiento de que, en caso de no comparecer, se ordenará su aprehensión."

[16] "**Artículo 278. Efectos de la formulación de la imputación.**

"La formulación de la imputación producirá los siguientes efectos:

"**I.** Suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal."

[17] Contradicción de tesis 97/2013, resuelta el catorce de agosto de dos mil trece.

[18] Resuelto el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, bajo la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.

"**Acusación del Ministerio Público**

"104. Ahora bien, en relación con la acusación ministerial, el artículo 21, segundo párrafo, de la Constitución Federal,[19] establece que la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público.

"105. En tanto que, el precepto 102, apartado A –*parte que interesa*– dispone que el Ministerio Público Federal tendrá la encomienda de la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal, lo que comprende solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos, hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita, así como pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.

"106. Por su parte, los artículos 127, 131, fracción XVI y 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan:

"…

"107. De conformidad con los preceptos citados, el ejercicio de la acción penal ante los tribunales es una obligación que corresponde al Ministerio Público. Esta atribución tiene lugar cuando una vez concluida la fase de investigación complementaria si de los antecedentes de la investigación se obtienen medios de prueba idóneos y suficientes que justifiquen la existencia del delito y la responsabilidad penal de la persona imputada, la autoridad ministerial estará en aptitud de ejercer la acción penal correspondiente, lo que **materializará a través de la acusación**, misma que sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso.

---

[19] "**Artículo 21**…
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al ministerio público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial."

"108. De esta manera, la acusación es el acto procesal por virtud del cual el Ministerio Público decide ejercer la pretensión punitiva del Estado contra una persona que probablemente intervino en la comisión de un hecho considerado por la ley como delito, con la finalidad de que se apliquen las sanciones penales que procedan en caso de que se declare su culpabilidad por la autoridad judicial. Asimismo, la acusación es un acto necesario para la continuación del proceso penal, en virtud de que una vez que el Ministerio Público formula su acusación dará inicio a la etapa intermedia.

"109. Ahora bien, esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis **********, apuntó que la acción penal es el derecho que tiene el Estado de acudir ante el órgano jurisdiccional para que aplique la ley a un hecho que estima delictuoso. **El ejercicio de la acción penal exige una investigación previa del hecho respecto del cual se solicitará la aplicación de la ley**; ello lo hace mediante la búsqueda de datos que acrediten la existencia del delito y la responsabilidad de quien en él participa, todo lo cual se realiza durante la etapa de la averiguación previa.

"110. También sostuvo que la división competencial es clara en el sentido de que el único órgano del Estado facultado para intervenir como parte acusadora en un proceso penal es el Ministerio Público, en su carácter de representante social.

"111. Asimismo, al resolver el amparo en revisión **********,[20] esta Primera Sala señaló que el objetivo histórico del artículo 21 de la Constitución Federal es asignar la facultad de investigación y persecución del delito a una sola institución, a fin de alcanzar imparcialidad, objetividad y evitar que una multiplicidad de autoridades formen parte de la indagación de los hechos que pudieran o no derivar en una conducta antijurídica. El Ministerio Público se concibe en-

[20] Resuelto en sesión de veintiséis de junio de dos mil trece, por mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Ponente), Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo (Presidente), con el voto en contra del Ministro José Ramón Cossío Díaz, quien se reservó su derecho de formular voto particular.



tonces como único órgano investigador y acusador y como consecuente representante social en el proceso penal.

"112. Derivado de lo anterior, resulta útil señalar que los efectos que produce la acusación del Ministerio Público son:

"a. La imposibilidad de reabrir la etapa de investigación;

"b. Inicio de la etapa intermedia o de preparación a juicio;

"c. La fijación de la *litis* que será objeto de discusión en la audiencia de debate ante el tribunal de enjuiciamiento; y

"d. La fijación de los medios de prueba con los que se pretende acreditar el delito y la responsabilidad penal del procesado, así como las sanciones que correspondan."

39. De dicha ejecutoria derivó la tesis 1a. LXXXI/2019 (10a.),[21] de título, subtítulo y texto siguientes:

"EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN CORRESPONDE AL FISCAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 21, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Esta atribución tiene lugar una vez concluida la fase de investigación complementaria cuando de los antecedentes de la investigación se obtienen medios de prueba idóneos y suficientes que justifiquen la existencia del delito y la responsabilidad penal de la persona imputada, por lo que la fiscalía estará en aptitud de ejercer la acción penal materializada a través de la acusación, que sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso. De esta manera, la acusación es el acto procesal por virtud del cual el Fiscal decide ejercer la pretensión punitiva del

[21] *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,* Décima Época, Libro 70, Tomo I, septiembre de 2019, página 116, con número de registro digital: 2020665.

Estado contra una persona que probablemente intervino en la comisión de un hecho considerado por la ley como delito, con la finalidad de que se apliquen las sanciones penales que procedan en caso de que se declare su culpabilidad por la autoridad judicial. Asimismo, la acusación es un acto necesario para la continuación del proceso penal, en virtud de que una vez que se formula dará inicio a la etapa intermedia. Derivado de lo anterior, resulta útil señalar que los efectos que produce la acusación son: a) la imposibilidad de reabrir la etapa de investigación; b) el inicio de la etapa intermedia o de preparación a juicio; c) la fijación de la litis que será objeto de discusión en la audiencia de debate ante el tribunal de enjuiciamiento; y d) la fijación de los medios de prueba con los que se pretende acreditar el delito y la responsabilidad penal del procesado, así como las sanciones que correspondan. En ese tenor, el Fiscal no puede delegar dicha facultad en otro ente o persona –con excepción de la acción penal por particulares– y en caso de no formularla, ello conducirá a que se extinga la acción penal."

41. (sic)El anterior marco jurídico permite sostener que **el ejercicio de la acción penal**, ante los tribunales (con las excepciones de ley), corresponde al Ministerio Público, la cual tiene lugar cuando **una vez concluida la fase de investigación** complementaria si de los antecedentes de la investigación se obtienen medios de prueba idóneos y suficientes que justifiquen la existencia del delito y la responsabilidad penal de la persona imputada, la autoridad ministerial estará en aptitud de **ejercer la acción penal** correspondiente, lo que **materializará a través de la acusación**, misma que sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el **auto de vinculación a proceso**, con lo que da inicio a la etapa intermedia.

42. No obstante, *–como lo precisó el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua–* conforme al artículo 276 del Código de Procedimientos Penales del Estado, **la sola solicitud de audiencia para formular imputación** obliga a individualizar al imputado, a su defensor si lo ha designado y se indica el delito, lo que constituye el inicio del ejercicio de la acción penal.

43. Por tanto, es presupuesto procesal indispensable para que el Ministerio Público, materialice el ejercicio de la acción penal a través de la acusación, en caso de que la persona a la que pretende imputar un hecho que la ley reviste

caracteres de delito, no se encuentra detenida, por ser una clara intención de ejercitar la acción penal, lo que es acorde incluso con lo previsto en el artículo 211, penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales.[22]

44. Entonces cuando el Ministerio Público solicita audiencia para formular imputación a una persona, interrumpe el plazo genérico de prescripción establecido en el artículo 105 del Código Penal del Estado de Chihuahua,[23] plazo que iniciará dependiendo de la clasificación de delitos, establecida en el artículo 108 del ordenamiento citado.

45. Interrupción entendida como la que provoca la pérdida del tiempo transcurrido hasta ese día y, por tanto, se inicia el cómputo de un nuevo plazo, desde cero.[24]

46. En ese sentido, independientemente de la forma en que realice la solicitud de audiencia para formular imputación –ya sea vía electrónica o por escrito del Ministerio Público–; no puede desconocerse que al igual que la actuación de la "consignación", denominación que fue acogida por el anterior sistema de justicia penal, conocido como tradicional, constituye el momento en el que se hace del conocimiento del Juez los resultados de la investigación inicial y que se consideran bastantes para formular la imputación.

47. Pensar lo contrario, se estaría sancionando al Ministerio Público por un tiempo que es ajeno a su función constitucional, sería tanto como sostener que un derecho prescribe mientras se ejerce.

---

[22] **"Artículo 211. Etapas del procedimiento penal**
"...
"La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. **El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial**, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación."

[23] Precepto legal que dispone que, para que opere la prescripción, bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley.

[24] Tal como lo precisó el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Ciudad Juárez.

48. Lo anterior, pues una vez presentada la solicitud de referencia, corresponde al órgano jurisdiccional llevar a cabo los trámites conducentes para la citación del imputado y, desde luego, la fijación de la fecha y hora en que tendrá verificativo la audiencia de formulación de imputación.

49. En tal hipótesis –interrupción de la prescripción–, el plazo para prescribir nuevamente empezará a contar a partir de que se actualice el supuesto que señala el artículo 108, fracción V, del Código Penal del Estado de Chihuahua,[25] el que dispone que el día que el Ministerio Público reciba el oficio correspondiente de reaprehensión o presentación, enunciado jurídico en el que también se debe comprender a la orden de aprehensión; o bien cuando se actualice cualquiera de los supuestos previstos en el segundo párrafo del artículo 114 del Código Penal del Estado de Chihuahua.[26]

50. No se desconoce el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 44/98,[27] en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que el término para prescribir nuevamente empezará a contar a partir del dictado de la orden de aprehensión correspondiente, sin embargo, dicho criterio no es aplicable, por existir disposición expresa en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua.

---

[25] **"Artículo 108. Plazos para la prescripción de la pretensión punitiva**
"Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva serán continuos; en ellos se considerará el delito con sus modalidades y se contarán a partir de:
"...
"**V**. El día en que el Ministerio Público haya recibido el oficio correspondiente, en los casos en que se hubiere librado orden de reaprehensión o presentación, respecto del procesado que se haya sustraído de la acción de la justicia."

[26] **"Artículo 114. Interrupción de la prescripción**
"...
"El plazo de prescripción volverá a correr, a partir del día en que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, si se encuentra privado de libertad. Fuera de esta circunstancia, volverá a correr en un plazo igual al de la medida cautelar impuesta; si la misma no estuviera determinada en tiempo, será en un plazo de cuatro meses. Si no se hubiese decretado medida cautelar, el plazo volverá a correr a partir de su última comparecencia ante la autoridad que procesalmente lo tuviera a su disposición."

[27] "ACCIÓN PENAL, PRESCRIPCIÓN DE LA (CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, VIGENTE HASTA EL SEIS DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS)."



51. Ahora bien, en el supuesto de que el Ministerio Público haya solicitado el otorgamiento de la orden de aprehensión, **el plazo de la prescripción** *–tal como lo precisó el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad–*, de conformidad en el artículo 114 del Código Penal del Estado, sólo **podrá interrumpirse con su aprehensión o comparecencia**, en los supuestos previstos en dicho precepto legal.

52. Esta interpretación es acorde con el objeto del proceso penal, consagrado en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,[28] para garantizar la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto surgido como consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía social entre sus protagonistas, tanto entre la persona imputada y la víctima u ofendido, en un marco de respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas, en términos del artículo 1 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua,[29] en concordancia con lo previsto en el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales,[30] pues de lo contrario se propicia impunidad.

---

[28] "**Artículo 20.** El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
"**A.** De los principios generales:
"**I.** El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;"

[29] **"Artículo 1. Finalidad del proceso.**
"El proceso penal tiene por objeto establecer la verdad histórica, garantizar la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto surgido como consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía social entre sus protagonistas, en un marco de respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas.
"Se entenderá por derechos fundamentales a los reconocidos en las Constituciones Federal y Local, en los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y en las leyes que de aquellas emanen."

[30] **"Artículo 2o. Objeto del Código**
"Este Código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte."

53. **Decisión.** Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio redactado con el título, subtítulo y texto siguientes:

54. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. SE INTERRUMPE CON LA SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO DE AUDIENCIA PARA FORMULAR LA IMPUTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

55. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el Ministerio Público interrumpe la prescripción de la acción penal, cuando solicita audiencia para formular la imputación, o bien, la interrupción sólo se logra con la aprehensión del imputado o con su comparecencia ante la autoridad judicial, si en virtud de la misma queda a su disposición, y llegaron a conclusiones diferentes, ya que uno sostuvo que se interrumpe porque se puede considerar como una consignación ante el Juez de Control en la que se ejercita la acción penal, mientras que el otro implícitamente resolvió que la interrupción ocurre con la aprehensión del imputado o con su comparecencia ante la autoridad judicial

56. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito considera que conforme al artículo 276 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua (vigente hasta el 12 de junio de 2016), la sola solicitud de la audiencia para formular la imputación obliga a individualizar al imputado, a su defensor, si lo ha designado, y se indica el delito, lo que constituye el inicio del ejercicio de la acción penal y, por tanto, es presupuesto procesal indispensable para que el Ministerio Público materialice el ejercicio de la acción penal a través de la acusación, por ser una clara intención de su ejercicio, lo que es acorde con lo previsto en el artículo 211, penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que la referida solicitud interrumpa el plazo genérico de prescripción establecido en el artículo 105 del Código Penal del Estado de Chihuahua, independientemente de la forma en que se realice.

57. Justificación: Lo expuesto es así, pues no puede desconocerse que al igual que la actuación de la "consignación", la indicada solicitud constituye el momento en el que se hacen del conocimiento del Juez los resultados de la investigación inicial y que se consideran bastantes para formular la imputación.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. LXXXI/2019 (10a.), de título y subtítulo: "EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN CORRESPONDE AL FISCAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 21, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", determinó que el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público y se materializa en la acusación; por tanto, no debe sancionarse al Ministerio Público por un tiempo que es ajeno a su función constitucional, lo que sería tanto como sostener que el derecho prescribe mientras se ejerce. En tal hipótesis –interrupción de la prescripción–, el plazo para prescribir nuevamente empezará a contar a partir de que el Ministerio Público reciba el oficio de aprehensión, reaprehensión, presentación o cualquiera de los supuestos previstos en el segundo párrafo del artículo 114 del Código Penal Estatal, el cual sólo podrá interrumpirse con la aprehensión del imputado o con su comparecencia ante a la autoridad judicial, si en virtud de la misma queda a su disposición. Esta interpretación es acorde con el objeto del proceso penal, consagrado en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

58. Es menester aclarar que, de conformidad con el artículo 226, último párrafo, de la Ley de Amparo, la presente determinación no afecta las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se dictaron las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

RESOLUTIVOS:

PRIMERO.—**Sí existe contradicción de tesis** entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad.

SEGUNDO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis sustentada por este Pleno del Decimoséptimo Circuito.

Notifíquese; remítase testimonio de la presente ejecutoria, a los Tribunales Colegiados de Circuito que sostuvieron los criterios contradictorios y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvieron, por mayoría de cuatro votos de los Magistrados Refugio Noel Montoya Moreno (ponente), José Elías Gallegos Benítez, María Teresa Zambrano Calero y Juan Carlos Zamora Tejeda. Disidentes: María del Carmen Cordero Martínez, Cuauhtémoc Cuéllar De Luna (presidente) y José Martín Hernández Simental, quienes formularán voto particular minoritario.

Firman de manera electrónica los Magistrados integrantes del Pleno del Decimoséptimo Circuito, ante la secretaria de Acuerdos, licenciada Martha Cecilia Zúñiga Rosas, que autoriza y da fe.

"**En términos de lo previsto en los artículos 113, y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión pública corresponde a la sentencia dictada por el Pleno del Decimoséptimo Circuito, en el expediente de contradicción de tesis 1/2020, aprobada en sesión plenaria virtual de trece de octubre dos mil veinte; constante de veintidós (22) fojas útiles, se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. De igual manera, se hace constar que los datos personales y sensibles de las partes de este expediente que no fueron suprimidos en el cuerpo de la presente sentencia, son de los considerados indispensables para la comprensión de este documento; lo anterior con fundamento en el artículo 56 último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos. Chihuahua, Chihuahua a siete de diciembre de dos mil veinte.**"

Nota: Las tesis aisladas 1a. CCCXLII/2015 (10a.), XVII.2o.P.A.15 P (10a.) y 1a. LXXXI/2019 (10a.) citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 13 de noviembre de 2015 a las 10:06 horas, del viernes 29 de mayo de 2015 a las 9:40 horas y del viernes 27 de septiembre de 2019 a las 10:36 horas, respectivamente.

Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 65/2008 y 1a./J. 44/98 citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*,

Novena Época, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, página 117, con número de registro digital: 168291 y Tomo VIII, agosto de 1998, página 81, con número de registro digital: 195648, respectivamente.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Voto particular minoritario que formulan la Magistrada María del Carmen Cordero Martínez, así como los Magistrados José Martín Hernández Simental y Cuauhtémoc Cuéllar de Luna, en la contradicción de tesis 1/2020.

Como integrantes del Pleno del Decimoséptimo Circuito, con fundamento en el artículo 43 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante diverso Acuerdo General 52/2015, de quince de diciembre de dos mil quince, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, nos permitimos formular voto particular minoritario en relación a la decisión adoptada por la mayoría en el expediente de contradicción de tesis 1/2020 en los siguientes términos:

A. Antecedentes que dan origen al voto particular minoritario.

El Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio que sustentó al resolver el amparo en revisión penal 226/2019 y el diverso adoptado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito al resolver el amparo en revisión penal 139/2016, siendo el tema central: Determinar si la formulación de imputación interrumpe la prescripción de la acción penal, o bien, ésta se logra sólo con la aprehensión del imputado o su comparecencia ante la autoridad judicial.

B) Parte expositiva con los argumentos del voto particular minoritario:

Se determina que existe contradicción de tesis, pues el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, parte del supuesto que se interrumpe la prescripción de la acción penal, a partir de que el Ministerio Público solicita fecha para la celebración de la formulación de la imputación contra una persona, pues la misma se puede considerar como una consignación ante el Juez de Control, en la que se ejercita dicha acción penal.

En cambio, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, considera que el plazo

de la prescripción penal se interrumpe con la aprehensión del imputado, o su comparecencia ante la autoridad judicial, cuando se emite una orden de aprehensión en su contra, por no haber comparecido a la audiencia de formulación de imputación; esto es, dicho Tribunal Colegiado estimó que la solicitud del Ministerio Público de la audiencia de formulación de la imputación, no tiene como efecto interrumpir la prescripción de la acción penal.

Se acotó el tema a la interrupción de la prescripción y no a la suspensión, por no haberse estudiado por uno de los tribunales.

C. Consideraciones de los disidentes para arribar a un voto particular minoritario:

Se disiente de la mayoría por varias razones, en primer término se aprecian inconsistencias argumentativas, toda vez que en el considerando quinto de le ejecutoria, se inicia con la cita del artículo 21 constitucional. Sin embargo, aún cuando no se cita, se sigue la directriz para la interpretación del artículo constitucional de un criterio anterior al nuevo sistema de justicia penal, concretamente el derivado de la contradicción de tesis 83/2005, que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J.152/2005, Novena Época, publicado en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, registro digital: 176054, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 84, con el título: "ACCIÓN PENAL. LA CONSIGNACIÓN INTERRUMPE SU PRESCRIPCIÓN."

Lo anterior tiene relevancia, pues el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua (no vigente), que fue el fundamento legal de las resoluciones divergentes, corresponde a un sistema diverso al previo, como al que se refiere en el proyecto de la mayoría, así como al mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyos artículos sostienen un sistema distinto.

No obstante, se cita la tesis aislada 1a. LXXXI/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,* Décima Época, Libro 70, Tomo I, septiembre de 2019, página 116, con el número de registro digital: 2020665 de título y subtítulo: "EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN CORRESPONDE AL FISCAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 21 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." para sustentar una premisa contraria, pues en ésta se concluyó que el ejercicio de la acción penal tiene lugar una vez concluida la fase de investigación complementaria.

Por ello, no deben invocarse tesis ajenas a este sistema, como en aquel en donde la averiguación previa concluye previo a la judicialización del ejercicio de la acción penal. Citar criterios ajenos al sistema e incorporar conceptos de otros, origina una desnaturalización del mismo, pues se insiste, lo determinante es que en el sistema conocido como mixto o inquisitorio es que al momento del ejercicio de la acción penal, base de la formulación de la acusación posterior, ya se concluyó la investigación.[1]

El segundo punto de discordancia con el proyecto, es la interpretación que se hace en el mismo, porque no obstante se refiera a diversos artículos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua (no vigente) (105, 106, 108, 114, 115, 274, 275, 276 y 278), se advierte que el inicio de la acción penal es al momento de solicitar la audiencia para formular imputación.

También se dice que ello es congruente el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aún cuando es cierto que de acuerdo con la libertad de configuración legislativa, el artículo considera:

"'El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita

[1] Tesis: 1a. CLXIX/2016 (10a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,* Décima Época, registro digital: 2011885, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 31, Tomo I, junio de 2016, página 708, tesis aislada (penal), con el título, subtítulo y texto: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO EN ESTE SISTEMA ES INSUFICIENTE PARA ABRIR LA ETAPA DE PREINSTRUCCIÓN EN UN PROCESO PENAL EN EL SISTEMA MIXTO, TODA VEZ QUE CONSTITUYE UNA DETERMINACIÓN EN FASE INVESTIGADORA INCONCLUSA. Para estimar viable la apertura de la instrucción en el modelo tradicional (mixto/escrito), es necesario e indispensable que la investigación se encuentre concluida. Esto no acontece en el caso del proceso penal acusatorio, del que deriva la investigación relativa a la carpeta administrativa que se encuentra en la etapa de investigación complementaria, pues la vinculación a proceso sólo constituye la formalización de la investigación que se lleva bajo el control de la autoridad judicial; es decir, la vinculación a proceso no es precedida por la acusación ni el ejercicio de la acción penal, pues ello acontecerá cuando se cierre la investigación judicializada y se formule la imputación. De ahí que el auto de vinculación dictado en un proceso acusatorio resulta insuficiente para abrir la etapa de preinstrucción en un proceso penal de carácter mixto/escrito, pues constituye una determinación en fase investigadora inconclusa, que aún no está precedida del correspondiente ejercicio de la acción penal y previa consignación ante una autoridad jurisdiccional. De ahí que, un juez en el sistema tradicional (mixto/escrito), únicamente estará en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre el proceso penal una vez que cuente con la consignación de la averiguación previa, cuyo ejercicio corresponde al órgano técnico de acusación, y que se encuentra sustentada en elementos probatorios desahogados legalmente en la indagatoria, de los cuales se permita acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado al respecto."

la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación.' Con esa misma libertad de configuración legislativa, el Congreso estatal, en su artículo 114, dispuso: 'La prescripción de la pretensión punitiva se interrumpe con la aprehensión del imputado o su comparecencia ante la autoridad judicial, si en virtud de la misma queda a su disposición.'"

Sin embargo, no existe norma expresa sobre ese punto y se basan realmente en una interpretación, como lo sostiene el Segundo Tribunal Colegiado de este circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, quien afirma, al construir el concepto de "ejercicio de la acción penal" en el criterio divergente:

"Sobre esa base, de una interpretación sistemática y teleológica –en aras de cristalizar el ejercicio de la acción penal– de los artículos 226 a contrario, 274, 275, párrafo primero, 276 y 278 del Código de Procedimientos Penales local, este tribunal colegiado de Circuito determina que la acción penal se ejerce a través de la solicitud de audiencia para formular imputación."

Dichos razonamientos son contrarios al principio pro persona, sin que sea justificante sostener lo que se indica en el proyecto en cuanto a que dicha interpretación:

"... es acorde con el objeto del proceso penal, consagrado en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto surgido como consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía social entre sus protagonistas, tanto entre la persona imputada y la víctima u ofendido, en un marco de respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas, en términos del artículo 1 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua (no vigente) en concordancia con lo previsto en el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues de lo contrario se propicia impunidad."

Lo anterior, porque no existe una colisión o tensión entre la protección de los derechos del imputado o acusado, con los de la víctima, tema del que ya se ocupó en jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.[2]

[2] Tesis: 1a./J. 9/2015 (10a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, registro digital: 2009593, Primera Sala, Libro 20, Tomo I, julio de 2015, página. 635, Jurisprudencia

En dicho criterio, al que nos remitiremos mediante la transcripión (sic) de la parte conducente de la ejecutoria condigna, se advierten dos temas relevantes para la presente contradicción y que consideramos se inobservaron en la ejecutoria aprobada; el primero relativo a la construcción argumentativa de una regla derivada de principio (los principios no se aplican directamente, sino se infiere la regla para el caso concreto mediante una construcción argumentativa. En el presente caso, ya fijada por el Máximo Tribunal del País) y el segundo tema es que ante la interpretación de una norma, en cuanto al imputado, acusado o sentenciado, confrontado con la víctima del delito, debe aplicarse el

---

(constitucional, penal, común) con el título, subtítulo y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EL HECHO DE QUE EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO NO LA PREVÉ A FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO CUANDO ACUDE AL RECURSO DE REVISIÓN COMO TERCERO INTERESADO, NO IMPLICA UNA TRANSGRESIÓN A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES O CONVENCIONALES. En el juicio de amparo, la implementación de la suplencia de la queja deficiente supone la existencia de un mandato según el cual, cada una de las partes (quejoso, autoridad responsable y tercero interesado), debe poder presentar su caso bajo condiciones y garantías judiciales que permitan equilibrar los medios y las posibilidades de actuación procesal, de manera que no se genere una posición sustancialmente desventajosa de una frente a la otra, como la que se presenta entre la autoridad responsable y el quejoso, a favor de la primera y, en detrimento del segundo. Ahora bien, este tipo de ajustes sólo puede predeterminarlos el legislador, pues el juzgador los lleva a cabo con las limitaciones que la ley le impone. Así, la situación procesal del tercero interesado en el juicio de amparo es concordante con la de la autoridad responsable, por la conexión jurídica de sus intereses comunes, por ello, el legislador pensó en dirigir la suplencia a favor del quejoso, ya que es la única parte en desventaja en la litis constitucional y, por ello, no habría podido dirigirla a la autoridad responsable ni al tercero, porque ninguna de estas dos partes se encuentra en desventaja con relación al quejoso. Por otra parte, para definir si debe o no suplirse la queja al tercero interesado, no se cumplen las exigencias metodológicas inherentes a la aplicación del principio pro persona, porque no existe una oposición entre los derechos de las víctimas y los de los indiciados y procesados, ya que obedecen a lógicas distintas: para la parte quejosa indiciada o acusada, debe buscarse el respeto irrestricto de los derechos inherentes al debido proceso; para las víctimas, su derecho a la participación en el proceso, la restitución y reparación de sus bienes lesionados por el delito, así como la posibilidad de acceder a la verdad y, en particular, a la búsqueda de la justicia. De ahí que el hecho de que el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo no prevea la suplencia de la queja deficiente a favor de la víctima u ofendido del delito cuando acude al recurso de revisión como tercero interesado, no implica una transgresión a los principios constitucionales o convencionales, porque es una norma adjetiva que solamente persigue la finalidad de equilibrar dos fuerzas de las partes en el juicio de amparo, que el legislador democrático supone desiguales: la quejosa y la autoridad responsable. Por lo demás, no es que el artículo no reconozca los derechos de las víctimas y no hubiere pensado en ellas como candidatas a la suplencia de la queja deficiente, pues precisamente el artículo referido les reconoce esa prerrogativa; lo único que el legislador busca, al acotar esa posibilidad a los casos en los que aquéllas sean quejosas o adherentes, es el respeto a la racionalidad de la institución procesal de la suplencia, esto es, la igualdad procesal."

principio pro persona, complementado con la regla que establece una prioridad a favor de la libertad. Dichas consideraciones de la ejecutoria referida, son las siguientes:

"42. Así, cabe preguntarnos: ¿Por qué tendría que suplirse la queja al tercero perjudicado en el litigio constitucional en materia penal en donde el quejoso tiene el carácter de indiciado? ¿Por qué ese tercero podría estar en desventaja frente al quejoso? La respuesta es obvia: no tendría ningún sentido buscar un equilibrio procesal entre el tercero y el quejoso, porque quien se encuentra en desventaja con respecto a la autoridad responsable es el segundo y no el primero.

"43. Recuérdese que la razón de suplir la queja al quejoso en materia penal es la clara posición de desventaja que tiene con respecto a la autoridad responsable; una situación claramente distinta de la que guarda el tercero perjudicado, quien en realidad coincide con las pretensiones de dicha autoridad responsable, como se ha dicho.

"44. Ahora bien, el hecho de que los casos de los que surge esta contradicción de tesis se refieran al recurso de revisión interpuesto por la parte tercero perjudicada ¿cambia en algo la naturaleza jurídica de la suplencia y de la tercería? la respuesta se desarrollará en el siguiente sub-apartado.

"VI.3. La racionalidad legislativa del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo y el principio pro persona

"45. Ha quedado claro que el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo está dirigido inequívocamente a la parte quejosa, incluso cuando provenga de una posición de tercero perjudicado. Es decir, el legislador consideró al tercero perjudicado, como destinatario de la suplencia, solamente en su carácter de quejoso, pensando precisamente en la naturaleza del litigio constitucional, donde el quejoso, en cualquier caso, estará en desventaja con relación a la autoridad responsable.

"46. Hasta este momento, podría decirse que el hecho de que el legislador no hubiera contemplado a la víctima como candidata a la suplencia de la queja deficiente, cuando no tiene el carácter de quejosa o adherente, tiene una razón de ser. Es decir, no se puede apresurar una conclusión en el sentido de que se trate de un descuido o de una falta de consideración o preocupación por las víctimas de los delitos, ya que, como se ha visto, se trata de una cuestión relacionada con el equilibrio procesal, que está sujeto a una racionalidad.

"47. Sin embargo, para poder responder la pregunta que surge de la presente contradicción, debemos introducir el otro ingrediente del desacuerdo entre los criterios: el principio pro persona, a que se refiere el artículo 1o. constitucional. La cuestión es si la invocación de este principio permite o no introducir válidamente la suplencia de la queja deficiente a favor del tercero interesado cuando se trata de la víctima u ofendido del delito.

"48. Sobre el contenido del principio pro persona, esta Primera Sala ha elaborado abundante jurisprudencia. En general, los criterios producidos por esta Sala identifican dicho principio con una pauta interpretativa mediante la cual el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a las autoridades a maximizar la vigencia y respeto de los derechos humanos, para lo cual deberán optar por la aplicación o interpretación de la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio.

"49. El siguiente criterio de jurisprudencia es representativo de la posición de esta Primera Sala:

"'PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.—De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable –en materia de derechos humanos–, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de

derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.' (10)

"50. En la teoría de la argumentación jurídica contemporánea, este tipo de pautas interpretativas se conocen como 'cargas de la argumentación' y se refieren a ciertas reglas orientadoras que permiten a los operadores decantarse por uno de los principios en conflicto con base en ciertas prioridades que son generalmente aceptadas.(11) Por ejemplo, **la regla que establece una prioridad a favor de la libertad**, el principio pro persona, el mínimo vital, el interés superior del menor, el in dubio pro reo, etcétera.

"51. De este modo, es claro que el principio pro persona no puede considerarse como una máxima o un axioma con el que puedan ser desplazadas, sin más, determinadas reglas válidas. Antes de aplicar este principio, es necesario que el operador se asegure de estar ante una disyuntiva de elección de enunciados jurídicos (reglas o principios) que contengan valores constitucionalmente relevantes (como los derechos humanos), para poder elegir el que más y mejor beneficie a las personas.

"52. De hecho, esta Primera Sala ha elaborado algunos criterios que establecen una suerte de metodología o estándar que debe ser cumplida antes de invocar el principio pro persona. Vemos algunos de ellos (se añade énfasis):

"'PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se



trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo.'(12)

"53. En el criterio anterior, se alerta sobre la aplicación indiscriminada del principio pro persona contra reglas relativas a la procedencia de la Ley de Amparo, lo cual es congruente con un criterio de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que se señala que el control de convencionalidad -guiado, ya se sabe, por el principio pro persona- no puede ser ejercido sin tomar en consideración los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia:

"'No implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones.'(13)

"54. Otro criterio metodológico para aplicar el principio pro persona es el que se refiere al deber de prudencia que el operador jurídico está obligado a guardar a la hora de analizar una petición de la parte quejosa, con respecto a dicho principio. El criterio quedó reflejado en dos tesis: una de jurisprudencia y una aislada:

"'PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,* Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: «PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.», reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que

sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio *pro homine* o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de 'derechos' alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.'(14)

"'PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades el deber de aplicar el principio pro persona como un criterio de interpretación de las normas relativas a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, para optar por la aplicación o interpretación de la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio. Así, como deber, se entiende que dicho principio es aplicable de oficio, cuando el Juez o tribunal considere necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los casos puestos a su consideración, pero también es factible que el quejoso en un juicio de amparo se inconforme con su falta de aplicación, o bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo tal ejercicio interpretativo, y esta petición, para ser atendida de fondo, requiere del cumplimiento de una carga mínima; por lo que, tomando en cuenta la regla de expresar con claridad lo pedido y la causa de pedir, así como los conceptos de violación que causa el acto reclamado, es necesario que la solicitud para aplicar el principio citado o la impugnación de no haberse realizado por la autoridad responsable, dirigida al tribunal de amparo, reúna los siguientes requisitos mínimos: a) pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable; b) señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y, d) precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. En ese sentido, con el primer requisito se evita toda duda o incertidumbre sobre lo que se pretende del tribunal; el segundo obedece al objeto del principio pro persona, pues para realizarlo debe conocerse cuál es el derecho humano que se busca maximizar, aunado a que, como el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, es necesario que el quejoso indique cuál es la parte del parámetro de control

de regularidad constitucional que está siendo afectada; finalmente, el tercero y el cuarto requisitos cumplen la función de esclarecer al tribunal cuál es la disyuntiva de elección entre dos o más normas o interpretaciones, y los motivos para estimar que la propuesta por el quejoso es de mayor protección al derecho fundamental. De ahí que con tales elementos, el órgano jurisdiccional de amparo podrá estar en condiciones de establecer si la aplicación del principio referido, propuesta por el quejoso, es viable o no en el caso particular del conocimiento.'(15)

"55. Como puede verse, todos estos criterios coinciden en que el principio pro persona no puede ser utilizado de forma irreflexiva e indiscriminada, sino que en cada caso concreto debe obedecer a una lógica y a una metodología que justifique su aplicación, siempre tomado(sic) en cuenta que está pensado para llevar a cabo ajustes interpretativos.

"56. En el caso concreto, no se cumplen estas exigencias metodológicas, porque no existe una oposición entre los valores y derechos que la Constitución obliga a respetar a favor de las víctimas, y los valores y derechos a un debido proceso de los indiciados y procesados, en una causa penal. Cuando una causa penal transita procesalmente por el juicio de amparo, estos derechos o valores no entran en ningún tipo de colisión, oposición o conflicto, porque obedecen a lógicas distintas: para la parte quejosa indiciada o acusada, debe buscarse el respeto irrestricto de los derechos inherentes al debido proceso; para las víctimas, su derecho a la participación en el proceso, la restitución y reparación de sus bienes lesionados por el delito, acceder a la verdad y, en fin, a la búsqueda de la justicia.

"57. Por ello, no es jurídicamente posible admitir que si se suple la queja a favor de la parte quejosa –indiciada o procesada por la comisión de un delito–, pero no a favor de la víctima –en su calidad de tercero interesada, no quejosa o adherente– se estaría lesionando algún valor o principio constitucional o convencional protector de los derechos humanos."

De acuerdo con lo anterior, en la teoría de la argumentación jurídica contemporánea, aceptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,[3] los tipos

[3] "Como técnica argumentativa dedicada a enjuiciar las medidas legislativas que intervienen en derechos fundamentales, el principio de proporcionalidad se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XX en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán, para posteriormente ser utilizado por muchos otros tribunales del mundo. En aquellos lugares donde se emplea, el principio de proporcionalidad normalmente no tiene un fundamento en normas constitucionales expresas. En el derecho

de pautas interpretativas se conocen como "cargas de la argumentación" y se refieren a ciertas reglas orientadoras que permiten a los operadores decantarse por uno de los principios en conflicto con base en ciertas prioridades que son generalmente aceptadas. Por ejemplo, **la regla que establece una prioridad a favor de la libertad**, el principio pro persona, el mínimo vital, el interés superior del menor, el in dubio pro reo, etcétera. De allí, se obtiene que no se debe argumentar, a menos que sea una falacia, que se aplica el principio pro persona en favor de la víctima o "para evitar la impunidad", ante la ausencia de norma expresa y se recurra a la interpretación sistemática, teleológica o cualquier otra, pues frente a los derechos de la víctima, de esa cuestión interpretativa debe inferirse una regla en favor de la libertad. Esa es una nota distintiva del nuevo sistema de justicia penal.

Traer conceptos del sistema inquisitivo, como cuando se afirma en la resolución mayoritaria que no se debe sancionar al ministerio público por ejercer un derecho[4] (cuando de acuerdo a las reglas de la prescricpión que nos ocupa es-

---

comparado se pueden encontrar una gran variedad de argumentos para justificar su aplicación en ausencia de una norma que lo autorice: el principio de igualdad; el Estado de derecho; el contenido esencial de los derechos fundamentales; **la estructura principialista de los derechos fundamentales y otras normas constitucionales**, etcétera.

"La doctrina constitucional mexicana, por su parte, también ha propuesto varios argumentos para justificar la utilización del principio de proporcionalidad en el control de constitucionalidad de la ley, entre los que destacan los siguientes: **la idea de que los derechos fundamentales son mandatos de optimización**; la unidad de la Constitución y su interpretación sistemática; y la prohibición de la arbitrariedad que se desprende de la garantía de motivación prevista en el artículo 16 constitucional. "Esta Suprema Corte ha sostenido que el fundamento para la aplicación del principio de proporcionalidad en el control constitucional de la ley, al no existir norma expresa que lo autorice, puede extraerse del principio de legalidad y la prohibición constitucional de actuar de forma arbitraria, mandato que también está dirigido al legislador. De acuerdo con lo anterior, a continuación se procede a aplicar el principio de proporcionalidad en sentido amplio para examinar la constitucionalidad de la pena prevista por el Código Penal del Distrito Federal para el delito de secuestro express." AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 181/2011. MINISTRO PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ARTURO BÁRCENA ZUBIETA. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de abril de dos mil once.

[4] Tesis 1a./J. 152/2005, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, 176054, Primera Sala, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 84, jurisprudencia (penal). "ACCIÓN PENAL. LA CONSIGNACIÓN INTERRUMPE SU PRESCRIPCIÓN.—Si se considera que el ejercicio de la acción penal se inicia con la consignación, resulta incongruente estimar que ésta no interrumpe la prescripción de la acción penal, toda vez que sería tanto como estimar que el derecho prescribe mientras se ejerce. En efecto, no puede estimarse que tal acción se extinga al iniciar su ejercicio, pues la prescripción se da ante la inactividad (no ejercicio) del Ministerio Público respecto al derecho de persecución del cual es titular. Así, la prescripción sólo se configurará por no ejercerse la acción penal



tablecen un término, mínimo de 3 años para que opere la prescripción) para integrar una norma con un texto no previsto por el legislador, en perjuicio de quien defiende su libertad, en realidad se alude a conceptos que el Constituyente permanente quiso superar y que corresponden al sistema derogado.

De este modo, es claro que el principio pro persona no puede considerarse como una máxima o un axioma con el que puedan ser desplazadas, sin más, determinadas reglas válidas, bajo el argumento que frente al imputado, acusado o sentenciado, están los derechos de la víctima. Antes de aplicar este principio en este sentido, es necesario que el jurista práctico se asegure de estar ante una disyuntiva de elección de enunciados jurídicos (reglas o principios) que contengan valores constitucionalmente relevantes (como los derechos humanos), para poder elegir el que más y mejor beneficie a las personas. Si es que se van a tomar en serio los derechos humanos.

Entonces, el criterio de la mayoría trastoca el principio pro persona, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 2597/2015, estableció que la figura de la prescripción no pugna con el derecho de acceso efectivo a la justicia.[5]

Al efecto se precisó que tal figura jurídica supone una inactividad del Ministerio Público en relación con su función de investigación y persecución de los delitos durante el tiempo que la ley señala como suficiente para su extinción. Esto es, representa la condición objetiva necesaria para que se ejerza el poder punitivo del Estado, obligatoria para éste e irrenunciable para el inculpado, relativa a la investigación de la comisión de hechos delictivos y persecución de los autores de los mismos.[6]

---

y se interrumpirá con el inicio de su ejercicio, esto es, con la consignación. Si bien el artículo 137 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla no señala de manera expresa, como sí lo hace respecto a la aprehensión, que la consignación interrumpe la prescripción, ello obedece a que tal precepto está referido al momento en que ya puede procederse a la detención de conformidad con el artículo 109 del mismo ordenamiento legal, esto es, una vez que ya se ha hecho la consignación, acto este último con el que, como quedó apuntado, inicia el ejercicio de la acción penal, el cual, si bien forma parte de la averiguación previa, lo cierto es que interrumpe la prescripción de la acción penal, pues es un acto tendente a la persecución del delito."

[5] Del cual derivó la tesis 1a. CVI/2016 (10a.), de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EL ESTABLECIMIENTO DE ESTA FIGURA NO PUGNA CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA."

[6] Criterio que se sustentó en la tesis aislada de rubro: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y DE LA PENA." Sexta Época, Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación,* Volumen XLV, Segunda Parte, página 63.

Además, refirió que debe tenerse presente que el fundamento de la institución jurídica de la prescripción radica no sólo en la autolimitación del Estado para ejercer su poder represivo, sino también en la seguridad que todos los gobernados deben tener ante el propio Estado, pues es inadmisible que alguien permanezca indefinidamente en la incertidumbre de ser objeto de un proceso penal, hasta que lo estime procedente la autoridad encargada de la investigación y persecución de los delitos.

De ahí se resolvió que si dicha facultad no se ejerce en el tiempo legalmente determinado, ello implica la pérdida para el Estado de su *ius puniendi* a consecuencia de la ineficacia de su acción persecutora; lo que se traduce en la extinción de la responsabilidad penal del inculpado derivada de la comisión del delito y de la correspondiente pena impuesta, en su caso.

En consecuencia, se dijo que la prescripción de la acción penal más que un beneficio para el inculpado o un derecho procedimental, es una sanción para la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos ante su inactividad o deficiente actividad, porque la potestad sancionadora del Estado no puede extralimitarse del tiempo prefijado que condiciona su validez.

Con base en lo expuesto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la figura de la prescripción, traducida ésta en la determinación de un plazo establecido en la ley para tener por extinguida la acción punitiva del Estado, no conlleva una transgresión al derecho humano de acceso efectivo a la justicia, pues el establecimiento de los plazos que en su caso imponen los legisladores en las leyes penales secundarias, tiene como fin último que no quede expedita indefinidamente la acción persecutora del Estado, lo que encuentra su justificación en el derecho a la certeza jurídica de que deben gozar todos los gobernados.

Resaltó, que el legislador cuenta con facultades para designar cuáles serán las formalidades que rijan el procedimiento, así como los plazos y términos para la procedencia de una acción, lo cual tiene aplicación en relación con el ejercicio de la acción penal y encuentra su justificación en la necesidad de que en los procedimientos legales exista equilibrio en el ejercicio de los distintos derechos de las partes.

Es decir, al contar con un plazo para el ejercicio de la acción penal, so pena de decretar su prescripción ante la inactividad de la autoridad ministerial en los casos que así lo establezca la ley, se genera un estado de seguridad jurídica



para todas las partes del proceso judicial y no se atenta contra el derecho humano de acceso efectivo a la justicia.

Además tampoco se atiende a lo más favorable para el imputado, porque del análisis de los artículos 105, 114 y 115 del Código Penal para el Estado de Chihuahua y los diversos 226, 274, 275, párrafo primero 276 y 278 del entonces Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua (no vigente), se puede apreciar que el legislador en el artículo 105 del Código Penal del Estado de Chihuahua, fijó dos reglas para efectos de la prescripción.

La primera que describe que esta figura es personal y extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad, y que para ello bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley.

En segundo lugar detalló los delitos que son imprescriptibles.

Luego, en los artículos 114 y 115 en comento, describió los supuestos en que puede interrumpirse la prescripción y aquellos en que será posible la suspensión.

Así, tratándose de la prescripción de la pretensión punitiva, se interrumpe con la aprehensión del imputado o su comparecencia ante la autoridad judicial, si en virtud de la misma queda a su disposición.

El plazo de prescripción vuelve a correr, a partir del día en que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, si se encuentra privado de libertad.

Fuera de esta circunstancia, volverá a correr en un plazo igual al de la medida cautelar impuesta; si la misma no estuviera determinada en tiempo, será en un plazo de cuatro meses. Si no se hubiese decretado medida cautelar, el plazo volverá a correr a partir de su última comparecencia ante la autoridad que procesalmente lo tuviera a su disposición.

Por otro lado, el cómputo de la prescripción se suspenderá, durante el trámite de extradición internacional o con Entidades Federativas o el Distrito Federal; cuando se toma un criterio de oportunidad; por la suspensión del proceso a prueba; y por formas alternativas de justicia, cuando estas medidas no extingan la acción penal.

Asimismo, por la declaración formal de que el imputado se ha sustraído a la acción de la justicia. En este caso, el término de la suspensión no podrá exceder de

un tiempo igual al de la prescripción de la acción; sobrevenido éste, continuará corriendo ese plazo.

Además, cuando la realización de la audiencia de debate se suspenda por causas atribuibles a la defensa, con el propósito de obstaculizar el normal desarrollo de aquella, según declaración que efectuará la autoridad judicial en resolución fundada. Desaparecida la causa de la suspensión, el plazo de la prescripción continuará su curso.

Por tanto, la solicitud del Ministerio Público al Juez de Control de citar al imputado para formularle imputación, no fue considerada como una actuación con la que se interrumpa la prescripción.

De ahí la importancia que tiene distinguir las particularidades en cada legislación penal y los marcados cambios substanciales que existen entre la antes denominada "consignación" y la actual formulación de imputación y acusación, por las variaciones que se han producido en la jurisprudencia.

Las razones expuestas conducen a establecer que los términos del Código Penal y Código Procesal Penal para el Estado de Chihuahua, cuando el Ministerio Público solicita la citación, así como la fecha y hora para formular imputación a una persona, debe atenderse a la regla genérica establecida en el artículo 105 del Código Penal del Estado de Chihuahua, en la que se dispone que para que opere la prescripción bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley.

Actuar en los términos del criterio de la mayoría implica entender la figura de la interrupción en forma distinta a lo previsto por la ley; además, permite al Ministerio Público un tiempo indefinido para el ejercicio de su función constitucional, en contra del derecho de acceso a la acceso a la justicia y de lo más benéfico para el imputado.

Nota: Las tesis de aisladas y de jurisprudencia 1a. LXXXI/2019 (10a.), 1a. CLXIX/2016 (10a.), 1a./J. 9/2015 (10a.) y 1a. CVI/2016 (10a.) citadas en este voto, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 27 de septiembre de 2019 a las 10:36 horas, del viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas, del viernes 10 de julio de 2015 a las 10:05 horas y del viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas, respectivamente.

Las tesis aisladas y de jurisprudencia: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.",

"PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO."; "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES." y "PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE." con números de identificación 1a./J. 107/2012 (10a.), 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), 1a./J. 104/2013 (10a.) y 1a. CCCXXVII/2014 (10a.) citadas en este voto, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con número de registro digital: 2002000, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, página 530, con número de registro digital: 2002359, Libro XXV, Tomo 2, octubre de 2013, página 906, con número de registro digital: 2004748 y Libro 11, Tomo I, octubre de 2014, página 613, con número de registro digital: 2007561, respectivamente.

Este voto se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. SE INTERRUMPE CON LA SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO DE AUDIENCIA PARA FORMULAR LA IMPUTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el Ministerio Público interrumpe la prescripción de la acción penal, cuando solicita audiencia para formular la imputación, o bien, la interrupción sólo se logra con la aprehensión del imputado o con su comparecencia ante la autoridad judicial, si en virtud de la misma queda a su disposición, y llegaron a conclusiones diferentes, ya que uno sostuvo que se interrumpe porque se puede considerar como una consignación ante el Juez de Control en la que se ejercita la acción penal, mientras que el otro implícitamente resolvió que la interrupción ocurre con la aprehensión del imputado o con su comparecencia ante la autoridad judicial.

Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito considera que conforme al artículo 276 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua (vigente hasta el 12 de junio de 2016), la sola solicitud de la audiencia para formular la imputación obliga a individualizar al imputado,

a su defensor, si lo ha designado, y se indica el delito, lo que constituye el inicio del ejercicio de la acción penal y, por tanto, es presupuesto procesal indispensable para que el Ministerio Público materialice el ejercicio de la acción penal a través de la acusación, por ser una clara intención de su ejercicio, lo que es acorde con lo previsto en el artículo 211, penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que la referida solicitud interrumpa el plazo genérico de prescripción establecido en el artículo 105 del Código Penal del Estado de Chihuahua, independientemente de la forma en que se realice.

Justificación. Lo expuesto es así, pues no puede desconocerse que al igual que la actuación de la "consignación", la indicada solicitud constituye el momento en el que se hacen del conocimiento del Juez los resultados de la investigación inicial y que se consideran bastantes para formular la imputación. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. LXXXI/2019 (10a.), de título y subtítulo: "EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN CORRESPONDE AL FISCAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 21, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", determinó que el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público y se materializa en la acusación; por tanto, no debe sancionarse al Ministerio Público por un tiempo que es ajeno a su función constitucional, lo que sería tanto como sostener que el derecho prescribe mientras se ejerce. En tal hipótesis –interrupción de la prescripción–, el plazo para prescribir nuevamente empezará a contar a partir de que el Ministerio Público reciba el oficio de aprehensión, reaprehensión, presentación o cualquiera de los supuestos previstos en el segundo párrafo del artículo 114 del Código Penal Estatal, el cual sólo podrá interrumpirse con la aprehensión del imputado o con su comparecencia ante a la autoridad judicial, si en virtud de la misma queda a su disposición. Esta interpretación es acorde con el objeto del proceso penal, consagrado en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PLENO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO.
PC.XVII. J/28 P (10a.)



Contradicción de tesis 1/2020. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad. 13 de octubre de 2020. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados Refugio Noel Montoya Moreno, José Elías Gallegos Benítez, María Teresa Zambrano Calero y Juan Carlos Zamora Tejeda. Disidentes: María del Carmen Cordero Martínez, José Martín Hernández Simental y Cuauhtémoc Cuéllar de Luna (presidente), quienes formularon voto particular minoritario. Ponente: Refugio Noel Montoya Moreno. Secretarios: Martha Cecilia Zúñiga Rosas y Julio César Montes García.

Tesis y criterios contendientes:

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión penal 139/2016, el cual dio origen a la tesis aislada XVII.1o. P.A. 32 P (10a.), de título y subtítulo: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA NO COMPARECENCIA DEL IMPUTADO A LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, LA DETERMINACIÓN DE QUE SE SUSTRAJO DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA Y, EN SU CASO, EL LIBRAMIENTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN CORRESPONDIENTE, NO SUSPENDEN EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE AQUÉLLA OPERE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 30 de septiembre de 2016 a las 10:39 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,* Décima Época, Libro 34, Tomo IV, septiembre de 2016, página 2856, con número de registro digital: 2012703, y

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua al resolver el amparo en revisión penal 226/2019.

Nota: La tesis aislada 1a. LXXXI/2019 (10a.) citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 27 de septiembre de 2019 a las 10:36 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 70, Tomo I, septiembre de 2019, página 116, con número de registro digital: 2020665.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de diciembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS.

RECURSO DE APELACIÓN. LA INCLUSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE ESTABLECE SU PROCEDENCIA, NO REQUIERE DE INTERPRETACIÓN ADICIONAL PARA FIJAR EL MONTO A QUE ALUDE EL PROPIO PRECEPTO.

RECURSO DE APELACIÓN. SU PROCEDENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS, NO ESTÁ SUJETA A INTERPRETACIÓN ADICIONAL DE LOS ARTÍCULOS 626 Y 168 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 6 DE OCTUBRE DE 2020. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ ELÍAS GALLEGOS BENÍTEZ, MARÍA DEL CARMEN CORDERO MARTÍNEZ, JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ SIMENTAL Y REFUGIO NOEL MONTOYA MORENO. DISIDENTES: CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA, MARÍA TERESA ZAMBRANO CALERO Y JUAN CARLOS ZAMORA TEJEDA, QUIENES FORMULARON VOTO PARTICULAR. PONENTE: JOSÉ ELÍAS GALLEGOS BENÍTEZ. SECRETARIO: GERARDO GONZÁLEZ TORRES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—**Competencia.** Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de

Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero y quince de diciembre, ambos de dos mil quince; por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este Circuito y corresponde, exclusivamente a este órgano, dilucidarla y determinar, en su caso, cuál será el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

SEGUNDO.—**Legitimación.** La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por un Tribunal Colegiado del propio Décimo Séptimo Circuito.

TERCERO.—**Criterios contendientes.** Para determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se impone analizar las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes basaron sus resoluciones.

A. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Décimo Séptimo Circuito.

6. En sesión de siete de junio de dos mil dieciocho, el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito en cita, determinó sobreseer en el juicio de amparo directo 995/2017.

7. Las consideraciones esenciales en que se apoyó el sentido del fallo fueron las siguientes:

8. Estimó actualizada la causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable, prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad.

9. Luego de reproducir el contenido de la fracción aludida, señaló que el juicio de amparo es improcedente respecto de las resoluciones de tribunales

judiciales, entre otros, cuando la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.

10. Para evidenciar la actualización de la citada causa de improcedencia, el Tribunal Colegiado de Circuito enunció los antecedentes relevantes del asunto; destacó que en el juicio de origen se demandó la desocupación y entrega de un local comercial arrendado, por falta de pago de rentas.

11. Se precisó que seguido el procedimiento en sus etapas, el Juez responsable emitió sentencia en la que condenó a la desocupación y entrega del local, así como el pago de la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de rentas mensuales no pagadas a razón de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), cada una, más el 5% (cinco por ciento) correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio de dos mil diecisiete, más las rentas vencidas y no pagadas que se siguieran generando hasta la total desocupación del inmueble objeto de la acción. Además, el pago de gastos y costas originados y la terminación del contrato de arrendamiento.

12. El fallo anterior constituyó el acto reclamado en el juicio de garantías.

13. En ese sentido, se consideró que el quejoso previo a la promoción del amparo debió agotar el principio de definitividad e interponer el recurso de apelación, previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua.

14. Para justificar esa aseveración, reprodujo los artículos 624, 625, 626 y 169 del código en cita, de los que se advirtió que tal recurso tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia examine si en la resolución apelada se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de la prueba, o si se alteraron los hechos; y en vista de ello, se confirme, revoque o modifique la resolución apelada.

15. Además, que tratándose de sentencias debe admitirse en efecto suspensivo y cuando el negocio sea estimable pecuniariamente, como en ese caso, atento a que la autoridad responsable condenó al quejoso a pagar las cantidades referidas por concepto de rentas mensuales no pagadas, más el 5% (cinco por ciento) correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio de dos mil



diecisiete, además de las rentas vencidas y no pagadas que se siguieran generando hasta la total desocupación del inmueble objeto de la acción, cuyo importe excedía de 500 Unidades de Medida y Actualización.

16. En ese sentido, se destacó que la condena impuesta era estimable pecuniariamente, pues la acción derivaba de prestaciones periódicas, como el pago de rentas mes con mes, excediendo además su importe de las 500 Unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el numeral 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua.

17. En virtud de lo anterior, puntualizó que si bien el referido precepto remitía a la regla general prevista en el artículo 168 del mismo ordenamiento legal; no menos cierto resultaba que el diverso artículo 169 del citado cuerpo de leyes, hacía alusión a la regla específica que se adecuaba al caso concreto, porque dispone que cuando se trate de acciones derivadas de actos o contratos –contrato de arrendamiento– en que se pacten prestaciones o pensiones periódicas –pago de rentas mensuales– se computaría el importe del negocio atendiendo al monto de un año, aun cuando sólo se reclamaran algunas de ellas.

18. Tomando en cuenta que en el juicio de origen se demandó el pago de rentas vencidas y las que se siguieran venciendo a razón de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, se multiplicó tal monto por los doce meses del año a que se refiere el último de los preceptos citados, dando como resultado la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional).

19. Asimismo, en relación a las quinientas Unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el numeral 626 reproducido, se precisó que el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "*Decreto por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización*", que en sus artículos 5 y transitorios primero y segundo, dispone que el valor inicial diario de la multicitada unidad sería el publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el veintiocho de enero de dos mil dieciséis (equivalente a $73.04 pesos mexicanos), el cual estaría en vigor en tanto dicho instituto no publicara dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año, el valor diario en moneda nacional de la "UMA".

20. Así, se tomó en cuenta que el diez de enero de dos mil diecisiete, dicho instituto publicó en el Diario Oficial de la Federación, los valores (diario, mensual y anual) de la referida unidad, siendo el correspondiente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización para el año dos mil diecisiete, el de $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional), el cual, además, se encontraba vigente a partir del uno de febrero de la anualidad en comento.

21. En tal virtud, se multiplicó el valor de la citada unidad de medida, por las 500 a que se refiere el precepto en mención, dando como resultado la cantidad de $37,745.00 (treinta y siete mil setecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), precisando que si la cuantía del asunto era de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional); resultaba evidente que en contra de la sentencia que constituye el acto reclamado procedía el recurso de apelación, a través del cual, el solicitante de amparo podía lograr que se modificara o revocara aquélla.

22. Por lo anterior, se concluyó actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y con fundamento en la fracción V del diverso 63 de la misma ley, se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo.

23. Apoyó sus consideraciones en la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 95, del Libro 17, Tomo I, Décima Época, de la *Gaceta al Semanario Judicial de la Federación*, correspondiente al mes de abril de 2015, con el título y subtítulo: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."

24. Del anterior criterio surgió la tesis «XVII.1o.C.T.24 C (10a.)» consultable en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 58, Tomo III, septiembre de 2018, Décima Época, página 2498, con número de registro digital: 2017941, de título y subtítulo: "RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO ORAL ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO."

B. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito.

25. En sesión de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, el citado órgano colegiado resolvió el amparo directo civil 287/2019, en el que determinó que el quejoso se encontraba ante una excepción al principio de definitividad.

26. Previo al estudio, narró los antecedentes que dieron lugar al juicio constitucional, detallando que el acto reclamado en el juicio de amparo era la sentencia de quince de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos.

27. Se detalló, que en el fallo resultó procedente la vía ordinaria civil; que la actora acreditó su acción y la demandada demostró parcialmente sus excepciones.

28. En consecuencia, se condenó a la demandada a la desocupación y entrega del inmueble objeto del juicio, así como al pago de las rentas vencidas y no pagadas a partir del mes de agosto de dos mil dieciocho, y las que se siguieran venciendo hasta la entrega material del inmueble, a razón de $6,200.00 (seis mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) mensual.

29. También se condenó al arrendatario y al fiador y/o obligado solidario al pago del servicio de agua por el importe de $734.00 (setecientos treinta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) y de energía eléctrica la cantidad de $1,124.00 (mil ciento veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), más lo que se siguiera generando hasta la desocupación de la finca; se detalló que tal importe en ejecución de sentencia debería descontarse de la suma entregada como depósito referido en la cláusula novena del contrato de arrendamiento; es decir, la cantidad de $6,200.00 (seis mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) y para el caso de que el adeudo excediera tal numerario, la diferencia debería ser

cubierta por la demandada por la cantidad que se fijara en ejecución de sentencia, y para el supuesto contrario, es decir, que el adeudo fuera menor a la cantidad otorgada en depósito, se dejaron a salvo los derechos de la parte demandada.

30. Asimismo, en ese fallo, no se declaró la rescisión del contrato de arrendamiento celebrado entre la actora y los demandados; igualmente, se absolvió a la parte demandada del pago de la cantidad que resultara por concepto de pena convencional y/o interés moratorio marcada con la letra d) del escrito inicial; al pago de la cantidad por concepto del pago de los servicios de gas, teléfono, internet y televisión de paga reclamados en el inciso g) del escrito inicial; al pago de los daños y perjuicios reclamados en el inciso h) del escrito inicial y de los gastos y costas del juicio.

31. Luego, se abordó el estudio de la causal de improcedencia invocada por la parte tercero interesada, por ser obligatorio su análisis, incluso de oficio.

32. El Tribunal Colegiado de Circuito detalló que el planteamiento consistió en que la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad, toda vez que no agotó el recurso de apelación que procedía en contra de la sentencia de primer grado, por razón de la cuantía, pues excedía de las quinientas Unidades de Medida y Actualización, como lo disponen los artículos 626 (sic), en relación con el 169, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, y como apoyo citó la tesis «XVII.1o.C.T.24 C (10a.)» sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este Circuito, que se identifica con el rubro: "RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO ORAL ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO."

33. Para evidenciar que se estaba ante una excepción al principio de definitividad, luego de reproducir el numeral 61, fracción XVIII, estableció que la referida norma exige que, cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales administrativos o de trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben

agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado.

34. Concretamente se hizo referencia a que en dicha fracción se consagra el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual exige que el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación.

35. Sin embargo, precisó que dicho principio prevé algunos casos de excepción como el previsto en el último párrafo de la citada fracción XVIII, que se actualizarán:

a) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o,

b) El fundamento legal sea insuficiente para determinarla.

36. Seguidamente, citó las consideraciones que sobre el tema sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 60/2016, (10a.), publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 36, Tomo II, correspondiente al mes de noviembre de 2016, Décima Época, página 864, con el número de registro digital: 2013065, de título y subtítulo: "IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA) ORDENADA EN EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DEL ESTADO DE VERACRUZ)."

37. Entre los argumentos que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se destacó la conclusión normativa de eximir el agotamiento de recursos antes de promoverse el juicio de amparo, sanciona el trabajo legislativo que no regula expresamente la procedencia de algún medio de impugnación contra el acto reclamado, o bien, que para que dicha procedencia sea necesaria una interpretación adicional cuya consecuencia es que el quejoso quede en libertad de optar por interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.

38. Que tal consideración obedece a que, la falta de previsión expresa del recurso contra un acto o la exigencia de acudir a interpretaciones adicionales constituyen circunstancias carentes de razonabilidad o proporcionalidad para acceder a los recursos, pues incumplen con el principio de interpretación estricta que favorece el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, ya que al final, no brindan certeza ni seguridad jurídica.

39. Además, que el quejoso no está obligado a conocer la ley aplicable de manera tal que, se le deba exigir la adquisición del conocimiento específico sobre el recurso que efectivamente corresponda contra un determinado acto dentro del procedimiento, cuando la norma no lo prevé expresamente.

40. En ese contexto, se estableció que tampoco es razonable que el quejoso deba conocer los métodos de interpretación que se obtienen de los distintos componentes de la norma para definir con certeza el recurso ordinario aplicable a un determinado acto, pues éstos deben quedar claramente precisados o bien, que para acceder a ese conocimiento baste hacer una interpretación simple de la norma, como en un sentido gramatical, afirmativo o negativo. Un ejemplo de esta interpretación simple se deduce del recurso de revocación previsto en artículos que proclaman su procedencia frente a los autos contra los cuales no proceda el recurso de apelación, ya que para conocer los casos en que aquel medio de impugnación es procedente, es suficiente una simple interpretación gramatical por exclusión, sin acudir a mayores métodos hermenéuticos.

41. Empero, la superioridad sostuvo que no es jurídicamente correcto exigir al quejoso que interprete el sentido de un precepto en relación con el contenido de otro, para deducir la procedencia de un recurso contra un determinado acto no previsto como impugnable en la ley, lo que supone además un avance al principio de progresividad de las normas para acceder al servicio de administración de justicia bajo la óptica de la Ley de Amparo vigente.

42. De esta forma, el órgano jurisdiccional expresó, que la actualización de cualquiera de esas hipótesis supondría una excepción al principio de definitividad, puesto que el quejoso no estaría obligado a interponer los recursos ordinarios de manera previa a promover el juicio de amparo.



43. Luego, respecto del recurso de apelación transcribió el contenido de los artículos 624, 625, 616, (sic) 168 y 169 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua.

44. De tales numerales el citado Tribunal Colegiado concluyó que para determinar la procedencia del recurso de apelación, cuando se trata de sentencias cuyo negocio es estimable pecuniariamente, que a su vez exceda de quinientas Unidades de Medida y Actualización, **es necesario realizar una interpretación adicional**, pues ello no se obtiene de la simple consulta del artículo 626 del indicado Código, que regula expresamente dicho recurso, ya que para conocer su procedencia, requiere que el justiciable acuda tanto a la ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, así como al capítulo II, relativo a las Reglas para la fijación de la de (sic) competencia del título tercero, denominado "competencia" todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua.

45. Así, consideró que el arábigo 168 al que remite, señala que para determinar la cuantía del negocio, se tendrá en cuenta únicamente lo que demande la parte actora como suerte principal a la fecha de la interposición de la demanda, no obstante, si la acción se refiere a un contrato de arrendamiento, también requiere desentrañar si debe observarse el siguiente numeral 169, debido a que contempla una regla especial de computar el importe del negocio atendiendo al monto de un año, cuando se trate del ejercicio de acciones de actos o contratos en los que se pacten prestaciones o pensiones, o bien, omitirlo porque aplica sólo para fijar la competencia por cuantía.

46. En ese contexto, reiteró que para llegar al convecimiento (sic) de la procedencia del recurso de apelación contra la sentencia dictada en un juicio de desocupación de un inmueble por falta de pagos de rentas, no únicamente se necesita considerar la norma que regula expresamente el recurso, sino también realizar una interpretación de diversos numerales.

47. Así, precisó que en el caso se debe determinar si la cuantía excede de quinientas Unidades de Medida y Actualización, como lo dispone el artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para lo cual debe recurrirse a la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada

el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en cuyos artículos 5 y Transitorios primero y segundo, establece que el valor inicial diario de la multicitada unidad se publicaría por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, que estaría en vigor hasta en tanto el instituto no publicara, dentro de los diez días de enero de cada año, el valor diario en moneda nacional de la UMA.

48. Enseguida, el artículo 626 referido remite únicamente a lo que dispone el diverso 168, al establecer que para determinar la cuantía del negocio se debe atender a lo que se demande como suerte principal, a la fecha de interposición de la demanda.

49. Con lo anterior se expresó aparentemente se agota el estudio de la procedencia o improcedencia del recurso de apelación en los asuntos que son estimables pecuniariamente; sin embargo, sostuvo que debido a que el asunto deriva de una acción relacionada con un contrato de arrendamiento, tiene que desentrañarse si también aplica lo que dispone el artículo 169 que contiene una regla especial tratándose del ejercicio de acciones derivadas de actos o contratos en que se pacten prestaciones o pensiones periódicas, y al cual no se hace referencia en el diverso 626, como sí lo hace para el 168.

50. Todo lo anterior permitió concluir que la procedencia del recurso de apelación no era clara, pues no es suficiente con atender a lo que literalmente establece el artículo 626 (sic) Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, que regula expresamente dicho medio ordinario de defensa, sino que era preciso justificarla con razonamientos adicionales, como el valor de la Unidad de Medida y Actualización, además analizar una disposición a la cual remite el artículo 626 y otra diversa a la que no hace mención, lo que evidentemente implica una duda o incertidumbre para el justiciable.

51. De ahí concluyó que se actualizaba una excepción al principio de definitividad, lo que permitía al quejoso interponer el recurso de apelación o acudir al juicio de amparo; por lo que desestimó la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y emprendió el estudio de los conceptos de violación que finalmente declaró inoperantes, negando el amparo y protección de la justicia federal solicitados.

CUARTO.—**Existencia de la contradicción de tesis.**

52. Señalados los criterios objeto de la denuncia, debe establecerse si en el caso se actualiza la contradicción de tesis.

53. En principio, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha previsto que para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.

54. Lo anterior quedó plasmado de la (sic) jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno del Máximo Tribunal de justicia del País, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, con número de registro digital: 164120, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, visible en la página 7 de rubro y contenido siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan 'tesis contradictorias', entendiéndose por 'tesis' el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se

actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.', al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que 'al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes' se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en 'diferencias' fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

55. En complemento, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que como la finalidad de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos a fin de generar seguridad jurídica; y para que exista una contradicción de tesis, debe verificarse:

I. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

II. Que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

III. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

56. Lo expuesto deriva de la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,* Novena Época, con número de registro digital: 165077, Tomo XXXI, correspondiente al mes de marzo de 2010, visible en la página 122, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión

jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

57. En ese tenor, se tiene por cumplido el primero de los requisitos necesarios para la existencia de la contradicción de tesis, puesto que ambos Tribunales Colegiados se apoyaron en la interpretación del artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, en relación con los numerales 168 y 169 de la misma codificación, en lo tocante a las reglas de procedencia del recurso de apelación.

58. **Respecto al segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos**. Este Pleno de Circuito, considera que también se encuentra satisfecho, ya que los dos Tribunales Colegiados de Circuito analizaron casos en los que a partir de supuestos similares, llegaron a conclusiones diferentes, en cuanto a si debía o no agotarse el recurso de apelación previsto en el artículo 626 del Código del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, antes de acudir al juicio de amparo, cuando se trate de sentencias dictadas por falta de pago de rentas, dentro de un juicio ordinario civil en el que se dedujeron acciones derivadas de un contrato de arrendamiento.

59. Para el Primer Tribunal en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, la sentencia de esa naturaleza es recurrible mediante el recurso de apelación previsto en el artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, en relación con el artículo 169 de la misma codificación, en razón de que el juicio natural es estimable pecuniariamente, por haberse decretado una condena al pago de rentas vencidas, y su cuantía excedió de las quinientas Unidades de Medida de Actualización, atendiendo al monto de un año de pensiones rentísticas. De manera que se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII de la Ley de Amparo, porque antes de acudir al juicio de amparo indirecto el quejoso debió agotar dicho medio ordinario de impugnación.

60. El análisis de dichos argumentos revela que ese órgano colegiado estableció implícitamente que el fundamento legal del recurso de apelación es

suficiente para determinar su procedencia, sin necesidad de interpretación adicional; pues desarrolló su argumentativa a efecto demostrar la procedencia del recurso de apelación en términos de los numerales que citó, para fundar la referida causa de improcedencia. De donde se infiere que a consideración del órgano colegiado, no se actualizó la excepción al principio de definitividad a que alude el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, aunque propiamente no se expresaron los razonamiento jurídicos que le llevaron a esa conclusión.

61. En cambio, para el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, se actualizó una excepción al principio de definitividad, debido a que para establecer la procedencia del recurso de apelación contra la sentencia dictada por falta de pago de rentas no basta atender a la literalidad del artículo 626 del código adjetivo civil del Estado de Chihuahua, sino que es necesario realizar una interpretación adicional.

62. Lo cual sostuvo, al razonar que para conocer si procede o no el recurso de apelación, se requiere que el justiciable acuda tanto a la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, como al arábigo 168 del propio código; además de efectuar un ejercicio interpretativo para desentrañar si el artículo 169, que contempla una regla especial para computar el importe del negocio atendiendo al monto de un año cuando se trate de acciones derivadas de actos o contratos en los que se pacten prestaciones o pensiones periódicas debe observarse como regla de procedencia del recurso o sólo para fijar la competencia.

63. De ese modo, existe divergencia en la decisión adoptada en lo que atañe a la necesidad o no de agotar el recurso de apelación contra las sentencias dictadas por falta de pago de rentas en juicios ordinarios civiles, antes de promover el juicio de amparo.

64. En el mismo sentido, se observan posiciones jurídicas discrepantes en dos tramos, el primero donde los tribunales definieron si por haberse señalado en el artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de

Chihuahua, la Unidad de Medida y Actualización, como parámetro para determinar la cuantía para la admisión del recurso de apelación en general, se requiere o no de interpretación adicional para establecer la procedencia del recurso, tratándose de asuntos estimables pecuniariamente.

65. El segundo, se refiere a la aplicabilidad o inaplicabilidad del artículo 169 del código adjetivo civil local, para determinar la procedencia del recurso de apelación, en los asuntos en que se haya reclamado el pago de rentas vencidas y obtenido una condena por el mismo concepto.

66. Sobre el tema, el Primer Tribunal en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, sostiene que ese numeral debe aplicarse para establecer la procedencia del recurso en razón de la cuantía, por aludir a una regla específica que contempla las acciones derivadas de contratos de arrendamiento; mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, considera que es necesario realizar una interpretación adicional del artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, que regula expresamente el recurso de apelación y únicamente hace remisión al numeral 168 del mismo ordenamiento, para determinar si la regla especial prevista en el numeral 169 también debe observarse para determinar la procedencia del medio de impugnación o sólo para fijar la competencia por cuantía, por lo que, en todo caso, se actualizaría una excepción al principio de definitividad que haría optativa su interposición antes de acudir al juicio de amparo.

67. En lo referente a este último punto, el Pleno de Circuito considera necesario definir con claridad las reglas aplicables en lo que atañe a la procedencia del recurso de apelación en razón de la cuantía, y sus fundamentos, bajo un enfoque distinto al de los órganos colegiados contendientes, atendiendo a la literalidad del artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua.

68. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 de la Ley de Amparo, que faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los



criterios discrepantes o sustentar uno diverso, y la jurisprudencia 2a. IV/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo:

69. "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SI AL ANALIZARSE LA POSTURA DE LOS ÓRGANOS FACULTADOS CONTENDIENTES, SE ADVIERTE QUE LE DIERON UN ALCANCE INDEBIDO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DEBE CORREGIRLA Y ESTABLECER EL CRITERIO JURISPRUDENCIAL PERTINENTE."

70. **Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver.** Este requisito también se cumple, pues advertidos los puntos de divergencia, es necesario resolver las siguientes interrogantes:

71. ¿La procedencia del recurso de apelación a que alude el artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua se sujeta a interpretación adicional, por señalar la "Unidad de Medida y Actualización" como referencia para calcular el monto para la admisión del recurso? ¿Para fijar el importe del negocio que determina la procedencia del recurso de apelación por razón de la cuantía, en asuntos vinculados con acciones derivadas de contratos en los que se pacten prestaciones o pensiones periódicas cuantificables pecuniariamente, debe estimarse aplicable la regla de competencia prevista en el artículo 169 del código procesal civil local, mediante una justificación interpretativa adicional? y con base en ello ¿Procede el juicio de amparo directo, contra sentencias definitivas cuyo importe del negocio no exceda de 500 Unidades de Medida y Actualización, en asuntos vinculados con acciones derivadas de contratos en los que se pacten prestaciones o pensiones periódicas cuantificables pecuniariamente sin necesidad de observar el principio de definitividad?

QUINTO.—**Estudio.**

72. Acotada así la existencia de la contradicción de tesis, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que sustenta el Pleno de Circuito, con apoyo en las consideraciones que enseguida se exponen:

73. Para enmarcar el contexto de la presente resolución es necesario establecer que el análisis de las causales de improcedencia en el juicio de amparo es de carácter oficioso, lo cual significa que con independencia de que lo hayan hecho valer las partes, el órgano jurisdiccional debe abordarlo al tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente.

74. El principio enunciado se sustenta en la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* de 1985, Quinta Época, Parte VIII, visible en la página 262, con número de registro digital: 395571, de rubro y texto siguientes:

75. "IMPROCEDENCIA.—Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías."

76. Expuesto lo anterior, resulta indispensable señalar lo que establece el artículo 107, fracción III, inciso a), tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, que disponen:

77. "**Artículo 107.** Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ...

"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

"a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las

violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.

"La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse.

"Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos."

"**Artículo 61**. El juicio de amparo es improcedente: ...

"XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.

"...

"Se exceptúa de lo anterior:

"Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo."

78. La disposición constitucional reproducida, consagra el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, con el que se realza su carácter de medio extraordinario de defensa, por lo que previo a su promoción, la parte quejosa se encuentra obligada a promover el recurso establecido en la ley del acto reclamado que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el contenido de la resolución jurisdiccional reclamada.

79. Asimismo, el artículo y fracción transcritos que corresponden a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, contemplan la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.

80. El último párrafo prevé dos supuestos de excepción:

81. a) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional.

82. b) En el caso de que el fundamento legal sea insuficiente para determinarla.

83. De actualizarse cualquiera de éstos, la consecuencia sería que el quejoso quede en libertad de interponer el recurso o acudir al juicio de amparo.

84. Otro aspecto jurídico que es importante destacar en relación al principio constitucional de definitividad, es que se vincula estrechamente con el derecho humano de toda persona a un recurso sencillo, rápido y efectivo contenido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en la parte de interés disponen:

"**Artículo 17.** Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes,

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."

"**Artículo 25.** Protección Judicial.

"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales."

85. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha interpretado el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,[1] en términos amplios, considerando la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales; además, ha sostenido que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la convención, sino también de aquellos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley.

86. Aunado a lo expuesto, para emitir el presente criterio, también se toma en cuenta, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el juicio de amparo constituye un recurso judicial que cumple con las características de eficacia e idoneidad previstas en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

87. El criterio en comento se identifica con el número 2a./J. 12/2016 (10a.), publicado en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época,

[1] http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo13.pdf. CUADERNILLO DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS No. 13: PROTECCIÓN JUDICIAL. *Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú*. Fondo. Reparaciones y costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 89; *Caso Yatama Vs. Nicaragua*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 167; *Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile*. Fondo. Reparaciones y costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 128; *Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador*. Reparaciones y costas. Sentencia de 3 de marzo de 2011. Serie C No. 222, párr. 57; *Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela*. Excepción preliminar, Fondo. Reparaciones y costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 59.

con el número de registro digital: 2010984, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, visible en la página 763, con el título, subtítulo y texto siguientes:

88. "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. De la interpretación del precepto citado, un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. En este sentido, el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de una disposición de observancia general, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cuanto a la idoneidad y la razonabilidad del juicio de amparo, la Corte Interamericana reconoció que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En esa misma tesitura, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo."

89. Estos parámetros jurídicos constituyen la base para resolver el problema planteado, pues de frente a su aplicación y apreciando el caso concreto, surge la disyuntiva de si se actualizan o no los supuestos de excepción al

principio de definitividad, consistentes en la "interpretación adicional" e "insuficiencia del fundamento legal".

90. Relativo al primer aspecto jurídico, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,[2] ha establecido que al interpretar la ley, el juzgador debe tener presentes dos elementos: el texto o sentido gramatical de las palabras y la intención o propósito que llevaron al legislador a dictarla.

91. En cuanto al sentido gramatical se expresó que va enteramente de acuerdo con el fin que se persigue, por lo que no habrá duda sobre la aplicación de la ley; pero si, examinados los propósitos del legislador, se encuentra una palpable contradicción entre estos propósitos, y el aparente significado de las palabras empleadas, todo hace suponer que esta significación no es la real y debe procurarse, preferentemente, por descubrir cuál fue la voluntad manifestada en el precepto legal, ya que de acuerdo ella (sic), es como debe decidirse la controversia.

92. Así, para el Pleno de Circuito la interpretación adicional cobra actualización, cuando el texto de la ley presenta distintos sentidos; por tanto, se exige un ejercicio de confrontación de supuestos y precisar el motivo por el que se elige alguno de ellos.

93. De esta manera, quedan descartadas las posibilidades contradictorias, incoherentes o irrealizables de acuerdo al contexto de aplicación de la norma jurídica.

94. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,[3] se ha pronunciado en el sentido de que no es posible aceptar, como medio o sistema interpretativo de una ley, aquel que descansa sobre la tesis construida con base en un criterio inmóvil, meramente letrista y gramatical, porque ello equival-

[2] Tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Quinta Época, registro digital: 810508, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo XVIII, materia común, página 116, con el rubro: "INTERPRETACIÓN DE LA LEY."
[3] 90. Quinta Época, registro digital: 299978, Primera Sala, tesis aislada, *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo CIV, página 984, "INTERPRETACIÓN DE LA LEY."

dría a entorpecer la evolución social siempre en constante progreso, sino el que deriva de la nueva tesis móvil y progresiva que permite interpretar los preceptos legislativos, hasta donde su texto lo admite, alrededor de las modernas ideas advenidas al campo de la ciencia jurídica y de las recientes formas y necesidades aparecidas en la vida social.

95. Por lo que corresponde al segundo supuesto de excepción, esto es, la insuficiencia del fundamento legal, se estima actualizada cuando del texto de la ley o bien de su interpretación no es posible establecer la hipótesis concreta aplicable al caso.

96. En tal virtud, se genera incertidumbre para los gobernados, porque se desconocen los requisitos a los que debe atender para el caso concreto, resultando relevantes las características particulares y grado de especialización que en muchos casos no permiten amoldar de manera inmediata la adecuación de la norma.

97. Además, la insuficiencia en el fundamento legal puede presentarse inclusive cuando no existe norma que lo resuelvan (sic), es decir, cuando el aspecto central de la controversia carece de regulación, que es lo que conocemos como lagunas legales.

98. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,[4] se ha pronunciado en el sentido de que existe una laguna normativa cuando el legislador no regula un supuesto de hecho específico, de tal forma que un caso concreto comprendido en ese supuesto no puede ser resuelto con base en normas preexistentes del sistema jurídico.

99. En cambio, sostuvo que una omisión legislativa se presenta cuando el legislador no expide una norma o un conjunto de normas estando obligado a ello por la Constitución. Así, mientras las lagunas deben ser colmadas por los

[4] Décima Época, registro digital: 2016420, Primera Sala, tesis aislada, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 52, Tomo I, marzo de 2018, materia constitucional, tesis: 1a. XIX/2018 (10a.), página 1095, "DIFERENCIAS ENTRE LAS LAGUNAS NORMATIVAS Y LAS OMISIONES LEGISLATIVAS."

Jueces creando una norma que sea aplicable al caso (o evitando la laguna interpretando las normas existentes de tal forma que comprendan el supuesto que se les presenta), una omisión legislativa no puede ser reparada unilateralmente por los tribunales, pues éstos no tienen competencia para emitir las leyes ordenadas por la Constitución, por lo que es el órgano legislativo quien debe cumplir con su deber de legislar.

100. Así, el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, contempla una prerrogativa para el gobernado, porque para impugnar una resolución jurisdiccional tiene la posibilidad de interponer el recurso ordinario o acudir al juicio de amparo; cuando el precepto legal que prevé el recurso o medio de defensa se sujete a una interpretación adicional, por requerir la interpretación conjunta de otros preceptos, o bien, cuando el fundamento legal que prevé el recurso o medio de defensa es insuficiente para determinar su procedencia, por requerir de otros fundamentos legales.

101. Entonces, la opción a interponer el recurso o acudir al amparo fortalece el derecho humano a un recurso eficaz, rápido, sencillo y desde luego, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, puesto que desvanece la posibilidad de que el gobernado quede en estado de indefensión.

102. Se estima que la intención del legislador en el diseño de los referidos supuestos de excepción al principio de definitividad, atendió a generar el máximo estándar de seguridad jurídica frente normas (sic) que no resultan claras y que por su grado de complejidad o falta de previsión, automáticamente colocan al gobernado ante la posibilidad de perder la oportunidad de controvertir, una resolución jurisdiccional, por la obligación de interponer un recurso sujeto a interpretación adicional o cuyo fundamento para su procedencia es insuficiente.

103. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,[5] al resolver la contradicción de tesis 102/2017, se pronunció en cuanto a la porción

[5] Décima Época, registro digital: 2017693, Instancia: Primera Sala. Tesis: jurisprudencia. Fuente: *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 57, Tomo I, agosto de 2018, materia común, Civil, tesis: 1a./J. 40/2018 (10a.), página 886. "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO

normativa de la Ley de Amparo que nos ocupa, señalando que el legislador federal, buscó privilegiar el derecho de acceso a la justicia, en su vertiente de adecuada defensa, para no afectar al gobernado negándole la vía de amparo, en aquellos casos en que la propia legislación ordinaria aplicable no fuere clara y suficiente sobre la procedencia de un recurso o medio de defensa que le permitiera obtener la revocación, modificación o nulidad del acto de autoridad que afecta su esfera jurídica; de modo que fuere bastante para exentar al quejoso de la exigencia de agotar el principio de definitividad.

104. Se estableció que precisamente, el hecho de que la procedencia del recurso o medio de defensa requiriera una justificación interpretativa adicional a la simple y llana aplicación de la ley, pues si el Juez de amparo, para sustentar su determinación sobre la procedencia de un recurso o medio de defensa ordinario contra el acto reclamado, requiere hacer un ejercicio hermenéutico del sistema jurídico, significa que el texto de la norma, por sí, no fue suficiente para determinar dicha procedencia, y esa sería la evidencia más clara de que el solicitante del amparo no tenía certeza sobre dicha procedencia de recurso, y de que se está en el supuesto de excepción al principio de definitividad que el legislador reguló en el último párrafo de la fracción examinada.

105. Luego, al resolver la contradicción de tesis 298/2015,[6] destacó que el gobernado no está obligado a conocer la ley aplicable de manera tal que, se le deba exigir la adquisición del conocimiento específico sobre el recurso que efectivamente corresponda contra un determinado acto dentro del procedimiento, cuando la norma no lo prevé expresamente.

106. Agregó que tampoco es razonable que el quejoso deba conocer los métodos de interpretación que se obtienen de los distintos componentes de la

1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."

[6] La ejecutoria que dio origen a la Jurisprudencia 1a./J. 60/2016 (10a.), publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 36, Tomo II, noviembre de 2016, Décima Época, página 864, con registro digital: 2013065, de título y subtítulo: "IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA) ORDENADA EN EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIONES FEDERAL Y DEL ESTADO DE VERACRUZ)."



norma para definir con certeza el recurso ordinario aplicable a un determinado acto, pues éstos deben quedar claramente precisados o bien, que para acceder a ese conocimiento baste hacer una interpretación simple de la norma, como en un sentido gramatical, afirmativo o negativo.

107. Empero, sostuvo que no es jurídicamente correcto exigir al quejoso que interprete el sentido de un precepto en relación con el contenido de otro, para deducir la procedencia de un recurso contra un determinado acto no previsto como impugnable en la ley, lo que supone además un avance al principio de progresividad de las normas para acceder al servicio de administración de justicia bajo la óptica de la Ley de Amparo vigente.

108. De esta forma, se expresó, que la actualización de cualquiera de esas hipótesis supondría una excepción al principio de definitividad, puesto que el quejoso no estaría obligado a interponer los recursos ordinarios de manera previa a promover el juicio de amparo.

109. Ahora bien, en el problema jurídico materia de la contradicción de tesis, la cuestión litigiosa parte de que se reclamó una sentencia dictada dentro de los autos de un juicio ordinario civil, concretamente una acción relacionada con el cumplimiento de un contrato de arrendamiento, de la que derivó una condena a la desocupación y entrega del inmueble, así como al pago de diversos conceptos estimables pecuniariamente.

Fundamentos del recurso de apelación.

110. La normatividad que prevé la procedencia del recurso de apelación, se encuentra establecida en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, concretamente (sic) los artículos 626 y 168 que disponen:

"**Artículo 626.** Cuando el negocio sea estimable pecuniariamente, las resoluciones judiciales solo serán apelables si el importe de aquél excede de 500 Unidades de Medida y Actualización. Para los efectos de este artículo el importe del negocio se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 de este código.

"Las sentencias que fueren recurribles conforme al primer párrafo de este artículo, serán apelables en efecto suspensivo.

"Sólo serán apelables los autos e interlocutorias si la sentencia fuere susceptible de apelación o lo disponga la ley.

"Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables."

"**Artículo 168.** Para determinar la competencia por razón de la cuantía del negocio, se tendrá en cuenta únicamente lo que demande la parte actora como suerte principal a la fecha de la interposición de la demanda."

111. De los numerales transcritos se obtiene que la procedencia del recurso de apelación se determina en atención a dos categorías claramente definidas en el artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, a saber:

112. a) Cuando se trate de negocios estimables pecuniariamente, en cuyo caso, las resoluciones judiciales sólo serán apelables si el importe de aquél excede de 500 Unidades de Medida y Actualización; y

113. b) Los asuntos de cuantía indeterminada, que siempre serán apelables.

114. Como se observa, el legislador estableció el sistema de apelación que rige en materia civil atendiendo a un aspecto cuantitativo, de manera que la procedencia del recurso dependerá de la cuantía del negocio reclamado a la fecha de presentación de la demanda o de su indeterminación.

115. De donde se sigue que la fijación de la cuantía constituye un elemento esencial en la procedencia o no del recurso de apelación y, por ello, es natural que en la misma norma, el legislador haya precisado con exactitud la regla específica que deberá observarse a efecto de establecer el importe del negocio, haciendo una remisión expresa al artículo 168 de la misma codificación, con la finalidad de proporcionar certeza jurídica en cuanto a la impugnación de las resoluciones judiciales.

116. Envío normativo directo que permite conocer el método a emplear para determinar la cuantía del negocio para la procedencia o no del recurso de apelación, que requiere tomar en cuenta, cuando el negocio es estimable pecu-

niariamente, únicamente lo que demande la parte actora como suerte principal a la fecha de la interposición de la demanda, sin ninguna otra distinción, como por ejemplo, la naturaleza de la acción ejercitada.

117. La cohesión entre las disposiciones mencionadas permite afirmar que para desentrañar su significado no es necesario acudir al contenido de otras normas, ubicadas fuera de su contexto jurídico, pues denota la claridad del legislador al diseñar un sistema completo para la procedencia de apelación, que permite determinar si las resolución judiciales son apelables, en atención a las reglas y criterios de clasificación anteriormente descritos.

Reglas para la procedencia del recurso.

118. Sentado lo anterior, es necesario dilucidar si el artículo 169 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua es aplicable o no para determinar la cuantía del juicio para efectos de la procedencia del recurso de apelación.

119. El referido numeral, contemplado en el Capítulo II, intitulado "Reglas para la fijación de la competencia" del título tercero denominado "Competencia", establece que cuando se trate del ejercicio de acciones derivadas de actos o contratos en que se pacten prestaciones o pensiones periódicas, se computará el importe del negocio atendiendo al monto de un año, aún cuando sólo se reclamen algunas de ellas.

120. Como se ha visto, los artículos 626 y 168 del código adjetivo civil, que integran el sistema de apelación no genera dudas en cuanto a su sentido y significado, al precisar que para fijar la cuantía para efectos de la procedencia del recurso de apelación, solamente se requiere constatar si en la demanda se reclama o no alguna prestación liquidable por concepto de suerte principal, hasta la fecha de presentación.

121. En la redacción del último precepto, el legislador utilizó la locución "suerte principal" para referirse al valor del litigio, identificándolo con el capital principal señalado en el escrito inicial. Luego, es aplicable por igualdad de razón, el criterio jurisprudencial 1a./J. 136/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual estableció que el término

"suerte principal" contenido en el numeral 1339 del Código de Comercio tiene un contenido de carácter pecuniario y, por tanto, no debe ser entendido como sinónimo de prestación principal o aquella reclamada en primer lugar, sino en referencia a la deuda principal, que no es otra cosa que la consecuencia directa del incumplimiento de una obligación reclamada como prestación principal, distinta a los intereses y accesorios.

122. La jurisprudencia invocada corresponde a la Décima Época, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, página 429, con número de registro digital: 2004060, de rubro y texto:

"PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE COMERCIO RESPECTO DE ACCIONES DECLARATIVAS COMO LA RESCISIÓN DE UN CONTRATO, CUANDO SE RECLAME CON OTRAS PRESTACIONES DE CARÁCTER PECUNIARIO.—De los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2011, deriva que el legislador previó el sistema de impugnación en materia mercantil atento a un aspecto cuantitativo, pues determinó que sólo serán recurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda del mínimo establecido en la ley por concepto de 'suerte principal', esto es, la procedencia del recurso o medio de defensa depende de la cuantía del negocio reclamado a la fecha de presentación de la demanda o de su ausencia; de ahí que al término de 'suerte principal' el legislador atribuyó un contenido de carácter pecuniario. Por su parte, las acciones declarativas tienen por objeto la pretensión de obtener por intervención judicial, la fijación, el reconocimiento o desvanecimiento, mediante una declaración jurisdiccional, de un hecho, derecho u obligación. No obstante la esencia de estas acciones, los efectos que puedan producir no se restringen al ámbito declarativo, sino que pueden generar obligaciones pecuniarias, como sería el caso de la rescisión de un contrato. Atento a lo anterior, la intención del legislador al utilizar el concepto de 'suerte principal', no fue como sinónimo de prestación principal o aquella reclamada en primer lugar, sino que se refiere al importe de la deuda principal, que no es otra cosa que la consecuencia directa del incumplimiento de una obligación reclamada como prestación principal, distinta a los intereses y accesorios."

123. En ese tenor, es evidente que al regular el sistema previsto en ambos numerales el legislador definió la apelabilidad de las resoluciones conforme al

valor de las prestaciones económicas que se reclamen como suerte principal a la fecha de presentación de la demanda, sin tomar en cuenta ninguna otra clasificación basada en conceptos diferentes, como prestaciones periódicas y las que no lo son, pues de haberlo ideado de esa forma, lo hubiera señalando expresamente.

124. Entonces, conforme al principio general de derecho que señala: "donde la ley no distingue, el juzgador tampoco puede distinguir", no es necesario diferenciar entre la naturaleza de las acciones deducidas para determinar la procedencia de la apelación. Por lo que introducir a ese sistema una clasificación como la que se desprende del artículo 169 de la referida codificación, equivaldría ya no a interpretar sino a integrar una norma de diferente contenido a la expresamente indicada por el legislador, mediante la introducción de una clasificación distinta para justificar la procedencia del recurso.

125. De ahí que no se justifique acudir a una interpretación adicional del artículo 169 del código procesal civil local, que regula una materia distinta (competencia por cuantía), a efecto de establecer el importe del negocio para efectos de la procedencia del recurso de apelación.

126. Bajo otra óptica, basta subrayar que el sistema conformado por los artículos 626 y 168 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua pertenece a un ámbito de aplicación distinto al numeral 169 –el primero regula la procedencia del recurso de apelación y la segunda (sic) se refiere a la competencia por cuantía–, para descartar la idea de un posible conflicto de normas susceptible de ser solucionado atendiendo a una regla de especialidad, pues no están relacionados ni constituyen una unidad lógica y menos identidad de materia.

127. En otras palabras, el hecho de que la disposición contenida en el numeral 169 del código procesal civil sea más concreta que la señalada en el numeral 168, como apuntó uno de los Tribunales Colegiados contendientes, sólo tiene relevancia para la regulación de la competencia por cuantía, pero de ningún modo para incluirlo al sistema legal que regula expresamente la procedencia del recurso de apelación, ya que el principio de especialidad sólo puede operar cuando se trate de normas del mismo ámbito, como condición lógica.

128. Por tanto, en las reglas para la apelación no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 169 del Código de Procedimientos Civiles para Chihuahua.

Inclusión de la "Unidad de Medida y Actualización" en el sistema del recurso de apelación.

129. El diverso tópico materia de la contradicción se reduce a determinar si la procedencia del recurso de apelación a que alude el artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua se sujeta a interpretación adicional, por señalar la "Unidad de Medida y Actualización" como parámetro para calcular el monto específico para la admisión del recurso, tratándose de negocios estimables pecuniariamente.

130. Al respecto, debe decirse que la inclusión de ese referente económico no genera incertidumbre sobre la procedencia del recurso ni requiere realizar un ejercicio interpretativo distinto a la simple y llana intelección de la norma, pues basta con multiplicar la cantidad de quinientos por el valor de la Unidad de Medida y Actualización, al momento de presentación de la demanda.

131. Para ello, es innecesario que acuda a la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, pues no corresponde al gobernado determinar dicho valor ni requiere mayores conocimientos sobre la forma en que se fija, debido a que el mismo se encuentra publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo que le permite conocer en todo momento el valor que tiene en determinada fecha, sin necesidad de interpretar en forma sistemática el código adjetivo civil local, en relación con distintos ordenamiento legales.

132. De ahí que la mención de la Unidad de Medida y Actualización en la norma que prevé la procedencia del recurso de apelación no configure la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo.

133. Por los motivos expuestos, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 216, segundo párrafo, 217, segundo párrafo, 225 y 226 de la Ley de Amparo, deben prevalecer, con carácter de jurisprudencia los criterios que a continuación se emiten:

134. IV. Criterios de jurisprudencia que deben prevalecer:

RECURSO DE APELACIÓN. SU PROCEDENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS, NO ESTÁ SUJETA A INTERPRETACIÓN ADICIONAL DE LOS ARTÍCULOS 626 Y 168 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si debía o no agotarse el recurso de apelación previsto en el artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, antes de acudir al juicio de amparo, cuando se trate de sentencias dictadas dentro de un juicio ordinario civil por falta de pago de rentas, y llegaron a conclusiones diferentes, ya que uno sostuvo que debe agotarse el recurso de apelación porque el precepto legal citado es suficiente para determinar la procedencia, sin necesidad de interpretación adicional, mientras que el otro resolvió que se actualiza una excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debido a que es necesario interpretar dicho artículo con la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización y los diversos 168 y 169 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Criterio jurídico: El recurso de apelación regulado en el artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua procede contra las resoluciones recurribles cuando el negocio sea estimable pecuniariamente y su importe exceda de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Justificación: Para efectos de su aplicación, el mismo precepto hace una remisión expresa al artículo 168 del mismo Código, en el que se indica que para determinar la cuantía del juicio se tendrá en cuenta únicamente lo que demande la parte actora como suerte principal a la fecha de la interposición de la demanda. Además, es irrelevante si las acciones deducidas guardan o no identidad con las que menciona el diverso 169 del código procesal civil, es decir, aquellas que deriven de contratos en los que se pacten prestaciones o pensiones periódicas. Lo anterior es así, porque la cohesión entre las disposiciones mencionadas permite afirmar que para comprender su significado es innecesario acudir al contenido de otras normas ubicadas fuera de su contexto jurídico, dada la claridad del legislador al diseñar un sistema impugnativo completo y expreso que permi-

te discernir las reglas de procedencia aplicables, atendiendo a la literalidad de ambas normas, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, al no requerir de una interpretación adicional; además, porque al regular aquel medio de impugnación el legislador no tuvo en cuenta alguna clasificación basada en determinados conceptos, ya que de haberlo ideado de esa forma, lo hubiera señalando expresamente. Entonces, conforme al principio general de derecho que dispone: "donde la ley no distingue, el juzgador tampoco puede distinguir", no es necesario diferenciar entre la naturaleza de las acciones deducidas para determinar la procedencia de la apelación en razón de la cuantía. En el mismo sentido, es evidente que el sistema conformado por los artículos 626 y 168 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua pertenece a un ámbito de aplicación distinto al del artículo 169, ya que el primero regula la procedencia del recurso de apelación y el segundo se refiere a la competencia por cuantía, lo que permite descartar la idea de un posible conflicto de normas susceptible de ser solucionado atendiendo a una regla de especialidad, pues no están relacionados ni constituyen una unidad lógica y menos identidad de materia. Por tanto, el artículo 169 del cuerpo de leyes en consulta no es aplicable para determinar en qué casos procede o no el recurso de apelación ni justifica llevar a cabo una interpretación adicional del sistema normativo que regula de manera clara y explícita ese aspecto.

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si debía o no agotarse el recurso de apelación previsto en el artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, antes de acudir al juicio de amparo, cuando se trate de sentencias dictadas dentro de un juicio ordinario civil por falta de pago de rentas, y llegaron a conclusiones diferentes, ya que uno sostuvo que debe agotarse el recurso de apelación porque el precepto legal citado es suficiente para determinar la procedencia, sin necesidad de interpretación adicional, mientras que el otro resolvió que se actualiza una excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de am-

paro, debido a que es necesario interpretar dicho artículo con la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización y los diversos 168 y 169 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Criterio jurídico: La sentencia definitiva dictada en un juicio ordinario civil por falta de pago de rentas, cuando el importe de la suerte principal resulte superior a las 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a la fecha de interposición de la demanda, es apelable en términos del artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, en relación con el diverso 168 de la misma codificación, por lo que el quejoso tiene obligación de interponer ese medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo, en cumplimiento al principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.

Justificación: Es así, porque el capítulo que regula el recurso de apelación sólo condiciona su procedencia contra las sentencias emitidas en asuntos de cuantía determinable, es decir, el importe de lo que demande la parte actora por concepto de suerte principal sobrepase las Unidades de Medida y Actualización señaladas, sin hacer ninguna otra distinción o exclusión con base en la naturaleza de la acción ejercitada. Entonces, conforme al principio general de derecho que señala: "donde la ley no distingue, el juzgador tampoco puede distinguir", se concluye que el recurso de apelación es procedente en el supuesto mencionado, sin importar que las acciones deducidas se relacionen con un contrato de arrendamiento o se demande exclusivamente el pago de rentas insolutas.

RECURSO DE APELACIÓN. LA INCLUSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE ESTABLECE SU PROCEDENCIA, NO REQUIERE DE INTERPRETACIÓN ADICIONAL PARA FIJAR EL MONTO A QUE ALUDE EL PROPIO PRECEPTO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si debía o no agotarse el recurso de apelación previsto en el artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua antes de acudir al juicio de amparo, cuando se trate de sentencias dictadas dentro de un juicio ordinario civil por falta de pago de rentas, y llegaron a conclusiones diferentes, ya que uno sostuvo que debe agotarse el recurso de apelación porque el pre-

cepto legal citado es suficiente para determinar la procedencia, sin necesidad de interpretación adicional, mientras que el otro resolvió que se actualiza una excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debido a que es necesario interpretar dicho artículo con la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización y los diversos 168 y 169 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Criterio jurídico: El artículo 626 mencionado, al establecer la procedencia del recurso de apelación contra las sentencias dictadas en juicios ordinarios civiles estimables pecuniariamente, siempre que el importe del negocio exceda de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), no obliga al quejoso a realizar un ejercicio interpretativo distinto a la simple intelección de la norma, ni es necesario que acuda a la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización o desentrañar el procedimiento a seguir hasta fijar su importe.

Justificación: Lo anterior, porque se trata de valores que se encuentran publicados en el Diario Oficial de la Federación y son del conocimiento público. En consecuencia, el justiciable puede conocer en todo momento el valor que la Unidad de Medida y Actualización tiene en determinada fecha, sin necesidad de realizar una interpretación sistemática del código adjetivo civil local, en relación con algún otro ordenamiento legal. De ahí que la mención de ese factor de actualización en la norma que prevé la procedencia del recurso de apelación contra las resoluciones pronunciadas en juicios de cuantía determinada no configure la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo.

Es menester aclarar que, de conformidad con el ordinal 226, último párrafo, de la Ley de Amparo, la presente determinación no afecta las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se dictaron las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO.—Existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito.

SEGUNDO.—Deben prevalecer, con carácter de jurisprudencia, las tesis sustentadas por este Pleno del Decimoséptimo Circuito.

Notifíquese; remítase testimonio de la presente ejecutoria, a los Tribunales Colegiados de Circuito que sostuvieron los criterios contradictorios y a la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su publicación en el *Semanario Judicial de la Federación* y en su *Gaceta*; en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvieron, por mayoría de cuatro votos de los Magistrados José Elías Gallegos Benítez (ponente), María del Carmen Cordero Martínez, José Martín Hernández Simental y Refugio Noel Montoya Moreno, con voto concurrente del Magistrado José Martín Hernández Simental. Disidentes: Cuauhtémoc Cuéllar de Luna (presidente) María Teresa Zambrano Calero y Juan Carlos Zamora Tejeda, quienes formularán voto particular.

Nota: Las tesis de jurisprudencia y aisladas P./J. 6/2015 (10a.), 1a./J. 60/2016 (10a.), 2a./J. 12/2016 (10a.), 1a./J. 40/2018 (10a.), XVII.1o.C.T.24 C (10a.) y 1a. XIX/2018 (10a.) citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas, del viernes 18 de noviembre de 2016 a las 10:29 horas, del viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas, del viernes 24 de agosto de 2018 a las 10:32 horas, del viernes 21 de septiembre de 2018 a las 10:30 horas y del viernes 16 de marzo de 2018 a las 10:19 horas, respectivamente.

La tesis aislada 2a. IV/2016 (10a.) citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 11 de marzo de 2016 a las 10:10 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 28, Tomo II, marzo de 2016, página 1293, con número de registro digital: 2011247.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Voto particular minoritario que formulan los Magistrados María Teresa Zambrano Calero, Cuauhtémoc Cuéllar de Luna y Juan Carlos Zamora Tejeda, en la contradicción de tesis 7/2019.

Disentimos del criterio adoptado por la mayoría, por las razones que se detallan a continuación.

La presente contradicción se centró en determinar si en los juicios de carácter civil donde se reclamen el pago derivado de un contrato de arrendamiento, el recurso de apelación previsto en el artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, establece una mecánica legislativa que amerita o no una interpretación adicional que excluiría la obligación de agotar dicho medio de defensa para este tipo de asuntos.

En la jurisprudencia 2a./J. 86/2018 (10a.), la Segunda Sala de nuestro Alto Tribunal se pronunció en el sentido de que en caso de que se carezca de fundamento legal suficiente o haya necesidad de acudir a una interpretación adicional para determinar la procedencia de un recurso, el quejoso quedará en libertad de elegir si lo agota o acude directamente al juicio de amparo.[1]

Mientras que, en relación a la interpretación adicional, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[2] ha establecido lo siguiente:

---

[1] "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de 'fundamento legal insuficiente' y haya necesidad de acudir a una 'interpretación adicional' para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla." [Décima Época, registro: 2017808, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo I, página 971]

[2] Contradicciones de tesis 102/2017 y 298/2015.



1. La insuficiencia del fundamento legal, se estima actualizada cuando del texto de la ley o bien de su interpretación no es posible establecer las hipótesis concreta (sic) aplicable al caso.

2. Si el juzgador requiere efectuar una justificación interpretativa adicional, a través de un ejercicio hermenéutico del sistema jurídico, significa que el texto de la norma, por sí, no es suficiente para determinar dicha procedencia, lo que hace patente la falta de certeza al respecto y que se está en el supuesto de excepción al principio de definitividad.

3. Al particular no le es exigible un conocimiento específico sobre el recurso que efectivamente corresponda, cuando la norma no lo prevé expresamente.

4. No es razonable que el quejoso deba conocer los métodos de interpretación que se obtienen de los distintos componentes de la norma para definir con certeza el recurso ordinario aplicable, pues éstos deben quedar claramente precisados o bien, que **baste hacer una interpretación simple de la norma (sentido gramatical, afirmativo o negativo)**.

5. No es exigible que el quejoso **interprete el sentido de un precepto en relación con el contenido de otro**, para deducir la procedencia de un recurso contra un determinado acto no previsto como impugnable en la ley.

En el caso, la razón neurálgica del criterio adoptado por la mayoría consiste en que para determinar la procedencia del recurso de apelación previsto en el artículo 626, no es necesario llevar a cabo una interpretación adicional, ya que al hacer una remisión expresa al numeral 168 de la propia codificación se conforma el sistema de apelación, que no genera dudas en cuanto a que para fijar la cuantía para efectos del citado recurso, solamente se requiere constatar si en la demanda se reclama o no alguna prestación liquidable por concepto de suerte principal, hasta la fecha de presentación.

Por ende, concluyó que el artículo 169 trata de un tema diverso, al contemplar cuestiones de competencia por cuantía y que atender a su contenido implicaría introducir al sistema de apelación un dispositivo no previsto por el legislador para la procedencia del medio de defensa.

Sin embargo, contrario a esa afirmación fue el propio legislador quien remitió en una dirección sistemática a otro capítulo del código; de tal suerte, es una inconsistencia argumentativa el afirmar que el numeral 169 no pudiera guardar relación con el sistema de apelación, sólo por el hecho de encontrarse en el

apartado de competencia; pues el artículo 626 se complementa con las cuestiones de cuantía previstas en el artículo 168 (de competencia).

En ese contexto, si la multicitada remisión **se limitó a uno de los dos dispositivos que regulan la competencia por cuantía**, se genera como consecuencia la dubitabilidad en cuanto a si para efectos de la procedencia del recurso de apelación, dichos numerales deben integrarse de manera complementaria, tomarse en cuenta en conjunto, o bien sólo sujetarse a lo dispuesto en el primero de ellos.

De ahí que en la respuesta no pudiera tenerse como soporte únicamente al artículo 168, sino como sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, a dicho numeral podría sumarse la previsión contenida en el diverso 169, en la medida que ambos contemplan aspectos de cuantía, lo que hace necesaria una interpretación adicional y conjunta.

Tan es así, que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, en la ejecutoria de origen atendió al artículo 169, pues detalló que aun cuando el numeral 626 remite a la regla general instituida en el artículo 168 –para determinar la competencia por razón de cuantía–, no menos cierto era que el diverso 169 contiene una regla específica, al disponer que cuando se trate de acciones derivadas de actos o contratos en que se pacten prestaciones o pensiones periódicas se computará el importe del negocio de acuerdo al monto de un año, aun cuando sólo se reclamen algunas de ellas; a la cual se ciñó, dado que en el juicio de origen se demandó el pago de rentas vencidas y las que se siguieran venciendo.

Por tanto, la forma en la que se debió resolver implicaba reconocer esa dubitabilidad o posibilidad de realizar una interpretación adicional para entender la procedencia del recurso de apelación y que, por ende, resultaba optativo elegir entre agotar el recurso de que se trata o acudir directamente al juicio de amparo, en los términos desarrollados en la jurisprudencia citada con antelación.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 86/2018 (10a.) citada en este voto, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 7 septiembre de 2018 a las 10:16 horas.

Este voto se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Voto concurrente del Magistrado José Martín Hernández Simental en la contradicción de tesis 7/2019.

Coincido con el sentido del proyecto aprobado por la mayoría, además de las razones que se contienen en la resolución, por las siguientes que formulo como voto concurrente.

La contradicción de tesis que nos ocupa, se presentó a fin de dilucidar: "DETERMINAR SI CONFORME EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, CUANDO SE TRATE DE ACCIONES DERIVADAS DE ACTOS O CONTRATOS EN QUE SE PACTEN PRESTACIONES O PENSIONES PERIÓDICAS, O BIEN, CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PORQUE ES NECESARIO LLEVAR A CABO UNA INTERPRETACIÓN ADICIONAL DE ESTE PRECEPTO CON DIVERSAS DISPOSICIONES JURÍDICAS, PARA COMPUTAR EL IMPORTE DEL NEGOCIO."

A. CRITERIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DEL TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

En su criterio, se consideró que el quejoso previo a la promoción del amparo debió agotar el principio de definitividad e interponer el recurso de apelación, previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua.

Para justificar esa aseveración, reprodujo los artículos 624, 625, 626 y 169 del código en cita, de los que se advirtió que tal recurso tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia examine si en la resolución apelada se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de la prueba, o si se alteraron los hechos; y en vista de ello, se confirme, revoque o modifique la resolución apelada.

Además, que tratándose de sentencias debe admitirse en efecto suspensivo y cuando el negocio sea estimable pecuniariamente, como en ese caso, atento a que la autoridad responsable condenó al quejoso a pagar las cantidades referidas por concepto de rentas mensuales no pagadas, más el 5% (cinco por ciento) correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio de dos mil diecisiete, además de las rentas vencidas y no pagadas que se siguieran generando hasta la total desocupación del inmueble objeto de la acción, cuyo importe excedía de 500 Unidades de Medida y Actualización.

En ese sentido, se destacó que la condena impuesta era estimable pecuniariamente, pues la acción derivaba de prestaciones periódicas, como el pago de rentas

mes con mes, excediendo además su importe de las 500 Unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el numeral 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua.

En virtud de lo anterior, puntualizó que si bien el referido precepto remitía a la regla general prevista en el artículo 168 del mismo ordenamiento legal; no menos cierto resultaba que el diverso artículo 169 del citado cuerpo de leyes, hacía alusión a la regla específica que se adecuaba al caso concreto, porque dispone que cuando se trate de acciones derivadas de actos o contratos –contrato de arrendamiento– en que se pacten prestaciones o pensiones periódicas –pago de rentas mensuales– se computaría el importe del negocio atendiendo al monto de un año, aun cuando sólo se reclamaran algunas de ellas.

Tomando en cuenta que en el juicio de origen se demandó el pago de rentas vencidas y las que se siguieran venciendo a razón de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, se multiplicó tal monto por los doce meses del año a que se refiere el último de los preceptos citados, dando como resultado la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional).

Asimismo, en relación a las quinientas Unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el numeral 626 reproducido, se precisó que el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "*Decreto por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización*", que en sus artículos 5 y transitorios primero y segundo, dispone que el valor inicial diario de la multicitada unidad sería el publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el veintiocho de enero de dos mil dieciséis (equivalente a $73.04 pesos mexicanos), el cual estaría en vigor en tanto dicho instituto no publicara dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año, el valor diario en moneda nacional de la "UMA".

Así, se tomó en cuenta que el diez de enero de dos mil diecisiete, dicho instituto publicó en el Diario Oficial de la Federación, los valores (diario, mensual y anual) de la referida unidad, siendo el correspondiente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización para el año dos mil diecisiete, el de $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional), el cual, además, se encontraba vigente a partir del uno de febrero de la anualidad en comento.

En tal virtud, se multiplicó el valor de la citada unidad de medida, por las 500 a que se refiere el precepto en mención, dando como resultado la cantidad de $37,745.00 (treinta y siete mil setecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 mo-

neda nacional), precisando que si la cuantía del asunto era de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional); resultaba evidente que en contra de la sentencia que constituye el acto reclamado procedía el recurso de apelación, a través del cual, el solicitante de amparo podía lograr que se modificara o revocara aquélla.

Por lo anterior, se concluyó actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y con fundamento en la fracción V del diverso 63 de la misma ley, se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo.

Apoyó sus consideraciones en la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 95, del Libro 17, Tomo I, «abril de 2015» Décima Época, de la *Gaceta al Semanario Judicial de la Federación*, correspondiente al mes de abril de 2015, con el título y subtítulo: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."

Del anterior criterio surgió la tesis «XVII.1o.C.T.24 C (10a.)» consultable en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 58, Tomo III, septiembre de 2018, Décima Época, página 2498, registro digital: 2017941, de título y subtítulo: "RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO ORAL ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO."

B. CRITERIO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DECIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

En sesión de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, el citado órgano colegiado resolvió el amparo directo civil 287/2019, en el que determinó que el quejoso se encontraba ante una excepción al principio de definitividad.

Previo al estudio, narró los antecedentes que dieron lugar al juicio constitucional, detallando que el acto reclamado en el juicio de amparo era la sentencia de

quince de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos.

Se detalló, que en el fallo resultó procedente la vía ordinaria civil; que la actora acreditó su acción y la demandada demostró parcialmente sus excepciones.

En consecuencia, se condenó a la demandada a la desocupación y entrega del inmueble objeto del juicio, así como al pago de las rentas vencidas y no pagadas a partir del mes de agosto de dos mil dieciocho, y las que se siguieran venciendo hasta la entrega material del inmueble, a razón de $6,200.00 (seis mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) mensual.

También se condenó al arrendatario y al fiador y/o obligado solidario al pago del servicio de agua por el importe de $734.00 (setecientos treinta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) y de energía eléctrica la cantidad de $1,124.00 (mil ciento veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), más lo que se siguiera generando hasta la desocupación de la finca; se detalló que tal importe en ejecución de sentencia debería descontarse de la suma entregada como depósito referido en la cláusula novena del contrato de arrendamiento; es decir, la cantidad de $6,200.00 (seis mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) y para el caso de que el adeudo excediera tal numerario, la diferencia debería ser cubierta por la demandada por la cantidad que se fijara en ejecución de sentencia, y para el supuesto contrario, es decir, que el adeudo fuera menor a la cantidad otorgada en depósito, se dejaron a salvo los derechos de la parte demandada.

Asimismo, en ese fallo, no se declaró la rescisión del contrato de arrendamiento celebrado entre la actora y los demandados; igualmente, se absolvió a la parte demandada del pago de la cantidad que resultara por concepto de pena convencional y/o interés moratorio marcada con la letra d) del escrito inicial; al pago de la cantidad por concepto del pago de los servicios de gas, teléfono, internet y televisión de paga reclamados en el inciso g) del escrito inicial; al pago de los daños y perjuicios reclamados en el inciso h) del escrito inicial y de los gastos y costas del juicio.

Luego, se abordó el estudio de la causal de improcedencia invocada por la parte tercero interesada, por ser obligatorio su análisis, incluso de oficio.

El Tribunal Colegiado de Circuito detalló que el planteamiento consistió en que la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad, toda vez que no



agotó el recurso de apelación que procedía en contra de la sentencia de primer grado, por razón de la cuantía, pues excedía de las quinientas Unidades de Medida y Actualización, como lo disponen los artículos 626, en relación con el 169, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, y como apoyo citó la tesis «XVII.1o.C.T.24 C (10a.)» sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este Circuito, que se identifica con el rubro: "RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO ORAL ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO."

Para evidenciar que se estaba ante una excepción al principio de definitividad, luego de reproducir el numeral 61, fracción XVIII, estableció que la referida norma exige que, cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales administrativos o de trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado.

Concretamente se hizo referencia a que en dicha fracción se consagra el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual exige que el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación.

Sin embargo, precisó que dicho principio prevé algunos casos de excepción como el previsto en el último párrafo de la citada fracción XVIII, que se actualizarán:

a) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o,

b) El fundamento legal sea insuficiente para determinarla.

Seguidamente, citó las consideraciones que sobre el tema sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 60/2016 (10a.), publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 36, Tomo II, correspondiente al mes de noviembre de 2016, Décima Época, página 864, con el registro digital: 2013065, de título y subtítulo: "IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA) ORDENADA EN EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD

DE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DEL ESTADO DE VERACRUZ)."

Entre los argumentos que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se destacó la conclusión normativa de eximir el agotamiento de recursos antes de promoverse el juicio de amparo, sanciona el trabajo legislativo que no regula expresamente la procedencia de algún medio de impugnación contra el acto reclamado, o bien, que para que dicha procedencia sea necesaria una interpretación adicional cuya consecuencia es que el quejoso quede en libertad de optar por interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.

Que tal consideración obedece a que, la falta de previsión expresa del recurso contra un acto o la exigencia de acudir a interpretaciones adicionales constituyen circunstancias carentes de razonabilidad o proporcionalidad para acceder a los recursos, pues incumplen con el principio de interpretación estricta que favorece el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, ya que al final, no brindan certeza ni seguridad jurídica.

Además, que el quejoso no está obligado a conocer la ley aplicable de manera tal que, se le deba exigir la adquisición del conocimiento específico sobre el recurso que efectivamente corresponda contra un determinado acto dentro del procedimiento, cuando la norma no lo prevé expresamente.

En ese contexto, se estableció que tampoco es razonable que el quejoso deba conocer los métodos de interpretación que se obtienen de los distintos componentes de la norma para definir con certeza el recurso ordinario aplicable a un determinado acto, pues éstos deben quedar claramente precisados o bien, que para acceder a ese conocimiento baste hacer una interpretación simple de la norma, como en un sentido gramatical, afirmativo o negativo. Un ejemplo de esta interpretación simple se deduce del recurso de revocación previsto en artículos que proclaman su procedencia frente a los autos contra los cuales no proceda el recurso de apelación, ya que para conocer los casos en que aquel medio de impugnación es procedente, es suficiente una simple interpretación gramatical por exclusión, sin acudir a mayores métodos hermenéuticos.

Empero, la superioridad sostuvo que no es jurídicamente correcto exigir al quejoso que interprete el sentido de un precepto en relación con el contenido de otro, para deducir la procedencia de un recurso contra un determinado acto no previsto como impugnable en la ley, lo que supone además un avance al princi-



pio de progresividad de las normas para acceder al servicio de administración de justicia bajo la óptica de la Ley de Amparo vigente.

De esta forma, el órgano jurisdiccional expresó, que la actualización de cualquiera de esas hipótesis supondría una excepción al principio de definitividad, puesto que el quejoso no estaría obligado a interponer los recursos ordinarios de manera previa a promover el juicio de amparo.

Luego, respecto del recurso de apelación transcribió el contenido de los artículos 624, 625, 616, (sic) 168 y 169 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua.

De tales numerales el citado Tribunal Colegiado concluyó que para determinar la procedencia del recurso de apelación, cuando se trata de sentencias cuyo negocio es estimable pecuniariamente, que a su vez exceda de quinientas Unidades de Medida y Actualización, **es necesario realizar una interpretación adicional**, pues ello no se obtiene de la simple consulta del artículo 626 del indicado Código, que regula expresamente dicho recurso, ya que para conocer su procedencia, requiere que el justiciable acuda tanto a la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, así como al Capítulo II, relativo a las reglas para la fijación de la de competencia del Título Tercero, denominado "Competencia" todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua.

Así, consideró que el arábigo 168 al que remite, señala que para determinar la cuantía del negocio, se tendrá en cuenta únicamente lo que demande la parte actora como suerte principal a la fecha de la interposición de la demanda, no obstante, si la acción se refiere a un contrato de arrendamiento, también requiere desentrañar si debe observarse el siguiente numeral 169, debido a que contempla una regla especial de computar el importe del negocio atendiendo al monto de un año, cuando se trate del ejercicio de acciones de actos o contratos en los que se pacten prestaciones o pensiones, o bien, omitirlo porque aplica sólo para fijar la competencia por cuantía.

En ese contexto, reiteró que para llegar al convecimiento (sic) de la procedencia del recurso de apelación contra la sentencia dictada en un juicio de desocupación de un inmueble por falta de pagos de rentas, no únicamente se necesita considerar la norma que regula expresamente el recurso, sino también realizar una interpretación de diversos numerales.

Así, precisó que en el caso se debe determinar si la cuantía excede de quinientas Unidades de Medida y Actualización, como lo dispone el artículo 626 del Código

de Procedimientos Civiles del Estado, para lo cual debe recurrirse a la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en cuyos artículos 5o. y transitorios primero y segundo, establece que el valor inicial diario de la multicitada unidad se publicaría por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, que estaría en vigor hasta en tanto el instituto no publicara, dentro de los diez días de enero de cada año, el valor diario en moneda nacional de la UMA.

Enseguida, el artículo 626 referido remite únicamente a lo que dispone el diverso 168, al establecer que para determinar la cuantía del negocio se debe atender a lo que se demande como suerte principal, a la fecha de interposición de la demanda.

Con lo anterior se expresó aparentemente se agota el estudio de la procedencia o improcedencia del recurso de apelación en los asuntos que son estimables pecuniariamente; sin embargo, sostuvo que debido a que el asunto deriva de una acción relacionada con un contrato de arrendamiento, tiene que desentrañarse si también aplica lo que dispone el artículo 169 que contiene una regla especial tratándose del ejercicio de acciones derivadas de actos o contratos en que se pacten prestaciones o pensiones periódicas, y al cual no se hace referencia en el diverso 626, como sí lo hace para el 168.

Todo lo anterior permitió concluir que la procedencia del recurso de apelación no era clara, pues no es suficiente con atender a lo que literalmente establece el artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, que regula expresamente dicho medio ordinario de defensa, sino que era preciso justificarla con razonamientos adicionales, como el valor de la Unidad de Medida y Actualización, además analizar una disposición a la cual remite el artículo 626 y otra diversa a la que no hace mención, lo que evidentemente implica una duda o incertidumbre para el justiciable.

De ahí concluyó que se actualizaba una excepción al principio de definitividad, lo que permitía al quejoso interponer el recurso de apelación o acudir al juicio de amparo; por lo que desestimó la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y emprendió el estudio de los conceptos de violación que finalmente declaró inoperantes, negando el amparo y protección de la justicia federal solicitados.

SENTIDO DEL PROYECTO APROBADO POR LA MAYORÍA.

Para el Primer Tribunal en Materias Civil y de Trabajo del Decimo Séptimo Circuito, la sentencia de esa naturaleza es recurrible mediante el recurso de apelación

previsto en el artículo 626 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, en relación con el artículo 169 de la misma codificación, en razón de que el juicio natural es estimable pecuniariamente, por haberse decretado una condena al pago de rentas vencidas, y su cuantía excedió de las quinientas Unidades de Medida de Actualización, atendiendo al monto de un año de pensiones rentísticas. De manera que se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII de la Ley de Amparo, porque antes de acudir al juicio de amparo indirecto el quejoso debió agotar dicho medio ordinario de impugnación.

El análisis de dichos argumentos revela que ese órgano colegiado estableció implícitamente que el fundamento legal del recurso de apelación es suficiente para determinar su procedencia, sin necesidad de interpretación adicional; pues desarrolló su argumentativa a efecto demostrar la procedencia del recurso de apelación en términos de los numerales que citó, para fundar la referida causa de improcedencia. De donde se infiere que, a consideración del órgano colegiado, no se actualizó la excepción al principio de definitividad a que alude el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, aunque propiamente no se expresaron los razonamiento jurídicos que le llevaron a esa conclusión.

En cambio, para el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, se actualizó una excepción al principio de definitividad, debido a que para establecer la procedencia del recurso de apelación contra la sentencia dictada por falta de pago de rentas no basta atender a la literalidad del artículo 626 del código adjetivo civil del Estado de Chihuahua, sino que es necesario realizar una interpretación adicional.

Lo cual sostuvo, al razonar que para conocer si procede o no el recurso de apelación, se requiere que el justiciable acuda tanto a la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, como al arábigo 168 del propio código; además de efectuar un ejercicio interpretativo para desentrañar si el artículo 169, que contempla una regla especial para computar el importe del negocio atendiendo al monto de un año cuando se trate de acciones derivadas de actos o contratos en los que se pacten prestaciones o pensiones periódicas debe observarse como regla de procedencia del recurso o sólo para fijar la competencia.

De ese modo, existe divergencia en la decisión adoptada en lo que atañe a la necesidad o no de agotar el recurso de apelación contra las sentencias dictadas

por falta de pago de rentas en juicios ordinarios civiles, antes de promover el juicio de amparo.

En el mismo sentido, se observan posiciones jurídicas discrepantes en dos tramos, el primero donde los tribunales definieron si por haberse señalado en el artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, la Unidad de Medida y Actualización, como parámetro para determinar la cuantía para la admisión del recurso de apelación en general, se requiere o no de interpretación adicional para establecer la procedencia del recurso, tratándose de asuntos estimables pecuniariamente.

El segundo, se refiere a la aplicabilidad o inaplicabilidad del artículo 169 del código adjetivo civil local, para determinar la procedencia del recurso de apelación, en los asuntos en que se haya reclamado el pago de rentas vencidas y obtenido una condena por el mismo concepto.[1]

1. Sobre el tema, el Primer Tribunal en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, sostiene que ese numeral debe aplicarse para establecer la procedencia del recurso en razón de la cuantía, por aludir a una regla específica que contempla las acciones derivadas de contratos de arrendamiento; mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, considera que es necesario realizar una interpretación adicional del artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, que regula expresamente el recurso de apelación y únicamente hace remisión al numeral 168 del mismo ordenamiento, para determinar si la regla especial prevista en el numeral 169 también debe observarse para determinar la procedencia del medio de impugnación o sólo para fijar la competencia por cuantía, por lo que, en todo caso, se actualizaría una excepción al principio de definitividad que haría optativa su interposición antes de acudir al juicio de amparo.

RAZONES DEL VOTO CONCURRENTE

En cuanto a la síntesis hasta aquí reseñada del proyecto de la mayoría, cabe señalar que se aparta de la invocación del artículo 169 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, para resolver la contradicción.

[1] Con independencia de que no haya sido motivo de interpretación expresa este artículo por ambos tribunales con criterios divergentes.



En esta parte, aun cuando el estudio de uno de los tribunales haya sido implícito, ello no impide resolver la señalada contradicción. Comparto el criterio de la mayoría en cuanto a que el recurso de apelación, en el caso que nos ocupa, no requiere ni remite a la interpretación del artículo 169 del código procesal referido, por los siguientes argumentos.

En primer término, de un estudio analítico, para identificar los presupuestos de procedencia del recurso de apelación, no se advierte la interpretación adicional que realizó el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Laboral (sic) y en el que funda la excepción al principio de definitividad en cuanto a dicho recurso.

En efecto, en primer término para suprimir la necesidad de un recurso previsto por el legislador, deben existir muy buenas razones que jusrtifiquen la excepción al principio de definitividad.

Por una parte, en cuanto a la necesidad de interpretar algunos conceptos de tipo legal o técnico, como sería la Unidad de Medida y Actualización, o que uno de los elementos del recurso remita a un diverso artículo, como motivo para justificar no agotar necesariamente el recurso de apelación, va en contra de precedentes del Máximo Tribunal del país. En efecto, en la ejecutoria correspondiente al siguiente criterio jurisprudencial, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,[2] sostuvo de que el hecho de que inclusive algún

[2] Tesis: 2a./J. 86/2018 (10a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, registro digital: 2017808, Segunda Sala, Libro 58, Tomo I, septiembre de 2018, pag. 971, jurisprudencia (común). "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. "De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de 'fundamento legal insuficiente' y haya necesidad de acudir a una 'interpretación adicional' para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario

medio de defensa, como el incidente, se encuentre en una diversa codificación supletoria, no puede considerarse haga innecesario agotar en ese caso el principio de definitividad.

---

de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla."

CONSIDERACIONES CONDUCENTES DE LA EJECUTORIA CORRESPONDIENTE A LA JURISPRUDENCIA 2017808.

"QUINTO.—Estudio. Acotada así la existencia de la contradicción de tesis, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que sustenta esta Segunda Sala con apoyo en las consideraciones que enseguida se exponen:

"De inicio, se considera oportuno traer a cuenta que el examen de las causas de improcedencia en el juicio de garantías es oficioso, y su estudio se lleva a cabo por el órgano jurisdiccional, lo hagan o no valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que las causales de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, pues sólo por excepción, en los precisos casos que marca ahora el artículo 61 de la Ley de Amparo,(4) puede vedarse el acceso a dicho medio de control constitucional; incluso esta Segunda Sala ha precisado que en aquellos casos en que sea manifiesta e indudable su actualización, es posible decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, fuera de la audiencia constitucional.(5) Pero siempre poniendo en primer orden la más amplia protección de los derechos humanos y garantías del gobernado.

"Ahora, la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo(6) exige que, cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado.

"Esto es, la porción normativa en comento, consagra la figura conocida como principio de definitividad que rige al juicio de garantías, la cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación; salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente.

"En el caso particular, precisamente, el último párrafo de la fracción en análisis contempla, como excepciones a la obligación de agotar el principio de definitividad, dos supuestos, a saber:

"a) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o,

"b) Cuando su fundamento legal sea insuficiente para determinarla.

"Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y de acceso a la justicia, pues fija las bases para que el quejoso sólo esté obligado a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa a través del cual tiene la posibilidad de recurrir el acto que le está causando agravio, no adolezca de 'fundamento legal insuficiente' y tampoco haya necesidad de acudir a una 'interpretación adicional' para determinar su procedencia; de lo contrario, quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo.

"También es oportuno ahora traer a cuenta, de manera esencial, que sobre el acto de 'interpretación' el Pleno de este Tribunal Supremo, en su anterior integración, ha sostenido que el Juez debe tener presentes dos elementos, consistentes en el texto o sentido gramatical de las palabras y la intención o propósito que llevó al legislador a dictar la ley. Así, cuando el sentido gramatical de las palabras va



En efecto, la exigencia de que el recurso sea clara (sic), no se afecta por el uso de elementos de tipo técnico, aun en otras áreas como en la especie las Unidades de Mediadas (sic) y Actualización (UMA), o la remisión a un diverso artículo para clarificar o complementar un concepto legal. Sobre estos aspectos comparto las consideraciones del proyecto de la mayoría.

---

enteramente de acuerdo con el fin que se persigue, no habrá duda sobre su aplicación; pero si examinados los propósitos del legislador, se encuentra una palpable contradicción entre esos propósitos y el aparente significado de las palabras empleadas, todo hará suponer que esa significación no es la real.(7)

"Y por suficiente regulación, debe entenderse aquella que da certeza jurídica a los gobernados de los requisitos que deben satisfacer para tener acceso a un medio de impugnación ordinario cuando precisan impugnar un acto que consideran contrario a derecho; es decir, les garantiza el acceso a un medio de impugnación efectivo, entendido como tal, aquel que es capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido; permitiendo al tribunal competente desarrollar el análisis a efecto de determinar si ha habido o no alguna transgresión al orden jurídico en perjuicio del solicitante y, en su caso, proporcionar una reparación.(8)

"Empero, en el caso particular no habrá que desarrollar el ejercicio de hermenéutica jurídica sobre la existencia de algún medio ordinario efectivo de impugnación, así como la debida y adecuada regulación para su procedencia, pues como bien lo advirtieron los órganos contendientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 14/2001, en la sesión correspondiente al veintidós de junio de dos mil uno, llevó a cabo el estudio sobre la supletoriedad a la Ley Agraria, en términos de su artículo 167 del numeral 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en cuanto autoriza el incidente de nulidad para combatir la ilegalidad de una notificación, donde razonó:

"• El artículo 167 de la Ley Agraria claramente autoriza la aplicación supletoria de la legislación adjetiva civil federal, estableciendo que en cuanto a los procedimientos en materia agraria es aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.

"• Tratándose de notificaciones, la Ley Agraria contiene en el título décimo 'De la justicia agraria', capítulo II, denominado, 'Emplazamientos', los artículos 170 a 177, de cuyo análisis integral se desprende la regulación, sólo en algunos aspectos; esto es, se constriñe a regular lo relativo a las notificaciones que deban ser personales en los juicios agrarios, estableciendo concretamente las formalidades que deben observarse para realizar el emplazamiento o la primera notificación al procedimiento de que se trate, así como para citar a los peritos, testigos y terceros, pero deja de normar otros aspectos que atañen a las notificaciones que se realizan en un procedimiento de esa naturaleza.

"• Para completarlos recurre al Código Federal de Procedimientos Civiles en donde sí se encuentran regulados, como es el caso de las notificaciones que no deben ser personales y de las que sí deben serlo aunque no sean para el emplazamiento, del momento en que deben hacerse las notificaciones, citaciones y emplazamientos, de aquel en que deben surtir efectos tales notificaciones, etcétera, que se contienen en los artículos del 303 al 321, de manera que la aplicación de dicho código adjetivo, además de regular diversos aspectos que no se establecen en la Ley Agraria en cuanto a la materia de notificaciones, es indispensable para complementar sus disposiciones.

"• El artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles contempla la posibilidad de que las partes en un procedimiento impugnen lo actuado a través de un incidente de nulidad a partir de la notificación que considere hecha indebidamente u omitida, sin que en dicho numeral se distinga entre

En cuanto al recurso de apelación, cuyo sistema recursivo se consideró por uno de los tribunales divergentes que no era necesario agotar, cabe señalar que los elementos de procedencia no son oscuros, imprecisos o generan incertidumbre en cuanto al recurso para las partes.

---

notificaciones personales y aquellas que no lo son, de manera que la naturaleza de la notificación no impide que pueda promoverse el incidente aludido por la parte que se considere agraviada.

"• El carácter supletorio de una ley, resulta ser, en consecuencia, una integración y reenvío de una ley especializada a otros textos legislativos generales que fijen los principios aplicables a la regulación de la ley suplida, es así que la supletoriedad implica un principio de economía e integración legislativa para evitar la reiteración de tales principios por una parte, así como la posibilidad de consagración de los preceptos especiales en la ley suplida.

"• La supletoriedad, como técnica procesal en la materia agraria en cuanto se refiere a notificaciones, permite la aplicación de normas del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando en la Ley Agraria no existen preceptos procedimentales expresos sobre ese punto, como en los casos que se han señalado, que aun cuando están contemplados generalmente en el ordenamiento agrario, no se encuentran debidamente regulados o su regulación es deficiente, todo ello en forma que permita su adecuada aplicación y bajo la condición de que la legislación procesal no se contraponga con la agraria.

"• Derivado de lo anterior, si se toma en consideración la regla genérica de la supletoriedad, en el sentido de que sólo es aplicable respecto de aquellas instituciones establecidas por la Ley Agraria, aparentemente no cabría la aplicación de dicha regla en cuanto a la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones, puesto que no existe la posibilidad de impugnación en el referido cuerpo de leyes, empero, no debe perderse de vista que, por una parte, existen diversos aspectos regulados en la legislación agraria en relación con las notificaciones y, por otra, que en el Código Federal de Procedimientos Civiles se establecen normas en cuanto a las notificaciones que tienen aplicación en materia agraria, de manera que si dichas notificaciones se practican observando esa legislación supletoria, el mecanismo que en ésta se prevé para impugnarlas también debe tener aplicación, puesto que la intención del legislador al establecer esa medida es que constituya un instrumento por el que puedan combatirse las actuaciones que se hayan omitido o hayan sido indebidamente practicadas; habida cuenta que, si bien es cierto la creación por el legislador del medio de impugnación de que se habla no se encuentra comprendida en la Ley Agraria, también lo es que ello obedece al principio de economía e integración legislativa para evitar la reiteración de tales principios, así como la consagración de los preceptos especiales en la ley suplida; de ahí que ir en contra de la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles en cuanto a la procedencia del incidente de nulidad en comento, sería no sólo desconocer dichos mecanismos más favorables para las partes en los procedimientos agrarios, sino también tratar de truncar la administración de justicia en nuestro país que debe estar libre de todo estorbo, ser pronta a obrar y sin impedimentos hasta conseguir su finalidad.

"• La aplicación supletoria del artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley Agraria (conforme a su artículo 167), cumple con los requisitos exigidos por la regla genérica para que opere la supletoriedad de la ley, ya que, por una parte, la Ley Agraria contempla la institución respecto de la cual se aplica, es decir, la notificación a las partes, pero no prevé todos los supuestos que pueden darse para su aplicación, es decir, la ley establece, en forma general, lo relativo a las notificaciones, pero deja de regular diversos aspectos específicos remitiendo a ese efecto a la

aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles, como sucede en el caso concreto, en que en aras de agilizar el trámite de los procedimientos agrarios y cumplir así con la obligación que impone el artículo 17 constitucional, de impartir justicia pronta, se permite que las partes impugnen las actuaciones que no hayan sido notificadas o se hayan notificado en forma indebida.

"• La Ley Agraria admite, de manera general, los incidentes como medio de defensa, pero no determina la forma y términos en que se deben hacer valer, pues sólo establece un sistema propio de tramitación, distinto al que regulan otras materias.

"• Es importante resaltar que aunque la Ley Agraria autoriza la procedencia del incidente de nulidad en comento, en aplicación supletoria del artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para su resolución debe observarse lo dispuesto en la legislación agraria que, como se ha establecido, regula lo relativo a las cuestiones incidentales con un sistema especial, esto es, debe resolverse de plano, sin formar artículo de previo y especial pronunciamiento, y conjuntamente con lo principal, a menos que sea necesario decidir ante esa cuestión, de manera que a pesar de que debe considerarse admisible el incidente de nulidad en comento, en su resolución deben observarse la normas especiales que sobre los incidentes establece la Ley Agraria, pues, en este aspecto, no podría acudirse a la suplencia del propio código adjetivo de referencia.

"La ejecutoria acabada de relacionar dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 28/2001, cuyos rubro y texto son:

"'NOTIFICACIONES EN JUICIOS AGRARIOS. ES PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL INCIDENTE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 319 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY AGRARIA, PERO ACATANDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 192 DE ESTA LEY.—Si bien es cierto que la Ley Agraria no establece de manera específica un mecanismo para impugnar las notificaciones omitidas o las que se hayan hecho indebidamente, también lo es que en sus artículos 170 a 177 regula la figura jurídica de las notificaciones, aunque no en todos los aspectos, ya que sólo contiene una serie de disposiciones atinentes a las formalidades que deben cumplirse para efectuar, entre otras, las notificaciones personales, los emplazamientos, la primera cita al procedimiento y las citaciones a los peritos, testigos y terceros, y con relación a los aspectos no regulados permite, en su artículo 167, la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles para normar las notificaciones que no deben ser personales, el momento en que deben hacerse las notificaciones, citaciones y emplazamientos, de aquel en que deben surtir efectos tales notificaciones, etcétera, de manera que la aplicación de dicho código adjetivo, además de regular diversos aspectos que no se establecen en la Ley Agraria en cuanto a la materia de notificaciones, es indispensable para complementar sus disposiciones. Ahora bien, si en los aspectos no consignados expresamente en la ley últimamente citada, debe recurrirse al invocado código procesal, es inconcuso que de igual manera puede aplicarse lo relativo a la posibilidad de impugnar tales notificaciones a través del incidente previsto en su artículo 319, máxime si se considera que las cuestiones incidentales no son ajenas a los procedimientos agrarios, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la ley que los regula es posible que surjan ese tipo de cuestiones, las que únicamente se encuentran constreñidas a resolverse en los términos en que este propio dispositivo señala, es decir, deben decidirse de plano, conjuntamente con el negocio principal, a menos que por su naturaleza sea forzoso resolverlas antes o que se refieran a la ejecución de la sentencia y sin sustanciar artículo de previo y especial pronunciamiento.'(9)

"Jurisprudencia que resulta de observancia obligatoria, entre otros, para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, en términos del párrafo primero del artículo 217 de la Ley de Amparo;(10) sin que exista posibilidad alguna de que esos órganos jurisdiccionales puedan someter a interpretación lo ahí definido; ni siquiera so pretexto del nuevo paradigma de los derechos humanos.

"Admitir lo contrario, sería tanto como aceptar que la labor de intérprete supremo que ejerce el Máximo Tribunal del País, pudiera ser reclamable a través del juicio de amparo, y la obligatoriedad de la jurisprudencia dependiera de lo que en cada caso se determinara; lo que jurídicamente no es viable.
"Sobre el carácter obligatorio de la jurisprudencia, el Tribunal Pleno se ha pronunciado en los términos siguientes:
"'Si bien es cierto que no existe en la Constitución Federal un precepto específico que determine en forma clara la obligatoriedad que tienen las autoridades jurisdiccionales del país, incluidos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, de acatar la jurisprudencia emitida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de una interpretación del párrafo décimo del artículo 94 de nuestra Carta Magna, podemos inferir esa obligación:
"'«Artículo 94.» (se transcribe)
"'La esfera de la obligatoriedad de la jurisprudencia a que se refiere el artículo 94 constitucional transcrito, precisa que únicamente la podrán dictar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Pleno y Salas), los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito, y quedan fuera del círculo el resto de las autoridades; de manera que la jurisprudencia por ellos emitida es de carácter inobjetable para todos los tribunales de la República, sujetos a su jerarquía o cuyos actos pueden ser sometidos a sus respectivas jurisdicciones.
"'En efecto, de la disposición reproducida se advierte la obligatoriedad de la jurisprudencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, entre ellos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos de la ley secundaria, la Ley de Amparo; por esa razón, si bien un órgano de grado inferior estaría en posibilidad de declarar inconvencional un precepto secundario del orden jurídico nacional, no es posible admitir que ello también corresponda respecto de una jurisprudencia para él obligatoria, sobre todo, porque si bien la porción normativa del numeral constitucional citado no contiene una restricción expresa al ejercicio de un derecho humano reconocido y cualquiera que sea su fuente, sí contempla una referencia expresa de que la jurisprudencia, en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con la Ley de Amparo señalada, es obligatoria, tal como se indica.
"'Dicha obligación se puede advertir también del párrafo octavo del mismo artículo 94 constitucional:
"'(se transcribe)
"'En conclusión, es posible establecer que la existencia de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación torna inoperantes las inconformidades que abordan aspectos dilucidados en ella, por ser insoslayable y de aplicación inexcusable, tal como resolvió el órgano jurisdiccional denunciante de la contradicción de tesis en estudio; dado que, al existir jurisprudencia al respecto, con su aplicación se da respuesta integral al tema de fondo.
"'Así, la obligación plasmada en el artículo constitucional citado, concordante con la referencia expresa al actual artículo 217 de la Ley de Amparo, en atención a los derechos humanos de seguridad y certeza jurídica, y a los principios que rigen el juicio de amparo, obliga a todas las autoridades jurisdiccionales a aplicar la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en Salas; sin que ello pugne con las facultades de los Jueces de Distrito para declarar la inconstitucionalidad de una norma o su incompatibilidad con derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de la materia suscritos por el Estado Mexicano en un caso en concreto.
"'Lo anterior, porque a través de la aplicación, en específico, del artículo 217 de la Ley de Amparo, de ninguna manera se limitan las facultades de los Jueces de Distrito, sino que se regula el medio directo de control constitucional de amparo, protegiendo de esta forma la seguridad jurídica, y evitando, en la medida de lo posible, criterios contradictorios.'
"Ejecutoria de la cual derivó la jurisprudencia P./J. 64/2014 (10a.), que textualmente sostiene:



"'JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD *EX OFFICIO* POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA. La obligación de las autoridades jurisdiccionales contenida en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de realizar un control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos y dar preferencia a los contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario contenidas en cualquier norma inferior, no contempla a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el artículo 94 constitucional establece que será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de conformidad con lo que disponga la ley y, en este caso, la Ley de Amparo así lo indica tanto en la abrogada como en el artículo 217 de la vigente; de ahí que no privan las mismas razones que se toman en cuenta para inaplicar una disposición emitida por el legislador cuando viola derechos humanos de fuente constitucional o convencional. Cabe precisar que en los casos en los que se pudiera advertir que una jurisprudencia del Alto Tribunal desatiende o contradice un derecho humano, cualquiera que sea su origen, existen los medios legales para que se subsane ese aspecto. En conclusión, aun partiendo del nuevo modelo de interpretación constitucional, no es posible determinar que la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país pueda ser objeto de la decisión de un órgano de menor grado que tienda a inaplicarla, como resultado del ejercicio de control de convencionalidad ex officio, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica.'(11)

"Entonces, si la Segunda Sala de este Máximo Tribunal ha establecido que es procedente impugnar las notificaciones efectuadas dentro del juicio agrario, mediante el incidente previsto por el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, resulta incuestionable que la jurisprudencia 2a./J. 28/2001, intitulada: 'NOTIFICACIONES EN JUICIOS AGRARIOS. ES PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL INCIDENTE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 319 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY AGRARIA, PERO ACATANDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 192 DE ESTA LEY.', regirá para salvaguardar la seguridad jurídica de las personas que se vean en la necesidad de impugnar tales notificaciones, en tanto tienen la certeza del medio de impugnación y su procedencia.

"Corolario de lo anterior, es dable sostener, que en aquellos casos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiese determinado jurisprudencialmente la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad previstos en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; en razón a que el objetivo de la porción normativa de que se trata, consistente en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, se encuentra satisfecho; y ante el carácter obligatorio que tiene la jurisprudencia conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no da posibilidad alguna de que pueda ser objeto de análisis por parte de un órgano de menor grado, y menos aún que decida inaplicarla.

"En consecuencia, la tesis que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, es la siguiente:

"EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos

En efecto, de acuerdo con el artículo 626[3] del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, los presupuestos procesales de procedencia (o elementos esenciales y comunes que integran el concepto),[4] son:

1.- Es procedente el recuros (sic) de apelación, cuando el negocio sea estimable pecuniariamente y el importe de aquel excede de 500 Unidades de Medida y Actualización.[5]

---

supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de 'fundamento legal insuficiente' y haya necesidad de acudir a una 'interpretación adicional' para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla.
"Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
"PRIMERO.—Existe contradicción de tesis.
"SEGUNDO.—Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, la tesis sostenida por esta Segunda Sala."

[3] "Artículo 626. Cuando el negocio sea estimable pecuniariamente, las resoluciones judiciales solo serán apelables si el importe de aquel excede de 500 Unidades de Medida y Actualización. Para los efectos de este artículo el importe del negocio se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 de este código.
"(Párrafo reformado mediante Decreto No. LXV/RFCLC/0266/2017 I P.E. publicado en el P.O.E. No. 15 del 22 de febrero de 2017)
"Las sentencias que fueren recurribles conforme al primer párrafo de este artículo, serán apelables en efecto suspensivo.
"Sólo serán apelables los autos e interlocutorias si la sentencia fuere susceptible de apelación o lo disponga la ley.
"Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables."

[4] De acuerdo al principio de taxatividad y el de seguridad jurídica reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal ha sido entendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que las normas jurídicas deben ser ciertas y claras, de manera que las personas sepan a qué atenerse en caso de su inobservancia, así como los elementos mínimos para hacer valer sus derechos, y las facultades y obligaciones de la autoridad, para evitar arbitrariedades o conductas injustificadas.

[5] La limitante es racional y proporcional, al guardar coherencia con el contenido de ese derecho en el sentido que pretende que el acceso a la justicia culmine con una sentencia firme de forma expedita y sin dilaciones en asuntos de cuantía menor, aunado a que dicha limitante no obstaculiza dicho derecho, pues los justiciables ya obtuvieron una respuesta por un tribunal imparcial con la sentencia de primera instancia.

2.- **Para los efectos de este artículo** el importe del negocio se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 de este código.

3.- Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables. Este requisito no aplica en la especie

También dispone la cita numérica legal: Sólo serán apelables los autos e interlocutorias si la sentencia fuere susceptible de apelación o lo disponga la ley. Tampoco este supuesto aplica en la especie.

Como se advierte del artículo señalado, para los efectos de éste, remite sólo al diverso 168 del mismo código para fijar el importe del negocio; no introdujo ninguna otra regla, pues **dentro del sistema recursivo de la apelación en negocios de cuantía, para la procedencia derivaría y se tomaría en cuenta únicamente lo que demande la parte actora como suerte principal a la fecha de la interposición de la demanda**. Es decir, estableció la cuantía como requisito de procedencia (cuando el negocio sea estimable pecuniariamente y el importe de aquél excede de 500 Unidades de Medida y Actualización) y lo hizo de manera clara ateniéndose sólo al monto de lo reclamado en la demanda. La intención plasmada del legislador en dicho supuesto de procedencia fue clara, al excluir del recurso los asuntos de cuantía inferior al importe de 500 Unidades de Medida y Actualización.[6]

[6] Tesis: 1a. XCII/2016 (10a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federació*n, Décima Época, registro digital: 2011382, Primera Sala, Libro 29, Tomo II, abril de 2016, pag. 1106, tesis aislada (constitucional, civil).
"APELACIÓN. EL ARTÍCULO 691 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE LA CUANTÍA COMO REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DE ESE RECURSO, NO TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, NI EL ARTÍCULO 8 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.
"Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que si bien a toda persona le asiste el derecho de acudir a los tribunales a dirimir sus controversias y litigios, éste debe ejercerse dentro de los plazos y términos y con los requisitos fijados por el legislador ordinario por medio de las leyes secundarias, los cuales son constitucionales en tanto revistan una racionalidad y proporcionalidad como medida restrictiva de acceso a la jurisdicción. En esa lógica, el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al establecer la cuantía como requisito para la procedencia del recurso de apelación, es compatible con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la limitante es racional y proporcional, al guardar coherencia con el contenido de ese derecho en el sentido que pretende que el acceso a la justicia culmine con una sentencia firme de forma expedita y sin dilaciones en asuntos de cuantía menor, aunado a que dicha limitante no obstaculiza dicho derecho, pues los justiciables ya obtuvieron una respuesta por un tribunal imparcial

Dicho artículo textualmente dice:

"Artículo 168. Para determinar la competencia por razón de la cuantía del negocio, se tendrá en cuenta únicamente lo que demande la parte actora como suerte principal a la fecha de la interposición de la demanda."

---

con la sentencia de primera instancia. Tampoco transgrede las garantías judiciales reconocidas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual contiene cuatro apartados: el primero en el que se reconocen las garantías judiciales mínimas que deben satisfacerse en cualquier tipo de procedimiento judicial; y en los tres restantes se reconocen las garantías mínimas que los Estados se obligan a respetar en los procedimientos de índole penal, de donde deriva que en los asuntos y procedimientos de naturaleza civil no se exige el derecho a recurrir como una garantía judicial; de ahí que el artículo 691 de referencia resulta constitucional y convencional, pues no existe obligación alguna por la cual al legislador doméstico no le sea posible limitar la procedencia del recurso de apelación en juicios de naturaleza civil."

Tesis: 1a. LX/2016 (10a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, registro digital: 2011234, Primera Sala, Libro 28, Tomo I, marzo de 2016, pág. 986, tesis aislada (constitucional, civil).

"JUICIO ORAL MERCANTIL. EL ARTÍCULO 1390 BIS DEL CÓDIGO DE COMERCIO QUE NO PREVÉ EL DERECHO A UNA SEGUNDA INSTANCIA, ES CONSTITUCIONAL.

"El precepto citado prevé que se tramitarán en el juicio oral mercantil todas las contiendas cuya suerte principal sea inferior a la que establece el artículo 1339 del Código de Comercio para que un juicio sea apelable, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda, y que contra las resoluciones pronunciadas en dicho juicio no procederá recurso ordinario alguno. Ahora bien, el artículo 1390 Bis citado, al limitar el derecho a una segunda instancia es constitucional, pues el legislador, al determinar que el juicio oral mercantil es uniinstancial, no excluye el derecho a la doble instancia de forma generalizada, sino que lo hace excepcionalmente, ya que dicha exclusión sólo es aplicable a los juicios orales mercantiles, además de que persigue una finalidad constitucionalmente legítima, pues tiene por objeto hacer el procedimiento mercantil más ágil y eficiente, lo que implica el respeto al principio de una administración de justicia pronta y expedita, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, imprimiéndole celeridad al proceso judicial correspondiente, y encaminada a fomentar la economía procesal y la eficacia de la rama judicial. Además, es una medida razonable, ya que responde a la mayor urgencia de obtener una decisión definitiva y evita los costos que implican juicios prolongados y complejos, ya que tener que agotar necesariamente varias instancias puede provocar demora y más gastos en perjuicio del patrimonio de las partes, lo cual generalmente no se justifica cuando el asunto es de poca cuantía. Asimismo, genera un criterio de selección para el control de legalidad por órganos jurisdiccionales superiores, para que éstos se concentren en resolver asuntos que se consideran más complejos. De ahí que se trate de una medida proporcional, pues aun limitándose el derecho a la segunda instancia, no se priva al gobernado del acceso a la justicia ni se le deja en estado de indefensión, ya que en el procedimiento uniinstancial también deben respetarse las formalidades esenciales del proceso, y se tiene la posibilidad de impugnar dicha resolución mediante el juicio de amparo, de manera que, aun cuando no exista en la jurisdicción ordinaria un recurso disponible para impugnar las resoluciones adversas, existe un recurso extraordinario. Finalmente, la exclusión de que se trata obedece a criterios objetivos, pues el factor cuantía, como elemento para determinar la procedencia del juicio oral mercantil, constituye un quántum objetivo que no se fundamenta en los ingresos ni en la condición social de las personas, sino en el monto global de la pretensión."

Pretender que el artículo 168 debe considerarse que necesariamente debe aplicarse junto con lo dispuesto por el artículo 169 del mismo cuerpo legal, es una pretensión interpretativa que constituye un argumento no solo novedoso, sino contrario directamente al texto legal y de clara intención del legislador.

Dicho precepto dispone:

"Artículo 169. Cuando se trate del ejercicio de acciones derivadas de actos o contratos en que se pacten prestaciones o pensiones periódicas, se computará el importe del negocio atendiendo al monto de un año, aún cuando sólo se reclamen algunas de ellas."

Como se advierte, no obstante la claridad de los supuestos de procedencia del recurso previsto en el artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, donde no se introduce el artículo 169 citado; pretender que sí debe considerarse, constituye una *heurística de anclaje*[7] como se pudo observar en la discución del debate del presente asunto, cuando la minoría insistió en citar el artículo señalado (169) y exógeno a los requisitos o presupuestos de procedencia del recurso que nos ocupa, pero sin que se logre advertir las razones, buenas razones debido a que se pretende la supresión, prácticamente, de un supuesto del recurso de apelación; para aceptar que el legislador no solo consideró el artículo 168, sino también tuvo entre sus elementos de procedencia, el 169, de la codificación multicitada.

La exclusión del artículo 169 en comento, cumple con los dos criterios utilizados por el legislador, dentro de su facultad legislativa, para fijar la procedencia del recurso de apelación en este supuesto, al considerar el 626 que todas las resoluciones definitivas elegidas y contenidas en ese supuesto deben ser de

[7] Heurístico de anclaje y ajuste
Se trata de un sesgo cognitivo que describe la tendencia humana común a confiar demasiado en la primera pieza de información que se ofrece al tomar decisiones: el "ancla". También se conoce como el "efecto del enfoque". Durante la toma de decisiones, el anclaje se produce cuando las personas utilizan una pieza inicial de información para hacer juicios posteriores. Una vez que el ancla se fija, el resto de información se ajusta en torno a la posición del ancla incurriendo en un sesgo. (Fuente: *https://sites.google.com/site/razoncompii/home/heuristica/heuristico-de-anclaje-y-ajuste* consultado el 11-10-2020) En el presente asunto, esa ancla lo constituye el argumento de que aunque no lo haya mencionado, el legislador tomó en cuenta el artículo 169 referido, en los supuestos de procedencia del recuro en estudio: no obstante que el legislador claramente precisó: **"Para los efectos de este artículo el importe del negocio se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 de este código**."

inmediata resolución; y el de la cuantía, al señalar que no rebasen el tope de 500 UMAs; de ahí que si la finalidad de instaurar el recurso de esta forma es garantizar y proteger el derecho humano a la justicia pronta y expedita por medio de la resolución de asuntos de menor cuantía en un lapso corto (lo cual ha dicho el Máximo Tribunal del País, es constitucional), se entiende que cuando las prestaciones del negocio causal se efectúen en la forma del artículo 169, sus importes no deberán sumarse, sino solo la cuantía total reclamada en la demanda en los términos del diverso 168.

Por las anteriores razones, comparto las consideraciones del proyecto aprobado por la mayoría.

Nota: Las tesis de jurisprudencia y aisladas P./J. 6/2015 (10a.), 1a./J. 60/2016 (10a.), 2a./J. 86/2018 (10a.), XVII.1o.C.T.24 C (10a.), 1a. XCII/2016 (10a.) y 1a. LX/2016 (10a.) citadas en este voto, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas, del viernes 18 de noviembre de 2016 a las 10:29 horas, del viernes 7 de septiembre de 2018 a las 10:16 horas, del viernes 21 de septiembre de 2018 a las 10:30 horas, del viernes 8 de abril de 2016 a las 10:08 horas y del viernes 11 de marzo de 2016 a las 10:10 horas, respectivamente.

Este voto se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si debía o no agotarse el recurso de apelación previsto en el artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, antes de acudir al juicio de amparo, cuando se trate de sentencias dictadas dentro de un juicio ordinario civil por falta de pago de rentas, y llegaron a conclusiones diferentes, ya que uno sostuvo que debe agotarse el recurso de apelación porque el precepto legal citado es suficiente para determinar la procedencia, sin necesidad de interpretación adicional, mientras que el otro resolvió que se actualiza una excepción al principio de definitividad para



la procedencia del juicio de amparo, debido a que es necesario interpretar dicho artículo con la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización y los diversos 168 y 169 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Criterio jurídico: La sentencia definitiva dictada en un juicio ordinario civil por falta de pago de rentas, cuando el importe de la suerte principal resulte superior a las 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a la fecha de interposición de la demanda, es apelable en términos del artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, en relación con el diverso 168 de la misma codificación, por lo que el quejoso tiene obligación de interponer ese medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo, en cumplimiento al principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.

Justificación: Es así, porque el capítulo que regula el recurso de apelación sólo condiciona su procedencia contra las sentencias emitidas en asuntos de cuantía determinable, es decir, el importe de lo que demande la parte actora por concepto de suerte principal sobrepase las Unidades de Medida y Actualización señaladas, sin hacer ninguna otra distinción o exclusión con base en la naturaleza de la acción ejercitada. Entonces, conforme al principio general de derecho que señala: "donde la ley no distingue, el juzgador tampoco puede distinguir", se concluye que el recurso de apelación es procedente en el supuesto mencionado, sin importar que las acciones deducidas se relacionen con un contrato de arrendamiento o se demande exclusivamente el pago de rentas insolutas.

PLENO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO.
PC.XVII. J/26 C (10a.)

Contradicción de tesis 7/2019. Entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 6 de octubre de 2020. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados José Elías Gallegos Benítez, María del Carmen Cordero Martínez, José Martín Hernández Simental y Refugio Noel Montoya Moreno. Disidentes: Cuauhtémoc

Cuéllar de Luna (presidente), María Teresa Zambrano Calero y Juan Carlos Zamora Tejeda, quienes formularon voto particular. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Gerardo González Torres.

Tesis y criterio contendientes:

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 995/2017, el cual dio origen a la tesis aislada XVII.1o.C.T.24 C (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO ORAL ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO." publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 21 de septiembre de 2018 a las 10:30 horas, y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,* Décima Época, Libro 58, Tomo III, septiembre de 2018, página 2498, con número de registro digital: 2017941 y,

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 287/2019.

Nota: De la sentencia que recayó al amparo directo 287/2019, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, derivó la tesis aislada XVII.2o.C.T.13 C (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ES OPTATIVO AGOTARLO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS EN JUICIOS DERIVADOS DE LA ACCIÓN ESPECIAL DE DESOCUPACIÓN DE INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO SI EL NEGOCIO ES ESTIMABLE PECUNIARIAMENTE.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 17 de enero de 2020 a las 10:18 horas, y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 74, Tomo III, enero de 2020, página 2651, con número de registro digital: 2021429.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 7 de diciembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

RECURSO DE APELACIÓN. LA INCLUSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE ESTABLECE

SU PROCEDENCIA, NO REQUIERE DE INTERPRETACIÓN ADICIONAL PARA FIJAR EL MONTO A QUE ALUDE EL PROPIO PRECEPTO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si debía o no agotarse el recurso de apelación previsto en el artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua antes de acudir al juicio de amparo, cuando se trate de sentencias dictadas dentro de un juicio ordinario civil por falta de pago de rentas, y llegaron a conclusiones diferentes, ya que uno sostuvo que debe agotarse el recurso de apelación porque el precepto legal citado es suficiente para determinar la procedencia, sin necesidad de interpretación adicional, mientras que el otro resolvió que se actualiza una excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debido a que es necesario interpretar dicho artículo con la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización y los diversos 168 y 169 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Criterio jurídico: El artículo 626 mencionado, al establecer la procedencia del recurso de apelación contra las sentencias dictadas en juicios ordinarios civiles estimables pecuniariamente, siempre que el importe del negocio exceda de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), no obliga al quejoso a realizar un ejercicio interpretativo distinto a la simple intelección de la norma, ni es necesario que acuda a la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización o desentrañar el procedimiento a seguir hasta fijar su importe.

Justificación: Lo anterior, porque se trata de valores que se encuentran publicados en el Diario Oficial de la Federación y son del conocimiento público. En consecuencia, el justiciable puede conocer en todo momento el valor que la Unidad de Medida y Actualización tiene en determinada fecha, sin necesidad de realizar una interpretación sistemática del código adjetivo civil local, en relación con algún otro ordenamiento legal. De ahí que la mención de ese factor de actualización en la norma que prevé la procedencia del recurso de apelación contra las resoluciones pronunciadas en juicios de

cuantía determinada no configure la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo.

PLENO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO.
PC.XVII. J/27 C (10a.)

Contradicción de tesis 7/2019. Entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 6 de octubre de 2020. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados José Elías Gallegos Benítez, María del Carmen Cordero Martínez, José Martín Hernández Simental y Refugio Noel Montoya Moreno. Disidentes: Cuauhtémoc Cuéllar de Luna (presidente), María Teresa Zambrano Calero y Juan Carlos Zamora Tejeda, quienes formularon voto particular. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Gerardo González Torres.

Tesis y criterio contendientes:

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 995/2017, el cual dio origen a la tesis aislada XVII.1o.C.T.24 C (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO ORAL ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO." publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 21 de septiembre de 2018 a las 10:30 horas, y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 58, Tomo III, septiembre de 2018, página 2498, con número de registro digital: 2017941 y,

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 287/2019.

Nota: De la sentencia que recayó al amparo directo 287/2019, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, derivó la tesis aislada XVII.2o.C.T.13 C (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ES OPTATIVO AGOTARLO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS EN JUICIOS DERIVADOS DE LA ACCIÓN ESPECIAL DE DESOCUPACIÓN DE INMUEBLES EN ARREN-

DAMIENTO SI EL NEGOCIO ES ESTIMABLE PECUNIARIAMENTE.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 17 de enero de 2020 a las 10:18 horas, y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 74, Tomo III, enero de 2020, página 2651, con número de registro digital: 2021429.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 7 de diciembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

RECURSO DE APELACIÓN. SU PROCEDENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS, NO ESTÁ SUJETA A INTERPRETACIÓN ADICIONAL DE LOS ARTÍCULOS 626 Y 168 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si debía o no agotarse el recurso de apelación previsto en el artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, antes de acudir al juicio de amparo, cuando se trate de sentencias dictadas dentro de un juicio ordinario civil por falta de pago de rentas, y llegaron a conclusiones diferentes, ya que uno sostuvo que debe agotarse el recurso de apelación porque el precepto legal citado es suficiente para determinar la procedencia, sin necesidad de interpretación adicional, mientras que el otro resolvió que se actualiza una excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debido a que es necesario interpretar dicho artículo con la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización y los diversos 168 y 169 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Criterio jurídico: El recurso de apelación regulado en el artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua procede contra las resoluciones recurribles cuando el negocio sea estimable pecuniariamente y su importe exceda de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Justificación: Para efectos de su aplicación, el mismo precepto hace una remisión expresa al artículo 168 del mismo Código, en el que se indica que

para determinar la cuantía del juicio se tendrá en cuenta únicamente lo que demande la parte actora como suerte principal a la fecha de la interposición de la demanda. Además, es irrelevante si las acciones deducidas guardan o no identidad con las que menciona el diverso 169 del código procesal civil, es decir, aquellas que deriven de contratos en los que se pacten prestaciones o pensiones periódicas. Lo anterior es así, porque la cohesión entre las disposiciones mencionadas permite afirmar que para comprender su significado es innecesario acudir al contenido de otras normas ubicadas fuera de su contexto jurídico, dada la claridad del legislador al diseñar un sistema impugnativo completo y expreso que permite discernir las reglas de procedencia aplicables, atendiendo a la literalidad de ambas normas, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, al no requerir de una interpretación adicional; además, porque al regular aquel medio de impugnación el legislador no tuvo en cuenta alguna clasificación basada en determinados conceptos, ya que de haberlo ideado de esa forma, lo hubiera señalando expresamente. Entonces, conforme al principio general de derecho que dispone: "donde la ley no distingue, el juzgador tampoco puede distinguir", no es necesario diferenciar entre la naturaleza de las acciones deducidas para determinar la procedencia de la apelación en razón de la cuantía. En el mismo sentido, es evidente que el sistema conformado por los artículos 626 y 168 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua pertenece a un ámbito de aplicación distinto al del artículo 169, ya que el primero regula la procedencia del recurso de apelación y el segundo se refiere a la competencia por cuantía, lo que permite descartar la idea de un posible conflicto de normas susceptible de ser solucionado atendiendo a una regla de especialidad, pues no están relacionados ni constituyen una unidad lógica y menos identidad de materia. Por tanto, el artículo 169 del cuerpo de leyes en consulta no es aplicable para determinar en qué casos procede o no el recurso de apelación ni justifica llevar a cabo una interpretación adicional del sistema normativo que regula de manera clara y explícita ese aspecto.

PLENO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO.
PC.XVII. J/25 C (10a.)



Contradicción de tesis 7/2019. Entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 6 de octubre de 2020. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados José Elías Gallegos Benítez, María del Carmen Cordero Martínez, José Martín Hernández Simental y Refugio Noel Montoya Moreno. Disidentes: Cuauhtémoc Cuéllar de Luna (presidente), María Teresa Zambrano Calero y Juan Carlos Zamora Tejeda, quienes formularon voto particular. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Gerardo González Torres.

Tesis y criterio contendientes:

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 995/2017, el cual dio origen a la tesis aislada XVII.1o.C.T.24 C (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO ORAL ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO." publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 21 de septiembre de 2018 a las 10:30 horas, y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,* Décima Época, Libro 58, Tomo III, septiembre de 2018, página 2498, con número de registro digital: 2017941 y,

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 287/2019.

Nota: De la sentencia que recayó al amparo directo 287/2019, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, derivó la tesis aislada XVII.2o.C.T.13 C (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ES OPTATIVO AGOTARLO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS EN JUICIOS DERIVADOS DE LA ACCIÓN ESPECIAL DE DESOCUPACIÓN DE INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO SI EL NEGOCIO ES ESTIMABLE PECUNIARIAMENTE.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 17 de enero de 2020 a las 10:18 horas, y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 74, Tomo III, enero de 2020, página 2651, con número de registro digital: 2021429.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 7 de diciembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO ACATARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A UN DECRETO PENSIONARIO EN RELACIÓN CON EL AUMENTO SALARIAL CORRESPONDIENTE.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GUILLERMO DEL CASTILLO VÉLEZ, NICOLÁS NAZAR SEVILLA Y ALFREDO CID GARCÍA. PONENTE: NICOLÁS NAZAR SEVILLA. SECRETARIO: JUAN MANUEL AGUIRRE GARZA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—**Competencia**. Este Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este Circuito y corresponde, exclusivamente, a este Pleno dilucidarla y determinar, en su caso, cuál será el criterio que debe prevalecer.

SEGUNDO.—**Legitimación**. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por un Juez de Distrito de este Decimoctavo Circuito; de ahí que, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO.—**Ejecutorias que participan como contradictorias.** A fin de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir la parte considerativa que motivó las decisiones de los

tribunales contendientes, así como hacer referencia a los hechos que les dieron origen.

En sesión plenaria de seis de septiembre de dos mil diecinueve, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, resolvió el recurso de queja **201/2019**[10] interpuesto por **********, contra el auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, en los autos de juicio de amparo indirecto **********, en cuya parte considerativa, en lo que interesa, el citado Órgano Colegiado de Circuito sustentó lo que a continuación se transcribe:

"QUINTO. **Estudio del asunto**. En el caso, no se analizarán los agravios expuestos por la recurrente, toda vez que este Órgano Colegiado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo **61**, fracción **XX**, de la Ley de Amparo, invocada por el Juez de Distrito, **aunque por diversos motivos**.

"Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia número **122/99**, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe:

"'Época: Novena Época
"'Registro: 192902
"'Instancia: Pleno
"'Tipo de tesis: jurisprudencia
"'Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"'Tomo X, noviembre de 1999
"'Materia común
"'Tesis P./J. 122/99
"'Página 28

"'IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATI-

[10] Fojas 60 a 79 ibídem.

DA.—Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme.'

"(Cita precedentes).

"Para arribar a lo anterior, conviene precisar que en la ejecutoria de la contradicción de tesis **176/2009**, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **consideró que las pensiones pertenecen a la materia administrativa**, porque si bien es cierto se enmarcan dentro de las prestaciones de seguridad social y derivan de la antigüedad en una relación de trabajo, también

lo es que **por regla general**, la relación laboral respectiva no se extiende después de concedida la pensión solicitada, porque precisamente la pensión tiene su justificación en el otorgamiento de prestaciones en dinero otorgadas por el cumplimiento de determinados requisitos de antigüedad, edad y otros diversos, para permitir la subsistencia del trabajador o de sus derechohabientes, después de concluida la relación de trabajo.

"Asimismo, precisó que la pensión no constituye una prestación de tipo laboral como el salario, las vacaciones, el aguinaldo, los vales de despensa, la habitación, los bonos de productividad, los premios por puntualidad, por asistencia, el pago de becas, etcétera, que se otorgan durante la vigencia de la relación de trabajo, sino que se proporcionan después de ella, por los motivos especificados en la ley y bajo el cumplimiento estricto de los requisitos legales y que el obligado al pago de las pensiones, en el caso que resolvió en dicha ejecutoria, era el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, derivado del pago de las cuotas de seguridad social realizadas por las dependencias públicas a favor de sus trabajadores.

"En ese orden de ideas, puntualizó que **surge una nueva relación de naturaleza administrativa** entre dicho instituto y los trabajadores o sus derechohabientes, que se constituye como una relación de autoridad a gobernado, pues este organismo público puede crear, modificar o extinguir ante sí o por sí la situación jurídica del pensionado.

"Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis de jurisprudencia número **2a./J. 153/2009** emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe:

"'Época: Novena Época
"'Registro: 166110
"'Instancia: Segunda Sala
"'Tipo de tesis: jurisprudencia
"'Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"'Tomo XXX, octubre de 2009
"'Materia administrativa
"'Tesis 2a./J. 153/2009
"'Página 94

"'PENSIONES DEL ISSSTE. ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN.—La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación precisa la competencia por materia de los Juzgados de Distrito en sus artículos 51, 52, 54 y 55, de los que se advierte que para fijar la competencia por materia en los juicios de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Ahora, si bien es cierto que las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en que haya laborado, también lo es que la surgida entre aquél y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado constituye una nueva relación de naturaleza administrativa, en la que éste actúa con el carácter de autoridad, pues puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica del pensionado. En este tenor, el acto reclamado consistente en la indebida cuantificación de una pensión a cargo del Instituto pertenece a la materia administrativa, porque no se cuestiona el derecho a obtenerla, ni está en juego su revocación, sino que esa prestación económica está otorgada a favor del trabajador o de su derechohabiente, y solamente se impugna su determinación líquida por no contener la cantidad correspondiente a los incrementos que le corresponden de acuerdo con la norma aplicable; de ahí que la competencia por materia para conocer del juicio de garantías instaurado en su contra se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa en los lugares en que exista esa competencia especial, sin perjuicio de que los órganos jurisdiccionales con competencia mixta conozcan de dichos juicios donde no exista la competencia especializada.'

"(Cita precedentes).

"Ahora bien, a efecto de resolver el presente asunto, es pertinente formular algunas consideraciones relacionadas con las diferencias entre actos omisivos y negativos, así como de los actos positivos.

"Sobre el particular la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión **978/2007** determinó que la diferencia entre **actos negativos** y **omisivos** radica en que los estados de inacción no están conectados con ninguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están.

"Así, el Máximo Tribunal del país explicó que muchas de las cosas que no hacemos pertenecen simplemente a la dimensión del no hacer, la cual no tiene ninguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquellas cuestiones que no hacemos, pero que por alguna razón teníamos el deber de haberlas hecho, constituyen las llamadas omisiones.[11]

"Dichas consideraciones dieron origen a la tesis aislada **1a. CXC/2007** emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe:

"'Época: Novena Época
"'Registro: 171435
"'Instancia: Primera Sala
"'Tipo de tesis: aislada
"'Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"'Tomo XXVI, septiembre de 2007
"'Materia común
"'Tesis 1a. CXC/2007
"'Página 386

"'INTERPRETACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PARA DETERMINAR SI EXISTE OBLIGACIÓN DE REALIZARLA DEBE DISTINGUIRSE SI SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U OMISIVOS.—Cuando se alega que el Tribunal Colegiado del conocimiento no realizó la interpretación directa de algún precepto de la Constitución Federal en un juicio de amparo directo, debe distinguirse si se trata de **actos negativos u omisivos**. **La diferencia entre ellos radica en que los estados de inacción no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de un deber, mientras que las omisiones sí. Esto es, las cosas que simplemente no hacemos no tienen repercusiones en términos normativos; en cambio, otras cosas que no hacemos, pero que teníamos el deber de hacer, constituyen omisiones**. De este modo, se concluye que el hecho de que un Tribunal Colegiado no haya llevado a cabo la interpretación a que alude el quejoso en sus agravios, no implica que haya incurrido

[11] Véase: Von Wright, "On the Logic of Norms and Actions", en *Practical Reason, Philosophical Papers*, Vol. I., Basil Blackwell, 1983, p. 109.

en el incumplimiento de algún deber, pues para que exista la obligación de realizar dicha interpretación -en el sentido de establecer los alcances de una norma constitucional-, se requiere que: 1) el quejoso lo hubiese solicitado; 2) quede demostrado que algún precepto constitucional (o parte de él) es impreciso, vago o genera dudas; y 3) dicho precepto se hubiera aplicado al quejoso sin haber despejado racionalmente esas dudas, en menoscabo de sus garantías.'

"(Cita precedentes).

"Por su parte, la misma Primera Sala al resolver el amparo en revisión **1359/2015** determinó que desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión; sin embargo, en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación.[12]

"En ese sentido, el Alto Tribunal explicó que las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones.

"En ese orden de ideas, puntualizó que pueden identificarse al menos tres tipo de omisiones en función del ámbito de competencia de las autoridades a las que se atribuye el incumplimiento de un deber: omisiones administrativas, omisiones judiciales y omisiones legislativas.

"Dichas consideraciones dieron origen a la tesis aislada **1a. XVII/2018 (10a.)** emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe:

"'Época: Décima Época
"'Registro: 2016418
"'Instancia: Primera Sala

[12] Nino, Carlos S. "¿Da lo mismo omitir que actuar? (Acerca del valor moral de los delitos por omisión)", en Gustavo Maurino (ed.), *Fundamentos de derecho penal*, Buenos Aires, Gedisa, 2008, pp. 210 a 213.

"‘Tipo de Tesis: Aislada
"‘Fuente: *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*
"‘Libro 52, marzo de 2018, Tomo I
"‘Materia común
"‘Tesis 1a. XVII/2018 (10a.)
"‘Página 1092

"‘CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones.’

"(Cita precedentes).

"Así, es factible afirmar que la omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad.

"En ese contexto, tratándose de actos omisivos, la carga de la prueba se constituye, por regla general, en contra de las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, la autoridad está obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones.

"Sobre el tema en cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión **1241/97**, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa.

"Dichas consideraciones dieron origen a la tesis aislada **1a. XXIV/98** emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe:

"'Época: Novena Época
"'Registro: 196080
"'Instancia: Primera Sala
"'Tipo de tesis: aislada
"'Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"'Tomo VII, junio de 1998
"'Materia común, administrativa
"'Tesis 1a. XXIV/98
"'Página 53

"'ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO.—**Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales**; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que

después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos.'

"(Cita precedentes).

"En otras palabras, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia; así, la omisión del Estado, es un equivalente a la acción derivada de un deber.

"Conforme a lo anterior, es factible sostener que los **actos de naturaleza positiva**, son aquellos que implican un hacer de la autoridad.

"Por su parte, los **actos de carácter negativo** son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se exterioriza por medio de una conducta positiva de las autoridades, esto es, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos.

"En cambio, los **actos omisivos** se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar, esto es, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado y tener el deber normativo de hacerlo.

"En el caso, como se dijo, el acto reclamado es la **omisión** por parte del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, de dar cumplimiento al Decreto 131 publicado en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad', el veintiocho de abril de dos mil cuatro, en relación con el aumento salarial correspondiente a dos mil diecinueve, en los términos establecidos en dicho decreto, cuya fe de erratas se publicó en ese medio de comunicación oficial el diecinueve de mayo de dos mil cuatro.

"En la especie, se estima que el juicio de amparo promovido por la quejosa **es improcedente** toda vez que no cumplió con el principio de definitividad, lo que actualiza la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo.

"Ello es así, porque al existir ahora una relación administrativa entre la peticionaria de amparo y el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, como jubilada de este último; relación que se da en un plano de supra a subordinación, ya que el ente público puede crear, modificar o extinguir situaciones *motu proprio*; sus actos resultan controvertibles mediante el medio de defensa denominado **juicio de nulidad** ante el **Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos** y **no** ante el **Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje**, como determinó el Juez.

"Ello es así, pues los artículos 1 y 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, disponen:

"'**Artículo 1.** En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, **omisiones**, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal **emanados de** dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus **organismos descentralizados**, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley.'

"Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reconoce también el interés legítimo para controvertir la existencia conflicto de intereses considerando la (sic) situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familiar o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios o funciones a desempeñar el servicio público frente a otro empleo.

"En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



"'**Artículo 4.** Serán causas de nulidad de los actos impugnados:

"'Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:

"'I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución;

"'II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso;

"'III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada;

"' IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto, y

"' V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades.'

"Al respecto, debe decirse que en el numeral 1 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se establece que toda persona tiene derecho a controvertir los actos, **omisiones,** resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal **emanados de** dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus **organismos descentralizados**, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los tratados internacionales y por esta ley.

"En esa tesitura, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en relación con el diverso 18, inciso b), fracción II, subinciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Adminis-

trativa del Estado de Morelos,[13] a través del juicio de nulidad puede analizarse la **omisión** por parte del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, de dar cumplimiento al Decreto 131 publicado en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad', el veintiocho de abril de dos mil cuatro, en relación con el aumento salarial correspondiente a dos mil diecinueve, en los términos establecidos en dicho decreto, cuya fe de erratas se publicó en ese medio de comunicación oficial el diecinueve de mayo de dos mil cuatro.

"Aunado a ello, el acto reclamado tiene la naturaleza de administrativo por provenir de una autoridad de esa característica, como es el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos; ente que conforme al artículo 1 de su Estatuto General, **es un organismo público descentralizado del Estado de Morelos**.[14]

"Por ende, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, debe conocer del reclamo de la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo indirecto; actualizándose así, la hipótesis que establece el artículo **61**, fracción **XX**, de la Ley de Amparo,[15] que prevé la improcedencia del medio de control constitu-

[13] **"Artículo 18.** Son atribuciones y competencias del Pleno: B) Competencias: II. Resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción, por lo que conocerá de: a) Los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto, omisión, resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal que, en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales, en perjuicio de los particulares;"

[14] **"Artículo 1**. El **Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos**, es la Institución creada como **organismo público descentralizado del Estado**, para ofrecer el servicio público de la Educación Media e Investigación en beneficio de la sociedad morelense, teniendo personalidad jurídica y patrimonio propio, de acuerdo a su Decreto de Creación de fecha 14 de septiembre de 1988 y adecuado el 31 de mayo de 1995, con domicilio legal en la ciudad de Cuernavaca, Morelos."

[15] **"Artículo 61**. El juicio de amparo es improcedente: ...**XX.** Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones

cional mencionado en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto.

"Sin que obste a lo anterior, que si bien es cierto que el juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución; también es cierto que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de amparo exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Constitución, puesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente, en la medida que la circunstancia de que en la demanda de amparo se hagan valer violaciones directas a preceptos constitucionales, no lo releva de la obligación de agotar los recursos que estatuye la ley del acto, pues de lo contrario quedaría a elección de la parte quejosa, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a la Constitución, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca, lo que implica, que al no agotar el recurso ordinario, procede el desechamiento de la demanda.

"En ese tenor, de la demanda de amparo no se advierte que la recurrente alegue violaciones directas a la constitución, pues además de estimar vulnerados los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente controvierte **la omisión** del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, de dar cumplimiento al Decreto pensionario Número 2885, **en relación con el aumento salarial correspondiente a dos mil diecinueve, en los términos establecidos en dicho decreto**; lo que pone de manifiesto que no se actualiza el supuesto de excepción.

"Al caso tiene aplicación el criterio jurisprudencial que este tribunal comparte, que a continuación se transcribe:

---

directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;"

"‘Época: Novena Época
"‘Registro: 205283
"‘Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"‘Tipo de tesis: jurisprudencia
"‘Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"‘Tomo I, abril de 1995
"‘Materia común
"‘Tesis XX. J/1
"‘Página 94

"‘RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD.—Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente.’

"(Cita precedentes).

"Asimismo, se estima aplicable la tesis de jurisprudencia número **2a./J. 84/2018 (10a.)** emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe:

"‘Época: Décima Época
"‘Registro: 2017685
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Tipo de tesis: jurisprudencia
"‘Fuente: *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*
"‘Libro 57, agosto de 2018, Tomo I
"‘Materia administrativa
"‘Tesis 2a./J. 84/2018 (10a.)
"‘Página 1101

"'JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO. De los artículos 14, fracción VI, de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, 2o., 3o., 14, fracción II, y 15, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa) conocerá del juicio contencioso administrativo promovido contra las resoluciones definitivas dictadas en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De dichas normas se deduce que tratándose de la impugnación de la actualización y cálculo de incrementos a una pensión se requiere de una resolución dictada por el Instituto referido, lo que presupone que el actor, antes de acudir al juicio contencioso administrativo federal, debió gestionar ante la autoridad administrativa que se le otorgaran dichos incrementos, a fin de que se pronunciara de manera expresa o ficta su negativa a acordar de manera favorable la instancia ante aquélla planteada, máxime que en las tesis aislada 2a. X/2003 y de jurisprudencia 2a./J. 80/2017 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para la procedencia del juicio contencioso administrativo se requiere que se haya emitido un acto administrativo de autoridad, una resolución definitiva o la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, para que sea susceptible de impugnarse ante el Tribunal mencionado.'

"(Cita precedentes).

"Al respecto es importante destacar que en el caso tampoco se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad.

"Ello es así, en primer lugar, porque la normatividad que regula el medio ordinario de defensa (juicio de nulidad), prevé la suspensión del acto impugnado en los mismos términos en que la Ley de Amparo regula la suspensión del acto reclamado.

"En efecto, de conformidad con los artículos 43, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 y 116 de la Ley de Justicia Administrativa, los actos combatidos pueden ser suspendibles con base en los mismos requisitos y dentro de los plazos que señala la Ley de Amparo.

Ley de Amparo	Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. **Artículo 115.** De no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda; señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes; pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 de esta Ley; ordenará correr traslado al tercero interesado; y, en su caso, tramitará el incidente de suspensión. Cuando a criterio del órgano jurisdiccional exista causa fundada y suficiente, la audiencia constitucional podrá celebrarse en un plazo que no podrá exceder de otros treinta días. **Artículo 128.** Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación	**Artículo 43.** El promovente deberá adjuntar a su demanda: I. Una copia de la demanda y de los documentos anexos para cada una de las partes; II. El documento con el cual acredite su personalidad, cuando promueva en nombre de otro o en representación de una persona moral; III. El documento en el que conste el acto o resolución impugnada; IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa o positiva fictas, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad; V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada, y VI. Las pruebas documentales que obren en su poder y que pretenda ofrecer en el juicio. Una vez que le fue turnada la demanda por el Secretario General, el Magistrado Instructor, dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá dictar el auto que la admita, aclare o deseche. Si la demanda cumple con todos los requisitos exigidos por esta Ley y está acompañada de los documentos que le son exigidos, se admitirá a trámite. Si la demanda es irregular, obscura o ambigua o no está acompañada de los documentos exigidos por esta ley, o de las copias necesarias para el emplazamiento y traslado, se le prevendrá al promovente para que en el término de cinco días, la aclare, corrija o complete.

aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.

Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva.

Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:

I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos;

II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos;

III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;

IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario;

V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país;

VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción;

VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el

Si el promovente no subsana la prevención en el plazo conferido para tal efecto, se tendrá por no interpuesta la demanda.

La demanda y la ampliación de la demanda deberán estar firmadas siempre, con firma autógrafa, por el actor interesado. El autorizado o el delegado sólo podrán subsanar la demanda cuando se trata de la incorporación de documentos o de otros datos que no sean esenciales.

Cuando la demanda sea promovida por una autoridad administrativa, en el auto de admisión se le hará saber al particular demandado que podrá recibir asesoría jurídica gratuita por medio del Asesor Jurídico de este Tribunal.

Artículo 109. La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción.

El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento.

Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante.

Artículo *110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos:

I. Que lo solicite el particular actor;

II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público;

cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense;
VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico;
IX. Se impida el pago de alimentos;
X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;
XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad;
XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión;
XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y
IV. Que no se deje sin materia el juicio.
Para los efectos de la fracción II, se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión:
a. Continúe el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito que se encuentre en etapa de investigación, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos;
b. Continúe la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, y
c. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional;
d. Se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales.
La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo.

El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social.

Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria.

Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento.

En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos (sic) que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda.

Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo.

Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos.

Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo.

La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento.

Artículo 111. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el particular actor, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda.

El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo.

Artículo 112. Tan pronto como se conceda la suspensión y se otorgue las garantías correspondientes en su caso, se hará del conocimiento de las autoridades demandadas, para su cumplimiento.

La violación por parte de las autoridades a la suspensión concedida por la Sala, será recurrible en queja, la cual se tramitará en los términos previstos de este ordenamiento.

Al cumplimiento de la suspensión otorgada por la Sala se encuentran obligadas todas las autoridades que intervengan en el acto reclamado, con cualquier carácter, aun cuando no se encuentren demandadas.

Para hacer cumplir la suspensión concedida, la Sala podrá hacer uso de los medios de apremio establecidos por esta Ley, siendo aplicable, además, en lo

No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación.
Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía.
Artículo 134. La contragarantía que ofrezca el tercero conforme al artículo anterior deberá también cubrir el costo de la garantía que hubiese otorgado el quejoso, que comprenderá:
I. Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa legalmente autorizada que haya otorgado la garantía;
II. Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de la cancelación y su registro, cuando el quejoso hubiere otorgado garantía hipotecaria; y
III. Los gastos legales acreditados para constituir el depósito.
Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.
El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos:
I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal;

conducente, lo dispuesto por este mismo ordenamiento para el cumplimiento y ejecución de las sentencias.
Artículo 113. En los casos en que la suspensión pueda causar daños o perjuicios o ambos a terceros, ésta se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella (sic) se causaren, en caso de no obtenerse sentencia favorable en el juicio.
Cuando los daños o perjuicios que puedan ocasionarse a terceros no sean estimables en dinero, el Tribunal fijará discrecionalmente el importe de la garantía.
Artículo 114. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efectos si el tercero interesado, a su vez, otorga contra garantía bastante para restituir las cosas al estado que guardaban a la fecha en que se solicitó aquella y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en caso de que obtenga sentencia favorable.
La contra garantía que ofrezca el tercero interesado deberá cubrir, además, el importe de los gastos que hubiese erogado el actor, en la obtención de la fianza otorgada.
Artículo 115. En contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión, fijen fianzas o contrafianza, procederá el recurso de reconsideración en la forma y términos previstos por esta Ley.
Artículo 116. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contra garantías que se otorguen con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo ante la Sala dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia.
Del escrito del solicitante, se dará vista a las demás partes por un término de cinco días, dictándose la resolución

II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía. **Artículo 136.** La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional.	correspondiente dentro de los diez días siguientes.

"Por otra parte, en lo que atañe a la última hipótesis de excepción tocante a que no es necesario agotar el medio ordinario de defensa si el mismo no está previsto en la ley sino en un reglamento, no se actualiza toda vez que, como se señaló, el medio ordinario de defensa consistente en el **juicio de nulidad** está previsto en una ley, específicamente, en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos y no en un reglamento; en esa tesitura este supuesto de excepción tampoco resulta aplicable.

"Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número **P./J. 11/2018 (10a.)** emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe:

"'Época: Décima Época
"'Registro: 2017117
"'Instancia: Pleno
"'Tipo de tesis: jurisprudencia
"'Fuente: *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*
"'Libro 55, junio de 2018, Tomo I
"'Materia común
"'Tesis P./J. 11/2018 (10a.)
"'Página 8

"'DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.'

"(Cita precedentes).

"En ese contexto, cuando en el juicio de amparo se reclaman actos omisivos y en la demanda se alegue falta o insuficiente fundamentación no es jurídicamente factible estimar que se está ante un supuesto de excepción para no agotar el principio de definitividad previsto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que la naturaleza de los actos por sí misma implica una lisa y llana ausencia de actuación de las autoridades; por tanto, no es loable que estén fundados en algún precepto legal.

"En (sic) relatadas consideraciones, al no actualizarse alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, la parte quejosa se encuentra obligada a agotar el juicio de nulidad previo a promover juicio de amparo; por tanto, debe declararse **infundado el recurso de queja**".

Por su parte el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el recurso de queja 218/2019,[16] interpuesto por **********, en contra del auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo indirecto **********, en la parte conducente del fallo, se expuso lo siguiente:

"SEXTO. **Estudio.** Una parte del **único** agravio formulado por la promovente es **esencialmente fundado**, aunque suplido en su deficiencia, ya que la causal de improcedencia en la que se apoyó el juzgador no es indudable ni manifiesta.

"Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

"'SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDE EN UN RECURSO DE QUEJA CUANDO EL ÓRGANO REVISOR ADVIERTE EL DESECHAMIENTO INDEBIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, POR NO ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El precepto citado faculta al órgano jurisdiccional a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios cuando advierta que ha habido en contra del quejoso o del recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de Amparo. Ahora bien, la suplencia referida procede en un recurso de queja cuando se combate la resolución que desechó la demanda de amparo indirecto por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia, siempre y cuando se advierta: i) la existencia de una violación manifiesta de la ley; y, ii)

[16] Fojas 45 a 56 ibídem.

que dicha violación haya dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior es así, pues al analizar la resolución recurrida, el órgano jurisdiccional debe verificar en primer lugar si se violó de manera evidente la ley, esto es, si se transgredió el artículo 113 de la Ley de Amparo y, en segundo lugar, si dicha transgresión dejó al quejoso sin defensa, lo cual debe entenderse como una afectación sustancial dentro del procedimiento y que se actualiza al negar el acceso a la acción de amparo con un desechamiento que no se apega al marco jurídico aplicable." Aduce la inconforme que es incorrecta la determinación impugnada, ya que al habérsele concedido la pensión dejó de surtir efectos la relación laboral; asimismo, señala que la tesis invocada por el juez del conocimiento se refiere a actos relativos a la solicitud de pensión, no así cuando ya fue concedida, por lo que no resulta aplicable.'[17]

"Como se adelantó, lo anterior es **esencialmente fundado** y suficiente para revocar el auto recurrido.

"La facultad del juzgador de Distrito para desechar la demanda de derechos fundamentales se encuentra establecida en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone:

"'**Artículo 113**. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano.'

"Del artículo transcrito, se advierte que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto cuenta con atribuciones para desechar la demanda cuando encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia.

"Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2002, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J 50/2002, de rubro: 'AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN

[17] Jurisprudencia P./J. 34/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 11 de enero de 2019 a las 10:12 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*, con número de registro digital: 2018980.



LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR.', determinó que por 'manifiesto' debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es.

"En estos términos, un motivo de improcedencia **manifiesto** e **indudable es aquel que está plenamente probado**, pues no requiere demostración, puesto que se ha advertido en forma patente y clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones.

"Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata opera en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.

"De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni puedan desvirtuar su contenido.

"Es de señalar que la certeza de que se haya actualizado la causa de improcedencia implica que el caso concreto encuadre en alguna de las hipótesis del artículo 61 de la Ley de Amparo.

"Bajo esa óptica, se tiene que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable que se ajuste a los supuestos fácticos, la demanda de amparo no debe ser desechada, pues de lo contrario se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el

juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio; por tanto, debe admitirse a trámite, a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.

"De este modo, puede concluirse que si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, éstas no deben originar el desechamiento de la demanda, a menos que su existencia sea manifiesta y notoria, pues de lo contrario, lo correcto es admitir a trámite la demanda, brindando con ello al quejoso la oportunidad de desestimar las causas de improcedencia relativas, y sólo en el caso de que no lo hiciere, entonces podrá decretarse el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.

"Lo anterior encuentra sustento en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"'DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por «manifiesto» lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por «indudable», que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y

las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada'.[18]

"En la especie, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa señaló como autoridad responsable al organismo público descentralizado Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, del que reclamó la negativa y omisión de dar cumplimiento al Decreto 1997, de once de febrero de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad', respecto al incremento porcentual de la pensión con relación al aumento al salario mínimo en el año dos mil nueve.

"El Juez del conocimiento desechó la demanda de amparo por considerar, sustancialmente, que no se trata de un acto de autoridad para efectos del amparo, ya que versa sobre una determinación de carácter laboral por parte del patrón de la quejosa, por lo que los conflictos individuales que se relacionen con el otorgamiento o negativa de pensión, deben ser ventilados ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.

"Consideraciones que se estiman incorrectas, ya que las causales de improcedencia invocadas no se actualizaron, en atención a las siguientes razones jurídicas.

"En principio, al desechar la demanda de amparo intentada no se tomó en consideración que de las constancias que por el momento obran en las actuaciones del juicio y de los antecedentes que la quejosa expuso bajo protesta de decir verdad, se desprende que el promovente del amparo ya tiene el carác-

[18] Tesis 2a. LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.*

ter de pensionado y lo que reclama es únicamente la falta del pago relativo al incremento porcentual de la pensión en relación con el aumento al salario mínimo en la entidad; tan es así que la promovente allegó a su escrito de demanda el periódico oficial del Estado, de **once de febrero de dos mil quince**, en el que se publicó el Decreto 1997, por el cual se le concedió pensión por jubilación.

"En ese sentido, si el acto reclamado consiste en la omisión de dar cumplimiento de un decreto con el que se otorgó a la quejosa la pensión, es evidente que no existe una relación laboral entre el organismo descentralizado y su entonces trabajadora, **sino una administrativa derivada de la nueva situación que adquirió como jubilada**, por tanto la omisión de pagar el incremento de pensión constituye un acto administrativo respecto del que no procede el juicio laboral burocrático, de modo que en el presente asunto no se está en el supuesto de la relación en un nivel de coordinación a que se refiere el Juez de Distrito en el acuerdo recurrido.

"Por otro lado, se estima que en el caso en concreto no es aplicable el criterio que se invoca en el auto recurrido, dado que en él se establece que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje es competente para conocer los conflictos que se susciten, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva o bien de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo legalmente establecido, es decir, no señala que el tribunal en comento sea competente para resolver cuestiones relativas a la omisión de pagar el incremento de una pensión, como acontece en el caso, de ahí que, se insiste, no se está en los supuestos contemplados por el criterio de referencia.

"Finalmente, en una nueva reflexión sobre el particular, se observa que no es necesario agotar el principio de definitividad en el juicio de control constitucional, ya que la omisión de pagar el incremento de pensión se trata de un acto que carece de fundamentación y motivación, por lo que se actualiza la hipótesis de excepción a que alude el artículo 61, fracción XX, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone:

"'No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones

directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.'

"Ciertamente, cuando el acto reclamado consiste en la omisión de cumplir con el aumento del monto de una pensión establecido en el decreto en el que le fue otorgada a la quejosa, implica que no existe mandamiento escrito que funde ni motive la causa legal de tal proceder, lo que configura una violación directa al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no es necesario agotar los medios de defensa legales para combatirlo ante las autoridades locales.

"Es aplicable la jurisprudencia 5 «PC.XII.A. J/5 A (10a.)», del Pleno en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, visible en la página 3049 de la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III, Décima Época, que establece:

"'RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN DE CUMPLIRLA, ES INNECESARIO AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Cuando el acto reclamado consiste en la omisión de cumplir una resolución administrativa dictada por el Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, es innecesario agotar el juicio de nulidad previsto en el artículo 13, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, antes de promover el juicio de amparo indirecto, pues ese acto, por su naturaleza, implica que no exista mandamiento escrito que funde y motive la causa legal de tal proceder, lo que configura una violación directa al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, actualiza una excepción al principio de definitividad en términos de los artículos 107, fracción IV, constitucional, 61, fracción XX, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente y 73, fracción XV, último párrafo, de la abrogada'.

"Razones por las que este órgano colegiado abandona el criterio sustentado por la anterior integración de este Tribunal Colegiado de Circuito, en el am-

paro en revisión **********, resuelto en sesión del veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho.

"En consecuencia, ante lo **fundado** de los agravios suplidos en su deficiencia, procede **revocar** el acuerdo recurrido y ordenar que se **admita a trámite** la demanda de que se trata.

"Es aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone:

"'RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. El artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo establece que procede el recurso de queja en amparo indirecto contra las resoluciones que desechen una demanda de amparo. Por su parte, el diverso 103 del mismo ordenamiento prevé que, en caso de resultar fundado el recurso, se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que ésta implique la reposición del procedimiento. Así, del análisis relacionado de esas disposiciones, tomando en consideración la naturaleza del recurso de queja en el que no existe devolución de jurisdicción, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito declare fundado el recurso de queja contra el desechamiento de una demanda de amparo, éste dictará la resolución que corresponda, ordenando al Juez de Distrito proveer lo conducente en relación con la admisión, en términos de los artículos 112 a 115 del propio ordenamiento, lo que implica que no puede asumir la jurisdicción que a éste corresponde.'"[19]

CUARTO.—**Existencia de la contradicción de tesis.** Debe determinarse si existe la contradicción de tesis denunciada, pues ésta constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver sobre la postura que debe prevalecer como jurisprudencia.

[19] Jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 901, Libro 9, Tomo II, agosto de 2014, Décima Época de la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.*



Para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan: 1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y, 2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.

Por tanto, para que se actualice la discrepancia de tesis, es necesario que se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin ser óbice para ello que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean.

Tal criterio es acorde a lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se desprende de las siguientes jurisprudencias:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan 'tesis contradictorias', entendiéndose por 'tesis' el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico

respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.', al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que 'al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes' se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en 'diferencias' fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."[20]

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.—Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo 'tesis' que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un

[20] Novena Época, con número de registro digital: 164120. Instancia: Pleno, tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,* Tomo XXXII, agosto de 2010, materia común, tesis P./J. 72/2010, página 7.

criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."[21]

Ahora, como se advierte de las transcripciones hechas en esta ejecutoria, los criterios contendientes tienen origen en juicios de amparo indirectos en los que esencialmente se reclamó la omisión por parte del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, de aumentar el monto de la pensión de conformidad con el decreto en el que se otorgó esa calidad.

1. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, en la ejecutoria del recurso de queja 201/2019, estableció:

– Que respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa debió acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, órgano jurisdiccional que puede analizar la omisión reclamada al Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, de conformidad con los artículos 1 y 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

– Asimismo, determinó que en el caso que analizó no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, pues la normatividad que

[21] Novena Época, con número de registro digital: 189998. Instancia: Pleno, tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,* Tomo XIII, abril de 2001, materia común, tesis: P./J. 27/2001, página 77.

prevé el medio ordinario de defensa también prevé la suspensión del acto impugnado, en los mismos términos de la Ley de Amparo; porque dicho juicio está previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y no en un reglamento y, además, porque cuando en el juicio de amparo se reclaman actos omisivos y en la demanda se alegue falta o insuficiente fundamentación no es jurídicamente factible estimar que se está ante un supuesto de excepción para no acatar el principio de definitividad, dado que la naturaleza de los actos por sí misma implica una lisa y llana ausencia de actuación de las autoridades, por lo que no es loable que estén fundados en algún precepto legal.

2. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, al resolver el recurso de queja 218/2019, determinó:

– Que no se actualizaron los motivos de improcedencia por los que se desechó el juicio de amparo indirecto, en atención a que derivado del carácter de pensionado del quejoso la relación con la autoridad responsable es administrativa, por lo que no procede el juicio laboral burocrático como lo sostuvo el a quo.

– Que no es necesario acatar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de control constitucional, ya que la omisión de cumplir con el aumento del monto de una pensión establecida en el decreto en que fue otorgada aquélla, implica que no existe un mandamiento escrito que funde y motive la causa legal de tal proceder, por lo que se actualiza la excepción a que alude el artículo 61, fracción XX, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo y, a su vez, configura una violación directa a la Constitución Federal.

De lo anterior, se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes al resolver la problemática planteada, mantuvieron posturas contradictorias, específicamente en lo referente a: **si las omisiones, por su naturaleza, deben o no considerarse como actos que carecen de fundamentación y motivación, a fin de determinar si se actualiza una de las excepciones relativas al principio de definitividad.**

Por consiguiente, se estima que los órganos colegiados contendientes mantienen criterios jurídicos discrepantes en torno a un mismo punto de dere-

cho y sobre el mismo problema jurídico central, lo que conduce a concluir que **sí existe la contradicción** de tesis.

QUINTO.— **Estudio de fondo y determinación del criterio que debe prevalecer**. En términos del artículo 226, fracción III, de la Ley de Amparo, al resolver una contradicción de tesis, este órgano plenario está facultado para acoger alguno de los criterios discrepantes o sustentar uno diverso.

En ese entendido, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de este Pleno de Circuito, conforme a las consideraciones y fundamentos legales que se exponen a continuación.

El artículo 1o. de la Ley de Amparo, establece:

"**Artículo 1o.** El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:

"**I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos** reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

"**II.** Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

"**III.** Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"**El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones** por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley." (énfasis añadido)

De lo anterior se desprende, en lo que aquí interesa, que el juicio de amparo indirecto tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos; asimismo, que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos.

Por su parte, el artículo 61, fracción XX, de la referida legislación, señala:

"**Artículo 61.** El juicio de amparo es improcedente:...

"**XX.** Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.

"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.

"Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;"

Del precepto legal reproducido, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; esto es, el principio de definitividad.

Asimismo, que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, **si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución**.

En la especie, el acto reclamado, en ambos casos, consiste en la omisión de dar cumplimiento a un determinado decreto respecto al incremento porcentual de la pensión con relación al aumento al salario mínimo en el año dos mil diecinueve, por parte del organismo público descentralizado Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.

Ahora bien, de conformidad con el marco normativo expuesto, se estima que el acto reclamado antes señalado sí se encuentra en la excepción al principio de definitividad prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a que dicha porción normativa es clara al establecer que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, es decir, no hace distinción sobre a qué tipo de actos se les debe exigir fundamentación y a cuáles no, sino que únicamente señala "si el acto reclamado carece de fundamentación."

En ese sentido, tomando en consideración que el artículo 1o. de la Ley de Amparo, precisa que el juicio de amparo indirecto tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por **actos u omisiones** de autoridad que violen los derechos humanos, válidamente se puede sostener que esos actos, sin distinción, son susceptibles de carecer de fundamentación y ubicarse en la referida excepción, como acontece en los casos de los que derivan las ejecutorias materia de la presente contradicción.

Máxime que la interpretación gramatical que se hace a dicho precepto legal –Artículo 61, fracción XX, de la ley de Amparo–, es de mayor protección para los solicitantes del amparo, pues ante la falta de fundamentación del acto reclamado, tienen la posibilidad de acudir directamente al juicio biinstancial al considerar violados sus derechos fundamentales; lo que es acorde con lo dispuesto por el artículo 1o. constitucional.

En tales condiciones, al advertirse en la vía de amparo indirecto la ausencia de mandamiento escrito, pues el acto reclamado es una omisión, de suyo acarrea la falta total de fundamentación y motivación del acto reclamado, en

consecuencia, se actualiza la excepción prevista en el último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, misma que origina la procedencia del juicio de amparo indirecto, sin necesidad de acatar el principio de definitividad.

Por razón de lo anterior, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la siguiente tesis:

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO ACATARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A UN DECRETO PENSIONARIO EN RELACIÓN CON EL AUMENTO SALARIAL CORRESPONDIENTE. Cuando el acto reclamado consiste en la omisión de cumplir con lo establecido en un decreto pensionario en relación con el aumento salarial correspondiente, es innecesario acatar el principio de definitividad antes de promover el juicio de amparo indirecto, pues ese acto, por su naturaleza, implica que no existe mandamiento escrito que funde y motive la causa legal de tal proceder, sin que la Ley de Amparo haga distinción sobre a qué tipo de actos se les debe exigir fundamentación y a cuáles no; en consecuencia, se actualiza la excepción al principio de definitividad en términos del artículo 61, fracción XX, último párrafo, de la Ley de Amparo.

Con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que este Pleno de Circuito establece, es obligatoria para los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, los Juzgados y Tribunales del orden común, los Tribunales del Trabajo y Administrativos locales y federales, que se ubican dentro de este Decimoctavo Circuito.

En términos de los artículos 218, 219 y 220 de la Ley de Amparo, se deberá dar publicidad a la tesis aprobada en la presente resolución.

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE:

PRIMERO.—Sí existe la contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados en Materias Penal y



Administrativa de este Décimo Octavo Circuito, conforme a lo establecido en el considerando cuarto de este fallo.

SEGUNDO.—Debe prevalecer el criterio sustentado por este Pleno de Circuito en la tesis jurisprudencial redactada en el último considerando de esta resolución.

TERCERO.—Dese publicidad a la tesis que se sustenta en la presente resolución.

Notifíquese; con testimonio hágase del conocimiento la presente resolución al Juzgado de Distrito denunciante, así como a los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido, en el entendido de que forman parte del presente engrose, las observaciones que, en su caso, realice a la ejecutoria y jurisprudencia respectivas la Dirección General de Coordinación y Compilación de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así lo resolvió por unanimidad de tres votos el Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito con residencia en Cuernavaca, Morelos, integrado por los Magistrados **Guillermo del Castillo Vélez, en su calidad de presidente**, **Nicolás Nazar Sevilla** y **Alfredo Cid García**; siendo ponente el segundo de los nombrados, quienes firmaron ante el secretario del Pleno, **Ernesto García Rubio**, quien autoriza y da fe.

"En términos de los (sic) previsto en los artículos 3, fracción II y 20, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprimen los datos personales."

Nota: Las tesis de jurisprudencia y aisladas 2a./J. 73/2014 (10a.), 1a. XVII/2018 (10a.), 2a./J. 84/2018 (10a.), P./J. 11/2018 (10a.), PC.XII.A. J/5 A (10a.) y P./J. 34/2018 (10a.) citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas, del viernes 16 de marzo de 2018 a las 10:19 horas, del viernes 24 de

agosto de 2018 a las 10:32 horas, del viernes 8 de junio de 2018 a las 10:14 horas, del viernes 2 de octubre de 2015 a las 11:30 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,* Décima Época, Libro 62, Tomo 1, enero de 2019, página 9, respectivamente.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO ACATARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A UN DECRETO PENSIONARIO EN RELACIÓN CON EL AUMENTO SALARIAL CORRESPONDIENTE. Cuando el acto reclamado consiste en la omisión de cumplir con lo establecido en un decreto pensionario en relación con el aumento salarial correspondiente, es innecesario acatar el principio de definitividad antes de promover el juicio de amparo indirecto, pues ese acto, por su naturaleza, implica que no existe mandamiento escrito que funde y motive la causa legal de tal proceder, sin que la Ley de Amparo haga distinción sobre a qué tipo de actos se les debe exigir fundamentación y a cuáles no; en consecuencia, se actualiza la excepción al principio de definitividad en términos del artículo 61, fracción XX, último párrafo, de la Ley de Amparo.

PLENO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
PC.XVIII.P.A. J/9 K (10a.)

Contradicción de tesis 6/2019. Entre las sustentadas por el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito. 2 de septiembre de 2020. Unanimidad de tres votos de los Magistrados Guillermo del Castillo Vélez, Nicolás Nazar Sevilla y Alfredo Cid García. Ponente: Nicolás Nazar Sevilla. Secretario: Juan Manuel Aguirre Garza.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, al resolver la queja 201/2019, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, al resolver la queja 218/2019.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de diciembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL TRIBUNAL DE ALZADA, LUEGO DE LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DE LA RACIONALIDAD DEL EJERCICIO DE MOTIVACIÓN REALIZADO POR EL JUEZ DE CONTROL SOBRE LA APRECIACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA, ESTÁ FACULTADO PARA REASUMIR JURISDICCIÓN Y CORREGIRLA, SIN VULNERAR EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 27 DE OCTUBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE OCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RAÚL MARTÍNEZ MARTÍNEZ, BLANCA EVELIA PARRA MEZA, ALFREDO MANUEL BAUTISTA ENCINA, DAVID GUERRERO ESPRIÚ, FAUSTINO CERVANTES LEÓN, JOSÉ ENCARNACIÓN AGUILAR MOYA, JORGE SALAZAR CADENA Y MARIO ALEJANDRO MORENO HERNÁNDEZ. PONENTE: RAÚL MARTÍNEZ MARTÍNEZ. SECRETARIO: FAUSTO ARMANDO LÓPEZ DELGADO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—**Competencia.** Este Pleno del Decimoquinto Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en los artículos 3, 44, 45, 50 y demás relativos del Acuerdo General 8/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el dieciocho de febrero de dos mil quince y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete siguiente, por tratarse de una contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, con sede en esta ciudad, lugar donde este Pleno ejerce jurisdicción.

SEGUNDO.—**Legitimación.** La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107,

fracción XIII, de la Constitución General de la República y 227, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que se formuló por el Magistrado del Octavo Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad.

TERCERO.—**Criterios contendientes.** A efecto de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, resulta necesario reseñar brevemente las posturas sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes, debiéndose precisar que la denuncia de contradicción se presentó en relación con el tema siguiente:

"**Determinar si en el sistema penal acusatorio un tribunal de alzada puede reasumir jurisdicción y resolver el fondo de la apelación sin transgredir el principio de inmediación**."

No obstante lo anterior, la probable divergencia de criterios precisada en la denuncia relativa no vincula a este Pleno a constreñirse a los términos en que es planteada, ni al punto jurídico sobre el que fue propuesto, sino que tales precisiones del denunciante constituyen un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine los criterios contendientes y determine si existe o no disconformidad en las consideraciones relativas y, en su caso, emita la jurisprudencia que deba prevalecer, además, por disposición expresa del artículo 226, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, en los asuntos de esta naturaleza es facultad del órgano correspondiente acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, o bien, declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis, con la única limitante de que la decisión sea tomada por la mayoría de los Magistrados integrantes de este Pleno.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITERIOS PRECISADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONSTREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA NI AL PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO.—La denuncia formulada por el legitimado para ello, en términos del artículo 227, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine los



criterios contendientes y determine si existe o no disconformidad en las consideraciones relativas y, en su caso, emita la jurisprudencia que deba prevalecer, sin que el tema probablemente divergente señalado por el denunciante vincule al Pleno o a las Salas del Alto Tribunal a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, dado que el propósito formal de la denuncia queda satisfecho en la medida en que origina el trámite de la contradicción de tesis y justifica la legitimación correspondiente; además, por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la legislación citada, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de los Ministros integrantes."[1]

Bajo tal marco de referencia, se procede a reseñar las posturas sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes.

1. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito: El amparo en revisión 452/2018, se originó con motivo del recurso interpuesto por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Cuarto Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 8/2018, del índice del citado Cuarto Tribunal Unitario –promovido contra una determinación de segunda instancia que revocó un auto de no vinculación a proceso y en su lugar dictó auto de vinculación a proceso–, en la cual otorgó la protección federal a la parte ahí quejosa, para los siguientes efectos:

"... Consecuentemente, por las razones ya expuestas, deberá concederse el amparo y protección de la Justicia Federal a (1) **********, para el efecto de que la autoridad responsable, Tercer Tribunal Unitario del Décimo Quinto, con sede en esta ciudad.

"1) Deje insubsistente la sentencia de quince de junio de dos mil dieciocho, dictada en le (sic) toca penal **********, que constituye el acto reclamado en este juicio.

[1] Tesis aislada 2a. V/2016 (10a.), Décima Época, publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 28, Tomo II, marzo de 2016, materia común, página 1292, registro: 2011246.

"2) Dicte otra en la cual:

"a) En atención de los argumentos expuestos en esta sentencia, reitere fundado el agravio hecho valer por la agente del Ministerio Público de la Federación, en el recurso de apelación contra la no vinculación a proceso, dictado en la continuación de la audiencia inicial, llevada a cabo el veintisiete de abril último, en la causa penal **********, consistente en que el Juez de Control se apartó de las directrices de los artículos 19 constitucional y 316, 317, 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al partir de la premisa en el sentido de que los datos de prueba aportados por la defensa en la etapa de investigación inicial, resultaban suficientes para determinar el valor probatorio del informe policial homologado y demás antecedentes precisados por la fiscalía en la carpeta de investigación y expuestos en la audiencia, para demostrar de (sic) manera de suposición los elementos del hechos (sic) considerado como delito contra la salud; en tanto, que en esa etapa, el análisis respectivo únicamente debe constreñirse a valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, al considerar ambas hipótesis o teorías del caso, aun en el supuesto de haber desahogado medios de convicción por parte del imputado o su defensa.

"b) Reponga el procedimiento para que el Juez de Control, con plenitud de jurisdicción, resuelva sin perder de vista las reglas que rigen la ponderación de los datos de prueba, analice nuevamente los datos expuestos por las partes en la audiencia inicial y determine si son idóneos y pertinentes para establecer razonadamente la existencia del hecho que la ley señala como delito y la probable participación del aquí quejoso (1) ********** y en ese sentido siga el procedimiento relativo que corresponda."

El sustento toral de esa sentencia dictada en el amparo indirecto 8/2018, se hizo consistir en que la responsable (Magistrado del Tercer Tribunal Unitario) había transgredido el principio de inmediación, pues si bien estimó fundados los agravios vertidos por la representación social (vía recurso de apelación contra el auto de no vinculación a proceso), lo cierto era que **reasumió jurisdicción y emitió auto de vinculación a proceso, no obstante que la autoridad que debía dictar la determinación que procediera, lo era el Juez de Control**.

En relación con esa determinación, en la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 452/2018, el Segundo Tribunal Colegiado sostuvo que de acuerdo con las directrices que derivan de la ejecutoria de la contradicción de tesis 47/2016, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 29/2018 (10a.), de rubro (sic): "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. EL JUEZ DE CONTROL QUE DICTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DEBE SER EL MISMO QUE CONOCIÓ DE LA IMPUTACIÓN Y LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO.", la autoridad responsable sí **transgredió el principio de inmediación al reasumir jurisdicción; abordar de manera directa el examen de los datos de prueba; revocar la resolución apelada y dictar auto de vinculación a proceso**.

Consideró que a partir del contenido del artículo 468, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el *tribunal de apelación* tiene vedada la posibilidad de ponderar de nueva cuenta la eficacia y alcance convictivo de los medios de prueba desahogados ante el Juez primario, puesto que **sólo puede examinar esa cuestión a partir de los razonamientos plasmados por el a quo** al emitir la resolución materia de ese recurso, **estableciendo** de esa manera **si la apreciación probatoria se ajustó o no a lo dispuesto en el artículo 359** del citado ordenamiento adjetivo.

Por tanto, indicó el Tribunal Colegiado, **el tribunal de alzada** debe analizar las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, a fin de **establecer si los argumentos de la valoración de las pruebas se hizo de manera libre y lógica**, y en caso de establecer que **no se hizo así**, ha de **anular la sentencia y devolver el asunto al *tribunal de enjuiciamiento* para que emita nueva sentencia**.

Esto, precisó el citado órgano colegiado, porque **sólo de esa manera se preserva el principio de inmediación**, a que aluden los artículos 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Federal y 9o. del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que en caso de resultar fundados los agravios expuestos por el apelante, sería el propio a quo que conoció de la audiencia de juicio y del desahogo de los medios de prueba, quien emitiría la sentencia.

Dichas estimaciones, puntualizó el Tribunal Colegiado, también resultan aplicables al recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso,

o de no vinculación a proceso, porque, en términos de lo determinado en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 29/2018 (10a.), en la audiencia inicial el Juez de Control es quien recibe de manera directa y personal los datos de prueba expresados por el fiscal al formular imputación, así como los argumentos expuestos por el imputado y su defensa al refutar esa imputación.

Lo anterior, señaló, considerando que al resolver sobre la petición de vinculación a proceso planteada por el Ministerio Público en la audiencia inicial, el Juez de Control debió examinar únicamente la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación que sobre ello expusiera el imputado y su defensor, lo cual debía encontrar respaldo a partir de los datos de prueba que las partes refirieran en apoyo de esos argumentos.

Aunado a lo que antecede, señaló el Tribunal Colegiado, cobra relevancia el hecho de que, como ha quedado establecido en la jurisprudencia 1a./J. 29/2018 (10a.), el principio de inmediación que rige el proceso penal acusatorio exige que sea el mismo juzgador que presidió la audiencia inicial quien finalmente resuelva sobre la situación jurídica del imputado, porque es quien recibe la aprehensión sensorial directa de la información que emana de los órganos de prueba, de tal manera que es indispensable que sea el Juez de Control el que valore el material probatorio, sin que pueda delegar en alguna otra persona el desahogo y la valoración de los datos de prueba, ni aun ante la existencia de la videograbación de la audiencia relativa.

De ahí que, determinó dicho Tribunal Colegiado, si el Tribunal Unitario aborda de manera directa los datos de prueba referidos por las partes en la audiencia inicial en la que el Ministerio Público solicitó el auto de vinculación a proceso, fuera del contexto en que la fiscalía expuso su petición y la defensa planteó sus argumentos, **se transgrede el principio de inmediación** que permea el proceso penal acusatorio, adversarial y oral.

Por ello, concluyó el citado órgano colegiado que, como bien lo estimó el Tribunal Unitario de amparo, resulta ilegal el proceder del tribunal responsable al no constreñirse a examinar la razonabilidad de los argumentos expresados por las partes y su congruencia con los datos de prueba expresados por ellas,



al momento de producirse el debate en torno a la procedencia o improcedencia de la vinculación a proceso.

2. Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito: El amparo en revisión 34/2019, se originó con motivo del recurso interpuesto por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Quinto Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 17/2018, del índice del mencionado Quinto Tribunal Unitario –promovido, destacadamente, contra una determinación de segunda instancia que revocó un auto de no vinculación a proceso y, en su lugar, determinó reponer parcialmente el procedimiento (audiencia inicial)–, en la cual se otorgó la protección federal a la parte quejosa, para los siguientes efectos:

Que la autoridad responsable Magistrado del Octavo Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito hiciera lo siguiente:

a) Deje insubsistente la resolución reclamada de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal 108/2018; y

b) En su lugar dicte otra, en la que determine que los agravios expresados por el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Décimo Primera Investigadora Tijuana de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California apelante, no superan la totalidad de los razonamientos rectores del auto de no vinculación apelado, conforme a lo expuesto en la presente ejecutoria, por tanto, confirmar, en lo que fue materia de apelación, el auto de no vinculación a proceso emitido en ocho de agosto de dos mil dieciocho, en la causa penal 896/2018, por la Juez de Distrito especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en funciones de Juez de Control.

En la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 34/2019, el Cuarto Tribunal Colegiado determinó, en lo que interesa, que fue correcta la decisión del tribunal de amparo, ya que el Unitario de apelación violentó las formalidades esenciales del procedimiento y el debido proceso, al advertir una ausencia de fundamentación y motivación para sostener que para la emisión del nuevo auto

de vinculación a proceso que estimó debía dictarse, era necesario ordenar la reposición de la audiencia inicial.

Lo sostuvo así dicho Tribunal Colegiado con base en que, de acuerdo con la naturaleza del recurso de apelación que deriva de los preceptos 456, 458 y 461 del título XII, denominado "De los recursos", capítulo I, "Disposiciones comunes" y los ordinales 475, 476, 477, 478, 479, 480 y 482 del apartado II, "Trámite de apelación" del Código Nacional de Procedimientos Penales aplicable al caso, se está en presencia de un medio de impugnación de carácter vertical, cuya competencia legítima para resolver dicho recurso recae en un tribunal de alzada que hace las veces de revisor de las decisiones adoptadas por el juzgador de primer grado, en el que no existe reenvío al momento de emitir la resolución, circunstancia que implica que el órgano de segundo grado reasuma la jurisdicción que tenía el natural para resolver el recurso planteado.

Adicionalmente, precisó el citado órgano colegiado, la reposición del procedimiento se dará sólo cuando resulte estrictamente necesario subsanar violaciones a derechos procesales de las partes, esto es, que debe ser excepcional la reposición aludida.

Sostuvo el órgano colegiado que los tres sentidos que puede adoptar el tribunal de segundo grado al resolver el recurso de apelación son: en principio, confirmar, modificar y revocar la resolución controvertida. Dicha circunstancia llevó al Tribunal Colegiado a considerar que la alzada tiene la posibilidad de refrendar las consideraciones adoptadas por el juzgador de primer grado, cambiar algunos razonamientos o resolver en sentido adverso al primigenio, cuyas facultades, señaló, necesariamente conducen a establecer que el estudio de los agravios planteados por los recurrentes, que deben ser examinados bajo el principio de estricto derecho (porque no existe en el Código Nacional de Procedimientos Penales la figura de la suplencia de la queja deficiente), deben ser dirimidos por el tribunal competente, es decir, el de segundo grado, por ser el que debe emitir la nueva resolución que sustituya a la impugnada, puesto que no existe la figura del reenvío, estando obligado según los lineamientos previstos en el código adjetivo, a reasumir jurisdicción para atender los motivos de disenso hechos valer, resolviendo exclusivamente sobre los planteamientos formulados, sin posibilidad de excusarse en el estudio que se haga.



De manera que, señaló, la resolución que se emitiera en razón del recurso de apelación, debía comprender la contestación de los agravios en la medida que se plantearon como inconformidades que agraviaban al recurrente o recurrentes, debiendo ser exhaustivos y congruentes al atender los mismos, sin que, reiteró, pueda el órgano revisor extender el análisis de la decisión a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso.

Asimismo, señaló que sólo en casos extremos, en que resulte indispensable para subsanar violaciones inherentes al debido proceso o cualquier derecho fundamental, y siempre y cuando trasciendan al resultado de lo resuelto, podrá ordenarse la reposición del procedimiento cuando se actualicen alguno de los supuestos consagrados en el artículo 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Destacó que, en el caso sujeto a estudio, como lo advirtió el tribunal de amparo, el Tribunal Unitario de apelación no cumplió con los requisitos de fundamentación y motivación al dictar la resolución, pues no obstante que el agente del Ministerio Público de la Federación interpuso recurso de apelación, lo cierto es que concluyó en forma genérica y sin exponer los motivos de ello, que había elementos suficientes para ordenar –sin justificar su proceder– la reposición de la continuación de la audiencia inicial, celebrada por la Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, ordenando a la referida juzgadora emitiera la resolución únicamente por escrito, y que aunque expuso por qué motivo dicho tribunal no resolvía el fondo de la contienda planteada en el recurso de apelación –por un aspecto relacionado con la valoración de los datos de prueba–, ordenó la reposición del procedimiento, no obstante que las disposiciones procesales lo conminaban a resolver el fondo de la materia.

Precisó el Tribunal Colegiado que, además del tema relacionado con la valoración, no fundó ni motivó el por qué se ordenaba la reposición del procedimiento, no obstante que no se advierte que se hubiese argumentado por el recurrente –representante social– una violación a las formalidades esenciales del procedimiento que ameritara una resolución en ese sentido.

También relató que de la resolución reclamada en esa instancia, se advertía que el órgano ordenador responsable arribó al convencimiento de que había

datos de prueba indebidamente valorados, lo que estimó suficiente para reponer el procedimiento, pero en ningún momento hizo alusión a que tal proceder emanara del agravio formulado por la fiscalía, sino que hizo una declaratoria a partir de la apreciación que tuvo, sin atender a que había o no un agravio formulado en ese sentido.

Además, que aun cuando se razonó por qué se ordenó la reposición del procedimiento y bajo qué causal de reposición actuó el Tribunal Unitario responsable para ordenar que el Juez de Control emitiera una resolución por escrito, no se advertía a qué derecho fundamental se refirió el apelante, que justificara esa reposición.

Añadió que en la sentencia dictada en apelación se aprecia que el tribunal responsable revocó el auto de no vinculación a proceso, debiendo sustituir con un nuevo pronunciamiento la continuación de la audiencia inicial, que en realidad no se ordenó una reposición del procedimiento, ya que no instruyó el desahogo de una diligencia formalmente desahogada y de la que se ordenó repetir su pronunciamiento conforme a ciertos lineamientos, como por ejemplo, cuando se ordena la reposición para brindar asistencia consular, sino que sólo ordenó emitir un nuevo pronunciamiento, prescindiendo de ciertos datos.

De ahí, consideró el Tribunal Colegiado, no se puede concluir que la sentencia reclamada es una verdadera reposición, no obstante que en el sentido se haya asentado: "*Se revoca el auto de no vinculación a proceso ...*", porque su naturaleza debía determinarse por los alcances y efectos otorgados y no por la denominación que se le otorgara a la sentencia, en términos del artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Agregó el Tribunal Colegiado, que no soslayaba que en algunos Circuitos de la República Mexicana, ciertos Tribunales Unitarios son del criterio de considerarse impedidos para resolver el fondo de los recursos de apelación, no obstante de trastocar la figura del reenvío, devuelven la jurisdicción al juzgador natural para que haga nuevos pronunciamientos de acuerdo a consideraciones adoptadas por el tribunal de alzada.

Sin embargo, precisó el citado órgano colegiado, no comparte ese criterio, ni encuentra impedimento para que en segundo grado se pueda entrar al estudio de fondo del recurso de apelación que les haya sido propuesto, sujetándose en todo momento a los agravios formulados por los recurrentes (ante la inexistencia de la figura de la suplencia de la queja deficiente), sin que esto viole el principio de inmediación, porque el análisis que debe realizarse en dicha sede, es acerca de la legalidad de los razonamientos utilizados por el Juez natural al momento de emitir la resolución impugnada, ponderando las reglas de la lógica y máximas de la experiencia, para determinar si fue correcta o incorrecta la decisión del juzgador en el sentido de que los datos de prueba aportados al sumario para la fiscalía, son realmente insuficientes como lo precisó la a quo al emitir su resolución de no vinculación a proceso, sin que sea obstáculo el que en segunda instancia no se haya presenciado el desahogo de los datos de prueba en forma directa como sucedió en la fase inicial, porque ello no resulta necesario para confirmar, modificar o revocar una resolución, dado que el estudio deberá versar sobre la legalidad o no de la decisión de primer grado adoptada.

Aunado a ello, sostuvo el Tribunal Colegiado, en la fase del término constitucional no debe realizarse una valoración de los datos de prueba, sino una simple apreciación de los mismos (sin determinar una tasación convictiva) para concluir si tales elementos permiten establecer, bajo las reglas de la racionalidad, que se cometió el hecho que la ley señala como delito materia de la formulación de la imputación y la probabilidad de que los justiciables cometieron dicha conducta.

Indicó dicho órgano colegiado que incluso, en el caso, contrario a lo que se sostuvo en los agravios, la decisión del tribunal de amparo no era incorrecta, por el contrario, ponía en evidencia que el tribunal de apelación se pronunció sobre la incorrección de la valoración de los datos de prueba y aun cuando, en el caso, no existió petición de reposición, la ordenó y ello denotó la suplencia de los agravios, al no haber justificación por parte del recurrente, ni por parte del tribunal de apelación (oficiosa).

Sostuvo el citado Tribunal Colegiado que desconocer la existencia de la figura del recurso de apelación, sustentando un impedimento para resolver

el fondo del asunto en alzada (reposición del procedimiento), sería tanto como hacer nugatorio el derecho a un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que se encuentra tutelado en el propio artículo 17 constitucional, así como los numerales 8.2, inciso h) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debido a que el estudio que se hace al resolver la situación jurídica únicamente determina (en los casos de hechos delictivos que no ameritan prisión preventiva oficiosa), si es factible o no continuar con la investigación de los eventos ilícitos imputados, sin pretender fincar una probable responsabilidad penal como sucedía con el auto de formal prisión, pues en todo momento debe preservarse la presunción de inocencia.

Por lo cual, consideró el Cuarto Tribunal Colegiado no existe obstáculo para examinar los agravios en sede de apelación por el tribunal responsable y emitir una decisión que sustituya a la recurrida.

Incluso, añadió el Tribunal Colegiado, el artículo 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que trata de las resoluciones del tribunal de enjuiciamiento apelables, en su fracción II, correspondiente a las sentencia (sic) definitivas, señala que se puede entrar a las consideraciones contenidas en la propia resolución definitiva, "... *distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación.*"

Circunstancia que, preció (sic) el órgano revisor, por identidad de razón, permite que el tribunal de apelación pueda entrar a examinar el fondo del recurso cuando versa sobre agravios inherentes al auto de término constitucional, ya sea de vinculación a proceso o no vinculación, habida cuenta que de no permitirse que se haga tal estudio, se insiste, sería tanto como eliminar dicho medio de impugnación sin que exista posibilidad de que un tribunal de segundo grado analice la legalidad de la resolución de término constitucional adoptada por el Juez de Control, cuando en realidad es el propósito del recurso en cita, legitimar la emisión de las resoluciones con apego a la legalidad.

Además que, en el caso, si bien se estudió la materia de la inconformidad, lo cierto era que al hacerlo, como lo advirtió el tribunal de amparo, se suplió la deficiencia del agravio, al grado de advertir incorrección en la valoración «de» ciertos datos y ordenó una reposición, sin agravio al respecto o sin justificar la

procedencia de oficio, como por ejemplo, debido a que no actuó el Juez de conformidad con una regla procesal, por no hacer saber algún derecho que asistía al imputado, por no advertirse que se proporcionaron datos para su defensa, etcétera, así que no cabía la reposición del procedimiento, ya que si el Juez de Control, a juicio del tribunal de apelación, emitió un juicio incorrecto en la apreciación de los datos de prueba aportados, en uso de su jurisdicción debió emitir la decisión correspondiente, pero al no hacerlo se suplió la deficiencia de la inconformidad ministerial.

También señaló que, en torno al tópico de reasunción de jurisdicción, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el *Caso Norín Catrimán y otros* (dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche), hizo interpretación en relación a un recurso que se interpuso contra una sentencia definitiva de condena en contra de los implicados, cuyas consideraciones, precisó el órgano colegiado, no dejaba de reconocer la parte sustancial de ese fallo, en donde se establecen los requisitos necesarios con los que deben contar los medios de impugnación en general.

De tal manera que la interpretación realizada, señaló el Tribunal Colegiado, también es aplicable cuando se impugna una resolución de no vinculación a proceso, como sucedió en el caso que analizó, en el que se exigió del tribunal de alzada, para cumplir con los extremos de ser un recurso sencillo, rápido y eficiente, un análisis integral de los planteamientos que fueron propuestos a título de agravios y que debieron dar lugar a una decisión en la que confirmara, modificara o revocara la decisión sometida a su jurisdicción, pero no declarar fundado un agravio –*suplido en su deficiencia*– y ordenar reponer el procedimiento sin agravio al respecto o sin justificar que lo hacía de oficio porque advertía que esa indebida valoración –*que se estima no ocurrió, porque no hubo tasación de esos datos y el representante social afirmó que sí y ello motivó la decisión del tribunal*–, trascendió al resultado del fallo.

Máxime que, indicó el Tribunal Colegiado, su decisión no tiene efectos de reposición, si se toma en cuenta que no ordenó el desahogo de la audiencia, soslayando el principio de inmediación, sino que ordenó la emisión de una resolución prescindiendo de datos y en juicio podía efectuarlo el tribunal al conocer del recurso.

Tales consideraciones dieron lugar a la tesis XV.4o.9 P (10a.), de rubro (sic) y texto siguientes:

"RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL DE CORTE ACUSATORIO. SI AL CONOCER DEL INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN O DE NO VINCULACIÓN A PROCESO, EL TRIBUNAL DE ALZADA ADVIERTE UNA INDEBIDA VALORACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA, AL REASUMIR JURISDICCIÓN DEBE EMITIR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE Y NO ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. De la interpretación sistemática de los artículos 475, 476, 477, 478, 479, 480 y 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el tribunal de alzada puede refrendar las consideraciones adoptadas por el juzgador, cambiar algunos razonamientos o resolver en sentido adverso, a partir de la revisión de la racionalidad de los argumentos expresados por el tribunal de enjuiciamiento, con base en la inconformidad planteada en los agravios y emitir la decisión que sustituya a la impugnada, al no existir la figura del reenvío en materia penal, ya que el análisis es acerca de la legalidad de los razonamientos utilizados por el Juez natural al momento de emitir la resolución impugnada, ponderando las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, para determinar si fue correcta o incorrecta su decisión y no sobre la infracción a un derecho fundamental que amerite la reposición del procedimiento, sin que dicho proceder transgreda el principio de inmediación, ya que el artículo 468 del código referido que trata de las resoluciones del tribunal de enjuiciamiento apelables, en su fracción II, correspondiente a las sentencias definitivas, señala que se puede entrar a las consideraciones contenidas en la propia resolución definitiva: '... distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación ...', circunstancia que, por identidad de razón, permite al tribunal de apelación examinar el fondo del recurso interpuesto contra el auto de vinculación o de no vinculación a proceso, a través de lo cual podrá establecerse si el juzgador sustentó su decisión sobre bases racionales idóneas para hacerla aceptable, bajo los principios de la valoración lógica (principios de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente), de las máximas de la experiencia (conocimientos ordinarios del quehacer cotidiano en las actividades genéricas del ser humano mediante la observación de los fenómenos sociales, culturales, políticos y de la naturaleza) y del conocimiento científico, y

no ordenar la reposición del procedimiento, para prescindir de datos de prueba ya desahogados ante el Juez y emitir únicamente por escrito su decisión."[2]

CUARTO.—**Existencia de la contradicción.** En principio, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado criterio en el sentido de que se requiere corroborar si existe una contradicción de tesis, para lo cual deben advertirse los elementos siguientes:

a) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten, expresa o implícitamente, criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales; y

b) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.

Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan 'tesis contradictorias', entendiéndose por 'tesis' el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando

[2] Tesis aislada, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 70, Tomo II, septiembre de 2019, página 2207.

dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.', al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que 'al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes' se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en 'diferencias' fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."[3]

[3] Foja visible en la página siete del Tomo XXXII del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, agosto de 2010, Novena Época.

Así como la jurisprudencia P./J. 93/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO.—De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el Órgano Reformador de la Constitución pretendió remediar con la instauración del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición."[4]

En el caso, examinadas las ejecutorias relacionadas con la denuncia de contradicción de tesis, este Pleno de Circuito advierte que **sí existe la contra-**

[4] Visible en la página 5 del Tomo XXVIII del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, julio de 2008, Novena Época.

dicción de tesis denunciada, entre el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado del mismo Circuito, ya que los referidos órganos jurisdiccionales adoptaron expresamente criterios jurídicos discrepantes **sobre un mismo punto de derecho**, independientemente de que las cuestiones fácticas analizadas por ambos tribunales contendientes no sean exactamente iguales.

Es así, ya que el **Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito** concluyó que la autoridad de segunda instancia, en un recurso de apelación interpuesto contra un auto de no vinculación a proceso, tiene vedada la posibilidad de ponderar de nueva cuenta la eficacia y alcance convictivo de los datos de prueba desahogados ante el resolutor primario, de tal manera que en caso de resultar fundados los agravios expuestos por el apelante, debe ser el propio Juez de Control, que conoció de la audiencia inicial y del desahogo de los datos de prueba, quien emita el auto de vinculación a proceso o de no vinculación a proceso, según corresponda, dado que si el tribunal de alzada aborda de manera directa los datos de prueba referidos por las partes en la audiencia inicial en la que el Ministerio Público solicitó el auto de vinculación a proceso, fuera del contexto en que la fiscalía expuso su petición y la defensa planteó sus argumentos, se transgrede el principio de inmediación.

Por su parte, el **Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito** sostuvo un criterio en contrario, al concluir que la autoridad de segunda instancia, en un recurso de apelación interpuesto contra un auto de no vinculación a proceso, ante la inexistencia del reenvío, debe reasumir la jurisdicción que tenía el Juez natural, pudiendo cambiar algunos razonamientos o resolver en sentido adverso al primigenio, ya que de no permitirse que se haga tal estudio, sería tanto como eliminar dicho medio de impugnación, pues no habría posibilidad de que un tribunal de segundo grado analice la legalidad de la resolución de término constitucional adoptada por el Juez de Control, con lo cual no se viola el principio de inmediación.

Por tanto, en el caso se patentiza la existencia de criterios discrepantes entre los órganos contendientes, habida cuenta que el **Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito** determinó que la autoridad de segunda instancia, en un recurso de apelación interpuesto contra un auto de no vincula-

ción a proceso, tiene vedada la posibilidad de abordar de manera directa los datos de prueba referidos en la audiencia inicial, bajo pena de transgredir el principio de inmediación; sin embargo, el **Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito** consideró que en un recurso de apelación interpuesto contra un auto de no vinculación a proceso, ante la inexistencia del reenvío, el órgano de apelación debe reasumir la jurisdicción que tenía el Juez natural, sin que con ello se vulnere el principio de inmediación.

En tal virtud, ante la presencia de posturas divergentes sobre un mismo punto de derecho, en aras de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse, se torna necesario emitir el pronunciamiento respectivo para determinar qué criterio debe prevalecer.

Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que el Segundo Tribunal Colegiado no hubiere formado tesis respecto del criterio sustentado en la ejecutoria antes relatada, ya que la emisión formal de una tesis no constituye un requisito exigido por el numeral 217 de la Ley de Amparo, sino que basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión, como aconteció en el caso.

Es observable la jurisprudencia P./J. 27/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.—Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo 'tesis' que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por

los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

QUINTO.—**Determinación del criterio que debe prevalecer.** Debe prevalecer el criterio sustentado por este Pleno de Circuito, con base en las siguientes consideraciones:

En principio, debe puntualizarse que derivado de las ejecutorias antes descritas, se tiene que el punto jurídico concreto a discernir consiste en determinar, si:

¿Un tribunal de alzada, en el recurso de apelación interpuesto en contra del auto que resuelve la solicitud de vinculación a proceso, luego de llevar a cabo la revisión de la racionalidad del ejercicio de motivación realizado por el Juez de Control sobre el dato de prueba, puede reasumir jurisdicción para corregir tal ejercicio, sin vulnerar el principio de inmediación?

La respuesta a dicha pregunta es en sentido **afirmativo**.

Para evidenciar tal aserto, en principio, se estima oportuno definir el concepto y alcances del **principio de inmediación**, el cual se encuentra previsto en los numerales 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9o. del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo contenido es:

"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

"A. De los principios generales:

"...

"II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del Juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica."

"Artículo 9o. Principio de inmediación.

"Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de intervenir en la misma, con las excepciones previstas en este código. En ningún caso, el órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva."

De los preceptos normativos transcritos se advierte que el **principio de inmediación** requiere la **presencia del Juez** en el desarrollo de cada una de las audiencias desarrolladas en el procedimiento; exige la **percepción directa y personal** de los elementos probatorios útiles para la decisión; y establece que el Juez que interviene en la producción de las pruebas, **no podrá delegar en persona alguna su valoración**, por lo que debe ser éste quien emita el fallo del asunto.

Lo cual implica una relación de presencia física obligatoria e insoslayable entre el Juez del proceso y el resto de las partes, ya que las audiencias deben ser presididas por el juzgador de forma pública, conociendo de manera directa los argumentos tanto de imputación como defensivos planteados ante él y conforme a los datos de prueba, o bien, las pruebas desahogadas en su presencia, con el fin de asegurar que tenga un conocimiento real, personal y sensitivo, de los datos de pruebas que arrojaron los medios de convicción ante él producidos.

Este principio tiene como objeto primordial que el Juez conozca de primera mano y a través de sus sentidos, tanto la imputación del acusado, así como su defensa y las pruebas que al efecto se desahoguen en las diversas etapas del juicio oral, pues sólo así se puede concebir que el Juez tenga una idea clara y precisa de lo sucedido en el juicio, así como un conocimiento basto y personal de las pruebas en las cuales subyacerá su fallo.

Por las razones que la informan, es observable la jurisprudencia 1a./J. 54/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA PARA LA FORMACIÓN DE LA PRUEBA. EXIGE EL CONTACTO DIRECTO Y PERSONAL DEL JUEZ CON LOS SUJETOS Y EL OBJETO DEL PROCESO DURANTE LA AUDIENCIA DE JUICIO. Del proceso legislativo que culminó con la instauración del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se advierte que para el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, el principio de inmediación presupone que todos los elementos de prueba vertidos en un proceso y que servirán para decidir sobre la responsabilidad penal de una persona, deben ser presenciados sin mediaciones o intermediarios por el Juez en una audiencia. Los alcances de dicho propósito implican reconocer que es en la etapa de juicio donde la inmediación cobra plena aplicación, porque en esta vertiente configura una herramienta metodológica para la formación de la prueba, la cual exige el contacto directo y personal que el Juez debe tener con los sujetos y el objeto del proceso durante la realización de la audiencia de juicio, porque de esa manera se coloca al Juez en las mejores condiciones posibles para percibir –sin intermediarios– toda la información que surja de las pruebas personales, es decir, no sólo la de contenido verbal, sino que la inmediación también lo ubica en óptimas condiciones para constatar una serie de elementos que acompañan a las palabras del declarante, habilitados para transmitir y recepcionar de mejor manera el mensaje que se quiere entregar, como el manejo del tono, volumen o cadencia de la voz, pausas, titubeos, disposición del cuerpo, dirección de la mirada, muecas o sonrojo, que la doctrina denomina componentes paralingüísticos."

En relación con dicho principio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 47/2016, interpretó el referido principio de inmediación y, al respecto, concluyó que no únicamente tiene aplicación durante la fase de enjuiciamiento, sino que debe regir durante todo el procedimiento, es decir, desde la puesta a disposición del inculpado frente al juzgador, hasta su conclusión, **de tal manera que el principio de inmediación impone al juzgador la obligación de decidir de acuerdo**



con las impresiones personales que obtenga de la audiencia, particularmente con los "datos" y medios de prueba rendidos en el proceso, según sea la etapa procesal que se resuelva, como se aprecia de la parte conducente de la ejecutoria respectiva:

"49. En ese orden de ideas, es el principio de inmediación el que corresponde analizar en la presente ejecutoria. Así, las fracciones II y X del apartado A del artículo 20 constitucional, a la letra dicen:

"'Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

"'...

"'A. De los principios generales:

"'...

"'II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del Juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica.

"'...

"'X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio.'

"50. De la fracción II se advierte que el referido principio se encuentra integrado por dos aspectos fundamentales. El primero corresponde a que toda audiencia se desarrollará ante el Juez, sin que sea posible que pueda presidirla una persona distinta a él –como acontecía en el proceso penal mixto, ya que en la práctica las audiencias eran desahogadas por los secretarios sin la presencia del Juez–. El segundo está íntimamente relacionado con el anterior, puesto que si el Juez es el único que debe presenciar el desarrollo de la audiencia, no puede delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas.

"51. En ese orden de ideas, el principio de inmediación impone al juzgador la obligación de decidir de acuerdo con las impresiones personales que obtenga de la audiencia, particularmente con los datos y medios de prueba rendidos en el proceso, según sea la etapa procesal que se resuelva.

"...

"60. Ahora bien, cabe precisar que dicho principio no únicamente tiene aplicación durante la fase de enjuiciamiento, sino que debe regir durante todo el procedimiento, es decir, desde la puesta a disposición del inculpado frente al juzgador, hasta su conclusión.

"61. Ello, en virtud de que la fracción X del artículo 20 «apartado A» constitucional de manera textual determina que los principios del proceso también regirán en las audiencias preliminares al juicio, por tanto, los principios contenidos en ese precepto constitucional no son exclusivos de la fase de juicio oral, sino son aplicables en todo el procedimiento penal, es decir, en todas las audiencias.

"...

"100. Lo anterior, sin perjuicio de que el Juez que no presenció la formulación de la imputación y la solicitud de vinculación pueda conocer tales actos procesales mediante una videograbación; sin embargo, conforme al principio de inmediación en su vertiente objetiva, es indispensable que el Juez que emita el fallo valore el material probatorio, advertido de la exposición de la representación social respecto del hecho que la ley señala como delito, la probabilidad de que el imputado lo cometió y los datos de prueba que acreditan tales aspectos.

"...

"102. Otro aspecto sumamente importante redunda en la circunstancia de que el Juez de Control que resuelva sobre el auto de vinculación a proceso, necesariamente debe haber apreciado en sus términos la formulación de imputación y la solicitud de vinculación que efectuó el órgano ministerial, pues para



resolver la situación jurídica del imputado es de tomar en consideración todas las manifestaciones vertidas en la citada audiencia.

"103. Es así que, en atención al principio de inmediación, el mismo juzgador debe estar presente en el desarrollo de la audiencia inicial, a efecto de percibir o apreciar la información por sí y no a través «de» medio tecnológico alguno, ni por otra persona, por tanto, si el juzgador frente al cual se emitió la formulación de imputación y se solicitó la vinculación, no es el mismo que resuelve la situación jurídica del imputado, se violentará el principio de inmediación contenido en el primer párrafo del artículo 20 constitucional."

De dicha ejecutoria emanó la jurisprudencia 1a./J. 29/2018 (10a.), de rubro (sic) y texto siguientes:

"PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. EL JUEZ DE CONTROL QUE DICTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DEBE SER EL MISMO QUE CONOCIÓ DE LA IMPUTACIÓN Y LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el principio de inmediación, el que comprende que toda audiencia se desarrollará en presencia del Juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. A través de este principio se pretende que el Juez esté en contacto permanente con las partes durante el desarrollo de su intervención en cualquier audiencia, puesto que dicha máxima no tiene aplicación únicamente durante la etapa de enjuiciamiento, sino que debe regir en las audiencias preliminares al juicio. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal, regula bajo la nueva lógica del proceso penal el denominado auto de vinculación a proceso, el que se sitúa en la llamada audiencia inicial, mediante la cual el juzgador establece que hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, pues en él se expresará el delito que se le impute, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese tenor, el hecho de que la audiencia en la que el fiscal formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso, sea suspendida a solicitud del imputado cuando se acoja al plazo constitucional del artículo 19 constitucional, no justifica que en su continuación sea un Juez distinto al que presenció la

imputación y el ejercicio de motivación de los datos de prueba que realizó la fiscalía, quien resuelva la situación jurídica del imputado, porque si a través de sus sentidos el juzgador conoció la formulación de la imputación y los datos de prueba, no sería dable que sea un diverso Juez quien resuelva la situación jurídica del imputado, ya que éste no percibió de viva voz las acciones u omisiones que se atribuyen, la declaración del imputado –en su caso– así como la referencia o recepción de los datos de prueba a cargo de la representación social, porque no estuvo en contacto directo con la fuente de la que emanaron. Además, la circunstancia de que sea un mismo juzgador el que conozca de la imputación, los datos de prueba y resuelva la vinculación, al tratarse de actos procesales íntimamente relacionados, implica transparentar la toma de decisiones, en la medida en que ese Juez será quien conozca totalmente la información sobre la que tomará la determinación de vincular o no a proceso, lo que reducirá el riesgo del error judicial. Actuar en contrario, podría trastocar los principios de continuidad y concentración, pues el objetivo es que la audiencia inicial tenga una secuencia lógica y se verifique en el menor tiempo posible, a fin de que el resolutor, por el poco tiempo transcurrido, tenga presente la totalidad de los argumentos de las partes y los datos de prueba, porque serán precisamente éstos los que le sirvan para fundar y motivar adecuadamente su determinación."

Ahora bien, los preceptos constitucionales y legales que contienen la manera en que se denomina a la información que se produce en la audiencia inicial –que culmina, generalmente, con auto de vinculación o de no vinculación– y en la audiencia de juicio –que concluye con sentencia definitiva–, establecen lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Audiencia inicial:

"Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un

hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión."

Sentencia:

"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

"A. De los principios generales:

"...

"III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo;"

Código Nacional de Procedimientos Penales

Los preceptos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales dicen:

"**Artículo 261.** Datos de prueba, medios de prueba y pruebas

"El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado.

"Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos.

"Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal

de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación."

"**Artículo 265.** Valoración de los datos y prueba

"El órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios."

Audiencia inicial:

"Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso.

"Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de Control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de Control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público.

"El Juez de Control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de Control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado."



"Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación.

"El imputado o su defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de Control.

"Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este código, el Juez de Control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente."

"Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso.

"El Juez de Control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que:

"I. Se haya formulado la imputación;

"II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar;

"III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y

"IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito."

Sentencia:

"Artículo 358. Oportunidad para la recepción de la prueba.

"La prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá desahogarse durante la audiencia de debate de juicio, salvo las excepciones expresamente previstas en este código."

"Artículo 359. Valoración de la prueba.

"El tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica, deberá hacer referencia en la motivación que realice, de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Sólo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado."

"Artículo 402. Convicción del tribunal de enjuiciamiento.

"El tribunal de enjuiciamiento apreciará la prueba según su libre convicción extraída de la totalidad del debate, de manera libre y lógica; sólo serán valorables y sometidos a la crítica racional, los medios de prueba obtenidos lícitamente e incorporados al debate conforme a las disposiciones de este código.

"En la sentencia, el tribunal de enjuiciamiento deberá hacerse cargo en su motivación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. Esta motivación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia.

"Nadie podrá ser condenado, sino cuando el tribunal que lo juzgue adquiera la convicción más allá de toda duda razonable, de que el acusado es responsable de la comisión del hecho por el que siguió el juicio. La duda siempre favorece al acusado.

"No se podrá condenar a una persona con el solo mérito de su propia declaración."

"Artículo 403. Requisitos de la sentencia.

"La sentencia contendrá:

"I. La mención del tribunal de enjuiciamiento y el nombre del Juez o los Jueces que lo integran;

"II. La fecha en que se dicta;

"III. Identificación del acusado y la víctima u ofendido;

"IV. La enunciación de los hechos y de las circunstancias o elementos que hayan sido objeto de la acusación y, en su caso, los daños y perjuicios reclamados, la pretensión reparatoria y las defensas del imputado;

"V. Una breve y sucinta descripción del contenido de la prueba;

"VI. La valoración de los medios de prueba que fundamenten las conclusiones alcanzadas por el tribunal de enjuiciamiento;

"VII. Las razones que sirvieren para fundar la resolución;

"VIII. La determinación y exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se consideren probados y de la valoración de las pruebas que fundamenten dichas conclusiones;

"IX. Los resolutivos de absolución o condena en los que, en su caso, el tribunal de enjuiciamiento se pronuncie sobre la reparación del daño y fije el monto de las indemnizaciones correspondientes, y

"X. La firma del Juez o de los integrantes del tribunal de enjuiciamiento."

De los preceptos transcritos destaca, en lo que interesa, la circunstancia de que la información allegada a la audiencia inicial, constituye únicamente "datos de prueba", en tanto que la desahogada en la audiencia del juicio oral, adquiere el carácter de prueba.

Con lo hasta aquí expuesto es dable considerar que, por regla general, previo a la audiencia del juicio no existe prueba en sentido estricto y que la información allegada a la audiencia inicial constituye solamente datos de prueba, en virtud de que el juzgador se entera de lo que hay en la carpeta de investigación por intermediación del Ministerio Público o de la defensa.

Incluso, en el supuesto de que el imputado o su defensa, en términos del artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, incorporen a la audiencia inicial el desahogo de algún medio de convicción, éste no podría ser valorado como prueba, sino únicamente como dato de prueba, ya que tal proceder generaría un desequilibrio entre las partes, vulnerando el precepto 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales[5] que, entre otras cosas, prevé que todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa.

Ahora bien, en relación al recurso de apelación interpuesto en contra del auto que resuelve la solicitud de vinculación a proceso, el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone:

"**Artículo 467**. Resoluciones del Juez de Control apelables.

"Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de Control:

"…

[5] "Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley
"Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.
"Las autoridades velarán por que (sic) las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera."



"VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; ..."

Por su parte, el diverso 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone:

"**Artículo 479**. Sentencia" [De la apelación]

"La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma.

"En caso de que la apelación verse sobre exclusiones probatorias, el tribunal de alzada requerirá el auto de apertura al Juez de Control, para que en su caso se incluya el medio o medios de prueba indebidamente excluidos, y hecho lo anterior lo remita al tribunal de enjuiciamiento competente."

De lo preceptuado en el numeral 467, en relación con el diverso 479 ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se patentiza que entre las resoluciones del Juez de Control que son apelables, se halla el **auto que resuelve sobre la solicitud de vinculación del imputado a proceso** y que la sentencia que se dicte con respecto a ese recurso de apelación, confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma.

En esa virtud, es dable concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales permite que el tribunal de alzada reasuma jurisdicción en aquellos recursos interpuestos en contra del auto que resuelve sobre la solicitud de vinculación a proceso.

Se estima lo anterior, en atención a que dicho código no contiene ninguna disposición expresa en el sentido de que, en caso de advertir alguna inconsistencia, el tribunal de alzada únicamente deba destacarla y reenviar el asunto al juzgador de origen a fin de que éste la corrija, es decir, en lenguaje técnico, el código no prevé el reenvío del asunto.

Por el contrario, el artículo 479 del citado ordenamiento dispone que el tribunal de alzada, además de poder confirmar, revocar u ordenar la reposición, tiene expresamente la facultad de modificar la resolución impugnada.

Asentado lo anterior, enseguida se exponen las razones por las que se considera que el hecho de que la alzada, al resolver el recurso de apelación en contra del auto que resuelve sobre la solicitud de vinculación a proceso, luego de llevar a cabo la revisión de la racionalidad del ejercicio de motivación, realizado por el Juez de Control sobre los datos de prueba, se sustituya mediante la corrección de la citada motivación, **en forma alguna compromete el principio de inmediación** que rige en el sistema penal acusatorio.

A fin de sustentar lo anterior, se estima prudente invocar parte de las consideraciones que informan la ejecutoria del juicio de amparo directo en revisión 777/2019, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio lugar a la tesis 1a. CVI/2019 (10a.)[6] y mismas que a saber son:

"88. De ahí que, en esta vertiente, el principio de inmediación se configura como una herramienta metodológica de formación de la prueba, es decir, el modo en que debe incorporarse la prueba al proceso y que permite al Juez percibir toda la información que de ella se desprende.

"89. En este sentido, no debe confundirse la inmediación con la corrección en la motivación sobre la valoración y alcance demostrativo de la prueba personal, es decir, es necesario distinguir la herramienta metodológica de formación de la prueba del manejo que realiza el Juez con la información que como resultado arroja la prueba.

"90. En la valoración de la prueba es posible advertir tres niveles diferentes, a saber: 1) constatar que lo aportado al juicio como prueba reúne las condiciones para catalogarse como prueba válida; 2) de ser realmente una prueba válida, determinar el valor que probatoriamente le corresponde; y 3) des-

[6] De rubro (sic): "RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL ARTÍCULO 468, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL PREVER QUE SERÁ APELABLE LA SENTENCIA DEFINITIVA EN RELACIÓN CON AQUELLAS CONSIDERACIONES 'DISTINTAS A LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA SIEMPRE Y CUANDO NO COMPROMETAN EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN', VIOLA EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFECTIVO."

pués de determinar su valor probatorio, establecer su alcance demostrativo: para qué sirve.

"91. De estas tres etapas, el principio de inmediación rige para el primero, dado que atañe a la fase de producción de la prueba, donde la presencia del Juez en la audiencia de juicio oral lo coloca en las mejores condiciones posibles para percibir –sin intermediarios– toda la información que surja de las pruebas personales. En cambio, para los dos siguientes estadios la inmediación es un presupuesto que se traduce en la exigencia de que el Juez que intervino en la producción de la prueba sea el mismo que asigne su valor y alcance demostrativo, pero la corrección en la motivación que al respecto emita el Juez o tribunal correspondiente no se verifica a través de la inmediación, sino de la observancia a las reglas que rigen el sistema de libre valoración de la prueba."

Tales razonamientos se asumen, en lo conducente, por este Pleno de Circuito para apoyar la solución de la presente contradicción, en la medida en que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el alcance de la facultad de sustitución de la alzada al resolver el recurso de apelación.

Lo anterior, porque aun cuando no se está en la hipótesis específica que se contiene en la ejecutoria antes invocada, sí resultan útiles las consideraciones sostenidas por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País al estudiar la valoración de la prueba producida en la etapa de juicio, para estimar que, en el caso, en el análisis sobre la motivación de la apreciación del dato de prueba que se efectúa en la alzada, no rige el principio de inmediación.

Se considera así, toda vez que el estadio procesal que se produce con la segunda instancia, ya no atañe a la fase de introducción del dato de prueba, donde la presencia del Juez en la audiencia inicial lo coloca en las mejores condiciones posibles para percibir –sin intermediarios– toda la información que le es allegada por las partes.

Por lo cual, en grado de apelación, la inmediación se constituye como un presupuesto que se traduce en la exigencia de que el Juez que intervino en la

introducción del dato de prueba sea el mismo que efectúe el ejercicio de motivación que corresponda a la apreciación de ese dato de prueba; empero, **la corrección en la motivación que al respecto se emita en la alzada no se verifica a través de la inmediación, sino de la observancia a las reglas que rigen el sistema de libre valoración**, previsto en el numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En tales consideraciones, queda en evidencia que en el recurso de apelación que se interpone en contra del auto que resuelve la solicitud de vinculación a proceso, el órgano de segunda instancia puede legalmente reasumir jurisdicción y corregir la motivación sobre la apreciación del dato de prueba, a partir de la revisión de la racionalidad de los argumentos expresados por el Juez de Control, puesto que ello no se verifica a través de la inmediación, sino de la observancia a las reglas que rigen el sistema de libre valoración.

Por lo tanto, no es dable estimar que con la sustitución en la corrección de la motivación del dato de prueba, se comprometa el principio de inmediación.

Ello, toda vez que, como se evidencia, la determinación que finalmente habrá de sostenerse sobre la motivación que corresponda al dato de prueba aportado en la audiencia inicial, no compromete el principio de inmediación, en la medida que tal principio, en lo que importa para esta contradicción, se relaciona con la exigencia sobre la presencia del Juez en el desarrollo de la audiencia, su percepción directa y personal de la información que constituyan los datos de prueba y la emisión de la resolución respectiva, donde efectúe el ejercicio de motivación respecto de la apreciación de esos datos, empero, la **modificación (o corrección)** en la motivación que se emita en la alzada se vincula con la libre valoración, lo que posibilitan los preceptos 265 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ciertamente, el numeral referido en segundo término que, conforme a lo que se ha establecido, resulta observable en tratándose del recurso de apelación que resuelve sobre la impugnación contra el auto de término constitucional, faculta al juzgador de segundo grado para **modificar** la resolución impugnada, por lo cual es jurídicamente posible sostener que sí es posible la corrección en la motivación de la apreciación del dato de prueba en la alzada.

Por lo tanto, en lo concerniente al ejercicio de motivación sobre la apreciación de los datos de prueba realizado por el Juez de Control, el tribunal de alzada válidamente puede sustituir al Juez de origen y reasumir jurisdicción para emitir la sentencia respectiva que, en su caso, confirme, revoque o modifique el auto recurrido.

Por último, es necesario precisar que, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 226 de la Ley de Amparo, la presente resolución no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se dictaron las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias.

SEXTO.—En tal virtud, debe prevalecer el criterio sustentado por este **Pleno de Circuito** y, por ende, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley de Amparo, la tesis correspondiente debe quedar redactada con el siguiente rubro (sic) y texto:

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL TRIBUNAL DE ALZADA, LUEGO DE LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DE LA RACIONALIDAD DEL EJERCICIO DE MOTIVACIÓN REALIZADO POR EL JUEZ DE CONTROL SOBRE LA APRECIACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA, ESTÁ FACULTADO PARA REASUMIR JURISDICCIÓN Y CORREGIRLA, SIN VULNERAR EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN.

Hechos. Los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto del Decimoquinto Circuito contendientes, analizaron la facultad de un tribunal de alzada en el sistema penal acusatorio, para reasumir jurisdicción en cuanto a la motivación realizada por el Juez de Control sobre la apreciación de los datos de prueba. Al respecto llegaron a soluciones contrarias, pues para el Segundo Tribunal Colegiado, el tribunal de alzada carecía de facultades para reasumir jurisdicción en ese aspecto, pues de hacerlo transgrediría el principio de inmediación, mientras que el Cuarto Tribunal Colegiado, concluyó, que en ese mismo supuesto no se transgredía el referido principio.

Criterio jurídico. El Pleno del Decimoquinto Circuito determina, que el Tribunal de alzada en el Sistema Penal Acusatorio, cuenta con facultades para

reasumir jurisdicción en cuanto a la motivación realizada por el Juez de Control sobre la apreciación de los datos de prueba, sin transgredir el principio de inmediación.

Justificación. Del precepto 467, en relación con el artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se patentiza que, entre las resoluciones del Juez de Control que resultan impugnables a través del recurso de apelación, se halla el auto que resuelve sobre la solicitud de vinculación del imputado a proceso; y que la sentencia que se dicte en ese recurso, confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien, ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma. Por lo cual, el órgano de segunda instancia está facultado para reasumir jurisdicción y corregir la motivación sobre la apreciación del dato de prueba, ya que ello no se verifica a través de la inmediación, sino de la observancia a las reglas que rigen el sistema de libre valoración; por lo que en forma alguna se compromete el aludido principio.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO.—**Sí existe la contradicción** entre las tesis sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado, contra lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado, todos de este Circuito.

SEGUNDO.—Se declara que **debe prevalecer la tesis sustentada por este Pleno del Decimoquinto Circuito**, que se precisa en el último considerando de este fallo.

TERCERO.—En términos del artículo 219 de la Ley de Amparo, **remítase la tesis que se sustenta en la presente resolución a la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis** (sic), para su publicación en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Notifíquese; remítase testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes y en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno del Decimoquinto Circuito, por unanimidad (sic) votos de los Magistrados Raúl Martínez Martínez, Blanca Evelia Parra Meza, Alfredo Manuel Bautista Encina, David Guerrero Espriú, Faustino Cervantes León, José Encarnación Aguilar Moya, Jorge Salazar Cadena y Mario Alejandro Moreno Hernández, siendo presidente el cuarto de los nombrados y ponente el primero de los mencionados, ante el licenciado Óscar Jaime Carrillo Maciel, secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

Mexicali, Baja California, el once de noviembre de dos mil veinte, el suscrito Óscar Jaime Carrillo Maciel, secretario de Acuerdos del Pleno certifica que la presente es reproducción fiel y exacta de la resolución dictada en la contradicción de tesis 10/2019, por el Pleno del Decimoquinto Circuito, en sesión ordinaria remota celebrada por medios electrónicos el veintisiete octubre de dos mil veinte, y se expide en treinta y dos fojas útiles por ambos lados en las que se incluye la presente, y en términos de los artículos 3, 68, 73, 111, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: La tesis de jurisprudencia PC.XV. J/42 P (10a.) que prevaleció al resolver esta contradicción de tesis, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas y en la página 1438 de esta *Gaceta*.

Las tesis de jurisprudencia y aislada 1a./J. 54/2019 (10a.), 1a. CVI/2019 (10a.) y 1a./J. 29/2018 (10a.) citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 5 de julio de 2019 a las 10:12 horas, del viernes 22 de noviembre de 2019 a las 10:33 horas y del viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas, así como en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 68, Tomo I, julio de 2019, página 184, con número de registro digital: 2020268, Libro 72, Tomo I, noviembre de 2019, página 376, con número de registro digital: 2021130 y Libro 56, Tomo I, julio de 2018, página 252, con número de registro digital: 2017367, respectivamente.

Las tesis aisladas 2a. V/2016 (10a.) y XV.4o.9 P (10a.) citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes

11 de marzo de 2016 a las 10:10 horas y del viernes 27 de septiembre de 2019 a las 10:36 horas, respectivamente.

La tesis de jurisprudencia P./J. 27/2001 citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su* Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 77, con número de registro digital: 189998.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL TRIBUNAL DE ALZADA, LUEGO DE LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DE LA RACIONALIDAD DEL EJERCICIO DE MOTIVACIÓN REALIZADO POR EL JUEZ DE CONTROL SOBRE LA APRECIACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA, ESTÁ FACULTADO PARA REASUMIR JURISDICCIÓN Y CORREGIRLA, SIN VULNERAR EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, analizaron la facultad del Tribunal de alzada en el sistema penal acusatorio, para reasumir jurisdicción en cuanto a la motivación realizada por el Juez de Control sobre la apreciación de los datos de prueba y llegaron a soluciones contrarias, ya que para uno, el tribunal de alzada carecía de facultades para reasumir jurisdicción en ese aspecto, pues de hacerlo transgrediría el principio de inmediación, mientras que el otro concluyó que no se transgredía el referido principio.

Criterio jurídico: El Pleno del Decimoquinto Circuito determina que el tribunal de alzada en el sistema penal acusatorio cuenta con facultades para reasumir jurisdicción en cuanto a la motivación realizada por el Juez de Control sobre la apreciación de los datos de prueba, sin transgredir el principio de inmediación.

Justificación: Del artículo 467, en relación con el artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se patentiza que, entre las resoluciones del Juez de Control que resultan impugnables a través del recurso de



apelación, se halla el auto que resuelve sobre la solicitud de vinculación del imputado a proceso, y que la sentencia que se dicte en ese recurso, confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien, ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma, por lo cual, el órgano de segunda instancia está facultado para reasumir jurisdicción y corregir la motivación sobre la apreciación del dato de prueba, ya que ello no se verifica a través de la inmediación, sino de la observancia a las reglas que rigen el sistema de libre valoración, por lo que en forma alguna se compromete el aludido principio

PLENO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO.
PC.XV. J/42 P (10a.)

Contradicción de tesis 10/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos del Décimo Quinto Circuito. 27 de octubre de 2020. Unanimidad de ocho votos de los Magistrados Raúl Martínez Martínez, Blanca Evelia Parra Meza, Alfredo Manuel Bautista Encina, David Guerrero Espriú, Faustino Cervantes León, José Encarnación Aguilar Moya, Jorge Salazar Cadena y Mario Alejandro Moreno Hernández. Ponente: Raúl Martínez Martínez. Secretario: Fausto Armando López Delgado.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 452/2018, y el diverso sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 34/2019.

Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción de tesis 10/2019, resuelta por el Pleno del Decimoquinto Circuito

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de diciembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO EN EL QUE SE RESERVA ACORDAR SOBRE EL OFRECIMIENTO DE PRUEBAS HASTA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. QUEDA SIN MATERIA CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO TENGA CONOCIMIENTO DE QUE SE DICTÓ SENTENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 6 DE OCTUBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ MANUEL BLANCO QUIHUIS, GABRIEL ALEJANDRO PALOMARES ACOSTA, MARIO PEDROZA CARBAJAL, DAVID SOLÍS PÉREZ, LUIS FERNANDO ZÚÑIGA PADILLA Y ÓSCAR JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ. PONENTE: JOSÉ MANUEL BLANCO QUIHUIS. SECRETARIO: GERMÁN GUTIÉRREZ LEÓN.

CONSIDERANDOS:

I. Competencia

7. Este Pleno del Quinto Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de posible contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, 226, fracción III, y décimo primero transitorio, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 28 y 29 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el mencionado medio de comunicación oficial el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados pertenecientes a este Quinto Circuito.

II. Legitimación del denunciante

8. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo,

en virtud de que fue realizada por Alonso Robles Cuétara, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales.

III. Criterios contendientes

9. El **Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito** resolvió el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve el recurso de queja laboral **67/2019**, en los términos siguientes:

"QUINTO.—**Estudio.** El recurso de queja es fundado.

"Previo a abordar el análisis de los agravios, conviene precisar que la procedencia del recurso de queja se justifica, porque el artículo 97, fracción I, inciso e) prevé como requisitos para tal efecto que:

"a) Se trate de autos o resoluciones dictadas durante el juicio de amparo indirecto o del incidente de suspensión;

"b) Que esa determinación no admita expresamente el recurso de revisión;

"c) Por lo trascendental y grave de esa decisión pueda causar un perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva;

"d) Así como aquellas determinaciones que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional.

"En el caso, se cumple con el supuesto de procedencia precisado en el inciso a), pues el auto recurrido se dictó en el trámite del juicio de amparo indirecto.

"De igual manera se actualiza la hipótesis contenida en el inciso b), porque el auto recurrido tuvo por efecto postergar la calificación o admisión de las pruebas testimonial e inspección judicial ofrecidas por la parte quejosa hasta la audiencia constitucional, el cual no es susceptible de impugnarse a través del recurso de revisión.

"También se satisface el requisito del inciso c), porque sin que se esté prejuzgando sobre el análisis de fondo del recurso, la determinación de que se trata

puede considerarse como de las que causan un gravamen irreparable en la sentencia definitiva, el cual se traduciría en el retardo o dilación injustificada de la calificación de sus pruebas y el eventual desahogo de las mismas, en detrimento del derecho de acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que al resultar ajeno a la materia del juicio de amparo indirecto no podría ser reparado en el fallo definitivo.

"No se soslaya que el posible desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes sería susceptible de repararse en vía de reposición del procedimiento en el recurso de revisión; sin embargo, la dilación y el retardo de que se habla en detrimento del acceso a la justicia no podría enmedarse ni siquiera por ese medio de impugnación al materializarse desde el momento en que se dictó el acuerdo que causó dicho perjuicio o gravamen.

"Algunas de estas consideraciones forman parte de lo resuelto en las tesis de jurisprudencia siguientes:

"La primera tesis de jurisprudencia número 1a./J. 30/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (se citan datos de localización), que expresa:

"'RECURSO DE QUEJA. ES PROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO O INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL QUE SE NIEGUE LA EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES O CERTIFICADAS DE LOS AUTOS DE UN EXPEDIENTE, AUN CUANDO EN ELLOS OBREN CONSTANCIAS DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA O CAUSA PENAL.' (se transcribe texto)

"Si bien la tesis que antecede versa sobre la materia penal, lo cierto y definitivo es que resuelve una cuestión de derecho común en amparo, esto es, la procedencia del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo vigente y, por ende, se acoge para regir en el presente asunto.

"La segunda tesis que se invoca como fundamento es la jurisprudencia número 2a./J. 108/2015 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala del Alto Tribunal Federal (se citan datos de localización), cuyo tenor dice:

"'RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE POR DESIERTA UNA PRUEBA PERICIAL.' (se transcribe texto)

"Todo lo cual evidencia la procedencia del recurso de queja en contra del auto de seis de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales.

"Pues bien, como se anticipó, el recurso de queja es fundado.

"En efecto, en el auto recurrido se advierte que el secretario encargado del despacho por vacaciones del titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Nogales, acordó tener por presentado al quejoso, aquí recurrente, ofreciendo las pruebas **testimonial e inspección judicial** referidas en el ocurso presentado el cinco de junio anterior, y al respecto, se reservó la facultad para proveer sobre su calificación al celebrarse la audiencia constitucional.

"En contra de dicho proveído, el recurrente aduce que la determinación contraviene los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, porque tratándose de pruebas que ameritaban desahogo posterior, el Juez Federal se encontraba obligado a proceder a su calificación de inmediato y proveer lo conducente al desahogo, sin esperar al dictado de la audiencia, pues resultaría un contrasentido que si el primero de los preceptos citados impone la carga de ofrecer tales pruebas cinco días antes de la celebración de dicha audiencia, se tendría que esperar a la celebración de ésta para su calificación, preparación y desahogo.

"El recurrente añade que la reserva decretada en el auto recurrido transgrede su derecho de defensa y genera una dilación injustificada en detrimento del derecho de acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 constitucional, en la medida de que el artículo 123 de la Ley de Amparo, si bien establece que las pruebas deberán desahogarse en la audiencia constitucional, también es cierto que prevé la limitante de que esa regla no es aplicable a las que deban desahogarse fuera de la residencia del órgano jurisdiccional, por tanto, en la especie no se justifica que se decretara la reserva aludida.

"Los agravios son, en esencia, fundados.

"Al respecto, los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo disponen:

"(se transcriben)

"La interpretación sistemática de los preceptos revela que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Por regla general, las pruebas deben ofrecerse y desahogarse en la audiencia constitucional a menos que deban serlo antes, en este último supuesto, **el artículo 123** transcrito engloba a las que ameriten preparación y desahogo posterior y, por ende, deba verificarse tal desahogo **fuera de la sede del órgano jurisdiccional que conozca del juicio constitucional**, mediante exhorto, despacho, requisitoria o cualquier otra forma legal.

"El numeral 119 de la misma legislación impone la carga a las partes de ofrecer las pruebas **testimonial, pericial e inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior**, cinco días hábiles antes de la celebración de la audiencia constitucional, sin que deban comprenderse en dicho término, el día del ofrecimiento ni el de la celebración de dicha audiencia, por ende, es inconcuso que tratándose de cualquier medio de convicción que amerite desahogo posterior, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene el deber de proceder a su calificación de inmediato, una vez que haya sido ofrecida la prueba, en cuyo caso de ser admitida, decretar las medidas necesarias para el desahogo, incluyendo a las que deban hacerlo fuera de la sede de dicho órgano (exhorto, despacho, requisitoria o cualquier otro medio).

"Lo anterior se justifica en virtud de que la intención del legislador al imponer la carga procesal aludida, estriba precisamente (sic) evitar incurrir en dilaciones innecesarias en un procedimiento sumario como es el juicio de amparo indirecto, esto es, al tener que esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para que las partes ofrecieran sus pruebas y se realizaran todos los actos tendentes a conseguir su desahogo en la misma, provocando retardos innecesarios, lo cual a la vez podría llegar a impedir el derecho de defensa de las partes o el acceso a la justicia en contravención a los artículos 14 y 17 constitucionales.

"Al respecto, resulta aplicable la tesis número XI.3o.A.T.2 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito (se citan datos de localización), que a la letra dice:

"'RECURSO DE QUEJA. PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE ACORDAR UN ESCRITO DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS.' (se transcribe texto)

"También es aplicable, por analogía, la tesis I.2o.A E. 11 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México y jurisdicción en toda la República, que se comparte (se citan datos de localización), cuyos rubro (sic) y texto dicen:

"'PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO. EL ACUERDO QUE DETERMINA RESOLVER HASTA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL LA SOLICITUD DE LAS PARTES PARA INTERROGAR AL PERITO OFICIAL RESPECTO DE SU DICTAMEN, ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL.' (se transcribe texto)

"De igual manera, sirven de ilustración las tesis de jurisprudencia números 79/2018 y 26/2019, pronunciadas por la Segunda Sala y Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son los siguientes: (se citan datos de localización), que dicen, respectivamente:

"'PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. A LA SOLICITUD DE COPIAS O DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, LE SON APLICABLES LAS REGLAS DEL DIVERSO 119, TERCER Y CUARTO PÁRRAFOS, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PARA SU OFRECIMIENTO.' (se transcribe texto)

"'VIDEOGRABACIONES. LAS OFRECIDAS POR LAS PARTES COMO PRUEBA EN EL AMPARO INDIRECTO, TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y DEBEN SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO.' (se transcribe texto)

"Ahora bien, las constancias procesales del juicio de amparo indirecto **********, cuya copia certificada remitió el secretario encargado del despacho, por vacaciones del titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, a las cuales se les reconoce valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de amparo, revelan que:

"Por escrito presentado el trece de marzo de dos mil diecinueve, **********, de nacionalidad **********, por su propio derecho solicitó la protección constitucional en contra del acto reclamado consistente en el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil diecinueve y su ejecución, dictado por el presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste del Estado de Sonora, con residencia en San Luis Río Colorado (esta cuestión fue objeto de aclaración en escrito posterior), en el expediente laboral número **********, que ordenó poner en posesión material y jurídica a los actores en el citado contradictorio del inmueble defendido, asimismo, la ejecución atribuida a otras autoridades (actuario adscrito a dicha Junta y director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora).

"El catorce de marzo de dos mil diecinueve, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, registró el asunto con el número de expediente **********, admitió a trámite la demanda de amparo, señaló fecha para la audiencia constitucional, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, asimismo, requirió al presidente de la Junta responsable por el nombre de los terceros interesados, en virtud de ostentarse el quejoso como tercero extraño a juicio (fojas 46 a 50 *ibidem*).

"El veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, con vista en el informe justificado rendido por la Junta responsable en que daban a conocer los nombres de los terceros interesados, se ordenó el emplazamiento vía exhorto al Juez de Distrito competente en Mexicali, Baja California, México (fojas 70 y vuelta *ibidem*).

"Realizado el emplazamiento, por escrito recibido el once de abril de dos mil diecinueve, comparecieron los terceros interesados e hicieron valer lo que esti-



maron conveniente a sus intereses, asimismo, ofrecieron pruebas, el ocurso correspondiente se tuvo por admitido el doce de abril siguiente (foja 211 *ibidem*).

"Por medio de escrito recibido el seis de mayo del año en curso, la parte quejosa aclaró la demanda y presentó ampliación a la misma, lo cual se acordó de conformidad en proveído de siete de mayo de dos mil diecinueve, señalándose las diez horas con cinco minutos del trece del propio mes y año para la audiencia constitucional (fojas 229 a 231 *ibidem*).

"Luego, en auto dictado el trece del mes y año citados, al encontrarse pendientes de rendir los informes justificados por ciertas autoridades, se decidió diferir **la audiencia constitucional para <u>las nueve horas con cinco minutos del trece de junio de dos mil diecinueve</u>** (foja 247 *ibidem*).

"Con fecha cinco de junio del presente año, el quejoso por conducto de su autorizado legal ********** ofreció pruebas en los siguientes términos:

"'**1. Testimonial** vía carta rogatoria a cargo del Sr. **********, con domicilio en **********, **********, **********, en los Estados Unidos de Norteamérica, y a quien bajo protesta de decir verdad manifiesto no poder presentar ante este H. Juzgado por lo que deberá ser citado a declarar ante esta H. Autoridad vía carta rogatoria por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que en auxilio de las labores de este H. Juzgado mande citar al deponente. En su defecto se **deberá girar carta rogatoria por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en auxilio de las labores de este H. Juzgado, el H. Juzgado competente en el domicilio del testigo desahogue la prueba testimonial aquí ofertada**.'

"'Prueba testimonial que deberá desahogarse al tenor del siguiente cuestionario:

"'...

"'**2. Testimonial.** A cargo del Sr. **********, con domicilio en **********, ubicado en **********, **Puerto Peñasco, Sonora, México**, y a quien bajo protesta de decir verdad manifiesto no puedo presentar a este H. Juzgado por lo que deberá

ser citado a declarar ante este H. Juzgado vía exhorto que se gire al C. Juez competente (en) Puerto Peñasco, Sonora, a fin de que en auxilio de las labores de este H. Juzgado mande citar al deponente. En su defecto **se deberá girar atento exhorto al C. Juez competente en Puerto Peñasco, Sonora, a fin de que en auxilio de las labores de este H. Juzgado, desahogue la prueba testimonial aquí ofrecida**.'

"'Prueba testimonial que deberá desahogarse al tenor del siguiente cuestionario:

"'...

"'La presente prueba (sic) se relaciona con los antecedentes del acto reclamado y es idónea para demostrar la posesión pública y pacífica por parte del quejoso del bien inmueble identificado como condominio **********, dentro del régimen de **********, ubicado en **********, Puerto Peñasco, Sonora, México, y respecto del cual la responsable ha pretendido desposeerlo.

"'**3. Inspección judicial. A desahogarse en el domicilio identificado como condominio** **********, **dentro del régimen de condominio** **********, **ubicado en** **********, **Puerto Peñasco, Sonora, México**, y que el quejoso posee al día de hoy de manera pública y pacífica en su calidad de arrendatario del Sr. **********, con quien celebró cierto contrato de arrendamiento del bien inmueble descrito.'

"'La presente prueba se ofrece a fin de demostrar la posesión que el quejoso actualmente disfruta del bien descrito y respecto del cual las responsables han ordenado y tratado de desposeerlo en beneficio de los terceros interesados.

"'Así pues, la presente prueba deberá desahogarse mediante atento exhorto que **se gire al C. Juez competente en Puerto Peñasco, Sonora, a fin de que en auxilio de las labores de este H. Juzgado lleve a cabo diligencia de inspección judicial** ofertada a fin de constatar lo siguiente:

"'1. Quién es el actual poseedor del bien inmueble identificado como condominio **********, dentro del régimen de condominio **********, ubicado en **********, Puerto Peñasco, Sonora, México.



"'2. Si el señor ********** es el actual poseedor del bien inmueble identificado como condominio **********, dentro del régimen de condominio **********, ubicado en **********, Puerto Peñasco, Sonora, México.

"'La presente prueba se relaciona con los antecedentes del acto reclamado y es idónea para demostrar la posesión pública y pacífica por parte del quejoso del bien inmueble identificado como condominio **********, dentro del régimen de condominio **********, ubicado en **********, Puerto Peñasco, Sonora, México, y respecto del cual, las (sic) responsable ha pretendido desposeerlo.

"'En virtud de lo anterior solicito se admitan las pruebas aquí ofertadas.

"'...

"'(fojas 297 a 300 *ibidem*)

"'En auto de **seis de junio de dos mil diecinueve**, el secretario encargado del despacho por vacaciones del titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, acordó lo siguiente:

"'Nogales, Sonora, seis de junio de dos mil diecinueve.

"'Agréguese a los autos la promoción de cuenta y, visto su contenido, téngase al autorizado de la parte quejosa **ofreciendo como pruebas las testimoniales e inspección judicial que refiere en su ocurso, sin perjuicio de proveer sobre ellas al celebrar la audiencia constitucional**.

"'Notifíquese ...'

"(foja 302 *ibidem*)

"Este es el auto impugnado en el recurso de queja.

"Según se aprecia, las pruebas testimoniales e inspección judicial propuestas por el quejoso, aquí recurrente, por su especial naturaleza encuadran en el supuesto previsto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, esto es, se trata de las

que requieren de desahogo posterior, a más de ser admisibles, tendrían que celebrarse fuera de la sede del órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo indirecto, por tanto, es evidente, como lo refiere el recurrente, no existía justificación legal para que en el auto recurrido de seis de junio de dos mil diecinueve, se reservara o aplazara su calificación hasta la celebración de la audiencia constitucional; de ahí que dicho acuerdo contraviene los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo y conduce a declarar fundados los agravios y, por ende, fundado el recurso de queja.

"Consecuentemente, se impone **declarar fundado el recurso**.

"Ahora bien, según lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, corresponde al órgano jurisdiccional que conoce del juicio constitucional resolver sobre la pertinencia o no de las pruebas, por lo que no es el caso de que este tribunal al declarar fundados los agravios y revocar el auto recurrido en queja, emprenda el análisis de los medios de convicción aludidos, en plenitud de jurisdicción, ante la ausencia de reenvío como lo marca el artículo 103 de la ley de la materia, antes bien, procede devolver los autos al Juez de Distrito para que se pronuncie sobre la admisión.

"En ese sentido se pronunció la tesis de jurisprudencia número XXX.3o. J/1 (10a.), aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, que se comparte (se citan datos de localización), que expresa:

"'RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DOCUMENTALES OFRECIDAS POR EL QUEJOSO QUE SE PRETENDAN RECABAR VÍA INFORME. DE RESULTAR FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO PARA QUE SE PRONUNCIE SOBRE SU ADMISIÓN PUES, DE LO CONTRARIO, TENDRÁ QUE PRONUNCIAR UN ACTO DE NATURALEZA COMPLEJA, CUYO CONOCIMIENTO CORRESPONDE A DICHO JUEZ.' (se transcribe texto)

"En las apuntadas condiciones, se devuelve el asunto al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, para que con plenitud de jurisdicción resuelva lo conducente a las pruebas ofrecidas por la parte

quejosa y en el caso de que estimara que no existe impedimento legal para su admisión, proceda a su desahogo en términos de ley." (fojas sesenta y siete vuelta a setenta y nueve *ibidem*)

10. Cabe precisar que a la fecha en que se resolvió el recurso de queja 67/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, ya se había dictado sentencia en el juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, lo cual este órgano jurisdiccional oportunamente comunicó a aquél, como puede constatarse de las copias certificadas anexadas al oficio **********, de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, remitido por la secretaria de compilación y sistematización de tesis adscrita a dicho tribunal (fojas 43 a 56 del expediente relativo a la presente contradicción de tesis).

11. Por su parte, el **Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito** resolvió el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, el recurso de queja administrativa **185/2019**, al tenor de las siguientes consideraciones:

"CUARTO.—Es innecesario el análisis del auto recurrido y de los agravios formulados, toda vez que el presente medio de impugnación quedó sin materia, por las razones que enseguida se expondrán:

"En efecto, de las constancias que integran el juicio de amparo del que deriva la presente queja, se advierte que el ahora recurrente se inconformó contra el auto emitido el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Nogales, en la parte en la que tuvo por ofrecidas diversas pruebas documentales exhibidas por la inconforme y precisó que acordaría sobre su admisión al celebrar la audiencia constitucional, conforme lo señala el primer párrafo del artículo 119 de la ley de la materia.

"Sin embargo, como se precisó en la parte de resultandos de esta ejecutoria, el secretario de Acuerdos del juzgado del conocimiento remitió copia de la sentencia emitida en la audiencia constitucional del juicio de amparo de origen el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, en la que, por un lado, decretó

el sobreseimiento y, por otro lado, negó la protección solicitada por el ahora discrepante (fojas 20 a 28 del presente expediente).

"Consecuentemente, lo que procede es declarar que el presente recurso de queja ha quedado sin materia, cuenta habida que legalmente no es posible analizar el fondo de este medio de impugnación sin afectar la nueva situación creada al haberse fallado en definitiva el juicio de amparo indirecto ********** del que deriva, lo contrario significaría alterar el sistema de recursos previsto en la Ley de Amparo, trasmutando a la queja lo que es propio del recurso de revisión.

"Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 88/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (se citan datos de localización), que dice:

"'QUEJA CONTRA EL ACUERDO QUE DESECHA PRUEBAS EN AMPARO. QUEDA SIN MATERIA CUANDO SE DICTA LA SENTENCIA, SIN PERJUICIO DE QUE CONTRA ÉSTA SE INTERPONGA REVISIÓN Y EN LOS AGRAVIOS, POR EXCEPCIÓN, SE CUESTIONE DICHO AUTO, Y DE QUE EL TRIBUNAL QUE CONOZCA DE ELLA REPONGA EL PROCEDIMIENTO, INCLUSIVE DE OFICIO, SI ELLO RESULTA PROCEDENTE.' (se transcribe texto)

"De consiguiente, lo que procede es declarar sin materia el presente recurso de queja." (fojas treinta y seis vuelta a treinta y ocho *ibidem*)

IV. Existencia de la contradicción de criterios

12. Existe la contradicción de tesis denunciada, dado que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados se ocuparon esencialmente de la misma cuestión jurídica y sostuvieron posturas opuestas.

13. El propósito para el que fue creada la figura de la contradicción de tesis es salvaguardar la seguridad jurídica ante criterios opuestos y realizar la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

14. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para que exista contradicción de tesis, se exige la actualización de los siguientes supuestos:

a) La presencia de dos o más ejecutorias en las que se adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales; y

b) Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.

15. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 7 del Tomo XXXII, agosto de 2010, Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan 'tesis contradictorias', entendiéndose por 'tesis' el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto

del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.', al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que 'al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes' se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en 'diferencias' fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

16. Como se advierte, existe la oposición de criterios denunciada, debido a que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron casos sustancialmente idénticos y resolvieron en forma distinta, pues ambos conocieron de recursos de queja interpuestos con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en contra de autos en los que se reservó acordar sobre el ofrecimiento de pruebas realizado por los quejosos recurrentes y previo a la resolución de los medios de defensa, se dictó sentencia en los juicios de amparo indirecto correspondientes, lo cual el juzgador de Distrito informó oportunamente; sin embargo, mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito determinó declarar sin materia el recur-

so, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito lo declaró fundado.

17. Cabe señalar que aun cuando en la ejecutoria por la que se resolvió el recurso de queja 67/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, no se haya justificado la razón por la cual no procedía declarar éste sin materia, no obstante, dicho criterio debe considerarse implícito, pues la resolución de fondo del aludido medio de defensa presupone la subsistencia de su materia; de ahí que sí exista la contradicción de tesis en estudio.

18. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 93/2006 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Tomo XXVIII, julio de 2008, de la Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, misma que a continuación se transcribe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO.—De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el Órgano Reformador de la Constitución pretendió remediar con la instau-

ración del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición."

19. Tampoco es óbice que en el auto impugnado en el recurso de queja resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, la reserva de pruebas se haya acordado respecto de diversas documentales, mientras que en el acuerdo combatido ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, se acordó en relación con dos testimoniales y una inspección judicial. Esta diferencia no impide la configuración de la presente contradicción de tesis, ya que con independencia de la naturaleza de los medios de prueba que hayan sido objeto de las mencionadas reservas, los autos impugnados en ambos recursos tuvieron como consecuencia postergar hasta la celebración de la audiencia constitucional la calificación sobre la admisión o desechamiento de aquéllos, por lo que, en aras de fijar un criterio que brinde seguridad jurídica en la resolución de los casos sustancialmente iguales, resulta necesario definir cuál es el que debe prevalecer.

20. En tales condiciones, la presente contradicción de tesis se circunscribe a dilucidar el siguiente punto:

¿Debe declararse sin materia el recurso de queja interpuesto contra el auto en el que se reserva acordar sobre el ofrecimiento de pruebas hasta la audiencia constitucional, cuando el Tribunal Colegiado de Circuito tenga conocimiento de que se dictó sentencia en el juicio de amparo indirecto?

V. Criterio que debe prevalecer

21. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el sustentado por este Pleno del Quinto Circuito, de acuerdo con las siguientes consideraciones:



22. En principio, cabe mencionar que el presente estudio se concretará a responder la interrogante planteada, por lo que el criterio que enseguida se definirá no prejuzga respecto de la procedencia del recurso de queja en términos del artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, contra el auto que reserva acordar sobre el ofrecimiento de pruebas hasta la audiencia constitucional, ya que este aspecto no fue materia de divergencia en los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

23. Dicho lo anterior, se señala que la referida porción normativa dispone que el recurso de queja procede, en amparo indirecto, contra resoluciones que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión, y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional.[1]

24. Por su parte, el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo señala que procede el recurso de revisión, en amparo indirecto, en contra de las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, en cuyo caso deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia.[2]

25. Asimismo, el artículo 93 del citado ordenamiento establece las reglas que deberá observar el tribunal al conocer del recurso de revisión, de las cuales

---

[1] "Artículo 97. El recurso de queja procede:
"I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:
"...
"e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional. ..."

[2] "Artículo 81. Procede el recurso de revisión:
"I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes:
"...
"e) Las sentencias dictadas en la audiencia constitucional; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia."

se destaca la establecida en su fracción IV, conforme a la cual si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, se revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento.[3]

26. Ahora, uno de los puntos que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dilucidó al resolver la contradicción de tesis 7/2001-PL, consistió en determinar si quedaba o no sin materia el recurso de queja interpuesto en contra del acuerdo que desechaba pruebas en el juicio de amparo indirecto, cuando en éste se dictaba sentencia.

27. Al respecto, dicha Sala del Alto Tribunal con base en una interpretación sistemática de los artículos 2o., 83, fracción IV, 91, fracción IV, 95, fracción VI y 101 de la Ley de Amparo abrogada,[4] determinó lo siguiente:

---

[3] "Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes:
"...
"IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento."

[4] "Artículo 2o. El juicio de amparo se sustanciará y decidirá con arreglo a las formas y procedimientos que se determinan en el presente libro, ajustándose, en materia agraria, a las prevenciones específicas a que se refiere el libro segundo de esta ley.
"A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles."
"Artículo 83. Procede el recurso de revisión:
"...
"IV. Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los jueces de Distrito, o por el superior del tribunal responsable, en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley. Al recurrirse tales sentencias deberán, en su caso, impugnarse los acuerdos pronunciados en la citada audiencia."
"Artículo 91. El Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas:
"...
"IV. Si en la revisión de una sentencia definitiva, en los casos de la fracción IV del artículo 83, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o que el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia, incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento, así como cuando

"De lo hasta aquí precisado es posible concluir que la omisión, verificada en los asuntos que dieron origen a este punto de contradicción, consistente en que los Jueces de Distrito no suspendieron el procedimiento en los juicios de amparo en lo principal tan luego como los Tribunales Colegiados les comunicaron la admisión de los recursos de queja, y que dio lugar a que se dictaran las correspondientes sentencias sin que previamente se hubiesen fallado aquéllos, no autoriza a considerar que al resolverse éstos se pueda revocar la sentencia en el juicio de garantías y ordenarse reponer el procedimiento. Lo anterior porque, se reitera, contrario a lo aducido en ese sentido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, admitir como jurídicamente posible tal consecuencia implicaría desatender lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley de Amparo, que ordena que el juicio de garantías se sustancie y decida con arreglo a las formas y procedimientos que se determinan en esa ley, y a falta de disposición expresa, se esté a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

"Recapitulando, tratándose de la queja de la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, en específico de la interpuesta en contra de un auto dictado por un Juez de Federal durante el trámite del juicio, mediante el cual se desechan pruebas ofrecidas por las partes, conforme con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe suspender de oficio el procedimiento en el juicio de garantías en lo principal una vez que el Tribunal Colegiado le noti-

---

aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley."

"Artículo 95. El recurso de queja es procedente:

"...

"VI. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley."

"Artículo 101. En los casos a que se refiere el artículo 95, fracción VI, de esta ley, la interposición del recurso de queja suspende el procedimiento en el juicio de amparo, en los términos del artículo 53, siempre que la resolución que se dicte en la queja deba influir en la sentencia, o cuando de resolverse el juicio en lo principal se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia, si obtuviere resolución favorable en la queja."

fica de la admisión del recurso, sin que esa determinación quede a discreción o criterio del Juez; pero si éste no acata tal disposición y ello origina que se dicte la sentencia antes de que se decida el recurso de queja, entonces ésta quedará sin materia y así debe declararlo el Tribunal Colegiado que conozca del recurso, en virtud de que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no contiene precepto que establezca que a través de ese medio de impugnación se revoque no sólo el proveído impugnado sino, incluso y en su caso, la sentencia emitida en el juicio de amparo para mandar reponer el procedimiento a partir del acuerdo recurrido.

"Por último, si el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia omitió, en términos del artículo 101 de la ley de la materia en cita, suspender el procedimiento en el juicio en lo principal, no obstante haberse admitido un recurso de queja previsto en la fracción VI del artículo 95, contra un proveído dictado durante el trámite del juicio y mediante el cual se desecharon pruebas, lo que provocó que se dictara la sentencia sin que previamente se hubiese resuelto ese recurso, entonces, y a fin de no dejar en estado de indefensión al afectado con esa omisión, es jurídico considerar que éste está en aptitud de volver a plantear, en el recurso de revisión que haga valer contra la sentencia, los agravios que antes adujo en la queja; ello sin perjuicio de que el tribunal de segunda instancia ejerza de oficio la facultad que le confiere el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuando así proceda."

28. De las consideraciones reproducidas se destacan las siguientes premisas:

• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo abrogada, es obligación del Juez de Distrito suspender el procedimiento en el juicio de amparo en lo principal una vez que el Tribunal Colegiado de Circuito le notifica la admisión de un recurso de queja interpuesto con fundamento en la fracción VI del artículo 95, en contra de un auto dictado durante el trámite del juicio, mediante el cual se desecharon pruebas antes de la audiencia constitucional, sin que aquella determinación quede a discreción o criterio de dicho Juez.



• En tales casos, si se omite suspender el procedimiento y ello origina que se dicte la sentencia antes de que se decida el recurso de queja, éste quedará sin materia y así debe declararlo el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del recurso, en virtud de que la citada ley no contiene precepto que establezca que a través de ese medio de impugnación puedan revocarse, tanto el proveído impugnado como la sentencia que se hubiese emitido en el juicio de amparo, ya que ello implicaría alterar y quebrantar el sistema de recursos previsto en la ley de la materia, trasmutando a la queja lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, es propio del recurso de revisión, contraviniendo además lo señalado en el artículo 2o. del ordenamiento referido.

• No obstante, a fin de no dejar en estado de indefensión al inconforme en la queja declarada sin materia, es jurídico considerar que, por excepción, queda en aptitud de volver a plantear en el recurso de revisión que haga valer contra la sentencia, los agravios que antes adujo en queja, sin perjuicio de que el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión ejerza de oficio la facultad que le confiere el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuando así proceda.

29. De la citada contradicción de tesis derivó la jurisprudencia 2a./J. 88/2002, publicada en la página 291, Tomo XVI, agosto de 2002, de la Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, de rubro: "QUEJA CONTRA EL ACUERDO QUE DESECHA PRUEBAS EN AMPARO. QUEDA SIN MATERIA CUANDO SE DICTA LA SENTENCIA, SIN PERJUICIO DE QUE CONTRA ÉSTA SE INTERPONGA REVISIÓN Y EN LOS AGRAVIOS, POR EXCEPCIÓN, SE CUESTIONE DICHO AUTO, Y DE QUE EL TRIBUNAL QUE CONOZCA DE ELLA REPONGA EL PROCEDIMIENTO, INCLUSIVE DE OFICIO, SI ELLO RESULTA PROCEDENTE."

30. Cabe señalar que esta jurisprudencia continúa rigiendo en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo actual,[5] ya que interpreta dis-

[5] "Sexto. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley."

posiciones del ordenamiento abrogado cuyos correlativos en la ley vigente se hallan en los artículos 2o.,[6] 81, fracción I, inciso e), 93, fracción IV, 97, fracción I, inciso e) y 102.[7]

31. Las consideraciones y jurisprudencia anteriormente reproducidas, aterrizadas al caso planteado en la presente contradicción de tesis, permiten concluir, por identidad jurídica, que debe declararse sin materia el recurso de queja interpuesto contra el auto en el que se reserva acordar sobre el ofrecimiento de pruebas hasta la audiencia constitucional, cuando el Tribunal Colegiado de Circuito tenga conocimiento de que se dictó sentencia en el juicio de amparo indirecto.

32. Ciertamente, la consecuencia de que se declare procedente y fundado dicho recurso es que se deje insubsistente el auto recurrido y, en términos del artículo 103 de la Ley de Amparo vigente, se ordene al juzgador de amparo emitir otro en el que provea sobre las pruebas que inicialmente se abstuvo de acordar; sin embargo, ello no puede materializarse en caso de que, previo a la resolución del aludido medio de defensa, el Juez de Distrito informe al Tribunal Colegiado de Circuito que se dictó sentencia en el juicio de amparo indirecto, pues en tal supuesto aquél quedaría sin materia, ya que la normatividad vigente, al igual que la abrogada, no prevé la posibilidad de que a través del recurso de queja se revoque la sentencia junto con el auto impugnado y se reponga el procedimiento a partir de la emisión de éste, sino que esto sólo puede operar con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 93 de la citada ley.

---

[6] "Artículo 2o. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se sustanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta ley.
"A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho."

[7] "Artículo 102. En los casos de resoluciones dictadas durante la tramitación del amparo indirecto que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes, con la interposición de la queja el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito está facultado para suspender el procedimiento, hecha excepción del incidente de suspensión, siempre que a su juicio estime que la resolución que se dicte en ella pueda influir en la sentencia, o cuando de resolverse en lo principal, se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia."

33. Cabe destacar que a diferencia de lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 88/2002 –para el caso en que se haya impugnado en el recurso de queja declarado sin materia, el desechamiento de pruebas–, en la hipótesis que nos ocupa, por regla general, resulta inconducente que en el recurso de revisión que en todo caso se interponga en contra de la sentencia, se expresen agravios dirigidos a combatir el auto en que se reserva acordar sobre el ofrecimiento de pruebas hasta la audiencia constitucional.

34. Lo anterior, pues dicha expresión de agravios se justifica cuando el recurrente de la queja declarada sin materia pueda quedar en estado de indefensión por no haberse resuelto el fondo de ésta, lo cual no acontece cuando el auto impugnado sólo tiene como consecuencia postergar la admisión o desechamiento de pruebas hasta la audiencia constitucional, pues llegado el momento, la calificación que en todo caso se haga sobre las mismas podrá combatirse junto con la sentencia que se dicte mediante el recurso de revisión, en términos del inciso e) de la fracción I del artículo 81 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que el tribunal revisor reponga el procedimiento de oficio cuando constate la actualización de violaciones procesales por acción u omisión durante la sustanciación de la primera instancia, en ejercicio de la facultad que le confiere el diverso 93, fracción IV, de la citada normatividad.

35. Sólo cuando las pruebas cuyo acuerdo se reservó hasta la audiencia constitucional hayan sido ofrecidas con anterioridad al último día que la ley establece para ello y desechadas en la propia audiencia por el incumplimiento de requisitos formales (verbigracia, por la falta de exhibición del interrogatorio o cuestionario en las pruebas testimonial y pericial, respectivamente), en este supuesto, el recurrente de la queja declarada sin materia, en el recurso de revisión que en todo caso interponga en contra de la sentencia, podrá volver a expresar los agravios aducidos en aquélla, con el propósito de que se reponga el procedimiento hasta el dictado de acuerdo de reserva de pruebas y así esté en condiciones de formular un segundo ofrecimiento en el que subsane las deficiencias formales constatadas dentro del término establecido para ello; lo anterior sin perjuicio de que el tribunal revisor ejerza de oficio la facultad que le confiere el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuando así proceda.

36. Sobre el derecho de las partes a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún estén en tiempo para hacerlo, resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 400, Libro VIII, Tomo 1, mayo de 2012, de la Décima Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, misma que enseguida se transcribe:

"ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el Juez de Distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo."

37. Atento a las consideraciones antes relatadas, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este Pleno del Quinto Circuito, que es el siguiente:

RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO EN EL QUE SE RESERVA ACORDAR SOBRE EL OFRECIMIENTO DE PRUEBAS HASTA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. QUEDA SIN MATERIA CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO TENGA CONOCIMIENTO DE QUE SE DICTÓ SENTENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 88/2002, de rubro: "QUEJA CONTRA EL ACUERDO QUE DESECHA PRUEBAS EN AMPARO. QUEDA SIN MATERIA CUANDO SE DICTA LA SENTENCIA, SIN PERJUICIO DE QUE CONTRA

ÉSTA SE INTERPONGA REVISIÓN Y EN LOS AGRAVIOS, POR EXCEPCIÓN, SE CUESTIONE DICHO AUTO, Y DE QUE EL TRIBUNAL QUE CONOZCA DE ELLA REPONGA EL PROCEDIMIENTO, INCLUSIVE DE OFICIO, SI ELLO RESULTA PROCEDENTE.", sostuvo que en ese supuesto el recurso de queja debía quedar sin materia, ya que la Ley de Amparo abrogada no contenía precepto alguno que estableciera que a través de dicho recurso podían revocarse tanto el proveído impugnado, como la sentencia que se hubiese emitido en el juicio de amparo indirecto. Dicho criterio permite concluir, por identidad jurídica, que debe quedar sin materia el recurso de queja interpuesto contra el auto en el que se reserva acordar sobre el ofrecimiento de pruebas hasta la audiencia constitucional, cuando el Tribunal Colegiado de Circuito tenga conocimiento de que se dictó sentencia en el juicio de amparo indirecto, pues la normatividad vigente, al igual que la abrogada, no prevé la posibilidad de que a través del recurso de queja se revoque la sentencia junto con el auto impugnado y se reponga el procedimiento a partir de la emisión de éste, sino que esto sólo puede operar en el recurso de revisión interpuesto en contra de aquélla, en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 93 de la citada ley. Lo expuesto en la inteligencia de que, cuando las pruebas cuyo acuerdo se reservó hasta la audiencia constitucional, hayan sido ofrecidas con anterioridad al último día que la ley establece para ello y desechadas en la propia audiencia, por el incumplimiento de requisitos formales (verbigracia, por la falta de exhibición del interrogatorio o cuestionario en las pruebas testimonial y pericial, respectivamente), en este supuesto, el recurrente de la queja declarada sin materia, en el recurso de revisión que en todo caso interponga en contra de la sentencia, podrá volver a expresar los agravios aducidos en aquélla, con el propósito de que se reponga el procedimiento hasta el dictado del acuerdo de reserva de pruebas y así esté en condiciones de formular un segundo ofrecimiento en el que subsane las deficiencias formales constatadas dentro del término establecido para ello; lo anterior sin perjuicio de que el tribunal revisor ejerza de oficio la facultad que le confiere el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuando así proceda.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO.—Existe la contradicción de tesis denunciada.

SEGUNDO.—Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, la tesis sustentada por este Pleno de Circuito.

TERCERO.—Dese publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en términos de los artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo.

Notifíquese; envíese vía electrónica testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, así como a los demás Tribunales Colegiados del Quinto Circuito para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, remítase por correo electrónico a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el archivo de esta resolución que contenga las correspondientes firmas electrónicas, lo anterior, en concordancia con las prevenciones indicadas por el Consejo de la Judicatura Federal en los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido.

Así lo resolvió, de manera virtual, el Pleno del Quinto Circuito, por unanimidad de seis votos de los señores Magistrados José Manuel Blanco Quihuis, Mario Pedroza Carbajal, David Solís Pérez, Gabriel Alejandro Palomares Acosta, Óscar Javier Sánchez Martínez y Luis Fernando Zúñiga Padilla, como presidente y ponente fungió el primero de los mencionados, de conformidad con los artículos 1, 2 y 27 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quienes firman de manera electrónica ante la secretaria de Acuerdos, licenciada Paulina Eloísa Coronado Ayala, que autoriza y da fe, también con su Firel, a los ocho días del mes de octubre de dos mil veinte, fecha en que se concluyó el engrose correspondiente.

En términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción XXI, 73, fracciones I y II, 111, 113, 116, octavo y duodécimo transitorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 71, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el quinto párrafo de los artículos 1, 2, fracción V, y 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obli-

gados, en esta versión pública se testa la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO EN EL QUE SE RESERVA ACORDAR SOBRE EL OFRECIMIENTO DE PRUEBAS HASTA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. QUEDA SIN MATERIA CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO TENGA CONOCIMIENTO DE QUE SE DICTÓ SENTENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 88/2002, de rubro: "QUEJA CONTRA EL ACUERDO QUE DESECHA PRUEBAS EN AMPARO. QUEDA SIN MATERIA CUANDO SE DICTA LA SENTENCIA, SIN PERJUICIO DE QUE CONTRA ÉSTA SE INTERPONGA REVISIÓN Y EN LOS AGRAVIOS, POR EXCEPCIÓN, SE CUESTIONE DICHO AUTO, Y DE QUE EL TRIBUNAL QUE CONOZCA DE ELLA REPONGA EL PROCEDIMIENTO, INCLUSIVE DE OFICIO, SI ELLO RESULTA PROCEDENTE.", sostuvo que en ese supuesto el recurso de queja debía quedar sin materia, ya que la Ley de Amparo abrogada no contenía precepto alguno que estableciera que a través de dicho recurso podían revocarse tanto el proveído impugnado, como la sentencia que se hubiese emitido en el juicio de amparo indirecto. Dicho criterio permite concluir, por identidad jurídica, que debe quedar sin materia el recurso de queja interpuesto contra el auto en el que se reserva acordar sobre el ofrecimiento de pruebas hasta la audiencia constitucional, cuando el Tribunal Colegiado de Circuito tenga conocimiento de que se dictó sentencia en el juicio de amparo indirecto, pues la normatividad vigente, al igual que la abrogada, no prevé la posibilidad de que a través del recurso de queja se revoque la sentencia junto con el auto impugnado y se reponga el procedimiento a partir de la emisión de éste, sino que esto sólo puede operar en el recurso de revisión interpuesto en contra de aquélla, en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 93 de la citada ley. Lo expuesto en la inteligencia de que, cuando las pruebas cuyo acuerdo se reservó hasta la audiencia constitucional, hayan sido ofrecidas con anterioridad al último día que la ley establece para ello

y desechadas en la propia audiencia, por el incumplimiento de requisitos formales (verbigracia, por la falta de exhibición del interrogatorio o cuestionario en las pruebas testimonial y pericial, respectivamente), en este supuesto, el recurrente de la queja declarada sin materia, en el recurso de revisión que en todo caso interponga en contra de la sentencia, podrá volver a expresar los agravios aducidos en aquélla, con el propósito de que se reponga el procedimiento hasta el dictado del acuerdo de reserva de pruebas y así esté en condiciones de formular un segundo ofrecimiento en el que subsane las deficiencias formales constatadas dentro del término establecido para ello; lo anterior sin perjuicio de que el tribunal revisor ejerza de oficio la facultad que le confiere el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuando así proceda.

PLENO DEL QUINTO CIRCUITO.
PC.V. J/30 K (10a.)

Contradicción de tesis 9/2019. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 6 de octubre de 2020. Unanimidad de seis votos de los Magistrados José Manuel Blanco Quihuis, Gabriel Alejandro Palomares Acosta, Mario Pedroza Carbajal, David Solís Pérez, Luis Fernando Zúñiga Padilla y Óscar Javier Sánchez Martínez. Ponente: José Manuel Blanco Quihuis. Secretario: Germán Gutiérrez León.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, al resolver la queja 67/2019, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver la queja 185/2019.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 88/2002 citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,* Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 291, con número de registro digital: 186167.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de diciembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE DECRETARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, SI DE LA DEMANDA O DE SUS ANEXOS SE ADVIERTE QUE SE EMITIÓ Y EJECUTÓ SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GUILLERMO DEL CASTILLO VÉLEZ, NICOLÁS NAZAR SEVILLA Y ALFREDO CID GARCÍA. PONENTE: GUILLERMO DEL CASTILLO VÉLEZ. SECRETARIO: ÓSCAR ROJAS COTA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—**Competencia**. Este Pleno del Decimoctavo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este Circuito y corresponde, exclusivamente, a este Pleno dilucidarla y determinar, en su caso, cuál será el criterio que debe prevalecer.

SEGUNDO.—**Legitimación**. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, en relación con el 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud que fue realizada por la Juez de Distrito que conoció de los asuntos que la motivaron.

TERCERO.—**Ejecutorias que participan como contradictorias.** A fin de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima con-

veniente transcribir la parte considerativa que motivó las decisiones de los tribunales contendientes.

En sesión plenaria de seis de mayo de dos mil diecisiete, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, resolvió la queja **140/2019**, derivada del juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, interpuesto por la **********, contra el acuerdo de uno de marzo de dos mil diecinueve, en cuya parte considerativa, en lo que interesa, el citado órgano colegiado sustentó lo que a continuación se transcribe:

"**(5)** Ahora bien, debe decirse que la orden de traslado de que fue objeto la quejosa **********, al ser enviada del Centro Femenil de Reinserción Social 'Tepepan' con residencia en la ciudad de México en el que inicialmente se encontraba recluida, al diverso Centro Femenil de Reinserción Social No. 16 'CPS Femenil Morelos', con residencia en Coatlán del Río Morelos, hasta este momento, no existe constancia que la misma haya sido emitida por una autoridad judicial, por lo que debe atenderse a lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a que el traslado de un reo de un centro penitenciario a otro, está reservado al Poder Judicial, conforme a los reformados artículos 18 y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que la concesión del amparo, cuando se trata de un acuerdo de carácter positivo, implica la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación.

"**(6)** De ahí que, si hasta el momento no se advierte que la citada orden de traslado haya sido emitida por una autoridad judicial, en términos de lo establecido por el artículo 138 de la Ley de Amparo, es correcto el otorgamiento de la suspensión en los términos y con las excepciones y las salvedades señaladas por la Juez de Distrito.

"**(7)** Siendo aplicable la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (sic), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 'ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTER-

VENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA.', en la que se estableció que en tratándose de una orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro diverso, dictada sin la intervención de la autoridad judicial del proceso, procede conceder la suspensión de plano y de oficio, en virtud de que ésta produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta."

Por su parte el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el recurso de queja **236/2019**, interpuesto por la autoridad responsable, dentro del juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en lo conducente del fallo expuso lo siguiente:

"Luego, **si bien es cierto la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.)** de la Primera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, en la que se sustentó la Juez de Amparo para resolver en los términos que lo hizo, en efecto, resuelve que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, al afectar de manera indirecta la libertad del quejoso, hace procedente la concesión de la suspensión de plano en términos del referido artículo 126 de la Ley de Amparo, **también lo es que tal criterio no aborda el específico aspecto de actos consumados, respecto de los cuales, como lo sostiene la autoridad recurrente no es procedente la suspensión.**

"Es decir, la cita de ese criterio jurisprudencial únicamente justifica que se otorgue la suspensión de plano por tratarse en principio, en razón de los datos que se tienen, de un traslado sin orden judicial y que, por esta condición vulnera de manera indirecta la libertad de la peticionaria de amparo, y cuyo efecto será impedir que se lleve a cabo el mismo; mas no que se pueda conceder la medida suspensional aun habiéndose ejecutado dicho traslado, con los alcances de efectos restitutorios, que en la especie se otorgaron, como si se tratase de un acto que en sí mismo sea inconstitucional.

"No se ignora que atendiendo a la apariencia del buen derecho se pueden adelantar los beneficios de la protección del juicio de amparo, en los casos en que de la información con que se cuente al presentarse el libelo constitucional, se desprenda que asiste un derecho al quejoso que debe ser protegido, lo que hace

posible anticipar con cierto grado de acierto que se obtendrá la protección federal que se busca, y que justo ante esas circunstancias, los efectos resarcitorios que puedan desprenderse de una suspensión, de un acto consumado, por ejemplo, se traduzcan en una tutela anticipada ajustada a derecho; sin embargo, en la especie se advierte que la juzgadora, aun cuando pretendió encuadrar su determinación en ese tipo de ponderación, al condicionar la medida suspensional a supuestos en los que no sea necesaria la autorización judicial, hace evidente la posibilidad de que pueda existir una orden de traslado no inconstitucional o que no trasgreda derechos fundamentales, **lo que obstaculiza que la suspensión de plano pueda regir en los términos pretendidos por la a quo, conforme al artículo 126 de la Ley de Amparo y bajo el ejercicio de una protección anticipada (al tenor de la apariencia del buen derecho), pues por las condiciones del acto y el reclamo mismo, que requiere las condiciones impuestas, no es posible jurídicamente sostener la medida suspensional recurrida.**

"En suma, como bien, lo afirma la autoridad recurrente se debió negar la suspensión a la quejosa respecto de la orden de traslado reclamada, pues debió considerarse que si en el caso, aquélla ya fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS y ahí actualmente se encuentra interna, **es claro que el traslado reclamado constituye un acto materialmente consumado,** por lo que ya no es posible jurídicamente suspenderlo, pues en todo caso, la legalidad o ilegalidad del mismo, será materia del pronunciamiento del fondo del asunto en la sentencia que se dicte, pero no propiamente de la suspensión."

CUARTO.—**Existencia y estructuración de la contradicción de tesis**.

I. Cuestiones previas.

1. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que es necesaria la reunión de los siguientes supuestos para que exista contradicción de tesis: a) Dos o más ejecutorias en las que se adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales; y, b) Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.



Es aplicable la jurisprudencia P./J. 72/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el texto:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan 'tesis contradictorias', entendiéndose por 'tesis' el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.', al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que 'al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes' se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en 'diferencias' fácticas que desde el

punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."[1]

En forma complementaria, de conformidad con las premisas establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 1a./J. 22/2010 y 1a./J. 23/2010, la finalidad de la contradicción de tesis radica en la necesidad de unificar criterios enfrentados y dotar de seguridad jurídica al sistema jurisdiccional.

Además, como la condición de existencia de una contradicción de tesis está ligada a una posible discrepancia de los procesos interpretativos involucrados y no tanto a los resultados que estos arrojen, su análisis debe hacerse con el objeto de identificar si en alguno de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales.

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fác-

[1] *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, con número de registro digital: 164120.



ticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."[2]

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.'. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto 'contradictorio' ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los tribunales colegiados de circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse

[2] Tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2010, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 122, con número de registro digital: 165077.

detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."[3]

Al sintetizar las premisas metodológicas anteriores, se obtiene que, para determinar si existe o no una contradicción de tesis, es necesario que se cumplan estas hipótesis:

a) Pluralidad de ejecutorias con criterios sobre un mismo tema jurídico;

b) Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial por parte de los órganos respectivos; y,

c) Razonamiento y diferendo de criterios interpretativos.

2. Por otra parte, aun cuando los criterios sustentados por los órganos colegiados contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, no es un requisito indispensable legalmente para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer.

Es aplicable la tesis L/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber:

"CONTRADICCION DE TESIS. PARA SU INTEGRACION NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.—Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes

[3] Tesis de jurisprudencia 1a./J. 23/2010, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 123, con número de registro digital: 165076.

tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."[4]

II. Verificación.

A juicio de este Pleno de Circuito existe la oposición de tesis denunciada, ya que se reúnen las condiciones esenciales para su configuración.

a) Pluralidad de ejecutorias con criterios sobre un mismo tema de derecho.

Los Tribunales Colegiados Primero y Tercero en Materias Penal y Administrativa de este Circuito abordaron en sus respectivas resoluciones el estudio de la misma cuestión jurídica.

Los supuestos se sometieron a su consideración vía recurso de queja en contra del auto en el que se concedió la suspensión de plano con efectos restitutorios en contra de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro.

b) Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial; y **c) Razonamiento y diferendo de criterios interpretativos.**

Los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas puestas a su conocimiento, efectuaron el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.

En los ejercicios interpretativos de cada uno existe un razonamiento con respecto a establecer **si debía o no otorgarse la suspensión de plano con efectos restitutorios, no obstante haberse consumado la orden de traslado**.

Así las cosas, frente a esa misma disyuntiva jurídica, se advierte que los órganos de control constitucional contendientes adoptaron criterios jurídicos an-

[4] *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Núm. 83, noviembre de 1994, página 35, con número de registro digital: 205420.

tagónicos entre sí; ya que, por una parte, el Primer Tribunal Colegiado afirmó que al no existir constancia que la orden de traslado de la que fue objeto la quejosa haya sido emitida por una autoridad judicial, con las excepciones y las salvedades del caso, es decir, se debe atender a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis **1a./J. 58/2016 (10a.)**, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA.", en la que se estableció que contra este tipo de órdenes procede conceder la suspensión de plano y de oficio, en virtud de que produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta.

En oposición, el Tercer Tribunal Colegiado sostuvo, en esencia, que si bien es cierto en la citada jurisprudencia **1a./J. 58/2016 (10a.)**, se estableció que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, al afectar de manera indirecta la libertad del quejoso, hace procedente la suspensión de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, también lo es que tal criterio no aborda el específico aspecto de actos consumados, respecto de los cuales no es procedente la suspensión.

Agregó que no obsta para arribar a esa conclusión la apariencia del buen derecho, conforme a la cual se pueden adelantar los beneficios de la protección del juicio de amparo, pues aun cuando se pretendió encuadrar la decisión del juzgador en ese tipo de ponderación, al haberse condicionado la medida suspensional al supuesto de que no sea necesaria autorización judicial, hace evidente que pueda existir una orden de traslado que no transgreda derechos constitucionales, lo que impide que se pueda otorgar la suspensión de plano con efectos restitutorios, conforme al artículo 126 de la Ley de Amparo en vigor.

III. Estructuración.

Por tanto, de acuerdo con los elementos reseñados, la cuestión medular que debe resolverse en la presente contradicción de tesis es si es procedente o no otorgar la suspensión de plano con efectos restitutorios contra la orden de

traslado de un centro penitenciario a otro, cuando no se advierta que la orden relativa la emitió una autoridad judicial y materialmente se ha ejecutado.

QUINTO.—**Estudio de fondo y determinación del criterio que debe prevalecer**.

(1) En términos del artículo 226, fracción III, de la Ley de Amparo, al resolver una contradicción de tesis, este órgano plenario está facultado para acoger alguno de los criterios discrepantes o sustentar uno diverso.

(2) En ese entendido, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio de este Pleno de Circuito, conforme a las consideraciones y fundamentos legales que se exponen a continuación.

(3) En primer lugar se requiere puntualizar algunos aspectos sobre la suspensión de los actos reclamados, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.

(4) Al respecto, los artículos 107, fracción X, constitucional 138, fracción I y 147, de la Ley de Amparo, establecen:

"**Artículo 107.** Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"**X.** Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social."[5]

[5] Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once.

"**Artículo 138.** Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención a disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente:

"I. Concederá o negara la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado."

"**Artículo 147.** En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos.

"Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.

"El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo."

(5) Como se puede observar, en el precepto constitucional citado se señala que, al resolver respecto de la suspensión de los actos reclamados, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

(6) En el mismo sentido, la Ley de Amparo en su artículo 138, que regula lo relativo a la suspensión del acto reclamado, establece que una vez solicitada dicha medida se deberá ponderar la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social para resolver si se concede o se niega y de concederse, se fijarán los requisitos y efectos de la medida.

(7) Finalmente, de acuerdo con el artículo 147 de la Ley de Amparo invocado, al resolver sobre la suspensión, de considerarse procedente, el órgano

jurisdiccional deberá fijar la situación en la que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos; y, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.

(8) Así, de la interpretación sistemática de los preceptos constitucional y legales anteriormente citados, se desprende el alcance que debe darse a la suspensión, ya que con anterioridad a la reforma constitucional de **seis de junio de dos mil once**, la tendencia era negar dicha medida contra actos ya ejecutados o consumados porque no tenía efectos de tutela anticipada de derechos, por ser propios de la sentencia definitiva.

(9) En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 255/2015,[6] sostuvo que con la nueva regulación del juicio de amparo desde la reforma a la fracción X del artículo 107 constitucional, publicada el seis de junio de dos mil once, para resolver si se concede la suspensión de un acto, debe atenderse al análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el interés social, junto con el peligro en la demora.

(10) A su vez, el Pleno del Máximo Tribunal del País, sostuvo que la apariencia del buen derecho se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto del derecho discutido en el proceso, lo que implica que, para la concesión de la medida basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que,

[6] La contradicción de tesis fue resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tres de febrero de dos mil dieciséis, por unanimidad de cinco votos. En dicha resolución se aprobó la jurisprudencia de título y subtítulo: "LANZAMIENTO EJECUTADO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA, SIEMPRE QUE SE DEMUESTREN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, Y NO EXISTA IMPEDIMENTO JURÍDICO O MATERIAL.". Décima Época. Con número de registro digital: 2011829. Instancia: Primera Sala. Fuente: *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 31, Tomo I, junio de 2016, materias común y civil, tesis 1a./J. 21/2016 (10a.), página 672.

según un cálculo de probabilidades, será posible anticipar que la sentencia de amparo se declarara la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social y al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, tomando en cuenta que la suspensión tiene por objeto mantener viva la materia del juicio de amparo y evitarse perjuicio al promovente derivado del tiempo necesario para su tramitación, razón por la que la medida también debe permitir una tutela anticipada al quejoso a fin de mantenerlo en el goce de los derechos afectados con el acto reclamado, cuando se adviertan elementos sobre la apariencia de una violación constitucional en su contra, siempre y cuando, como se dijo, no se siga perjuicio al interés social y se otorguen las garantías correspondientes si se afecten derechos de terceros.

(11) En ese orden de ideas, se arriba a la conclusión de que la suspensión produce los efectos prácticos de la sentencia de amparo, aunque provisoriamente, en tanto que la sentencia lo hace de manera definitiva pero lo que no puede hacer, es nulificar el acto, porque esto sí es exclusivo de la ejecutoria; por tanto, existe la posibilidad de que con motivo de la suspensión se restablezca el derecho vulnerado, en términos del **segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo**, es decir, cuando siendo procedente la suspensión, sea jurídica y materialmente posible dicho restablecimiento.

(12) Ahora bien, si de acuerdo a la previsión contenida en el numeral antes citado, en cualquier caso en que la **suspensión a petición de parte** sea procedente, de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado, es posible el restablecimiento al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, **por mayoría de razón**, debe imperar dicha regla tratándose de actos respecto de los cuales procede conceder la **suspensión de oficio y de plano**, como son aquellos en los que se afecte la libertad personal en forma indirecta, pues por su naturaleza y trascendencia, la materia o bien jurídico tutelado con la suspensión oficiosa es de mayor entidad que la que se protege con la suspensión a petición de parte.

(13) Esto es lo que ocurre con la orden de traslado de un reo a un centro penitenciario distinto al en que se encuentra recluido, cuando dicha orden pro-

viene de autoridades administrativas, ya que es factible que el análisis de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora se puedan llevar a cabo con los elementos con que cuente el Juez al momento de resolver sobre la suspensión de oficio y de plano, conforme a la jurisprudencia **1a./J. 58/2016 (10a.)**, antes citada que, en la mayoría de los casos, cuenta únicamente con lo manifestado por el quejoso bajo protesta de decir verdad en su demanda; es decir, partiendo del derecho alegado, al afirmar que se pretende trasladarlo de un centro penitenciario a otro y que dicha orden proviene de autoridades administrativas a las que señala exclusivamente como responsables, pues tales argumentos pueden llegar a formar convicción suficiente sobre la verosimilitud del derecho que trata de preservar o que se le restituya del mismo a través de la medida suspensional, sin que resulte relevante para ello considerar si la citada orden ya se ejecutó, porque existe la posibilidad de restablecer al quejoso en el goce del derecho a través de la resolución anticipada en la que se ponderen la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social.

(14) En tales circunstancias, no cabe considerar como regla general para la negativa de la suspensión que se esté ante actos ejecutados, al existir la posibilidad de que jurídica y materialmente se pueda restablecer al quejoso en el goce de los derechos violados y mantener las cosas en el estado que se encontraban antes de la violación, sin que con ello se deje sin materia el juicio, ya que quedaría pendiente la decisión de fondo del asunto que consiste en determinar la legalidad o ilegalidad de la orden de traslado, por lo que, en caso de negarse, quedaría sin efectos la suspensión y la autoridad penitenciaria estaría en condiciones de ejecutar dicha orden.

(15) A manera de ejemplo se cita la jurisprudencia 1a./J. 21/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"LANZAMIENTO EJECUTADO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA, SIEMPRE QUE SE DEMUESTREN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, Y NO EXISTA IMPEDIMENTO JURÍDICO O MATERIAL. De la interpretación sistemática y funcional del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 126 a 129, 138 a 140, 143 y 147 a 151 de la Ley de Amparo,

se colige que puede concederse la suspensión contra una orden de lanzamiento ya ejecutada para efectos de restablecer al quejoso en la posesión del bien inmueble, siempre que se demuestren la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y no exista impedimento jurídico o material; por lo cual, no basta con haberse ejecutado el lanzamiento para negar la medida suspensional. Lo anterior, sobre la base de que en la regulación referida se admite abiertamente el carácter de medida cautelar de la suspensión, que participa de los efectos prácticos de la resolución definitiva del juicio de amparo y, por tanto, no se limita sólo a las medidas de conservación, sino también a las de restablecer al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso, constituyendo así un verdadero amparo provisional con el que se anticipa la tutela constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto, a reserva de que, en la sentencia definitiva, se consolide esa situación si se constata la existencia del derecho aparente o, de lo contrario, se permita la continuación de los efectos del acto reclamado. Análisis que puede llevar a resultados distintos al resolver sobre la suspensión provisional o la definitiva, debido a la diferencia en los elementos probatorios que tiene a la vista el Juez; o de si el quejoso es parte vencida en juicio contra la cual se decretó el lanzamiento o si es persona extraña a juicio, entre otros aspectos; todo lo cual, en su caso, debe valorarse al analizar las particularidades de cada asunto para verificar si se prueba la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, a fin de cuentas, es lo que debe determinar si se concede o niega la suspensión del acto reclamado."[7]

(16) En resumen, conforme a la naturaleza del acto reclamado y a las condiciones del caso, es jurídica y materialmente posible conceder la suspensión de oficio y de plano al quejoso **con efectos restitutorios** respecto de la orden de trasladarlo de un centro penitenciario a otro, a efecto de restablecer su derecho violado, cuando se advierta que dicha orden **no fue emitida por la autoridad judicial rectora**, independientemente de que la orden ya se haya ejecutado,

[7] Décima Época. Con número de registro digital: 2011829. Instancia: Primera Sala. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 31, Tomo I, junio de 2016, materias común y civil, tesis 1a./J. 21/2016 (10a.), página 672.

atendiendo a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, pues de decretarse la legalidad de la orden quedaría sin efectos la suspensión y la autoridad estaría en condiciones de cumplirla.

SEXTO.—**Decisión.**

1. Del estudio desarrollado y en términos de los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, constitucional, 216, 217 y 218 de la Ley de Amparo, la tesis que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia es:

SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE DECRETARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, SI DE LA DEMANDA O DE SUS ANEXOS SE ADVIERTE QUE SE EMITIÓ Y EJECUTÓ SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Conforme a la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede conceder la suspensión de oficio y de plano contra la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando se emite sin la intervención de la autoridad judicial, aun cuando sólo afecte la libertad personal de manera indirecta, al no hacer ninguna distinción el artículo 126 de la Ley de Amparo respecto del tipo de afectación a la libertad personal. En ese orden de ideas, para resolver si procede conceder la suspensión con efectos restitutorios en contra de una orden de traslado ejecutada, debe atenderse al análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y el interés social, sin que sea determinante el hecho de que se trate de un acto consumado, atendiendo a que la suspensión tiene por objeto mantener viva la materia del juicio de amparo y evitar perjuicios al quejoso derivados del tiempo necesario para la tramitación del juicio, lo que permite una tutela anticipada a fin de mantenerlo en el goce de sus derechos afectados con la orden reclamada, es decir, permanecer en el lugar en que originalmente se encontraba recluido, cuando se adviertan elementos sobre una violación constitucional en su contra y siempre que sea posible jurídica y materialmente restituir tales derechos en forma provisional. De lo que se sigue que procede decretar la suspensión de plano con efectos restitutorios respecto de la orden de traslado de un centro de reclusión a otro, a efecto de restablecer el derecho violado del quejoso, cuando se advierta que dicha orden no

fue emitida por la autoridad judicial rectora del proceso, independientemente de que ya se hubiera ejecutado.

2. Con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que este Pleno establece es obligatoria para los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, los Juzgados y tribunales del orden común, que se ubican dentro de este Décimo Octavo Circuito.

En términos de los artículos 218, 219 y 220 de la Ley de Amparo, deberá darse publicidad a la tesis aprobada en la presente resolución.

Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE:

PRIMERO.—Existe la contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados de este Décimo Octavo Circuito.

SEGUNDO.—Debe prevalecer el criterio sustentado por este Pleno de Circuito en la tesis jurisprudencial redactada en la primera parte del último considerando de esta resolución.

TERCERO.—Dese publicidad a la tesis que se sustenta en la presente resolución.

Notifíquese; con testimonio hágase del conocimiento la presente resolución al juzgado de Distrito denunciante, así como a los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido, en el entendido de que forman parte del presente engrose, las observaciones que, en su caso, realice a la ejecutoria y jurisprudencia respectivas la Dirección General de Coordinación y Compilación de Tesis (sic) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así lo resolvió por unanimidad de tres votos el Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito con residencia en Cuernavaca, Morelos, integrado por los Magistrados **Guillermo del Castillo Vélez, en su calidad de presidente**, **Nicolás Nazar Sevilla** y **Alfredo Cid García**; siendo ponente el

primero de los nombrados, quienes firmaron ante el secretario del Pleno, **Ernesto García Rubio**, quien autoriza y da fe.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprimen los datos personales.

Nota: Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.) y 1a./J. 21/2016 (10a.) citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 18 de noviembre de 2016 a las 10:29 horas y del viernes 10 de junio de 2016 a las 10:02 horas, respectivamente.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE DECRETARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, SI DE LA DEMANDA O DE SUS ANEXOS SE ADVIERTE QUE SE EMITIÓ Y EJECUTÓ SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Conforme a la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede conceder la suspensión de oficio y de plano contra la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando se emite sin la intervención de la autoridad judicial, aun cuando sólo afecte la libertad personal de manera indirecta, al no hacer ninguna distinción el artículo 126 de la Ley de Amparo respecto del tipo de afectación a la libertad personal. En ese orden de ideas, para resolver si procede conceder la suspensión con efectos restitutorios en contra de una orden de traslado ejecutada, debe atenderse al análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y el interés social, sin que sea determinante el hecho de que se trate de un acto consumado, atendiendo a que la suspensión tiene por objeto mantener viva la materia del juicio de amparo y evitar perjuicios al quejoso derivados del tiempo necesario para la tramitación del juicio, lo que permite una tutela anticipada a fin de mantenerlo en el goce de sus derechos afectados con la orden reclamada, es decir, per-

manecer en el lugar en que originalmente se encontraba recluido, cuando se adviertan elementos sobre una violación constitucional en su contra y siempre que sea posible jurídica y materialmente restituir tales derechos en forma provisional. De lo que se sigue que procede decretar la suspensión de plano con efectos restitutorios respecto de la orden de traslado de un centro de reclusión a otro, a efecto de restablecer el derecho violado del quejoso, cuando se advierta que dicha orden no fue emitida por la autoridad judicial rectora del proceso, independientemente de que ya se hubiera ejecutado.

PLENO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.

PC.XVIII.P.A. J/10 K (10a.)

Contradicción de tesis 8/2019. Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito. 2 de septiembre de 2020. Unanimidad de tres votos de los Magistrados Guillermo del Castillo Vélez, Nicolás Nazar Sevilla y Alfredo Cid García. Ponente: Guillermo del Castillo Vélez. Secretario: Óscar Rojas Cota.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, al resolver la queja 140/2019 y, el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, al resolver la queja 236/2019.

Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.) citada, aparece publicada con el título y subtítulo: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA.", en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 18 de noviembre de 2016 a las 10:29 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 36, Tomo II, noviembre de 2016, página 865, con número de registro digital: 2013066.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de diciembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.



TRABAJADORES DE CONFIANZA DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (NAFIN). HIPÓTESIS EN LA QUE TIENEN DERECHO AL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO, TERCERO Y NOVENO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 19 DE OCTUBRE DE 2020. MAYORÍA DE DIECISÉIS VOTOS A FAVOR DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ SALDAÑA, ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE, ELISA JIMÉNEZ AGUILAR, MARÍA EUGENIA OLASCUAGA GARCÍA, ANTONIO REBOLLO TORRES, RAÚL VALERIO RAMÍREZ, JOEL DARÍO OJEDA ROMO, EDNA LORENA HERNÁNDEZ GRANADOS, MIGUEL ÁNGEL RAMOS PÉREZ, GILBERTO ROMERO GUZMÁN, HÉCTOR PÉREZ PÉREZ, SALVADOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, MIGUEL BONILLA LÓPEZ, JUAN MANUEL ALCÁNTARA MORENO, JUAN MANUEL VEGA TAPIA Y ANDRÉS SÁNCHEZ BERNAL. DISIDENTE: JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ. PONENTE: RAÚL VALERIO RAMÍREZ. SECRETARIA: GLADYS ELIZA GONZÁLEZ LEÓN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—**Competencia**. Este Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este propio Primer Circuito. Asimismo, con fundamento en los artículos 13 y 27, fracción III, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de

plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus Covid-19, preceptos que respectivamente establecen que el trabajo en los órganos jurisdiccionales se desempeñará presencialmente o de manera remota y que las sesiones se celebrarán, invariablemente, por videoconferencia y sin la presencia del público.

SEGUNDO.—**Legitimación**. La denuncia de posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

TERCERO.—**Criterios contendientes**. El **Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito** al resolver el juicio de amparo directo DT. 1123/2013, en sesión de siete de marzo de dos mil catorce, sostuvo en la parte conducente:

"... De igual forma, deviene infundado el argumento de que fue ilegal la condena al pago de salarios caídos. En razón de que el legislador federal en el artículo 4o. de la ley reglamentaria de la fracción XIII Bis amplió los derechos de los trabajadores de confianza bancarios que para los trabajadores burocráticos de confianza consagra la fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional, limitados a las medidas de protección al salario y a los beneficios de la seguridad social, pues como se ha visto, reconoció el derecho originario de aquellos trabajadores en caso de cese injustificado al pago de tres meses de salarios y veinte días por año, es dable concluir que también procede el pago derivado de esta prerrogativa, que es el de los salarios caídos, como sanción por lo injustificado de la terminación del vínculo laboral.—Por tanto, en razón de que el Máximo Tribunal ha señalado que el pago de los salarios caídos tratándose del cumplimiento de un laudo condenatorio, cuando se eximió al patrón de la reinstalación respecto de un trabajador de confianza, procede desde la fecha del despido hasta que se paguen las indemnizaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 50, fracción III, en relación con el 947, ambos de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación a la ley de la materia en lo no previsto, conforme a lo dispuesto en el artículo 5o. de la ley reglamentaria, debe condenarse a su pago en los citados términos tratándose de los trabajadores de

confianza bancarios.—Lo anterior encuentra apoyo, en su parte conducente, en la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto, son: Época: Novena Época. Registro: 174173. Instancia: Segunda Sala. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXIV, septiembre de 2006, materia laboral, tesis 2a./J. 132/2006: 'SALARIOS CAÍDOS. SE GENERAN DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE LAS INDEMNIZACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SON CUBIERTAS Y PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL TRABAJADOR DE CONFIANZA, CUANDO SE EXIMIÓ AL PATRÓN DE LA REINSTALACIÓN.' (se transcribe).—Atento a ello, es dable concluir que la condena impuesta al quejoso al pago de salarios caídos desde la fecha del despido hasta que las indemnizaciones sean cubiertas y puestas a disposición del trabajador de confianza, no es violatorio de sus derechos ..."

El **Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito**, al resolver el juicio de amparo directo DT. 601/2019, en sesión de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, estableció:

"... Por otro lado, en oposición a lo que afirma la quejosa **********, la autoridad responsable no estaba en posibilidad de decretar condena de pago de los salarios caídos que reclamó, pues si bien fue objeto de un despido injustificado, al tratarse de una trabajadora de confianza al servicio de una sociedad nacional de crédito, sólo le asiste el derecho al pago de la indemnización de tres meses de salario y veinte días por cada año de servicios prestados.—Para comprobar lo anterior es menester transcribir la parte conducente de los artículos 216, 217, 218 y 220 de las Condiciones Generales de Trabajo de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 1994-1997, cuyo ejemplar fue aportado por la parte actora y que hizo propia la institución bancaria demandada (1er. Cuaderno, fojas 37, 201 y 265).—'Artículo 216. En caso de cese injustificado, el trabajador de base podrá demandar, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de tres meses de su salario y veinte días por cada año de servicios. La indemnización se pagará con base en el salario integrado, de conformidad con lo establecido por la Ley Federal del Trabajo. Si en el juicio correspondiente no comprueba la institución la causa del cese, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada a que se le

paguen los salarios caídos desde la fecha del cese hasta que se cumplimente el laudo ejecutoriado.'.—Del precepto antes transcrito se advierte que éste se refiere al caso en el que los trabajadores de base, sean cesados de manera injustificada de su empleo, en donde se prevé que tendrán derecho, ya sea a la reinstalación o bien a la indemnización, además que si no quedó demostrada la causa del cese, tendrán derecho a que se les paguen salarios caídos hasta que se dé cumplimiento al laudo ejecutoriado.—Precepto que, se insiste, únicamente se refiere a los trabajadores de base. Ahora, los artículos 217 y 218 de las condiciones mencionadas prevén que los trabajadores de confianza no tendrán derecho a la reinstalación, pero sí a la indemnización como a continuación se transcriben: 'Artículo 217. En caso de cese injustificado, el trabajador de confianza tendrá derecho a la indemnización que corresponda, la que se le otorgará previo requerimiento.' (lo destacado no es de origen).—'Artículo 218. La institución quedará eximida de la obligación de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 220 en los casos siguientes: I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de doce meses. II. Si comprueba ante las autoridades que el trabajador, por razón del trabajo que desempeñó o por las características de sus labores. Está en contacto directo y permanente con los representantes de la institución y la propia autoridad estima. Tomando en consideración las circunstancias del caso. Que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo. III. Cuando se trate de trabajadores por tiempo fijo u obra determinada. IV. Cuando se trate de trabajadores de confianza.'.—El artículo 217 citado en primer término establece que en caso de despido injustificado, el trabajador de confianza tendrá derecho a demandar la indemnización, pero de dicho precepto, de ninguna manera se advierte que tenga derecho al pago de salarios caídos, en tanto que el siguiente numeral determina que la institución queda eximida de la obligación de reinstalar al trabajador mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 220 del mismo ordenamiento.—Finalmente, el artículo 220 se refiere a la manera en que serán pagadas las indemnizaciones a que se refiere el diverso numeral 216, ambos de las condiciones generales de trabajo, pues determina: 'Artículo 220. Las indemnizaciones a las que se refiere el artículo 216 consistirán: I. Si el nombramiento fuere por tiempo determinado menor de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados; si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por el primer año y veinte días por cada uno de

los, años siguientes en que hubiese prestado sus servicios. II. Si el nombramiento fuere de carácter definitivo, la indemnización consistirá en veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados. III. Además de las cantidades a que se refieren las fracciones anteriores, la institución cubrirá al trabajador el importe de tres meses de salario, independientemente del pago de los salarios caídos desde la fecha del cese hasta que se le pague la indemnización correspondiente.'.—Numeral el antes transcrito del cual se desprende que remite al 216, el cual únicamente se refiere a los trabajadores de base, por tanto, este precepto no resulta aplicable a la quejosa **********, dado que, como ya quedó establecido, es trabajadora de confianza y la fracción III tampoco le beneficia, pues se refiere a los trabajadores que tienen los tipos de nombramientos que señalan las fracciones anteriores, es decir, I y II, no así a los trabajadores de confianza, ya que de la correlación que se hace de todos los preceptos referidos, se puede ver que tratándose de un cese injustificado, en el caso de trabajadores de confianza únicamente serán procedentes las 'indemnizaciones correspondientes'; esto es, la indemnización y veinte días de salario por año laborado, pues el pago de salarios caídos sólo es aplicable para los trabajadores de base, ya que los de confianza al no gozar de estabilidad en el empleo, no les corresponden los mismos, y los artículos antes citados, de ninguna manera establecen en forma expresa que a los trabajadores de confianza les correspondan salarios caídos.—Arribar a una conclusión diversa a la anterior, cuando no hay disposición expresa que contemple que en el caso de los trabajadores del organismo bancario demandado, cuando sean de confianza les corresponde el pago de salarios caídos, sería ir en contra de los criterios ya establecidos en reiteradas ocasiones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales del trabajo, en cuanto se reitera que a los trabajadores de confianza, cuando queda plenamente acreditada esa circunstancia, no les corresponde el pago de salarios caídos.—Lo antes considerado encuentra sustento, en lo conducente, en la jurisprudencia sin número, emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra publicada en la página 68, *Semanario Judicial de la Federación*, Volumen (sic) 175-180, Quinta Parte, Séptima Época, del tenor siguiente: 'TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. NO ESTÁN PROTEGIDOS POR EL APARTADO «B» DEL ARTÍCULO 123 EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.' (se transcribe).—De igual forma resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.160/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, publicada en la página 1322 de la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, Décima Época, que dice: 'TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AL CARECER DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, SU REMOCIÓN ORDENADA POR QUIEN CARECE DE FACULTADES PARA DECRETARLA, NO TIENE COMO CONSECUENCIA QUE SE DECLARE PROCEDENTE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA Y GUANAJUATO).' (se transcribe).—Bajo ese contexto, debe decirse que los trabajadores de confianza al servicios (sic) de las sociedades nacionales de crédito que sean despedidos injustificadamente como es el caso de la quejosa **********, sólo les asiste el derecho a exigir el pago de la indemnización, mas no así a los salarios caídos, por lo que resulta infundado el concepto en que se combate tal absolución ..."

El **Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito**, al resolver el juicio de amparo directo DT. 837/2018, en sesión de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, estipuló:

"... De igual forma, deviene infundado el argumento de que fue ilegal la condena al pago de salarios caídos.—En razón de que, como se ha venido sosteniendo, el legislador federal en el artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis amplió los derechos de los trabajadores de confianza bancarios que para los trabajadores burocráticos de confianza consagra la fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional, limitados a las medidas de protección al salario y a los beneficios de la seguridad social, pues como se ha visto, reconoció el derecho originario de aquellos trabajadores en caso de cese injustificado al pago de tres meses de salarios y veinte días por año, es dable concluir que también procede el pago derivado de esta prerrogativa, que es el de los salarios caídos, como sanción por lo injustificado de la terminación del vínculo laboral.—Por tanto, en razón de que el Máximo Tribunal ha señalado que el pago de los salarios caídos tratándose del cumplimiento de un laudo condenatorio, cuando se eximió al patrón de la reinstalación respecto de un trabajador de confianza, procede desde la fecha del despido hasta que se paguen las indemnizaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 50, fracción III, en relación con el 947, ambos de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación a la ley de la materia en lo no previsto, conforme a lo dispuesto en el artículo 5o. de la ley reglamentaria, que dice: 'Artículo 5o. A las relaciones laborales materia de esta



ley les serán aplicables, en cuanto no se opongan a ella, las disposiciones contenidas en los títulos tercero, cuarto, séptimo, octavo y décimo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En lo no previsto, se aplicarán supletoriamente y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad.'.—Entonces, debe condenarse a su pago en los citados términos tratándose de los trabajadores de confianza bancarios. Lo anterior encuentra apoyo, en su parte conducente, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 132/2006 (contradicción de tesis 107/2006-SS), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, glosada a fojas 309 del Tomo XXIV, septiembre de 2006, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, con número de registro: 174173, cuyo rubro y texto es (sic): 'SALARIOS CAÍDOS. SE GENERAN DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE LAS INDEMNIZACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SON CUBIERTAS Y PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL TRABAJADOR DE CONFIANZA, CUANDO SE EXIMIÓ AL PATRÓN DE LA REINSTALACIÓN.—La determinación del periodo que debe comprender el cálculo del importe relativo a los salarios caídos tratándose del cumplimiento de un laudo condenatorio, cuando se eximió al patrón de la reinstalación respecto de un trabajador de confianza, ha sido establecida por el legislador en el artículo 50, fracción III, en relación con el 947, ambos de la Ley Federal del Trabajo, al disponer que en ese supuesto el patrón debe pagar las indemnizaciones legalmente previstas, así como los salarios vencidos «desde la fecha del despido hasta que se paguen las indemnizaciones», lo que constituye un criterio expreso y claro, derivado de la lógica y especial naturaleza de las relaciones laborales en el caso de trabajadores de confianza, cuya reinstalación no es obligatoria para la parte patronal, lo que tiende a promover, además, el derecho fundamental de toda persona al goce y protección efectiva del salario, pues a partir de esa fórmula legislativa el patrón debe cumplir lo más pronto posible con el laudo respectivo otorgando directamente o poniendo oportunamente a disposición del trabajador la indemnización legal para la satisfacción de sus necesidades.'.—Lo que es así, además considerando que existe disposición expresa al respecto derivada de que en este caso dicho pago reviste el carácter de extralegal, pues así fue pactado expresamente, como se observa del artículo 216 de las condiciones generales de trabajo que en su parte conducente dispone: 'Artículo 216. ... Si en el juicio correspondiente no comprueba la institución la causa del cese, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese

sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios caídos desde la fecha del cese hasta que se cumplimente el laudo ejecutoriado. En caso de cese injustificado, el trabajador de confianza tendrá derecho a la indemnización que corresponda la cual se entregará previo requerimiento.'.—Atento a ello, es dable concluir que la condena impuesta al quejoso al pago de salarios caídos desde la fecha del despido hasta que las indemnizaciones sean cubiertas y puestas a disposición del trabajador de confianza, no es violatoria de sus derechos.—Resulta orientadora al respecto la tesis de jurisprudencia 2a./J. 34/2017 (10a.) (contradicción de tesis 231/2016), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, glosada a fojas 1030 del Libro 41, Tomo I, abril de 2017, de la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, con número de registro: 2014106, cuyos rubro y texto son: 'SALARIOS CAÍDOS DE LOS TRABAJADORES BUROCRÁTICOS. EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.' (se transcribe)

CUARTO.—**Determinación de la existencia de la contradicción de tesis**. Con el propósito de dilucidar si existe la contradicción de tesis denunciada, se toma en consideración lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 225 y 226 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que regulan específicamente la hipótesis de tesis contradictorias entre Tribunales Colegiados de Circuito, al señalar lo siguiente:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en Materia Especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer."

"Artículo 225. La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o entre los Tribunales Colegiados de Circuito, en los asuntos de su competencia."

"Artículo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por: '... Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente, o sin materia. En todo caso, la decisión se determinará por la mayoría de los Magistrados que los integran. La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias."

Como se advierte, los preceptos transcritos se refieren específicamente a aquellos casos en que existe contradicción o discrepancia entre tesis o criterios jurídicos sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito o los Plenos de Circuito, porque la finalidad de dichos preceptos, constitucional y legales, es unificar criterios ante los órganos de impartición de justicia en la interpretación de un determinado precepto, institución o problema jurídico. Ello, debido a que la resolución que se dicte, por mandato constitucional, sólo tiene el efecto de fijar la jurisprudencia y no afecta ni puede afectar válidamente las situaciones jurídicas concretas, derivadas de las sentencias dictadas en los juicios correspondientes. Asimismo, el numeral 226 transcrito, claramente establece que el conflicto de criterios puede encontrar cuatro posibles soluciones:

a) Acoger uno de los criterios discrepantes,

b) Sustentar uno diverso,

c) Declararla inexistente, o

d) Declararla sin materia.

Precisado lo anterior, lo que se debe determinar es si existe la contradicción de tesis denunciada, pues constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe, en su caso, prevalecer como jurisprudencia.

Ahora bien, para establecer si en el caso a estudio existe o no la contradicción de tesis denunciada, a continuación se realiza una síntesis de los argumentos externados en las ejecutorias preinsertas:

A) Del juicio de amparo DT. 1123/2013, resuelto por el **Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito**, se aprecia, en esencia, que determinó lo siguiente:

Que es legal la condena al pago de salarios caídos, en razón de que el legislador federal en el artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos amplió los derechos de los trabajadores de confianza bancarios que para los trabajadores burocráticos de confianza consagra la fracción XIV del apartado B del citado artículo 123, limitados a las medidas de protección al salario y a los beneficios de la seguridad social, pues reconoció el derecho originario de aquellos trabajadores en caso de cese injustificado al pago de tres meses de salarios y veinte días por año, concluyendo que también procede a su favor el pago de los salarios caídos, como sanción por lo injustificado de la terminación del vínculo laboral. Que en razón de que el Máximo Tribunal ha señalado que el pago de los salarios caídos, tratándose del cumplimiento de un laudo condenatorio –cuando se eximió al patrón de la reinstalación respecto de un trabajador de confianza–, procede desde la fecha del despido hasta que se paguen las indemnizaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 50, fracción III, en relación con el 947, ambos de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación a la ley de la materia en lo no previsto, conforme a lo dispuesto en el artículo 5o. de la misma, debe condenarse a su pago en los citados términos. Citó la jurisprudencia de rubro: "SALARIOS CAÍDOS. SE GENERAN DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE LAS INDEMNIZACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SON CUBIERTAS Y PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL TRABAJADOR DE CONFIANZA, CUANDO SE EXIMIÓ AL PATRÓN DE LA REINSTALACIÓN."

B) Al resolver el juicio de amparo DT. 601/2019, el **Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito**, en esencia expresó:

Que no es factible la condena al pago de salarios caídos, pues si bien la parte actora fue objeto de un despido injustificado, al tratarse de una trabajadora de confianza al servicio de una sociedad nacional de crédito, sólo le asiste el derecho al pago de la indemnización de tres meses de salario y veinte días por cada año de servicios prestados; al efecto analizó los artículos 216, 217, 218 y 220 de las Condiciones Generales de Trabajo de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 1994-1997, señalando que el numeral 220 remite al 216, el cual únicamente se refiere a los trabajadores de base, por tanto, este precepto no resulta aplicable a la trabajadora de confianza, que de la correlación que se hace de todos los preceptos referidos, se puede ver que tratándose de un cese injustificado, en el caso de trabajadores de confianza únicamente serán procedentes las "indemnizaciones correspondientes", y como los citados numerales no establecen en forma expresa que a los trabajadores de confianza les correspondan salarios caídos, considerar lo contrario iría en contra de los criterios ya establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales del trabajo, en cuanto a que a los trabajadores de confianza no les corresponde el pago de salarios caídos, que son los de los rubros siguientes:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. NO ESTÁN PROTEGIDOS POR EL APARTADO 'B' DEL ARTÍCULO 123 EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO."

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AL CARECER DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, SU REMOCIÓN ORDENADA POR QUIEN CARECE DE FACULTADES PARA DECRETARLA, NO TIENE COMO CONSECUENCIA QUE SE DECLARE PROCEDENTE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA Y GUANAJUATO)."

B) En el juicio de amparo DT. 837/2018, el **Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito** consideró:

Que es legal la condena al pago de salarios caídos, en razón de que el legislador federal, en el artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis amplió los derechos de los trabajadores de confianza bancarios que para los trabajadores burocráticos de confianza consagra la fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional, limitados a las medidas de protección al salario y a los beneficios de la seguridad social, pues reconoció el derecho originario de aquellos trabajadores en caso de cese injustificado al pago de tres meses de salarios y veinte días por año, por lo que también procede el pago de los salarios caídos, como sanción por lo injustificado de la terminación del vínculo laboral. Que en razón de que el Máximo Tribunal ha señalado que el pago de los salarios caídos tratándose del cumplimiento de un laudo condenatorio, cuando se eximió al patrón de la reinstalación respecto de un trabajador de confianza, procede desde la fecha del despido hasta que se paguen las indemnizaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 50, fracción III, en relación con el 947, ambos de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación a la ley de la materia en lo no previsto, conforme a lo dispuesto en el artículo 5o. de la ley reglamentaria, debe condenarse a su pago en los citados términos tratándose de los trabajadores de confianza bancarios. Apoyándose en la tesis de rubro: "SALARIOS CAÍDOS. SE GENERAN DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE LAS INDEMNIZACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SON CUBIERTAS Y PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL TRABAJADOR DE CONFIANZA, CUANDO SE EXIMIÓ AL PATRÓN DE LA REINSTALACIÓN.", además estimó que así fue pactado expresamente en el artículo 216 de las condiciones generales de trabajo.

Para un mejor análisis se hace el siguiente cuadro comparativo:

Tribunal denunciante 7o.	Tribunal en contradicción 3o.	Tribunal en contradicción 9o.
Acción: Reinstalación (trabajador de Nafinsa de confianza)	Acción: Reinstalación (trabajador del Banco Nacional de Comercio Exterior SNC)	Acción: Indemnización (trabajador de Nafinsa)
Laudo: Condena a pago de indemnización y 20 días x cada año	Laudo: Condena a indemnización y salarios caídos	Laudo: Condena a indemnización y salarios caídos.

Amparo: De conformidad con las condiciones generales de trabajo 94-97 en caso de cese injustificado solamente refiere el derecho de salarios caídos a trabajadores de base no de confianza. Por tanto, los trabajadores de confianza al servicio de las sociedades nacionales de crédito sólo les asiste razón para reclamar el pago de indemnización.	Amparo: Negó amparo al banco en razón que al haber ampliado los derechos de los trabajadores de confianza bancarios a reconocer el pago de indemnización también procedía entonces el pago de salarios caídos. Con base en la jurisprudencia de la SCJN, de rubro: "SALARIOS CAÍDOS. SE GENERAN DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE LAS INDEMNIZACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SON CUBIERTAS Y PUESTAS A DISPOSICÓN DEL TRABAJADOR DE CONFIANZA. CUANDO SE EXIMIÓ AL PATRÓN DE LA REINSTALACIÓN."	Amparo: Negó amparo al banco en razón que de conformidad con el análisis a las CGT se observa que sí tienen derecho a salarios caídos los trabajadores de confianza.
DT. 601/2019	DT. 1123/2013 Derivo la tesis: "TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO. EN CASO DE CESE INJUSTIFICADO TIENEN DERECHO AL PAGO DE LOS SALARIOS CAÍDOS HASTA QUE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XIII BIS DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS	DT. 837/2018

	MEXICANOS, ES CUBIERTA Y PUESTA A SU DISPOSICIÓN."	

De la síntesis de los criterios contendientes, se observa:

Que dos de los tribunales contendientes (Tercero y Noveno) concluyeron que corresponde a los trabajadores actores considerados como de confianza el pago de salarios caídos y uno de los tribunales concluyó que no (Séptimo); sin embargo, sólo se suscita la contradicción de criterios entre el Noveno y el Séptimo, y no así respecto del Tercero y el Séptimo, por lo siguiente:

El **Tercer** Tribunal Colegiado, al determinar sobre el pago de salarios caídos a trabajadores de confianza al servicio de las sociedades nacionales de crédito, atendió a la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis de la Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al analizar los artículos 3o., 4o. y 5o., llegó a la conclusión que como el legislador en el artículo 4o., amplió los derechos de los trabajadores de confianza bancarios al reconocerles su derecho al pago de la indemnización de tres meses de salario y veinte días por año y, por ende, también procede el pago de los salarios caídos.

El **Séptimo** Tribunal Colegiado, para emitir su resolución sobre el tema, analizó los artículos 216, 217, 218 y 220 de las Condiciones Generales de Trabajo 1994-1997, y determinó que el numeral 216 no resulta aplicable a la trabajadora de confianza, ya que de la correlación que hizo de todos estos preceptos obtuvo que tratándose de un cese injustificado, en el caso de trabajadores de confianza únicamente serán procedentes las indemnizaciones correspondientes, debido a que el pago de salarios caídos sólo es aplicable a los trabajadores de base, dado que los de confianza, al no gozar de estabilidad en el empleo, no les corresponde.

El **Noveno** Tribunal Colegiado, al pronunciar la sentencia atendió a lo previsto en la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, analizó los artículos 3o., 4o. y 5o., así como el artículo 216 de las Condiciones Generales de

Trabajo Revisión 2006 y señaló que el citado numeral establece expresamente el pago de salarios caídos a los trabajadores de confianza.

Cabe resaltar que los juicios laborales que conocieron el Séptimo y Noveno Tribunales Colegiados, fueron promovidos en contra de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo y el ventilado ante el Tercer Tribunal Colegiado se instauró en contra de Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, por tanto, las condiciones generales de trabajo de este último de los demandados son diversas a los dos mencionados en primer término.

En ese tenor, se estima que sólo existe contradicción de tesis en relación a los criterios emitidos por el Séptimo y Noveno Tribunal, puesto que el primer órgano jurisdiccional para determinar la improcedencia del pago de los salarios caídos a la trabajadora de confianza de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, analizó las Condiciones Generales de Trabajo 1994-1997 de dicha institución, llegando a la conclusión que, de conformidad con los numerales 216, 217, 218 y 220, no les corresponde el pago de salarios caídos; y, por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado, sustentándose por una parte en la tesis PC.I.L. J/6 L (10a.), emitida por el Pleno de este Circuito, de rubro: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DIRECTORES GENERALES, TIENEN DERECHO A EXIGIR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN, PERO NO LA REINSTALACIÓN, CUANDO SEAN DESPEDIDOS INJUSTIFICADAMENTE.", así como en las citadas Condiciones Generales de Trabajo Revisión 2006 de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, propiamente en el artículo 216, consideró que sí le corresponde a los trabajadores de confianza el pago de salarios caídos.

De lo que se colige que ambos Tribunales Colegiados (Séptimo y Noveno) para llegar a su determinación analizaron las Condiciones Generales de Trabajo de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, debido a que dicha institución fue parte demandada en los juicios laborales 4966/2002 y 3933/2013, que conocieron estos órganos jurisdiccionales, respectivamente, por ello, en relación a éstos, sí se configura la disparidad de criterios, porque al efectuar el análisis de la referida normatividad llegaron a conclusiones divergentes.

Sin que obste el hecho de que en uno de los juicios de amparo se atendió a las Condiciones Generales de Trabajo 1994-1997 y en el otro a las de 2006, ya que como se asentara más adelante, las cláusulas analizadas disponen prácticamente los mismos derechos a favor de los trabajadores de confianza, además, al tratarse de la misma institución, se considera que sí se configura la contradicción y es pertinente establecer un criterio en cuanto al tema para crear certeza jurídica.

Por tanto, no existe la contradicción de criterios en relación a lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado y el Séptimo Tribunal Colegiado, pues aun y cuando ambos tribunales llegaron a conclusiones diferentes en relación al tema de pago de salarios, lo cierto es que no analizaron las mismas disposiciones legales, al tratarse de condiciones generales de trabajo de diferentes instituciones.

Es así, porque el juicio de amparo que conoció el Tercer Tribunal Colegiado fue promovido por Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, parte demandada en el juicio laboral 4032/2009, por ello, al emitir sentencia el Tribunal Colegiado analizó las condiciones generales de trabajo de dicha institución, así como la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis de la Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, el Séptimo Tribunal Colegiado se concretó a analizar las Condiciones Generales de Trabajo de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.

En consiguiente, no existe contradicción de tesis en relación al criterio externado por el Tercer Tribunal Colegiado al emitir el juicio de amparo 1123/2013, porque dicho órgano jurisdiccional analizó disposiciones legales diversas al tribunal que resolvió en contrario sobre el tema de que se trata.

Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 43/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 93 del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo VIII, julio de 1998, materia común, Época: (sic) Novena Época, registro: 195941, que reza:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LOS CRITERIOS JURÍDICOS SE BASAN EN DISPOSICIONES LEGALES DE CONTENIDO DIFERENTE.—Es inexistente la contradicción de tesis cuando los Tribunales

Colegiados examinan el mismo problema jurídico pero lo hacen fundándose e interpretando disposiciones legales distintas y no coincidentes, de tal suerte que, de lo sostenido por uno y otro tribunales, no puede surgir contradicción, pues para ello sería necesario que hubieran examinado el problema jurídico a la luz de un mismo dispositivo legal o de preceptos distintos pero que coincidan en cuanto a lo que establecen, y que hubieran sostenido criterios diversos."

No pasa inadvertido para este Pleno de Circuito, que del juicio de amparo que el Tercer Tribunal Colegiado conoció (DT. 1123/2013), derivó la tesis aislada de rubro y texto siguientes:

"TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO. EN CASO DE CESE INJUSTIFICADO TIENEN DERECHO AL PAGO DE LOS SALARIOS CAÍDOS HASTA QUE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XIII BIS DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES CUBIERTA Y PUESTA A SU DISPOSICIÓN. El citado numeral establece el pago de la indemnización de 3 meses y 20 días por cada año de servicios en caso de cese injustificado, tanto a los trabajadores de base como a los de confianza, de donde se sigue que ambos tienen derecho a reclamar el pago de los salarios caídos con motivo de aquél, pues el precepto refiere que ningún trabajador podrá ser separado, sino cuando exista una causa justificada, de manera que, conforme al artículo 50, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que procede el pago de aquéllos, hasta que la citada indemnización es pagada al trabajador y puesta a su disposición."

De la cual se aprecia que, se consideró que los trabajadores de confianza del sistema bancario mexicano –*de manera general*–, en caso de cese injustificado, tienen derecho al pago de los salarios caídos hasta que la indemnización prevista en el artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea cubierta y puesta a su disposición, empero, aun y cuando esta tesis incluye a todos los trabajadores de confianza del sistema bancario mexicano, no debe considerarse que abarcó el análisis relativo a si los trabajadores de confianza de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de

Banca de Desarrollo, de acuerdo a las condiciones generales de trabajo que los rigen, tienen derecho al pago de salarios caídos, que en el caso será el tema toral a dilucidar en la presente contradicción de tesis.

Ante ese panorama, a efecto de que exista certeza jurídica en cuanto al tópico, debe establecerse si de acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo 1994-1997 y 2006, de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, los trabajadores de confianza de dicha institución tienen derecho al pago de salarios caídos o no lo tienen.

Punto de contradicción. Entonces, conforme a los elementos fácticos y jurídicos antedichos, el punto de contradicción consiste en:

Determinar si los trabajadores de confianza de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, de acuerdo a las condiciones generales de trabajo que rigen a dicha institución (1994-1997) y (2006), en caso de cese injustificado tienen derecho o no al pago de los salarios caídos hasta que se les pague la indemnización correspondiente.

QUINTO.—**Decisión**. Este Pleno de Circuito estima que en el caso debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que a continuación se define:

De conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción XIII Bis, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los trabajadores del banco central y de las entidades de la Administración Pública Federal que forman parte del sistema bancario mexicano, regirán sus relaciones laborales conforme a lo dispuesto en el citado apartado, de los antecedentes relativos a la reforma constitucional que adicionó al artículo 123 constitucional, apartado B, la fracción XIII Bis, de diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, se aprecia que se hizo para ubicar en dicho apartado a los trabajadores de las entonces sociedades nacionales de crédito.

Dicha reforma constitucional motivó la iniciativa de ley reglamentaria a dicha fracción, propuesta al Congreso el primero de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, misma que tal como se fijó en su exposición de motivos, tuvo como objeto "... fijar el marco jurídico de las relaciones laborales de los trabaja-



dores bancarios con las instituciones de crédito, incorporando el régimen al que han estado sujetos y respetando especialmente las prestaciones que con tanto esfuerzo han logrado y haciendo compatible su estatuto laboral con el establecido para los trabajadores al servicio del Estado ..."

La Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1o., que es de observancia general en toda la República y rige las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las instituciones siguientes: instituciones que presten el servicio público de banca y crédito, Banco de México y Patronato del Ahorro Nacional.

De ahí que esta legislación regula las relaciones laborales de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, la cual, de conformidad con el artículo 2o. de su ley orgánica, tendrá por objeto promover el ahorro y la inversión, así como canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento industrial y, en general, al desarrollo económico nacional y regional del país.

Así, la citada Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6o. establece:

"Artículo 6o. Las instituciones mantendrán para sus trabajadores los derechos, beneficios y prestaciones que han venido otorgando y que sean superiores a las contenidas en este ordenamiento, las que quedarán consignadas en las condiciones generales de trabajo."

Del citado numeral se deduce que los derechos, beneficios y prestaciones de los trabajadores de estas instituciones, quedarán consignadas en las condiciones generales de trabajo.

Como ya quedó asentado, en los juicios de amparo directo resueltos por los Tribunales Colegiados Séptimo y Noveno, se analizaron las Condiciones Generales de Trabajo de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 1994-1997 y 2006, para llegar a la conclusión –uno de los Tribunales Colegiados– que sí les corresponde y otro lo contrario.

Cabe precisar que en el juicio de amparo 601/2019, del índice del Séptimo Tribunal Colegiado, se transcribieron los artículos 216, 217, 218 y 220 de las Condiciones Generales de Trabajo de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 1994-1997, que a la letra dicen:

"Artículo 216. En caso de cese injustificado, el trabajador de base podrá demandar, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de tres meses de su salario y veinte días por cada año de servicios.

"La indemnización se pagará con base en el salario integrado, de conformidad con lo establecido por la Ley Federal del Trabajo.

"Si en el juicio correspondiente no comprueba la institución la causa del cese, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada a que se le paguen los salarios caídos desde la fecha del cese hasta que se cumplimente el laudo ejecutoriado."

"Artículo 217. En caso de cese injustificado, el trabajador de confianza tendrá derecho a la indemnización que corresponda, la que se le otorgará previo requerimiento."

"Artículo 218. La institución quedará eximida de la obligación de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 220 en los casos siguientes: I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de doce meses. II. Si comprueba ante las autoridades que el trabajador, por razón del trabajo que desempeñó o por las características de sus labores. Está en contacto directo y permanente con los representantes de la institución y la propia autoridad estima. Tomando en consideración las circunstancias del caso. Que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo. III. Cuando se trate de trabajadores por tiempo fijo u obra determinada. IV. Cuando se trate de trabajadores de confianza."

"Artículo 220. Las indemnizaciones a las que se refiere el artículo 216 consistirán: I. Si el nombramiento fuere por tiempo determinado menor de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados; si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los sala-



rios de seis meses por el primer año y veinte días por cada uno de los, (sic) años siguientes en que hubiese prestado sus servicios. II. Si el nombramiento fuere de carácter definitivo, la indemnización consistirá en veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados. III. Además de las cantidades a que se refieren las fracciones anteriores, la institución cubrirá al trabajador el importe de tres meses de salario, independientemente del pago de los salarios caídos desde la fecha del cese hasta que se le pague la indemnización correspondiente."

En el juicio de amparo 837/2018, el Noveno Tribunal Colegido atendió a las Condiciones Generales de Trabajo, Revisión 2006, propiamente el artículo 216, que a la letra refiere:

"Artículo 216. En caso de cese injustificado, el trabajador de base podrá demandar, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de tres meses de su salario y veinte días por cada año de servicios.

"La indemnización se pagará con base en el salario integrado, de conformidad con lo establecido por la Ley Federal del Trabajo.

"Si en el juicio correspondiente no comprueba la institución la causa del cese, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios caídos desde la fecha del cese hasta que se cumplimente el laudo ejecutoriado.

"En caso de cese injustificado, el trabajador de confianza tendrá derecho a la indemnización que corresponda, la que se le otorgará previo requerimiento."

De lo anterior, se vislumbra que en el artículo 216, de las Condiciones Generales de Trabajo de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 1994-1997, no se menciona a los trabajadores de confianza, sino en el artículo 217, señalando que en caso de cese injustificado, el trabajador de confianza tendrá derecho a la indemnización que corresponda, la que se le otorgará previo requerimiento.

Por su parte, en las Condiciones Generales de Trabajo de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo Revisión

2006, el artículo 216 incluye lo que anteriormente preveía el artículo 217, es decir, que en caso de cese injustificado, el trabajador de confianza tendrá derecho a la indemnización que corresponda, la que se le otorgará previo requerimiento.

No obstante esta diferencia que se denota en ambas disposiciones legales, se llega a la conclusión que debe considerarse que de acuerdo a su análisis, los trabajadores de confianza de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, sí tienen derecho al pago de salarios caídos, por las razones que se exponen a continuación, siempre y cuando les sean aplicables estas (sic) condiciones generales de trabajo.

Condiciones Generales de Trabajo de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo correspondientes al periodo 1994-1997.

Se constata que en el numeral 218, se dispuso que la institución quedará eximida de la obligación de reinstalar, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 220, señalando entre estos supuestos cuando se trate de trabajadores de confianza.

En ese contexto, si el numeral 220 dispone en qué consistirán las indemnizaciones y en la última fracción estipula que además de las cantidades a que se refieren las fracciones primera y segunda, la institución cubrirá al trabajador el importe de tres meses de salario, independientemente del pago de los salarios caídos desde la fecha del cese hasta que se le pague la indemnización correspondiente, es inconcuso que tal prerrogativa la dispuso también para los trabajadores de confianza.

Aunado a que el artículo 217 les concede el derecho a recibir el pago de la indemnización en caso de que sean cesados injustificadamente.

En tal virtud, si el diverso dispositivo legal 218 exime al patrón de la reinstalación mediante el pago de las indemnizaciones previstas en el numeral 220, incluyendo a los trabajadores de confianza, es por ello, que aun y cuando el artículo 216 no los haya comprendido, lo cierto es que este primer numeral (218), obliga a la institución a que pague a los trabajadores de confianza las indemnizaciones que se determinan en el diverso 220, el cual estatuye que, además de

las cantidades que cita, se deberá cubrir tres meses de salario, así como los salarios caídos correspondientes, por ende, es evidente que a los trabajadores de confianza que les sean aplicables dichas condiciones se les debe pagar salarios caídos.

Condiciones Generales de Trabajo de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo después de la revisión 2006.

El numeral 216 prevé que para el caso en el que los trabajadores de base sean cesados de manera injustificada de su empleo tendrán derecho, ya sea a la reinstalación o bien a la indemnización, además que si no quedó demostrada la causa del cese, tendrán derecho a que se les paguen salarios caídos hasta que se dé cumplimiento al laudo ejecutoriado, señalando, además, que en caso de cese injustificado, el trabajador de confianza tendrá derecho a la indemnización que corresponda.

Pues bien, aun y cuando el Noveno Tribunal Colegiado no haya asentado lo ordenado por el artículo 220, debe señalarse que este numeral es del mismo contenido literal que el artículo 220 de las Condiciones Generales de Trabajo (1994-1997).

A continuación se reproduce tal disposición:

"Artículo 220. Las indemnizaciones a las que se refiere el artículo 216 consistirán: I. Si el nombramiento fuere por tiempo determinado menor de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados; si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por el primer año y veinte días por cada uno de los, años siguientes en que hubiese prestado sus servicios. II. Si el nombramiento fuere de carácter definitivo, la indemnización consistirá en veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados. III. Además de las cantidades a que se refieren las fracciones anteriores, la institución cubrirá al trabajador el importe de tres meses de salario, independientemente del pago de los salarios caídos desde la fecha del cese hasta que se le pague la indemnización correspondiente."

Del examen de estos preceptos se obtiene que el primer precepto (216) prevé que en caso de cese injustificado, el trabajador de confianza tendrá dere-

cho a la indemnización que corresponda, a su vez, el numeral 220 establece las cantidades que corresponde pagar a la institución respecto a las indemnizaciones a las que se refiere el artículo 216 y en su fracción III dispone que además de las cantidades a que se refieren las fracciones anteriores (I y II), la institución cubrirá al trabajador el importe de tres meses de salario, independientemente del pago de los salarios caídos desde la fecha del cese hasta que se le pague la indemnización correspondiente.

De ello se sigue, que este numeral (220), al disponer que las indemnizaciones que enuncia son a las que se refiere el artículo 216, no sólo se está refiriendo a los trabajadores de base, puesto que en el citado numeral (216), también menciona en el último párrafo a los trabajadores de confianza, al asentar: "*En caso de cese injustificado, el trabajador de confianza, tendrá derecho a la indemnización que corresponda, la que se otorgara previo requerimiento*."

Así las cosas, si el artículo 220 es el que determina en qué consistirán las indemnizaciones a las que se refiere el artículo 216 y este último dispone que el trabajador de confianza tendrá derecho a la indemnización que corresponda, es claro que se les está contemplando dentro del primero de los numerales y, por ello, les debe ser aplicable la fracción III de este dispositivo legal (220), que dispone que además de las cantidades a que se refieren las fracciones anteriores, la institución cubrirá al trabajador el importe de tres meses de salario, independientemente del pago de los salarios caídos desde la fecha del cese hasta que se le pague la indemnización.

De la interpretación estricta que se hace de dichos numerales, se obtiene que en el caso se establecen prestaciones a favor de estos (sic) trabajadores superiores a las consignadas en la ley.

Esto de conformidad, por analogía, con la tesis aislada 2a. CXLII/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, visible en la página 354 del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XII, noviembre de 2000, materia laboral, Época:(sic) Novena Época, registro: 190909, que señala:

"CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. LAS CLÁUSULAS QUE CONTIENEN PRESTACIONES EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES, QUE EXCEDAN

A LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SON DE INTERPRETACIÓN ESTRICTA EN TAL ASPECTO.—Conforme a lo dispuesto en los artículos 2o., 3o. y 18 de la Ley Federal del Trabajo, la regla general es que las normas de trabajo deben interpretarse atendiendo a las finalidades de esta rama del derecho y en caso de duda por falta de claridad en las propias normas, debe estarse a lo más favorable para el trabajador (principio in dubio pro operario); sin embargo, esa regla general admite excepciones, una de las cuales se actualiza precisamente, en los casos de interpretación de las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo en donde se establecen prestaciones a favor de los trabajadores en condiciones superiores a las señaladas por la ley, supuesto en el cual, esa disposición que amplía los derechos mínimos legales, debe ser de interpretación estricta tal como se desprende del artículo 31 de la Ley Federal del Trabajo, del que también se infiere que en caso de duda con respecto a los alcances del pacto, debe sustituirse la observancia del principio de estar a lo más favorable para el trabajador por 'la buena fe y la equidad' como criterio decisorio."

En efecto, como se lee de ambos numerales, uno les confiere el derecho al pago de las indemnizaciones (artículo 216) y el otro establece en qué consistirán esas indemnizaciones a las que se refiere el artículo 216, señalando que además se cubrirá al trabajador el importe de tres meses de salario, independientemente del pago de los salarios caídos desde la fecha del cese hasta que se le pague la indemnización, sin especificar si sólo a los de base les corresponde esta prerrogativa.

En tales condiciones, es inconcuso que en las Condiciones Generales de Trabajo de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo después de la revisión 2006, se obligó a pagar a los trabajadores de confianza los salarios que se generen desde el cese hasta que se les pague la indemnización correspondiente y no sólo a los trabajadores de base, por tanto, en caso de despido injustificado le corresponde al trabajador de confianza de dicha institución el pago de salarios caídos desde la fecha en que se verificó ese hecho y hasta aquel en el que se le entregue la indemnización que le corresponda.

En esa tesitura, se constata que en ambos ordenamientos Condiciones Generales de Trabajo (1994-1997) y (2006), se previó a favor de los trabajado-

res de confianza de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, el pago de salarios caídos desde el momento del cese hasta que se les pague la indemnización que les corresponda.

Es pertinente apuntar, que aun y cuando la presente resolución se ciñó al análisis de las condiciones generales de trabajo mencionadas, para dilucidar el tema y no a la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no pasa inadvertido que se adicionó un cuarto párrafo al artículo 3o. de dicha legislación, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil catorce, que establece:

"*Las remuneraciones, jubilaciones, pensiones, derechos, obligaciones y cualquier prestación aplicable al personal de confianza de las instituciones de banca de desarrollo, serán establecidas en los tabuladores y manuales de remuneraciones, jubilaciones, derechos y obligaciones que se establezcan en los términos del artículo 43 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que a dichos trabajadores no les resultarán aplicables las condiciones generales de trabajo de la respectiva institución*."

Pero, en los casos que se examinaron, no les es aplicable esta disposición, tomando en consideración que los juicios labores (sic) de que se trata se presentaron años antes de la citada reforma, es decir, el juicio laboral 4966/2002, relativo al juicio de amparo directo 601/2019, que conoció el Séptimo Tribunal Colegiado, se presentó el doce de septiembre de dos mil dos, y el juicio laboral 3933/2013, que corresponde al juicio de amparo 837/2019, que conoció el Noveno Tribunal Colegiado, se instauró el catorce de julio de dos mil trece, por eso si la reforma al artículo 3o. se publicó en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil catorce, es incuestionable que en los casos de que se trata, no les es aplicable.

Ante ese panorama, se concluye que a los trabajadores de confianza que promovieron los citados juicios sí les son aplicables las citadas Condiciones Generales de Trabajo (1994-1997) y Condiciones Generales de Trabajo Revisión 2006, pues a la fecha de la presentación de la demanda laboral aún no se había adicionado el citado párrafo al artículo 3o., por lo que es factible que se resuelva la contradicción atendiendo a dichos ordenamientos.

Tampoco se inadvierte para este Pleno de Circuito, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 5219/2016, abordó el tema del pago de salarios caídos a trabajadores de confianza, regidos por la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determinando que es improcedente ese derecho; sin embargo, partió del análisis de la citada ley y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, lo resuelto en la presente no contraviene esa determinación, por lo siguiente:

El asunto es relativo a un recurso de revisión promovido en contra de la sentencia dictada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, dentro del juicio de amparo 644/2015, en donde dicho órgano jurisdiccional resolvió negar el amparo, por ser ineficaces los argumentos relativos al pago de salarios caídos. Que si bien se señaló que la omisión de condenar a la demandada al pago de salarios caídos, implica un trato discriminatorio al transgredir sus derechos humanos de igualdad, no discriminación, así como de los principios pro persona, universalidad y progresividad, equidad, justicia y equilibrio social, y derecho al mínimo vital, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 123 de la Carta Magna y en la Convención Americana de (sic) Derechos Humanos, empero, no se advierte un planteamiento concreto sobre la convencionalidad, máxime que tal aspecto se resolvió conforme a lo dispuesto en la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 Constitucional, y con la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados.

En contra de lo anterior y en vía de agravios se externó lo siguiente:

"El tribunal hizo una interpretación incorrecta del artículo 1o. de la Constitución Federal, al razonar que no realizaba el control de convencionalidad solicitado, puesto que el presente caso se resolvía con lo dispuesto en la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 constitucional, pero dejó de considerar que de acuerdo al segundo párrafo del artículo 5o. de la citada ley, tiene aplicación supletoria la Ley Federal del Trabajo, la cual no aplicó. Que lo anterior implica un trato discriminatorio, al transgredir sus derechos humanos de igualdad, no discriminación, así como de los principios pro persona, universalidad y progresividad, equidad, justicia y equilibrio social y derecho al mínimo vital, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 123 de la Carta Magna y en la Convención Americana de (sic) Derechos Humanos. Resolvió los

conceptos de violación de manera contraria a los autos, al determinar por un lado que no había demandado el pago de salarios caídos, para luego afirmar que no los analizaba al haber sido objeto de pronunciamiento en la diversa ejecutoria dictada en el DT. 632/2015, lo cual es incorrecto, pues en ésta no se resolvió lo relativo a tal concepto y además se dejó libertad de jurisdicción. Fue omisa en aplicar la jurisprudencia 2a./J. 92/2003, de rubro: 'SALARIOS CAÍDOS. LA PROCEDENCIA DE SU PAGO DERIVA DEL DESPIDO INJUSTIFICADO, AUN CUANDO EL TRABAJADOR NO LO DEMANDE EXPRESAMENTE.'."

La Sala en mención, en esencia, resolvió:

Que la ley que rige a los trabajadores bancarios, en específico el numeral 4o., no hizo distingo entre trabajadores de base y de confianza, a quienes se les otorgó el derecho de no ser despedidos injustificadamente y, derivado de ello, a recibir el pago de tres meses de sueldo y veinte días por cada año de servicios, cuando fueran separados de esa forma.

Que al establecer el artículo 4o. de dicha ley que *Los trabajadores de confianza no tendrán derecho a la reinstalación en su empleo*, no los está excluyendo del derecho a la indemnización, pues expresamente dispone que no podrán ser reinstalados, mas no limita su acceso a dicha reparación, lo cual no fue motivo de impugnación en el citado recurso.

Que el artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Federal prevé que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza y que las personas que desempeñen los cargos de confianza disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social, que aun cuando el artículo 5o. de la ley bancaria remite en lo no previsto a la Ley Federal del Trabajo –que sí contempla el pago de salarios caídos para los trabajadores de confianza como consecuencia de un despido injustificado–, no puede considerarse que ésta sea una cuestión "no prevista" en tanto la propia porción de la Carta Magna en mención, que constituye el origen de la ley bancaria, establece de qué beneficios disfrutarán los trabajadores de confianza, dentro de los cuales, no se encuentra el pago de salarios caídos.

Que al tratarse de un trabajador de confianza de una institución de banca de desarrollo, regida por el artículo 123, apartado B, fracción XIII Bis, de la Constitución Política, solamente gozará de las medidas de protección al salario

y de los beneficios de la seguridad social que ésta prevé para todos los trabajadores adscritos a dicho apartado.

Que no se violan los principios de igualdad y no discriminación contenidos en el artículo 1o. de la Carta Magna, atento a que la diferenciación jurídica, en torno a los trabajadores bancarios de confianza en oposición a los de confianza regidos por la Ley Federal del Trabajo, en realidad está prevista en la propia Constitución Federal en su artículo 123, apartado B, fracción XIV, que establece los derechos que tienen los trabajadores al servicio del Estado, apartado donde también se encuentran inmersos los trabajadores bancarios, que el artículo 1o. constitucional, no puede interpretarse de manera aislada respecto de los demás preceptos que integran el propio sistema normativo constitucional, como es su numeral 123, apartado B, fracciones XIII Bis y XIV, por ende, la norma respectiva no puede ser violatoria a su vez de otra disposición del mismo rango.

Que no puede estimarse que la inaplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, devenga violatoria de los principios de progresividad, universalidad, equidad, justicia social y al mínimo vital previstos en la Constitución y (sic) diversas normas convencionales, pues éstos no se transgreden porque de ningún modo se desconoce un derecho anteriormente establecido, ni se suprime la sanción constitucional que impone a los patrones la obligación de indemnizar a los trabajadores separados injustificadamente de la fuente de empleo, sino que sólo regula en forma distinta cómo habrá de determinarse dicha indemnización. Por ello, esos trabajadores pueden legalmente exigir el pago de una indemnización, pero no el pago de salarios caídos cuando la sociedad nacional de crédito correspondiente decida poner fin a la relación de trabajo sin que exista alguna causa de cese prevista (sic) ley secundaria invocada.

Es pertinente mencionar que el juicio de amparo directo que dio origen al recurso de revisión en mención, deriva de un juicio laboral donde la parte demandada fue BANCO NACIONAL DE CRÉDITO RURAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (en liquidación), por lo que como se aprecia de su lectura en el juicio de amparo 632/2015, se resolvió que no le eran aplicables al actor las condiciones generales de trabajo, por lo que al resolver el recurso de revisión la Sala en mención se centró en analizar si la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, les otorga ese derecho, incluso si es procedente que de manera supletoria se aplique a su favor la Ley Federal

del Trabajo, llegando a la conclusión de que no es factible debido a que la propia Carta Magna, que constituye el origen de la ley bancaria, establece de qué beneficios disfrutarán los trabajadores de confianza, dentro de los cuales no se encuentra el pago de salarios caídos.

En la presente contradicción se analizó un supuesto diferente, esto es, si procede el pago de salarios caídos o no a los trabajadores de confianza del sistema bancario, pero propiamente en lo referente a Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo y sus Condiciones Generales de Trabajo (1994-1997) y revisión 2006.

Es por ello que el criterio que se sustenta en la presente resolución no se contrapone con lo determinado por la Sala en mención en el mencionado recurso de revisión 5219/2016.

Amén de que si como en el caso, las Condiciones Generales de Trabajo de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, que se analizaron, obligan a dicha institución al pago de salarios caídos a los trabajadores de confianza desde la fecha del cese hasta que se les pague la indemnización que les corresponda, aun y cuando la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establezca esa prerrogativa a favor de los trabajadores de confianza, es innegable que se les debe reconocer ese derecho.

Efectivamente, si la fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional, no otorgó a los trabajadores de confianza al servicio del Estado el derecho a la estabilidad en el empleo, sino únicamente el derecho a la protección al salario y a los beneficios de la seguridad social. Por ello, si en las citadas Condiciones Generales de Trabajo (sic) Nacional Financiera Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, decidió incorporar en favor de sus trabajadores de confianza, el derecho a recibir el pago de salarios caídos en la hipótesis de que fueran despedidos injustificadamente, debiéndoseles cubrir desde la fecha del cese hasta que se les pague la indemnización, tal proceder es jurídicamente válido, ya que supera las bases mínimas establecidas a nivel constitucional, sin que dicho precepto de la Ley Suprema prohíba que en la legislación ordinaria se superen los derechos que en forma mínima establece la Constitución Federal, al contrario, ha sido un principio del derecho laboral mexicano que los derechos que como mínimo se establecen en la Constitución o

en la ley pueden válidamente ser superados o ampliados por el legislador ordinario (en el caso de los constitucionales) o por los contratos colectivos o condiciones generales de trabajo (en el caso de los legales).

El criterio al que se alude se encuentra contenido en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el *Semanario Judicial de la Federación*, Volumen 66, Primera Parte, página 65, Séptima Época, que a la letra dice:

"TRABAJADORES, PRESTACIONES A LOS. ILIMITACIÓN.—De acuerdo con una interpretación sistemática de la legislación laboral y atendiendo al fin que ésta persigue de ser protectora de la clase trabajadora, debe entenderse que las prestaciones a los trabajadores, que tiendan a mejorar su situación económicamente desventajosa, siempre son ilimitadas y que cualquier convenio o disposición legal que tienda a ampliarlas es correctamente válido; y ello es así, porque las disposiciones de la Carta Magna no imponen ninguna prohibición al legislador ordinario para otorgar otros beneficios a los trabajadores, pues los principios del artículo 123 constitucional son únicamente el mínimo de beneficios que el Estado ha considerado indispensable otorgar a los trabajadores. Así, la fracción XXVII del mismo artículo 123 llega a considerar nulas las estipulaciones que contravengan las bases establecidas por la Constitución en materia de trabajo y aun los que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio de los trabajadores. También la Ley Federal del Trabajo de 18 de agosto de 1931, en su artículo XIII transitorio, dispone: 'Los reglamentos, contratos de trabajo colectivos, así como cualesquiera otros convenios que establezcan derechos, beneficios o prerrogativas en favor de los trabajadores, inferiores a los que concede esta ley, no producirán en lo sucesivo efecto legal, entendiéndose sustituidos por los que establece esta misma ley'. La vigente Ley Federal del Trabajo expedida el 1o. de abril de 1970 también sigue el mismo criterio proteccionista del obrero, garantizando los derechos mínimos que se le reconocen en dicha ley. El artículo 3o. transitorio contiene una disposición semejante a la del artículo 13 transitorio de la Ley Federal del Trabajo de 1931 ya transcrito."

Sin soslayar que a partir de la reforma al artículo 3o. de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la

Federación del diez de enero de dos mil catorce, ya no les son aplicables las citadas condiciones generales de trabajo a los trabajadores de confianza.

En sintonía con lo anterior, se llega a la determinación de que a los trabajadores de confianza de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, que antes de la citada reforma al artículo 3o. de Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, les eran aplicables las Condiciones Condiciones (sic) Generales de Trabajo (1994-1997) y Condiciones Condiciones (sic) Generales de Trabajo Revisión 2006 de dicha institución, en caso de cese injustificado, sí les corresponde el pago de salarios caídos, desde ese momento hasta que les sea cubierta la indemnización.

SEXTO.—En atención a lo considerado, este Pleno de Circuito concluye, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que aquí se sustenta, el cual queda redactado con el rubro y texto que a continuación se establece:

TRABAJADORES DE CONFIANZA DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO. HIPÓTESIS EN LA QUE TIENEN DERECHO AL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios sobre si en caso de cese injustificado, los trabajadores de confianza, de dicha institución financiera, tienen o no derecho a, además de la indemnización, al pago de salarios caídos.

Criterio jurídico: Los trabajadores de confianza de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo sí tienen derecho al pago de salarios caídos en algunas hipótesis.

Justificación: En las condiciones generales de trabajo de dicha institución (1994-1997) y (2006), se deduce que los trabajadores de confianza, tendrán derecho al pago de los salarios caídos, toda vez que los artículos 216 y 217 prevén el derecho de éstos a recibir la indemnización que les corresponda en caso de cese injustificado, por su parte el 218 dispone que tendrán derecho al pago de las indemnizaciones mencionadas en el artículo 220, por tanto si este último menciona

en qué consistirán las indemnizaciones y en su fracción III, obliga a la institución a que cubra al trabajador el importe de tres meses de salario, independientemente del pago de los salarios caídos desde la fecha del cese hasta que se le pague la indemnización correspondiente, es inconcuso que ese derecho es aplicable también a los trabajadores de confianza, lo anterior siempre y cuando se trate de trabajadores de confianza que les sean aplicables las condiciones generales de trabajo descritas, puesto que a partir del uno de enero de dos mil catorce, se adicionó un párrafo cuarto al artículo 3o. de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que a los trabajadores de confianza de las sociedades nacionales de crédito ya no les serán aplicables las condiciones generales de trabajo.

En términos de lo dispuesto por el artículo 219 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que se sustenta en esta sentencia, deberá identificarse con el número que por el orden progresivo le corresponda dentro de las emitidas por este Pleno de Circuito en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—**No existe contradicción de tesis** entre los criterios sustentados en el juicio de amparo directo DT. 601/2019, del **Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito**, y lo considerado por el **Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito**, al resolver el juicio de amparo DT. 1123/2013.

SEGUNDO.—**Existe contradicción de tesis** entre los criterios sustentados en el juicio de amparo directo DT. 601/2019, del **Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito**, contra lo considerado por el **Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito**, al resolver el juicio de amparo DT. 837/2018.

TERCERO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio emitido por este Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en términos de la parte final del último considerando de esta resolución.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vía correo electrónico, a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; remítanse la jurisprudencia y

la parte considerativa de este fallo, vía correo electrónico, a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis (sic) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su publicación en el *Semanario Judicial de la Federación* y en su *Gaceta*, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 219 de la Ley de Amparo en vigor y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito: respecto de la inexistencia de la contradicción de criterios, primer resolutivo, por mayoría de dieciséis votos a favor y uno en contra, del Magistrado Gilberto Romero Guzmán; en relación con la existencia de la contradicción de tesis, segundo resolutivo, por unanimidad de diecisiete votos; y respecto con el (sic) tema de fondo, tercer resolutivo, por mayoría de dieciséis votos a favor de los Magistrados José Manuel Hernández Saldaña, Rosa María Galván Zárate, Elisa Jiménez Aguilar, María Eugenia Olascuaga García, Antonio Rebollo Torres, Raúl Valerio Ramírez, Joel Darío Ojeda Romo, Edna Lorena Hernández Granados, Miguel Ángel Ramos Pérez, Gilberto Romero Guzmán, Héctor Pérez Pérez, Salvador Hernández Hernández, Miguel Bonilla López, Juan Manuel Alcántara Moreno, Juan Manuel Vega Tapia y Andrés Sánchez Bernal. Disidente: José Luis Caballero Rodríguez. Ponente: Raúl Valerio Ramírez. Secretaria: Gladys Eliza González León.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como de los numerales 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, se hace constar que en esta versión pública de la resolución de la contradicción de tesis 29/2019, del índice del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: La tesis de jurisprudencia PC.I.L. J/68 L (10a.) que prevaleció al resolver esta contradicción de tesis, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas y en la página 1528 de esta *Gaceta.*

Esta ejecutoria se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

Voto particular que formula el Magistrado Gilberto Romero Guzmán, en relación con el primer resolutivo, en la contradicción de tesis 29/2019, del índice del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

En la resolución se dice que existe contradicción de tesis entre los Tribunales Colegiados Séptimo y Noveno que resolvieron asuntos en los que intervinieron trabajadores de Nacional Financiera, pero se excluyó de la contradicción al Tercer Tribunal Colegiado que resolvió un amparo en el que participó un trabajador del Banco Nacional de Comercio Exterior.

Respetuosamente considero que sí pudo mantenerse dentro de la contradicción al Tercer Tribunal Colegiado, porque a mi juicio existe un mismo punto de derecho debatido.

Efectivamente, la cuestión a resolver se hizo consistir en si resultaba procedente o no el pago de salarios caídos a un trabajador despedido injustificadamente. Pero no a cualquier trabajador, sino a un trabajador de una entidad pública federal que formó parte del sistema nacional bancario.

Por eso, aun cuando efectivamente las cuestiones fáticas no son exactamente iguales, porque un trabajador era de Nacional Financiera y el otro era del Banco Nacional de Comercio Exterior, para mí ello podría ser irrelevante.

Ahora, no paso por alto la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LOS CRITERIOS JURÍDICOS SE BASAN EN DISPOSICIONES LEGALES DE CONTENIDO DIFERENTE.";[1] sin embargo, considero que en el caso a estudio las Condiciones Generales de Trabajo de Nacional Financiera y las del Banco Nacional de Comercio Exterior, en cuanto al tema analizado, coinciden en contenido, como puede advertirse del artículo 5o. de las Condiciones Generales de Trabajo 2006 del Banco Nacional de Comercio Exterior.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como de los numerales 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de

[1] Tesis 2a./J. 43/98, publicada en la página 93, Tomo VIII, julio de 1998, Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y Gaceta*.

Datos Personales y Archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, se hace constar que en esta versión pública de la resolución de la contradicción de tesis 29/2019, del índice del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Este voto se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Voto particular que formula el Magistrado José Luis Caballero Rodríguez, en relación con el tercer resolutivo, en la contradicción de tesis 29/2019, del índice del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

Los razonamientos aprobados por la mayoría en el considerando quinto generan que me aparte de las conclusiones a que arribó en ese apartado el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, debido a lo siguiente:

En el considerando de mérito se determinó que en el artículo 216 de las Condiciones Generales de Trabajo de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, 1994-1997, no se menciona los trabajadores de confianza, sino en el artículo 217, señalando que en caso de cese injustificado aquéllos tienen derecho a la indemnización que corresponda.

Asimismo, se destacó que en las propias Condiciones Generales de Trabajo, Revisión 2006, el artículo 216 incluye lo que anteriormente preveía el numeral 217, es decir, que en caso de cese injustificado el trabajador de confianza tendrá derecho a la indemnización que corresponda.

Así pues, se concluyó que en ambos casos, no obstante la distinción entre trabajadores de base y de confianza, éstos sí tienen derecho al pago de salarios caídos, puesto que el diverso artículo 220 dispone en qué consistirán las indemnizaciones y precisa que éstas se cubrirán *independientemente del pago de los salarios caídos*, por tanto, se resolvió que esta porción de las condiciones generales de trabajo debe entenderes (sic) aplicable a ambas clases de trabajadores.

Lo anterior se sustentó en una interpretación estricta de las condiciones generales de trabajo de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, acorde a la tesis 2a. CXLII/2000, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. LAS CLÁUSULAS QUE CONTIENEN PRESTACIONES EN FAVOR DE LOS



TRABAJADORES, QUE ACCEDAN A LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SON INTERPRETACIÓN ESTRICTA EN TAL ASPECTO."

En este contexto, es que disiento de la consideración a la que arribó la mayoría del Pleno de Circuito en Materia de Trabajo del Primer Circuito, pues la interpretación efectuada no estimo sea de manera estricta, tal como lo determina la tesis de mérito, sino extensiva, toda vez que se otorga un beneficio –salarios caídos– a los trabajadores de confianza, contenido en un artículo diverso al en que se hace una distinción entre éstos y los operarios de base, y en el cual sólo se establece de manera expresa que aquéllos sólo tienen derecho a la indemnización, mas no que además se les deban cubrir salarios vencidos.

Es más, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de diez de mayo de dos mil diecisiete, al resolver el amparo directo en revisión 5219/2016, ya se pronunció en el sentido (sic) que los trabajadores de confianza bancarios al servicio del Estado carecen de derecho para cobrar salarios caídos cuando la sociedad nacional de crédito correspondiente decida poner fin a la relación de trabajo.

Efectivamente, dicho criterio, aun cuando no cobra aplicación obligatoria en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, por el carácter orientador que la propia Suprema Corte de Justicia les ha conferido a dichos criterios aislados, y atento al principio de seguridad jurídica, es dable que los órganos jerárquicamente inferiores lo atiendan en sus resoluciones.[2]

---

[2] "TESIS AISLADAS. LAS EMITIDAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN CARÁCTER ORIENTADOR, NO GENERAN DERECHOS NI SON SUSCEPTIBLES DEL EJERCICIO DE IRRETROACTIVIDAD. Del análisis integral y sistemático de los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 215, 217, 218, primer párrafo, 222 al 226 y 228 de la Ley de Amparo, se desprende que de manera expresa se concede carácter obligatorio a la jurisprudencia, particularidad que no comparte con las tesis aisladas que se generan en los fallos de los órganos terminales del Poder Judicial de la Federación. Atento a lo anterior, los criterios que aún no integran jurisprudencia no pueden invocarse como un derecho adquirido por las partes y, por tanto, sujeto al principio de no aplicación retroactiva en su perjuicio. Congruente con ello, a falta de jurisprudencia definida sobre un tema determinado y **cuando exista un criterio aislado o precedente aplicable para la solución de un caso concreto, debido al carácter orientador que esta Superioridad les ha conferido y el principio de seguridad jurídica, es dable** mas no obligatorio **que los órganos jerárquicamente inferiores lo atiendan en sus resoluciones**, mediante la cita de las consideraciones que las soportan y, en su caso, de la tesis correspondiente y de existir más de uno, puede el juzgador utilizar el que según su albedrío resulte correcto como parte del ejercicio común de su función jurisdiccional." [Época: Décima Época. registro: 2013380. Instancia: Segunda Sala. *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 38, Tomo I, enero de 2017, tesis 2a./J. 195/2016 (10a.), página 778].

Pues bien, la ejecutoria respectiva de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal de la Nación, en lo conducente, establece lo siguiente:

"En razón de que la distinción entre trabajadores de base y de confianza parte del propio Pacto Federal y no de la ley reglamentaria, resulta evidente que no se violan los principios de igualdad y no discriminación en virtud de que el reconocimiento de la distinción se da en la propia Constitución y la norma respectiva no puede ser violatoria a su vez de otra disposición del mismo rango, lo que es jurídicamente inaceptable, debiendo realizarse una interpretación armónica y sistemática de ambas para conocer su verdadero sentido.

"Cabe destacar que esta Segunda Sala se ha pronunciado en torno a la exclusión de los trabajadores de confianza de la aplicación de los derechos de aquellos que son de base, como se observa en la tesis 2a. LXV/2009, que a continuación se reproduce cita por identidad jurídica sustancial con la problemática planteada en la presente instancia:

"'TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE EXCLUYE A LOS DE CONFIANZA DE LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS QUE TIENEN LOS DE BASE, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.' (cita datos de localización y texto)

"De igual forma, existe la siguiente jurisprudencia:

"'TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. NO ESTAN PROTEGIDOS POR EL APARTADO «B» DEL ARTICULO 123 EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no incurre en violación de garantías si absuelve del pago de indemnización constitucional y salarios caídos reclamados por un trabajador de confianza que alega un despido injustificado, si en autos se acredita tal carácter, porque los trabajadores de confianza no están protegidos por el artículo 123 de la Constitución, apartado «B», sino en lo relativo a la percepción de sus salarios y las prestaciones del régimen de seguridad social que les corresponde, pero no en lo referente a la estabilidad en el empleo.' (cita datos de localización y texto)

"Atendiendo al principio pro persona debe considerarse que la circunstancia de que la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con la lectura que ha dado esta Suprema Corte en cuanto a que los trabajadores de confianza tienen derecho al pago de salarios caídos cuando sean despedidos injustificada-



mente, **no implica que los trabajadores bancarios de confianza tengan a su favor la misma prerrogativa** pues la distinción parte de la propia Constitución, de ahí que no pueda estimarse violatoria del citado principio (énfasis añadido).

"Tampoco puede estimarse que la inaplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo devenga violatoria de los principios de progresividad, universalidad, equidad, justicia social y al mínimo vital previstos en la Constitución y diversas normas convencionales, pues éstos no se transgreden porque de ningún modo se desconoce un derecho anteriormente establecido, ni se suprime la sanción constitucional que impone a los patrones la obligación de indemnizar a los trabajadores separados injustificadamente de la fuente de empleo, sino que sólo regula en forma distinta cómo habrá de determinarse dicha indemnización.

"Por ello, **esos trabajadores pueden legalmente exigir el pago de una indemnización, pero no el pago de salarios caídos cuando la sociedad nacional de crédito correspondiente decida poner fin a la relación de trabajo** sin que exista alguna causa de cese prevista ley secundaria invocada. (énfasis añadido)

"Consecuentemente, la determinación del Tribunal Colegiado responsable en el sentido de que no le corresponde el pago de los salarios caídos que reclamó el actor con base en el artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra apegada a derecho y debe prevalecer."

Por consiguiente, estimo que este Pleno de Circuito en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la presente contradicción de tesis 29/2019, debió atender el criterio orientador que representa la ejecutoria emitida en el amparo directo en revisión 2519/2016 del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por tanto, concluir que los trabajadores de confianza de las sociedades nacionales de crédito carecen de derecho para cobrar salarios caídos cuando la institución bancaria correspondiente decida poner fin a la relación de trabajo.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como de los numerales 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en

Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, se hace constar que en esta versión pública de la resolución de la contradicción de tesis 29/2019, del índice del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Este voto se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TRABAJADORES DE CONFIANZA DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (NAFIN). HIPÓTESIS EN LA QUE TIENEN DERECHO AL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios sobre si en caso de cese injustificado, los trabajadores de confianza de dicha institución financiera, tienen o no derecho a, además de la indemnización, al pago de salarios caídos.

Criterio jurídico: Los trabajadores de confianza de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Nafin), sí tienen derecho al pago de salarios caídos en algunas hipótesis.

Justificación: Las Condiciones Generales de Trabajo de dicha institución (1994-1997 y 2006), señalan que los trabajadores de confianza tendrán derecho al pago de los salarios caídos, toda vez que sus artículos 216 y 217 prevén el derecho de éstos a recibir la indemnización que les corresponda en caso de cese injustificado; por su parte el artículo 218 dispone que tendrán derecho al pago de las indemnizaciones mencionadas en el artículo 220; por tanto, si este último en su fracción III, obliga a la institución a que cubra al trabajador el importe de tres meses de salario, independientemente del pago de los salarios caídos desde la fecha del cese hasta que se le pague la indemnización correspondiente, es inconcuso que ese derecho es aplicable también a los trabajadores de confianza, siempre y cuando se trate de aquellos a los que les sean aplicables las Condiciones Generales de Trabajo descritas,

puesto que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014, se adicionó un párrafo cuarto al artículo 3o. de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que a los trabajadores de confianza de las sociedades nacionales de crédito ya no les serán aplicables las Condiciones Generales de Trabajo.

PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
PC.I.L. J/68 L (10a.)

Contradicción de tesis 29/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo, Tercero y Noveno, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 19 de octubre de 2020. Mayoría de dieciséis votos a favor de los Magistrados José Manuel Hernández Saldaña, Rosa María Galván Zárate, Elisa Jiménez Aguilar, María Eugenia Olascuaga García, Antonio Rebollo Torres, Raúl Valerio Ramírez, Joel Darío Ojeda Romo, Edna Lorena Hernández Granados, Miguel Ángel Ramos Pérez, Gilberto Romero Guzmán, Héctor Pérez Pérez, Salvador Hernández Hernández, Miguel Bonilla López, Juan Manuel Alcántara Moreno, Juan Manuel Vega Tapia y Andrés Sánchez Bernal. Disidente: José Luis Caballero Rodríguez. Ponente: Raúl Valerio Ramírez. Secretaria: Gladys Eliza González León.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 601/2019, y el diverso sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 837/2018.

Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción de tesis 29/2019, resuelta por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 7 de diciembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS CELEBRADAS EN LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES. PARA LA VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE LAS CONTIENEN, NO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE SE HAGA CONSTAR QUE "ES COPIA FIEL Y EXACTA" DEL REGISTRO ORIGINAL.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, EN AUXILIO DEL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE QUINCE VOTOS DE LA MAGISTRADA ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO Y LOS MAGISTRADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS, ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO, VÍCTOR FRANCISCO MOTA CIENFUEGOS, WALTER ARELLANO HOBELSBERGER, ISMAEL HERNÁNDEZ FLORES, FERNANDO ALBERTO CASASOLA MENDOZA, ABRAHAM SERGIO MARCOS VALDÉS, GONZALO HERNÁNDEZ CERVANTES, VÍCTOR HUGO DÍAZ ARELLANO, FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ, JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN, ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ Y DANIEL HORACIO ESCUDERO CONTRERAS. PONENTE: ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. SECRETARIA: MARIANA GUTIÉRREZ OLALDE.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—**Competencia.**

Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior, porque se trata de una posible contradicción de criterios en materia civil, suscitada entre un Tribunal Colegiado perteneciente a este Circuito (Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito) y un Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar, el cual se considera que pertenece al Circuito del Tribunal Colegiado Auxiliado (en este caso, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito), ya que al prestar ayuda a éste, asume su jurisdicción.

De tal manera, debe entenderse que los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo Circuito y a una misma especialidad y, en consecuencia, el competente para conocer de la contradicción de tesis que sustenten es este Pleno de Circuito.

En la especie, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida con motivo de la contradicción de tesis 269/2014, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 13 de febrero de 2015 a las 9:00 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, página 1656, registro digital: 2008428, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los Tribunales Auxiliares apoyan a órganos de distintos Circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho Circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen

Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo Circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el Circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un Circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción."

SEGUNDO.—**Legitimación.**

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en tanto que se formuló por el Magistrado Víctor Francisco Mota Cienfuegos, presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien se encuentra facultado para tal efecto, en términos de lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.—**Existencia de contradicción.**

La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de tesis tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los Jueces y justiciables. Dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas.

El Tribunal Pleno ha reconocido que para que exista una contradicción de tesis basta con identificar, en principio, una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.

Sirven de sustento a lo anterior los criterios del Tribunal Pleno de rubros siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."[1]

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."[2]

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA."[3]

Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación –que no en los resultados– adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces, como lo ha sostenido el Pleno[4] de la Suprema Corte, es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1. Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa ejerzan su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;

---

[1] Tesis jurisprudencial P./J. 72/2010, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, registro digital: 164120.
[2] Tesis aislada P. XLVII/2009, visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, página 67, registro digital: 166996.
[3] Tesis jurisprudencial P./J. 3/2010 del Tribunal Pleno, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXI, febrero de 2010, página 6, registro digital: 165306.
[4] *Cfr*. Contradicción de tesis 238/2015, fallada el 7 de enero de 2016, por unanimidad de once votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández en contra de las consideraciones, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidente Aguilar Morales.

2. Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y

3. Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Es decir, existe una contradicción de tesis cuando dos órganos jurisdiccionales: (i) hayan realizado ejercicios interpretativos; (ii) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias; y (iii) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.

Por otro lado, no es obstáculo para que este Pleno de Circuito se ocupe de la denuncia sobre el presente asunto, el que ninguno de los criterios contendientes constituyó jurisprudencia, pues para determinar la existencia de una contradicción de tesis basta que los órganos jurisdiccionales adopten criterios distintos sobre un mismo punto de derecho.

Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/2001 del Pleno del Alto Tribunal, la cual continúa en vigor en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, al no oponerse al contenido de la ley de la materia, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.",[5] así como la tesis aislada P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."[6]

[5] Visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 77, registro: 189998.
[6] Visible en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Número 83, noviembre de 1994, página 35, registro: 205420.



En atención a lo anterior, a continuación se procederá a analizar si en el caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de tesis.

1. Primer requisito: Realización de un ejercicio interpretativo.

Este Pleno de Circuito considera que se acredita el primer requisito, toda vez que dos Tribunales Colegiados de Circuito ejercieron su arbitrio judicial al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron presentadas.

Esto es así, pues ambos órganos colegiados realizaron ejercicios interpretativos en las partes consideradas de las sentencias contendientes, como se advierte a continuación:

A. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al emitir resolución en el amparo directo DC. 199/2019.

Este asunto tuvo su origen en los siguientes antecedentes:

a) En el juicio oral mercantil que quedó radicado con el número 963/2017, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Mercantil Especializado en Juicios de Cuantía Menor, en la Ciudad de México; **********, ********** y **********, demandaron de **********, la nulidad absoluta de diversos cargos realizados a la cuenta bancaria de los coactores, consistentes en transferencias electrónicas.

b) El Juez del conocimiento dictó sentencia definitiva el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en la que declaró la nulidad absoluta de las transferencias electrónicas impugnadas y, como consecuencia, condenó a la institución bancaria demandada a restituir a los coactores la cantidad que amparan los cargos combatidos y a pagar los intereses legales reclamados.

c) En contra del fallo mencionado, la enjuiciada promovió demanda de amparo directo, la cual se registró con el número 8/2019, ante el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien a su vez lo remitió

para efectos del dictado de la resolución correspondiente, al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, el cual se radicó con el número 199/2019, de su índice.

d) El órgano jurisdiccional en comento dictó ejecutoria el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en la que determinó que debía suplirse la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, al advertir que se cometió en contra de la quejosa una violación evidente de la ley que la dejó sin defensa, en tanto que los discos digitales enviados por la autoridad responsable, no tienen la certificación del secretario de Acuerdos, por lo que concedió el amparo solicitado, para el efecto de que tales discos se certificaran debidamente.

Consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla.

El citado órgano constitucional determinó que los numerales 1390 Bis 28 y 1390 Bis 30 del Código de Comercio, contemplan la obligación del secretario del juzgado de certificar el medio en donde se encuentre registrada la audiencia dentro del procedimiento oral mercantil, identificar dicho medio con el número de expediente y tomar las medidas necesarias para evitar que pueda alterarse.

Por lo cual, el disco relativo debe contener la certificación que identifique el expediente, la audiencia y la firma del funcionario facultado que dé fe pública de que su **contenido es copia exacta de su original, pues sólo así existe certeza jurídica de que no haya sido manipulado o alterado**, al tratarse de un medio electrónico que es susceptible a ello.

De esa manera, distinguió que los elementos mínimos que deben contener el disco en que se registra una audiencia, dentro del procedimiento oral mercantil, son:

a) El número de expediente del juicio en que se actúa, así como el juzgado actuante.

b) El tipo de audiencia y fecha en que se celebró.



c) La certificación del secretario con la firma y rúbrica correspondiente (preferentemente con su nombre) que haga constar que el disco contiene la audiencia indicada y que es **copia fiel y exacta del respaldo que obra en el resguardo del juzgado**.

Abundó el órgano colegiado en que al no encontrarse debidamente certificados los discos digitales, ello dejó en estado de indefensión a la parte quejosa, porque se carece de certeza jurídica sobre su contenido y, en consecuencia, no se puede verificar si las consideraciones plasmadas en las constancias impresas en las que obra sólo un extracto de las resoluciones verbales, se ajustan a lo que expusieron el Juez como las partes al momento de su emisión.

Señaló que tampoco se puede dilucidar si en el caso las pruebas ofrecidas fueron debidamente desahogadas y valoradas, ya que el desarrollo de estas últimas obra precisamente en los discos digitales, de los cuales no se tiene certeza de su contenido; aunado a que no existe certificación de la responsable en cuanto a si del contenido de los discos remitidos obra la reproducción fiel y exacta de la audiencia de juicio.

Así, concluyó que si los discos digitales no contienen la certificación del secretario de Acuerdos, ello conlleva a que no pueda considerarse jurídicamente válido lo previsto en dichos discos, pues no deben surtir efecto alguno, al carecer de eficacia jurídica, en tanto que se trata de un caso análogo a la falta de firma del secretario de Acuerdos de una sentencia o laudo.

Apoyó sus razonamientos en los criterios que a continuación se invocan:

Tesis XXVII.3o.70 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 62, Tomo IV, enero de 2019, página 2330 y *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 25 de enero de 2019 a las 10:26 horas, registro digital: 2019073, de título, subtítulo y texto siguientes:

"CERTIFICACIÓN DE LOS DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD'S) QUE CONTIENEN LAS VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. PARA SU VALIDEZ COMO COPIA AUTÉNTICA,

DEBE CUMPLIR CON REQUISITOS FORMALES, COMO INCLUIR LA FIRMA O RÚBRICA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LOS EXPIDE, EL EXPEDIENTE DE DONDE DERIVAN, ASÍ COMO LA AUDIENCIA Y FECHA QUE SE CONTIENE EN SU REGISTRO. El nuevo sistema de justicia penal se rige por el principio de oralidad, cuya finalidad presupone abandonar el sistema de la formación de un expediente físico, para suplantarla por una metodología de audiencias videograbadas en las que se hacen las peticiones y se exponen las consideraciones para dirimir las controversias de las partes; por ello, es de suma importancia que la información que se genera, documenta y resguarda en los discos versátiles digitales se encuentre certificada, porque constituyen documentos públicos que hacen las veces de las constancias escritas que regían durante el sistema procesal mixto, de lo contrario, se desconocería si se trata de una copia auténtica. Así, aunque el Código Nacional de Procedimientos Penales no establezca detalladamente los requisitos formales que debe contener una certificación cuando se trate de constancias consistentes en discos versátiles digitales (DVD´S), de la interpretación sistemática de los artículos 44, 61, 67 y 71 del código citado, en relación con los diversos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles (de aplicación supletoria a la Ley de Amparo), se advierte que la certificación que se suscribe en esos discos debe contener: 1) la firma o rúbrica del servidor público correspondiente que los expide; 2) el expediente de donde derivan; y, 3) la audiencia y fecha que se contiene en su registro; requisitos que constituyen signos gráficos que, conforme a la práctica de la litigación, otorgan certeza jurídica a las partes intervinientes, ya que al conocerse el nombre de la autoridad que la emite y otros datos que den a conocer su cargo, existe la posibilidad de objetar las facultades que se atribuye en ese tipo de actos o la falsedad de los datos que en él se consignan; aunado a que si la copia auténtica establece la presunción de la existencia de los registros de donde provienen, entonces, en la certificación deben anotarse las características que identifiquen el expediente, la carpeta de investigación de donde emane o donde obre su registro, como son el número, la audiencia u otros datos que lo particularicen, de lo que se concluye que la certificación que carezca de esos requisitos mínimos no es suficiente ni hace fe de los hechos asentados en el documento. En ese sentido, si la autoridad responsable emite una resolución basándose en los discos versátiles digitales sin certificación, ello constituye una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento para el efecto de que se alleguen de esos documentos debidamente certificados y, en su momento, vuelva a emitir la resolución correspondiente, pues sólo así existe certeza de su fiabilidad como copia auténtica."

Tesis XXVII.3o.72 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 62, Tomo IV, enero de 2019, página 2451 y *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 25 de enero de 2019 a las 10:26 horas, registro digital: 2019081, que establece:

"DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD´S) QUE CONTIENEN LAS VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. ANTE SU FALTA DE CERTIFICACIÓN, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN DEBE ALLEGARSE DE LOS DOCUMENTOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FORMALES QUE LES DAN LA LEGITIMACIÓN DE SER COPIA AUTÉNTICA DE SU ORIGINAL. De la interpretación sistemática y conjunta de los artículos 461, 468, 471, 474, 475 y 480 a 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el tribunal de alzada no debe limitar el examen de la resolución recurrida a verificar si se aplicó inexactamente la ley, sino estudiar, incluso oficiosamente, si hubo una violación grave al debido proceso que haya afectado los derechos fundamentales de alguna de las partes (en el caso del imputado) y que hubiere trascendido al sentido de la sentencia. Así, el tribunal, al conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, debe tener a la vista las constancias relativas al juicio de origen, así como los discos versátiles digitales (DVD´S) que contienen las videograbaciones de las audiencias obtenidas durante el procedimiento, debidamente certificados, en los que se establezcan la firma o rúbrica del servidor público correspondiente que los expide, el expediente de donde derivan, así como la audiencia y su fecha que se contiene en su registro, pues de no contar con esos datos, debe allegarse de los documentos que cumplan con los requisitos formales que les dan la legitimación de ser copia auténtica de su original, de acuerdo con el artículo 71 del código mencionado porque, de no hacerlo, carece de seguridad y certeza jurídica para dotar de grado de convicción al juzgador con miras a resolver y dar sustento a la solución jurisdiccional sometida a su conocimiento; de manera que si las actuaciones que se valoran carecen de certificación pública expedida por los funcionarios legalmente autorizados, y las diligencias carecen de los requisitos que les dan certeza, ello debe ser impedimento para que un órgano jurisdiccional emita un pronunciamiento en torno a la controversia sometida a su consideración."

B. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 299/2019.

Este asunto tuvo su origen en los siguientes antecedentes:

a) En el juicio oral mercantil que se radicó con el número 823/2018, ante el Juez Noveno de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México; ********** y **********, demandaron de **********, la nulidad absoluta de siete cargos realizados a dos cuentas bancarias de los coactores, consistentes en transferencias electrónicas.

b) El Juez primigenio resolvió el juicio el catorce de marzo de dos mil diecinueve, declarando la nulidad absoluta de los cargos impugnados, por lo que condenó a la institución crediticia demandada a restituir a los coactores la cantidad que amparan los cargos combatidos y, por otra parte, la absolvió de las demás prestaciones reclamadas.

c) El banco demandado promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia definitiva mencionada, el cual se radicó con el número de expediente 299/2019, ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

d) Dicho órgano dictó la ejecutoria respectiva el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, en la que previo a examinar los conceptos de violación, realizó la valoración de las constancias remitidas por la autoridad responsable, incluyendo tres discos versátiles digitales (DVD), estableciendo que éstos satisfacen los requisitos para la certificación de los medios digitales, posteriormente examinó el fondo del asunto y negó la protección constitucional solicitada.

Consideraciones del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

En cuanto al tema que interesa a la presente contradicción, el Tribunal Colegiado citado determinó que los artículos 1390 Bis 26 y 1390 Bis 28 del Código de Comercio exigen al secretario hacer constar oralmente la fecha, hora y lugar de realización de cada audiencia, el nombre de los servidores públicos del juzgado y demás personas que intervendrán, y en los medios de registro de esas

actuaciones, únicamente a identificar el número de expediente y tomar las medidas necesarias para evitar su alteración, las cuales son de tipo tecnológico y no jurídico.

En este tenor, ese órgano jurisdiccional concluyó que es suficiente para asegurar la fidelidad e integridad de la información, así como su conservación, reproducción de su contenido y acceso que el secretario asiente:

1. El número de expediente del juicio y el juzgado en que se actúa;

2. El tipo de audiencia y la fecha en la que se celebró;

3. El nombre y firma del secretario, bastando **la simple mención de que certifica que el medio digital contiene la audiencia** señalada previamente.

Precisó que es de esa manera, porque ni la ley mercantil ni la ley procesal civil federal supletoria exigen más requisitos que los antes mencionados para la certificación de los medios digitales, donde queden registradas las audiencias de ley, asimilados a documentos, sino únicamente que el secretario tome las medidas pertinentes para su conservación y evitar su modificación.

Así, dejó establecido que la **leyenda de que la copia es fiel y exacta del respaldo que obra en el juzgado, no guarda ninguna relación con la protección de su contenido**, puesto que esa mención no impide la alteración de los discos por otros medios tecnológicos, si eso llegara a ocurrir.

Ese órgano colegiado invocó como sustento la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXIII, Tomo 1, agosto de 2013, página 703, registro digital: 2004362, del siguiente contenido literal:

"VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU

INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el Juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga."

2. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos.

Este Pleno de Circuito considera que el segundo requisito también queda cumplido en el presente caso, puesto que ambos Tribunales Colegiados de

Circuito contendientes sostuvieron un criterio contradictorio en un mismo punto jurídico, es decir, en relación con los términos de la certificación a que se refiere el artículo 1390 Bis 28 del Código de Comercio, que debe constar en los medios donde se registran las audiencias del juicio oral, como lo son los discos versátiles digitales (DVD).

En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, concluyó que en términos del precepto legal mencionado, los elementos mínimos que deben contener los discos digitales en que se registra una audiencia dentro del juicio oral mercantil, son:

a) El número de expediente del juicio en que se actúa, así como el juzgado actuante.

b) El tipo de audiencia y fecha en que se celebró.

c) La certificación del secretario con la firma y rúbrica correspondiente (preferentemente con su nombre) que haga constar que el disco contiene la audiencia indicada y que es **copia fiel y exacta de su original**.

Consideración que apoyó en que, sólo con esta última mención existe certeza jurídica de que el respectivo disco no haya sido manipulado o alterado, al tratarse de un medio electrónico que es susceptible a ello, concluyendo que si los discos mencionados no contemplan la certificación del secretario de Acuerdos, en los términos establecidos, su contenido no puede surtir efecto alguno al carecer de eficacia jurídica.

En cambio, el Tercer Tribunal Colegiado de la materia y Circuito mencionados resolvió que si bien del citado dispositivo legal derivan los requisitos señalados por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, como incisos a) y b), no es así tratándose de la exigencia contemplada en el inciso c), concerniente a que el secretario haga constar que el disco es **copia fiel y exacta del registro original**, sino que basta la simple mención de que certifica que el medio digital contiene la audiencia que se indique.

Al estimar que la leyenda de que: la **copia es fiel y exacta del respaldo que obra en el juzgado**, no guarda ninguna relación con la protección de su contenido, puesto que esa mención no impide la alteración de los discos por otros medios tecnológicos, si eso llegara a ocurrir.

En este sentido, se considera que se acredita el segundo requisito para la existencia de la contradicción de tesis, pues los tribunales contendientes sostuvieron criterios opuestos en relación a un mismo punto jurídico y, por ende, se hace necesario que este Tribunal Pleno defina la cuestión en aras de garantizar la seguridad jurídica.

3. Tercer requisito: Elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción.

Es posible concluir que los criterios de los tribunales contendientes reflejan una discrepancia en el sentido de establecer si en la certificación que debe constar en los medios de almacenamiento digital, en que se registran las audiencias en los juicios orales mercantiles, es un requisito indispensable asentar que: **es una copia fiel y exacta del registro original que obre en el juzgado** o si basta la simple mención de que certifica que el medio digital contiene la audiencia que se indique, para que pueda conferírseles validez.

En virtud de lo anterior, la pregunta a responder para solucionar la presente contradicción es la siguiente: ¿Es un requisito indispensable de la certificación a que se refiere el artículo 1390 Bis 28 del Código de Comercio, que se haga constar en los medios digitales o discos ópticos en que se registran las audiencias orales, que **es una copia fiel y exacta del registro original** o basta la simple mención de que se certifica que contiene esa audiencia?

CUARTO.—**Estudio de la contradicción.**

Para dilucidar sobre la materia de la presente contradicción de tesis, se estima conveniente invocar el contenido de los numerales del Código de Comercio que regulan las audiencias en los juicios orales, así como los medios en que dichas diligencias se registren.



"Artículo 1390 Bis 23. Las audiencias serán presididas por el Juez. Se desarrollarán oralmente en lo relativo a toda intervención de quienes participen en ella. Serán públicas, siguiendo en lo que les sean aplicables las reglas del artículo 1080 de este Código y las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. ..."

"Artículo 1390 Bis 26. Para producir fe, las audiencias se registrarán por medios electrónicos, o cualquier otro idóneo a juicio del Juez, que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información, la conservación y reproducción de su contenido y el acceso a los mismos a quienes, de acuerdo a la ley, tuvieren derecho a ella.

"Al inicio de las audiencias, el secretario del juzgado hará constar oralmente en el registro a que se hace referencia en el párrafo anterior la fecha, hora y lugar de realización, el nombre de los servidores públicos del juzgado, y demás personas que intervendrán. ..."

"Artículo 1390 Bis 27. Al terminar las audiencias, se levantará acta que deberá contener, cuando menos:

"I. El lugar, la fecha y el expediente al que corresponde;

"II. El nombre de quienes intervienen y la constancia de la inasistencia de los que debieron o pudieron estar presentes, indicándose la causa de la ausencia si se conoce;

"III. Una relación sucinta del desarrollo de la audiencia; y,

"IV. La firma del Juez y secretario."

"Artículo 1390 Bis 28. El **secretario del juzgado deberá certificar el medio en donde se encuentre registrada la audiencia** respectiva, identificar dicho medio con el número de expediente y tomar las medidas necesarias para evitar que pueda alterarse."

"Artículo 1390 Bis 29. Se podrá solicitar copia simple o certificada de las actas o copia en medio electrónico de los registros que obren en el procedimiento, la que deberá ser certificada en los términos del artículo anterior a costa del litigante y previo el pago correspondiente. ..."

"Artículo 1390 Bis 30. La conservación de los registros estará a cargo del juzgado que los haya generado, los que deberán contar con el respaldo necesario, que se certificará en los términos del artículo 1390 Bis 28. Cuando por cualquier causa se dañe el soporte material del registro afectando su contenido, el Juez ordenará reemplazarlo por una copia fiel, que obtendrá de quien la tuviere, si no dispone de ella directamente."

De la literalidad de los numerales invocados se advierte que las audiencias en el procedimiento oral mercantil deben ser presididas por el Juez que conozca del asunto, teniendo el carácter de públicas.

Para producir fe, las audiencias en este tipo de procedimientos deben ser registradas por medios electrónicos o cualquier otro idóneo a juicio del Juez que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información, la conservación y reproducción de su contenido y el acceso a los mismos a quienes, de acuerdo a la ley, tuvieren derecho a ella.

Al inicio de tales audiencias, el secretario del juzgado debe hacer constar oralmente en el registro mencionado la fecha, hora y lugar de su realización, el nombre de los servidores públicos del juzgado y demás personas que intervendrán.

Mientras que al término de «la» audiencia respectiva, debe levantarse un acta que debe contener, cuando (sic) al menos las siguientes menciones: I. El lugar, la fecha y el expediente al que corresponde; II. El nombre de quienes intervienen y la constancia de la inasistencia de los que debieron o pudieron estar presentes, indicándose la causa de la ausencia si se conoce; III. Una relación sucinta del desarrollo de la audiencia; y IV. La firma del Juez y secretario.

El artículo 1390 Bis 28, antes transcrito, prescribe que el medio en donde se encuentre registrada la audiencia respectiva, deberá certificarse por el secre-

tario del juzgado, identificar dicho medio con el número de expediente y tomar las medidas necesarias para evitar que pueda alterarse.

Conforme a las demás disposiciones invocadas, la conservación de los registros mencionados estará a cargo del juzgado que los haya generado y debe contarse con el respaldo necesario, que también debe ser certificado en los términos señalados por el numeral 1390 Bis 28 citado al igual que lo deben ser las copias del medio electrónico respectivo, que sean solicitadas por las partes.

Como se ve de las disposiciones antes invocadas, el Código de Comercio no exige como requisito de la certificación que el secretario debe realizar del medio en que se registre la audiencia oral, la mención de que sea: "**copia fiel y exacta**" del original, sino que únicamente dispone en el citado precepto 1390 Bis 28, que debe certificarse ese medio e identificarlo con el número de expediente, agregando que el funcionario debe tomar las medidas necesarias para evitar que pueda alterarse.

Por su parte, el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, en términos de su numeral 1063, no contiene una regulación específica sobre los juicios orales o los dispositivos de almacenamiento de las actuaciones de esa naturaleza.

Sin embargo, es importante para efectos del presente estudio, el contenido del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual prevé:

"Artículo 217. El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial.

"Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquier especie deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial."

El mencionado precepto regula el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, y al respecto dispone que para que constituyan prueba plena las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquier especie, deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena.

En cuanto a la regulación que hace el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, debe decirse que en su numeral 996 contempla una disposición correlativa al artículo 1390 Bis 28 del Código de Comercio, que se examina en el presente asunto, al establecer que el secretario del juzgado debe realizar la certificación del medio en que se registre la audiencia en el juicio oral civil y tomar las medidas para evitar que pueda alterarse.

Precisado el marco regulatorio anterior, debe tenerse en cuenta que los medios de almacenamiento de la información desarrollada en las audiencias de los juicios orales en general, son la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos y diligencias desarrollados durante la audiencia, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones.[7]

Entre esos formatos de almacenamiento se encuentran los discos versátiles digitales (DVD), que en la práctica judicial son utilizados por los órganos jurisdic-

[7] Resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, registro digital: 2004362, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.", que en la parte conducente dice: "... dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio ..."

cionales para almacenar o registrar en formatos de audio y video las actuaciones que tienen lugar durante las audiencias en los juicios orales.

En específico, tratándose del procedimiento oral, mercantil, como se ha dicho, el numeral 1390 Bis 28 del Código de Comercio dispone la obligación del secretario del juzgado de certificar el medio en donde se encuentre registrada la audiencia respectiva.

Así las cosas, resulta útil tener en cuenta que certificar significa asegurar, afirmar, dar por cierto algo, así como fijar, señalar con certeza y, específicamente, en derecho tiene la connotación de hacer constar por autoridad competente mediante escrito una realidad de hecho.[8]

En base a todo lo expuesto antes (sic), este Pleno de Circuito considera que en la certificación que el secretario del juzgado debe hacer en los medios de almacenamiento, como lo son los discos versátiles digitales (DVD) de las videograbaciones de las audiencias celebradas en el juicio oral mercantil, **no es necesario que se haga constar indefectiblemente y de manera literal que: "es copia fiel y exacta del registro original"**, para dar certeza jurídica de que su contenido coincide con el archivo resguardado en el órgano jurisdiccional.

En cambio, si se toma en consideración que el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, como se precisó antes, dispone que para tener eficacia probatoria las fotografías, como medio aportado por la ciencia, deberán contener la certificación que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, con base en ello pueden precisarse los elementos que debe satisfacer la certificación a que se refiere el artículo 1390 Bis 28 del Código de Comercio.

Así las cosas, se considera que para la validez de la certificación en estudio, resulta necesario que se hagan constar los datos básicos que se precisan a continuación, entre los cuales se encuentran la firma del secretario y el sello del

[8] *Diccionario de la Lengua Española*, Real Academia Española, vigésima segunda edición, tomo 3, página 344.

órgano jurisdiccional, en tanto que estos últimos son los signos que permiten otorgar certeza de haber sido expedidos por la autoridad correspondiente.

En este tenor, los elementos que se consideran indispensables y, por tanto, mínimos para que la certificación a que se refiere el mencionado artículo 1,390 Bis 28 del Código de Comercio, tenga validez, sin importar el empleo de leyendas o frases sacramentales (tales como: "**es copia fiel y exacta**") son los siguientes:

1. El juzgado y número de expediente;

2. El tipo de audiencia y la fecha;

3. La firma y nombre del secretario del órgano jurisdiccional, así como la mención de que se certifica que contiene la audiencia en comento, o que el contenido del disco coincide con su original, o con la videograbación que obra en el equipo respectivo;

4. El sello del órgano emitente.

Por las consideraciones expuestas, es posible establecer que la certificación a que hace referencia el artículo 1390 Bis 28 de la legislación mercantil, no exige que deban asentarse leyendas o frases sacramentales en el medio de almacenamiento o disco versátil digital de que se trata, tales como que es una copia fiel y exacta del registro original, sino que basta que se cumpla con los elementos mínimos a que se ha hecho referencia.

Por otra parte, conviene destacar que no es obstáculo para lo aquí considerado, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 2/2016 (10a.), de la Décima Época y consultable en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, página 873 y *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas, con el número de registro digital: 2010988, cuyo tenor es el siguiente:

"CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘QUE CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS’, CONTENIDA

EN EL ARTÍCULO 217 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. De la interpretación de los artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que, por regla general, las copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su expedición se realice con base en un documento original, o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario o funcionario público en el ejercicio de su encargo y, por el contrario, la certificación carece de ese valor probatorio pleno cuando no exista certeza si el cotejo deriva de documentos originales, de diversas copias certificadas, de copias autógrafas o de copias simples. En estas condiciones, cuando la copia es compulsada por un funcionario público, ello significa que es una reproducción del original y, por tanto, hace igual fe que el documento original, siempre y cuando en la certificación se incluya esa mención para crear convicción de que efectivamente las copias corresponden a lo representado en el cotejo; pues, en caso contrario, su valoración quedará al prudente arbitrio judicial. Bajo ese orden de ideas, la expresión 'que corresponden a lo representado en ellas', contenida en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles implica que en la certificación, como acto jurídico material, se contenga la mención expresa de que las copias certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el original que se tuvo a la vista, a fin de que pueda otorgársele valor probatorio pleno, en términos del citado artículo 129; pues esa exigencia se justifica por la obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad jurídica en los actos que emite."

Habida cuenta que éste se refiere al supuesto de la compulsa y certificación realizadas por el funcionario público respecto de un documento original frente a su copia; mientras que, en la especie, se analiza el supuesto específico de la certificación relativa al medio electrónico en el que habrá de almacenarse la videograbación de las audiencias celebradas en un juicio oral mercantil.

De tal suerte que el referido criterio jurisprudencial no resuelve el presente punto de contradicción, ya que no se ocupa de determinar cuáles son los requisitos que debe contener la certificación prevista en el artículo 1390 Bis 28 del Código de Comercio, a efecto de que exista certeza jurídica de que lo registrado en el medio digital (DVD) corresponde precisamente a la audiencia llevada a cabo en el juicio oral mercantil respectivo.

Finalmente, es necesario precisar que cuando en el juicio de amparo, los medios o discos versátiles digitales (DVD) en que se registran las videograbaciones de las audiencias en el juicio oral mercantil, son exhibidos por parte de la autoridad responsable, con su informe justificado y tales instrumentos no se encuentren certificados o la certificación no contenga los requisitos mínimos enumerados en la presente resolución; tal circunstancia no lleva a establecer que deba concederse el amparo a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable cumpla con el requisito de certificar debidamente los discos.

Lo anterior, porque en ese supuesto lo procedente es que el órgano de amparo, antes de proceder a emitir la sentencia respectiva, requiera a la autoridad responsable, que remita nuevamente el medio o disco óptico con la certificación que cumpla con los requisitos mínimos mencionados, ello con fundamento en lo preceptuado por el artículo 75 de la Ley de Amparo, el cual prevé la facultad del órgano jurisdiccional de recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto, disposición que en su parte conducente establece:

"Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable ...

"El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto."

SEXTO.—**Criterio que debe prevalecer.**

Atento a los razonamientos expuestos, este Pleno de Circuito determina que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, la siguiente tesis:

VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS CELEBRADAS EN LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES. PARA LA VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE LAS CONTIENEN, NO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE SE HAGA CONSTAR QUE "ES COPIA FIEL Y EXACTA" DEL

REGISTRO ORIGINAL. El artículo 1390 Bis 28 del Código de Comercio establece la obligación del secretario del juzgado de certificar el medio digital en donde se encuentren registradas las audiencias en el juicio oral mercantil, así como de identificar dicho medio con el número de expediente y tomar las medidas necesarias para evitar que pueda alterarse. De la interpretación conjunta del artículo mencionado, con el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, en términos de su artículo 1063, se concluye que son elementos indispensables y, por tanto, mínimos para que dicha certificación tenga validez, los siguientes: 1. El juzgado de origen y el número de expediente; 2. El tipo de audiencia y la fecha; 3. La firma y nombre del secretario del órgano jurisdiccional, así como la mención de que se certifica que el disco que contiene la reproducción de la audiencia coincide con su original, o con la videograbación que obra en el equipo respectivo; y, 4. El sello del órgano emitente; de manera que no es necesario hacer constar indefectiblemente y de manera literal que "es copia fiel y exacta" del registro original, para dar certeza jurídica de que su contenido coincide con el archivo resguardado en el órgano jurisdiccional. En el entendido de que cuando en el juicio de amparo, los medios ópticos o discos versátiles digitales (DVD) en que se registren las mencionadas videograbaciones, sean exhibidos por parte de la autoridad responsable, con su informe justificado, y no se encuentren certificados, o la certificación no contenga los requisitos mínimos antes precisados, tal circunstancia no lleva a establecer que deba concederse el amparo a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable cumpla con el requisito de certificar debidamente los discos, sino que lo procedente es que el órgano de amparo, antes de emitir la sentencia respectiva, requiera a la autoridad responsable que remita nuevamente el medio digital con la certificación que cumpla con tales requisitos, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, el cual prevé la facultad del órgano jurisdiccional de recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto.

Por lo expuesto y fundado, se **resuelve**:

PRIMERO.—Sí existe contradicción de tesis entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en

San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

SEGUNDO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis sustentada por este Pleno de Circuito, en términos del último considerando de esta resolución.

TERCERO.—Dese publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en términos del artículo 220 de la Ley de Amparo.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes. Remítase por conducto del MINTERSCJN a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, copia certificada de la presente ejecutoria, así como su versión electrónica a la cuenta de correo electrónico *sentenciasspcscjnssgamail.scjn.gob.mx*. En su oportunidad archívese como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito por unanimidad de quince votos de la Magistrada Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo, presidenta de este Pleno de Circuito y los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas, Alejandro Villagómez Gordillo, Víctor Francisco Mota Cienfuegos, Walter Arellano Hobelsberger, Ismael Hernández Flores, Fernando Alberto Casasola Mendoza, Abraham Sergio Marcos Valdés, Gonzalo Hernández Cervantes, Víctor Hugo Díaz Arellano, Fernando Rangel Ramírez, Gonzalo Arredondo Jiménez, José Rigoberto Dueñas Calderón, Alejandro Sánchez López y Daniel Horacio Escudero Contreras.

Fue ponente el Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo. Secretaria: Mariana Gutiérrez Olalde.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como de los numerales 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos

Personales y Archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, se hace constar que en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS CELEBRADAS EN LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES. PARA LA VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE LAS CONTIENEN, NO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE SE HAGA CONSTAR QUE "ES COPIA FIEL Y EXACTA" DEL REGISTRO ORIGINAL. El artículo 1390 Bis 28 del Código de Comercio establece la obligación del secretario del Juzgado de certificar el medio digital en donde se encuentren registradas las audiencias en el juicio oral mercantil, así como de identificar dicho medio con el número de expediente y tomar las medidas necesarias para evitar que pueda alterarse. De la interpretación conjunta del artículo mencionado, con el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, en términos de su artículo 1063, se concluye que son elementos indispensables y, por tanto, mínimos para que dicha certificación tenga validez, los siguientes: 1. El juzgado de origen y el número de expediente; 2. El tipo de audiencia y la fecha; 3. La firma y nombre del secretario del órgano jurisdiccional, así como la mención de que se certifica que el disco que contiene la reproducción de la audiencia coincide con su original, o con la videograbación que obra en el equipo respectivo; y, 4. El sello del órgano emitente; de manera que no es necesario hacer constar indefectiblemente y de manera literal que "es copia fiel y exacta" del registro original, para dar certeza jurídica de que su contenido coincide con el archivo resguardado en el órgano jurisdiccional. En el entendido de que cuando en el juicio de amparo, los medios ópticos o discos versátiles digitales (DVD) en que se registren las mencionadas videograbaciones, sean exhibidos por parte de la autoridad responsable, con su informe justificado, y no se encuentren certificados, o la certificación no contenga los requisitos mínimos antes precisados, tal circunstancia no lleva a establecer que deba concederse el amparo a la parte quejosa, para el efecto

de que la autoridad responsable cumpla con el requisito de certificar debidamente los discos, sino que lo procedente es que el órgano de amparo, antes de emitir la sentencia respectiva, requiera a la autoridad responsable que remita nuevamente el medio digital con la certificación que cumpla con tales requisitos, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, el cual prevé la facultad del órgano jurisdiccional de recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto.

PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
PC.I.C. J/105 C (10a.)

Contradicción de tesis 23/2019. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 8 de septiembre de 2020. Unanimidad de quince votos de la Magistrada Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo y los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas, Alejandro Villagómez Gordillo, Víctor Francisco Mota Cienfuegos, Walter Arellano Hobelsberger, Ismael Hernández Flores, Fernando Alberto Casasola Mendoza, Abraham Sergio Marcos Valdés, Gonzalo Hernández Cervantes, Víctor Hugo Díaz Arellano, Fernando Rangel Ramírez, Gonzalo Arredondo Jiménez, José Rigoberto Dueñas Calderón, Alejandro Sánchez López y Daniel Horacio Escudero Contreras. Ponente: Alejandro Villagómez Gordillo. Secretaria: Mariana Gutiérrez Olalde.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 299/2019, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver el amparo directo 8/2019 (cuaderno auxiliar 199/2019).

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 7 de diciembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). LA CERTIFICACIÓN DE QUE SON COPIA AUTÉNTICA DEL REGISTRO AUDIOVISUAL NO REQUIERE QUE EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN EN LA MATERIALIDAD DEL DISCO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 14 DE OCTUBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ SALVADOR ROBERTO JIMÉNEZ LOZANO, GABRIEL ALEJANDRO ZÚÑIGA ROMERO Y CARLA ISSELIN TALAVERA. PONENTE: JOSÉ SALVADOR ROBERTO JIMÉNEZ LOZANO. SECRETARIA: MARCELA AGUILAR LORANCA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Este Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de posible contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 13, fracción VII, y 17 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veintisiete de febrero de dos mil quince; dado que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito.

SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.

TERCERO.—Para resolver el presente asunto, se atienden las consideraciones que sustentan las ejecutorias de los Tribunales Colegiados a que se refiere la denuncia de contradicción.

Así, los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en sesión de seis de junio de dos mil diecinueve, resolvieron por unanimidad de votos en su anterior integración el amparo en revisión 88/2019, interpuesto por el quejoso, donde en la materia de la revisión, revocaron la sentencia recurrida y se ordenó la reposición del procedimiento en el juicio de amparo **********, del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en que se reclamó al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, el auto de vinculación a proceso de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal **********, por el hecho con apariencia de delito de violación equiparada. Asimismo, en sesión de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, resolvieron por mayoría de votos, con la nueva integración del Pleno de ese tribunal, el amparo en revisión 163/2019, interpuesto por el quejoso, a través de su defensora pública federal, donde en la materia de la revisión, revocaron la sentencia recurrida y se ordenó la reposición del procedimiento en el juicio de amparo **********, tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en el cual, el quejoso reclamó del Juez de Control y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Norte, Zacatlán, Puebla, el auto de vinculación a proceso, dentro de la causa penal **********, por el hecho con apariencia de delito de secuestro exprés y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Las partes considerativas de las ejecutorias de los amparos indirectos en revisión 88/2019 y 163/2019, respectivamente, son del tenor siguiente:

"QUINTO.—No obstante la transcripción de la sentencia recurrida y de los agravios expuestos por el recurrente ********** o **********, no serán objeto de estudio por parte de este Tribunal Colegiado al advertirse una transgresión a las formalidades del procedimiento, que conlleva a ordenar su reposición en el juicio de garantías, de conformidad con lo establecido en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo.—En efecto, este potestad federal advierte que el trá-



mite del juicio de amparo indirecto origen del presente recurso de revisión, no fue llevado a cabo en la forma prevista por la ley de la materia, ya que el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, no se cercioró de que los registros remitidos por el Juez de Control responsable, cumplieran las exigencias legales para dotarlos de certeza y seguridad jurídica, ya que el disco óptico que contiene la decisión judicial reclamada, no se encuentra firmado y sellado en términos de lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual imposibilitaba al Juez Federal para emitir el fallo respectivo.—A fin de sostener lo anterior, es oportuno precisar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable debe rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos.—Dicho numeral dispone que tratándose del sistema penal acusatorio acompañará un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes; asimismo, estatuye que en el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo.—De lo anterior se sigue que el citado precepto legal impone a la autoridad responsable a remitir como justificación a su informe, tanto constancias escritas, como videograbaciones, debidamente certificadas, ello, tomando en consideración, en el particular, que conforme a lo previsto por el artículo 20 constitucional, en el proceso penal de corte acusatorio prevalece la oralidad y se rige por un sistema de audiencias.—Ciertamente, el numeral 20 de la Carta Magna, en su texto actual y aplicable al particular, establece que todo proceso penal deberá ser acusatorio y oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y como principios generales del proceso, se prevén, entre otros, que toda audiencia se desarrollará en presencia del Juez; que el juicio se celebrará ante uno que no haya conocido del caso previamente; que la presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y que éstos también deberán ser observados en las audiencias preliminares a juicio.—Ahora bien, en relación con las audiencias orales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su numeral 61, dispone lo que sigue: ‘Artículo 61. Registro de las audiencias. Todas las audiencias previstas

en este código serán registradas por cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición el órgano jurisdiccional. La grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considerará como parte de las actuaciones y registros y se conservarán en resguardo del Poder Judicial para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento y de las partes, garantizando siempre su conservación.'.—Conforme a dicha disposición legal, todas las audiencias y actos procesales ocurridos en el procedimiento penal deberán ser registradas por cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición el órgano jurisdiccional (por escrito, por video, audio o cualquier medio que garantice su reproducción); asimismo, dichos registros (a efecto de asegurar su inalterabilidad), se conservarán en resguardo del Poder Judicial para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento, garantizando siempre su conservación.—Por otra parte, los preceptos 70 y 71 del referido Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: 'Artículo 70. Firma. Las resoluciones escritas serán firmadas por los Jueces o Magistrados. No invalidará la resolución el hecho de que el juzgador no la haya firmado oportunamente, siempre que la falta sea suplida y no exista ninguna duda sobre su participación en el acto que debió suscribir, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria a que haya lugar.'.—'Artículo 71. Copia auténtica. Se considera copia auténtica al documento o registro del original de las sentencias, o de otros actos procesales, que haya sido certificado por la autoridad autorizada para tal efecto. Cuando, por cualquier causa se destruya, se pierda o sea sustraído el original de las sentencias o de otros actos procesales, la copia auténtica tendrá el valor de aquéllos. Para tal fin, el órgano jurisdiccional ordenará a quien tenga la copia entregarla, sin perjuicio del derecho de obtener otra en forma gratuita cuando así lo solicite. La reposición del original de la sentencia o de otros actos procesales también podrá efectuarse utilizando los archivos informáticos o electrónicos del juzgado. Cuando la sentencia conste en medios informáticos, electrónicos, magnéticos o producidos por nuevas tecnologías, la autenticación de la autorización del fallo por el órgano jurisdiccional, se hará constar a través del medio o forma más adecuada, de acuerdo con el propio sistema utilizado.'.—Es pertinente subrayar que, aun cuando la legislación procesal de la materia no prevé expresamente las formalidades que debe reunir tal certificación; lo cierto es que, al menos, es menester que contenga los signos básicos que le otorguen autenticidad, es decir, el sello del órgano jurisdiccional y la firma del funcionario judicial correspondiente,



acompañado de la leyenda de que se trata de copia fiel de su original.—Además del contenido del segundo párrafo, del artículo 71 de referencia, se deduce que es copia auténtica el documento o registro del original de las sentencias, o de otros actos procesales, que haya sido certificado por la autoridad autorizada para tal efecto.—Esto quiere decir que, conforme una interpretación sistemática entre los citados preceptos 61, 70 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los actos contenidos en registros informáticos, tales como lo son las audiencias de juicio oral que presiden los Jueces y Magistrados del sistema de justicia penal y acusatorio, requieren para su validez la certificación de su contenido, realizada por la autoridad autorizada para tal efecto.—En congruencia con lo expuesto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que el disco versátil digital (DVD), en el que estén almacenados los archivos informáticos de las audiencias celebradas en ese tipo de procedimientos, gozan de la naturaleza de una prueba instrumental pública de actuaciones, ello, en la jurisprudencia número 43, emitida, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, publicada en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, agosto de 2013, materias común y penal, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, con número de registro digital: 2004362, de rubro y texto siguientes: 'VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO A SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del «expediente electrónico», como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte

acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el Juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.'.—Sin embargo, para que dichos hechos o actos jurídicos consignados en los medios digitales puedan alcanzar plena eficacia legal, deben relacionarse con las diversas disposiciones legales vigentes en el Código Nacional de Procedimientos Penales, antes transcritas, que otorgan facultades a los Jueces y Magistrados para firmar las resoluciones escritas, en términos del artículo 70 de dicha disposición legal y del diverso 71, las actuaciones contenidas en los registros de audio y video de los actos que se realicen y las resoluciones que se dicten, requieren ser expedidos y certificados por la autoridad autorizada para tal efecto; al ser éstos requisitos indispensables para que puedan ser justipreciados como tales en la instancia de alzada o constitucional.—De otra manera, se carecería de certeza jurídica en torno al origen y confiabilidad de los registros digitales de videograbación que se contienen en el disco versátil digital (DVD), remitidos por la autoridad responsable, pues la circunstancia de que aquella probanza adquiera el carácter de prueba documental lato sensu, no implica desconocer los mecanismos implementados para otorgar seguridad y plena certeza de que corresponden a las actuaciones del juicio penal de origen.—Por tanto, si el disco versátil (DVD) que contiene almacenada alguna o algunas de las diligencias celebradas en el proceso penal acusatorio es una documental pública, es pertinente acotar las formalidades que para su validez deben revestir las copias auténticas que al efecto se emitan como anexo al



informe con justificación para el trámite del juicio de garantías, pues sólo de ese modo se avalaría que el soporte material enviado sí corresponde a las actuaciones originales.—Ahora bien, de las constancias enviadas para el trámite del juicio de amparo, origen del presente recurso de revisión, se advierte, específicamente a foja 32 que, mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, tuvo por recibido el oficio signado por la Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, mediante el cual rindió informe justificado en el juicio de amparo ********** origen del presente recurso de revisión, remitiendo para la sustanciación del mismo: '... las constancias relativas a la causa **********; en tanto que en virtud del requerimiento realizado por la autoridad federal mediante acuerdo de tres de enero de dos mil diecinueve, que consta a foja 60 del juicio de amparo, la responsable remitió la versión escrita de la audiencia de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, relativa a la causa penal de origen, misma que se tuvo por recibida por proveído de fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve, tal como se observa a foja 82.'—Por otra parte, de la sentencia recurrida, se advierte que para negar la protección constitucional solicitada por el quejoso, se llevó a cabo el estudio correspondiente de la decisión judicial reclamada con base en la videograbación enviada por el Juez responsable, pues en ese sentido, la autoridad de amparo se pronunció en relación con la certeza del acto reclamado, en tanto precisó: 'TERCERO.—Certeza del acto. La Juez de Control reconoció expresamente la existencia del acto reclamado (foja 12); lo que se corrobora con la copia cotejada de la carpeta judicial administrativa y disco compacto en formato DVD, que contiene el registro de la audiencia de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, de la causa penal **********, que remitió la autoridad judicial, en las que aparece demostrado el auto de vinculación a proceso reclamado ...'.—Asimismo, se obtiene que emprendió el examen de los conceptos de violación en el considerando cuarto, y a fin de darles respuesta se impuso del contenido del disco compacto remitido con el informe justificado, en tanto razonó: '... Del registro de la audiencia de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, celebrada en la causa penal **********, se advierte que a partir de los datos de prueba expuestos por la agente del Ministerio Público, la Juez de Control de manera acertada consideró satisfechos los requisitos establecidos en los artículos 19, párrafo primer (sic), (lo transcribe) de la Constitución Federal y 316 (lo transcribe) del Código Nacional

de Procedimientos Penales ... y, en ese sentido, se pronunció en relación con la actuación de la juzgadora pues relató su actuación en tanto señaló que formuló imputación, otorgó al imputado el derecho de declarar o guardar silencio, acogiéndose a este último y después de otorgar a las partes el derecho de contradicción, resolvió que los datos expuestos por la representación social para solicitar vinculación a proceso, son suficientes para establecer un hecho con apariencia del delito aludido y la probabilidad que el impetrante lo cometió ...'.—Posterior a ello, se tiene que a fin de sustentar su determinación en el sentido de que las consideraciones de la Juez de Control responsable resultaron legales, se impuso del contenido del referido disco compacto, en tanto destacó las actuaciones ahí llevadas a cabo por las partes, precisando la hora en que ello aconteció acorde con su narrativa.—Sin embargo, el soporte material remitido por la Juez de Control señalada como responsable, en el que sustentó la determinación judicial reclamada, carece de la certificación exigida y de los signos visibles necesarios para su validez; ya que si bien contiene la gráfica del Poder Judicial, Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias Región Judicial Centro Poniente, además de la leyenda que refiere que es una copia autorizada con validez y eficacia en términos del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales; las iniciales 'R.C.P.G' que al parecer corresponden a la Juez de Control que emitió la resolución que se reclama Rosa Celia Pérez González; la identificación de la causa penal en la que se generó, el nombre del imputado, la defensa, el asesor jurídico y la fiscalía, así como la fecha de la audiencia desahogada, lo cierto es que carece del sello y la firma original de la autoridad autorizada para tal efecto, en términos de los numerales 61, 70 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo que origina que no reúna el requisito indispensable para justipreciarlo como documental pública, expedida por autoridad competente en ejercicio de sus funciones.—Lo anterior es así, ya que la certificación no debe dejar lugar a dudas de que el contenido del disco es lo que efectivamente se suscitó durante el desarrollo del proceso penal, es decir, no solamente se trata de una mera formalidad, sino la importancia de que el disco se encuentre debidamente certificado genera la certeza de que en realidad las actuaciones que contiene, corresponden al proceso penal de mérito, pues los discos que se emitan se deben considerar como un documento público, al formar parte de un expediente judicial que contiene el resultado del desahogo de las diligencias inherentes al proceso y, por ende, deben estar debidamente autentificadas, lo que se logra, al insertar en el cuerpo del disco la

certificación respectiva, acompañada de la firma y sello de la persona o funcionario autorizado para ello.—No pasa inadvertido que se tuvo al alcance la constancia escrita del auto de vinculación a proceso, elaborada conforme a lo dispuesto en el numeral 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y remitida en virtud del requerimiento realizado en ese sentido en la litis constitucional; sin embargo, tal documento escrito no es el idóneo para resolver el juicio de garantías, pues en el sistema penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la referida Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto de mérito, pues '... el hecho de que los actos de molestia deban constar por escrito en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel ...'.—En este sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 34, emitida, al resolver la contradicción de tesis 168/2015, publicada en la página 125, Libro 46, Tomo I, septiembre de 2017, materias constitucional y penal, de la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, con número de registro digital: 2015127, de rubro (sic) y texto siguientes: 'AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el pro-

ceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el Juez de Control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del Juez de Control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por escrito en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel.'.—Aunado a ello, sólo a través de la videograbación respectiva, podrá verificarse si se cumplieron los principios del sistema de justicia penal actual establecidos a nivel constitucional, como son el de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.—Cabe destacar que no se desconoce que la sustanciación del nuevo proceso penal acusatorio se sustenta en la idea de abreviación y flexibilización, al grado de evitar hacerlo complejo o llenarlo de algunos formalismos; empero, en el caso, se trata del respeto de formalidades esenciales mínimas que, dicho sea de paso, su estricto acatamiento no entraña alguna dificultad o entorpecimiento de las actividades de los Jueces del nuevo sistema penal acusatorio. En realidad, bastaría que éstos instruyeran al personal a su cargo para que en el propio disco en el que ya se

asientan algunos datos de identificación, se agregara la mencionada certificación.—Así las cosas, si de conformidad con lo previsto en el artículo 117 de la ley de la materia, la autoridad judicial del conocimiento responsable está obligada a remitir copia auténtica de sus registros para la sustanciación del juicio de garantías y ello no aconteció en la especie, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento para que ello sea subsanado, en los términos que se precisan al final de esta ejecutoria.—Se cita al respecto la jurisprudencia número 6 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, que se comparte, publicada en la página 2724, Libro 55, Tomo IV, junio de 2018, materia penal, de la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, con número de registro digital: 2017095, que dice: 'VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI EL JUEZ FEDERAL RESUELVE CON BASE EN LOS DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD'S) QUE LAS CONTIENEN SIN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS CON EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTE, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. A partir de la instauración del sistema procesal penal acusatorio y oral, las videograbaciones de las audiencias contenidas en archivos informáticos almacenados en un soporte material, como lo es un disco versátil digital (DVD), constituye un medio apto para producir seguridad en las actuaciones que se generen por el juzgador, así como para garantizar la legalidad y transparencia del desarrollo de cada una de las etapas del proceso penal, como lo disponen los artículos 40 y 41 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (abrogado) y 50, 51, 61 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que los discos que se emitan deben considerarse documentos públicos, pues forman parte de un expediente judicial que contiene el resultado del desahogo de las diligencias inherentes al proceso y, por ende, deben estar certificados, es decir, contener el sello del órgano jurisdiccional, así como la firma o rúbrica del servidor público correspondiente que los expida, a fin de dar certeza sobre su autenticidad a las partes intervinientes. En ese sentido, si el Juez Federal emitió una sentencia basándose en los discos versátiles sin certificación, ello constituye una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento para el efecto de que se allegue de esos documentos debidamente certificados y, en su momento, vuelva a emitir la resolución correspondiente.'.—En las condiciones apuntadas, se impone revocar el fallo

recurrido y ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para que el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla: a) Deje insubsistente la resolución de seis de marzo de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio de amparo **********.—b) Recabe la videograbación debidamente certificada (con sello y firma) relativa a la audiencia de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en la que la Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, dictó en contra del quejoso ********** o **********, auto de vinculación a proceso, dentro de la causa penal **********, en términos de los numerales 61, 70 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales.—c) Enseguida, señale fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y con plenitud de jurisdicción, dicte la resolución que en derecho proceda, en la inteligencia de que al emitirse deberá prevalecer la determinación relativa a la publicación que se haga de la resolución con supresión de datos, de conformidad con el punto resolutivo segundo del fallo que se impugna.—Por lo antes expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO.—Se revoca la sentencia recurrida, con excepción del punto resolutivo segundo.—SEGUNDO.—Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo **********, promovido por ********** o **********, en contra del acto reclamado a la Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, consistente en el auto de vinculación a proceso de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal **********, por el hecho con apariencia de delito de violación equiparada.—Notifíquese."

"TERCERO.—No se transcribirán las consideraciones de la sentencia reclamada ni los agravios expuestos en contra de ésta, dado que se advierte una violación en el procedimiento del juicio de amparo que amerita su reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo.—Así es, este tribunal advierte que en el trámite del juicio de amparo indirecto el Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla dejó de cerciorarse de que los registros remitidos por la Juez de Control responsable cumpliera con las exigencias legales para dotarlos de certeza y seguridad jurídica, ya que el disco óptico que contiene la decisión judicial reclamada, no se encuentra firmado en términos de lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales en la certificación respectiva, lo cual impo-

sibilitaba que el Juez Federal emitiera el fallo respectivo.—De inicio, es oportuno precisar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable debe rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos.—Dicho numeral dispone que tratándose del sistema penal acusatorio acompañará un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes; asimismo, estatuye que en el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo.—De lo anterior se sigue que el citado precepto legal impone a la autoridad responsable la obligación de remitir como justificación a su informe, tanto constancias escritas, como videograbaciones, debidamente certificadas; ello, tomando en consideración, en el particular, que conforme a lo previsto por el artículo 20 constitucional, en el proceso penal de corte acusatorio prevalece la oralidad y se rige por un sistema de audiencias.—Ciertamente, el numeral 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto actual y aplicable al particular, establece que todo proceso penal deberá ser acusatorio y oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y como principios generales del proceso, se prevén, entre otros, que toda audiencia se desarrollará en presencia del Juez; que el juicio se celebrará ante uno que no haya conocido del caso previamente; que la presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y que éstos también deberán ser observados en las audiencias preliminares a juicio.—Ahora bien, en relación con las audiencias orales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su numeral 61, dispone lo que sigue: ‘Artículo 61. Registro de las audiencias. Todas las audiencias previstas en este código serán registradas por cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición el órgano jurisdiccional. La grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considerará como parte de las actuaciones y registros y se conservarán en resguardo del Poder Judicial para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento y de las partes, garantizando siempre su conservación.’.—Conforme a dicha disposición legal, todas las audiencias y actos procesales ocurridos en el procedimiento penal de-

berán ser registradas por cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición el órgano jurisdiccional (por escrito, por video, audio o cualquier medio que garantice su reproducción); asimismo, dichos registros (a efecto de asegurar su inalterabilidad), se conservarán en resguardo del Poder Judicial para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento, garantizando siempre su conservación.—Por otra parte, los preceptos 70 y 71 del referido Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: 'Artículo 70. Firma. Las resoluciones escritas serán firmadas por los Jueces o Magistrados. No invalidará la resolución el hecho de que el juzgador no la haya firmado oportunamente, siempre que la falta sea suplida y no exista ninguna duda sobre su participación en el acto que debió suscribir, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria a que haya lugar.'.—'Artículo 71. Copia auténtica. Se considera copia auténtica al documento o registro del original de las sentencias, o de otros actos procesales, que haya sido certificado por la autoridad autorizada para tal efecto. Cuando, por cualquier causa se destruya, se pierda o sea sustraído el original de las sentencias o de otros actos procesales, la copia auténtica tendrá el valor de aquéllos. Para tal fin, el órgano jurisdiccional ordenará a quien tenga la copia entregarla, sin perjuicio del derecho de obtener otra en forma gratuita cuando así lo solicite. La reposición del original de la sentencia o de otros actos procesales también podrá efectuarse utilizando los archivos informáticos o electrónicos del juzgado. Cuando la sentencia conste en medios informáticos, electrónicos, magnéticos o producidos por nuevas tecnologías, la autenticación de la autorización del fallo por el órgano jurisdiccional, se hará constar a través del medio o forma más adecuada, de acuerdo con el propio sistema utilizado.'.—Ahora bien, como se ve, la legislación procesal de la materia no prevé expresamente las formalidades que debe reunir tal certificación; empero, este tribunal considera que, al menos, es menester que contenga los signos básicos que le otorguen autenticidad, es decir, el sello del órgano jurisdiccional, el nombre y firma del funcionario judicial correspondiente, acompañado de la leyenda de que se trata de copia fiel o autentica de su original.—Además, del contenido del segundo párrafo del artículo 71 de referencia, se deduce que es copia auténtica el documento o registro del original de las sentencias, o de otros actos procesales, que haya sido certificado por la autoridad autorizada para tal efecto.—En esa medida, de una interpretación sistemática de_los citados preceptos 61, 70 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se deduce que los actos contenidos en los registros informáticos, tales

como las audiencias de juicio oral que presiden los Jueces y Magistrados del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, requieren para su validez de la certificación de su contenido, realizada por la autoridad autorizada para tal efecto.—En congruencia con lo expuesto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que el disco versátil digital, en el que estén almacenados los archivos informáticos de las audiencias celebradas en ese tipo de procedimientos, gozan de la naturaleza de una prueba instrumental pública de actuaciones, ello, en la jurisprudencia número 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, publicada en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, agosto de 2013, materias común y penal, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, con número de registro digital: 2004362, de rubro y texto siguientes: 'VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del expediente electrónico, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efec-

tos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el Juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.'.—Entonces, para que dichos hechos o actos jurídicos consignados en medios digitales puedan alcanzar plena eficacia legal, deben relacionarse con las diversas disposiciones legales vigentes en el Código Nacional de Procedimientos Penales, antes transcritas, que otorgan facultades a los Jueces y Magistrados para firmar las resoluciones escritas, en términos del artículo 70 de dicha disposición legal y del diverso 71, las actuaciones contenidas en los registros de audio y video de los actos que se realicen y las resoluciones que se dicten, requieren ser expedidos y certificados por la autoridad autorizada para tal efecto; al ser éstos requisitos indispensables para que puedan ser justipreciados como tales en la instancia de alzada o constitucional.—De otra manera, se carecería de certeza jurídica en torno al origen y confiabilidad de los registros digitales de videograbación que se contienen en el disco versátil digital, remitidos por la autoridad responsable, pues la circunstancia de que aquella probanza adquiera el carácter de prueba documental *lato sensu*, no implica desconocer los mecanismos implementados para otorgar seguridad y plena certeza de que corresponden a las actuaciones del juicio penal de origen.—Por tanto, si el disco versátil que contiene almacenada alguna o algunas de las diligencias celebradas en el proceso penal acusatorio es una documental pública, es pertinente acotar las formalidades que para su validez deben revestir las copias auténticas que al efecto se emitan como anexo al informe con justificación para el trámite del juicio de garantías, pues sólo de ese modo se avalaría que el soporte material enviado sí corresponde a las actuaciones originales.—Ahora bien, de las constancias enviadas para el trámite del juicio de amparo, origen del presente recurso de revisión, se advierte que, mediante proveído de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, el Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla tuvo por recibido el oficio **********, signado por la Jueza de Control y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Norte

Zacatlán, Puebla, con el que remitió su informe justificado para el trámite del juicio de amparo 1146/2018; un disco versátil digital DVD, que respectivamente contiene la audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho, relativa a la audiencia inicial de control de detención e imputación, vinculación a procedimiento, medidas cautelares y plazo de cierre de investigación.—Cabe destacar que en la resolución recurrida –de trece de mayo de dos mil diecinueve– se llevó a cabo el estudio correspondiente de la decisión judicial, primordialmente, con base en la videograbación enviada por la resolutora responsable, concretamente en el considerando 'tercero' se asentó: 'TERCERO.—La Jueza de Control responsable, aceptó la existencia del acto que se le reclama, según se advierte de la lectura de su informe con justificación que obra en autos; lo que además se corrobora con las constancias que remitió en apoyo al mismo (foja 246 vuelta).—Sin embargo, el disco versátil de la audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho, que contiene la determinación del auto de vinculación a proceso reclamado, carece de la firma en la certificación exigida; ya que si bien contiene el emblema del Poder Judicial del Estado de Puebla y, entre otras, las leyendas: «Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencia Región Judicial Centro Poniente».—Copia autorizada con validez y eficacia en términos del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales; así como un sello del Tribunal Superior de Justicia del Estado, carece de la firma original de la autoridad autorizada para tal efecto, en términos de los numerales 61, 70 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo que origina que no reúna el requisito indispensable para justipreciarlo como documental pública, expedida por autoridad competente en ejercicio de sus funciones.—Lo anterior es así, ya que la certificación no debe dejar lugar a dudas de que el contenido del disco es lo que efectivamente se suscitó durante el desarrollo del proceso penal, es decir, no solamente se trata de una mera formalidad, sino la importancia de que el disco se encuentre debidamente certificado genera la certeza de que en realidad las actuaciones que contiene, corresponden al proceso penal de mérito, pues los discos que se emitan se deben considerar como un documento público, al formar parte de un expediente judicial que contiene el resultado del desahogo de las diligencias inherentes al proceso y, por ende, deben estar debidamente autentificadas, lo que se logra, al insertar en el cuerpo del disco la certificación respectiva, acompañada de la firma y sello de la persona o funcionario autorizado para ello.—No pasa inadvertido que se tuvo al alcance la constancia escrita del auto de vinculación a proceso, elaborada

conforme a lo dispuesto en el numeral 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y remitida en virtud del requerimiento realizado en ese sentido en la litis constitucional; sin embargo, tal documento escrito no es el idóneo para resolver el juicio de amparo, pues en el sistema penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la referida Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto de mérito.—Así lo expuso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 1a./J. 34/2017 (10a.), emitida, al resolver la contradicción de tesis 168/2015, publicada en la página 125, Libro 46, Tomo I, septiembre de 2017, materias constitucional y penal, de la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, con número de registro digital: 2015127, de rubro (sic) y texto siguientes: «AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el Juez de Control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del Juez de Control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo

proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por <escrito> en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel.».—Aunado a ello, sólo a través de la videograbación respectiva, podrá verificarse si se cumplieron los principios del sistema de justicia penal actual establecidos a nivel constitucional, como son el de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.—Tampoco se desconoce que la sustanciación del nuevo proceso penal acusatorio se sustenta en la idea de abreviación y flexibilización, al grado de evitar hacerlo complejo o llenarlo de algunos formalismos; empero, en el caso, se trata del respeto de formalidades esenciales mínimas que, dicho sea de paso, su estricto acatamiento no entraña alguna dificultad o entorpecimiento de las actividades de los Jueces del nuevo sistema penal acusatorio. En realidad, bastaría que éstos instruyeran al personal a su cargo para que en el propio disco en el que ya se asientan algunos datos de identificación, se agregara la mencionada certificación.—Así las cosas, si de conformidad con lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la autoridad judicial del conocimiento responsable está obligada a remitir copia auténtica de sus registros para la sustanciación del juicio de garantías y ello no aconteció en la especie, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento para que ello sea subsanado, en los términos que se precisan al final de esta ejecutoria.—Se cita al respecto la jurisprudencia número II.1o. J/6 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, que se comparte, publicada en la página 2724, Libro 55, Tomo IV, junio de 2018, materia penal, de la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*,

Décima Época, con número de registro digital: 2017095, que dice: «VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI EL JUEZ FEDERAL RESUELVE CON BASE EN LOS DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD´S) QUE LAS CONTIENEN SIN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS CON EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. A partir de la instauración del sistema procesal penal acusatorio y oral, las videograbaciones de las audiencias contenidas en archivos informáticos almacenados en un soporte material, como lo es un disco versátil digital (DVD), constituye un medio apto para producir seguridad en las actuaciones que se generen por el juzgador, así como para garantizar la legalidad y transparencia del desarrollo de cada una de las etapas del proceso penal, como lo disponen los artículos 40 y 41 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (abrogado) y 50, 51, 61 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que los discos que se emitan deben considerarse documentos públicos, pues forman parte de un expediente judicial que contiene el resultado del desahogo de las diligencias inherentes al proceso y, por ende, deben estar certificados, es decir, contener el sello del órgano jurisdiccional, así como la firma o rúbrica del servidor público correspondiente que los expida, a fin de dar certeza sobre su autenticidad a las partes intervinientes. En ese sentido, si el Juez Federal emitió una sentencia basándose en los discos versátiles sin certificación, ello constituye una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento para el efecto de que se allegue de esos documentos debidamente certificados y, en su momento, vuelva a emitir la resolución correspondiente.».—En las condiciones relatadas, lo procedente es revocar el fallo recurrido y ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para que el Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla: a) Recabe el disco óptico de la videograbación debidamente certificada (con sello y firma) relativa a la audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho, en la que la Juez de Control y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Norte, Zacatlán, Puebla, dictó en contra del quejoso **********, auto de vinculación a proceso, dentro de la causa penal **********, en términos de los numerales 61, 70 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, b) Enseguida, señale fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y, con plenitud de jurisdicción, dicte la resolución que en derecho proceda.—Por lo antes expuesto y fundado se resuelve:



PRIMERO.—Se revoca la sentencia recurrida.—SEGUNDO.—Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo 1146/2018, promovido por **********, en contra del acto reclamado a la Juez de Control y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Norte, Zacatlán, Puebla, consistente en el auto de vinculación a proceso, dentro de la causa penal **********, por el hecho con apariencia de delito de secuestro exprés y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.—Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca.—Así lo resolvieron y firman por mayoría de votos de los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Magistrados Lázaro Franco Robles Espinoza, presidente y José Manuel Torres Pérez, ponente; y en términos del artículo 186 de la Ley de Amparo, el Magistrado Gabriel Alejandro Zúñiga Romero formula su voto particular, ante el secretario de Acuerdos que da fe.—M'JMTP/L'LECC/ave.—**Voto particular que formula el Magistrado Gabriel Alejandro Zúñiga Romero en el amparo en revisión R-163/2019**.—De manera respetuosa me permito disentir del criterio de mis compañeros del Pleno de este tribunal, en lo relativo a revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, debido a que el disco óptico que contiene la decisión judicial reclamada, carece de certificación.—Lo anterior, porque considero que dicho disco versátil digital (DVD), tiene el carácter de una prueba instrumental de actuaciones, al contener las videograbaciones de las audiencias del sistema penal acusatorio y, por ende, es apto para acreditar la existencia de los actos procesales que contiene; sin que en amparo indirecto se deba poner en duda su contenido al carecer del sello y firma correspondientes, toda vez que, como se explicará enseguida, la norma constitucional que regula ese aspecto no exige una formalidad tan rigurosa, sino únicamente que quede constancia de las audiencias en cualquier medio que dé certeza de su contenido; máxime que en el particular existen medios por los cuales se puede corroborar la certeza de aquél.—En efecto, el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, el quince de septiembre de dos mil diecisiete, establece lo siguiente: «**Artículo 16.** Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará

con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.».—Por otra parte, los numerales 50, 61, 70 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativos a las audiencias orales, disponen lo siguiente: «**Artículo 50. Acceso a las carpetas digitales**. Las partes siempre tendrán acceso al contenido de las carpetas digitales consistente en los registros de las audiencias y complementarios. Dichos registros también podrán ser consultados por terceros cuando dieren cuenta de actuaciones que fueren públicas, salvo que durante el proceso el órgano jurisdiccional restrinja el acceso para evitar que se afecte su normal sustanciación, el principio de presunción de inocencia o los derechos a la privacidad o a la intimidad de las partes, o bien, se encuentre expresamente prohibido en la ley de la materia.—El órgano jurisdiccional autorizará la expedición de copias de los contenidos de las carpetas digitales o de la parte de ellos que le fueren solicitados por las partes.».—«**Artículo 61. Registro de las audiencias.** Todas las audiencias previstas en este código serán registradas por cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición el órgano jurisdiccional.—La grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considerará como parte de las actuaciones y registros y se conservarán en resguardo del Poder Judicial para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento y de las partes, garantizando siempre su conservación.».—«**Artículo 70. Firma.** Las resoluciones escritas serán firmadas por los Jueces o Magistrados. No invalidará la resolución el hecho de que el juzgador no la haya firmado oportunamente, siempre que la falta sea suplida y no exista ninguna duda sobre su participación en el acto que debió suscribir, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria a que haya lugar.».—«**Artículo 71. Copia auténtica.** Se considera copia auténtica al documento o registro del original de las sentencias, o de otros actos procesales, que haya sido certificado por la autoridad autorizada para tal efecto.—Cuando, por cualquier causa se destruya, se pierda o sea sustraído el original de las sentencias o de otros actos procesales, la copia auténtica tendrá el valor de aquéllos. Para tal fin, el órgano jurisdiccional ordenará a quien tenga la copia entregarla, sin perjuicio del derecho de obtener otra en forma gratuita cuando así lo solicite. La reposición del original de la sentencia o de otros actos procesales también podrá efectuarse utilizando los archivos informáticos o electrónicos del juzgado.—Cuando la sentencia conste en medios informáticos, electrónicos, magnéticos o producidos por nuevas tecnologías, la autenticación de la autorización del fallo por el órgano

jurisdiccional, se hará constar a través del medio o forma más adecuada, de acuerdo con el propio sistema utilizado.».—Las disposiciones normativas antes transcritas establecen, en lo que interesa, que las partes tienen derecho al acceso del contenido de las carpetas digitales, así como a que el órgano jurisdiccional les expida copias de las mismas; que las audiencias previstas en el código en cita serán registradas por cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición el tribunal respectivo, y se conservarán en resguardo del Poder Judicial para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento y de las partes, garantizando siempre su conservación; que las resoluciones escritas serán firmadas por los Jueces o Magistrados; y, que se considera copia auténtica al documento o registro del original de las sentencias, o de otros actos procesales, que haya sido certificado por la autoridad autorizada para tal efecto.—Cabe precisar que en el párrafo tercero del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció que el Código Nacional de Procedimientos Penales recoge el sistema procesal penal acusatorio y que éste entraría en vigor, en las entidades federativas, en los términos que estableciera la declaratoria que al efecto emitiera el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas.—En el particular, en términos del decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Puebla, el diecisiete de junio de dos mil once, el sistema de justicia penal acusatorio entró en vigor de manera paulatina en todas las regiones judiciales que comprende dicho Estado, empezando por la región oriente, el quince de enero de dos mil trece, concluyendo con la región centro, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis.—En ese sentido, en base a las fechas anteriormente precisadas, es evidente que la reforma constitucional al artículo 16, párrafo primero, en la que se estableció que tratándose de los juicios en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido; es de fecha más reciente, por lo que atendiendo al principio de supremacía constitucional, consagrado en el numeral 133 de la Carta Magna, lo medular del tema en cuestión es que exista certeza en el contenido de la información que anexa la autoridad responsable al juzgador de amparo cuando rinde su informe justificado.—Ahora bien, el artículo 117 de la Ley de

Amparo señala lo siguiente: «**Artículo 117.** La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días.—Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado.—En el sistema procesal penal acusatorio, la autoridad jurisdiccional acompañará un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes.—Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o. de esta ley.—En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo ...».—Así, se destaca que es obligación del juzgador de amparo dar vista a las partes con el informe justificado que rinda la autoridad responsable; para lo cual, éstas tienen diversas prerrogativas a su favor, entre ellas, la de objetar dicho informe o bien, las constancias que se acompañen al mismo, únicamente en cuanto a su autenticidad o continente, acorde con la jurisprudencia P./J. 5/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo (sic): «INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD.»; como en el particular podría ser el disco versátil digital (DVD) que anexa la autoridad responsable como justificación de su informe, el cual contiene la decisión judicial reclamada.—Además, en el caso concreto, la autoridad responsable debe acompañar a su informe con justificación un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, indicando el orden de intervención de cada una de las partes; cuestión que corrobora el contenido del DVD.—En ese orden de ideas, se advierte que si el medio digital que contiene la videograbación de la resolución reclamada fue remitido al juzgado

de distrito por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, la cual pertenece al Poder Judicial, a quien le corresponde su resguardo, y que dicha remisión se hizo a través de las oficinas que pertenecen precisamente al Poder Judicial, mediante un oficio que cumplió con las formalidades de ley, esto es, que contiene la firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello correspondiente; además de que se acompañó al mismo el índice cronológico del desarrollo de la audiencia, y que el órgano jurisdiccional que conoció del asunto de que se trata corroboró que la diligencia respectiva, en efecto se encontraba registrada en el DVD; es inconcuso que existe certeza en el contenido de la información que remite la autoridad de amparo, a pesar de que el disco óptico de referencia no contenga la certificación a que se refiere el numeral 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues, como se vio, la reforma constitucional que aborda el tema fue posterior a la entrada en vigor de esa legislación procesal, además de las otras circunstancias que le dan certeza a aquél, las cuales se destacaron con antelación.—De esa guisa, se estima que la certificación del disco versátil digital no es un requisito inexorable que amerite la reposición del procedimiento en el juicio constitucional, toda vez que la información que contiene el informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como las constancias acompañadas a éste, concatenados con los datos de la demanda de amparo, permiten dar certidumbre de que ese archivo digital contiene efectivamente la decisión judicial reclamada.—Ello sin perjuicio de que si la autoridad de amparo advierte que no existe coincidencia entre el contenido del disco óptico y la resolución reclamada, pueda requerir de oficio a la autoridad responsable las constancias necesarias para la resolución del asunto, de conformidad con lo establecido en el numeral 75 de la ley de la materia.—Por todo lo anterior, no se comparte el criterio en que se sustenta este fallo, esto es, la siguiente jurisprudencia: Décima Época, con número de registro digital: 2017095. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 55, Tomo IV, junio de 2018, materia penal, tesis II.1o. J/6 (10a.), página 2724: «VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI EL JUEZ FEDERAL RESUELVE CON BASE EN LOS DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD´S) QUE LAS CONTIENEN SIN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS CON EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. A partir de la instauración del sistema procesal penal acusatorio y oral, las videograbaciones de las

audiencias contenidas en archivos informáticos almacenados en un soporte material, como lo es un disco versátil digital (DVD), constituye un medio apto para producir seguridad en las actuaciones que se generen por el juzgador, así como para garantizar la legalidad y transparencia del desarrollo de cada una de las etapas del proceso penal, como lo disponen los artículos 40 y 41 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (abrogado) y 50, 51, 61 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que los discos que se emitan deben considerarse documentos públicos, pues forman parte de un expediente judicial que contiene el resultado del desahogo de las diligencias inherentes al proceso y, por ende, deben estar certificados, es decir, contener el sello del órgano jurisdiccional, así como la firma o rúbrica del servidor público correspondiente que los expida, a fin de dar certeza sobre su autenticidad a las partes intervinientes. En ese sentido, si el Juez Federal emitió una sentencia basándose en los discos versátiles sin certificación, ello constituye una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento para el efecto de que se allegue de esos documentos debidamente certificados y, en su momento, vuelva a emitir la resolución correspondiente.—Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.—Amparo en revisión 65/2017. 8 de junio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Alberto Casasola Mendoza. Secretario: Carlos A. Alonso Espinosa.—Amparo en revisión 214/2017. 8 de junio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Alberto Casasola Mendoza. Secretario: Francisco Javier Bravo Hernández.—Amparo en revisión 115/2017. 22 de junio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Hernández Infante. Secretaria: Paloma Xiomara González González.—Amparo en revisión 213/2017. 7 de julio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Sánchez Jiménez. Secretario: Germán Velázquez Carrasco.—Amparo en revisión 158/2017. 13 de julio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Hernández Infante. Secretaria: Georgina Isabel Lagunes Leano.—Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 1a./J. 43/2013 (10a.), de título y subtítulo: <VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.>, publicada en el *Semanario*

Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XXIII, Tomo 1, agosto de 2013, página 703.».—Por ejecutoria del 2 de octubre de 2019, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 91/2019 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.—Esta tesis se publicó el viernes 1 de junio de 2018 a las 10:07 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 4 de junio de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.—Por el contrario, me adhiero al criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, contenido en la siguiente jurisprudencia: Décima Época. Con número de registro digital: 2020244. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 68, Tomo III, julio de 2019, materia penal, tesis VI.3o.P. J/1 (10a.), página 1972: «"DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD'S) QUE CONTIENEN LAS VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. A LA LUZ DE LA TRAMITACIÓN DE UN PROCESO PENAL DE ESTA NATURALEZA, TIENEN EL CARÁCTER DE UNA PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, POR LO QUE AUN CUANDO CAREZCAN DEL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, NO DEBE PONERSE EN DUDA SU CONTENIDO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA. Los discos versátiles digitales (DVD´S) que contienen las videograbaciones de las audiencias del sistema penal acusatorio y oral, a la luz de la tramitación de un proceso penal de esta naturaleza, conforme al artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales y acorde con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de título y subtítulo: <VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.>, tienen el carácter de una prueba instrumental de actuaciones, al tratarse de las diligencias o actos que conforman un proceso penal de corte acusatorio, guardados en un archivo digital y, por ende, aptos para acreditar la existencia de un acto procesal; además

de que no obstante estar soportados en medios digitales, su contenido hace patente la realización de un acto jurídico procesal. Por tanto, aun cuando dichos discos carezcan del sello y la firma correspondientes, no debe ponerse en duda su contenido, si existen otras circunstancias que le dan certeza a éste, como pudieran ser, por ejemplo, que fueron remitidos al tribunal de apelación por la autoridad del Poder Judicial a quien corresponde su resguardo y esa remisión se hizo por conducto de las oficinas que pertenecen precisamente al Poder Judicial, mediante un oficio que cumplió con las formalidades de ley, esto es, que contiene la firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello correspondiente y, sobre todo, ante el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoció del asunto de que se trata, corroboró que la diligencia respectiva, en efecto se encontraba registrada en el DVD.—Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.—Amparo en revisión 292/2018. 7 de diciembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Mata Morales. Secretaria: Matilde Garay Sánchez.—Amparo en revisión 304/2018. 7 de enero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: José Salvador Roberto Jiménez Lozano. Secretario: Rodolfo Tehózol Flores.—Amparo en revisión 307/2018. 17 de enero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Mata Morales. Secretaria: Beatriz Eugenia Díaz Naveda.—Amparo en revisión 25/2019. 21 de febrero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Lino Camacho Fuentes. Secretario: Julián Rodrigo Juárez Lozada.—Amparo en revisión 45/2019. 14 de marzo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Mata Morales. Secretaria: Beatriz Eugenia Díaz Naveda.—Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 455/2012 y la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXIII, Tomo 1, agosto de 2013, páginas 646 y 703, respectivamente.—La presente tesis aborda el mismo tema que la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 316/2018, que es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 91/2019, pendiente de resolverse por la Primera Sala.—Esta tesis se publicó el viernes 5 de julio de 2019 a las 10:12 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de julio de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.».—En ese sentido, considero que en el presente caso no debió ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, sino estudiar el fondo del asunto.'."



En tanto, los Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en sesión de catorce de marzo de dos mil diecinueve, en unanimidad de votos resolvieron el amparo en revisión **********, interpuesto por el quejoso, donde en la materia de la revisión, revocaron la sentencia recurrida y negaron el amparo solicitado, en el juicio de amparo **********, del índice del Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, contra el acto reclamado consistente en la resolución de nueve de octubre de dos mil dieciocho dictada por el Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en los autos del toca penal número **********, mediante la cual revocó la resolución dictada en audiencia de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en la que se resolvió sobre las medidas cautelares, por la Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (actuando como Jueza de Control), en la causa penal **********, seguida contra el impetrante por el hecho señalado por la ley como delito de posesión ilícita de petrolífero.

Las consideraciones de dicha ejecutoria, son las siguientes:

"QUINTO.—Los agravios hechos valer por la recurrente, son fundados.—Antes de continuar se estima pertinente dejar establecido que el análisis de la resolución recurrida se efectuará a la luz de los motivos de inconformidad que vierte la recurrente, agente del Ministerio Público adscrita al Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito –órgano técnico perito en derecho–, en virtud de que en términos del artículo 79, fracción III, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, tratándose de materia penal, sólo se encuentra contemplada la facultad de suplir la deficiencia de la queja a favor del inculpado y la víctima o el ofendido; además de que tampoco se está en los supuestos que prevé dicho numeral, en sus fracciones I y II.—Resulta de puntual aplicación la jurisprudencia número 19, sustentada por (sic) Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que este tribunal comparte, consultable en la página 1622, Tomo XIV, diciembre de 2001, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, del rubro y texto siguientes: 'REVISIÓN EN MATERIA PENAL, LÍMITES EN LA.—La revisión en materia penal, cuando el recurrente lo sea el Ministerio Público, no somete al superior más que a los hechos apreciados en la primera instancia, y dentro de los límites marcados por la expresión

de agravios; de lo contrario, se convertiría en una revisión de oficio en cuanto a los puntos no recurridos, lo cual infringiría lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, que reserva de manera exclusiva al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos.'.—Ahora bien, del análisis de la sentencia recurrida, se advierte que la autoridad de amparo, concedió al quejoso ********** el amparo solicitado, respecto del acto reclamado que hizo consistir en la resolución de nueve de octubre de dos mil dieciocho dictada por el Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en los autos del toca penal número **********, mediante la cual revocó la resolución dictada en audiencia de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en la que se resolvió sobre las medidas cautelares, por la Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (actuando como Jueza de Control), en la causa penal **********, seguida contra el impetrante por el hecho señalado por la ley como delito de posesión ilícita de petrolífero, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción II, inciso b), de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos; atento a las siguientes consideraciones: Que se advirtió una transgresión a las formalidades del procedimiento que impacta en los derechos fundamentales del quejoso.—Que el trámite del recurso de apelación no fue llevado a cabo en la forma prevista en la ley, debido a que el disco óptico que contiene la decisión recurrida no se encuentra firmado y sellado, en términos de lo ordenado por el artículo 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo cual imposibilitaba al tribunal de alzada para emitir el fallo respectivo.—Que acorde con lo dispuesto por el artículo 474 el órgano jurisdiccional enviará al tribunal de alzada 'los registros correspondientes al tribunal de alzada que deba conocer del mismo', y conforme a lo estatuido en el artículo 20 constitucional, en el proceso penal de corte acusatorio prevalece la oralidad y se rige por un sistema de audiencias, y por lo que ve a las audiencias orales, la codificación de la materia –en el artículo 61– establece que podrán ser registradas a través de cualquier medio tecnológico que la autoridad judicial tenga a disposición y enfáticamente señala que su 'grabación o reproducción se considerará como parte de las actuaciones y registros', aunado a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –en jurisprudencia firme– de rubro: 'VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS

INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.', sustentó que el disco versátil digital (DVD), en el que estén almacenados los archivos informáticos de las audiencias celebradas en ese tipo de procedimientos, gozan de la naturaleza de una 'prueba instrumental pública de actuaciones'.—Que el acto procesal de certificación es una atribución conferida exclusivamente al asistente de constancias y registro de Juez de Control o, en su caso, al asistente de despacho judicial. Ello, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho.—Que el Segundo Tribunal Unitario de este Circuito tuvo por recibido el oficio librado por el asistente de despacho judicial adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla para el trámite de la apelación formulada dentro de la causa penal ********** en donde se enlistaron las constancias que la Jueza de Distrito remitió para la sustanciación del indicado recurso, y previo requerimiento, el juzgado de origen remitió 'el disco óptico de la audiencia recurrida'.—Que en la sentencia reclamada –de nueve de octubre de dos mil dieciocho– se llevó a cabo el estudio correspondiente de la decisión judicial, primordialmente con base en la videograbación enviada por la resolutora federal de primer grado, asentándose: 'CUARTO.—Una vez analizado el disco óptico continente de la audiencia de imposición de medidas cautelares apelada y además constancias remitidas para sustanciar la alzada, se estiman esencialmente fundados los agravios hechos valer por la representante legal de la parte ofendida ...'.—Que el soporte material remitido por la Jueza especializada –en el que se sustentó la determinación judicial reclamada– carece de la certificación exigida por el artículo 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales y de los signos visibles necesarios para su validez. Esto es, la leyenda de que se trata de una copia fiel de su original, el nombre y firma de los servidores públicos autorizados (aludidos en el apartado que antecede) y el sello del órgano jurisdiccional.—Que, por tanto, resultaba evidente que el tribunal de alzada no tuvo a la vista un documento fidedigno de la resolución recurrida en la apelación, o sea, la pronunciada oralmente por el juzgador de origen durante la audiencia relativa; ello sin perjuicio de que tuviera a su alcance la 'versión escrita control

(sic) detención, vinculación a proceso y medidas cautelares' –elaborada en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales–, pues este documento escrito no es el idóneo para resolver el recurso de apelación.—Que el tribunal de amparo no estaba facultado para requerir al juzgador federal con el objeto de que exhibiera el disco óptico debidamente certificado; pues, de hacerlo, se contravendría el artículo 75 de la Ley de Amparo.—Se invocó la jurisprudencia de rubro: 'VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI EL JUEZ FEDERAL RESUELVE CON BASE EN LOS DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD´S) QUE LAS CONTIENEN SIN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS CON EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.'.—Y procedió a otorgar la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la responsable: 'a) ... deje insubsistente la resolución de nueve de octubre de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca penal **********; b) Recabe el disco óptico correspondiente a la audiencia de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, el cual debe encontrarse debidamente certificado –es decir, con estricta sujeción a los lineamientos puntualizados en el cuerpo de esta resolución constitucional–; y, c) Tras obtener la citada documental, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, resuelva lo que en derecho proceda.'.—Ahora bien, en relación con lo anterior la agente del Ministerio Público recurrente hace valer los siguientes agravios: - El Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito, al emitir la resolución reclamada lo hizo en estricto apego a derecho, puesto que el Juez de Distrito remitió los registros de la causa penal de origen al tribunal de alzada, entre ellos el disco versátil digital, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios de Sexto Circuito, lo cual se hizo a través de un oficio que cumplió con todas las formalidades que se requieren, pues este tiene firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello correspondiente; por lo que no debe dudarse de la veracidad del contenido del disco que anexó el Juez de Primera Instancia, ya que las comunicaciones y trámite se hicieron a través de las oficinas correspondientes y pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, sin que participara algún intermediario que tenga interés en manipular el disco versátil digital para conducir un error al Magistrado de alzada, como se establece en el artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales les (sic) Videograbaciones que



sean examinadas por otros órganos estarán bajo resguardo del Poder Judicial de la Federación.—De la resolución de nueve de octubre de dos mil dieciocho, dictada del toca penal **********, en el considerando cuarto se dijo lo siguiente: 'CUARTO.—Una vez analizado el disco óptico continente de la audiencia de imposición de medidas cautelares apelada y además constancias remitidas para sustanciar la alzada, se estiman esencialmente fundados los agravios hechos valer por la representante legal de la parte ofendida ...'. De lo que se desprende que el Magistrado responsable sí corroboró el contenido del disco versátil digital (DVD), constatando que corresponde a la audiencia apelada, y a las partes de la causa penal **********, tal y como se aprecia en el anverso del disco (datos de identificación), éste contiene la gráfica del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, de (sic) Poder Judicial de la Federación, además de la leyenda que refiere que es una copia autorizada con validez y eficiencia en términos del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que también genera una presunción, pues solo el Poder Judicial es quien emite un disco versátil digital con esas características.—En la especie no resulta aplicable el artículo 70 del Código Nacional de Procedimiento Penales, pues solo habla de resoluciones y el caso que nos ocupa es la videograbación contenida en un disco DVD y en relación a la aplicación del artículo 71 del código referido, habla de copia auténtica con certificación, pero, señala que cuando la sentencia conste en medios informáticos, electrónicos magnéticos o producidos por nuevas tecnologías, la autenticación de la autorización del fallo por el órgano jurisdiccional, se hará constar a través del medio o forma más adecuada, de acuerdo con el propio sistema utilizado, es decir, es factible la forma en que se encuentra el disco, pues con los datos que ostenta, sí se genera certeza jurídica.—El Magistrado de amparo cae en un excesivo formalismo, al considerar que sólo existe certeza jurídica cuando el disco versátil digital contenga la firma y sello de la autoridad correspondiente, pues pareciera que nos encontramos en el sistema penal tradicional; sin embargo, dicha certeza se da desde el momento mismo en que es anexado a los registros de la causa penal, así también cuando es reproducido y se constata que la audiencia corresponde a la que fue impugnada por las partes, es decir, esto aconteció cuando el Magistrado de alzada observó el contenido del disco y confirmó que sí corresponde al caso que nos ocupa y por ello pudo resolver el asunto.—En relación con la jurisprudencia invocada por la autoridad de amparo, de rubro: 'VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI EL JUEZ FEDERAL RESUEL-

VE CON BASE EN LOS DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD´S) QUE LAS CONTIENEN SIN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS CON EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.'; la misma va en contra de la naturaleza del sistema penal acusatorio, dado que la agilidad con la que se resuelven los asuntos, se ve interrumpida al ordenar una reposición del procedimiento aludiendo un absurdo formalismo en perjuicio del propio imputado, pues en el caso, el tribunal de alzada sí constató que el contenido del disco corresponde a la resolución impugnada, consecuentemente no existe violación al procedimiento.—Con base en el artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los Tribunales Colegiados y Unitarios de circuito, los Juzgados de Distrito, Tribunales Militares y Judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. O sea, no resulta obligatorio para este Circuito, sino únicamente para el segundo, de ahí que no se debe aplicar en el caso que nos ocupa.—Finalmente la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 81, fracción XXXV, establece como una atribución del Consejo de la Judicatura Federal fijar las bases de información estadística que permitan conocer y planear el desarrollo del Poder Judicial de la Federación, por ello existe un Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE), que es una herramienta con el objetivo de sistematizar la información generada por los órganos jurisdiccionales, es decir, en dicho sistema se reflejan las actuaciones de los juzgados y tribunales, en donde bien se pueden observar las audiencias que fueron video grabadas y se pueden compartir con el órgano jurisdiccional de alzada para que examine la resolución impugnada con la intención de agilizar el trámite; pero, en dicho sistema no se requiere firma ni sello de la autoridad correspondiente, de ahí que resulte totalmente inaplicable el criterio de la aludida jurisprudencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito.—Los motivos de inconformidad que se sintetizan en los párrafos precedentes devienen sustancialmente fundados ya que contienen la causa de pedir, lo cual resulta suficiente para proceder a su análisis[8] y dada la íntima relación

[8] Es aplicable la jurisprudencia P./J. 69/2000, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, Tomo XII, del mes de agosto de 2000, materia común, del

que guardan, se analizan de manera conjunta.—En efecto, en primer lugar debe decirse que asiste razón al Ministerio Público recurrente al aseverar que es incorrecta la consideración de la autoridad de amparo en el sentido de estimar que sólo existe certeza jurídica en torno al origen y confiabilidad de los registros digitales de videograbación que se contienen en el disco versátil digital que remite la autoridad respectiva, cuando en dicho disco se contenga la firma y sello de dicha autoridad.—Cierto, como se anotó en párrafos precedentes, la autoridad de amparo en esencia concedió la protección constitucional a la parte quejosa, al estimar que el disco que tuvo a la vista el Magistrado responsable, al resolver el recurso de apelación del cual derivó el acto reclamado, carece de eficacia jurídica al no contar con el sello y firma de la Jueza de Control –o del facultado para tal efecto–, puesto que esta última es, en términos de lo establecido por el artículo 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el requisito necesario para estimar válida la certificación respectiva; de tal manera que al carecer de eficacia jurídica el disco versátil digital, la resolución que constituye el acto reclamado es violatoria de derechos fundamentales, puesto que de suyo ello implica que tal determinación se dictó tomando en consideración sólo la versión escrita de la resolución apelada, lo que es ilegal en virtud de que el procedimiento del que deriva el acto reclamado es acusatorio y oral.—Ahora bien;

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital: 191383, de rubro y texto siguientes: "AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.—Tomando en cuenta lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 2a./J. 63/98, visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 323, cuyo rubro es 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.', esta Suprema Corte de Justicia arriba a la conclusión de que los agravios que se hagan valer dentro de los recursos que prevé la Ley de Amparo no necesitan cumplir con formalidades rígidas y solemnes, ya que, por una parte, los diversos preceptos de este ordenamiento que regulan los referidos medios de defensa no exigen requisitos para su formulación y, por otra, el escrito a través del cual se hagan valer éstos debe examinarse en su conjunto, por lo que será suficiente que en alguna parte de éste se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que las respectivas consideraciones le provocan, así como los motivos que generan esta afectación, para que el órgano revisor deba analizarlos; debiendo precisarse que esta conclusión únicamente exime al recurrente de seguir determinado formalismo al plantear los agravios correspondientes, mas no de controvertir el cúmulo de consideraciones que, por su estructura lógica sustentan la resolución recurrida, o, en su caso, las circunstancias de hecho que afectan la validez de esta última."

a efecto de poner de manifiesto lo incorrecto de la determinación de la autoridad de amparo, se precisa aludir a las consideraciones a las que arribó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 455/2012, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del este Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, de la que emergió la jurisprudencia número 43/2013, de rubro: 'VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.'.—Y así entonces estableció que una audiencia/diligencia almacenada en un soporte material como lo es un disco versátil digital (DVD): a) A la luz de la tramitación de un proceso penal de corte acusatorio, detentan la naturaleza jurídica de una prueba instrumental de actuaciones, al tratarse de las diligencias o actos que conforman un proceso penal de corte acusatorio; es decir, tales herramientas electromagnéticas solo constituyen piezas o actuaciones procesales empleadas por los juzgadores para dejar constancia de la actividad jurisdiccional desplegadas en los asuntos de su conocimiento.—Determinando al efecto, textualmente: 'Consecuentemente, las diligencias o actuaciones desahogadas en un proceso penal de corte acusatorio que son videograbadas y posteriormente almacenadas en formatos digitales (DVD), son constitutivas de verdaderas pruebas instrumentales públicas de actuaciones aptas para acreditar la existencia de un acto procesal y que, además, otorgan algún grado de convicción al juzgador, por tanto, válidamente forman parte del proceso al cual se encuentran asociadas.—De esta forma, resulta válido concluir que respecto al primer punto de derecho que motivó la intervención de este Alto Tribunal, que la naturaleza jurídica procesal de las videograbaciones de audiencias orales en el seno de un procedimiento acusatorio y oral –mismas que se reitera, son almacenadas y preservadas en un registro o soporte electrónico– es la de una prueba instrumental de actuaciones. Lo anterior, se insiste, toda vez que las audiencias videograbadas, no obstante estar soportadas en medios digitales, su contenido hace patente la realización de un acto jurídico procesal,



mismas que, además, técnicamente son susceptibles de llevar convicción al juzgador respecto de su eficacia o alcance jurídico ...'.—b) En tratándose de la tramitación de un juicio de amparo, cuando el disco versátil digital en el que se contiene la audiencia videograbada fuese remitido por la autoridad responsable, como anexo o sustento de su informe justificado, su naturaleza jurídica –de dicho disco– será de una prueba documental pública.—Al respecto se lee: '... Por tanto, debe considerarse que la naturaleza jurídica procesal de las constancias o diligencias que eventualmente fuesen remitidas al Juez de Control constitucional como anexo o complemento de su informe justificado –se reitera, tendentes a acreditar la existencia y constitucionalidad de sus actos reclamados– detenta la naturaleza jurídica de una prueba documental pública, en tanto que esa categoría le es reconocida por la ley y la jurisprudencia a aquellos escritos que consignan hechos o actos jurídicos, realizados y expedidos por las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones ...'.—Así entonces, para la resolución del presente asunto, lo que importa es la naturaleza jurídica procesal de una audiencia/diligencia almacenada en un soporte material como lo es un disco versátil digital (DVD), visto a la luz de la tramitación de un proceso penal de corte acusatorio, es decir, como una instrumental de actuaciones.—Y, en la especie, el disco de que se viene hablando (que la autoridad responsable tuvo a la vista para emitir la resolución reclamada –al respecto estableció: 'CUARTO.—Una vez analizado el disco óptico continente de la audiencia de imposición de medidas cautelares apelada y además constancias remitidas para sustanciar la alzada, se estiman esencialmente fundados los agravios hechos valer por la representante legal de la parte ofendida ...', indudablemente tiene ese carácter, puesto que en él se contiene el registro de la audiencia correspondiente que el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario de Circuito analizó al emitir el acto reclamado; registro que se efectuó en términos de lo establecido por el artículo 61[9] del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que contrario a lo sos-

[9] "**Artículo 61**. Registro de las audiencias
"Todas las audiencias previstas en este código serán registradas por cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición el órgano jurisdiccional.
"La grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considerará como parte de las actuaciones y registros y se conservarán en resguardo del Poder Judicial para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento y de las partes, garantizando siempre su conservación."

tenido por el órgano de amparo, no requiere para su validez de sello y firma, pues la certeza de su contenido, como lo sostiene el Ministerio Público recurrente, se pone de manifiesto ante el hecho de que dicho disco fue remitido al tribunal de apelación –responsable– por conducto de la Oficialía de Partes del Segundo Tribunal Unitario de este Circuito, a través de un oficio que cumplió con las formalidades, esto es, que contiene la firma autógrafa del asistente de despacho judicial adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, así como el sello correspondiente; documento en el que se establece, entre otras cosas, que se remite 'el disco óptico la audiencia recurrida'.—Lo anterior, en efecto, da certeza en cuanto a que el contenido del disco versátil de que se viene hablando, corresponde a la audiencia de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, puesto que en efecto, quien remitió al tribunal de alzada dicho disco fue una autoridad del Poder Judicial de la Federación –a quien corresponde el resguardo del mismo– y lo hizo por conducto de las oficinas que pertenecen precisamente al Poder Judicial de la Federación; de ahí entonces que no sea válido poner en duda su contenido, máxime cuando, como lo sostiene el Ministerio Público, el propio Magistrado responsable a quien correspondió resolver el recurso de apelación corroboró que la diligencia apelada en efecto se encontraba registrada en el DVD multicitado.—No se soslaya que la autoridad de amparo invoca como sustento de su consideración la jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en la ciudad de Nezahualcóyotl del Estado de México, de rubro: 'VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI EL JUEZ FEDERAL RESUELVE CON BASE EN LOS DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD´S) QUE LAS CONTIENEN SIN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS CON EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.'; sin embargo, la misma es inaplicable, puesto que en ella se hace pronunciamiento en relación al valor que tienen los citados discos dentro del procedimiento de amparo y en la especie, como se anotó, se establece la eficacia de éstos dentro del procedimiento penal de origen.—Así las cosas; como acertadamente lo hace valer el Ministerio Público recurrente, fue incorrecto que la autoridad de amparo hubiese otorgado la protección constitucional al quejoso bajo el argumento que el disco que tuvo a la vista la autoridad responsable, al resolver el recurso de apelación



del que derivó la resolución apelada, carece de eficacia jurídica al no constar de sello y firma del Juez de Control –o del facultado para realizar la certificación respectiva–, por lo que este órgano colegiado, con fundamento en lo establecido por el artículo 93, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procede a analizar los conceptos de violación que hizo valer el quejoso ********** en contra del acto que al efecto reclamó, cuyo estudio omitió la autoridad de amparo y para ello se estima pertinente reproducir íntegramente dichos conceptos de violación, lo que se hace en el siguiente considerando."

Por su parte, los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en sesión de doce de diciembre de dos mil diecinueve, en unanimidad de votos con un voto aclaratorio de uno de sus integrantes, resolvieron el amparo en revisión **********, interpuesto por la agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita al Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, donde en la materia de la revisión, modificaron la sentencia recurrida y concedieron el amparo solicitado, en el juicio de amparo **********, del índice del Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, contra el acto reclamado al Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del mismo Circuito, consistente en la resolución dictada en el toca penal **********, en la que se revocó la diversa de quince de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el Juez de Control de la Región Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, Puebla, en auxilio de la Justicia Federal, en la causa penal de registro ********** (actualmente ********** del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla) en la cual determinó no vincular a proceso a los imputados, por los hechos señalados en la ley como delitos de tentativa de homicidio, contra servidores públicos, y portación de arma de fuego sin licencia.

La parte considerativa de la ejecutoria pronunciada, es del tenor siguiente:

"QUINTO.—Dada la calidad de la parte recurrente se tiene que no opera a su favor la institución de la suplencia de la queja deficiente, por no ubicarse en alguna de las hipótesis del artículo 79 de la Ley de Amparo, por lo que el análisis de los motivos de inconformidad expresados será bajo el principio de estricto derecho.—Bajo esa premisa, este Tribunal Colegiado estima fundado, en esencia, el concepto de agravio expuesto por la fiscal inconforme, relativo a que

aun con ausencia de firma y sello en el disco óptico que contiene la audiencia de no vinculación a proceso de quince de diciembre de dos mil diecisiete, debe considerarse certeza jurídica para proceder a resolver el recurso de apelación.—En principio se analiza la validez de los discos ópticos cuando son enviados por parte de la autoridad para conocer del recurso de apelación interpuesto, en términos de lo que establece el numeral 474 del Código Nacional de Procedimientos Penales[10].—Debe distinguirse como una tensión interesante el enfrentamiento tácito entre dos formas de validez diferentes de lo que denominamos –certificación de actuaciones– provenientes de dos sistemas distintos.—Así, en un sistema procesal llamado tradicional o mixto se exigía la presencia de un secretario dotado de fe durante la práctica de cualquier acto jurisdiccional[11].—La ley procesal establecía que cuando era necesaria la certificación de algún testimonio se constreñía al secretario conferido de fe, para dar validez al cotejo de las copias de constancias que se mandaran expedir, y las autorizaría con su firma y el sello correspondiente[12].—En cambio, el sistema penal acusatorio no requiere de testigos de asistencia o secretarios que den fe de los actos jurisdiccionales para considerarlos válidos.—Lo anterior es así porque es el propio juzgador quien tiene fe de sus actos procesales, los cuales son vinculados con los principios constitucionales rectores del sistema, entre ellos el de inmediación[13] y publicidad,[14] este último que tiene funcionalidad de control de las decisiones

[10] "Artículo 474. Concluidos los plazos otorgados a las partes para la sustanciación del recurso de apelación, el órgano jurisdiccional enviará los registros correspondientes al tribunal de alzada que deba conocer del mismo."

[11] Código Federal de Procedimientos Penales (abrogado)
"Artículo 16. El Juez, el Ministerio Público y la Policía estarán acompañados, en las diligencias que practiquen, de sus secretarios, si los tuvieren, o de dos testigos de asistencia, que darán fe de todo lo que en aquéllas pase."

[12] "Artículo 25. Los secretarios de los tribunales cotejarán las copias o testimonios de constancias que se mandaren expedir, y las autorizarán con su firma y el sello correspondiente."

[13] Código Nacional de Procedimientos Penales
"Artículo 9. Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de intervenir en la misma, con las excepciones previstas en este código. En ningún caso, el órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva."

[14] Código Nacional de Procedimientos Penales
"Artículo 5. Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general, con las excepciones previstas en este código."

tomadas en audiencia ante el público que asistiere a ellas, las cuales además, en todos los casos, quedan registradas en audio y video.—Otra distinción principal deriva de la forma de integrar un expediente, pues mientras en el sistema tradicional o mixto esta forma de construcción de caso se lleva a cabo, a partir del registro escrito que es producto del conjunto de prácticas de una verdadera multitud de funcionarios –secretarios, actuarios, escribientes–, el sistema penal acusatorio busca instalar a la oralidad en el centro de la escena, al documentar en un expediente administrativo, acuerdos de gestión para la preparación de audiencias, a través de las cuales se tomaran las decisiones jurisdiccionales, y atendidas éstas, serán motivo de transcripción para generar el antecedente, pues así lo dispone el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales[15].—Como es de observarse, la escrituración en el sistema tradicional o mixto conlleva al formalismo que incluye la exigencia, entre otras características, de asentar en las actuaciones del día o agregado los documentos recibidos, el deber de foliar y rubricar las hojas respectivas por parte del secretario, poner el sello del tribunal en el fondo del cuaderno, de manera que abrace las dos caras.—Estas actuaciones debían ser autorizadas inmediatamente por los funcionarios a quienes correspondía firmar, dar fe o certificar el acto en todas las actuaciones.—Así, cuando alguna de las exigencias de formalidad no se cumplían, la propia ley procesal las consideraba nulas[16].—Para el caso del sistema procesal acusatorio, reflexionar sobre un nuevo modelo estructural de los juzgados, implica considerar la forma en que se organiza su personal e interactúa entre sí

[15] "Artículo 67. La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes."

[16] "Artículo 27 Bis. Las actuaciones serán nulas cuando carezcan de alguna de las formalidades esenciales que prevenga la ley, de manera que se, cause perjuicio a cualquiera de las partes, así como cuando la ley expresamente determine la nulidad. Esta no podrá ser invocada por quien dio lugar a ella. La nulidad de una actuación se reclamará, por la parte que la promueva, en la actuación subsecuente en que ésta deba intervenir, y se sustanciará conforme al procedimiento previsto para los incidentes no especificados. Cuando se resuelva la nulidad del acto, serán igualmente nulas las actuaciones posteriores al acto anulado que se deriven precisamente de éste. Las resoluciones que resuelvan sobre la nulidad invocada, serán apelables con efecto devolutivo."

y con sus usuarios, depende –como en cualquier organización– de los procesos –interpretados en un sentido amplio, es decir como secuencias organizadas de actividades y no sólo desde su perspectiva jurídica– que allí se ejecutan.—Estos, a su vez, dependen de los objetivos y estrategias institucionales, sea que existan o no de manera expresa y en el caso de los juzgados, además de su marco legal.—En principio el Código Nacional de Procedimientos Penales no precisa funciones operativas de gestión administrativa.—Por su parte la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé únicamente que el Juez de Control y el tribunal de enjuiciamiento se auxiliarán del número de asistentes de constancias y registros, y del personal que determine el presupuesto,[17] estableciendo que las cuestiones no previstas serán determinadas por el Consejo de la Judicatura Federal, a través de acuerdos generales[18].—Por su parte, el Manual de Organización y Puestos del Centro de Justicia Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, constituye un cuerpo normativo de carácter técnico-administrativo para identificar y reflejar de manera formal los aspectos organizativos y funcionales del Centro de Justicia Penal, delimitando a su vez las responsabilidades de los puestos que conforman su estructura organizacional.—Por lo que en tratándose al puesto de asistente de constancias y registro de Primera Instancia y Ejecución de Penas no establece la función autorizada de certificación de las copias de registros audio visuales, pero sí la función de apoyar en la elaboración de constancias por escrito de resoluciones, atendiendo a la motivación y fundamentación a partir de los puntos resueltos y cumpliendo con las disposiciones legales en su elaboración.—Así también establece en el rubro de responsabilidades: '... Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, en lo que no se oponga a los principios del Sistema Procesal Penal Acusatorio.'.—Ahora, el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, del que parte el Primer Tribunal Unitario de Amparo, conforma un instrumento normativo de carácter técnico-administrativo que contiene

[17] "Artículo 59. El Juez de Control y el tribunal de enjuiciamiento se auxiliarán del número de asistentes de constancias y registros, y del personal que determine el presupuesto."
[18] "Artículo 67. Las cuestiones no previstas en este capítulo serán determinadas por el Consejo de la Judicatura Federal, a través de acuerdos generales."

84 descripciones de puestos y se constituye como el instrumento básico que define el objetivo, funciones, responsabilidades, manejo de recursos y entorno laboral, formación académica, experiencia laboral y otros requisitos por cada uno de los puestos que integran el Catálogo General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal.—Cabe destacar que, por lo que refiere a las funciones del asistente de constancias y registro de Juez de Control se establece, en términos generales, que su función radica en apoyar al Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en la elaboración de las versiones escritas de resoluciones que legalmente deban constar de esa forma y de aquellas otras actuaciones judiciales que se le instruyan, estableciendo la fundamentación y motivación pertinentes y congruentes al sentido de lo resuelto, en estricto cumplimiento a las formalidades previstas por las disposiciones aplicables.—Así en el punto 6 del apartado denominado funciones, dice: 'II.2 Funciones: ... 6. Certificar y autenticar todos los hechos o actos jurídicos que le soliciten los Jueces Especializados en el Sistema Penal Acusatorio. ... De lo anterior se obtiene que no solo el Juez de Control es el funcionario autorizado para realizar certificaciones, sino también por disposición reglamentaria, el asistente de constancias y registro de Juez de Control de acuerdo a la disposición transcrita.—Sucede; sin embargo, que la función de certificar a que alude este instrumento normativo en operatividad de un sistema procesal acusatorio no debe ser considerado como un acto de certificación con los requisitos del sistema tradicional o mixto, pues como se ha hecho referencia, los requisitos de sello y distintivo gráfico se precisaban como exigencias establecidas en el propio código procesal del sistema anterior,[19] donde el secretario que desarrollaba esa actividad estaba dotado de fe pública.—Como se ha considerado en líneas precedentes, la característica esencial del sistema procesal penal acusatorio es centralizar las decisiones jurisdiccionales con el respeto de los principios constitucionales del sistema (contradicción, concentración, publicidad, inmediación y continuidad), lo que torna innecesaria la figura de testigos de asistencia o personal que de fe de los actos jurídicos que desarrolla el juzgador.—Si esto es así, habrá que dotar de conte-

[19] Código Federal de Procedimientos Penales
"Artículo 25. Los secretarios de los tribunales cotejarán las copias o testimonios de constancias que se mandaren expedir, y las autorizarán con su firma y el sello correspondiente."

nido al concepto de 'certificar' acorde a la naturaleza y finalidad de un sistema procesal penal acusatorio, cuyo eje rector es privilegiar la oralidad como un mecanismo de interacción comunicativa sin formulismos entre partes y juzgador, lo que también involucra la comunicación entre autoridades para dar agilidad y eficiencia a los tramites de gestión jurisdiccional en pro del acceso a la justicia pronta y expedita.—Desformalizar no quiere decir pasar por alto las reglas, sino usarlas de manera elástica evitando sacramentalismos fútiles que propician un retardo en la administración de justicia.—En esencia del concepto 'certificar' el diccionario de la Real Academia de la Lengua, establece el siguiente significado: 'Asegurar, afirmar, dar por cierto algo'.—Si ello es así, se estima necesario realizar una interpretación sistémica al contenido del artículo 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se sustenta el tribunal de amparo para concluir una transgresión a las formalidades del procedimiento, que ameritó la concesión de amparo por el hecho de que el disco óptico enviado al tribunal de alzada, no presenta firma y sello.—El artículo 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: 'Artículo 71. Se considera copia auténtica al documento o registro del original de las sentencias, o de otros actos procesales, que haya sido certificado por la autoridad autorizada para tal efecto.—Cuando, por cualquier causa se destruya, se pierda o sea sustraído el original de las sentencias o de otros actos procesales, la copia auténtica tendrá el valor de aquéllos. Para tal fin, el órgano jurisdiccional ordenará a quien tenga la copia entregarla, sin perjuicio del derecho de obtener otra en forma gratuita cuando así lo solicite. La reposición del original de la sentencia o de otros actos procesales también podrá efectuarse utilizando los archivos informáticos o electrónicos del juzgado.—Cuando la sentencia conste en medios informáticos, electrónicos, magnéticos o producidos por nuevas tecnologías, la autenticación de la autorización del fallo por el órgano jurisdiccional, se hará constar a través del medio o forma más adecuada, de acuerdo con el propio sistema utilizado.'.—Como premisa inicial debe destacarse que del contenido del dispositivo transcrito no se aprecia la exigencia de firma y sello para dar validez a un acto de certificación, como en ninguna otra disposición de carácter normativo que tenga aplicación al sistema procesal penal acusatorio.—Considerar auténtica una copia cuando ha sido certificada por la autoridad autorizada para tal efecto, implica que con el concepto del Diccionario de la Real Academia (sic)



debe considerarse como auténtica una copia del original cuando así se afirme por parte de la autoridad autorizada para ello, que de acuerdo al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, correspondería al propio juzgador de oralidad, como a su asistente de constancias y registro en quien puede delegar esa función.—Así, el distintivo gráfico (firma) y sello, en la materialidad del disco óptico, no es necesario en términos de ley para considerarlo como una copia auténtica del registro de la actuación de audio y video que se encuentra en resguardo de un Centro de Justicia Penal Federal, pues para ello basta la afirmación de la autoridad autorizada, por cualquier medio (oficio o comunicación oficial), para considerar una copia auténtica del registro audio visual.—Recordemos que la regla general para la comunicación entre autoridades en un sistema penal acusatorio tiende a ser ágil y eficiente, que permita por cualquier medio garantizar la autenticidad de su solicitud y sin mayor formalidad.[20] En esa misma línea de comunicación, cuando en el curso de una investigación el Ministerio Público deba comunicar alguna actuación a una persona, podrá hacerlo por cualquier medio que garantice la recepción del mensaje sin mayor requisito formal[21].—Resulta conveniente destacar que el primer párrafo del dispositivo trascrito hace alusión a documento o registro del original de las sentencias, o de otros actos procesales.—La propia ley procesal penal nacional establece en el artículo 380, lo siguiente: 'Artículo 380. Se considerará documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. Quien cuestione la autenticidad del documento tendrá la carga de demostrar sus afirmaciones. El órgano jurisdiccional, a solicitud de los interesados, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una videograbación o grabación, para leer o reproducir parcialmente el documento o la grabación en la parte conducente.'.—En el concepto amplio de documento que prevé la ley procesal, se comprende

[20] "Artículo 73. El órgano jurisdiccional o el Ministerio Público, de manera fundada y motivada, podrán solicitar el auxilio a otra autoridad para la práctica de un acto procedimental. Dicha solicitud podrá realizarse por cualquier medio que garantice su autenticidad. La autoridad requerida colaborará y tramitará sin demora los requerimientos que reciba."

[21] "Artículo 93. Cuando en el curso de una investigación el Ministerio Público deba comunicar alguna actuación a una persona, podrá hacerlo por cualquier medio que garantice la recepción del mensaje. Serán aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones de este código."

al registro audiovisual de audiencias con medios tecnológicos almacenado en cualquier soporte material incluyendo dispositivos de almacenamiento como los discos ópticos.—Empero, también el mismo dispositivo transcrito contempla que quien cuestione la autenticidad del documento tendrá la carga de demostrar sus afirmaciones.—De ello se obtiene que el principio de probidad y buena fe que regula la operatividad del sistema procesal penal,[22] no debe considerarse limitativo para las partes, sino que también debe apreciarse entre autoridades, pues suponer que la autoridad no envía sus registros auténticos porque no firmó y estampó el sello oficial en la materialidad del disco obstaculiza la impartición de justicia.—Así también, el concepto de documento mencionado involucra la posibilidad de otros dispositivos de almacenamiento como pueden ser memorias USB (Universal Serial Bus) o discos duros portátiles, entre otros.—Que bajo esa misma exigencia formal no prevista en la ley, se visualiza un escenario complicado para materialmente en la memoria o disco duro de almacenamiento estampar un sello y distinto grafico del juzgador para considerar que está afirmando de que su contenido es auténtico.—Luego, como lo afirma la recurrente, la legislación procesal de la materia no prevé expresamente las formalidades que debe reunir tal certificación, por tanto no es compatible atraer formalidades provenientes de un sistema tradicional o mixto al actual sistema penal acusatorio.—Como se ha precisado, si se cuenta con la afirmación de la autoridad autorizada para ello, por cualquier medio (oficio o comunicación oficial), se colman los requisitos mínimos legales para considerarla una copia autentica salvo prueba en contrario.—Lo anterior no focaliza el debate a si entraña alguna dificultad o entorpecimiento a la autoridad de las actividades de los Jueces de distrito especializados en el sistema penal acusatorio, pues lo cierto es que se están exigiendo formalidades que no prevé la ley en alguno de sus dispositivos y al ser así, se transgrede el principio de legalidad, al margen de la incompatibilidad con el sistema procesal acusatorio que se distingue por su

[22] "Artículo 107. Los sujetos del procedimiento que intervengan en calidad de parte, deberán conducirse con probidad, evitando los planteamientos dilatorios de carácter formal o cualquier abuso en el ejercicio de las facultades o derechos que este código les concede. El órgano jurisdiccional procurará que en todo momento se respete la regularidad del procedimiento, el ejercicio de las facultades o derechos en términos de ley y la buena fe."

flexibilidad y justicia pronta, sin causar dilaciones injustificadas[23].—Lo anterior no se confronta con el criterio expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocado por la autoridad de amparo, tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), de texto y rubro siguientes: 'VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del «expediente electrónico», como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado

[23] "Artículo 16. Justicia pronta
"Toda persona tendrá derecho a ser juzgada dentro de los plazos legalmente establecidos. Los servidores públicos de las instituciones de procuración e impartición de justicia deberán atender las solicitudes de las partes con prontitud, sin causar dilaciones injustificadas."

y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el Juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga[24].'.—En efecto los registros de audio en video almacenados en discos versátiles digitales (DVD) gozan para efectos de amparo de una prueba instrumental pública de actuaciones, pero no se confronta con el cumplimiento mínimo de certificación exigible en el sistema penal acusatorio, pues de lo contrario se importarían reglas procesales y formalidades de un sistema de naturaleza distinta para acceder al valor probatorio en el juicio de amparo, lo cual no se comparte por parte de este Tribunal Colegiado.—Entonces, si para considerar la presencia de una copia auténtica es necesaria la certificación a la autoridad autorizada para ello, que en el caso del sistema penal acusatorio corresponde al propio Juez de oralidad al ser este funcionario quien tiene fe pública, así como a su asistente de Sala en quien por disposición normativa puede delegar esa función, es suficiente el envío de una comunicación oficial que afirme o asegure que se trata de una copia auténtica del registro original para considerarla como tal, salvo prueba en contrario, por lo que es innecesario que el disco físico óptico se encuentre firmado y sellado, pues esas formalidades no se encuentran previstas en la ley.—En el caso particular la autoridad de instancia, luego de integrar el recurso de apelación interpuesto, envía mediante oficio las constancias a las que anexa copia del registro audiovisual generado con motivo de la audiencia materia del recurso (DVD), esa afirmación por parte de la autoridad jurisdiccional es suficiente para considerar una certificación del dispositivo de almacenamiento electrónico (disco óptico).—Exigir para ello en la materialidad del disco sello y firma como lo establece el tribunal de amparo, es contrario a las exigencias normativas, pues ninguna de ellas exige esos requisitos en el disco para considerarlo como certificado.—Dicho requisito es, además, contrario al principio de probidad, donde el órgano jurisdiccional debe procurar que en todo

[24] Tesis 1a./J. 43/2013 (10a.) *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, registro digital: 2004362, Primera Sala, Libro XXIII, Tomo 1, agosto de 2013, página 703, jurisprudencia, materias común y penal.

momento se respete la regularidad del procedimiento, el ejercicio de las facultades o derechos en términos de ley y la buena fe.—Presuponer que la autoridad jurisdiccional de instancia puede alterar, manipular o editar el contenido de una audiencia es adverso a este principio que debe interactuar también entre autoridades.—Máxime en aquellas que forman parte de la misma institución.—Así en el caso particular del oficio 22686/2018, signado por el asistente de despacho judicial adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, por el que remitió el registro audio visual (sic) consistente en un disco óptico, se observa la información siguiente: '... Tribunal Unitario del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula Puebla, en turno lo siguiente: 1. Escrito original por el que la agente del Ministerio Público Investigadora del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, interpone recurso de apelación en contra (sic) la resolución emitida en audiencia pública de quince de diciembre de dos mil diecisiete.—2. Copias certificadas de la presente causa penal, mismas que contienen la constancia general de audiencia y constancia de no vinculación a proceso.—3. El auto de doce de julio de la presente anualidad, por el cual se tuvo por interpuesto el citado recurso de apelación, así como sus respectivas notificaciones.—4. Disco óptico que contiene la audiencia pública de quince de diciembre de dos mil diecisiete, así como la del diecisiete de abril del año en curso ...' (hoja 2 del toca de apelación).—En tanto, en la carátula del disco compacto que remitió se observa la leyenda siguiente: 'El licenciado Lucino Cordero Estudillo, asistente de despacho judicial del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con fundamento en los artículos 50 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, certifica: Que la copia de audio y video que obra inmersa en el presente disco versátil digital (DVD) es auténtica del original de la causa penal PUE/48/2018, relativa a las audiencias celebradas el diez y quince de diciembre de dos mil diecisiete, así como la del diecisiete de abril de dos mil dieciocho. lo que se certifica para los efectos legales a que haya lugar, en Puebla, Puebla, a trece de agosto del dos mil dieciocho. conste.' (Carátula del disco óptico anexo).—Además, en la parte inferior derecha se observa la firma y sello de la Administración del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla.—Por tanto se cuenta con la afirmación de que se trata de una copia auténtica (certificación) de quien está autorizado para ello, pues aun cuando se cuenta con la leyenda en la carátula la cual era innecesaria por existir aquella afirmación oficial por conducto del oficio 22686/2018 signado por el asistente de despacho judicial adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de

Puebla, no se aprecia una transgresión a las formalidades del procedimiento que impacta en los derechos fundamentales del quejoso, que amerite la concesión del amparo, en los términos expuestos por el Tribunal Unitario.—Resta decir, que el Tribunal Unitario de Amparo, al resolver el asunto en cuestión citó el criterio II.1o. J/6 (10a.), sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con Residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, de rubro (sic) y texto siguientes.—'VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI EL JUEZ FEDERAL RESUELVE CON BASE EN LOS DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD´S) QUE LAS CONTIENEN SIN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS CON EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. A partir de la instauración del sistema procesal penal acusatorio y oral, las videograbaciones de las audiencias contenidas en archivos informáticos almacenados en un soporte material, como lo es un disco versátil digital (DVD), constituye un medio apto para producir seguridad en las actuaciones que se generen por el juzgador, así como para garantizar la legalidad y transparencia del desarrollo de cada una de las etapas del proceso penal, como lo disponen los artículos 40 y 41 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (abrogado) y 50, 51, 61 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que los discos que se emitan deben considerarse documentos públicos, pues forman parte de un expediente judicial que contiene el resultado del desahogo de las diligencias inherentes al proceso y, por ende, deben estar certificados, es decir, contener el sello del órgano jurisdiccional, así como la firma o rúbrica del servidor público correspondiente que los expida, a fin de dar certeza sobre su autenticidad a las partes intervinientes. En ese sentido, si el Juez Federal emitió una sentencia basándose en los discos versátiles sin certificación, ello constituye una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento para el efecto de que se allegue de esos documentos debidamente certificados y, en su momento, vuelva a emitir la resolución correspondiente.'[25]—De dicho criterio se advierte que se considera una violación procesal que ame-

[25] Tesis II.1o. J/6 (10a,), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, registro digital: 2017095, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 55, Tomo IV, junio de 2018, página 2724, jurisprudencia (penal).

rita reposición del procedimiento el hecho de que un disco versátil (DVD) que constituye el registro audiovisual de la audiencia en el sistema procesal acusatorio, no cuente con certificación entendiendo por ese concepto la firma o rúbrica del servidor público correspondiente que los expida.—Criterio que es contrario a lo resuelto en el presente asunto, en el que se determina que los requisitos de certificación de un disco versátil (DVD) que constituye el registro audiovisual de la audiencia, no debe considerarse sin certificación por el hecho de que no presente sello y firma de la persona autorizada, pues al margen de que esas formalidades no encuentran sustento en alguna norma, la interpretación sistémica del artículo 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales para considerar una copia auténtica debe ser flexible a la naturaleza jurídica del sistema procesal acusatorio, pues para considerarla como copia auténtica entre autoridades, basta la afirmación de la autoridad autorizada para ello a través de cualquier medio oficial (oficio u otro medio de comunicación oficial autorizado).—En consecuencia, se revoca la sentencia emitida en audiencia constitucional el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve por el Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, en el juicio de amparo indirecto 89/2018.—Por lo que con fundamento en lo dispuesto en la fracción VI, del artículo 93 de la Ley de Amparo, este órgano colegiado reasume la jurisdicción."

CUARTO.—Asentado lo que antecede, debe tenerse en cuenta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, estableció que para estimar existente una contradicción de tesis, es necesario que los órganos judiciales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que los aspectos fácticos que lo rodean no sean exactamente iguales, es decir, que emitan diversa solución a una problemática jurídica semejante a través de un determinado ejercicio interpretativo.

Por ello, la forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos radica en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los asuntos resueltos por aquéllos.

Así, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involu-

crados, y no tanto los resultados que ellos arrojen, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas, no necesariamente contradictorias en términos lógicos, aunque legales.

Luego, partiendo de que la finalidad de la resolución de una contradicción de tesis es la unificación de criterios; apreciando si el disenso radica en los procesos de interpretación y no en los resultados adoptados por los órganos contendientes, los requisitos a cumplir consisten en que:

1. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; y,

2. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista, al menos, un tramo de razonamiento en que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Lineamientos que fija la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se

advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan 'tesis contradictorias', entendiéndose por 'tesis' el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.', al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que 'al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes' se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en 'diferencias' fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en

sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."[26]

Y las jurisprudencias números 1a./J. 22/2010 y 1a./J. 23/2010, aprobadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que respectivamente establecen:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."[27]

[26] Tesis jurisprudencial publicada en la página 1925 del *Apéndice* 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte –SCJN Décima Cuarta Sección–, Jurisprudencia, Novena Época, registro digital: 1003576.
[27] Tesis jurisprudencial 1a./J. 22/2010, materia común, Novena Época, con número de registro digital: 165077. Instancia: Primera Sala. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 122.

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.'. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto 'contradictorio' ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."[28]

En el particular, la circunstancia de que sólo el criterio sustentado por los Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito constituye jurisprudencia integrada, mientras que el de los Magistrados del Primer y Segundo Tribunales Colegiados de la misma materia y Circuito, no cons-

[28] Tesis jurisprudencial 1a./J. 23/2010, materia común, Novena Época, con número de registro digital: 165076. Instancia: Primera Sala. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 123.

tituyen jurisprudencia, ello no impide jurídicamente proceder a su análisis para determinar si existe o no la contradicción planteada y, de ser el caso, establecer cuál es el criterio que debe prevalecer como jurisprudencia, ya que en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 225 y 226 de la Ley de Amparo vigente, que prevén el procedimiento para resolverla, no imponen aquella condición.

Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 1a./J. 129/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, de rubro y contenido siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA.—Adicionalmente al criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.', publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, para que la denuncia de contradicción de tesis sea procedente, no se requiere que los criterios que se consideren opuestos constituyan jurisprudencia, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito."[29]

Ahora, el presente asunto cumple con los requisitos mencionados, puesto que respecto de si son necesarios, la firma y el sello, en la certificación a que se refiere el artículo 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre el disco versátil digital (DVD) para estimarlo como una copia auténtica del registro de actos procesales, o basta que la autoridad autorizada envíe el disco a través del oficio o comunicación oficial, respectivos, para considerar una copia auténtica del registro audiovisual, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al

[29] Tesis Jurisprudencial publicada en la página 1923 del *Apéndice* de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte–SCJN Décima Cuarta Sección–, jurisprudencia, Novena Época, registro digital: 1003574.



resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo del texto de la norma a fin de llegar a una solución determinada, habida cuenta que de las resoluciones pronunciadas por los tribunales que participan en esta contradicción de tesis, se desprende lo siguiente:

Los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en sesión de seis de junio de dos mil diecinueve, resolvieron por unanimidad de votos en su anterior integración el amparo en revisión 88/2019, interpuesto por el quejoso, donde en la materia de la revisión, revocaron la sentencia recurrida y ordenaron la reposición del procedimiento en el juicio de amparo ********, del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, donde se reclamó al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, el auto de vinculación a proceso de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal **********, por el hecho con apariencia de delito de violación equiparada.

Asimismo, en sesión de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, resolvieron por mayoría de votos, con motivo de la nueva integración, el amparo en revisión 163/2019, interpuesto por el quejoso, a través de su defensora pública federal, donde en la materia de la revisión, revocaron la sentencia recurrida y ordenaron la reposición del procedimiento en el juicio de amparo **********, tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en el cual, el quejoso reclamó al Juez de Control y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Norte, Zacatlán, Puebla, el auto de vinculación a proceso, dictado dentro de la causa penal **********, por el hecho con apariencia de delito de secuestro exprés y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

En los dos casos, porque consideraron que si el disco versátil digital (DVD) que contiene la decisión judicial reclamada, que se anexó por la autoridad responsable a su informe justificado, no se encuentra firmado y sellado en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, en la materialidad del mismo, debe considerarse que no se cumplen las exigencias legales para dotarlos de certeza y seguridad jurídica y, en consecuencia, ello imposibilita al Juez de amparo, emitir el fallo respectivo.

Para sostener lo anterior, las ejecutorias respectivas se refirieron al contenido del artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a la obligación del órgano jurisdiccional de registrar por cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición (escrito, video, audio o cualquier medio que garantice su reproducción) todas las audiencias y actos procesales ocurridos en el procedimiento penal, lo cual se deberá conservar en resguardo del Poder Judicial, para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento.

También se invocaron los artículos 70 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el primero, establece que las resoluciones escritas serán firmadas por los Jueces y Magistrados; y el segundo, señala que se considera copia auténtica al documento o registro del original de las sentencias, o de otros actos procesales, que hayan sido certificados por la autoridad autorizada para tal efecto.

Asimismo, en dichas ejecutorias se consideró que aun cuando la legislación procesal de la materia no prevé expresamente las formalidades que debe reunir tal certificación, se estableció que deberá contener los signos básicos que le otorguen autenticidad, es decir el sello del órgano jurisdiccional, el nombre y firma del funcionario judicial correspondiente, acompañado de la leyenda de que se trata de copia fiel o auténtica de su original.

Concluyendo que de la interpretación sistemática de los artículos 61, 70 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los actos contenidos en los registros informáticos, tales como las audiencias del juicio oral que presiden los Jueces y Magistrados del Sistema de Justicia penal acusatorio, requieren para su validez la certificación de su contenido, realizada por la autoridad autorizada para tal efecto.

Lo anterior, máxime que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), que este tipo de videograbaciones gozan de la naturaleza de una prueba instrumental pública de actuaciones. La jurisprudencia referida tiene el título y subtítulo siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA

AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL."

Por tanto, se consideró que si el disco versátil que contiene almacenada alguna o algunas de las diligencias celebradas en el proceso penal acusatorio es una documental pública, es pertinente acotar las formalidades que para su validez debe revestir la copia auténtica que al efecto se emita, pues sólo de ese modo se avalaría que el soporte material enviado corresponde a las actuaciones originales, como es que la certificación respectiva se encuentre inserta en el cuerpo del disco, y que conste el sello y la firma de la persona o funcionario autorizado para ello.

Por lo que, consideraron que si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable está obligada a remitir copia auténtica de los registros para la sustanciación del juicio de amparo, en los procedimientos atinentes al sistema penal acusatorio y oral, los discos versátiles que los contienen y que sean remitidos como justificante de sus actos, deben estar debidamente certificados con el sello y la firma correspondiente, y para el caso de que el Juez de amparo resolviera sin que los discos contaran con dichas formalidades, firma y sello del funcionario y órgano que certifica la autenticidad de su contenido, en el cuerpo del propio disco, se actualizaría una violación a las reglas del procedimiento del juicio de amparo, que daría lugar a su reposición.

En cambio, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito resolvió el amparo en revisión **********, en el sentido de revocar la sentencia impugnada en la materia de la revisión y negar el amparo solicitado, en el juicio **********, del índice del Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, contra el acto reclamado consistente en la resolución de nueve de octubre de dos mil dieciocho dictada por el Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en los autos del toca penal número **********, mediante la cual revocó la resolución dictada en audiencia de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en que se resolvió sobre las medidas cautelares, por la Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (actuando como Jueza de Con-

trol), en la causa penal **********, seguida contra el impetrante por el hecho señalado por la ley como delito de posesión ilícita de petrolífero.

En esa ejecutoria, los Magistrados consideraron fundados los agravios del agente del Ministerio Público recurrente donde alegó lo incorrecto de la consideración de la autoridad de amparo en el sentido de estimar que sólo existe certeza jurídica en torno al origen y confiabilidad de los registros digitales de videograbación que se contienen en el disco versátil que remite la autoridad respectiva, cuando en dicho disco se contenga la firma y sello de dicha autoridad, contraviniendo lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de título y subtítulo siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL."

Los Magistrados del Tribunal Colegiado consideraron que en dicha jurisprudencia se estableció que una audiencia/diligencia almacenada en un soporte material como lo es un disco versátil digital (DVD):

a) A la luz de la tramitación de un proceso penal de corte acusatorio, detenta la naturaleza jurídica de una prueba instrumental de actuaciones, al tratarse de las diligencias o actos que conforman un proceso penal de corte acusatorio; es decir, tales herramientas electromagnéticas sólo constituyen piezas o actuaciones procesales empleadas por los juzgadores para dejar constancia de la actividad jurisdiccional desplegada en los asuntos de su conocimiento.

b) Tratándose de la tramitación de un juicio de amparo, la remisión del disco versátil digital que contiene la audiencia videograbada por la autoridad responsable, como anexo o sustento de su informe justificado, su naturaleza jurídica será de una prueba documental pública.

Así entonces, los Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito consideraron para la resolución del juicio de amparo,

que lo importante es la naturaleza jurídica procesal de una audiencia/diligencia almacenada en un soporte material como lo es un disco versátil digital (DVD), visto a la luz de la tramitación de un proceso penal de corte acusatorio, es decir, como una instrumental de actuaciones, por contener el registro de la audiencia correspondiente al acto reclamado a la autoridad responsable, registro que se efectuó en términos de lo establecido por el artículo 61[30] del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que no requiere para su validez de sello y firma, pues la certeza de su contenido, se pone de manifiesto ante el hecho de que dicho disco fue remitido al tribunal de apelación –responsable– por conducto de la Oficialía de Partes del Segundo Tribunal Unitario de este Circuito, a través de un oficio que cumplió con las formalidades, esto es, que contiene la firma autógrafa del asistente de despacho judicial adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, así como el sello correspondiente; documento en el que se estableció, entre otras cosas, que se remite "*el disco óptico de la audiencia recurrida.*"

Circunstancia suficiente, expusieron los Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, para dar certeza en cuanto a que el contenido del disco versátil corresponde a la audiencia donde aparece el acto reclamado, puesto que en efecto, quien lo remitió al órgano judicial fue una autoridad del Poder Judicial de la Federación –a quien atañe el resguardo del mismo– y lo hizo por conducto de las oficinas pertenecientes al Poder Judicial de la Federación; de ahí que no sea válido poner en duda su contenido, máxime cuando se corroboró que la diligencia a analizar se encontraba registrada en el DVD multicitado.

Concluyéndose que fue indebido que el tribunal de amparo considerara violatorio de derechos humanos del quejoso el acto reclamado, porque, al resolver

[30] "**Artículo 61**. Registro de las audiencias
"Todas las audiencias previstas en este código serán registradas por cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición el órgano jurisdiccional.
"La grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considerará como parte de las actuaciones y registros y se conservarán en resguardo del Poder Judicial para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento y de las partes, garantizando siempre su conservación."

atendió el mencionado DVD, el cual carecía de eficacia jurídica al no contar con el sello y firma de la autoridad facultada para realizar la certificación respectiva.

Las consideraciones anteriores, junto con las contenidas de manera similar en los juicios de amparo en revisión **********, **********, **********, **********, dieron origen a la jurisprudencia que contiene el título y subtítulo siguientes:

"DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD'S) QUE CONTIENEN LAS VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. A LA LUZ DE LA TRAMITACIÓN DE UN PROCESO PENAL DE ESTA NATURALEZA, TIENEN EL CARÁCTER DE UNA PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, POR LO QUE AUN CUANDO CAREZCAN DEL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, NO DEBE PONERSE EN DUDA SU CONTENIDO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA. Los discos versátiles digitales (DVD´S) que contienen las videograbaciones de las audiencias del sistema penal acusatorio y oral, a la luz de la tramitación de un proceso penal de esta naturaleza, conforme al artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales y acorde con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de título y subtítulo: 'VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.', tienen el carácter de una prueba instrumental de actuaciones, al tratarse de las diligencias o actos que conforman un proceso penal de corte acusatorio, guardados en un archivo digital y, por ende, aptos para acreditar la existencia de un acto procesal; además de que no obstante estar soportados en medios digitales, su contenido hace patente la realización de un acto jurídico procesal. Por tanto, aun cuando dichos discos carezcan del sello y la firma correspondientes, no debe ponerse en duda su contenido, si existen otras circunstancias que le dan certeza a éste, como pudieran ser, por ejemplo, que fueron remitidos al tribunal de apelación por la autoridad del Poder Judicial a quien corresponde su resguardo y esa remisión se

hizo por conducto de las oficinas que pertenecen precisamente al Poder Judicial, mediante un oficio que cumplió con las formalidades de ley, esto es, que contiene la firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello correspondiente y, sobre todo, ante el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoció del asunto de que se trata, corroboró que la diligencia respectiva, en efecto se encontraba registrada en el DVD."[31]

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en sesión de doce de diciembre de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos, y con un voto aclaratorio, resolvió el amparo en revisión **********, interpuesto por la agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita al Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, donde en la materia de la revisión, modificó la sentencia recurrida y concedió el amparo solicitado contra el acto reclamado al Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito, consistente en la resolución dictada en el toca penal ********** –que revocó la diversa de quince de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el Juez de Control de la Región Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, Puebla, en auxilio de la Justicia Federal, en la causa penal ********** (actualmente ********** del índice del Centro de Justicia Federal en el Estado de Puebla) por la que no vincula a proceso a los imputados, por los hechos señalados en la ley como delitos de tentativa de homicidio, contra servidores públicos, y portación de arma de fuego sin licencia–.

Lo anterior, considerando fundado el agravio del agente del Ministerio Público recurrente, relativo a que aun con ausencia de firma y sello en el disco óptico que contiene la audiencia de no vinculación a proceso, debe considerarse que existe certeza jurídica para resolver con los registros contenidos en dicho disco óptico.

Para llegar a la anterior decisión, en principio analizó la validez de los discos ópticos cuando son enviados por la autoridad para la tramitación del recurso de apelación interpuesto, en términos de lo que establece el numeral 474 del

[31] Décima Época, con número de registro digital: 2020244. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 68, Tomo III, julio de 2019, materia penal, tesis VI.3o.P. J/1 (10a.), página 1972.

Código Nacional de Procedimientos Penales, distinguiendo dos formas de validez de lo que se denomina "certificación de actuaciones" provenientes de dos sistemas distintos.

Así, consideraron que en un sistema procesal llamado tradicional o mixto se exigía la presencia de un secretario dotado de fe durante la práctica de cualquier acto jurisdiccional, para lo cual, la ley procesal establecía que cuando era necesaria la certificación de algún testimonio, se constreñía al secretario aludido, para dar validez al cotejo de las copias de constancias que se mandaran expedir, y las autorizaría con su firma y el sello correspondiente.

En cambio, el sistema penal acusatorio no requiere de testigos de asistencia o secretarios que den fe de los actos jurisdiccionales para considerarlos válidos.

Lo anterior es así porque es el propio juzgador quien tiene fe de sus actos procesales, los cuales son vinculados con los principios constitucionales rectores del sistema, entre ellos el de inmediación y publicidad, este último que tiene funcionalidad de control de las decisiones tomadas en audiencia ante el público que asistiere a ellas, las cuales además, en todos los casos, quedan registradas en audio y video.

También se consideró por los Magistrados de dicho Tribunal Colegiado, como otra distinción principal derivada de la forma de integrar un expediente, que mientras en el sistema tradicional o mixto esta forma de construcción de casos se lleva a cabo a partir del registro escrito, que es producto del conjunto de prácticas de una verdadera multitud de funcionarios –secretarios, actuarios, escribientes–; el sistema penal acusatorio busca instalar a la oralidad en el centro de la escena, al documentar en un expediente administrativo, acuerdos de gestión para la preparación de audiencias, a través de las cuales se tomarán las decisiones jurisdiccionales, y atendidas éstas, serán motivo de transcripción para generar el antecedente, pues así lo dispone el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Conforme lo expuesto, los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito destacaron que la escrituración en el sistema



tradicional o mixto, conlleva al formalismo que incluye la exigencia, entre otras características, de asentar en las actuaciones del día o agregados los documentos recibidos, el deber de foliar y rubricar las hojas respectivas por parte del secretario, poner el sello del tribunal en el fondo del cuaderno, de manera que abrace las dos caras; actuaciones que debían ser autorizadas inmediatamente por los funcionarios a quienes correspondía firmar, dar fe o certificar el acto en todas las actuaciones; así, cuando alguna de las exigencias de formalidad no se cumplían, la propia ley procesal las consideraba nulas.

Para el caso del sistema procesal acusatorio, sostuvieron los Magistrados, que se trata de un nuevo modelo estructural de los juzgados, lo que implica también una nueva forma en que se organiza su personal e interactúa entre sí y con sus usuarios; lo cual depende –como en cualquier organización– de los procesos –interpretados en un sentido amplio, es decir, como secuencias organizadas de actividades y no sólo desde su perspectiva jurídica– que allí se ejecutan.

Por otra parte, los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en relación con el Sistema Penal acusatorio y oral, consideraron que el Código Nacional de Procedimientos Penales no precisa funciones operativas de gestión administrativa; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé únicamente que el Juez de Control y el tribunal de enjuiciamiento se auxiliarán del número de asistentes de constancias y registros, y del personal que determine el presupuesto, estableciendo que las cuestiones no previstas serán determinadas por el Consejo de la Judicatura Federal, a través de acuerdos generales; el Manual de Organización y Puestos del Centro de Justicia Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, constituye un cuerpo normativo de carácter técnico-administrativo para identificar y reflejar de manera formal los aspectos organizativos y funcionales del Centro de Justicia Penal, delimitando a su vez las responsabilidades de los puestos que conforman su estructura organizacional.

Que, tratándose del puesto de asistente de constancias y registro de Primera Instancia y Ejecución de Penas, no se establece la función autorizada de certificación de las copias de registros audiovisuales, pero sí la función de apoyar en la elaboración de constancias por escrito de resoluciones, atendiendo a la motivación y fundamentación a partir de los puntos resueltos y cumpliendo

con las disposiciones legales en su elaboración. Y en el rubro de responsabilidades se fija: "*... Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, en lo que no se oponga a los principios del Sistema Procesal Penal Acusatorio.*"

En diverso aspecto, el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, del que parte el Primer Tribunal Unitario de Amparo, conforma un instrumento normativo de carácter técnico-administrativo que contiene ochenta y cuatro descripciones de puestos y se constituye como el instrumento básico que define el objetivo, funciones, responsabilidades, manejo de recursos y entorno laboral, formación académica, experiencia laboral y otros requisitos por cada uno de los puestos que integran el Catálogo General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal.

Así, los Magistrados del aludido Segundo Tribunal Colegiado destacaron, por lo que se refiere a las funciones del asistente de constancias y registro de Juez de Control, que su función radica generalmente en apoyar al Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en la elaboración de las versiones escritas de resoluciones que legalmente deban constar de esa forma y de aquellas otras actuaciones judiciales que se le instruyan, estableciendo la fundamentación y motivación pertinentes y congruentes al sentido de lo resuelto, en estricto cumplimiento a las formalidades previstas por las disposiciones aplicables. Y en el punto 6 del apartado denominado funciones, dice: "*II.2 Funciones: ... 6. Certificar y autenticar todos los hechos o actos jurídicos que le soliciten los Jueces Especializados en el Sistema Penal Acusatorio ...*"; concluyendo que no sólo el Juez de Control es el funcionario autorizado para realizar certificaciones, sino también por disposición reglamentaria, el asistente de constancias y registro de Juez de Control de acuerdo a la disposición transcrita.

Sin embargo, los Magistrados consideraron que la función de certificar a que alude el instrumento normativo en operatividad de un sistema procesal acusatorio, no debe ser considerado como un acto de certificación con los requisitos del sistema tradicional o mixto, pues los requisitos de sello y distintivo gráfico se precisaban como exigencias establecidas en el propio código procesal del sistema anterior.

Los Magistrados integrantes del referido Segundo Tribunal Colegiado consideraron que la característica esencial del sistema procesal penal acusatorio es centralizar las decisiones jurisdiccionales con el respeto de los principios constitucionales del sistema (contradicción, concentración, publicidad, inmediación y continuidad), lo que tornaba innecesaria la figura de testigos de asistencia o personal que diera fe de los actos jurídicos que desarrollaba el juzgador; por lo cual, era menester dotar de contenido al concepto de "certificar" acorde a la naturaleza y finalidad de un sistema procesal penal acusatorio, cuyo eje rector es privilegiar la oralidad como un mecanismo de interacción comunicativa sin formulismos entre partes y juzgador, lo que también involucra la comunicación entre autoridades para dar agilidad y eficiencia a los trámites de gestión jurisdiccional en pro del acceso a la justicia pronta y expedita.

Así, los Magistrados apreciaron también que el no usar los formalismos del sistema penal anterior no quería decir pasar por alto las reglas, sino usarlas de manera elástica evitando sacramentalismos fútiles que propician un retardo en la administración de justicia; además de que tomaron en cuenta que el *Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española*, establece como significado de la palabra "certificar": "Asegurar, afirmar, dar por cierto algo".

Por lo que dichos Magistrados estimaron necesario realizar una interpretación sistémica al contenido del artículo 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en que se sustenta el tribunal de amparo para concluir una transgresión a las formalidades del procedimiento, que ameritó la concesión del amparo por el hecho de que el disco óptico enviado al tribunal de alzada, no presenta firma y sello.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito indica que del contenido del artículo 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales no surge la exigencia de firma y sello para dar validez a un acto de certificación, como en ninguna otra disposición de carácter normativo que tuviera aplicación al sistema procesal penal acusatorio, por lo que, considerar auténtica una copia cuando ha sido certificada por la autoridad autorizada para tal efecto, implica tener como auténtica una copia del original cuando así se afirme por la autoridad autorizada para ello, que de acuerdo al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el vein-

tiocho de febrero de dos mil dieciocho, correspondería al propio juzgador de oralidad, como a su asistente de constancias y registro en quien puede delegar esa función.

Así, el distintivo gráfico (firma) y sello, en la materialidad del disco óptico, no eran necesarios en términos de ley para considerarlo como una copia auténtica del registro de la actuación de audio y video que se encuentra en resguardo de un Centro de Justicia Penal Federal, pues para ello bastaba la afirmación de la autoridad autorizada, por cualquier medio (oficio o comunicación oficial), para considerar una copia auténtica del registro audiovisual.

Lo anterior, en virtud de que la regla general para la comunicación entre autoridades en un sistema penal acusatorio tiende a ser ágil y eficiente, por lo que permite por cualquier medio garantizar la autenticidad de su solicitud y sin mayor formalidad.

Luego, para el citado Tribunal Colegiado resultó conveniente destacar que el primer párrafo del artículo 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales hace alusión a documento o registro del original de las sentencias, o de otros actos procesales; que la propia ley procesal penal nacional establece, en el artículo 380, que se considerará documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho, y que quien cuestione la autenticidad del documento tendrá la carga de demostrar sus afirmaciones; por lo que la ley procesal en el concepto amplio de documento comprende al registro audiovisual de audiencias con medios tecnológicos almacenado en cualquier soporte material, incluyendo dispositivos de almacenamiento como los discos ópticos, empero, también el artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla que quien cuestione la autenticidad del documento tendrá la carga de demostrar sus afirmaciones.

De ahí que el principio de probidad y buena fe que regula la operatividad del sistema procesal penal, no debe considerarse limitativo para las partes, sino que también debe apreciarse entre autoridades, pues suponer que la autoridad no envía sus registros auténticos porque no firmó y estampó el sello oficial en la materialidad del disco obstaculiza la impartición de justicia; incluida la posibilidad que el documento mencionado sea enviado en otros dispositivos de almace-

namiento como pueden ser memorias USB (Universal Serial Bus) o discos duros portátiles, entre otros, y no sólo DVD; que bajo esa misma exigencia formal no prevista en la ley, se visualizaría un escenario complicado para materialmente en la memoria o disco duro de almacenamiento estampar un sello y distintivo gráfico del juzgador para considerar que está afirmando de que su contenido es auténtico.

Por ende, si la legislación procesal de la materia no prevé expresamente las formalidades que debe reunir tal certificación, no hay razón para atraer formalidades provenientes de un sistema tradicional o mixto al actual sistema penal acusatorio, máxime que es incompatible; por lo que si se cuenta con la afirmación de la autoridad autorizada para ello, por cualquier medio (oficio o comunicación oficial), deben considerarse colmados los requisitos mínimos legales para tener la copia del registro de las resoluciones de la autoridad judicial como una copia auténtica salvo prueba en contrario; exigir formalidades que no prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales en alguno de sus dispositivos, transgrediría el principio de legalidad, al margen de la incompatibilidad con el sistema procesal acusatorio que se distingue por su flexibilidad y justicia pronta, sin causar dilaciones injustificadas.

Sin que lo dicho se confrontaba con el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocado por la autoridad de amparo, tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), de título y subtítulo siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.", pues los registros de audio y video almacenados en discos versátiles digitales (DVD) gozan para efectos de amparo de la naturaleza de una prueba documental pública, pero no se confrontaban con el cumplimiento mínimo de certificación exigible en el sistema penal acusatorio.

Finalmente, los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito concluyeron que para considerar "copia auténtica" de los

registros de las resoluciones de la autoridad judicial, en un sistema penal acusatorio y oral, sólo era necesaria la certificación de la autoridad autorizada para ello, bastando el envío de una comunicación oficial que afirme o asegure que se trata de una copia auténtica del registro original, salvo prueba en contrario, por lo que era innecesario que el disco físico óptico se encontrare firmado y sellado, en la materialidad del DVD, pues esas formalidades no están previstas en la ley.

De todo lo relatado, los requisitos inherentes a toda contradicción de tesis se surten en el caso concreto, toda vez que de la lectura de los aspectos destacados en las ejecutorias transcritas, se desprende, por una parte, que el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, en contraposición con el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo Circuito, se pronunciaron en torno a varias problemáticas jurídicas, cuyas características y antecedentes resultan ser esencialmente idénticas, las cuales, para efectos de facilitar su comprensión y análisis pueden ser parafraseadas bajo la siguiente interrogante: ¿los discos versátiles digitales (DVD´S), que contienen las videograbaciones de las audiencias del sistema penal acusatorio y oral, requieren del sello y la firma insertos en la materialidad del disco óptico, para que adquieran certeza de su contenido?

Frente a esta disyuntiva jurídica, se advierte que el Primer Tribunal Colegiado adoptó un criterio jurídico antagónico al que sostuvieron los Tribunales Segundo y Tercero, en Materia Penal del Sexto Circuito como enseguida se demuestra:

a) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito sostuvo en esencia que si el disco óptico (DVD) que contiene la decisión judicial reclamada en el juicio de amparo, relativa a una de las audiencias del sistema penal acusatorio y oral, no se encuentra firmado y sellado en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe considerarse que no cumple con las exigencias legales para dotarlo de certeza y seguridad jurídica.

b) Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito consideró que una audiencia o diligencia almacenada en un soporte material como lo es un disco versátil digital (DVD), en la tramitación de un proceso penal de corte acusatorio, al tratarse de una instrumental de actuaciones, no requiere para su validez de sello y firma en el cuerpo del referido disco, pues la certeza de su contenido se pone de manifiesto ante el hecho de que fue re-



mitido por los medios oficiales por la autoridad que, conforme a la ley tiene a su cargo esos registros.

En ese mismo tenor, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en esencia consideró que el distintivo gráfico (firma) y sello, en la materialidad del disco óptico, no es necesario en términos de ley para considerarlo como una copia auténtica del registro de la actuación de audio y video que se encuentra en resguardo de un Centro de Justicia, en el sistema penal acusatorio y oral, pues para ello basta la afirmación de la autoridad autorizada, por cualquier medio (oficio o comunicación oficial), para considerarla una copia auténtica del registro audiovisual.

Es importante puntualizar que los tribunales contendientes, al sustentar sus respectivos criterios, coincidieron en interpretar los artículos 61 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, e invocar la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL."

En consecuencia, existe la contradicción de tesis planteada, dado que los contendientes, en sus respectivas resoluciones, ejercieron el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo del texto de la norma, sosteniendo criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.

QUINTO.—Debe prevalecer el criterio sustentado por este Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, al tenor de las razones jurídicas que se desarrollan a continuación.

Como cuestión preliminar este Pleno de Circuito estima necesario puntualizar la metodología que será empleada para resolver la cuestión planteada. Así las cosas, en primer lugar será necesario partir de la naturaleza jurídica de las videograbaciones de audiencias celebradas en procedimientos penales de

corte acusatorio y oral contenidas en archivos informáticos almacenados en un disco versátil digital DVD; en segundo lugar, será igualmente necesario que este Pleno de Circuito se refiera a la certificación de las copias auténticas, de los registros de las audiencias orales, conforme lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales; y, por último, con base en ello, será factible obtener la solución a la presente contradicción.

Expuesto lo que antecede, debe partirse de la naturaleza de la prueba documental pública que jurídicamente adquieren las videograbaciones de audiencias celebradas en procedimientos penales de corte acusatorio y oral contenidas en archivos informáticos almacenados en un disco versátil digital (DVD) definida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis ********** cuando la autoridad responsable las remite como anexo o sustento de su informe justificado.

Las consideraciones de la ejecutoria de la referida contradicción de tesis 455/2012, en lo que al caso interesa, son las siguientes:

"**Solución a la contradicción de tesis.**

"Ahora bien, con base en el anterior marco jurídico y conceptual, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra en posibilidad de resolver con completitud la antinomia jurídica suscitada entre los criterios interpretativos sustentados por los Tribunales Colegiados recurrentes.

"De esta forma, a fin de dar mayor claridad al presente apartado, se estima necesario hacer remembranza en torno a las interrogantes jurídicas que engloban los puntos de derecho a dilucidar, las cuales, son las siguientes: ¿Cuál es la naturaleza jurídica procesal de las videograbaciones de audiencias celebradas en procedimientos penales de corte acusatorio y oral contenidas en archivos informáticos almacenados en un soporte material como lo es un disco versátil digital **('DVD' por sus siglas)**? Además, en el supuesto de que tales videograbaciones fuesen remitidas por la autoridad responsable como informe justificado: ¿se requiere o no del previo desahogo de su contenido en audiencia especial por parte de la autoridad de control constitucional?



"Como punto de partida, es necesario destacar que tal y como se puntualizó al inicio del presente considerando, el estudio en torno a la naturaleza jurídica procesal de una audiencia/diligencia almacenada en un soporte material como lo es un disco versátil digital **('DVD' por sus siglas)** se realizará desde un doble enfoque: **a)** Primeramente, a la luz de la tramitación de un proceso penal de corte acusatorio; y, **b)** En segundo término, a la luz de un proceso constitucional autónomo de amparo, dentro del cual, la citada audiencia videograbada es remitida por la autoridad responsable como informe justificado.

"**A)** Expuesto lo anterior, debe decirse que del análisis de las legislaciones procesales de los Estados de Oaxaca y Puebla –**de las cuales, emergió la presente antinomia jurídica**– esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las audiencias videograbadas en un soporte material como lo es un disco versátil digital **('DVD'),** detentan la naturaleza jurídica de una prueba instrumental de actuaciones al tratarse de las diligencias o actos que conforman un proceso penal de corte acusatorio.

"Se explica.

"La instrumental de actuaciones, debe entenderse como el conjunto de constancias que obran en el expediente de un procedimiento judicial. Esto es, la también denominada prueba instrumental pública de actuaciones, se integra con las constancias que obran en el sumario, por lo cual, la misma es considerada como una prueba sui generis tangible respecto de todo lo actuado durante la tramitación de un juicio; misma que no es ajena para el desarrollo jurisprudencial de este Alto Tribunal.[32]

[32] A manera de ejemplo, podemos citar los siguientes criterios interpretativos en donde se hace referencia a la citada prueba instrumental de actuaciones.
Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Tesis aislada. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo LXXXVII, materia común, página 2030.
"ACTUACIONES JUDICIALES.—La prueba instrumental pública de actuaciones judiciales, hace prueba plena, conforme el artículo 250 del mismo ordenamiento, y si fue redargüida de falsa, pero no hay constancias de que se haya hecho siquiera la consignación correspondiente, conserva su validez, que, aun cuando puede ser apreciada por el juzgador, en cuanto a su valor probatorio, no puede desconocer éste, si no es por la existencia de una prueba de igual o mayor fuerza.
"Amparo penal en revisión 8089/45. Campanella Escobedo Alfredo. 2 de marzo de 1946. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José María Ortiz Tirado. La publicación no menciona el nombre del ponente.". Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Tesis aislada. Fuente: *Semanario Judicial de la*

"De esta forma, si al tenor de las consideraciones esgrimidas en el cuerpo de la presente ejecutoria, resulta evidente que las tantas veces citadas audiencias videograbadas en formatos digitales **('DVD'),** en realidad, no son más que constancias audiovisuales del desahogo de las diligencias inherentes a un proceso penal de corte acusatorio, se reitera, en estricto cumplimiento a los principios de oralidad y publicidad que son propios de dicho sistema de enjuiciamiento; consecuentemente, tales herramientas electromagnéticas sólo constituyen piezas o actuaciones procesales empleadas por los juzgadores para dejar constancia de la actividad jurisdiccional desplegada en los asuntos de su conocimiento.

"La anterior determinación jurídica, encuentra sustento en las propias legislaciones estatales de Oaxaca y Puebla, de las cuales, se reitera, surgió la pre-

---

Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, febrero de 2009, materias constitucional y laboral, tesis 2a. I/2009, página 469.

"INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LOS ARTÍCULOS 835 Y 836 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE LA REGULAN, NO TRANSGREDEN EL NUMERAL 14 CONSTITUCIONAL.—Los señalados preceptos legales, al disponer que la instrumental es el conjunto de actuaciones que obren en el expediente formado con motivo del juicio, y que la Junta deberá tomar en cuenta las actuaciones que obren en él, no transgreden el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece las formalidades esenciales del procedimiento, consistentes, básicamente, en la obligación del juzgador de decidir las controversias sometidas a su conocimiento considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda y en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el proceso, de tal forma que se condene o absuelva, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos. Lo anterior es así, porque dichos numerales no obligan al juzgador a tomar en cuenta de manera forzosa, al momento de dictar el laudo, constancias o documentos que obren en los autos y que no hayan cumplido con las formalidades exigidas por la ley, pues en todo caso, debe atenderse a las reglas establecidas en la propia Ley Federal del Trabajo para el dictado de las resoluciones correspondientes.

"Amparo directo en revisión 1847/2008. Escuela Internacional, S.C. 14 de enero de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.". Séptima Época. Instancia: Primera Sala. Tesis aislada. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*, Volúmenes 169-174, Segunda Parte, materia penal, página 93.

"POLICÍA JUDICIAL, PARTES DE LA. CONSTITUYEN PRUEBA INSTRUMENTAL.—Los llamados 'partes' de información policiaca no constituyen documentos públicos, por no reunir la característica de publicidad, ni contener los requisitos extrínsecos de dichos medios de prueba; tampoco habrán de valorarse como documentos privados, dado el ejercicio y carácter de quienes los suscriben; por lo que considerada su calidad '*sui generis*', por tratarse de una pieza informativa, que forzosamente se integra a las constancias del procedimiento, deberá estimarse como prueba instrumental de actuaciones y valorarse de acuerdo con su corroboración o concordancia en autos, de conformidad con los principios legales que rigen la eficacia probatoria en las diversas leyes procesales.

"Amparo directo 6655/82. Floriberto Anzures Tapia y otras. 15 de junio de 1983. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mario G. Rebolledo F."

sente antinomia jurídica. Sobre este punto, tenemos en primer término al Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, en el que se establece lo siguiente:

"'**Artículo 33. Registro de los actos procesales.** Los actos procesales se deberán documentar por escrito, por video, audio o cualquier otro medio que garantice su reproducción.'

"Por su parte, el Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Puebla, dispone:

"**Oralidad y registro de actuaciones.**

"'**Artículo 62.** Salvo casos de excepción, el proceso se desarrollará a través de audiencias o actuaciones orales.

"'En el supuesto de que un acto procesal pueda realizarse por escrito u oralmente, se preferirá realizarlo oralmente, cuando ello no conlleve atraso a la sustanciación del proceso. Para ello las peticiones que pueden esperar a la celebración de una audiencia oral, se presentarán y resolverán en ella.

"'Los Jueces no podrán suspender las audiencias para que se presenten por escrito las peticiones de los intervinientes.

"'Los actos se registrarán por escrito, a través de imágenes o de sonidos. En caso de que se opte por la grabación de imágenes, sonidos o ambas, la diligencia se preservará de esa forma. En todo caso deberá quedar constancia leal y fidedigna de la realización del acto procesal.

"'...

"'Los intervinientes y las autoridades que legalmente lo requieran podrán solicitar copia e informes de los registros conforme a lo dispuesto en este código y en la Ley en Materia de Acceso a la Información Pública aplicable.'

"Luego, tal y como puede advertirse, las legislaciones instrumentales de las entidades federativas en cuyas jurisdicciones se suscitó la presente contra-

dicción de tesis, de forma concordante con el criterio previamente expuesto por este Alto Tribunal, determinan que los actos y diligencias propios de los procesos penales acusatorios que sean sometidos a la potestad decisora de sus Jueces penales –**en los que privan los principios de la oralidad y la publicidad**– deberán ser preferentemente preservados, entre otros medios, en formato digital o electrónico.

"Lo anterior es así, ya que bajo este nuevo esquema de enjuiciamiento penal **(acusatorio)**, las actuaciones judiciales comprenden todos los actos procesales documentados en un 'expediente electrónico' del proceso; es decir, constancias fehacientes de los actos realizados en la secuela judicial almacenados/preservados regularmente en medios electrónicos o digitales, como son los pluricitados discos en formato **'DVD' –ya que a través de esta tecnología, se puede almacenar audio, texto, imagen y video. Se trata de un sistema que permite el completo desarrollo de las aplicaciones multimedia, con gran capacidad de almacenamiento–.**[33]

"De ahí que la Primera Sala de este Alto Tribunal considere que la naturaleza jurídica de tales audiencias videograbadas, sea la de una prueba instrumental pública de actuaciones, se insiste, al tratarse de la simple fijación o registro en un expediente electrónico de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio.

"Dicho en otras palabras, es evidente que desde una perspectiva netamente procesal, las constancias audiovisuales basadas en medios digitales o electrónicos que son empleados por los juzgadores para dejar constancia del desahogo de determinadas audiencias en el seno de un proceso penal de tipo acusatorio, revisten el carácter de una prueba instrumental pública de actuaciones. Máxime, cuando llegado el momento procesal oportuno, los titulares de dichos órganos jurisdiccionales deberán acudir a los registros almacenados en dicho expediente electrónico, esto es, propiamente a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital o electrónico, para efectos de dictar sus respectivas sentencias.

[33] *Cfr.* **Jaimes Sánchez**, Ernesto. "**Conservación de Nuevos Soportes. Preservación de la Información**". Gestión de Documentos Electrónicos, Antología. Archivo General de la Nación. México, 2002, página 49.

"Sobre el particular, debe decirse que aunque el soporte electrónico no pueda integrar físicamente un expediente debido a sus características inherentes, dentro del mismo, si se contiene la grabación o fijación del desahogo de una audiencia esencial e integrante de un procedimiento penal de corte acusatorio, por lo cual, necesariamente es parte de las actuaciones, tan es así que las legislaciones procesales in examine obligan a relacionar dichas constancias audiovisuales con el número del expediente, aunque éste no se encuentre contenido en soporte convencional.

"La única diferencia existente para con las diligencias o actuaciones soportadas en papel, radica única y exclusivamente en el hecho de que su almacenamiento y preservación se realiza mediante herramientas informáticas apropiadas **(computadoras u ordenadores)**, a diferencia del tradicional papel; sin embargo, derivado de la naturaleza de la plataforma o sistema de preservación, las mismas no pierden su esencia jurídica.

"Consecuentemente, las diligencias o actuaciones desahogadas en un proceso penal de corte acusatorio que son videograbadas y posteriormente almacenadas en formatos digitales **('DVD')**, son constitutivas de verdaderas pruebas instrumentales públicas de actuaciones aptas para acreditar la existencia de un acto procesal, y que además, otorgan algún grado de convicción al juzgador por tanto, válidamente forman parte del proceso al cual se encuentran asociadas.

"De esta forma, resulta válido concluir que respecto al primer punto de derecho que motivó la intervención de este Alto Tribunal, que la naturaleza jurídica procesal de las videograbaciones de audiencias orales en el seno de un procedimiento acusatorio y oral –**mismas que se reitera, son almacenadas y preservadas en un registro o soporte electrónico**– es la de una prueba instrumental de actuaciones. Lo anterior, se insiste, toda vez que las audiencias videograbadas no obstante estar soportadas en medios digitales, su contenido hace patente la realización de un acto jurídico procesal, mismas que además, técnicamente son susceptibles de llevar convicción al juzgador respecto de su eficacia o alcance jurídico.

"**B)** No obstante las anteriores argumentaciones lógico jurídicas, las cuales, se reitera, están dirigidas a justificar la naturaleza jurídica de las audiencias videograbadas en el seno de un procedimiento penal de corte acusatorio, debe decirse que en tratándose de la tramitación de un juicio de amparo, en el cual, dicho medio electrónico **(disco versátil digital en el que se contiene una audiencia videograbada)** fuese remitido por la autoridad responsable como anexo o sustento de su informe justificado, evidentemente que la naturaleza jurídica de dicha constancia será la de una prueba documental pública.

"Se explica.

"En el proceso constitucional autónomo de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, la litis o controversia se desenvuelve necesariamente entre un particular gobernado que se considera afectado por una ley o por un acto de autoridad, frente a la autoridad propiamente dicha, dotada de las facultades inherentes a su cargo y dentro de cuyas atribuciones se encuentra la de comparecer al juicio de amparo a defender la constitucionalidad de sus actuaciones. Dicha defensa, es realizada a través de la figura denominada Informe Justificado, consistente en un escrito, en el cual, expone de una manera breve y categórica si los hechos que fundan la acción constitucional desplegada son o no ciertos, y además, las razones que fundan su apego al marco fundamental.

"Dicho en otras palabras, el informe justificado es el documento por medio del cual, la autoridad responsable da contestación a la demanda de amparo instaurada en su contra por el agraviado y en el cual, hace la defensa de su actuar.

"Luego, cuando un Juez Federal emplaza a las autoridades responsables, las somete a su imperium jurisdiccional, razón por la cual, conforme lo dispuesto en el artículo 149, párrafo segundo, de la Ley de Amparo,[34] éstas se encuen-

[34] "**Artículo 149.** Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término de cinco días, pero el Juez de Distrito podrá ampliarlo hasta por otros cinco si estimara que la importancia del caso lo amerita. En todo caso, las autoridades responsables rendirán su in-



tran obligadas a rendir el aludido informe con justificación, en el que deberán exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o en su caso, la improcedencia de la acción constitucional intentada, para lo cual, deberán acompañar copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe.

"Sobre el particular, se estima aplicable la tesis aislada en materia común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo sentido y alcance comparte esta Primera Sala, consultable en la Quinta Época del *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo CXIX, página tres mil seiscientos sesenta y ocho que textualmente dispone:

"'INFORME JUSTIFICADO.—Los informes de las autoridades deben estar acompañados de las constancias que justifiquen la legalidad de sus procedimientos, ya que el artículo 16 de la Ley Fundamental, impone a todas las autoridades del país la obligación de fundar y motivar sus actos, para que el particular afectado conozca las causas que motivan la decisión y esté en la posibilidad de defenderse, por los medios legales establecidos.

"'Amparo administrativo en revisión 4463/53. Hernández Téllez Joel. 3 de marzo de 1954. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfonso Francisco Ramírez. Relator: Franco Carreño.'

"Con base en lo anterior, puede advertirse que a través de la institución procesal del Informe Justificado, la autoridad responsable: **1)** Reconoce la existencia o no del acto reclamado; **2)** Expone los hechos que estime convenientes o bien, controvierte los rendidos por el quejoso; y, **3)** Principalmente, expresa

---

forme con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; si el informe no se rinde con dicha anticipación, el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, solicitud que podrá hacerse verbalmente al momento de la audiencia. Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe."

las razones y fundamentos tendentes a la defensa de su actuación que ha sido impugnada por el quejoso, abogando por la constitucionalidad de los actos reclamados o bien, por la improcedencia de la acción constitucional ejercida.

"Sobre este último punto en particular, es menester precisar que a las autoridades responsables, les corresponde acreditar la legalidad de sus actos, ya que de conformidad con el principio de legalidad consagrado en el artículo 16 constitucional, las autoridades tienen la obligación de fundar y motivar sus actos, para que el particular afectado conozca las causas que motivaron su decisión.

"Así, con base en las anteriores argumentaciones jurídicas, debe estimarse que es una atribución de la autoridad señalada como responsable el comparecer ante el órgano de control constitucional de que se trate, en aras de defender la legalidad de sus actuaciones, inicialmente, mediante la presentación de un escrito denominado informe con justificación, en el cual, deberá cumplir con la carga procesal impuesta en el referido numeral 149 de la Ley de Amparo, en relación a la incorporación de las copias certificadas de las constancias que estime necesarias para apoyar dicho informe.

"Por tanto, debe considerarse que la naturaleza jurídica procesal de las constancias o diligencias que eventualmente fuesen remitidas al Juez de Control constitucional como anexo o complemento de su informe justificado –**se reitera, tendentes a acreditar la existencia y constitucionalidad de sus actos reclamados**– detenta la naturaleza jurídica de una prueba documental pública, en tanto que esa categoría le es reconocida por la ley y la jurisprudencia a aquellos escritos que consignan hechos o actos jurídicos, realizados y expedidos por las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones.

"Lo anterior es así, ya que a través de dicho informe y demás pruebas **(copias certificadas)** que lo integran, la autoridad responsable estará acreditando no sólo la certeza respecto de la existencia del acto de autoridad reclamado, sino también la constitucionalidad del mismo, o bien, en caso de ser factible, la improcedencia de la acción constitucional intentada por la parte quejosa.

"Por tanto, para el supuesto de que alguna videograbación de audiencia oral y acusatoria fuese eventualmente remitida por parte del juzgador penal de instancia como complemento o anexo de su informe justificado, en el supuesto de que alguna de las partes intervinientes hubiera accionado el respectivo juicio de amparo indirecto; lógico y jurídico resulta que el disco electrónico **('DVD')** que al efecto hubiera sido remitido ante el órgano de control constitucional, detenta la naturaleza jurídica de prueba documental pública lato sensu en dicha sede constitucional, al haber sido expedido y certificado por las autoridades señaladas como responsables, en ejercicio de sus funciones. Máxime, que conforme lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de Amparo, la prueba nominada en mención, es admisible durante la tramitación del proceso constitucional autónomo de amparo.

"Se estima aplicable la tesis aislada en materia común sustentada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, consultable en la Quinta Época del *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo LXIII, página dos mil trescientos sesenta y nueve, que textualmente dispone:

"'INFORME JUSTIFICADO, VALOR DE LAS CONSTANCIAS QUE SE INSERTAN EN EL.—Las inserciones de constancias deducidas de una causa, que haga la autoridad judicial, en su informe justificado, merecen la misma fe que la copia certificada expedida por el secretario, también de constancias, puesto que ese informe es un documento público que está signado por la autoridad responsable.

"Amparo penal en revisión 4319/38. Sánchez Pérez Martiniano. 27 de febrero de 1940. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.'

"Asimismo, se estima aplicable por analogía, la diversa tesis aislada en materia común, igualmente sustentada por esta Primera Sala, visible en la Quinta Época del *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo XLVIII, página dos mil setecientos cuarenta y cuatro que textualmente establece:

"'INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS INSERTAS EN EL.—Las actuaciones judiciales que la autoridad responsable inserta en su informe justificado,

tienen el valor de un documento público, de acuerdo con la fracción II del artículo 258 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de amparo, por obrar en un documento expedido por funcionario público, en el ejercicio de sus funciones.

"'Amparo penal en revisión 290/35. González Sánchez Ignacio. 5 de junio de 1936. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Daniel Galindo. La publicación no menciona el nombre del ponente.'

"Finalmente, en respuesta a la última interrogante jurídica que motivó la intervención de este Supremo Tribunal Constitucional, debe decirse que en tratándose de las videograbaciones de audiencias celebradas en procedimientos penales de corte acusatorio y oral contenidas en archivos informáticos almacenados en un soporte material como lo es un disco versátil digital **('DVD')**, mismas que fueron remitidas por la autoridad responsable como justificación de su informe durante la tramitación de un juicio de amparo indirecto –**y que, por tal razón se reitera, detentan la naturaleza jurídica de una prueba documental pública lato sensu para efectos del juicio de amparo**– no se requiere de la celebración de una audiencia especial para la reproducción de las mismas, ya que se tienen por desahogadas, en virtud de su propia y especial naturaleza.

"En efecto, al tenor de las consideraciones de hecho y de derecho esgrimidas a lo largo de la presente ejecutoria, debe decirse que si una autoridad jurisdiccional remite como apoyo a su informe con justificación un disco versátil digital **('DVD')** en el que se contiene un archivo informático con la videograbación de una audiencia acusatoria y oral, en realidad, únicamente se limitó a anexar y certificar la prueba documental idónea para justificar su informe y, por ende, la constitucionalidad de su acto cuestionado en sede de amparo; el cual, tendrá pleno valor probatorio, acorde con la naturaleza jurídica de las pruebas documentales públicas, misma que se deberá de tener por desahogada conforme a su propia y especial naturaleza.

"En otras palabras, si para efectos de la tramitación de un proceso constitucional autónomo de amparo, la videograbación de una audiencia contenida

en formato digital **(u otro soporte electrónico equivalente)** es un 'documento público' *lato sensu* tendente a acreditar la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad por ende, ese medio de convicción deberá tenerse por desahogado por sí mismo, acorde a su propia y especial naturaleza jurídica, siendo por tanto innecesaria la celebración de alguna audiencia especial para dicho efecto.

"No obstante lo anterior, el Juez de Distrito, para efectos de dar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable en el referido informe con justificación, deberá otorgarles una 'vista' con el contenido de dicho informe y sus anexos, específicamente, con el contenido de la audiencia videograbada y si así lo estiman necesario, podrán consultar la información contenida en formato digital en la sede del mismo órgano de control jurisdiccional, para efectos de que manifiesten lo que a su derecho convenga. Sin embargo, para el caso de que la información almacenada en el disco esté incompleta o se refiera a actuaciones distintas al acto reclamado, dada la vista otorgada a las partes, las mismas podrán hacerlo del conocimiento del Juez de amparo, o bien, cuando éste lo advierta al examinar el contenido del disco habrá de actuar en términos del artículo 78, párrafo tercero, de la ley en la materia, debiendo recabar oficiosamente la prueba correcta."

En la ejecutoria acabada de mencionar, se estableció que debió prevalecer con carácter de jurisprudencia, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, el criterio que sustenta esa Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número 1a./J. 43/2013 (10a.), registro digital: 2004362, de título y subtítulo:

"VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios

de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el Juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga."

En segundo lugar, en referencia a la certificación de las copias auténticas del registro de las audiencias orales conforme lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es preciso dejar establecido que los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, así como los diversos 50, 61, 67, 70 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la letra dicen:



"**Artículo 16**. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, **bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo**."

"**Artículo 50**. **Acceso a las carpetas digitales**. Las partes siempre tendrán acceso al contenido de las carpetas digitales consistente en los registros de las audiencias y complementarios. Dichos registros también podrán ser consultados por terceros cuando dieren cuenta de actuaciones que fueren públicas, salvo que durante el proceso el órgano jurisdiccional restrinja el acceso para evitar que se afecte su normal sustanciación, el principio de presunción de inocencia o los derechos a la privacidad o a la intimidad de las partes, o bien, se encuentre expresamente prohibido en la ley de la materia.—**El órgano jurisdiccional autorizará la expedición de copias de los contenidos de las carpetas digitales** o de la parte de ellos que le fueren solicitados por las partes."

"**Artículo 61**. **Registro de las audiencias**.—Todas las audiencias previstas en este código serán registradas por cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición el órgano jurisdiccional.—La grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considerará como parte de las actuaciones y registros y se conservarán en resguardo del Poder Judicial para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento y de las partes, garantizando siempre su conservación."

"**Artículo 67. Resoluciones judiciales.** La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este código prevea para cada caso.—Los autos y resoluciones del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes."

"**Artículo 70. Firma. Las resoluciones escritas** serán firmadas por los Jueces o Magistrados. No invalidará la resolución el hecho de que el juzgador no la haya firmado oportunamente, siempre que la falta sea suplida y no exista ninguna duda sobre su participación en el acto que debió suscribir, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria a que haya lugar."

"**Artículo 71**. **Copia auténtica**.—Se considera copia auténtica al documento o registro del original de las sentencias, o de otros actos procesales, **que haya sido certificado** por la autoridad autorizada para tal efecto.

"Cuando, por cualquier causa se destruya, se pierda o sea sustraído **el original** de las sentencias o de otros actos procesales, **la copia auténtica tendrá el valor de aquéllos**. Para tal fin, el órgano jurisdiccional ordenará a quien tenga la copia entregarla, sin perjuicio del derecho de obtener otra en forma gratuita cuando así lo solicite. La reposición del original de la sentencia o de otros actos procesales también podrá efectuarse utilizando los archivos informáticos o electrónicos del juzgado. Cuando la sentencia conste en medios informáticos, electrónicos, magnéticos o producidos por nuevas tecnologías, **la autenticación de la autorización del fallo por el órgano jurisdiccional, se hará constar a través del medio o forma más adecuada, de acuerdo con el propio sistema utilizado**."

De los preceptos legales transcritos, se advierte que en el sistema penal acusatorio, la autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Los autos y resoluciones del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente.

En el sistema penal acusatorio y oral, todas las audiencias previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales serán registradas por cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición el órgano jurisdiccional.

La grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considerará como parte de las actuaciones y registros y se conservarán en resguardo del Poder Judi-

cial para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento y de las partes, garantizando siempre su conservación.

Se considera copia auténtica al documento o registro del original de las sentencias, o de otros actos procesales, que haya sido certificado por la autoridad autorizada para tal efecto.

Cuando, por cualquier causa se destruya, se pierda o sea sustraído el original de las sentencias o de otros actos procesales, la copia auténtica tendrá el valor de aquéllos. Para tal fin, el órgano jurisdiccional ordenará a quien tenga la copia entregarla, sin perjuicio del derecho de obtener otra en forma gratuita cuando así lo solicite.

La reposición del original de la sentencia o de otros actos procesales también podrá efectuarse utilizando los archivos informáticos o electrónicos del juzgado. Cuando la sentencia conste en medios informáticos, electrónicos, magnéticos o producidos por nuevas tecnologías, la autenticación de la autorización del fallo por el órgano jurisdiccional, se hará constar a través del medio o forma más adecuada, de acuerdo con el propio sistema utilizado.

Las partes siempre tendrán acceso al contenido de las carpetas digitales consistente en los registros de las audiencias y complementarios. Dichos registros también podrán ser consultados por terceros cuando dieren cuenta de actuaciones que fueren públicas, salvo que durante el proceso el órgano jurisdiccional restrinja el acceso para evitar que se afecte su normal sustanciación, el principio de presunción de inocencia o los derechos a la privacidad o a la intimidad de las partes, o bien, se encuentre expresamente prohibido en la ley de la materia.

Asimismo, el órgano jurisdiccional autorizará la expedición de copias de los contenidos de las carpetas digitales o de la parte de ellos que le fueren solicitados por las partes.

De lo antes expuesto, se advierte que el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece cuáles son las formalidades para la certificación de

una copia auténtica del registro de las audiencias previstas en ese ordenamiento legal, donde consten las sentencias u otros actos procesales, que deban ser remitidos a una autoridad diversa a la que tiene a su resguardo las carpetas digitales que las contienen, por lo cual, este Pleno de Circuito considera que ello se debió a que el sistema penal tiene como principal característica que es acusatorio y oral, por lo que los autos y resoluciones del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente en las audiencias previstas en el mencionado código, las cuales serán registradas por cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición el órgano jurisdiccional, entre tales, está la grabación de imágenes o sonidos, que se conservará en resguardo del Poder Judicial, que para el caso de que esa autoridad deba remitir una copia auténtica de tales registros, su certificación deberá realizarse a través del medio o forma más adecuados, de acuerdo con el propio sistema utilizado, como un DVD, una memoria USB, un disco duro portátil, entre otros medios, y dadas las características del material empleado, deberá realizarse la certificación respectiva.

Por lo cual, si el Código Nacional de Procedimientos Penales no prevé expresamente las formalidades que debe reunir tal certificación, será la autoridad que tiene a su resguardo tales registros, quien la realice conforme el caso lo amerite, dependiendo del sistema utilizado; sin que sea dable atraer las formalidades provenientes de un sistema tradicional o mixto al actual sistema penal acusatorio y oral.

En su caso, si se cuenta con la afirmación de que la copia remitida es auténtica al registro del original de la sentencia o de otros actos procesales, por parte de la autoridad que tiene a su resguardo dichos registros de las audiencias a que se refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales, por cualquier medio oficial como oficio o comunicación oficial, deben considerarse colmados los requisitos mínimos legales para tenerla como una copia auténtica, atendiendo además al principio de probidad y buena fe que regula el procedimiento penal y que deben atender todas las autoridades que participan en él; salvo prueba en contrario, conforme lo prevé el artículo 380 del referido Código Nacional, donde contempla la posibilidad de que las partes puedan cuestionar la autenticidad del documento quienes tendrán la carga de la prueba.

Pues suponer que el órgano jurisdiccional no envía sus registros auténticos porque no firmó ni estampó el sello oficial en la materialidad del disco, se extralimita el texto del Código Nacional de Procedimientos Penales y transgrede el principio de legalidad y el derecho de las partes en el procedimiento a una impartición de justicia pronta y al principio de legalidad.

Máxime que el propio artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, establece que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ello por cualquier medio que dé certeza de su contenido, y del cumplimiento de lo previsto en dicho párrafo, en cuanto a la obligación de toda autoridad, de fundar y motivar todo acto de molestia.

En ese tenor, como los registros de audio y video almacenados en discos versátiles digitales (DVD) adquieren en el juicio de amparo la naturaleza de una prueba documental pública, ello no se confronta con el cumplimiento mínimo de certificación exigible en el sistema penal acusatorio y oral, pues de lo contrario se importarían reglas procesales y formalidades de un sistema de naturaleza distinta para que adquiera su valor probatorio.

Entonces, si para considerar la presencia de una copia auténtica es necesaria la certificación de la autoridad autorizada para ello, que en el caso del sistema penal acusatorio corresponde al propio Juez de oralidad al ser este funcionario quien tiene fe pública, así como a su asistente de Sala en quien por disposición normativa puede delegar esa función, es suficiente el envío de una comunicación oficial que afirme o asegure que se trata de una copia auténtica del registro original para considerarla como tal, salvo prueba en contrario; por lo que es innecesario que el disco físico óptico se encuentre firmado y sellado, pues esas formalidades no se encuentran previstas en la ley.

No es obstáculo para sostener lo anterior, que el artículo 70 del señalado Código Nacional, establezca la exigencia de la firma de los Jueces o Magistrados en sus resoluciones, porque expresamente se refiere a las resoluciones escritas, y no a los registros a través de medios tecnológicos, ni a la certificación de sus copias auténticas.

Ahora, dentro del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, para el caso de que se trate del DVD que se remita al tribunal de alzada para resolver el recurso de apelación, la certeza de su contenido, se pone de manifiesto ante el hecho de que dicho disco sea remitido al tribunal de apelación por conducto de la Oficialía de Partes del propio tribunal de alzada, a través de un oficio que cumplió con las formalidades, esto es, que contiene la firma autógrafa de la autoridad facultada para ello, así como el sello correspondiente; y finalmente será la autoridad a quien corresponde resolver el recurso de apelación respectivo quien debe corroborar que la diligencia apelada en efecto se encontraba registrada en el DVD multicitado que fue remitido.

En el caso del trámite del juicio de amparo, el órgano de control constitucional, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dará vista a las partes con el informe justificado que rinda la autoridad responsable; para lo cual, éstas tienen diversas prerrogativas a su favor, entre ellas, la de objetar dicho informe o bien, las constancias que se acompañen al mismo, únicamente en cuanto a su autenticidad o continente, acorde con la jurisprudencia P./J. 5/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 40/98, que aun cuando se emitió en interpretación del artículo 153 de la ley de Amparo abrogada, tiene su correlativo en el diverso artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, por lo que la referida jurisprudencia es aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la referida Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece; de rubro y texto siguientes:

"INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD.—El artículo 153 de la Ley de Amparo autoriza a objetar de falsos los documentos presentados por alguna de las partes; y en su párrafo segundo precisa los alcances o la materia de tal objeción al señalar que lo dispuesto en el propio precepto legal sólo da competencia al Juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio, precisión que de por sí indica que la objeción de falsedad del documento debe referirse a su autenticidad, es decir, a su continente y no a su contenido, pues esto último será materia de análisis al emitirse

la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos. De ahí que el documento público en el que la autoridad responsable rinde su informe justificado sólo pueda ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad y no respecto de su contenido."[35]

Aunado a que cuando la autoridad responsable, como justificación de su informe, anexa un disco versátil digital (DVD) el cual contiene la decisión judicial reclamada, cuando se trate de actos que se refieran al sistema procesal penal acusatorio, en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, debe acompañar a su informe con justificación un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, indicando el orden de intervención de cada una de las partes; cuestión que corrobora el contenido del DVD.

En ese orden de ideas, se advierte que si el medio digital que contiene la videograbación de la resolución reclamada fue remitido al Juzgado de Distrito por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, la cual pertenece al Poder Judicial, a quien toca su resguardo, y que dicha remisión se hizo a través de las oficinas que pertenecen precisamente al Poder Judicial, mediante un oficio que cumplió con las formalidades de ley, esto es, que contiene la firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello correspondiente; además de que se acompañó al mismo el índice cronológico del desarrollo de la audiencia, y que el órgano jurisdiccional que conoció del asunto de que se trata corroboró que la diligencia respectiva, en efecto se encontraba registrada en el DVD; es inconcuso que existe certeza en el contenido de la información que remite a la autoridad de amparo, a pesar de que el disco óptico de referencia, en su materialidad, no contenga la firma de la autoridad actuante, ni su sello, porque existen diversas circunstancias que le dan esa certeza.

Ello sin perjuicio de que si la autoridad de amparo advierte que no existe coincidencia entre el contenido del disco óptico y la resolución reclamada,

[35] Tesis jurisprudencial visible a página 10, Tomo XIII, enero de 2001, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, materia común, con número de registro digital: 190369, Novena Época.

pueda requerir de oficio a la autoridad responsable las constancias necesarias para la resolución del asunto, de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del numeral 75 de la Ley de Amparo.

En consecuencia, este Pleno de Circuito responde a la interrogante planteada considerando que el disco versátil digital DVD que contiene la videograbación de audiencias del sistema penal acusatorio y oral no requiere del sello y firma plasmados en la materialidad del disco óptico para considerar su contenido como copia auténtica del registro.

En conclusión, conforme a las consideraciones expuestas, debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, en términos de los artículos 215, 217 y 225 de la Ley de Amparo, el criterio que sustenta este Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito a continuación:

VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). LA CERTIFICACIÓN DE QUE SON COPIA AUTÉNTICA DEL REGISTRO AUDIOVISUAL NO REQUIERE QUE EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN EN LA MATERIALIDAD DEL DISCO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA. Las videograbaciones de las audiencias de referencia, conforme al artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contenidas en disco versátil digital (DVD), tienen el carácter de prueba instrumental de actuaciones, al tratarse de las diligencias o actos relativos al proceso penal acusatorio, guardadas en un archivo digital y, por ende, son aptas para acreditar la existencia de un acto procesal. Por tanto, aun cuando dicho disco carezca del sello y la firma correspondientes como signo de certificación, no debe ponerse en duda su contenido, si existen otras circunstancias que le den certeza a éste, como pudieran ser, en el caso del trámite del recurso de apelación, que el disco fuera remitido al tribunal de alzada por la autoridad del Poder Judicial a quien corresponde su resguardo y esa remisión se hiciera por conducto de las oficinas que pertenecen precisamente a dicho Poder mediante un oficio que cumple con las formalidades de ley, esto es, que contiene la firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello correspon-

diente y, sobre todo, ante el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto de que se trata, corrobore que la diligencia respectiva, en efecto se encuentra registrada en el disco; y en el caso del trámite de un juicio de amparo, en que el disco fuera remitido por la autoridad responsable junto con el informe justificado, mediante un oficio con la firma autógrafa de la autoridad emisora y el sello correspondiente, se tiene la presunción de autenticidad de su contenido, considerando además que las partes tienen la oportunidad de objetarlo una vez que se les da la vista correspondiente.

En mérito de lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Sí existe la contradicción de tesis a que este expediente 3/2019 se refiere.

SEGUNDO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de este Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, en los términos de la tesis redactada en el último considerando de esta resolución.

TERCERO.—Dese publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en términos del artículo 219 de la Ley de Amparo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados que integran el Pleno de Circuito de la materia y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió por unanimidad de tres votos, con apoyo en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados José Salvador Roberto Jiménez Lozano, Gabriel Alejandro Zúñiga Romero y Carla Isselin Talavera, siendo presidente y ponente, el primero de los nombrados, quienes firman con la secretaria de Acuerdos Claudia Mendoza González, que autoriza y da fe.

La suscrita licenciada Claudia Mendoza González, certifica que los datos testados en la versión pública de la contradicción de tesis dictada en el expediente 3/2019 del índice de este Pleno de Circuito, corresponden a información confidencial, de conformidad con el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Nota: La tesis de jurisprudencia VI.3o.P. J/1 (10a.) citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 5 de julio de 2019 a las 10:12 horas.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). LA CERTIFICACIÓN DE QUE SON COPIA AUTÉNTICA DEL REGISTRO AUDIOVISUAL NO REQUIERE QUE EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN EN LA MATERIALIDAD DEL DISCO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA. Las videograbaciones de las audiencias de referencia, conforme al artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contenidas en disco versátil digital (DVD), tienen el carácter de prueba instrumental de actuaciones, al tratarse de las diligencias o actos relativos al proceso penal acusatorio, guardadas en un archivo digital y, por ende, son aptas para acreditar la existencia de un acto procesal. Por tanto, aun cuando dicho disco carezca del sello y la firma correspondientes como signo de certificación, no debe ponerse en duda su contenido, si existen otras circunstancias que le den certeza a éste, como pudieran ser, en el caso del trámite del recurso de apelación, que el disco fuera remitido al tribunal de alzada por la autoridad del Poder Judicial a quien corresponde su resguardo y esa remisión se hiciera por conducto de las oficinas que pertenecen precisamente a dicho Poder mediante un oficio que cumple con las formalidades de ley, esto es, que contiene la firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello correspondiente y, sobre todo, ante el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto de que se trata, corrobore que la diligencia respectiva, en efecto se encuentra registrada en el disco; y en el caso del trámite de un juicio de amparo, en que el disco fuera remitido por

la autoridad responsable junto con el informe justificado, mediante un oficio con la firma autógrafa de la autoridad emisora y el sello correspondiente, se tiene la presunción de autenticidad de su contenido, considerando además que las partes tienen la oportunidad de objetarlo una vez que se les da la vista correspondiente.

PLENO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
PC.VI.P. J/7 P (10a.)

Contradicción de tesis 3/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Penal del Sexto Circuito. 14 de octubre de 2020. Unanimidad de tres votos de los Magistrados José Salvador Roberto Jiménez Lozano, Gabriel Alejandro Zúñiga Romero y Carla Isselin Talavera. Ponente: José Salvador Roberto Jiménez Lozano. Secretaria: Marcela Aguilar Loranca.

Tesis y criterios contendientes:

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver los amparos en revisión 292/2018, 304/2018, 307/2018, 25/2019 y 45/2019, los cuales dieron origen a la tesis de jurisprudencia VI.3o.P. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD'S) QUE CONTIENEN LAS VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. A LA LUZ DE LA TRAMITACIÓN DE UN PROCESO PENAL DE ESTA NATURALEZA, TIENEN EL CARÁCTER DE UNA PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, POR LO QUE AUN CUANDO CAREZCAN DEL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, NO DEBE PONERSE EN DUDA SU CONTENIDO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 5 de julio de 2019 a las 10:12 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 68, Tomo III, julio de 2019, página 1972, con número de registro digital: 2020244, y

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver los amparos en revisión 88/2019 y 163/2019, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 263/2019.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de diciembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

Quinta Parte

TRIBUNALES COLEGIADOS
DE CIRCUITO



Sección Segunda

EJECUTORIAS Y TESIS
QUE NO INTEGRAN JURISPRUDENCIA



A

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. AL EXCEDERSE EL PLAZO DE EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY RELATIVA, SE CONTRAVIENE LA FINALIDAD PARA LAS QUE FUERON ESTABLECIDAS. Dada su naturaleza cautelar, de urgente resolución, vigencia limitada y previas al procedimiento judicial, las medidas u órdenes de protección que se prevén en el artículo 62 del cuerpo normativo en estudio, tienen como finalidad prevenir, interrumpir o impedir la consumación de acciones que impliquen violencia contra las mujeres, a través del otorgamiento de una orden dictada por la autoridad judicial competente, en apego a las formalidades que deben revestir los mandamientos de autoridad, en términos del artículo 16 constitucional. Sin embargo, la propia medida es de carácter provisional, a tal grado que tiene un máximo de setenta y dos horas de vigencia, en el que, incluso, se respeta la garantía de audiencia de las partes dentro de un procedimiento sumario que, si bien es regulado de forma genérica en el artículo 72 de la norma, también es cierto que en cuestiones adjetivas de la audiencia, resultan supletorias las codificaciones procesales aplicables en atención a la materia de la medida solicitada; por tanto, no debe soslayarse que se trata de una medida de carácter urgente y cautelar que se dicta ante la inminencia que advierte la destinataria de la conducta lesiva y que, a virtud del plazo de protección, cuenta con margen suficiente para, de así estimarlo, iniciar los diversos procedimientos jurisdiccionales donde también se contemplan mayores medidas protectoras por un lapso superior al conferido en la norma en estudio. Considerar lo contrario, esto es, prorrogar indefinidamente la providencia cautelar, estribaría en la contradicción directa, tanto de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, la naturaleza

temporal y expedita de la medida, así como en la sustitución de procedimientos diversos ya previstos en otros cuerpos normativos que permiten la efectiva tutela de las partes, tal como lo estipula el artículo 17 constitucional.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.9o.C.51 C (10a.)

Amparo directo 924/2019. Karla Viridiana García Estrada. 23 de enero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Polo Rosas Baqueiro. Secretario: Benito José Vergara Moreno.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ALIMENTOS DEL ACREEDOR MAYOR DE EDAD. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE VALORAR PARA DETERMINAR SI SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DEL DEUDOR DE PROPORCIONARLOS CUANDO LA SECUENCIA ENTRE LA TERMINACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y EL INICIO DE LA SUPERIOR NO ES INMEDIATA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO). El artículo 293, párrafo segundo, del Código Civil del Estado, establece que la obligación del deudor alimentario subsiste mientras su acreedor alimentario mayor de edad esté cursando una carrera, quien no puede interrumpirla, mas no señala si la secuencia entre la terminación de la educación media superior y el inicio de la superior debe ser inmediata. Ahora bien, ante la falta de regulación expresa, lo razonable es que el juzgador valore en cada caso una serie de eventos y circunstancias, algunas de las cuales, podrían estar fuera del control del interesado, tales como esperar la apertura de la licenciatura que es motivo de su interés, una huelga universitaria o ingresar a cursos propedéuticos, cuya apreciación serviría para evaluar el tiempo transcurrido entre uno y otro eventos, reflejando posteriormente en su resolución si hubo desacato a la condicionante establecida por el legislador para que los hijos mayores de edad gocen de los alimentos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
XXII.2o.A.C.9 C (10a.)

Amparo directo 338/2019. 14 de noviembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hernández García. Secretario: Armando Antonio Badillo García.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ASPIRANTE AL EJERCICIO DEL NOTARIADO Y NOTARIO TITULAR. LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE PUEBLA PARA OBTENER LAS PATENTES RELATIVAS, NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PARA SER CONSIDERADOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. De la Ley del Notariado del Estado de Puebla se desprenden notas distintivas que ponen de manifiesto la relevancia de la institución y función notariales. En concordancia con ello, el legislador estableció un procedimiento específico para la designación de los notarios, con el objeto de determinar a qué profesional del derecho se delegará la función de orden público mencionada, los requisitos que debe satisfacer y las formalidades que deben observarse para el inicio de dicha función. En ese tenor, los procedimientos para la emisión de las patentes de aspirante al ejercicio del notariado y de notario titular, en sus distintas etapas o fases, constituyen una unidad, pues no debe perderse de vista que la finalidad perseguida es regular en su integridad el desempeño de la función de orden público delegada por el Estado a través del Ejecutivo. Ahora bien, atendiendo a los lineamientos fijados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. XCIX/99, de rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO." y en la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, de rubro: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR.", para establecer que un procedimiento es seguido en forma de juicio, no es suficiente que se prevea la posibilidad de que el particular afectado con el acto administrativo sea oído en su defensa, pues los juicios se caracterizan por la contienda

entre partes, sujeta a la decisión jurisdiccional de quien se pide la declaración de un derecho y la correlativa obligación, asimismo, no basta que a través del procedimiento que se pretende asemejar a aquéllos, la autoridad prepare su resolución definitiva, sino que para dicha equiparación es un presupuesto la intervención del particular, la cual debe estar orientada a que se respete su derecho de audiencia, aun de forma mínima. Lo anterior no acontece en los mencionados procedimientos previstos en la Ley del Notariado del Estado de Puebla, para la expedición de las patentes de aspirante al ejercicio del notariado y de notario titular; de ahí que no puedan considerarse seguidos en forma de juicio, para efectos de la procedencia del juicio de amparo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.1o.A.123 A (10a.)

Amparo en revisión 504/2019. 30 de septiembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: Salvador Alejandro Lobato Rodríguez.

Nota: Las tesis aislada 2a. XCIX/99 y de jurisprudencia 2a./J. 22/2003 citadas, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomos X, julio de 1999, página 367 y XVII, abril de 2003, página 196, con números de registro digital: 193613 y 184435, respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

C

CANCELACIÓN DE DERECHOS SOBRE UNA PARCELA. CUANDO SE EMITE CON MOTIVO DE LO ORDENADO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS Y NO EN FORMA AUTÓNOMA POR EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. De conformidad con el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, sus delegados y registradores están facultados para ejercer la función registral de los actos y documentos objeto de registro, calificar e inscribir la transmisión de derechos agrarios, cancelar y emitir nuevos certificados de derechos agrarios; por ende, constituyen actos y resoluciones dictados por las autoridades agrarias que alteran, modifican o extinguen un derecho o determinan la existencia de una obligación. Entonces, cuando se reclame la cancelación de derechos sobre una parcela por el Registro Agrario Nacional, sin que ese acto haya sido emitido en forma autónoma, sino con motivo de lo ordenado en la asamblea general de ejidatarios, debe considerarse proveniente de una autoridad agraria, por lo que en su contra debe agotarse el juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario, en términos del artículo 163 de la Ley Agraria, en relación con el diverso 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, porque altera, modifica o extingue un derecho y trasciende directamente sobre el que el interesado aduce tener respecto de la parcela. Por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, atento al principio de definitividad.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.2o.P.A.59 A (10a.)

Amparo en revisión 322/2019. 31 de julio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Rivera Durón. Secretaria: Diana Montserrat Partida Arámburo.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. AL TRATARSE DE UN ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO, LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA A UN SUJETO OBLIGADO EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, NO ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL. Conforme al artículo 17, fracción IV, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado es competente para conocer de los juicios promovidos contra actos que causen un agravio en materia fiscal, emitidos por las autoridades administrativas, fiscales o entidades de la administración pública paraestatal o de los Municipios del Estado y, en términos del numeral 1o. de dicho ordenamiento, el citado tribunal tiene competencia para conocer y resolver los conflictos y controversias que se susciten entre los particulares y el Estado, los Municipios, sus organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal cuando estas últimas realicen funciones administrativas de autoridad. Ahora bien, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, de observancia general en toda la República, los organismos garantes –como la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado– son aquellos con autonomía constitucional, especializados en materia de acceso a la información y protección de datos personales, en términos de los artículos 6o., 116, fracción VIII, y 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso ñ), de la Constitución Federal –este último en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016–. Respecto de tales organismos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 77/2016, determinó que las resoluciones de los organismos constitucionales autónomos de las entidades federativas, son impugnables mediante el recurso de inconformidad ante el organismo garante federal y el juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, excluyendo "la posibilidad de promover

en su contra el juicio de nulidad ante el tribunal contencioso administrativo del Estado de que se trate". En ese orden, la resolución de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, que impone una multa a un sujeto obligado en materia de acceso a la información, no es impugnable mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, al no encuadrar tal acto en los supuestos establecidos en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, y dado que tal organismo garante del Estado, no se encuentra previsto dentro de las autoridades respecto de las cuales tal órgano jurisdiccional tiene competencia, establecidas en el citado numeral 1o. de dicho ordenamiento.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

IV.2o.A.149 A (10a.)

Amparo directo 69/2019. Presidente Municipal de Melchor Ocampo, Nuevo León y otros. 7 de noviembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Esteban Álvarez Troncoso. Secretaria: Griselda Tejada Vielma.

Amparo directo 95/2019. Presidente Municipal de Melchor Ocampo, Nuevo León y otros. 7 de noviembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Esteban Álvarez Troncoso. Secretaria: Griselda Tejada Vielma.

Amparo directo 286/2019. Presidente Municipal de Melchor Ocampo, Nuevo León y otro. 5 de diciembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Esteban Álvarez Troncoso. Secretaria: Ana Mitzi Hernández Rivera.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

COMPROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ABROGADO, AL DESARROLLAR LOS REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER PARA IDENTIFICAR BIENES O MERCANCÍAS, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 29-A, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 36/2006, señaló que el principio de jerarquía normativa consiste en que el ejercicio de la facultad reglamentaria no

puede modificar o alterar el contenido de una ley, esto es, los reglamentos tienen como límites naturales los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que les esté permitido contener mayores posibilidades o imponer distintas limitantes que la propia ley de la que derivan. Ahora bien, de la contraposición de los artículos 29-A del Código Fiscal de la Federación y 50 de su reglamento abrogado –de redacción similar al artículo 40 del vigente–, se advierte que ambos establecen ciertos requisitos que deben contener los comprobantes fiscales que amparen bienes o mercancías, con la finalidad de que sean identificadas; de ahí que si el primero prevé en su fracción V, el relativo a especificar la "clase" de éstas, dicha acepción abarca las diversas de marca, modelo, número de serie y características técnicas o comerciales, señaladas en el segundo como características esenciales de la mercancía que deben considerarse al describirla detalladamente en el comprobante fiscal, ya que la palabra "clase" se traduce en el conjunto de elementos comunes que permiten distinguir un bien o mercancía de otro similar. En consecuencia, el artículo 50 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación abrogado no viola el principio de subordinación jerárquica, ya que no establece requisitos adicionales a los previstos en el artículo 29-A, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, sino que únicamente los desarrolla, al precisar su alcance, de manera que su justificación coincide con la de la disposición legal que le da origen.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.2o.P.A.62 A (10a.)

Amparo directo 335/2019. 10 de septiembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Pánfilo Martínez Ruiz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Ana Luisa Mendoza Álvarez.

Nota: La ejecutoria relativa a la acción de inconstitucionalidad 36/2006 citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 1100, con número de registro digital: 20100.

Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis

P. LX/98, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 56, con número de registro digital: 195528, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

COMPROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ABROGADO, AL ESTABLECER DETERMINADOS REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER PARA IDENTIFICAR BIENES O MERCANCÍAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 36/2006, señaló que el principio de reserva de ley se presenta cuando una norma constitucional reserva de manera expresa a la ley la regulación de una determinada materia, lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de ésta sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta. Ahora bien, de la contraposición de los artículos 29-A del Código Fiscal de la Federación y 50 de su reglamento abrogado –de redacción similar al artículo 40 del vigente–, se advierte que ambos establecen ciertos requisitos que deben contener los comprobantes fiscales que amparen bienes o mercancías, con la finalidad de que sean identificadas; de ahí que si el primero prevé en su fracción V, el relativo a especificar la "clase" de éstas, dicha acepción abarca las diversas de marca, modelo, número de serie y características técnicas o comerciales, señaladas en el segundo como características esenciales de la mercancía que deben considerarse al describirla detalladamente en el comprobante fiscal, ya que la palabra "clase" se traduce en el conjunto de elementos comunes que permiten distinguir un bien o mercancía de otro similar. En consecuencia, el artículo 50 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación abrogado no viola el principio de reserva de ley, toda vez que no existe precepto constitucional o de otra índole que hubiere reservado de manera expresa al Código Fiscal de la Federación o a otro ordenamiento del mismo nivel, la regulación relativa a los comprobantes fiscales y los requisitos establecidos para su vali-

dez no repercuten en los elementos esenciales del tributo (como serían el objeto o la tasa), sino en obligaciones formales fiscales. Así, al no existir prohibición para que los aspectos de dicha materia sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la ley, el titular del Poder Ejecutivo puede emitir las normas reglamentarias necesarias para determinar el contenido y términos de las exigencias establecidas en la ley para la validez de los comprobantes fiscales.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.2o.P.A.61 A (10a.)

Amparo directo 335/2019. 10 de septiembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Pánfilo Martínez Ruiz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Ana Luisa Mendoza Álvarez.

Nota: La ejecutoria relativa a la acción de inconstitucionalidad 36/2006 citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 1100, con número de registro digital: 20100.

Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 56, con número de registro digital: 195528, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CONFESIÓN FICTA PARA HECHOS PROPIOS. ES SUFICIENTE LA DEL FUNCIONARIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) PARA DEMOSTRAR LA PROMESA DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE LA CLÁUSULA 56 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO A CAMBIO DE

LA RENUNCIA ESCRITA DEL TRABAJADOR, SIN QUE ÉSTE TENGA LA CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE LAS FACULTADES DEL PROMITENTE. Si el trabajador atribuye a un funcionario del patrón (Instituto Mexicano del Seguro Social), que le hizo la promesa de pago de la indemnización extralegal establecida en la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo a cambio de su renuncia y éste, ante su incomparecencia a la audiencia de desahogo de la prueba confesional para hechos propios, lo acepta bajo el supuesto de la confesión ficta, ello es suficiente para tener por acreditada dicha promesa, si no está contradicha por prueba fehaciente. No es obstáculo que la estipulación aluda al caso de una separación injustificada y no de una renuncia, pues lo importante en la especie es el pago de la indemnización extralegal prometida, no la actualización del supuesto de la cláusula; siendo innecesario que el trabajador demuestre en el juicio que dicho funcionario tiene facultades para realizar tal propuesta, pues ello debe ser motivo de defensa por parte del organismo demandado, al corresponderle la carga de la prueba en este aspecto; además de que es el patrón quien sabe cuáles son las facultades de los empleados y cuenta con los elementos para acreditarlo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

I.3o.T.65 L (10a.)

Amparo directo 1284/2019. 27 de febrero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Lourdes Minerva Cifuentes Bazán. Secretaria: Jacquelin Medina Basurto.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CONFLICTO COMPETENCIAL POR RAZÓN DE FUERO ENTRE JUECES DE EJECUCIÓN PENAL. ES INEXISTENTE SI LOS CONTENDIENTES ADUJERON CARECER DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DEL SENTENCIADO, SIN QUE EXISTA UNA PRETENSIÓN CONCRETA DE LAS PARTES SOMETIDA A SU JURISDICCIÓN.

Hechos: Los Jueces de Ejecución Penal contendientes adujeron carecer de competencia por razón de fuero para conocer de cualquier aspecto relacionado

con las condiciones de internamiento del sentenciado, con base en planteamientos abstractos, genéricos y anticipados, en virtud de que no existió una pretensión concreta de las partes sobre la cual fuere necesario que ejercieran su jurisdicción.

Criterio Jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito resuelve que es inexistente el conflicto competencial entre Jueces de Ejecución de distinto fuero para conocer de aspectos relacionados con las condiciones de internamiento del sentenciado, si los contendientes adujeron carecer de competencia sin que exista una petición concreta de las partes sometida a su jurisdicción.

Justificación: Lo anterior, pues a partir del análisis jurisprudencial sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la existencia de un conflicto competencial es necesario que el órgano que plantea carecer de este elemento, se estime limitado para conocer de una pretensión o planteamiento concreto, expuesto por alguna de las partes que integre la relación procesal. Lo que significa que esté en condición real de ejercer su jurisdicción, entendida ésta como la potestad de aplicar el derecho a un caso específico, a fin de resolver, de modo definitivo e irrevocable, una controversia sometida a su conocimiento.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.9o.P.290 P (10a.)

Conflicto competencial 5/2020. Suscitado entre el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juzgado de Ejecución, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México y el Juzgado Especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Sanciones Penales, ambos con sede en el Reclusorio Norte. 20 de agosto de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Paredes Calderón. Secretario: Mario Alberto García Acevedo.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CONSTANCIA DE NEGATIVA DE PENSIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES INNECESARIO EXHIBIRLA EN EL

JUICIO PARA ACCEDER A LOS RECURSOS ACUMULADOS EN LOS RUBROS DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ Y CUOTA SOCIAL, CUANDO EL ACTOR SEA BENEFICIARIO SUSTITUTO O DESIGNADO POR MERA DEPENDENCIA ECONÓMICA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 501 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. La designación de beneficiarios en orden de prelación en términos del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, se actualiza cuando no existen beneficiarios legales de conformidad con el artículo 84, fracciones III a IX de la Ley del Seguro Social, ni beneficiarios designados por el trabajador asegurado fallecido; por lo que, cuando se demanda la entrega de los fondos contenidos en las cuentas individuales de éste, y no se está en el caso previsto en la Ley del Seguro Social, es decir, el beneficiario designado no tiene derecho al otorgamiento de pensión (por viudez, orfandad o ascendencia), en consecuencia, no es exigible la constancia de negativa de pensión para acceder al saldo acumulado en el rubro de cesantía en edad avanzada y vejez y cuota social, dada la imposibilidad legal de que exista pensión alguna, pues se trata de un caso de exclusión de la propia Ley del Seguro Social, al no revestir el carácter de beneficiario legal, cuya situación debe regularse conforme a lo previsto en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo.

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

I.11o.T.52 L (10a.)

Amparo directo 732/2019. Afore XXI Banorte, S.A. de C.V. 12 de septiembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Rodríguez González. Secretaria: Alejandra Waleswka Bonilla Fonseca.

Amparo directo 933/2019. Afore XXI Banorte, S.A. de C.V. 9 de octubre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Pérez Pérez. Secretaria: Nancy Ivette Flores Ochoa.

Amparo directo 1028/2019. Afore XXI Banorte, S.A. de C.V. 31 de octubre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Pérez Pérez. Secretario: Miguel Ángel Ortiz González.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS COMPETENCIA DE LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS COORDINADORES DE ÁREA QUE PERTENEZCAN A ÉSTAS ESTÁN FACULTADOS PARA EXPEDIRLAS, AL ACTUAR EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE SU TITULAR. El artículo 3 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León prevé que para el ejercicio de sus atribuciones, trámite y despacho de los asuntos de su competencia, dicha dependencia se divide en: Subsecretarías de Ingresos y Egresos, Procuraduría Fiscal y Unidades de Fomento a la Inversión y al Financiamiento de Proyectos y de Información Financiera y Seguimiento, las cuales, a su vez, se subdividen en las direcciones que ahí se indican. Asimismo, establece que aquéllas contarán con las coordinaciones, jefaturas de departamento, asistentes y demás auxiliares que se requieran. Por su parte, los artículos 6, fracción III y 7, fracción I, del mismo reglamento determinan la facultad que tienen los titulares de las subsecretarías, procuraduría y unidades mencionadas y de sus direcciones para expedir copias certificadas de las constancias de su competencia, mientras que el artículo 25 del propio ordenamiento establece que aquéllos podrán ser suplidos en su ausencia, jerárquicamente, por los directores, coordinadores de área o jefes de departamento. Por tanto, los coordinadores de área están facultados para expedir copias certificadas de los documentos competencia de la dirección a la que pertenezcan, dado que actúan en suplencia por ausencia del titular de ésta.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.

(IV Región)1o.25 A (10a.)

Amparo directo 78/2020 (cuaderno auxiliar 499/2020) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Refugio Garduño Merlos. 28 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Vega Ramírez. Secretaria: Lucero Edith Fernández Beltrani.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

D

DELITO DE VIOLACIÓN. EL ARTÍCULO 265 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO VULNERA LOS DERECHOS HUMANOS DE IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER, Y NO DISCRIMINACIÓN ANTE LA LEY, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.

Hechos: El quejoso reclamó la inconstitucionalidad del artículo 265 del Código Penal Federal, por vulnerar el artículo 4o. constitucional, que garantiza la igualdad del varón y la mujer ante la ley, ya que el tipo penal de violación que prevé dicho precepto solamente va dirigido –por cuanto a la calidad del sujeto activo–, al hombre, razón por la cual, se le discrimina por razón de género por el solo hecho de ser varón, lo que produce que se le menoscaben sus derechos.

Criterio jurídico: Este órgano colegiado determina que el artículo 265 del Código Penal Federal es constitucional, ya que no vulnera los derechos humanos de igualdad entre el varón y la mujer, y no discriminación ante la ley, establecidos en el artículo 4o. de la Constitución General, pues la calidad de sujeto activo en el delito en estudio no está dirigida a un género específico.

Justificación: Lo anterior, en virtud de que conforme a la tesis aislada 1a. CLXXVI/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone el derecho humano a la igualdad entre el varón y la mujer, establece una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género, esto es, frente a la ley deben ser tratados por igual, es decir, busca garantizar la igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país, sin distinción alguna por causa de

su sexo, dada su calidad de persona; y también comprende la igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de responsabilidades. Así, el marco jurídico relativo a este derecho humano desde la perspectiva convencional del sistema universal, comprende los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y desde el sistema convencional interamericano destacan el Preámbulo y el artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De este modo, del tipo penal en estudio, se advierte que la calidad de sujeto activo la adquiere la persona que impone la cópula a otra, ya sea doblegando su voluntad al ejercer sobre ella violencia física o moral, con independencia de la mecánica en que ocurra, esto es, que el activo introduzca su miembro viril, o cualquier elemento o instrumento distinto a éste en el cuerpo de la víctima, por alguna de las cavidades que describen las normas. Entonces, la disposición normativa no restringe a determinado sexo o género la calidad de sujeto activo del delito, ya que la expresión "Al que" y "Quien" son pronombres relativos que se entienden neutros, dado que sólo identifican a la persona hipotética que materializa la conducta típica. Asimismo, la definición del elemento normativo "cópula", tampoco limita a determinado sexo la condición del sujeto activo, pues la acción que describe "la introducción del miembro viril, cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo", no constituye el núcleo del tipo, dado que no es la simple introducción del miembro viril o cualquier instrumento en alguna de las cavidades del pasivo o del activo que describe la norma, sino los determinados medios empleados o las circunstancias particulares que concurren en el sujeto pasivo los que imprimen relieve antijurídico y significación típica a la conducta.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.9o.P.288 P (10a.)

Amparo directo 40/2020. 3 de septiembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Guzmán Aguado, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Hugo Morales de la Rosa.

Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la

tesis P. LX/98, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 56, con número de registro digital: 195528, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia.

La tesis aislada 1a. CLXXVI/2012 (10a.) citada, integró la jurisprudencia 1a./J. 30/2017 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 21 de abril de 2017 a las 10:25 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 41, Tomo I, abril de 2017, página 789, con número de registro digital: 2014099.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DERECHO A INTERROGAR TESTIGOS DE CARGO EN EL PROCESO PENAL. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A LA OBLIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE OBTENER LA COMPARECENCIA DE LA VÍCTIMA DEL DELITO ANTE EL JUEZ, SI POR RAZONES DE GÉNERO Y VULNERABILIDAD, NO FUE POSIBLE LOCALIZARLA. La Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, en la tesis aislada 1a. XLVII/2017 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO A INTERROGAR TESTIGOS EN EL PROCESO PENAL. POR EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EL MINISTERIO PÚBLICO ES QUIEN TIENE LA CARGA DE LOCALIZAR A LOS TESTIGOS DE CARGO A FIN DE LOGRAR SU COMPARECENCIA ANTE EL JUEZ.", estableció que nuestro orden jurídico protege un genuino derecho a favor de toda persona inculpada, de obtener la comparecencia de los testigos de cargo que se desee interrogar en el proceso penal; por tanto, en cumplimiento a ello, es al Ministerio Público a quien le corresponde la carga de obtener la comparecencia de los testigos cuyos alegatos se ofrecen como prueba, como contraparte, ya que debe proporcionar, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia, las evidencias necesarias para sostener su acusación; sin embargo, a partir de un análisis con perspectiva de género,

en el que se visibiliza que las denunciantes se dedicaban al comercio sexual, el cual ejercían en la vía pública, esto es, pertenecen a un grupo socialmente vulnerable, cuyas características son: la pobreza (condiciones precarias, necesidades insatisfechas e ingresos insuficientes), la feminización (violencia de género), y que en la mayoría de las veces, son explotadas por un tercero; aunado a que el estigma y la discriminación tienen amplias repercusiones negativas, como son la criminalización, la marginación social y la desconfianza hacia la policía, los servicios sociales y otras autoridades, que impiden que las personas que ejercen el trabajo sexual denuncien cualquier delito del que sean víctimas; de tal manera que, en atención a su relegación social, su localización es complicada; por ende, cuando se advierte que los policías de investigación efectuaron actividades para su localización, sin lograrlo; aunado a que de los informes solicitados a diversas autoridades no se obtuvo información de su paradero, es posible conceder valor probatorio preponderante a la declaración ministerial de las víctimas, en virtud de que se evidencia que el Ministerio Público acreditó, con argumentos explícitos, que realizó un genuino esfuerzo en localizarlas, pero existió imposibilidad de obtener su comparecencia, sin que ese dicho sea la única base de la cual dependa la condena.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.9o.P.287 P (10a.)

Amparo directo 140/2019. 20 de febrero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Guzmán Aguado, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: María Guadalupe Jiménez Duardo.

Nota: La tesis aislada 1a. XLVII/2017 (10a.) citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 26 de mayo de 2017 a las 10:31 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 42, Tomo I, mayo de 2017, página 465, con número de registro digital: 2014339.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DERECHO DE PETICIÓN. CONCEPTO DE "BREVE TÉRMINO" PARA EFECTOS DE LA RESPUESTA QUE DEBE DARSE AL PARTICULAR QUE LO EJERCIÓ. El artículo 8o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades la obligación de dar respuesta en "breve término" a la solicitud formulada por un particular; sin embargo, ese concepto no ha sido acotado por el Constituyente, por lo que no es posible fijar un plazo único y genérico para que las autoridades den respuesta a la solicitud que se les plantea en ejercicio del derecho de petición. En esa tesitura, por "breve término" debe entenderse el periodo racional y justificado para estudiar y acordar la petición, conforme a su complejidad, las circunstancias específicas del caso y las cargas de trabajo de la autoridad.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.2o.P.A.1 CS (10a.)

Amparo en revisión 40/2020. Director General de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua y otros. 5 de junio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Refugio Noel Montoya Moreno. Secretario: Jesús Armando Aguirre Lares.

Amparo en revisión 106/2020. Jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. 3 de julio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Pánfilo Martínez Ruiz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Martha Dalila Morales Cruz.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 470, de rubro: "PETICIÓN, DERECHO DE. TÉRMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO.", publicada en el *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1917-1975, Tercera Parte, página 767, con número de registro digital: 395221.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

E

EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. CASO EN QUE EL DOMICILIO PARA TAL FIN ES SEÑALADO SIN NÚMERO. Cuando el domicilio señalado en autos para realizar el emplazamiento a la parte demandada se indicó sin número, al citarse sólo la colonia, la calle y la delegación, el actuario deberá asentar los medios de convicción que tuvo a la vista y que lo llevaron al cercioramiento de que el lugar donde se constituyó es el señalado en autos para hacer la notificación, sin que las aseveraciones en el sentido de que tuvo a la vista las placas oficiales de la calle y número del inmueble, constatando así su numeración sean suficientes para tener por cierto que se apersonó en el lugar correcto, pues si el domicilio señalado en autos no contó con número, no es posible que confirmara información que no le fue proporcionada. En este sentido, es indispensable que señale los medios objetivos o razones particulares por los cuales llegó a tal determinación, o bien, precise suficientemente las características del inmueble donde se ubicó, o cualquier otra circunstancia demostrativa de hallarse en el domicilio correcto; ello, de conformidad con la última parte del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 1 de mayo de 2019), pues dicho funcionario debe asentar la razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye; en tanto que si bien los actuarios, en el ejercicio de sus funciones se encuentran investidos de fe pública, lo cierto es que ello no los faculta para asentar cuestiones inverosímiles en la práctica de las diligencias, debido al total y absoluto grado de certeza necesario en dichas actuaciones, dada su naturaleza y trascendencia.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

I.3o.T.66 L (10a.)

Amparo en revisión 123/2019. 13 de marzo de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Lourdes Minerva Cifuentes Bazán. Secretaria: Diana Leticia Amaya Cortés.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. PARA QUE UNA EMPRESA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE EJERCIÓ LA OPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6, NUMERAL 5, DEL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE DICHA CONTRIBUCIÓN, PUEDA DEDUCIR EL PAGO DE INTERESES CON CARGO A LAS RENTAS INMOBILIARIAS PROCEDENTES DE MÉXICO O POR HABER TOMADO EN PRÉSTAMO EL CAPITAL AQUÍ INVERTIDO, DEBE REALIZAR LA RETENCIÓN RELATIVA.

Hechos: Una empresa residente en los Estados Unidos de América, sin establecimiento permanente en territorio nacional, adquirió inmuebles a fin de construir un centro comercial ubicado en México; para ello, solicitó un crédito a entidades también residentes en el extranjero. Posteriormente, obtuvo ingresos por el uso o goce temporal de bienes inmuebles en territorio nacional –centro comercial construido– por lo que, conforme al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada, debía determinar esa contribución aplicando la tasa del 25% sobre el ingreso obtenido, sin deducción alguna; sin embargo, optó por acogerse al beneficio contenido en el artículo 6, numeral 5, del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, para calcular el impuesto sobre una base neta, y dedujo como gastos los intereses pagados a las entidades acreedoras residentes en el extranjero, lo cual rechazó la autoridad hacendaria, al considerar que la empresa debió retener el impuesto sobre la renta por los ingresos obtenidos de esos intereses, conforme al artículo 195 del mismo ordenamiento, al existir fuente de

riqueza en México, ya que en el país se colocó o invirtió el capital. La contribuyente justificó su omisión aduciendo en el recurso de revocación y en el juicio de nulidad promovidos contra la negativa de la deducción, que conforme al artículo 11 del convenio mencionado, dichos intereses no pueden ser considerados procedentes de México, lo cual se declaró infundado y derivó en la interposición de la demanda de amparo.

Criterio Jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando un residente de los Estados Unidos de América opte por calcular el impuesto por rentas inmobiliarias sobre una base neta, al acogerse al beneficio previsto en el artículo 6, numeral 5, del convenio citado, para que pueda deducir el pago de intereses con cargo a las rentas inmobiliarias procedentes de México o por haber tomado en préstamo el capital aquí invertido, debe retener el impuesto sobre la renta.

Justificación: De la interpretación del artículo 6, numeral 5, mencionado, así como de lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar en sesión de 28 de febrero de 2018 el amparo directo en revisión 4157/2017, se colige que si una empresa extranjera sin establecimiento permanente en México adquiere un inmueble que le genera rentas, tiene obligación de tributar en el país por los ingresos que obtiene, y si además el inmueble lo adquiere mediante un préstamo cuya acreedora es una empresa extranjera con residencia en los Estados Unidos de América y la deudora opta por ser gravada conforme a una base neta, implica que aceptó tributar, sólo en ese aspecto, como una sociedad mexicana, pues la fuente de riqueza se ubicó en territorio nacional, donde se invirtió el capital que obtuvo en préstamo; de ahí que pueda llevar a cabo la deducción de los intereses que la deuda generó, siempre que haya retenido el impuesto sobre la renta correspondiente.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.4o.A.205 A (10a.)

Amparo directo 34/2020. Kimex Investment III, LLC. 30 de junio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Carlos Luis Guillén Núñez.

Amparo directo 46/2020. Kimex Huehuetoca, LLC. 13 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Marco Antonio Pérez Meza.

Amparo directo 111/2020. Kimex Investment XIX, LLC. 13 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Indira Martínez Fernández, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Homero Fernando Reed Mejía.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT). CUANDO EN EL AMPARO SE RECLAME LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR DE FONDOS, NO ES PROCEDENTE DAR VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME JUSTIFICADO PARA QUE AMPLÍE SU DEMANDA CONTRA LA RESPUESTA EMITIDA. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclame la omisión de dar respuesta a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición tutelado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, relacionada con la autorización de descuentos vía nómina para el pago de un crédito hipotecario, entre otras cuestiones, no es procedente dar vista con el informe justificado al quejoso para que, de considerarlo pertinente, amplíe su demanda en relación con la respuesta que dio la autoridad responsable a su petición, pues de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 93/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto respecto de la contestación que el funcionario o empleado público emita, cuando el tema involucrado se refiera a las facultades ejercidas por el citado instituto en su carácter de administrador de fondos, de manera que una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, el quejoso debe estarse a lo establecido en los artículos 52 y 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.

V.2o.P.A.33 A (10a.)

Amparo en revisión 186/2019. 6 de febrero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Hanz Eduardo López Muñoz. Secretario: Jesús Guillermo Bayliss Verdugo.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 93/2018 (10a.), de título y subtítulo: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN." citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 7 de septiembre de 2018 a las 10:16 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 58, Tomo I, septiembre de 2018, página 1021, con número de registro digital: 2017817.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DOBLE TRIBUTACIÓN. AL REALIZARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA TANTO SUS PREVISIONES Y TERMINOLOGÍA, COMO LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL.

Hechos: Una empresa residente en los Estados Unidos de América, sin establecimiento permanente en territorio nacional, adquirió inmuebles a fin de construir un centro comercial ubicado en México; para ello, solicitó un crédito a entidades también residentes en el extranjero. Posteriormente, obtuvo ingresos por el uso o goce temporal de bienes inmuebles en territorio nacional –centro comercial construido– por lo que, conforme al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada, debía determinar esa contribución aplicando la tasa del 25% sobre el ingreso obtenido, sin deducción alguna; sin embargo, optó por acogerse al beneficio contenido en el artículo 6, numeral 5, del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, y dedujo como gastos los intereses pagados a las entidades acreedoras residentes en el extranjero, lo cual rechazó la autoridad hacendaria, al considerar que la empresa debió retener el impuesto sobre la renta por los ingresos obtenidos de esos intereses, conforme al artículo 195 del mismo ordenamiento, al existir fuente de riqueza en México, ya que en el país se colocó o invirtió el capital. La contribuyente justificó su omisión aduciendo

en el recurso de revocación y en el juicio de nulidad promovidos contra la negativa de la deducción, que conforme al artículo 11 del convenio mencionado, dichos intereses no pueden ser considerados procedentes de México, porque al interpretar las disposiciones del convenio, no debe tenerse en cuenta lo que dispone la legislación local, lo cual se declaró infundado y derivó en la interposición de la demanda de amparo.

Criterio Jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que al interpretar y aplicar los convenios para evitar la doble tributación, como el señalado, deben tomarse en cuenta tanto las previsiones consignadas en éstos y su terminología, como lo dispuesto en la legislación nacional.

Justificación: Para la interpretación y aplicación de los tratados internacionales debe acudirse a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en específico a sus artículos 31 y 32, que establecen las reglas de interpretación, cuya aplicación ha sido reconocida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 2a. CLXXI/2002. En estas condiciones, como la carga impositiva impuesta en México está consignada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General, del que se aprecia –entre otros aspectos– que la obligación de contribuir para los gastos públicos o hecho imponible, deberá establecerse en un texto material y formalmente legislativo, una vez definido aquél, no puede variarse al aplicar un tratado internacional para evitar la doble tributación, porque al hacerlo se ubicarían el hecho imponible y la tasa correspondiente en el tratado y no en la ley. Ahora, los hechos imponibles y las tasas de tributación reguladas en el sistema jurídico mexicano se encuentran en la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo que implica que los tratados o convenios para impedir la doble tributación o la doble imposición aprobados por el Estado Mexicano, no deben prever la hipótesis de causación, sino sólo deben regular a quién le corresponderá gravar los ingresos de fuente de riqueza que provengan de los territorios de los Estados contratantes o de residencia, así como los beneficios que por la aplicación del tratado pudiera generarles.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.4o.A.206 A (10a.)

Amparo directo 34/2020. Kimex Investment III, LLC. 30 de junio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Carlos Luis Guillén Núñez.

Amparo directo 46/2020. Kimex Huehuetoca, LLC. 13 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Marco Antonio Pérez Meza.

Amparo directo 111/2020. Kimex Investment XIX, LLC. 13 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Indira Martínez Fernández, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Homero Fernando Reed Mejía.

Nota: La tesis aislada 2a. CLXXI/2002, de rubro: "TRATADOS INTERNACIONALES. SU INTERPRETACIÓN POR ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL TENOR DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 14 DE FEBRERO DE 1975)." citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 292, con número de registro digital: 185294.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

J

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA FALTA DEL PAGO ESTIPULADO EN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ES INNECESARIA UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O NEGATIVA FICTA, SI TANTO LA LEY APLICABLE COMO EL CLAUSULADO RESPECTIVO PRECISAN LA FORMA Y FECHA PARA CUMPLIR ESA OBLIGACIÓN. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 292/2017, de la cual dimanó la jurisprudencia 2a./J. 14/2018 (10a.), de título y subtítulo: "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO TIENE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", publicada en la página 1284 del Libro 52, Tomo II, marzo de 2018, Décima Época de la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, determinó que los conflictos surgidos en relación con la falta del pago estipulado en los contratos administrativos deben resolverse en los juicios administrativos, ya sea federales o locales, dependiendo del régimen al que estén sujetos, pero no establece que para ello, en todos los casos, sea necesaria la existencia de un acto expreso o de una negativa ficta por parte de la autoridad demandada. En ese sentido, es innecesario ese requisito para que proceda el juicio contencioso administrativo, si tanto la ley aplicable como el clausulado del contrato precisan la forma y fecha para cumplir la obligación de pago.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.1o.P.A.31 A (10a.)

Amparo directo 382/2019. 2 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: José Raymundo Cornejo Olvera. Secretaria: Claudia Alejandra Alvarado Medinilla.

Amparo directo 12/2020. 2 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretaria: Silvia Imelda Fernández Anaya.

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 292/2017 citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 2 de marzo de 2018 a las 10:05 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 52, Tomo II, marzo de 2018, página 1267, con número de registro digital: 27651.

La tesis de jurisprudencia 2a./J. 14/2018 (10a.) citada, también aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 2 de marzo de 2018 a las 10:05 horas, con número de registro digital: 2016318.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

M

MAGISTRADO INSTRUCTOR EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CARECE DE FACULTADES PARA DESECHAR LA DEMANDA DE NULIDAD, BAJO EL ARGUMENTO DE QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO ES DEFINITIVA, PUES ÉSA NO ES UNA CAUSA NOTORIA NI MANIFIESTA PARA ELLO. Del artículo 36, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se advierte que la atribución del Magistrado instructor para desechar las demandas de nulidad se encuentra condicionada a que no se ajusten a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y ésta a su vez, establece en su artículo 14, penúltimo párrafo, las hipótesis en que procede ese desechamiento, entre las cuales no se encuentra el supuesto de que la resolución impugnada no sea definitiva. Luego, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. XCVIII/2007, estableció que de la interpretación de este último precepto se colige que el desechamiento de las demandas deviene de circunstancias imputables a los particulares, al presentarlas carentes de los requisitos básicos. En estas condiciones, el desechamiento de la demanda en los términos descritos, en todo caso será procedente cuando derive de causas notorias y manifiestas, que son las que se advierten cuando se incumplen los requisitos esenciales o la acción es extemporánea, pero no en el caso de que se requiera un estudio más profundo. Por tanto, el Magistrado instructor en el procedimiento contencioso administrativo federal carece de facultades para desechar la demanda de nulidad, bajo el argumento de que la resolución impugnada no es definitiva, pues ésa no es una causa notoria ni manifiesta para ello.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.2o.P.A.58 A (10a.)

Amparo directo 196/2019. 5 de junio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Rivera Durón. Secretario: Antonio Ordóñez Serna.

Nota: La tesis aislada 2a. XCVIII/2007, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 208, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005), COINCIDENTE CON EL 14, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ACTUALMENTE EN VIGOR), NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA." citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 636, con número de registro digital: 171787.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

N

NOTARIO TITULAR. EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE PUEBLA, QUE ESTABLECE LA IMPROCEDENCIA DE RECURSO ALGUNO CONTRA LAS DECISIONES DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO Y DEL JURADO EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PATENTE RELATIVA, TIENE EL EXCLUSIVO EFECTO DE DAR DEFINITIVIDAD A DICHOS ACTOS, LO QUE HACE PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL. El artículo 53 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla dispone que no procederá recurso alguno contra las decisiones del titular del Ejecutivo del Estado y del jurado en el procedimiento de otorgamiento de patente de notario titular. Ahora bien, la consecuencia jurídica de la mencionada disposición es, exclusivamente, dotar de definitividad a dichos actos, lo que hace procedente su impugnación mediante el juicio contencioso administrativo estatal, pues en términos del último párrafo del artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, las resoluciones son definitivas, para efectos de la procedencia de ese medio de defensa, cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.1o.A.124 A (10a.)

Amparo en revisión 504/2019. 30 de septiembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: Salvador Alejandro Lobato Rodríguez.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

NOTARIO TITULAR. LAS ETAPAS O FASES QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE PUEBLA PARA OBTENER LA PATENTE RELATIVA, NO SON RECLAMABLES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO ACTOS DESTACADOS, AL CONSTITUIR UNA UNIDAD. El procedimiento para la emisión de la patente de notario titular previsto en la Ley del Notariado del Estado de Puebla, en sus distintas etapas o fases, constituye una unidad, atendiendo a que la finalidad perseguida es regular en su integridad el desempeño de la función de orden público delegada por el Estado a través del Ejecutivo, es decir, el acto predominante que trasciende a la esfera jurídica de quien se estima afectado por lo resuelto en el procedimiento de mérito, es el otorgamiento de la patente de notario titular. En ese contexto, las aludidas etapas o fases que lo integran no son reclamables como actos destacados en el juicio de amparo indirecto, por lo que, en todo caso, debe plantearse su ilegalidad como violaciones cometidas en el procedimiento respectivo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.1o.A.122 A (10a.)

Amparo en revisión 504/2019. 30 de septiembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: Salvador Alejandro Lobato Rodríguez.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD. CUANDO NO SE REALIZAN PERSONALMENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTE HAYA SEÑALADO DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA TAL EFECTO, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO Y AMERITA SU REPOSICIÓN. El artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo establece que las notificaciones personales se harán en el juicio de amparo, al quejoso privado de su libertad, ya sea en el local del órgano jurisdiccional que conozca del

juicio, en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones. Bajo ese contexto, cuando en el juicio de amparo se conoce que el quejoso se encuentra privado de su libertad, el Juez de Distrito debe ordenar notificar personalmente todas las determinaciones que recaigan, sin que obste que en el escrito de demanda aquél haya señalado domicilio procesal y autorizados para tal efecto, porque ello únicamente da lugar a que esas notificaciones personales se lleven a cabo en ese domicilio y no en el centro de reclusión, a criterio del juzgador, pues con una interpretación pro persona puede incluso ordenar que se realicen en ambos lugares, pero invariablemente de forma personal. De ahí que cuando no se procede de esa forma, se actualiza una violación a las formalidades esenciales del procedimiento, en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual amerita revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, a fin de que se subsane tal omisión; violación que trasciende al resultado del fallo, en la medida en que teniendo el derecho de ser notificado personalmente de todas las providencias dictadas en el juicio de amparo indirecto, incluyendo, desde luego, la recepción y vista con los informes justificados o la fecha para la celebración de la audiencia constitucional, el quejoso fue privado de él, lo que le impide, en su caso, alegar lo que a su derecho conviniera, por sí o por conducto de su defensor, representante o autorizado en términos amplios, conforme a los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.2o.P.A.15 K (10a.)

Amparo en revisión 158/2019. 31 de enero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Rivera Durón. Secretario: Antonio Ordóñez Serna.

Amparo en revisión 318/2019. 15 de mayo de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Rivera Durón. Secretario: Antonio Ordóñez Serna.

Amparo en revisión 325/2019. 29 de mayo de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Rivera Durón. Secretario: Antonio Ordóñez Serna.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

NOTIFICADORES/LOCALIZADORES CONTRATADOS EN PLAZAS NO PRESUPUESTARIAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). EL "INFORME DE LOS SERVICIOS PERSONALES EN EL IMSS 2014", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE JUNIO DE 2015, CARECE DE EFICACIA JURÍDICA PARA JUSTIFICAR SU CONTRATACIÓN POR TIEMPO DETERMINADO.

Hechos: Una persona laboró con la categoría de notificador/localizador para el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante contratos individuales de trabajo por tiempo determinado. Concluida la vigencia del último contrato, demandó del instituto su prórroga, al subsistir la materia del trabajo. El demandado se excepcionó por ser una contratación por tiempo determinado y, para justificar la causa motivadora de la contratación temporal, ofreció como prueba el "Informe de los Servicios Personales en el IMSS 2014", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2015, a fin de acreditar que se trataba de una plaza no presupuestaria.

Criterio jurídico: El "Informe de los Servicios Personales en el IMSS 2014", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2015, carece de eficacia jurídica para justificar la contratación temporal de un notificador/localizador.

Justificación: Del punto número I, subpuntos 1.1. y 1.2., del "Informe de los Servicios Personales en el IMSS 2014", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2015, se desprende que las plazas no presupuestarias se contratan de forma independiente, con remuneraciones diferentes a las establecidas en los tabuladores del personal sindicalizado, de confianza, de estatuto y servidores públicos con puestos de mando; asimismo, establece que dentro de las plazas no presupuestarias se incluye, entre otros, al personal de afiliación y cobranza, en donde se contempla a los notificadores/localizadores, que se definen como las personas físicas contratadas individualmente por obra y tiempo determinado. Sin embargo, la citada definición carece de eficacia jurídica para justificar la contratación temporal de un notificador/localizador, porque se trata de un documento elaborado en forma unilateral por el instituto, que no atiende a la naturaleza del trabajo prestado, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Federal del Trabajo; aunado a que debido al carácter de organismo

público autónomo, las funciones que desempeñan los notificadores/localizadores son constantes y permanentes, pues siempre se tendrá la obligación de localizar y notificar a los patrones, sujetos obligados y terceros relacionados, así como de llevar a cabo funciones de verificación de domicilios fiscales, entre otras actividades. Además, el informe se refiere al ejercicio fiscal 2014, por lo que no se puede sostener que las mismas variaciones continuaran en 2016, cuando tuvo verificativo la última contratación del accionante.

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

I.11o.T.70 L (10a.)

Amparo directo 262/2020. Diego Chela Sánchez. 1 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel Ponce Peña. Secretaria: Alma Nashiely Castro Cruz.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

O

ORDEN DE APREHENSIÓN. AL SER UN ACTO FUERA DE PROCESO QUE ATENTA CONTRA LA LIBERTAD, LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA NO ESTÁ CONDICIONADA AL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, POR ACTUALIZARSE LA HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SALVO CUANDO EL QUEJOSO HAYA TENIDO CONOCIMIENTO PLENO DE AQUÉLLA POR CUALQUIER MEDIO. El artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo señala que el plazo para presentar la demanda es de quince días, salvo que el acto reclamado implique ataques a la libertad fuera de procedimiento, entre otros supuestos. A su vez, el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la propia legislación, precisa que en materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de Control, disposición que guarda armonía con el último párrafo del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La intelección funcional de esas disposiciones conduce a sostener que, si bien el legislador utilizó el vocablo "procedimiento" en la redacción de la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, lo cierto es que ello no obedece a su intención de considerar en ese supuesto a los actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales que pretendan afectar la libertad, sino a aquellos emitidos, incluso, por autoridad jurisdiccional antes de que inicie el proceso penal acusatorio oral. En ese sentido, la presentación de la demanda de amparo contra la orden de aprehensión emitida por el Juez de Control, no está sujeta al plazo genérico de quince días, pues se actualiza la excepción "en cualquier tiempo" prevista en la fracción IV del artículo 17 indicado, salvo que se demostrara fehacientemente que el quejoso tuvo conocimiento pleno de ese acto por cualquier medio, como podría ser, el haberse tramitado diverso juicio

de amparo contra la misma orden de aprehensión pues, en ese supuesto, se ubicaría en la hipótesis genérica mencionada.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
XI.P.43 P (10a.)

Amparo en revisión 7/2020. 13 de febrero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Liévanos Ruiz. Secretaria: Karla Maldonado Martínez.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

P

PENSIÓN POR INVALIDEZ, VEJEZ, O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. EL SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN LA FECHA EN QUE SE OTORGA CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE LA JUNTA TIENE OBLIGACIÓN DE CONSULTAR AL RESOLVER EL JUICIO. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal del Trabajo, los hechos notorios pueden invocarse por los tribunales, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. En ese sentido, el salario mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México), se considera un hecho notorio porque se publica en el Diario Oficial de la Federación, de ahí que sea del conocimiento público y no es materia de prueba, razón por la cual no es obligación de las partes demostrar el salario mínimo vigente en la fecha en que se otorga una pensión por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, pues se trata de un hecho que la Junta tiene obligación de consultar al resolver el juicio.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

III.4o.T.60 L (10a.)

Amparo directo 28/2020. Instituto Mexicano del Seguro Social. 2 de julio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretaria: Erika Vianey García Colmenero.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL. SI EN EL JUICIO DE AMPARO EL JUEZ NO PUEDE DETERMINAR A QUÉ COLECTIVO LGBTI

(LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNEROS E INTERSEXUALES) PERTENECE EL QUEJOSO, NO DEBE PRONUNCIARSE EN CUANTO A UNA IDENTIDAD ESPECÍFICA, A EFECTO DE NO ETIQUETARLO CON NOMBRES O DEFINICIONES QUE PODRÍAN NO CORRESPONDER A LA PERCEPCIÓN DE SÍ MISMO. Cuando en los juicios de amparo competencia de los órganos jurisdiccionales se vean involucradas personas pertenecientes al colectivo LGBTI (siglas que identifican a las palabras lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales), y no pueda determinarse si el quejoso es una persona transgénero, transexual, travesti u otra, el Juez no debe pronunciarse en cuanto a una identidad específica, a efecto de no etiquetarlo con nombres o definiciones que podrían no corresponder a su percepción de sí mismo, pues para ello tendría que realizarse un análisis en cuanto a la orientación sexual, la identidad y expresión de género, entre otros aspectos, para lo cual, resulta necesario una serie de datos e información relativos a dicha persona, los cuales podrían no encontrarse en autos. Sin embargo, a efecto de no transgredir los derechos de igualdad y no discriminación, previstos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede precisar que el quejoso pertenece a dicho grupo; aunado a que conforme a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o identidad de género, tiene obligación de resolver los casos relativos a los derechos humanos de las personas pertenecientes al colectivo LGBTI, con base en una perspectiva de género y de diversidad sexual.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.9o.P.17 K (10a.)

Amparo directo 211/2019. 27 de agosto de 2020. Unanimidad de votos, con voto concurrente del Magistrado Ricardo Paredes Calderón. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretaria: María del Carmen Campos Bedolla.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS SENTENCIAS DE NULIDAD. CONSISTE EN ASEGURAR LA RESPUESTA AL TEMA ESENCIAL MATERIA DE LA LITIS. La congruencia de las sentencias no sólo debe entenderse en sentido

amplio, como se ha definido en diversos criterios jurisprudenciales, esto es, como aquel principio por medio del cual el juzgador está obligado a resolver los puntos materia de la litis, de modo que el justiciable tenga la certeza de que se estudió lo debatido en el juicio. Esto es así, porque esa idea generalizada es sólo un bosquejo, pero no significa que el juzgador, de manera sacramental, se vea constreñido a resolver línea por línea todas las manifestaciones expresadas, aspectos accesorios o que no son relevantes para la procedencia de las pretensiones, sino que lo importante de esa salvaguarda en el juicio de nulidad es la respuesta al tema esencial y, con ello, lograr advertir si lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pues a través de éste se establecen las bases para que la autoridad jurisdiccional emita una resolución completa para que las partes cuenten con la certeza de haber sido escuchadas, ya que ven plasmadas en el fallo las cuestiones debatidas oportunamente en el juicio.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.

(IV Región)1o.28 A (10a.)

Amparo directo 267/2019 (cuaderno auxiliar 444/2020) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Club de Golf La Herradura. 28 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Riveros Caraza. Secretaria: Ingrid Jessica García Barrientos.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Q

QUERELLA. PARA SATISFACER ESTE REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN LA ETAPA DE JUICIO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, LA LEGITIMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL OFENDIDA PARA FORMULARLA, DEBE DEMOSTRARSE DURANTE EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA RESPECTIVA MEDIANTE LA INCORPORACIÓN AL JUICIO DEL PODER NOTARIAL CORRESPONDIENTE. Si bien es cierto que en el auto de apertura a juicio pudo haberse admitido un testimonio notarial para acreditar la personalidad del apoderado legal de la persona moral ofendida, también lo es que dentro del desahogo de la audiencia oral, debe presentarse; máxime que en la etapa intermedia no existió un acuerdo probatorio al respecto y fue admitido en el auto de apertura a juicio. Por lo que si de las pruebas desahogadas en el juicio, se advierte que no se dio noticia de que la querella presentada por la parte ofendida fuere hecha por conducto de un representante legal facultado o autorizado para ello, y más aún, el fiscal ni el asesor jurídico acreditan dicha circunstancia con un medio de prueba que corroborara el dicho del "apoderado legal", en el sentido de que efectivamente las personas que presentaron la querella a favor de la empresa moral ofendida estaban legitimadas para ello, no puede tenerse por acreditado dicho requisito de procedibilidad. Esto es, si no fue incorporado al juicio el documento idóneo para acreditar la calidad de representante legal de la persona moral ofendida, al momento de presentar la querella ante el Ministerio Público, dicha circunstancia deja en evidencia que se considere que no es posible tener por acreditado el aludido requisito de procedibilidad, ya que para el dictado de una sentencia en los juicios orales, lo único que puede ser materia de análisis son las pruebas desahogadas en el juicio oral. Dicho de otro modo, los antecedentes, los documentos o medios de convicción que, en su caso, pudieran estar contenidos en la carpeta de investigación, como

el testimonio notarial que acredita la personalidad del promovente para querellarse y que obra en poder del fiscal, bajo ningún supuesto pueden ser el sustento de una resolución en este nuevo sistema, al no existir pruebas preconstituidas ante el Ministerio Público, sino sólo aquello que es incorporado en la audiencia del juicio oral, en donde quien se constituye como tribunal de enjuiciamiento es un juzgador que no ha intervenido en fases previas del procedimiento, como lo manda el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales; ello, con el fin de garantizar la imparcialidad en el juicio, lo cual implica que desconoce todo lo actuado en las etapas de investigación e intermedia. De ahí que si bien de la declaración de un testigo, pudiera establecerse que dicha persona tenía la capacidad legal que afirmó tener; lo cierto es que ello debe corroborarse con algún otro medio de prueba, ya que pensar que basta que un testigo afirme ser representante legal de una persona física o jurídica para tener por acreditada dicha calidad para presentar una querella, nos llevaría al absurdo de que no es necesario contar con algún poder notarial, sino solamente el dicho de testigos, lo cual resulta inadmisible.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.9o.P.280 P (10a.)

Amparo directo 12/2020. 14 de mayo de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Miguel Ángel Sánchez Acuña.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

R

RECURSO DE APELACIÓN O REVOCACIÓN EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONE PREVIAMENTE A LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAERÁ A LA PETICIÓN RESPECTIVA, NO OBSTANTE QUE EL RECURRENTE SE ENCUENTRE PRIVADO DE SU LIBERTAD (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO ABROGADA).

AMPARO EN REVISIÓN 231/2019. 5 DE MARZO DE 2020. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: RICARDO PAREDES CALDERÓN. PONENTE: DANIEL GUZMÁN AGUADO, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO. SECRETARIO: NÉSTOR VERGARA ORTIZ.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.—Estudio. Son fundados por una parte y fundados pero inoperantes por otra, los agravios expresados, sin que se advierta motivo para suplir su deficiencia, como lo prevé el artículo 79, fracción III, inciso a), y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo.

Al tratarse de estudio previo y preferente, procede analizar en primer término el concepto de agravio sintetizado en el inciso b), tocante a que no se tuvo acceso a las constancias remitidas con el informe justificado de la autoridad responsable, al haber sido notificado únicamente del acuerdo que le recayó a dicha recepción.

Lo que se advierte fundado, porque efectivamente de las constancias del juicio de amparo se advierte que fue notificado del referido acuerdo de forma personal en el interior del centro de reclusión en el que compurga la pena que le fue impuesta en sentencia ejecutoriada, momento en el que evidentemente no tuvo acceso a las constancias que acompañaron al informe con justificación de la autoridad responsable.

Sin embargo, deviene inoperante ese argumento, pues esa circunstancia no le implicó imposibilidad para estar en aptitud de manifestar lo que a su derecho conviniera, porque del análisis de dichas constancias se aprecia que consisten en lo siguiente: 1) sentencia de cinco de abril de dos mil dieciséis,[2] dictada por el extinto Juez Vigésimo Octavo Penal del Distrito Federal; 2) sentencia de segunda instancia de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis,[3] emitida por la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; 3) escrito presentado el uno de julio de dos mil diecinueve, por el que el quejoso interpone incidente no especificado; y, 4) acuerdo de misma fecha,[4] que resolvió de plano como infundada la petición del sentenciado.

Es decir, esas constancias corresponden a las sentencias de primera y segunda instancias, en las que se determinó la plena responsabilidad penal del aquí recurrente por la comisión del delito de robo agravado, por el que se le acusó, así como a la promoción del referido incidente no especificado y la determinación que le recayó el uno de julio de dos mil diecinueve; determinaciones de las que tuvo conocimiento previamente, mediante notificación personal, por lo que de ninguna manera se actualiza una violación al debido proceso en el juicio de amparo con trascendencia al resultado del fallo, que deba ser reparada en esta instancia constitucional.

Por otro lado, es menester precisar que no se inadvierte que el Juez de amparo, en términos del numeral 74 de la Ley de Amparo, fijó la litis constitucional en los términos siguientes: "La determinación de uno de julio de dos mil

[2] Fojas 1 a 135 del anexo I del juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.
[3] Ibídem, fojas 136 a 251.
[4] Ibídem, fojas 252 a 261.

diecinueve, en la que se resolvió de plano como infundado el incidente promovido por el quejoso. ..."; sin embargo, en la demanda de amparo el promovente únicamente destacó como acto reclamado: "la determinación de dos (sic, uno) de julio de dos mil diecinueve" y del análisis integral[5] de la misma, este órgano colegiado advierte que el agravio personal y directo que resintió el quejoso en su esfera jurídica contra el que enderezó sus manifestaciones, consistió en que el Juez responsable no atendió su solicitud –planteada en el propio escrito por el que promovió la referida incidencia–, que de no prosperar la acción ejercida en el incidente, se tuviera por interpuesto el recurso que resultara pertinente (apelación o revocación).

Entonces, al definirse en los términos destacados la litis en el amparo, no será materia de análisis en esta instancia constitucional lo determinado en relación con la materia del incidente no especificado que planteó el ahora recurrente.

Respecto de la interposición del recurso correspondiente, el Juez responsable determinó: "...con fundamento en los artículos 413 y 416 del Código de Procedimientos Penales, dígase al promovente que a partir del acto de la notificación podrá interponer el recurso que considere pertinente, y una vez que lo haga se acordará lo procedente; en el entendido de que, en caso de no **manifestar expresamente su inconformidad**, no se tendrá por interpuesto recurso alguno". (énfasis añadido)

De ahí el acierto jurídico del Juez de Distrito al considerar que con fundamento en los artículos 414, 415 y 416[6] del Código de Procedimientos Penales

[5] En términos de la jurisprudencia 2a./J. 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo VIII, agosto de 1998, materia común, página 227, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS."

[6] "Artículo 414. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia estudie la legalidad de la resolución impugnada."

"Artículo 415. La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima para resolver sobre los agravios que deberá expresar el apelante al interponer el recurso o en la vista; pero el tribunal de alzada podrá suplir la deficiencia de ellos, cuando el recurrente sea el procesado o se advierta que sólo por torpeza el defensor no hizo valer debidamente las violaciones causadas en la resolución recurrida."

para el Distrito Federal, el recurso de revocación (procedente en el caso concreto) debió interponerse por escrito o de palabra dentro de los tres días de hecha la notificación respectiva al sentenciado, lo que implica expresar, al momento de comunicarse la determinación que considera le causa agravio en su esfera jurídica, su deseo de aperturar la segunda instancia. Lo que no se logra con la solicitud previa realizada al momento en que planteó el respectivo incidente.

No se desconoce el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 39/2019 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE REVISIÓN ADHESIVA. SU INTERPOSICIÓN ES OPORTUNA, AUN SI SE PRESENTA ANTES DE QUE SEA NOTIFICADO EL ACUERDO POR EL QUE SE ADMITE EL PRINCIPAL.", pues lo ahí establecido no se actualiza en el presente caso, primero porque no se está ante un recurso adhesivo de revisión, del cual hace referencia tal criterio, sino de la actualización de diverso medio de impugnación y, consecuentemente, en razón de que el recurso de apelación o revocación se interpuso previo conocimiento de la resolución que se emitió en contestación a la petición incidental del hoy quejoso, es decir, cuando aún no era notificado de la determinación que se tomó al respecto; por tanto, desconociendo en ese instante si el sentido de la misma le causaba o no agravio, por lo que no fue al momento de la notificación de esa determinación, lo cual sí es permisible.

En ese contexto, deviene infundado el agravio sintetizado en el inciso a) que antecede, relativo a que el Juez recurrido inadvirtió que la responsable lo dejó en estado de indefensión al exigirle interponer de palabra el recurso, cuando la legislación respectiva establece que podrá ser de esta forma o por escrito, lo que satisfizo al momento en que solicitó que se tramitara el recurso respectivo ante la negativa a su solicitud incidental, toda vez que la exigencia del Juez del conocimiento en manifestar de forma expresa su inconformidad, no versa en el sentido de que ese planteamiento deba ser de palabra sino que, ya sea

"Artículo 416. La apelación podrá interponerse por escrito o de palabra, dentro de tres días de hecha la notificación si se tratare de auto, de cinco, si se tratare de sentencia definitiva, y de dos, si se tratare de otra resolución, excepto en los casos en que este código disponga expresamente otra cosa."



mediante escrito o de palabra, se exponga de modo claro, patente y especificado[7] su deseo de aperturar la segunda instancia mediante el recurso de apelación. Expresión que podrá realizarse únicamente en el mismo momento de su notificación (de palabra) o dentro de los tres días siguientes (mediante escrito).

Luego, si en el caso, no obstante que el aquí recurrente haya manifestado en el referido escrito en que planteó la incidencia su deseo de aperturar la segunda instancia, mediante el recurso que procediera (apelación o revocación), ante lo adverso en la determinación que le recayera a su petición, las constancias relativas al juicio de amparo que ahora se revisa informan que al momento de la notificación personal[8] el auto de uno de julio de dos mil diecinueve, en que se resolvió de plano como infundado el incidente no especificado, no expresó su voluntad de aperturar la segunda instancia mediante la interposición de algún recurso, y ni lo planteó en otra oportunidad posterior a esa notificación; entonces, es evidente que se extinguió la facultad procesal del sentenciado de impugnar esa determinación del Juez de la causa, al actualizarse la institución jurídica de la preclusión.

Consideración que es acorde con lo explicado en la tesis 2a. CXLVIII/2008[9], emitida en contradicción de tesis por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA."

---

[7] Según el concepto de la palabra "expresa", que deriva de "expresamente", definida en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su vigésima tercera edición, visible en el link: https://dle.rae.es/expreso.

[8] Notificación practicada el dos de julio de dos mil diecinueve, tras la reja de prácticas del juzgado del conocimiento, según constancia agregada a foja 216, del anexo I del juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

[9] Publicada en la Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, materia común, página 301, de texto: "La mencionada institución jurídica procesal, consistente en la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, contribuye a que el proceso en general, para cumplir sus fines, se tramite con la mayor celeridad posible, pues por virtud de la preclusión, las distintas etapas del procedimiento adquieren firmeza, dando sustento a las fases subsecuentes, de modo que el juicio se desarrolle ordenadamente y se establezca un límite a la posibilidad de discusión, en aras de que la controversia planteada se solucione en el menor tiempo posible, observando el principio de impartición de justicia pronta previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la preclusión tiene

No obsta para lo anterior, que conforme a las reglas 1, 2, 3 y 4[10] de "Las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad",[11] el objetivo de dicha normativa es garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial, así como que los servidores y operadores del

lugar cuando: a) **No se haya observado el orden u oportunidad establecido en la ley, para la realización del acto respectivo**; b) Se haya realizado una actividad procesal incompatible con el ejercicio de otra; y, c) La facultad relativa se haya ejercido válidamente en una ocasión. Si bien el último de los supuestos referidos corresponde a la consumación propiamente dicha, indefectiblemente en todos ellos la preclusión conlleva la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso, lo que implica que, por regla general, una vez extinguida la oportunidad de ejercer el derecho correspondiente o habiéndolo ejercido en una ocasión, ya no puede hacerse valer en un momento posterior. En ese sentido, la figura procesal referida permite que las resoluciones judiciales susceptibles de ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de los recursos y medios ordinarios de defensa que establezca la ley procesal atinente, adquieran firmeza cuando se emita la decisión que resuelva el medio impugnativo o, en su caso, cuando transcurra el plazo legal sin que el recurso o medio de defensa relativo se haya hecho valer." (énfasis añadido)

[10] "Capítulo I: Preliminar.
"Sección 1a. Finalidad
"(1) Las presentes reglas tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial.
"(2) Se recomienda la elaboración, aprobación, implementación y fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
"Los servidores y operadores del sistema de justicia otorgarán a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares. ...
"(3) Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
"(4) Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad.
"La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico."

[11] Estas reglas, si bien no constituyen propiamente un tratado internacional de carácter vinculante para quienes ejercen la función jurisdiccional, pueden resultar una herramienta de gran utilidad para estos últimos, en virtud de que establecen diversos estándares que, fundados en el respeto que se debe dar a la dignidad de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, favorecen que éstas tengan un efectivo acceso a la justicia.

sistema de justicia otorguen a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares.

Y, por tanto, pueden constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de la libertad.

Además, en relación con la privación de la libertad personal, en la "Sección 2a. Beneficiarios de las Reglas", punto 10, reglas 22 y 23,[12] se previene que la privación de la libertad ordenada por autoridad pública competente, como causa de vulnerabilidad, puede generar dificultades para ejercer con plenitud ante el sistema de justicia el resto de derechos de los que se es titular.

Inclusive, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las personas privadas de la libertad conforman un grupo vulnerable, por su condición de interno.

Ahora bien, de constancias de autos se advierte que el hoy quejoso cuenta con la particularidad de estar privado de la libertad, al encontrarse interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad, compurgando la pena que se le impuso en sentencia ejecutoria, lo que de acuerdo con lo antes señalado, constituye una causa de vulnerabilidad, originando la posibilidad de que se le dé un trato adecuado a esa circunstancia singular.

Sin embargo, al observarse de constancias que el actuario judicial notificó de manera personal al ahora quejoso del auto de uno de julio de dos mil diecinueve, por el que se resolvió de plano como infundada la incidencia que planteó,

---

[12] "10. Privación de libertad
"(22) La privación de la libertad, ordenada por autoridad pública competente, puede generar dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia el resto de derechos de los que es titular la persona privada de libertad, especialmente cuando concurre alguna causa de vulnerabilidad enumerada en los apartados anteriores.
"(23) A efectos de estas reglas, se considera privación de libertad la que ha sido ordenada por autoridad pública, ya sea por motivo de la investigación de un delito, por el cumplimiento de una condena penal, por enfermedad mental o por cualquier otro motivo."

actuación que precisamente se realizó a fin de que se enterara de tal determinación para que, en caso de no estar de acuerdo con ella, por sí o a través de su defensor, ejerciera su derecho de impugnarla mediante el recurso correspondiente, es evidente que el hecho de que tuviera esa peculiaridad –privado de la libertad– no lo imposibilitó para realizar tal cuestión, tan es así, que promovió este juicio de amparo en el que demandó la referida resolución de uno de julio de dos mil diecinueve, lo que deja ver, que sí estuvo en la posibilidad de impugnarla previamente a promover la demanda de amparo, mediante el recurso de apelación o revocación, según fuera el caso.

Además de advertirse que igualmente se notificó personalmente al defensor de oficio en relación con la mencionada resolución.

En consecuencia, al apreciarse que los agravios hechos valer en esta instancia son infundados por una parte y fundados pero inoperantes por otra, en la forma en que ha quedado precisado, por lo que no se evidencia ilegalidad en la sentencia dictada por el Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, sin que se aprecie deficiencia en su exposición que suplir, procede confirmar la resolución recurrida y, consecuentemente, negar el amparo solicitado.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra los actos de las autoridades precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por mayoría de votos de la Magistrada Emma Meza Fonseca (pre-

sidenta) y el secretario en funciones de Magistrado Daniel Guzmán Aguado (ponente), con el voto particular del Magistrado Ricardo Paredes Calderón.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 103, 117 y demás aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 39/2019 (10a.) citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 31 de mayo de 2019 a las 10:36 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 66, Tomo II, mayo de 2019, página 863, con número de registro digital: 2019973.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Voto particular del Magistrado Ricardo Paredes Calderón: Respetuosamente disiento de la determinación de la mayoría de confirmar la determinación recurrida y negar el amparo al quejoso, porque en mi opinión debe concedérsele para efectos de que se le dé trámite al recurso que intentó, por las peculiaridades del caso.—Para sustentar lo anterior, es preciso indicar los antecedentes del asunto, lo que nos dará un panorama general para emitir el voto: i. El quejoso promovió incidente para obtener su inmediata libertad, al haber sido detenido de manera arbitraria. Escrito en el cual, indicó que, de no ser favorable la determinación, interponía el recurso de revocación o apelación.—ii. Ante esa cuestión, el Juez de la causa resolvió de plano e indicó que era infundada su propuesta –por cosa juzgada–, pues su situación jurídica ya había sido resuelta, incluso había sido condenado por el delito de robo agravado, en sentencia de primer y segundo grado; asimismo, que se le había negado la protección de la Justicia Federal en amparo directo.—Ante esa cuestión, el Juez de amparo, cuando conoce de la demanda de amparo en la que se señaló como acto el desechamiento de plano del incidente, aduce que los conceptos de violación del quejoso, referentes a que la responsable fue omisa en pronunciarse respecto de su petición de tener por interpuesto el recurso de apelación o revocación, (sic) ya que indicó que cuando realizó su petición, su deseo de la decisión que se tomara, era recurrirla.—En el proyecto de la mayoría se está avalando esa cuestión y es con la que no se está de acuerdo.—Como se ve, no se comparte el proyecto de la mayoría, pues se considera que cuando una persona, desde su petición, pro-

mueve los recursos contra la posible contestación, éstos deben tenerse por interpuestos; empero no en todos los casos, sino que a través de verificar las circunstancias del caso específico.—Y, en el caso, se considera de ese modo, en virtud de que quien promovió la incidencia es una persona privada de la libertad y está en situación vulnerable e, incluso, en sus agravios dice que "yo lo promovió (sic) de esta manera porque sabía que el término que tenía no iba a tener la posibilidad para recurrir (sic)", incluso debemos atender a las particulares del asunto, como que en el procedimiento estuvo un Juez y luego fue otro.—Y, en esa medida, tampoco se le tiene que dar una carga de que después de estar notificado volver a recurrir la determinación, cuando su sentir desde un inicio era interponer el recurso.—Además, no hay disposición expresa que prohíba recurrir previo a la determinación, y que si bien la ley indica que el recurso se interpondrá en tres días siguientes a la notificación, eso no imposibilita para que sea antes de transcurrido ese tiempo o, incluso, desde la petición del incidente.—Aunado a lo anterior, la Primera Sala, en el amparo directo en revisión 830/2017, concluyó que si el recurrente –aunque fue adhesivo– interpone el recurso antes de que le hubiere sido notificado el acuerdo de admisión del principal, no puede considerarse extemporáneo; máxime que la propia ley reglamentaria no dispone prohibición alguna al respecto, ni señala que por esta condición, el medio de defensa sea inoportuno, lo anterior lo reflejó en el criterio 1a./J. 39/2019 (10a.), visible con el registro digital: 2019973 en el *Semanario Judicial de la Federación,* de título, subtítulo y texto: "RECURSO DE REVISIÓN ADHESIVA. SU INTERPOSICIÓN ES OPORTUNA, AUN SI SE PRESENTA ANTES DE QUE SEA NOTIFICADO EL ACUERDO POR EL QUE SE ADMITE EL PRINCIPAL. En términos del artículo 82 de la Ley de Amparo, la regla general para la presentación del recurso de revisión adhesiva es que deberá hacerse dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en el que surta efectos la notificación de la admisión del recurso principal. Sin embargo, de los numerales 21 y 22 de la ley referida, y aplicados análoga y sistemáticamente con el artículo 82 aludido, se concluye que si el recurrente adhesivo interpone el recurso de mérito antes de que le hubiere sido notificado el acuerdo de admisión del principal, no puede considerarse extemporáneo; máxime que la propia ley reglamentaria no dispone prohibición alguna al respecto, ni señala que por esta condición el medio de defensa sea inoportuno.".—Por todo lo anterior, considero que se debió conceder el amparo para que se le diera trámite a su recurso.

Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 39/2019 (10a.) citada en este voto, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 31 de mayo

de 2019 a las 10:36 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 66, Tomo II, mayo de 2019, página 863.

Este voto se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

RECURSO DE APELACIÓN O REVOCACIÓN EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONE PREVIAMENTE A LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAERÁ A LA PETICIÓN RESPECTIVA, NO OBSTANTE QUE EL RECURRENTE SE ENCUENTRE PRIVADO DE SU LIBERTAD (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO ABROGADA). Si bien es cierto que de conformidad con los artículos 409, 413 y 416 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal –hoy Ciudad de México– abrogado, todo interesado o parte en un asunto –causa penal o proceso– tiene derecho a inconformarse mediante el recurso correspondiente contra determinada resolución judicial, en caso de no haberse emitido a favor de sus intereses, también lo es que de acuerdo con dichos preceptos, ello debe ocurrir al momento de la notificación de la resolución que recaiga a la petición que se hizo, o según el caso, dentro de los tres o cinco días siguientes al en que hubiera tenido conocimiento de ella, ya que la notificación realizada por el actuario judicial es precisamente con la finalidad de que el interesado se entere del sentido de la resolución objeto de esa actuación, a fin de que en caso de estar en desacuerdo con ella, en ese momento o en otro, interponga el recurso que proceda –ya sea apelación o revocación–, por lo que el hecho de que aquél esté privado de su libertad en algún centro carcelario con motivo de una resolución judicial, lo que conforme a las reglas 1, 2, 3 y 4 de "Las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad", así como la "Sección 2ª.- Beneficiarios de las Reglas", punto 10, reglas 22 y 23, se encuentra en estado de vulnerabilidad, no hace procedente un recurso interpuesto antes de dictada la resolución que, según dice, le pudiese ser desfavorable; máxime si de autos se advierte que el señalado funcionario público realizó de manera legal la notificación al interesado respecto de determinada resolución, y siendo que ésta se hizo con la finalidad de que aquél procediere conforme a sus intereses conviniera sobre ese fallo, es evidente que esa peculiaridad en nada implica imposibilidad para interponer el medio de impugnación que

corresponda contra la resolución que se le notificó, ya que lo puede hacer por sí, o a través de su defensor en el momento de la notificación o posterior a ella, dentro de los plazos correspondientes y, en caso contrario, se da por precluido su derecho.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.9o.P.289 P (10a.)

Amparo en revisión 231/2019. 5 de marzo de 2020. Mayoría de votos. Disidente: Ricardo Paredes Calderón. Ponente: Daniel Guzmán Aguado, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Néstor Vergara Ortiz.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RECURSO DE QUEJA EN EL AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE FUE MATERIA DE IDÉNTICO MEDIO DE IMPUGNACIÓN, AL CONSTITUIR COSA JUZGADA.

Hechos: El quejoso interpuso sendos recursos de queja contra el mismo acuerdo dictado en un juicio de amparo; una vez resuelto el primero de ellos, el Tribunal Colegiado de Circuito debía resolver el segundo recurso.

Criterio Jurídico: En el amparo indirecto el recurso de queja es improcedente si se interpone contra el auto que fue materia de idéntico medio de impugnación, porque constituye cosa juzgada.

Justificación: El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria de otro juicio, causal que también es aplicable a los recursos, al regirse por los mismos principios. Esto obedece a que, al existir una sentencia que ya resolvió sobre la cuestión planteada, la estabilidad, seguridad y firmeza de las resoluciones jurídicas debe impedir que se abra nuevamente la controversia, por haber constituido cosa juzgada.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.10o.P.2 K (10a.)

Queja 56/2020. 10 de septiembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos López Cruz. Secretario: Aldo Alejandro Pérez Campos.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO. EN EL INTERPUESTO CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA POR NO HABERSE DESAHOGADO UN REQUERIMIENTO PARA SU ACLARACIÓN, PUEDE PLANTEARSE LA ILEGALIDAD DE ÉSTE. Contra el auto que manda aclarar la demanda de amparo o su ampliación en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, no procede el recurso de revisión ni el de queja, por no causar, por sí mismo, un perjuicio irreparable al quejoso; no obstante, si no desahoga ese requerimiento y, por ello, se tiene por no presentada la demanda, esta determinación es la que actualiza ese perjuicio y en su contra procede el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en el que puede plantearse la ilegalidad del inicialmente señalado, sin que pueda estimarse que la materia del recurso de queja contra el auto que tiene por no presentada la demanda se limita a determinar la legalidad o ilegalidad de éste, sin poder examinarse la del acuerdo preventivo, pues ello implicaría dejar en total estado de indefensión al promovente, al impedirle impugnarlo.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

(I Región)4o.19 K (10a.)

Queja 712/2020. Roberto Vega Turrubiartes y otros. 20 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: José Alberto Arriaga Farías. Secretaria: Lucía Melo Ávila.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. SUS REGISTRADORES SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO,

CUANDO CALIFICAN UNILATERALMENTE UNA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN O POR LOS VICIOS PROPIOS DE LA EJECUTADA POR ORDEN DE DIVERSA AUTORIDAD. Del artículo 8o., fracciones I y VI, de la Ley Reglamentaria del Registro Público de la Propiedad y del Comercio para el Estado de Nuevo León, se advierte que la actividad propia de un registrador consiste en calificar las solicitudes provenientes de un Juez, notario o un particular y, con plena jurisdicción, determinar si el acto es inscribible o no, esto es, autorizar o negar la anotación registral, derivado del cumplimiento de los requisitos y formalidades establecidos en la propia ley, el Código Civil local y los demás relativos aplicables a la naturaleza del acto solicitado, a fin de preservar el principio de legalidad y la seguridad jurídica de los particulares. Consecuentemente, si un registrador puede unilateralmente autorizar o negar una inscripción en el Registro Público de la Propiedad, es el ejercicio de esa facultad de calificación autónoma el que puede crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones en la esfera jurídica del particular y, por tanto, el que le otorga la calidad de autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, la cual también tendrá cuando actúe como ejecutor de una orden de inscripción proveniente de diversa autoridad a quien se le reclame en forma destacada, por los vicios propios de su acto.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.

(IV Región)1o.26 A (10a.)

Amparo en revisión 630/2019 (cuaderno auxiliar 512/2020) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Juan José Silva Ibarra y otra. 21 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Vega Ramírez. Secretaria: Alma Leticia Canseco García.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RENUNCIA. ES ANÁLOGA A LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR CAUSA IMPUTABLE AL EMPLEADOR, COMO SUPUESTO PARA LA

DEVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DENOMINADOS "PLAN DE AHORRO" Y "PATRIMONIO PARA EL RETIRO", PREVISTOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES. En el referido contrato colectivo se instrumentó la creación de un programa encaminado a fomentar el ahorro de sus trabajadores, quienes durante su vida laboral realizan aportaciones salariales para generar fondos que en un futuro podrán disponer para hacer frente a su retiro. Así, las cláusulas 54 y 55 de dicho pacto colectivo establecen como hipótesis de adquisición por parte del trabajador de las aportaciones correspondientes en los Programas de Ahorro y Formación de Patrimonio al Retiro, denominados "Hsbc Cares Patrimonial" y "Hsbc Cares Médico", entre otras, la renuncia voluntaria del trabajador, pero no se refiere en forma expresa a la rescisión de la relación laboral por causa imputable al patrón. En este sentido, si bien es cierto que la interpretación de las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo debe realizarse en forma estricta, también lo es que ello debe hacerse conforme a los principios de buena fe y de equidad, razón por la que si en el juicio laboral queda demostrado que el trabajador rescindió la relación de trabajo por causa imputable al empleador, las cláusulas contractuales de que se trata deben interpretarse en el sentido de que la renuncia y la rescisión aludida son análogas, pues ambas tienen un sustrato común, que es la voluntad del trabajador de dar por concluida la relación de trabajo; por tanto, procede la devolución de los recursos de dicho plan de retiro, con mayor razón si la ruptura del vínculo es atribuible en su totalidad al empleador.

DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

I.14o.T.41 L (10a.)

Amparo directo 237/2020. 15 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Bonilla López. Secretario: Juan Daniel Torres Arreola.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RENUNCIA. SI EL TRABAJADOR QUE LA OBJETÓ EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD DE CONTENIDO Y FIRMA NO COMPARECE AL DESAHOGO DE

LA PRUEBA EN CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA QUE OFRECIÓ, LA JUNTA DEBE APERCIBIRLO CON DECLARAR SU DESERCIÓN. En el supuesto en que la parte actora objete una documental consistente en el escrito de renuncia, en cuanto a autenticidad de contenido y firma, con motivo de que éste se le atribuya por su autoría, y para acreditar su objeción ofrezca la referida experticial, la Junta debe apercibirlo con declarar su deserción para el caso de que no comparezca en la fecha señalada para otorgar las muestras de firma y escritura que soliciten los peritos, con fundamento en el artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo, y no con tener como presuntivamente puesta de su puño dicha firma, en términos del diverso 802 del mismo ordenamiento, porque este precepto no la faculta para proceder de esa forma. La razón de lo anterior obedece a que se reduciría la facultad de la Junta de valoración de ese documento, porque al tener por presuntivamente cierta la firma, generaría una presunción de certeza que sólo podría ser desvirtuada con otra prueba externa en contrario, impidiéndole realizar una libre y sana crítica sobre la documental en sí misma y sobre su verosimilitud, cuando pudiera ser obvia su falsedad por dudar, razonablemente, que la firma realmente hubiera sido puesta por mano de su objetante, por discrepancias evidentes frente a otra firma indubitada y sin necesidad de ser peritos para así advertirlo, motivo por el cual, el referido apercibimiento de presunción de certeza es contrario a los principios de legalidad y debido proceso previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, los cuales imponen que los mandamientos de autoridad, como es el apercibimiento de declarar la deserción de la referida pericial, cumplan con los requisitos mínimos consistentes en: 1) La existencia de una determinación debidamente fundada y motivada que, en el caso, consiste en declarar la deserción de un medio de prueba; y, 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de hacerla efectiva para el supuesto de que no proporcione todos los elementos necesarios para su desahogo.

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

I.11o.T.39 L (10a.)

Amparo directo 1082/2019. Lorenzo Hernández Barrera. 14 de noviembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel Ponce Peña. Secretario: Felipe de Jesús Martínez Alvarado.

Amparo directo 1173/2019. Sofía Dávila Lira. 23 de enero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Pérez Pérez. Secretario: Pedro Durán Suárez.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DE LA SALA QUE LA ORDENA CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. En la jurisprudencia 1a./J. 64/2016 (10a.), de título y subtítulo: "REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LA ORDENA OFICIOSAMENTE RESPECTO DE UN IMPUTADO QUE SE ENCUENTRA EN RECLUSIÓN PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a la conclusión de que la decisión de un tribunal de alzada que ordena oficiosamente la reposición de un proceso penal, instaurado contra un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, al tomar en consideración de manera fundamental que, si bien no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, la decisión del caso se pospone y la restricción a la libertad personal de forma preventiva se prolonga; sin embargo, en la ejecutoria de la que derivó dicha tesis también se consideraron aspectos referentes a la pronta administración de justicia, lo cual no sólo debe operar a favor de la persona sujeta a proceso, sino también de las víctimas u ofendidos, pues el hecho de que se alargue el procedimiento, trae como consecuencia un desgaste a la ofendida, incluso un detrimento patrimonial. Además, la Ley General de Víctimas en su artículo 12, fracción III, prevé que la víctima gozará, entre otros derechos, el de "intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas". De ahí que por equidad procesal entre el sentenciado y la víctima u ofendido del delito, la resolución de la Sala responsable que ordena la reposición del proceso penal constituye

un acto de imposible reparación para la víctima u ofendido, por lo que en su contra procede el juicio de amparo indirecto.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.9o.P.286 P (10a.)

Amparo en revisión 305/2019. 18 de junio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Guzmán Aguado, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Néstor Vergara Ortiz.

Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 64/2016 (10a.) citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 9 de diciembre de 2016 a las 10:21 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 37, Tomo I, diciembre de 2016, página 356, con número de registro digital: 2013282.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

S

SEGURO SOCIAL. CUANDO SE AJUSTE UNA PENSIÓN POR INVALIDEZ, VEJEZ O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, DEBE CONSIDERARSE EL LÍMITE SUPERIOR DE DIEZ VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL ENTONCES DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO) AL MOMENTO EN QUE FUE OTORGADA [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA III.4o.T.47 L (10a.)]. De una nueva reflexión, este Tribunal Colegiado de Circuito abandona el criterio sostenido en la tesis aislada III.4o.T.47 L (10a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 56, Tomo II, julio de 2018, página 1606, con número de registro digital: 2017470, de título y subtítulo: "SEGURO SOCIAL. SALARIO Y FECHA QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA LA CORRECCIÓN DEL MONTO DE LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA QUE OTORGA AQUÉL (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 33 Y 273 DE LA LEY DE LA MATERIA DEROGADA).", en el cual se consideró que era de mayor beneficio para los trabajadores considerar el salario mínimo vigente en la fecha en que se modifica la pensión; pues de un nuevo estudio se advierte que si en un juicio laboral se reclamó el ajuste de la pensión por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, por tener derecho a un salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización superior al que sirvió de base para cuantificar originalmente la pensión otorgada y esto se prueba, se deben aplicar el párrafo segundo del artículo 33 y el artículo 167 de la Ley del Seguro Social derogada, así como considerar el límite superior equivalente a 10 veces el salario mínimo general en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), vigente al momento en que fue otorgada la pensión original y no el que rija en la fecha en que se dicte el laudo. Lo anterior obedece a que debe atenderse a la época en que se otorgó la pensión, que fue cuando se

cumplieron los requisitos para tener derecho a percibirla. Además, considerar una anualidad diferente trastocaría los derechos de los asegurados, al reducir los recursos del instituto, quebrantando los principios de solidaridad y financiamiento que rigen al sistema de seguridad social, porque la fecha en que el asegurado cumplió con los requisitos establecidos en la ley es un dato objetivo, que no cambia, ni está sujeto a interpretación, lo que genera certeza jurídica.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

III.4o.T.57 L (10a.)

Amparo directo 28/2019. Instituto Mexicano del Seguro Social. 2 de julio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretaria: Erika Vianey García Colmenero.

Nota: La presente tesis abandona el criterio sostenido por el propio tribunal en la diversa III.4o.T.47 L (10a.), de título y subtítulo: "SEGURO SOCIAL. SALARIO Y FECHA QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA LA CORRECCIÓN DEL MONTO DE LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA QUE OTORGA AQUÉL (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 33 Y 273 DE LA LEY DE LA MATERIA DEROGADA).", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 56, Tomo II, julio de 2018, página 1606, con número de registro digital: 2017470.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SEGURO SOCIAL. PARA LA PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DEL TOPE SALARIAL DE LOS SEGUROS DE INVALIDEZ, VEJEZ O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, NO ES OBLIGACIÓN DEL INSTITUTO PROBAR QUE EL ASEGURADO COTIZÓ MENOS QUE EL LÍMITE SUPERIOR DE DIEZ VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL ENTONCES DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO). Si en un juicio laboral se reclamó la modificación de la pensión por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, por tener derecho a un salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización superior al que sirvió de base para cuantificar originalmente la pensión y esto se prueba conforme al artículo 33 de la Ley del Seguro Social derogada,

que determina el límite superior de cotización y establece 25 veces el salario mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México) para la rama del seguro de enfermedad y maternidad y de 10 veces para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, para aplicar el tope salarial a una pensión por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, si bien es cierto que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la carga de probar las semanas y el salario con el cual se cotizó, no menos lo es que para la procedencia de la excepción del tope salarial no tiene obligación de demostrar que el trabajador cotizó menos de diez salarios mínimos, pues el hecho de que haya cotizado más de 10 veces ese salario se justifica porque la aportación de hasta 25 veces corresponde a la rama del seguro de enfermedad y maternidad; empero, el pago de las pensiones por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada no pueden rebasar el límite previsto por el artículo 33 citado, porque debe atenderse al sistema de financiamiento del organismo y al principio de solidaridad que rige la materia de seguridad social.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

III.4o.T.59 L (10a.)

Amparo directo 28/2020. Instituto Mexicano del Seguro Social. 2 de julio de 2020. Unanimidad de votos. Mayoría en cuanto al sentido y tema de la tesis. Disidente: Miguel Lobato Martínez. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretaria: Erika Vianey García Colmenero.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SEPARACIÓN DEL DOMICILIO FAMILIAR. CONTRA LA MEDIDA PROVISIONAL DECRETADA EN UN PROCEDIMIENTO PRIVILEGIADO, PREVIA A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE DIVORCIO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA) [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA VI.2o.C.31 C (10a.)]. Una nueva reflexión sobre el tema relativo al procedimiento privilegiado de separación del domicilio familiar lleva a este Tribunal Colegiado de Circuito a abandonar el criterio sostenido en la tesis aislada VI.2o.C.31 C (10a.), de título y subtítulo: "SEPARACIÓN DEL DOMICILIO CONYUGAL. NO ES FACTIBLE ESTIMAR DICHA MEDIDA COMO DE CARÁCTER

PROVISIONAL SI SE DECRETA EN UN JUICIO TRAMITADO DE MANERA PRIVILEGIADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XX, Tomo 3, mayo de 2013, página 2137, con número de registro digital: 2003768, al considerar ahora que tratándose de la hipótesis prevista en la fracción III del artículo 319 del Código Civil para el Estado de Puebla, que establece que la obligación de los cónyuges de vivir juntos en el domicilio familiar, podrá suspenderse cuando uno de éstos intente ejercer o haya ejercido una acción civil contra el otro, ya sea de nulidad de matrimonio o de divorcio; y, por su parte, el diverso artículo 320 señala de manera clara que tratándose de estos casos, ya sea antes o después de iniciarse el juicio, el Juez del conocimiento deberá adoptar provisionalmente medidas, entre las que se encuentra separar del domicilio familiar a los cónyuges. Esto es, cuando la separación del domicilio conyugal se solicita con la finalidad de promover un juicio de divorcio, la determinación adoptada por el juzgador es de carácter provisional –medida cautelar–, al ser una determinación previa al inicio del juicio, que puede modificarse o revocarse, de acuerdo con lo que prevé el artículo 686 del Código de Procedimientos Civiles para esa entidad. En ese tenor, la resolución provisional de un procedimiento privilegiado conforme al artículo 683, fracción V, que decreta la separación del domicilio familiar, prevista en el artículo 687, ambos del referido código adjetivo, no es de carácter definitiva, de acuerdo con lo que establece el diverso artículo 47 del propio código procesal civil, al estar supeditada a la promoción ulterior de un juicio de divorcio. De lo que se advierte que de acuerdo con la clasificación que hace el propio Código Civil, la resolución a que se refieren los artículos 319, fracción III, 320 y 321 es de carácter provisional; de ahí que cuando se pretenda combatir la medida provisional que decreta la separación del domicilio familiar, previa a la promoción de un juicio de divorcio, procede el juicio de amparo indirecto.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
VI.2o.C.71 C (10a.)

Amparo directo 582/2019. 24 de junio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Raúl Rodríguez Eguíbar.

Nota: Esta tesis abandona el criterio sostenido por el propio tribunal, en la diversa VI.2o.C.31 C (10a.), de título y subtítulo: "SEPARACIÓN DEL DOMICILIO CONYUGAL. NO ES FACTIBLE ESTIMAR DICHA MEDIDA COMO DE CARÁCTER

PROVISIONAL SI SE DECRETA EN UN JUICIO TRAMITADO DE MANERA PRIVILEGIADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XX, Tomo 3, mayo de 2013, página 2137, con número de registro digital: 2003768.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE A FAVOR DE MENORES DE EDAD. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y SE APORTAN INDICIOS SOBRE SU EXISTENCIA, AQUÉLLA PROCEDE PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO RECABE DE OFICIO PRUEBAS TENDENTES A DESVIRTUAR ESA NEGATIVA Y DESPLIEGUE UNA POSTURA ACTIVA EN SU RECEPCIÓN Y DESAHOGO. La negativa del acto reclamado por la autoridad responsable genera la carga probatoria para el quejoso de desvirtuarla; sin embargo, el Juez de amparo la comparte cuando los promoventes son menores de edad, respecto de quienes opera la suplencia de la queja en toda su amplitud, conforme al artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, incluso para recabar pruebas, máxime cuando la afectación alegada guarda estrecha relación con derechos fundamentales, como el de acceso a la educación básica, reconocido por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, cuando se aportan indicios sobre la existencia de los actos reclamados negados, la suplencia de la queja deficiente procede tanto para recabar pruebas tendentes a desvirtuar esa negativa vertida por la autoridad responsable, como para desplegar una postura activa en su recepción y desahogo, a fin de conocer la verdad sobre los hechos controvertidos; incluso, el artículo 179 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, autoriza al juzgador para ello. Por eso, es inaceptable que al recibirse una testimonial, el Juez se limite a formular las preguntas que califique de legales, cuando no cuentan con la debida precisión para el conocimiento de los hechos o para la demostración de los actos atribuidos a la autoridad, sin que el desempeño deficiente de quien ejerce la representación de los menores en el juicio sea causa que releve al juzgador de amparo de esa obligación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.1o.8 K (10a.)

Amparo en revisión 281/2019. 25 de octubre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Dávila Gaona. Secretario: Edgar Alan Paredes García.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 1a./J. 191/2005, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 167, con número de registro digital: 175053.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS JUICIOS DE AMPARO, PREVISTA EN EL ACUERDO GENERAL 8/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). OPERA EN FAVOR DE LOS QUEJOSOS EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA URGENTE DEL ASUNTO. Una interpretación sistemática, teleológica y funcional del acuerdo general citado –reformado mediante el diverso Acuerdo General 10/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con su periodo de vigencia– y relevantemente de sus artículos 1 y 4, conduce a este tribunal a sostener que los plazos para la presentación de las demandas de amparo permanecieron suspendidos en el periodo comprendido del seis de mayo al quince de junio de dos mil veinte, inclusive en los asuntos de naturaleza urgente. La anterior conclusión se sustenta en la intención expresada en dicho acuerdo, de suspenderlos durante la vigencia de las medidas de distanciamiento social dirigidas a evitar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), las cuales inhibieron la afluencia de los servidores públicos a los centros laborales y redujeron notablemente la capacidad para la atención del trámite de los asuntos jurisdiccionales, así como en sus objetivos inmediatos de salvaguardar tanto la salud de los servidores públicos y usuarios del sistema de Justicia Federal, como el derecho de acceso a la justicia de los gobernados y la subsistencia de sus derechos procesales frente a la crisis sanitaria. En este contexto, vinculó a los órganos jurisdiccionales a brindar atención inmediata e ininterrumpida a los asuntos que deban ser calificados por el juzgador como

urgentes, con la finalidad de garantizar en beneficio de los agraviados una tutela judicial efectiva para los casos que no admitan una espera prolongada, por la entidad de los derechos humanos involucrados. Por esa razón, el acuerdo mencionado, en lo relativo a la suspensión del plazo para presentar la demanda, no distinguió entre casos urgentes y los que no lo son, ni tuvo como objetivo someter a dicho plazo únicamente la acción de amparo en los casos urgentes, en virtud de que estos objetivos no corresponden a los fines perseguidos por el aludido instrumento normativo. De donde se sigue que para el inicio del cómputo del plazo para la presentación de las demandas de amparo, debe considerarse la suspensión de plazos durante el periodo de vigencia del referido acuerdo general 8/2020, independientemente de que se trate de asuntos urgentes o no, porque esta conceptualización se desarrolló con el solo objetivo de garantizar el trámite de los asuntos nuevos de atención inmediata y continua durante la etapa de contingencia y no para someter a los quejosos en los casos urgentes al plazo para pedir amparo, excluyéndolos de aquella suspensión. Estimar lo contrario vulneraría el principio de tutela judicial efectiva, que engloba el derecho de acceso a la jurisdicción, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la calificación de un caso como "urgente" requiere de un análisis cuidadoso, bajo los principios y postulados que son propios de una decisión jurisdiccional, conforme al artículo 4 del mencionado acuerdo general. Por tanto, sería excesivo, por desproporcionado, exigir que los justiciables deban anticipar esa decisión antes de presentar su demanda para determinar si se está o no en el supuesto de suspensión de los plazos que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo durante el periodo de referencia. Situación que resulta jurídicamente inadmisible, por la incertidumbre jurídica que se generaría en perjuicio de los gobernados. En el mismo sentido, se arriesgaría la racionalidad de las medidas instauradas por el Consejo de la Judicatura Federal si, por una parte, para garantizar el acceso a la justicia en asuntos urgentes se dispone y facilita el trámite del amparo pero, por otra, para ejercer ese derecho se somete al agraviado al plazo fatal para interponer la demanda, a pesar de las condiciones de confinamiento y medidas sanitarias impuestas en el contexto sanitario grave de una pandemia, en desproporción y desventaja frente a los casos no urgentes, en donde ese término fue suspendido.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XVII.2o.8 K (10a.)

Queja 60/2020. Servicios Sociales Funeral, S.A. de C.V. 5 de agosto de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Gerardo González Torres.

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 8/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y 10/2020, que reforma el similar 8/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 7 de agosto de 2020 a las 10:15 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 77, Tomo VII, agosto de 2020, páginas 6516 y 6550, con números de registro digital: 5487 y 5471, respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

SUSTITUCIÓN PROCESAL DE LA PARTE ACTORA. EN LOS CASOS EN QUE SE PONGA EN CONOCIMIENTO DEL JUZGADOR PREVIO A ORDENARSE EL EMPLAZAMIENTO, DEBE CORRÉRSELE TRASLADO A LA PARTE DEMANDADA CON LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE AL EFECTO SE APORTEN, CUYA OMISIÓN ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL. En los casos en que antes de ordenarse y realizarse el emplazamiento a un juicio especial hipotecario, se ponga en conocimiento del juzgador la sustitución procesal de la parte actora, el juzgador tiene la obligación de hacerlo del conocimiento de la parte demandada junto con los documentos que al efecto se anexen para demostrarlo, esto con la intención de que la parte demandada conozca con fidelidad los términos, las pretensiones, los hechos y las pruebas en que se basa la demanda de forma concreta, exacta y completa; ya que la sustitución de los derechos litigiosos conlleva una serie de consecuencias que pueden impactar en la defensa del demandado. De esta forma, cuando el juzgador civil no pone en conocimiento del demandado esa sustitución y el demandado es condenado en juicio, se actualiza en su perjuicio una violación evidente de la ley, que afecta el derecho de defensa del demandado y trasciende en sí mismo al resultado del fallo, en términos de las fracciones I, VI y VIII del artículo 172 de la Ley de Amparo, porque si bien en este caso no se le cita en forma distinta a la prevenida por la ley,

es equiparable, al no mostrarle piezas de autos para poder alegar sobre ellos, y a no otorgarle los términos que con arreglo a la ley tiene derecho, en este caso, para presentar su defensa a través del escrito de contestación.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
VII.2o.C.223 C (10a.)

Amparo directo 714/2019. Héctor Sergio Herrera Quintero. 23 de enero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel De Alba De Alba. Secretario: Alan Iván Torres Hinojosa.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TÉRMINOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD SE LE NOTIFICA PERSONALMENTE EL PLAZO PARA AMPLIAR SU DEMANDA Y NO TIENE LA ASESORÍA DE UN DEFENSOR, A FIN DE GARANTIZAR SU ACCESO COMPLETO Y EFICAZ A LA JUSTICIA, NO DEBEN CORRERLE AQUÉLLOS NI PRECLUIR SU DERECHO PARA EFECTUARLA. En la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), de título y subtítulo: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, que permite ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. De esta forma, indicó que cuando una persona privada de la libertad, en virtud de un proceso penal, presenta la demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional del conocimiento debe prevenirle para que nombre a un abogado que la represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores; y, en caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el juzgador deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual, requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio –sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etcétera–, y ésta deberá prestarlo. En seguimiento a dicho criterio, cuando al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión se le notifica personalmente el auto que le otorga un plazo para ampliar su demanda de derechos fundamentales, pero no cuenta con la asesoría de un defensor, no debe correrle dicho término ni precluir su derecho a pro-

mover la ampliación, porque al privársele de esa asistencia, no se le brindan los elementos necesarios para instar. Por tal razón, en estos casos, para garantizar un acceso completo y eficaz a la justicia, los Jueces de amparo deben considerar que la promoción relativa es oportuna, mientras no se efectúe esa designación. Máxime cuando el recurso intentado y procedente contra el desechamiento de la ampliación es el de queja y no el de revisión, siendo el primero en el que no podría ordenarse la reposición del procedimiento para que se efectúe la designación y se le brinde la oportunidad para ampliar la demanda.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.1o.7 P (10a.)

Queja 193/2019. 25 de octubre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Dávila Gaona. Secretaria: Angélica del Carmen Ortuño Suárez.

Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.) citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 23 de agosto de 2019 a las 10:31 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 69, Tomo II, agosto de 2019, página 1301, con número de registro digital: 2020495.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TORTURA. ES INOPERANTE EL RECLAMO E INATENDIBLE LA PRETENSIÓN DEL QUEJOSO, PARA EL EFECTO DE QUE LA RESPONSABLE ORDENE LA INVESTIGACIÓN PERTINENTE, DE LA ADUCIDA CON RELACIÓN A COIMPUTADOS NO QUEJOSOS. No procede abordar el análisis del planteamiento aducido en la demanda, y menos aún conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la responsable ordene la investigación con relación a la tortura de que aduce fueron objeto otros condenados en diversa resolución, toda vez que no subyace una afectación a la esfera jurídica del quejoso, sino de diversas personas, de donde se desprende un impedimento técnico que hace inoperante el reclamo e inatendible la pretensión, ante la imperatividad de los principios de instancia de parte agraviada, agravio personal y directo y de relatividad de los efectos de la sentencia que rigen en el juicio de amparo directo, ya que no puede implicar que la restitución en el goce del derecho violado

llegue al extremo de desencadenar consecuencias hacia otras personas, lo que es contrario a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad procesal que se busca preservar. Consecuentemente, debe desestimarse el planteamiento formulado por el quejoso en la demanda, de aplicar la doctrina desarrollada por el Alto Tribunal sobre la tortura, con la pretensión de exclusión de pruebas ilícitas derivadas de ésta, con relación a coimputados no quejosos, al considerar que aquélla está construida bajo la base de la afectación a la integridad personal de quien es víctima de tortura y el impacto que le genera en el proceso penal, lo que no impide que la valoración de los testimonios de los coinculpados pueda ser analizado por el Tribunal Colegiado como un aspecto de legalidad, desde la perspectiva que estudió la autoridad responsable, lo que implica verificar si fue correcto o no tal ejercicio.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.

V.2o.P.A.21 P (10a.)

Amparo directo 388/2018. 28 de noviembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretario: Hugo Reyes Rodríguez.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO. SU RECONOCIMIENTO DE BASE DEBE RETROTRAERSE HASTA EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYAN ADQUIRIDO EL DERECHO DE INAMOVILIDAD, LO QUE SUCEDE CUANDO HAN LABORADO SEIS MESES ININTERRUMPIDOS Y SIN NOTA DESFAVORABLE EN UN PUESTO BASIFICABLE.

Hechos: Diversos trabajadores al servicio del Estado de Tabasco promovieron juicio laboral en el que demandaron el reconocimiento de base desde la fecha de ingreso; al respecto, la autoridad laboral declaró procedente dicho reclamo, pero resolvió que la basificación debía otorgarse a partir del día en que se dictó el laudo.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el reconocimiento de base debe retrotraerse hasta el momento en que se generó el derecho

de inamovilidad en el puesto, es decir, hasta el día siguiente al en que los trabajadores cumplieron seis meses de servicio ininterrumpido sin nota desfavorable.

Justificación: El artículo 6o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que el derecho a la inamovilidad en un puesto de base sólo corresponde a los trabajadores que no ocupen una plaza de confianza, siempre que hayan laborado por más de seis meses sin nota desfavorable en su expediente. Ahora bien, dicho precepto resulta aplicable supletoriamente a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, dado que: (1) este ordenamiento establece expresamente esa posibilidad en su artículo 8o., fracción I; (2) a pesar de que la legislación a suplir contempla la figura de los trabajadores de base –y la distingue de los trabajadores por obra o tiempo determinado y los de confianza–, existe una deficiente regulación al respecto, pues no señala a partir de qué momento se obtiene el derecho a la inamovilidad; (3) esa omisión hace necesario acudir a la normativa supletoria para solucionar el problema jurídico; y, (4) la norma supletoria no contraviene precepto alguno del ordenamiento a suplir. Aunado a lo anterior, el artículo 95 de las Condiciones Generales de Trabajo entre el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y sus trabajadores dispone que transcurridos seis meses de servicio ininterrumpidos tras el ingreso o reingreso, el trabajador puede solicitar los derechos que establece ese ordenamiento por concepto de antigüedad. En ese sentido, cuando un trabajador al servicio del Estado de Tabasco demanda el reconocimiento de que es trabajador de base, y este reclamo resulta procedente, la basificación debe retrotraerse hasta el momento en que se generó el derecho de inamovilidad en el puesto, es decir, hasta el día siguiente al en que cumplió seis meses ininterrumpidos de servicio sin nota desfavorable; lo anterior, en términos de la aplicación supletoria del artículo 6o. referido, y de una interpretación sistemática de esta normativa con las referidas condiciones generales de trabajo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO.

X.1o.T.4 L (10a.)

Amparo directo 1615/2019. 24 de septiembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Andraca Carrera. Secretario: Carlos Enrique Zayas García.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

V

VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. CUANDO EN EL AMPARO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE TRAMITAR Y RESOLVER UNA DENUNCIA CIUDADANA POR REALIZARSE ESAS ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO LEGAL Y REGLAMENTARIAMENTE PERMITIDO Y EL QUEJOSO ADUCE VIOLACIÓN A SU DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR, POR EL EXCESO DE RUIDO Y LA ALTERACIÓN AL ORDEN QUE PRODUCEN, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DAR EFECTOS A SU SENTENCIA PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TOMEN TODAS LAS MEDIDAS POSITIVAS PARA SU PROTECCIÓN. El derecho humano mencionado entraña la facultad de toda persona, como parte de una colectividad, de exigir la protección efectiva del medio ambiente en el que se desarrolla, pues su vulneración puede afectar directa o indirectamente otros derechos, como los relativos a la protección de la salud, a la integridad personal o a la vida, debido a su conexidad. Ahora, frente a los riesgos derivados del abuso en el consumo de bebidas alcohólicas, se ha regulado su venta y consumo en establecimientos comerciales, así como el otorgamiento de licencias o permisos para su funcionamiento al público en la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León y en su reglamento, cuyas disposiciones tienen como finalidad el combate al alcoholismo en la sociedad y, con ello, evitar las consecuencias negativas que involucra el desarrollo a un medio ambiente sano. Por tanto, cuando en el amparo se reclama la omisión de tramitar y resolver una denuncia ciudadana por la venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales fuera del horario legal y reglamentariamente permitido y el quejoso aduce violación a su derecho humano a un

medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el exceso de ruido y la alteración al orden que producen, el Juez de Distrito puede dar efectos a su sentencia para que las autoridades responsables tomen todas las medidas positivas para su protección, como llevar a cabo visitas de inspección para cerciorarse de lo manifestado por el particular y, en su caso, protegerlo contra los abusos cometidos por la transgresión a disposiciones de orden público e interés social.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.

(IV Región)1o.27 A (10a.)

Amparo en revisión 201/2020 (cuaderno auxiliar 528/2020) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Presidenta Municipal de Guadalupe, Nuevo León y otros. 28 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Riveros Caraza. Secretaria: Karen Yunis Escobar.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Sexta Parte

NORMATIVA, ACUERDOS
RELEVANTES Y OTROS

Sección Primera

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN



INSTRUMENTO NORMATIVO APROBADO POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EN VIRTUD DEL CUAL SE PRORROGA DEL SIETE AL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, LA VIGENCIA DE LOS PUNTOS DEL TERCERO AL NOVENO DEL ACUERDO GENERAL NÚMERO 14/2020, DE VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE REANUDAN LOS PLAZOS PROCESALES SUSPENDIDOS DESDE EL DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 11, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra facultado para emitir acuerdos generales en las materias de su competencia;

SEGUNDO. Tomando en cuenta que la prolongación del periodo de emergencia sanitaria tornó necesario el restablecimiento de la actividad jurisdiccional y que la pandemia derivada subsistía como un peligro para la salud, por lo que dicha reactivación exigía implementar modalidades que permitieran enfrentar la referida emergencia, en el Acuerdo General 14/2020, de veintiocho de

julio de dos mil veinte, el Pleno de este Alto Tribunal determinó, por una parte, levantar la suspensión de plazos en los asuntos de su competencia y, por otra parte, establecer los términos en los que se desarrollarían las actividades jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tres al treinta y uno de agosto de dos mil veinte;

TERCERO. Mediante instrumentos normativos de veintisiete de agosto, veinticuatro de septiembre, y veintiséis de octubre de dos mil veinte, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó prorrogar del primero al treinta de septiembre, del uno al treinta y uno de octubre, así como del uno de noviembre del presente año al seis de enero de dos mil veintiuno, respectivamente, la vigencia de los puntos del Tercero al Noveno del citado Acuerdo General Plenario 14/2020, y

CUARTO. En virtud de que prevalecen condiciones de emergencia sanitaria similares a las que dieron lugar a la emisión del referido Acuerdo General Plenario 14/2020, así como a las prórrogas señaladas en el Considerando Tercero que antecede, se estima que deben continuar vigentes las diversas medidas establecidas en sus puntos del Tercero al Noveno, que permiten tanto proteger los derechos a la salud y a la vida de las personas justiciables y de los servidores públicos de esta Suprema Corte, como dar eficacia al derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia, con fundamento en los preceptos constitucionales y legal mencionados, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expide el presente Instrumento Normativo, en virtud del cual:

ÚNICO. Se prorroga del siete al treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, la vigencia de lo establecido en los puntos del Tercero al Noveno del Acuerdo General 14/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte.

TRANSITORIOS:

PRIMERO. Este Instrumento Normativo entrará en vigor el día de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese el presente Instrumento Normativo en el Diario Oficial de la Federación, en el *Semanario Judicial de la Federación* y, en términos de lo dispuesto en los artículos 70, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 71, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en medios electrónicos de consulta pública; y hágase del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal y, para su cumplimiento, de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito.

EL PRESIDENTE DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

LIC. RAFAEL COELLO CETINA

El licenciado Rafael Coello Cetina, Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

CERTIFICA:

Este INSTRUMENTO NORMATIVO APROBADO POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EN VIRTUD DEL CUAL SE PRORROGA DEL SIETE AL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, LA VIGENCIA DE LOS PUNTOS DEL TERCERO AL NOVENO DEL ACUERDO GENERAL NÚMERO 14/2020, DE VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE REANUDAN LOS PLAZOS PROCESALES SUSPENDIDOS DESDE EL DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, fue emitido por el Tribunal Pleno en Sesión Privada celebrada el día de hoy, por unanimidad de once votos de los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek,

Alberto Pérez Dayán y Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.—Ciudad de México, a siete de diciembre de dos mil veinte (D.O.F. DE 10 DE DICIEMBRE DE 2020).

Nota: El Acuerdo General Número 14/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se reanudan los plazos procesales suspendidos desde el dieciocho de marzo de dos mil veinte citado en este instrumento normativo, aparece publicado en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 7 de agosto de 2020 a las 10:15 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 77, Tomo VII, agosto de 2020, página 6378, con número de registro digital: 5499.

Los Instrumentos Normativos aprobados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinticuatro de septiembre y el veintiséis de octubre de dos mil veinte, en virtud de los cuales se prorroga del uno al treinta y uno de octubre y del uno de noviembre de ese año al seis de enero de dos mil veintiuno, la vigencia de los puntos del tercero al noveno del Acuerdo General Número 14/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se reanudan los plazos procesales suspendidos desde el dieciocho de marzo de dos mil veinte citados en este instrumento normativo, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación* de los viernes 2 de octubre de 2020 a las 10:12 horas y 30 de octubre de 2020 a las 10:40 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 79, Tomo III, octubre de 2020, páginas 1949 y 1952, con números de registro digital: 5521 y 5528, respectivamente.

Este instrumento normativo se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Sección Segunda

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL



ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE LOS CONSEJEROS QUE INTEGRARÁN LA COMISIÓN QUE DEBE PROVEER LOS TRÁMITES Y RESOLVER LOS ASUNTOS DE NOTORIA URGENCIA QUE SE PRESENTEN DURANTE EL RECESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES DE 2020.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

SEGUNDO. De acuerdo con lo establecido por el artículo 81, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Consejo de la Judicatura Federal establecer las Comisiones que estime convenientes para su adecuado funcionamiento y designar a las y los Consejeros que deban integrarlas;

TERCERO. El artículo 77 de la citada ley establece que el Consejo de la Judicatura Federal contará con aquellas comisiones permanentes o transitorias de composición variable que determine el Pleno;

CUARTO. El artículo 73 de la mencionada Ley Orgánica establece que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal designará a las y los Consejeros que deban proveer los trámites y resolver los asuntos de notoria urgencia que se presenten durante los recesos, así como a las y los secretarios y empleados que sean necesarios para apoyar sus funciones;

QUINTO. Cada año, el Consejo de la Judicatura Federal tiene 2 periodos de sesiones. El primero comprende del primer día hábil del mes de enero al último día hábil de la primera quincena del mes de julio; y el segundo, del primer día hábil del mes de agosto al último día hábil de la primera quincena del mes de diciembre;

SEXTO. El receso correspondiente al segundo periodo de sesiones de 2020 abarcará del 16 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021;

SÉPTIMO. El artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, establece que éste contará con comisiones permanentes y transitorias, y entre ellas, la Comisión de Receso; y

OCTAVO. El Acuerdo General citado en el considerando precedente dispone en sus artículos 54, 55, 56, 57 y 58 las normas a que debe sujetarse la Comisión de Receso.

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales invocadas, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expide el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal designa a las Consejeras Eva Verónica de Gyvés Zárate y Loretta Ortiz Ahlf, para integrar la Co-

misión que deberá proveer los trámites y resolver los asuntos de notoria urgencia que se presenten durante el receso correspondiente al segundo periodo de sesiones de 2020, quienes nombrarán a su presidenta.

Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, la Comisión de Receso estará facultada para conocer de los asuntos previstos en las fracciones XXII, XXIII, XXXIII, XXXIX y XL del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el previsto en la fracción VIII del artículo 85 del citado ordenamiento, así como los urgentes.

Al respecto, atenderá los asuntos de notoria urgencia con las atribuciones legales, normativas y reglamentarias necesarias para el manejo, operación, administración y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, con excepción de las previstas en el artículo 61, fracciones III y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo.

La Comisión de Receso operará también como Comisión Especial.

SEGUNDO. Durante el periodo a que se refiere el considerando **SEXTO** de este acuerdo, fungirá como secretario de la Comisión de Receso el maestro Daniel Álvarez Toledo, coordinador de asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal.

Se faculta a la propia Comisión para determinar a las y los secretarios y empleados necesarios para el óptimo ejercicio de sus funciones.

TERCERO. Al concluir el receso e iniciar el primer periodo ordinario de sesiones de 2021, las Consejeras designadas para integrar la Comisión a que se refiere el punto **PRIMERO** de este acuerdo, rendirán informe pormenorizado respecto de las medidas que hayan adoptado, así como de aquellas cuestiones cuya solución reserven para el conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que este órgano colegiado determine lo procedente.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Publíquese el Acuerdo General en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet.

EL LICENCIADO ARTURO GUERRERO ZAZUETA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la designación de los Consejeros que integrarán la Comisión que debe proveer los trámites y resolver los asuntos de notoria urgencia que se presenten durante el receso correspondiente al segundo periodo de sesiones de 2020, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 25 de noviembre de 2020, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: Presidente Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Bernardo Bátiz Vázquez, Jorge Antonio Cruz Ramos, Eva Verónica de Gyvés Zárate, Alejandro Sergio González Bernabé, Sergio Javier Molina Martínez y Loretta Ortiz Ahlf.—Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2020 (D.O.F. DE 14 DE DICIEMBRE DE 2020).

Nota: El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales citado en este acuerdo, aparece publicado en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647, con número de registro digital: 2409.

Este acuerdo se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ACUERDO GENERAL 28/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFORMACIÓN DE LOS JUZGADOS CUARTO, QUINTO,

SÉPTIMO Y OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA MERCANTIL ESPECIALIZADOS EN JUICIOS DE CUANTÍA MENOR CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN ESPECIALIZADO EN EXTINCIÓN DE DOMINIO CON JURISDICCIÓN EN LA REPÚBLICA MEXICANA, EN JUZGADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADOS EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTIVAMENTE; A LA CREACIÓN DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO CON LA MISMA SEMIESPECIALIDAD Y RESIDENCIA; LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN QUE LES PRESTARÁ SERVICIO, ASÍ COMO A LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS; Y QUE REFORMA LOS SIMILARES 20/2009, QUE CREA EL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE LO INTEGRARÁN; Y 3/2013, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA; Y AL NÚMERO, A LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión

y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus atribuciones;

SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracciones VI y XXIV; y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia de los Juzgados de Distrito, en cada uno de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; así como dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los Juzgados de Distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos. Esta atribución la ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos del artículo 42, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo;

TERCERO. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes;

CUARTO. La acción de extinción de dominio se caracteriza por ser un procedimiento de naturaleza civil, con carácter patrimonial y prevalencia de la oralidad, regido por los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración, por lo que guarda afinidad con los juicios orales mercantiles que se tramitan ante los Juzgados de Distrito en Materia Mercantil Especializados en Juicios de Cuantía Menor. En este sentido, atendiendo al cambio en la forma de sustanciación de los procesos de extinción de dominio, que fue introducido por la Ley Nacional de Extinción de Dominio, es conveniente que sean órganos ordinarios especializados en oralidad los que atiendan, en adelante, los procesos jurisdiccionales de extinción de dominio, aunado a que dichos órganos disponen, como parte de su infraestructura, de salas de audiencia y equipos de videograbación para el registro de las mismas; y

QUINTO. En sesión celebrada el 19 de febrero de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el "ESTUDIO RELATIVO A LA CREACIÓN

DE JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO (CON COMPETENCIA EN TODO EL PAÍS) Y EN ORALIDAD MERCANTIL (CON COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO)"; en el que se determinó la conveniencia de la medida propuesta en el presente acuerdo.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

Artículo 1. El 16 de diciembre de 2020, los Juzgados Cuarto, Quinto, Séptimo y Octavo de Distrito en Materia Mercantil Especializados en Juicios de Cuantía Menor, con sede en la Ciudad de México y el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado en Extinción de Dominio con jurisdicción en la República Mexicana, con sede en la Ciudad de México, se transforman conforme a lo siguiente:

DENOMINACIÓN ACTUAL	NUEVA DENOMINACIÓN
JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA MERCANTIL ESPECIALIZADO EN JUICIOS DE CUANTÍA MENOR, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO	JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADO EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA MERCANTIL ESPECIALIZADO EN JUICIOS DE CUANTÍA MENOR, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO	JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADO EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA MERCANTIL ESPECIALIZADO EN JUICIOS DE CUANTÍA MENOR, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO	JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADO EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO

DENOMINACIÓN ACTUAL	NUEVA DENOMINACIÓN
JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA MERCANTIL ESPECIALIZADO EN JUICIOS DE CUANTÍA MENOR, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO	JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADO EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN ESPECIALIZADO EN EXTINCIÓN DE DOMINIO CON JURISDICCIÓN EN LA REPÚBLICA MEXICANA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO	JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADO EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 2. Los Juzgados de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializados en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, tendrán jurisdicción para conocer, en toda la República Mexicana, de las acciones de extinción de dominio y de los procedimientos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, así como de los juicios de amparo indirecto relacionados con esta materia. Aunado a lo anterior, tendrán competencia para conocer de los procedimientos orales mercantiles, conforme a lo dispuesto por el título especial "Del juicio oral mercantil" y por el título especial Bis "Del juicio ejecutivo mercantil oral", ambos del libro quinto del Código de Comercio, dentro de la jurisdicción territorial del Primer Circuito.

Artículo 3. Los Tribunales Unitarios en Materias Civil, Administrativa y Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, serán competentes para conocer en segunda instancia de los recursos que deriven de las acciones de extinción de dominio, así como de los previstos en la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Artículo 4. El 16 de diciembre de 2020 se crea e inicia funciones el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer

Circuito, con sede en la Ciudad de México. Dicho órgano contará con la jurisdicción territorial y competencia señalada en el artículo 2 de este acuerdo para los órganos jurisdiccionales de esta nueva semiespecialidad.

Artículo 5. Los Juzgados de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializados en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, tendrán los domicilios siguientes:

JUZGADO	DOMICILIO
Primero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México	Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Eduardo Molina número 2, colonia Del Parque, alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960, Ciudad de México
Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México	Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Eduardo Molina número 2, colonia Del Parque, alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960, Ciudad de México
Tercero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México	Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Eduardo Molina número 2, colonia Del Parque, alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960, Ciudad de México
Cuarto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México	Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Eduardo Molina número 2, colonia Del Parque, alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960, Ciudad de México

Quinto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México	Avenida Insurgentes Sur No. 1888, Colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01030, Ciudad de México
Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México	Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Eduardo Molina número 2, colonia Del Parque, alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960, Ciudad de México

Toda la correspondencia y trámites relacionados con los asuntos de su competencia, deberán dirigirse y realizarse en los domicilios indicados.

Artículo 6. A partir del 16 de diciembre de 2020, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México prestará servicio a los Juzgados de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializados en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, distribuyendo de forma equitativa entre todos los órganos jurisdiccionales los nuevos asuntos de su competencia que se presenten.

Artículo 7. Dentro de los diez días hábiles anteriores a la fecha señalada en el artículo 1 se procederá como sigue:

I. Los Juzgados Cuarto, Quinto, Séptimo y Octavo de Distrito en Materia Mercantil, Especializados en Juicios de Cuantía Menor, con sede en la Ciudad de México, enviarán a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, una lista en la que se anotarán por orden de antigüedad y de forma consecutiva todos los expedientes en trámite que posean, a fin de que ésta las integre y proceda a registrar, distribuir y turnar los asuntos de forma equitativa entre los 6 Juzgados de Distrito de la nueva semiespecialidad. En la distribución de asuntos que realice la

Oficina de Correspondencia Común se procurará conservar el turno previamente asignado de los expedientes de los órganos jurisdiccionales mercantiles que se transforman, según corresponda, conforme a su nueva denominación, y hasta el volumen que resulte procedente de conformidad con el reparto equitativo de las cargas de trabajo entre todos los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, a fin de reducir en lo posible el eventual traslado a otros órganos jurisdiccionales de los expedientes ya radicados ante aquéllos, bajo su anterior denominación;

II. La Oficina de Correspondencia Común, una vez que haya concluido el registro y el turno de los asuntos mercantiles en su sistema de cómputo, informará sobre el Juzgado de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles, al que corresponda conocer de cada asunto, a fin de que el órgano jurisdiccional de que se trate, en la fecha señalada en el artículo 1, pueda remitir los expedientes al Juzgado de Distrito que corresponda, junto con sus anexos, billetes de depósito, pólizas de fianza, objetos y demás que sea menester entregar. El Juzgado de Distrito que reciba el asunto o, en su caso, lo conserve por efecto del reparto, continuará con el trámite que corresponda hasta su conclusión y archivo definitivo;

III. Los asuntos en los que se deba pronunciar alguna resolución urgente al momento del envío, se remitirán al órgano que corresponda hasta que la misma se emita;

IV. El Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Extinción de Dominio con jurisdicción en la República Mexicana, con sede en la Ciudad de México, enviará una lista a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México en la que se anotarán, por orden de antigüedad y de forma consecutiva, todos los juicios de amparo en trámite que posea, a fin de que ésta los distribuya y turne de forma equitativa entre los 6 Juzgados de Distrito de la nueva semiespecialidad;

V. Se cuidará que los expedientes de amparo que se encuentren relacionados se turnen al mismo Juzgado de Distrito, de conformidad con lo previsto en los artículos 45, fracción II y 46 del Acuerdo General del Pleno del Con-

sejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales;

VI. La Oficina de Correspondencia Común, una vez que haya concluido el registro y turno de los asuntos, informará sobre el órgano jurisdiccional al cual fueron asignados los mismos, a fin de que, en la fecha señalada en el artículo 1 del presente acuerdo, puedan remitirse los expedientes de amparo al Juzgado de Distrito que corresponda, junto con sus cuadernos incidentales, anexos, billetes de depósito, pólizas de fianza, objetos y demás que sea menester entregar. El Juzgado de Distrito que reciba los asuntos o en su caso los conserve por efecto del reparto, continuará con el trámite que corresponda hasta su conclusión y archivo definitivo;

VII. Los asuntos en los que se deba pronunciar alguna resolución urgente al momento del envío, se remitirán al órgano que corresponda hasta que la misma se emita;

VIII. El ahora denominado Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, conservará todos los procesos federales de extinción de dominio de su índice, continuando con su trámite hasta su conclusión y archivo definitivo. El juzgado referido informará a la Oficina de Correspondencia Común sobre el número de procesos de extinción de dominio en trámite que posea, a fin de que su volumen se tome en consideración para efecto de equilibrar las cargas de trabajo en este tipo de asuntos, entre todos los órganos jurisdiccionales; y

IX. Se exceptúan del reparto los siguientes asuntos:

a) Los que tengan audiencia constitucional celebrada;

b) Los amparos cuyo incidente de suspensión no se haya resuelto en definitiva;

c) Los juicios en los que se hubiera celebrado la audiencia preliminar o la audiencia de juicio;



d) Los asuntos que se encuentren sub júdice por la interposición de algún recurso, impedimento o estén en vías de cumplimentación; y

e) Los que se deban conservar por determinación judicial o en razón de la ley o la jurisprudencia aplicable.

Artículo 8. La persona titular de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializados en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, con asistencia de un secretario, elaborarán por triplicado actas de entrega-recepción de los asuntos materia del reparto, identificando los expedientes junto con sus anexos, valores, billetes de depósito, pólizas de fianza, objetos y demás que sea menester entregar.

Un ejemplar de cada acta lo conservarán para su archivo y consulta, otro lo remitirán junto con los expedientes, anexos y valores al Juzgado de Distrito que corresponda, de conformidad con el turno asignado por la Oficina de Correspondencia Común, los que continuarán con el trámite de los asuntos que reciban hasta su conclusión y archivo definitivo; y el tercero, lo enviarán a la Dirección General de Estadística Judicial para su conocimiento y efectos estadísticos.

Artículo 9. Los Juzgados de Distrito Primero, Segundo, Tercero y Cuarto en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializados en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, seguirán actuando en los libros de control que poseían bajo su anterior denominación, asentando en ellos la certificación relativa a su cambio de nomenclatura y competencia. Asimismo, darán de baja los expedientes mercantiles y sus valores que fuesen remitidos a otros órganos jurisdiccionales y continuarán con el orden progresivo en que lo venían realizando para registrar aquellos asuntos y valores que reciban con motivo del reparto, así como los nuevos expedientes que les sean turnados en adelante. De forma adicional a los datos de identificación se deberá señalar, en su caso, en la columna de observaciones el número original del expediente recibido y denominación del Juzgado de Distrito remitente.

Para el caso de los juicios de amparo, los titulares de los Juzgados de Distrito referidos en el párrafo precedente deberán, con asistencia de un secre-

tario, proceder a la apertura del nuevo libro de control correspondiente. En éste se registrarán de forma consecutiva los asuntos de amparo recibidos con motivo del reparto, así como los nuevos que les sean turnados en adelante. De forma adicional a los datos de identificación, en su caso, se deberá señalar en la columna de observaciones el número original del expediente de amparo recibido y la denominación del Juzgado de Distrito remitente.

El Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, seguirá actuando en los libros de control que poseía bajo su anterior nombre, asentando en ellos la certificación relativa a su cambio de nomenclatura y competencia con asistencia de un secretario. En ellos registrará, según corresponda, la baja de los expedientes de amparo y de los billetes de depósito, pólizas de fianza y demás valores que fuesen remitidos a otros órganos jurisdiccionales; anotará los asuntos mercantiles, billetes de depósito, pólizas de fianza y demás que reciba con motivo del reparto, registrará los nuevos asuntos que le sean turnados en adelante, conforme a su semiespecialidad y continuará anotando las incidencias que correspondan, relacionadas con los procesos de extinción de dominio que conservará. De forma adicional a los datos de identificación, en su caso, se deberá señalar en la columna de observaciones el número original del expediente recibido y denominación del Juzgado de Distrito remitente.

Artículo 10. La persona titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, con asistencia de un secretario, deberá autorizar el uso de libros de control nuevos de acuerdo a su competencia y de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En ellos registrará los expedientes y valores que reciba derivado del reparto de asuntos dispuestos en el presente acuerdo, cuyo trámite continuará hasta su resolución y archivo definitivo, así como los nuevos que le sean turnados en adelante conforme a su competencia.



De forma adicional a los datos de identificación, en su caso, se deberá señalar en la columna de observaciones del libro de control que corresponda el número original del expediente recibido y denominación del Juzgado de Distrito remitente.

Asimismo, levantará por duplicado un acta administrativa del inicio de funciones, en el formato proporcionado por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, remitiendo un ejemplar a ésta para su archivo.

Artículo 11. Para el turno de asuntos urgentes en días y horas inhábiles, los Juzgados de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializados en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, atenderán al calendario siguiente:

ORDEN DEL ROL DE GUARDIAS DE TURNO PARA RECIBIR ASUNTOS EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADOS EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO

TURNO Y PERIODO DE GUARDIA	ÓRGANO JURISDICCIONAL AL QUE CORRESPONDE LA GUARDIA
Del 16 al 21 de diciembre de 2020	JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADO EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Del 21 al 28 de diciembre de 2020	JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADO EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Del 28 de diciembre de 2020 al 4 de enero de 2021	JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADO EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Del 4 al 11 de enero de 2021	JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADO EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Del 11 al 18 de enero de 2021	JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADO EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Del 18 al 25 de enero de 2021	JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADO EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Y así, sucesivamente de forma semanal conforme al orden establecido.

Los turnos de guardia semanal inician a las ocho horas con treinta minutos del día lunes y concluirán a las ocho horas con veintinueve minutos del lunes siguiente.

Artículo 12. Los órganos jurisdiccionales que se transforman y el de nueva creación deberán remitir, dentro de los primeros cinco días naturales de cada mes, su reporte estadístico a la Dirección General de Estadística Judicial.

Artículo 13. El Pleno y las Comisiones de Creación de Nuevos Órganos; de Carrera Judicial; de Administración; y de Adscripción del Consejo de la

Judicatura Federal, estarán facultados para interpretar y resolver las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente acuerdo, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 14. Se reforma el párrafo primero del artículo primero y se deroga el inciso c) de la fracción II del Acuerdo General 20/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro Auxiliar de la Primera Región, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán, para quedar como sigue:

"**PRIMERO. CONFORMACIÓN, COMPETENCIA Y DENOMINACIÓN.** El Centro Auxiliar de la Primera Región está conformado por dos Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, con residencia en la Ciudad de México, y dos Juzgados de Distrito Auxiliares con sede en la Ciudad de México.

...

I. ...

II. ...

a) a **b)** ...

c) Derogado.

d) ..."

Artículo 15. Se reforman los numerales SEGUNDO, fracción I, número 4; QUINTO, número 1; y se adiciona un último párrafo a la fracción I del numeral CUARTO, al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, para quedar como sigue:

"**SEGUNDO.** ...

I. ...

1. a **3.** ...

4. Seis Juzgados de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializados en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México.

5. a **6.** ...

II. a **XXXII.** ...

CUARTO. ...

I. ...

...

...

Los Juzgados de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializados en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, ejercerán jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana para conocer de las acciones de extinción de dominio y de los procedimientos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, así como de los juicios de amparo indirecto relacionados con esta materia y dentro del Distrito Judicial conformado por el territorio de la Ciudad de México para conocer de los procedimientos orales mercantiles.

II. a **XXXIII.** ...

QUINTO. ...

1. El Centro Auxiliar de la Primera Región se integrará por dos Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, con residencia en la Ciudad de México, y dos Juzgados de Distrito Auxiliares con sede en la Ciudad de México;

2. a **11.** ...

..."

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet.

TERCERO. La Dirección General de Gestión Judicial, en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información, realizará todos los ajustes requeridos en el sistema de cómputo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, para el reparto, distribución y turno de los asuntos competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializados en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, conforme a lo ordenado en el presente acuerdo general.

CUARTO. Se autoriza por necesidades del servicio el uso temporal de la sala de audiencias instalada en el Edificio Prisma, ubicado en Avenida Insurgentes Sur 2065, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01000, en la Ciudad de México, por parte del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, o de cualquier otro espacio en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación.

Los titulares de los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas en la Ciudad de México y del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, deberán coordinarse entre sí para el uso eficiente de la sala, cualquier incidencia al respecto será resuelta por las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Tecnologías de la Información.

QUINTO. La primera guardia para la recepción de asuntos urgentes en días y horas inhábiles, establecida de conformidad con el calendario señalado en el artículo 11 del presente ordenamiento, por única ocasión, comenzará a las 0:00 del 16 de diciembre de 2020 para el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México.

SEXTO. La Dirección General de Servicios Generales prestará auxilio a los órganos jurisdiccionales en el traslado de los expedientes ordenado en el presente acuerdo. Además, en coordinación con la Dirección General de Gestión Judicial, diseñará e implementará la logística necesaria para el envío cotidiano de expedientes entre la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, el que de forma temporal se ubicará en un domicilio diferente al de sus similares dentro de la Ciudad de México.

SÉPTIMO. Quedan sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad, en lo que se opongan a este acuerdo.

EL LICENCIADO ARTURO GUERRERO ZAZUETA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 28/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transformación de los Juzgados Cuarto, Quinto, Séptimo y Octavo de Distrito en Materia Mercantil Especializados en Juicios de Cuantía Menor con sede en la Ciudad de México, y del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado en Extinción de Dominio con Jurisdicción en la República Mexicana, en Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con competencia en la República Mexicana y Especializados en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, respectivamente; a la crea-

ción del Juzgado Sexto de Distrito con la misma semiespecialidad y residencia; la oficina de correspondencia común que les prestará servicio, así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos; y que reforma los similares 20/2009, que crea el Centro Auxiliar de la Primera Región, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán; y 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 18 de noviembre de 2020, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: Presidente Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Bernardo Bátiz Vázquez, Jorge Antonio Cruz Ramos, Eva Verónica de Gyvés Zárate, Alejandro Sergio González Bernabé, Sergio Javier Molina Martínez y Loretta Ortiz Ahlf.—Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2020 (D.O.F. DE 15 DE DICIEMBRE DE 2020).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 20/2019, que crea el Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán; 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; el que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, y que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales citados en este acuerdo, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIX, junio de 2009, página 1145; Décima Época, Libros XVII, Tomo 2, febrero de 2013, página 1559; V, Tomo 3, febrero de 2012, página 2433 y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 2127, con números de registro digital: 1799, 2325, 2194 y 2591, respectivamente.

Este acuerdo se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ACUERDO GENERAL 29/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DEL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE

TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, ASÍ COMO SU COMPETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL, DOMICILIO, REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN EL CIRCUITO INDICADO; Y QUE REFORMA EL SIMILAR 3/2013, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA; Y AL NÚMERO, A LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracciones IV, V y XXIV; y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en cada uno de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; así como dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos. Esta atribución la ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos del artículo 42, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Con-

sejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo;

TERCERO. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes;

CUARTO. En sesión celebrada el 26 de agosto de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el dictamen relativo a la creación de un Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito;

QUINTO. El incremento en el número de ingresos y la complejidad en el trámite de los mismos, ha ocasionado el aumento en las cargas de trabajo que registran los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con competencia en el Estado de Jalisco.

En este contexto, resulta oportuno el inicio de funciones del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito; y

SEXTO. En la actualidad se cuenta con la infraestructura física necesaria para la instalación e inicio de funciones del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

Artículo 1. El órgano jurisdiccional que se crea se denomina Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y tendrá idéntica competencia y jurisdicción territorial que los Tribunales Colegiados actualmente en funciones en la misma especialidad y sede.

Artículo 2. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito inicia funciones el 1 de diciembre de 2020.

Artículo 3. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito tiene su domicilio en Ciudad Judicial Federal, Anillo Periférico Poniente Manuel Gómez Morín No. 7727, Fraccionamiento Ciudad Judicial Federal, código postal 45010, Zapopan, Jalisco.

Todos los trámites relacionados con los asuntos de su competencia, deberán dirigirse y realizarse en el domicilio indicado.

Artículo 4. La Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, prestará servicio al Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo que inicia funciones.

Los nuevos asuntos que se presenten en la referida Oficina de Correspondencia Común, a partir del 1 de diciembre de 2020 se distribuirán a través del sistema computarizado de recepción y distribución que se utiliza para esos efectos.

Artículo 5. A fin de equilibrar la distribución de las cargas de trabajo entre los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, con apoyo de la Dirección General de Gestión Judicial podrá establecer el turno diferenciado de asuntos por parte de la oficina de correspondencia común que les presta servicio a dichos órganos jurisdiccionales. La Secretaría Ejecutiva informará a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos sobre los resultados de las medidas implementadas en este sentido.

Artículo 6. La persona Presidente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con asistencia de un secretario, deberá autorizar el uso de libros de control nuevos, en los que se asentará la certificación correspondiente, en los cuales registrará los asuntos que reciba con motivo de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.

Asimismo, levantará por duplicado un acta administrativa del inicio de funciones, en el formato proporcionado por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, remitiendo un ejemplar a ésta para su archivo.

Artículo 7. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito remitirá, dentro de los primeros cinco días naturales de cada mes, un reporte estadístico a la Dirección General de Estadística Judicial.

Artículo 8. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, formará parte del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, para lo cual informará lo conducente a las Secretarías Ejecutivas de Carrera Judicial; de Creación de Nuevos Órganos; así como de adscripción.

Artículo 9. El Pleno y las Comisiones de Creación de Nuevos Órganos; de Carrera Judicial; de Adscripción; y de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, estarán facultados para interpretar y resolver las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente Acuerdo en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 10. Se reforma el numeral SEGUNDO, fracción III, número 1, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, para quedar como sigue:

"**SEGUNDO.** ...

I. a **II.** ...

III. ...

1. Veintitrés tribunales colegiados especializados: tres en materia penal, siete en materia administrativa, cinco en materia civil, y seis en materia de trabajo, todos con residencia en Zapopan; uno en materia penal y uno en materia civil, ambos con sede en Guadalajara, en Jalisco.

2. a **4.** ...

IV. a **XXXII.** ..."

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet.

TERCERO. La Secretaría Ejecutiva de Administración por conducto de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotará al Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito de la infraestructura y equipamiento necesarios para el desempeño de sus labores.

CUARTO. Las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información y de Gestión Judicial realizarán las modificaciones necesarias a la configuración del sistema computarizado de recepción y distribución de asuntos que se presenten en la Oficina de Correspondencia Común que dará servicio al Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito que inicia funciones.

QUINTO. La Dirección General de Tecnologías de la Información deberá asegurar la dotación de los equipos de cómputo para el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito que inicia funciones.

EL LICENCIADO ARTURO GUERRERO ZAZUETA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 29/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, así como su com-

petencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados en el circuito indicado; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 18 de noviembre de 2020, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: Presidente Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Bernardo Bátiz Vázquez, Jorge Antonio Cruz Ramos, Eva Verónica de Gyvés Zárate, Alejandro Sergio González Bernabé, Sergio Javier Molina Martínez y Loretta Ortiz Ahlf.—Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 (D.O.F. DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2020).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito y 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito citados en este acuerdo, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, página 2433; en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libros 14, Tomo III, enero de 2015, página 2127 y 15, Tomo III, febrero de 2015, página 2982 y en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013, página 1559, con números de registro digital: 2194, 2591, 2615 y 2325, respectivamente.

Este acuerdo se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ACUERDO GENERAL 30/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO, CON RESIDENCIA EN VILLAHERMOSA, ASÍ

COMO SU COMPETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL, DOMICILIO, REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO Y RESIDENCIA INDICADOS; Y QUE REFORMA EL SIMILAR 3/2013, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA; Y AL NÚMERO, A LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus atribuciones;

SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracciones IV, V, VI y XXIV; y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en cada uno de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; así como dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos. Esta última atribución se ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos del artículo 42, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo;

TERCERO. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes;

CUARTO. En sesión celebrada el 26 de agosto de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el dictamen de creación de un Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa;

QUINTO. El incremento en el número de ingresos y la complejidad en el trámite de los mismos, ha originado el aumento en las cargas de trabajo que registran los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa.

En este contexto, resulta oportuno el inicio de funciones del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa; y

SEXTO. En la actualidad se cuenta con la infraestructura física necesaria para la instalación e inicio de funciones del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

Artículo 1. El órgano jurisdiccional que se crea se denomina Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, y tendrá igual competencia y jurisdicción territorial que los Juzgados de Distrito en la misma entidad y residencia.

Artículo 2. El Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, inicia funciones el 1 de diciembre de 2020.

Artículo 3. EL Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, tiene su domicilio en calle Reforma número 100, esquina avenida Gregorio Méndez Magaña, colonia Atasta de Serra, código postal 86100, Villahermosa, Tabasco.

Todos los trámites relacionados con los asuntos de su competencia, deberán dirigirse y realizarse en el domicilio indicado.

Artículo 4. La Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, prestará servicio al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, que inicia funciones.

Los nuevos asuntos que se presenten en la referida Oficina de Correspondencia Común a partir del 1 de diciembre de 2020 se distribuirán a través del sistema computarizado de recepción y distribución que se utiliza para esos efectos.

Artículo 5. A fin de equilibrar la distribución de las cargas de trabajo entre los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos con apoyo de la Dirección General de Gestión Judicial, podrá establecer el turno diferenciado de asuntos por parte de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio a dichos órganos jurisdiccionales. La Secretaría Ejecutiva informará a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos sobre los resultados de las medidas implementadas en este sentido.

Artículo 6. Para el turno de asuntos en días y horas hábiles, los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, atenderán los asuntos conforme al calendario siguiente:

TURNO Y PERIODO DE GUARDIA	ÓRGANO JURISDICCIONAL AL QUE CORRESPONDE LA GUARDIA
Del 1 al 7 de diciembre de 2020	Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa
Del 7 al 14 de diciembre de 2020	Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa
Del 14 al 21 de diciembre de 2020	Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa

Del 21 al 28 de diciembre de 2020	Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa
Del 28 de diciembre de 2020 al 4 de enero de 2021	Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa
Del 4 al 11 de enero de 2021	Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa
Del 11 al 18 de enero de 2021	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa
Del 18 al 25 de enero de 2021	Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa

Y así sucesivamente, en ese orden.

Los turnos de guardia inician el día lunes a las ocho horas con treinta minutos y finalizan el siguiente lunes a las ocho horas con veintinueve minutos.

Para la recepción de asuntos urgentes que se reciban en días y horas inhábiles, se estará a lo indicado en el calendario de turno y periodo de guardia señalado en este artículo.

Artículo 7. La persona titular del órgano jurisdiccional que inicia funciones, con asistencia de un secretario, deberá autorizar el uso de libros de control nuevos, en los que se asentará la certificación correspondiente, en los cuales registrará los asuntos que reciba con motivo de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.

Asimismo, levantará por duplicado un acta administrativa del inicio de funciones, en el formato proporcionado por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, remitiendo un ejemplar a ésta para su archivo.

Artículo 8. El Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, que inicia funciones, remitirá dentro de los primeros

cinco días naturales de cada mes, un reporte estadístico a la Dirección General de Estadística Judicial.

Artículo 9. El Pleno y las Comisiones de Creación de Nuevos Órganos; de Carrera Judicial; de Administración; y de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, estarán facultados para interpretar y resolver las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente Acuerdo en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 10. Se reforma el numeral SEGUNDO, fracción X, número 3, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, para quedar como sigue:

"SEGUNDO. ...

I. a **IX.** ...

X. ...

1. a **2.** ...

3. Nueve Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, uno de ellos en Materia Mercantil Federal.

4. ...

XI. a **XXXII.** ..."

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet.

TERCERO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por conducto de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotará al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, que inicia funciones, de la infraestructura y equipamiento necesarios para el desempeño de sus labores.

CUARTO. Las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información y de Gestión Judicial realizarán las modificaciones necesarias a la configuración del sistema computarizado de recepción y distribución de los asuntos que se presenten en la Oficina de Correspondencia Común que dará servicio al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, que inicia funciones.

QUINTO. La Dirección General de Tecnologías de la Información deberá asegurar la dotación de los equipos de cómputo para el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, que inicia funciones.

SEXTO. El personal de la Administración Regional en Tabasco apoyará para el traslado de los asuntos que por turno corresponda conocer al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa.

EL LICENCIADO ARTURO GUERRERO ZAZUETA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 30/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en el Estado y residencia indicados; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la de-

terminación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 18 de noviembre de 2020, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: Presidente Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Bernardo Bátiz Vázquez, Jorge Antonio Cruz Ramos, Eva Verónica de Gyvés Zárate, Alejandro Sergio González Bernabé, Sergio Javier Molina Martínez y Loretta Ortiz Ahlf.—Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 (D.O.F. DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2020).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito citados en este acuerdo, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647; en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 2127 y en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013, página 1559, con números de registro digital: 2409, 2591 y 2325, respectivamente.

Este acuerdo se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ACUERDO GENERAL 31/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DEL MISMO NOMBRE, ASÍ COMO SU COMPETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL, DOMICILIO, REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

DE ASUNTOS ENTRE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO Y RESIDENCIA INDICADOS; Y QUE REFORMA EL SIMILAR 3/2013, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA; Y AL NÚMERO, A LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus atribuciones;

SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracciones IV, VI y XXIV; y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en cada uno de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; así como dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos. Esta última atribución se ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos del artículo 42, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo;

TERCERO. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que

se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes;

CUARTO. En sesión celebrada el 22 de julio de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el dictamen de creación de un Juzgado de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre;

QUINTO. El incremento en el número de ingresos y la complejidad en el trámite de los mismos, ha originado el aumento en las cargas de trabajo que registran los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre.

En este contexto, resulta oportuno el inicio de funciones del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre; y

SEXTO. En la actualidad se cuenta con la infraestructura física necesaria para la instalación e inicio de funciones del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

Artículo 1. El órgano jurisdiccional que se crea se denomina Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre y tendrá igual competencia y jurisdicción territorial que los Juzgados de Distrito en la misma entidad y residencia.

Artículo 2. El Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, inicia funciones el 1 de diciembre de 2020.

Artículo 3. El Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, tiene su domicilio en Avenida Aguascalientes Sur número 603, fraccionamiento Jardines de Aguascalientes, código postal 20270, Aguascalientes, Aguascalientes.

Todos los trámites relacionados con los asuntos de su competencia, deberán dirigirse y realizarse en el domicilio indicado.

Artículo 4. La Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, prestará servicio al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, que inicia funciones.

Los nuevos asuntos que se presenten en la referida Oficina de Correspondencia Común a partir del 1 de diciembre de 2020 se distribuirán a través del sistema computarizado de recepción y distribución que se utiliza para esos efectos.

Artículo 5. A fin de equilibrar la distribución de las cargas de trabajo entre los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos con apoyo de la Dirección General de Gestión Judicial, podrá establecer el turno diferenciado de asuntos por parte de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio a dichos órganos jurisdiccionales. La Secretaría Ejecutiva informará a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos sobre los resultados de las medidas implementadas en este sentido.

Artículo 6. Para el turno de asuntos en días y horas hábiles, los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, atenderán los asuntos conforme al calendario siguiente:

TURNO Y PERIODO DE GUARDIA	ÓRGANO JURISDICCIONAL AL QUE LE CORRESPONDE LA GUARDIA
Del 1 al 7 de diciembre de 2020	Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre
Del 7 al 14 de diciembre de 2020	Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre

Del 14 al 21 de diciembre de 2020	Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre
Del 21 al 28 de diciembre de 2020	Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre
Del 28 de diciembre de 2020 al 4 de enero de 2021	Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre
Del 4 al 11 de enero de 2021	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre
Del 11 al 18 de enero de 2021	Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre

Y así sucesivamente, en ese orden.

Los turnos de guardia inician el día lunes a las ocho horas con treinta minutos y finalizan el siguiente lunes a las ocho horas con veintinueve minutos.

Para la recepción de asuntos urgentes que se reciban en días y horas inhábiles, se estará a lo indicado en el calendario de turno y periodo de guardia señalado en este artículo.

Artículo 7. La persona titular del órgano jurisdiccional que inicia funciones, con asistencia de un secretario, deberá autorizar el uso de libros de control nuevos, en los que se asentará la certificación correspondiente, en los cuales registrará los asuntos que reciba con motivo de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.

Asimismo, levantará por duplicado un acta administrativa del inicio de funciones, en el formato proporcionado por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, remitiendo un ejemplar a ésta para su archivo.

Artículo 8. El órgano jurisdiccional que inicia funciones remitirá, dentro de los primeros cinco días naturales de cada mes, un reporte estadístico a la Dirección General de Estadística Judicial.

Artículo 9. El Pleno y las Comisiones de Creación de Nuevos Órganos; de Carrera Judicial; de Administración; y de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, estarán facultados para interpretar y resolver las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente Acuerdo en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 10. Se reforma el numeral SEGUNDO, fracción XXX, número 3, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, para quedar como sigue:

"**SEGUNDO.** ...

I. a **XXIX.** ...

XXX. ...

1. a 2. ...

3. Siete Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre.

XXXI. a **XXXII.** ..."

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet.

TERCERO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por conducto de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotará al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, que inicia funciones, de la infraestructura y equipamiento necesarios para el desempeño de sus labores.

CUARTO. Las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información y de Gestión Judicial realizarán las modificaciones necesarias a la configuración del sistema computarizado de recepción y distribución de los asuntos que se presenten en la Oficina de Correspondencia Común que dará servicio al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, que inicia funciones.

QUINTO. La Dirección General de Tecnologías de la Información deberá asegurar la dotación de los equipos de cómputo para el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, que inicia funciones.

SEXTO. El personal de la Administración Regional en Aguascalientes apoyará para el traslado de los asuntos que por turno corresponda conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre.

EL LICENCIADO ARTURO GUERRERO ZAZUETA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 31/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en el Estado y residencia indicados; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Ju-

diciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 18 de noviembre de 2020, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: Presidente Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Bernardo Bátiz Vázquez, Jorge Antonio Cruz Ramos, Eva Verónica de Gyvés Zárate, Alejandro Sergio González Bernabé, Sergio Javier Molina Martínez y Loretta Ortiz Ahlf.—Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 (D.O.F. DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2020).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales citados en este acuerdo, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libros XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647 y XVII, Tomo 2, febrero de 2013, página 1559 y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 2127, con números de registro digital: 2409, 2325 y 2591, respectivamente.

Este acuerdo se publicó el viernes 4 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ACUERDO GENERAL 32/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS, CON RESIDENCIA EN TAPACHULA, ASÍ COMO SU COMPETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL, DOMICILIO, REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO Y RESIDENCIA INDICADOS; Y QUE REFORMA EL SIMILAR 3/2013, RELATIVO A

LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA; Y AL NÚMERO, A LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracciones IV, VI y XXIV; y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia de los Juzgados de Distrito, en cada uno de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; así como dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los Juzgados de Distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos. Esta última atribución se ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos del artículo 42, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo;

TERCERO. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes;

CUARTO. En sesión celebrada el 22 de julio de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el dictamen relativo a la creación de un Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula;

QUINTO. El incremento en el número de ingresos y la complejidad en el trámite de los mismos, ha ocasionado el aumento en las cargas de trabajo que registran los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, lo que hace necesario establecer un nuevo órgano jurisdiccional en la entidad federativa y residencia indicada.

En ese contexto, resulta oportuno el inicio de funciones del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; y

SEXTO. En la actualidad se cuenta con la infraestructura física necesaria para la instalación e inicio de funciones del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

Artículo 1. El órgano jurisdiccional que se crea se denomina Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, y tendrá igual competencia y jurisdicción territorial que los Juzgados de Distrito en la misma entidad y residencia.

Artículo 2. El Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, inicia funciones el 16 de diciembre de 2020.

Artículo 3. El Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, tiene su domicilio en el predio denominado "Huerto Santa Isabel", ubicado en la carretera Cantón Murillo sin número, a 300 metros del Periférico Sur Poniente, código postal 30785, Tapachula, Chiapas.

Todos los trámites relacionados con los asuntos de su competencia, deberán dirigirse y realizarse en el domicilio indicado.

Artículo 4. La Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, prestará servicio al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula.

Los nuevos asuntos que se presenten en la referida Oficina de Correspondencia Común, a partir del 16 de diciembre de 2020 se distribuirán a través del sistema computarizado que se utiliza para esos efectos.

Artículo 5. A fin de equilibrar la distribución de las cargas de trabajo entre los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos con apoyo de la Dirección General de Gestión Judicial, podrá establecer el turno diferenciado de asuntos por parte de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio a dichos órganos jurisdiccionales. La Secretaría Ejecutiva informará a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos sobre los resultados de las medidas implementadas en este sentido.

Artículo 6. Para el turno de guardia de asuntos en días y horas inhábiles, los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, atenderán los asuntos conforme al calendario siguiente:

PERIODO DE GUARDIA	ÓRGANO JURISDICCIONAL AL QUE CORRESPONDE LA GUARDIA
DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2020	JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS, CON RESIDENCIA EN TAPACHULA
DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2020	JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS, CON RESIDENCIA EN TAPACHULA
DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 4 DE ENERO DE 2021	JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS, CON RESIDENCIA EN TAPACHULA
DEL 4 AL 11 DE ENERO DE 2021	JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS, CON RESIDENCIA EN TAPACHULA

Y así sucesivamente en ese orden.

Los turnos de guardia inician el día lunes a las ocho horas con treinta minutos y finalizan el siguiente lunes a las ocho horas con veintinueve minutos.

Para la recepción de asuntos urgentes que se reciban en días y horas inhábiles, se estará a lo indicado en el calendario de turno y periodo de guardia señalado en este artículo.

Artículo 7. La persona titular del órgano jurisdiccional que inicia funciones, con asistencia de un secretario, deberá autorizar el uso de libros de control nuevos, en los que se asentará la certificación correspondiente, en los cuales registrará los asuntos que reciba con motivo de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.

Asimismo, levantará por duplicado un acta administrativa del inicio de funciones, en el formato proporcionado por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, remitiendo un ejemplar a ésta para su archivo.

Artículo 8. El Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, remitirá, dentro de los primeros cinco días naturales de cada mes, un reporte estadístico a la Dirección General de Estadística Judicial.

Artículo 9. El Pleno y las Comisiones de Creación de Nuevos Órganos; de Carrera Judicial; de Adscripción; y de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, estarán facultados para interpretar y resolver las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente Acuerdo en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 10. Se reforma el numeral SEGUNDO, fracción XX, número 3, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial

y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, para quedar como sigue:

"**SEGUNDO.** ...

I. a **XIX.** ...

XX. ...

1. a **2.** ...

3. Catorce Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas: dos de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, con residencia en Cintalapa de Figueroa; siete Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez; uno en Materia Mercantil Federal, con residencia en Tuxtla Gutiérrez; y cuatro Juzgados de Distrito mixtos con sede en Tapachula.

XXI. a **XXXII.** ..."

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, así como en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en Intranet e Internet.

TERCERO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por conducto de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotará al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, de la infraestructura y equipamiento necesarios para el desempeño de sus funciones.

CUARTO. Las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información y de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, realizarán las modificaciones necesarias a la configuración del sistema computarizado de recepción y

distribución de asuntos que se presenten en la Oficina de Correspondencia Común que dará servicio al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula.

QUINTO. La Dirección General de Tecnologías de la Información deberá asegurar la dotación de los equipos de cómputo para el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula.

SEXTO. El personal de la Administración Regional en Tapachula apoyará para el traslado de los asuntos que por turno corresponda conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula.

EL LICENCIADO ARTURO GUERRERO ZAZUETA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 32/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en el Estado y residencia indicados; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 25 de noviembre de 2020, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: Presidente Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Bernardo Bátiz Vázquez, Jorge Antonio Cruz Ramos, Eva Verónica de Gyvés Zárate, Alejandro Sergio González Bernabé, Sergio Javier Molina Martínez y Loretta Ortiz Ahlf.—Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2020 (D.O.F. DE 15 DE DICIEMBRE DE 2020).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos

generales; 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales citados en este acuerdo, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libros XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647 y XVII, Tomo 2, febrero de 2013, página 1559 y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 2127, con números de registro digital: 2409, 2325 y 2591, respectivamente.

Este acuerdo se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ACUERDO GENERAL 33/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PENAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO SU COMPETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL, DOMICILIO, REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN EJECUCIÓN DE PENAS EN LA ENTIDAD FEDERATIVA INDICADA Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA; Y QUE REFORMA EL SIMILAR 3/2013, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA; Y AL NÚMERO, A LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus atribuciones;

SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 81, fracciones IV, VI y XXIV; y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia de los Juzgados de Distrito, en cada uno de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; así como dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los Juzgados de Distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos. Esta atribución la ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos del artículo 42, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo;

TERCERO. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes;

CUARTO. La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, por la que se modifican, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 73, fracciones XXI y XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyó un cambio estructural en el funcionamiento del sistema de justicia penal. En razón de ello, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el 8 de junio de 2011, aprobó el Acuerdo General 22/2011, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la competencia de la función de ejecución penal y crea los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas;

QUINTO. El 19 de septiembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 13/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, en la Ciudad de México; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito antes referidos;

SEXTO. En sesión de 2 de septiembre de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el dictamen relativo a la creación del Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas con jurisdicción en toda la República y residencia en la Ciudad de México. En el referido dictamen, se hizo notar, entre otras cuestiones, la circunstancia especial por la que atraviesa el mundo originada por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, así como la finalidad de evitar la sobrepoblación en los centros de reclusión y de continuar garantizando el adecuado desempeño de la función jurisdiccional federal en materia de ejecución de penas privativas de libertad, lo cual dio sustento y justificación a la propuesta de creación de un Juzgado de Distrito adicional en materia de ejecución de penas.

En este contexto, resulta oportuno el inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México; y

SÉPTIMO. En la actualidad se cuenta con la infraestructura física necesaria para la instalación e inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

Artículo 1. El órgano jurisdiccional que se crea se denomina Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México.

Artículo 2. El Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México inicia funciones el 16 de diciembre de 2020.

Artículo 3. El Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, tendrá igual competencia y jurisdicción territorial que la de los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, en la Ciudad de México.

Artículo 4. El Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México tiene su domicilio en avenida de los Insurgentes Sur 2065, colonia San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01000, en la Ciudad de México.

Todos los trámites relacionados con los asuntos de su competencia, deberán dirigirse y realizarse en el domicilio indicado.

Artículo 5. La Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, prestará servicio al Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México.

Los nuevos asuntos que se presenten en la referida Oficina de Correspondencia Común a partir del 16 de diciembre de 2020 se distribuirán a través del sistema computarizado de recepción y distribución que se utiliza para esos efectos.

Artículo 6. A fin de equilibrar la distribución de las cargas de trabajo entre los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos con apoyo de la Dirección General de Gestión Judicial, podrá establecer el turno diferenciado de asuntos por parte de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio a dichos órganos jurisdiccionales. La citada Secretaría Ejecutiva informará a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos sobre los resultados de las medidas implementadas en este sentido.

Artículo 7. Para el turno de asuntos en días y horas inhábiles, los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas en la Ciudad de México atenderán los asuntos conforme al calendario señalado:

TURNO Y PERIODO DE GUARDIA	ÓRGANO JURISDICCIONAL AL QUE CORRESPONDE LA GUARDIA
DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2020	JUZGADO CUARTO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PENAS
DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2020	JUZGADO QUINTO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PENAS
DEL 28 DE DICIEMBRE AL 4 DE ENERO DE 2021	JUZGADO SEXTO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PENAS
DEL 4 AL 11 DE ENERO DE 2021	JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PENAS
DEL 11 AL 18 DE ENERO DE 2021	JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PENAS
DEL 18 AL 25 DE ENERO DE 2021	JUZGADO TERCERO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PENAS

Y así sucesivamente, en ese orden.

Los turnos de guardia inician el día lunes a las ocho horas con treinta minutos y finalizan el siguiente lunes a las ocho horas con veintinueve minutos.

Para la recepción de asuntos urgentes que se reciban en día y hora inhábiles, se estará a lo indicado en el calendario de rol de turno y periodo de guardia señalado en este artículo.

Artículo 8. El titular del órgano jurisdiccional que inicia funciones, con asistencia de un secretario, deberá autorizar el uso de libros de control nuevos, en los que se asentará la certificación correspondiente, en los cuales registrará los asuntos que reciba con motivo de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.

Asimismo, levantará por duplicado un acta administrativa del inicio de funciones, en el formato proporcionado por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, remitiendo un ejemplar a ésta para su archivo.

Artículo 9. El órgano que inicia funciones remitirá, dentro de los primeros cinco días naturales de cada mes, un reporte estadístico a la Dirección General de Estadística Judicial.

Artículo 10. El Pleno y las Comisiones de Creación de Nuevos Órganos; de Carrera Judicial; de Administración; y de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, estarán facultados para interpretar y resolver las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente Acuerdo en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 11. Se reforma el artículo SEGUNDO, fracción I, numeral 6 del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, para quedar como sigue:

"**SEGUNDO.** ...

I. ...

1. a **5.** ...

6. Seis Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, todos con residencia en la Ciudad de México.

II. a **XXXII.** ..."

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en Intranet e Internet.

TERCERO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por conducto de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotará al nuevo órgano jurisdiccional que inicia funciones de la infraestructura y equipamiento necesario para el desempeño de sus labores.

CUARTO. Las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información y de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, realizarán las modificaciones necesarias a la configuración del sistema computarizado de recepción y distribución de asuntos que se presenten en la Oficina de Correspondencia Común que dará servicio al órgano jurisdiccional que inicia funciones.

QUINTO. La Dirección General de Tecnologías de la Información deberá asegurar la dotación de los equipos de cómputo para el Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México.

EL LICENCIADO ARTURO GUERRERO ZAZUETA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 33/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, en la Ciudad de México; así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas en la entidad federativa indicada y jurisdicción en toda la República; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 25 de noviembre de 2020, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: Presidente Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Bernardo Bátiz Vázquez, Jorge Antonio Cruz Ramos, Eva Verónica de Gyvés Zárate, Alejandro Sergio González Bernabé, Sergio Javier Molina Martínez y Loretta Ortiz Ahlf.—Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2020 (D.O.F. DE 15 DE DICIEMBRE DE 2020).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; 22/2011, que establece la competencia de la función de ejecución penal y crea los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas; 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; 13/2017, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, en la Ciudad de México; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito antes referidos; y el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales citados en este acuerdo, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libros V, Tomo 3, febrero de 2012, página 2433; Novena Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, página 1665 y XVII, Tomo 2, febrero de 2013, página 1559 y *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libros 46, Tomo III, septiembre de 2017, página 2050 y 14, Tomo III, enero de 2015, página 2127, con números de registro digital: 2194, 2109, 2325, 3047 y 2591, respectivamente.

Este acuerdo se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ACUERDO CCNO/6/2020, DE LA COMISIÓN DE CREACIÓN DE NUEVOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL CAMBIO DE DOMICILIO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PRIMERO Y CUARTO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de

la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

SEGUNDO. El artículo 17, párrafo segundo, constitucional, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes;

TERCERO. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos tiene la facultad para acordar las acciones tendientes a la adecuada y pronta instalación y cambio de domicilio de los órganos jurisdiccionales, entendido este último como el cambio de ubicación del órgano jurisdiccional dentro de la misma ciudad o localidad en que se encuentra, para lo cual se dará aviso a la Comisión de Administración. Esto encuentra fundamento en el artículo 42, fracción VIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo;

CUARTO. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el 26 de agosto de 2020, aprobó el dictamen de creación de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Para la instalación de este órgano jurisdiccional, la Secretaría Ejecutiva de Administración propuso el espacio que ocupan los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región en el edificio de Florida, ubicado en Avenida Insurgentes Sur número 1888, colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón y reubicar a los Tribunales Colegiados en el edificio de Carretera Picacho Ajusco 200, colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México. De igual manera, deberá reubicarse a la oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región.

Por lo anterior, se expide el siguiente:

ACUERDO

Artículo 1. Se autoriza el cambio de domicilio de los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región, con

residencia en la Ciudad de México, así como de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio.

Artículo 2. El nuevo domicilio de los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, así como de la Oficina de Correspondencia Común, será en Carretera Picacho Ajusco número 200, colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, código postal 14210, en la Ciudad de México.

Artículo 3. Los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, y su Oficina de Correspondencia Común iniciarán funciones en su nuevo domicilio el 7 de diciembre de 2020.

Artículo 4. A partir del 7 de diciembre de 2020 toda la correspondencia, trámites y diligencias relacionados con los asuntos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, deberán dirigirse y realizarse en el domicilio precisado en el artículo 2 de este Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet.

TERCERO. Los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, así como la Oficina de Correspondencia Común que les da servicio, deberán colocar avisos en lugares visibles en relación con el cambio de domicilio.

LA JUEZA ILEANA MORENO RAMÍREZ, SECRETARIA EJECUTIVA DE CREACIÓN DE NUEVOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo CCNO/6/2020, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio de los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México y de la Oficina de Correspondencia Común, fue aprobado por la propia Comisión en sesión privada ordinaria celebrada el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, por los señores Consejeros: Presidente Bernardo Bátiz Vázquez, Jorge Antonio Cruz Ramos y Sergio Javier Molina Martínez.—Ciudad de México, veinticinco de noviembre de dos mil veinte (D.O.F. DE 7 DE DICIEMBRE DE 2020).

Nota: El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales citado en este acuerdo, aparece publicado en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647, con número de registro digital: 2409.

Este acuerdo se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Novena Parte
ÍNDICES

Índice General Alfabético de Tesis de Jurisprudencia y Aisladas

	Número de identificación	Pág.
ABOGADO PATRONO. EL DESIGNADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO [ALCANCE Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 90/2012 (10a.)].	PC.III.A. J/91 A (10a.)	504
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. AL EXCEDERSE EL PLAZO DE EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY RELATIVA, SE CONTRAVIENE LA FINALIDAD PARA LAS QUE FUERON ESTABLECIDAS.	I.9o.C.51 C (10a.)	1657
ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO. NO LO CONSTITUYE EL COBRO DEL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EFECTUADO A TRAVÉS DEL AVISO-RECIBO EXPEDIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE).	PC.XVIII.P.A. J/12 K (10a.)	580
ALIMENTOS DEL ACREEDOR MAYOR DE EDAD. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE VALORAR PARA DETERMINAR SI SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DEL DEUDOR DE PROPORCIONARLOS CUANDO LA SECUENCIA ENTRE LA TERMINACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y EL INICIO DE		

	Número de identificación	Pág.
LA SUPERIOR NO ES INMEDIATA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO).	XXII.2o.A.C.9 C (10a.)	1658
AMPARO CONTRA LEYES. HIPÓTESIS EN LA QUE SE ACREDITA, DE MANERA IMPLÍCITA, LA APLICACIÓN EN PERJUICIO DEL QUEJOSO DEL ARTÍCULO 67, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ABROGADA).	PC.XV. J/43 A (10a.)	619
AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO QUE REVOCA EL PROVEÍDO DICTADO POR UN JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DESECHA UNA DEMANDA POR CONSIDERAR CARECER DE COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA, PARA CONOCER DE UN JUICIO ORDINARIO CIVIL.	PC.I.C. J/106 C (10a.)	687
AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN.	1a./J. 52/2020 (10a.)	293
ASPIRANTE AL EJERCICIO DEL NOTARIADO Y NOTARIO TITULAR. LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE PUEBLA PARA OBTENER LAS PATENTES RELATIVAS, NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PARA SER CONSIDERADOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.	VI.1o.A.123 A (10a.)	1659
AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. LA VÍCTIMA U OFENDIDO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN EN SU CONTRA, PORQUE AFECTA INDIRECTAMENTE SU DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, EN		

	Número de identificación	Pág.
LOS CASOS EN QUE ÉSTA PROCEDA, Y PORQUE CON DICHA LEGITIMACIÓN SE ASEGURA SU DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.	1a./J. 54/2020 (10a.)	295
CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN ORDENADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. OPERA UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SIN QUE ÉSTA DICTE LA RESOLUCIÓN QUE DEFINA LA SITUACIÓN DEL PARTICULAR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.	PC.XVI.A. J/29 A (10a.)	722
CANCELACIÓN DE DERECHOS SOBRE UNA PARCELA. CUANDO SE EMITE CON MOTIVO DE LO ORDENADO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS Y NO EN FORMA AUTÓNOMA POR EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.	XVII.2o.P.A.59 A (10a.)	1661
CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR LA FALTA O RETRASO EN LA RETRIBUCIÓN DE LAS CANTIDADES SUSTRAÍDAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.	1a./J. 61/2020 (10a.)	298
CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO. LA LEY RELATIVA NÚMERO 676, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 3 DE ENERO DE 1984, CARECE DE VALIDEZ Y ES INCONSTITUCIONAL AL NO HABER REFRENDADO EL TITULAR DEL RAMO EL DECRETO CORRESPONDIENTE.	PC.XXI. J/17 A (10a.)	775
COMISIÓN DE MAGISTRADOS NOMBRADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS PARA EJERCER		

	Número de identificación	Pág.
LAS ATRIBUCIONES ANTES ENCOMENDADAS AL EXTINTO CONSEJO DE LA JUDICATURA. ES CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE COMPETENTE PARA TRAMITAR Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SOMETIDOS A SU POTESTAD, HASTA LA FECHA EN QUE QUEDÓ INTEGRADA Y ENTRÓ EN FUNCIONES LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DISCIPLINA DEL PROPIO TRIBUNAL SUPERIOR.	PC.XVIII.P.A. J/8 A (10a.)	857
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. AL TRATARSE DE UN ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO, LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA A UN SUJETO OBLIGADO EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, NO ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL.	IV.2o.A.149 A (10a.)	1662
COMPETENCIA. EL JUEZ DE DISTRITO AL QUE LE ES TURNADA UNA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE ACTUAR CONFORME A LA REGLA DE EXCEPCIÓN A LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 38 Y NO PLANTEAR IMPEDIMENTO CONFORME AL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN IV, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO.	PC.XVIII.P.A. J/11 K (10a.)	946
COMPROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ABROGADO, AL DESARROLLAR LOS REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER PARA IDENTIFICAR BIENES O MERCANCÍAS, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 29-A, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.	XVII.2o.P.A.62 A (10a.)	1663
COMPROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ABROGADO, AL ESTABLECER DETERMINADOS		

	Número de identificación	Pág.
REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER PARA IDENTIFICAR BIENES O MERCANCÍAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY.	XVII.2o.P.A.61 A (10a.)	1665
CONCUBINATO. EL ARTÍCULO 65 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MORELOS AL ESTABLECER COMO REQUISITO QUE AMBOS CONCUBINOS ESTÉN LIBRES DE MATRIMONIO PARA ACTUALIZARLO, RESULTA INCONSTITUCIONAL POR ESTABLECER UNA DISTINCIÓN BASADA EN CATEGORÍA SOSPECHOSA QUE NO SUPERA UN EXAMEN ESTRICTO DE CONSTITUCIONALIDAD.	1a. LV/2020 (10a.)	351
CONCURSO IDEAL DE DELITOS. LA POTESTAD DE AUMENTAR LA PENA CORRESPONDIENTE AL DELITO MAYOR CON LA DE LOS RESTANTES, ESTÁ CONDICIONADA A LA OBLIGACIÓN DE FUNDAR Y MOTIVAR ESA DECISIÓN (ARTÍCULO 64 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016).	1a./J. 53/2020 (10a.)	321
CONFESIÓN FICTA PARA HECHOS PROPIOS. ES SUFICIENTE LA DEL FUNCIONARIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) PARA DEMOSTRAR LA PROMESA DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE LA CLÁUSULA 56 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO A CAMBIO DE LA RENUNCIA ESCRITA DEL TRABAJADOR, SIN QUE ÉSTE TENGA LA CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE LAS FACULTADES DEL PROMITENTE.	I.3o.T.65 L (10a.)	1666
CONFLICTO COMPETENCIAL POR RAZÓN DE FUERO ENTRE JUECES DE EJECUCIÓN PENAL. ES INEXISTENTE SI LOS CONTENDIENTES ADUJERON CARECER DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DEL SENTENCIADO, SIN QUE EXISTA UNA PRETENSIÓN CONCRETA DE LAS PARTES SOMETIDA A SU JURISDICCIÓN.	I.9o.P.290 P (10a.)	1667

	Número de identificación	Pág.
CONSTANCIA DE NEGATIVA DE PENSIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES INNECESARIO EXHIBIRLA EN EL JUICIO PARA ACCEDER A LOS RECURSOS ACUMULADOS EN LOS RUBROS DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ Y CUOTA SOCIAL, CUANDO EL ACTOR SEA BENEFICIARIO SUSTITUTO O DESIGNADO POR MERA DEPENDENCIA ECONÓMICA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 501 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.	I.11o.T.52 L (10a.)	1668
CONTROL DEL TABACO. EL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN VI, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.	**REPUBLICADA POR CORRECCIÓN EN EL PRECEDENTE** 1a. XVI/2020 (10a.)	352
COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS COMPETENCIA DE LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS COORDINADORES DE ÁREA QUE PERTENEZCAN A ÉSTAS ESTÁN FACULTADOS PARA EXPEDIRLAS, AL ACTUAR EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE SU TITULAR.	(IV Región)1o.25 A (10a.)	1670
CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS IMPUESTOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. POR REGLA GENERAL, NO CONSTITUYEN UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA TRASCENDENTAL O UN ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL Y, POR TANTO, NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN AL TÉRMINO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA.	1a./J. 63/2020 (10a.)	324
COSTAS. EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL SEGUIR UN SISTEMA DE CRITERIOS OBJETIVOS PARA SU CONDENA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.	1a. LII/2020 (10a.)	354

	Número de identificación	Pág.
DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL EL JUEZ DE ENJUICIAMIENTO ESTÁ OBLIGADO A CORROBORAR LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR AL INICIO DE SU INTERVENCIÓN.	1a./J. 41/2020 (10a.)	327
DELITO DE VIOLACIÓN. EL ARTÍCULO 265 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO VULNERA LOS DERECHOS HUMANOS DE IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER, Y NO DISCRIMINACIÓN ANTE LA LEY, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.	I.9o.P.288 P (10a.)	1671
DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN III, Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL PREVER LA SANCIÓN CONSISTENTE EN TENERLA POR NO PRESENTADA ANTE LA OMISIÓN DEL ACCIONANTE DE ADJUNTAR EL DOCUMENTO EN QUE CONSTE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO OBSTANTE EL REQUERIMIENTO FORMULADO, RESPETA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.	2a./J. 50/2020 (10a.)	385
DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL RECLAMO NO DERIVA DE LA APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INVÁLIDA.	2a. XLVI/2020 (10a.)	391
DERECHO A INTERROGAR TESTIGOS DE CARGO EN EL PROCESO PENAL. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A LA OBLIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE OBTENER LA COMPARECENCIA DE LA VÍCTIMA DEL DELITO ANTE EL JUEZ, SI POR		

	Número de identificación	Pág.
RAZONES DE GÉNERO Y VULNERABILIDAD, NO FUE POSIBLE LOCALIZARLA.	I.9o.P.287 P (10a.)	1673
DERECHO DE DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. LA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DE LOS DEFENSORES EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL NO IMPLICA PER SE UNA VIOLACIÓN AL DERECHO DE LOS IMPUTADOS.	1a./J. 42/2020 (10a.)	329
DERECHO DE PETICIÓN. CONCEPTO DE "BREVE TÉRMINO" PARA EFECTOS DE LA RESPUESTA QUE DEBE DARSE AL PARTICULAR QUE LO EJERCIÓ.	XVII.2o.P.A.1 CS (10a.)	1674
EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PARA ASEGURAR LA DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE VERIFICAR QUE LA PERSONA QUE ASISTIÓ AL IMPUTADO EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL CUENTE CON LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO; EL TRIBUNAL DEBE CONCEDER EL AMPARO CON LA FINALIDAD DE QUE SE HAGA LA VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.	1a./J. 62/2020 (10a.)	331
EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. CASO EN QUE EL DOMICILIO PARA TAL FIN ES SEÑALADO SIN NÚMERO.	I.3o.T.66 L (10a.)	1677
EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL DEMANDADO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. DEBE DECRETARSE LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL ACTOR DE PUBLICAR LOS EDICTOS.	1a./J. 57/2020 (10a.)	335
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN		

	Número de identificación	Pág.
QUE LO ORDENA, POR SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.	1a./J. 58/2020 (10a.)	337
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. PARA QUE UNA EMPRESA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE EJERCIÓ LA OPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6, NUMERAL 5, DEL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE DICHA CONTRIBUCIÓN, PUEDA DEDUCIR EL PAGO DE INTERESES CON CARGO A LAS RENTAS INMOBILIARIAS PROCEDENTES DE MÉXICO O POR HABER TOMADO EN PRÉSTAMO EL CAPITAL AQUÍ INVERTIDO, DEBE REALIZAR LA RETENCIÓN RELATIVA.	I.4o.A.205 A (10a.)	1679
INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO MERCANTIL. LA PERSONA AUTORIZADA EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO CUENTA CON FACULTADES PARA INTERPONERLO.	1a./J. 55/2020 (10a.)	339
INDEMNIZACIÓN JUSTA POR CAUSA DE EXPROPIACIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN, OCUPACIÓN TEMPORAL O LIMITACIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, SU INTERPRETACIÓN A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE PREVALENCIA DE INTERPRETACIÓN DE NORMAS Y PRO PERSONA, PERMITEN SATISFACERLA.	PC.XIX. J/16 A (10a.)	1000
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT). CUANDO EN EL AMPARO SE RECLAME LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR DE FONDOS, NO ES PROCEDENTE DAR VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME		

	Número de identificación	Pág.
JUSTIFICADO PARA QUE AMPLÍE SU DEMANDA CONTRA LA RESPUESTA EMITIDA.	V.2o.P.A.33 A (10a.)	1681
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DOBLE TRIBUTACIÓN. AL REALIZARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA TANTO SUS PREVISIONES Y TERMINOLOGÍA, COMO LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL.	I.4o.A.206 A (10a.)	1682
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA PROPUESTA DE COBRO Y RECEPCIÓN DEL PAGO DE LOS DERECHOS DE PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Y/O URBANIZACIÓN, CONSTITUYEN UN ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).	PC.III.A. J/90 A (10a.)	1063
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA FALTA DEL PAGO ESTIPULADO EN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ES INNECESARIA UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O NEGATIVA FICTA, SI TANTO LA LEY APLICABLE COMO EL CLAUSULADO RESPECTIVO PRECISAN LA FORMA Y FECHA PARA CUMPLIR ESA OBLIGACIÓN.	XVII.1o.P.A.31 A (10a.)	1685
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO.	PC.XVII. J/29 P (10a.)	1154
JUICIO DE NULIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE IMPONE MULTA A		

	Número de identificación	Pág.
UN SUJETO OBLIGADO POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE LA MATERIA.	PC.IV.A. J/50 A (10a.)	1199
JUICIO ORAL MERCANTIL. EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA NO APLICA LA EXIGENCIA DE ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 1061 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.	1a./J. 60/2020 (10a.)	341
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. EL ESTÁNDAR DE REAL MALICIA RESULTA APLICABLE CUANDO LA INFORMACIÓN DIVULGADA SE RELACIONA CON CUESTIONES DE INTERÉS PÚBLICO, AUN CUANDO EL SUJETO QUE SE DICE AFECTADO NO SEA UNA FIGURA PÚBLICA.	1a. LIII/2020 (10a.)	355
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. LOS ABOGADOS NO DEBEN SER CONSIDERADOS COMO PERSONAS PRIVADAS CON PROYECCIÓN PÚBLICA POR EL SOLO HECHO DE EJERCER ESA PROFESIÓN EN EL APARATO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA O POR SU DESEMPEÑO EN CIERTA MATERIA DEL DERECHO.	1a. LIV/2020 (10a.)	357
MAGISTRADO INSTRUCTOR EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CARECE DE FACULTADES PARA DESECHAR LA DEMANDA DE NULIDAD, BAJO EL ARGUMENTO DE QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO ES DEFINITIVA, PUES ESA NO ES UNA CAUSA NOTORIA NI MANIFIESTA PARA ELLO.	XVII.2o.P.A.58 A (10a.)	1687
NOTARIO TITULAR. EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE PUEBLA, QUE ESTABLECE LA IMPROCEDENCIA DE RECURSO ALGUNO CONTRA LAS DECISIONES DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO Y DEL JURADO EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE		

	Número de identificación	Pág.
LA PATENTE RELATIVA, TIENE EL EXCLUSIVO EFECTO DE DAR DEFINITIVIDAD A DICHOS ACTOS, LO QUE HACE PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL.	VI.1o.A.124 A (10a.)	1689
NOTARIO TITULAR. LAS ETAPAS O FASES QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE PUEBLA PARA OBTENER LA PATENTE RELATIVA, NO SON RECLAMABLES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO ACTOS DESTACADOS, AL CONSTITUIR UNA UNIDAD.	VI.1o.A.122 A (10a.)	1690
NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD. CUANDO NO SE REALIZAN PERSONALMENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTE HAYA SEÑALADO DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA TAL EFECTO, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO Y AMERITA SU REPOSICIÓN.	XVII.2o.P.A.15 K (10a.)	1690
NOTIFICADORES/LOCALIZADORES CONTRATADOS EN PLAZAS NO PRESUPUESTARIAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). EL "INFORME DE LOS SERVICIOS PERSONALES EN EL IMSS 2014", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE JUNIO DE 2015, CARECE DE EFICACIA JURÍDICA PARA JUSTIFICAR SU CONTRATACIÓN POR TIEMPO DETERMINADO.	I.11o.T.70 L (10a.)	1692
ORDEN DE APREHENSIÓN. AL SER UN ACTO FUERA DE PROCESO QUE ATENTA CONTRA LA LIBERTAD, LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA NO ESTÁ CONDICIONADA AL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, POR ACTUALIZARSE LA HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA		

	Número de identificación	Pág.
LEY DE AMPARO, SALVO CUANDO EL QUEJOSO HAYA TENIDO CONOCIMIENTO PLENO DE AQUÉLLA POR CUALQUIER MEDIO.	XI.P.43 P (10a.)	1695
PENSIÓN ALIMENTICIA. LA ACCIÓN PARA SOLICITAR SU MODIFICACIÓN PUEDE EJERCERSE, INDISTINTAMENTE, EN UN PROCEDIMIENTO PRINCIPAL O EN UNO INCIDENTAL (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y VERACRUZ).	1a./J. 56/2020 (10a.)	343
PENSIÓN POR INVALIDEZ, VEJEZ, O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. EL SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN LA FECHA EN QUE SE OTORGA CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE LA JUNTA TIENE OBLIGACIÓN DE CONSULTAR AL RESOLVER EL JUICIO.	III.4o.T.60 L (10a.)	1697
PENSIONES OTORGADAS AL AMPARO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA. SU INCREMENTO DEBE EFECTUARSE ANUALMENTE EN EL MES DE FEBRERO, CONFORME AL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) CORRESPONDIENTE AL AÑO CALENDARIO ANTERIOR.	PC.IV.L. J/21 L (10a.)	1224
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL. SI EN EL JUICIO DE AMPARO EL JUEZ NO PUEDE DETERMINAR A QUÉ COLECTIVO LGBTI (LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNEROS E INTERSEXUALES) PERTENECE EL QUEJOSO, NO DEBE PRONUNCIARSE EN CUANTO A UNA IDENTIDAD ESPECÍFICA, A EFECTO DE NO ETIQUETARLO CON NOMBRES O DEFINICIONES QUE PODRÍAN NO CORRESPONDER A LA PERCEPCIÓN DE SÍ MISMO.	I.9o.P.17 K (10a.)	1697
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. SE INTERRUMPE CON LA SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO DE AUDIENCIA PARA FORMULAR LA IMPUTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).	PC.XVII. J/28 P (10a.)	1285

	Número de identificación	Pág.
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS SENTENCIAS DE NULIDAD. CONSISTE EN ASEGURAR LA RESPUESTA AL TEMA ESENCIAL MATERIA DE LA LITIS.	(IV Región)1o.28 A (10a.)	1698
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS.	PC.XVII. J/26 C (10a.)	1350
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO ACATARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A UN DECRETO PENSIONARIO EN RELACIÓN CON EL AUMENTO SALARIAL CORRESPONDIENTE.	PC.XVIII.P.A. J/9 K (10a.)	1398
QUERELLA. PARA SATISFACER ESTE REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN LA ETAPA DE JUICIO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, LA LEGITIMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL OFENDIDA PARA FORMULARLA, DEBE DEMOSTRARSE DURANTE EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA RESPECTIVA MEDIANTE LA INCORPORACIÓN AL JUICIO DEL PODER NOTARIAL CORRESPONDIENTE.	I.9o.P.280 P (10a.)	1701
RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL TRIBUNAL DE ALZADA, LUEGO DE LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DE LA RACIONALIDAD DEL EJERCICIO DE MOTIVACIÓN REALIZADO POR EL JUEZ DE CONTROL SOBRE LA APRECIACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA, ESTÁ FACULTADO PARA REASUMIR JURISDICCIÓN Y		

	Número de identificación	Pág.
CORREGIRLA, SIN VULNERAR EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN.	PC.XV. J/42 P (10a.)	1438
RECURSO DE APELACIÓN. LA INCLUSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE ESTABLECE SU PROCEDENCIA, NO REQUIERE DE INTERPRETACIÓN ADICIONAL PARA FIJAR EL MONTO A QUE ALUDE EL PROPIO PRECEPTO.	PC.XVII. J/27 C (10a.)	1352
RECURSO DE APELACIÓN O REVOCACIÓN EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONE PREVIAMENTE A LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAERÁ A LA PETICIÓN RESPECTIVA, NO OBSTANTE QUE EL RECURRENTE SE ENCUENTRE PRIVADO DE SU LIBERTAD (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO ABROGADA).	I.9o.P.289 P (10a.)	1713
RECURSO DE APELACIÓN. SU PROCEDENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS, NO ESTÁ SUJETA A INTERPRETACIÓN ADICIONAL DE LOS ARTÍCULOS 626 Y 168 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	PC.XVII. J/25 C (10a.)	1355
RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO EN EL QUE SE RESERVA ACORDAR SOBRE EL OFRECIMIENTO DE PRUEBAS HASTA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. QUEDA SIN MATERIA CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO TENGA CONOCIMIENTO DE QUE SE DICTÓ SENTENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.	PC.V. J/30 K (10a.)	1467
RECURSO DE QUEJA EN EL AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE FUE		

	Número de identificación	Pág.
MATERIA DE IDÉNTICO MEDIO DE IMPUGNACIÓN, AL CONSTITUIR COSA JUZGADA.	I.10o.P.2 K (10a.)	1714
RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO. EN EL INTERPUESTO CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA POR NO HABERSE DESAHOGADO UN REQUERIMIENTO PARA SU ACLARACIÓN, PUEDE PLANTEARSE LA ILEGALIDAD DE ÉSTE.	(I Región)4o.19 K (10a.)	1715
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. SUS REGISTRADORES SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO CALIFICAN UNILATERALMENTE UNA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN O POR LOS VICIOS PROPIOS DE LA EJECUTADA POR ORDEN DE DIVERSA AUTORIDAD.	(IV Región)1o.26 A (10a.)	1715
RENUNCIA. ES ANÁLOGA A LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR CAUSA IMPUTABLE AL EMPLEADOR, COMO SUPUESTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DENOMINADOS "PLAN DE AHORRO" Y "PATRIMONIO PARA EL RETIRO", PREVISTOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES.	I.14o.T.41 L (10a.)	1716
RENUNCIA. SI EL TRABAJADOR QUE LA OBJETÓ EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD DE CONTENIDO Y FIRMA NO COMPARECE AL DESAHOGO DE LA PRUEBA EN CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA QUE OFRECIÓ, LA JUNTA DEBE APERCIBIRLO CON DECLARAR SU DESERCIÓN.	I.11o.T.39 L (10a.)	1717
REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DE LA SALA QUE LA ORDENA CONSTITUYE		

	Número de identificación	Pág.
UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.	I.9o.P.286 P (10a.)	1719
SEGURO SOCIAL. CUANDO SE AJUSTE UNA PENSIÓN POR INVALIDEZ, VEJEZ O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, DEBE CONSIDERARSE EL LÍMITE SUPERIOR DE DIEZ VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL ENTONCES DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO) AL MOMENTO EN QUE FUE OTORGADA [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA III.4o.T.47 L (10a.)].	III.4o.T.57 L (10a.)	1721
SEGURO SOCIAL. PARA LA PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DEL TOPE SALARIAL DE LOS SEGUROS DE INVALIDEZ, VEJEZ O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, NO ES OBLIGACIÓN DEL INSTITUTO PROBAR QUE EL ASEGURADO COTIZÓ MENOS QUE EL LÍMITE SUPERIOR DE DIEZ VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL ENTONCES DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO).	III.4o.T.59 L (10a.)	1722
SENTENCIA DE AMPARO QUE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE NIEGA REQUERIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE SU CUMPLIMIENTO INMEDIATO.	1a./J. 59/2020 (10a.)	345
SEPARACIÓN DEL DOMICILIO FAMILIAR. CONTRA LA MEDIDA PROVISIONAL DECRETADA EN UN PROCEDIMIENTO PRIVILEGIADO, PREVIA A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE DIVORCIO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO		

	Número de identificación	Pág.
DE PUEBLA) [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA VI.2o.C.31 C (10a.)].	VI.2o.C.71 C (10a.)	1723
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE A FAVOR DE MENORES DE EDAD. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y SE APORTAN INDICIOS SOBRE SU EXISTENCIA, AQUÉLLA PROCEDE PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO RECABE DE OFICIO PRUEBAS TENDENTES A DESVIRTUAR ESA NEGATIVA Y DESPLIEGUE UNA POSTURA ACTIVA EN SU RECEPCIÓN Y DESAHOGO.	XXVII.1o.8 K (10a.)	1725
SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE DECRETARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, SI DE LA DEMANDA O DE SUS ANEXOS SE ADVIERTE QUE SE EMITIÓ Y EJECUTÓ SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL.	PC.XVIII.P.A. J/10 K (10a.)	1487
SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS JUICIOS DE AMPARO, PREVISTA EN EL ACUERDO GENERAL 8/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). OPERA EN FAVOR DE LOS QUEJOSOS EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA URGENTE DEL ASUNTO.	XVII.2o.8 K (10a.)	1726
SUSTITUCIÓN PROCESAL DE LA PARTE ACTORA. EN LOS CASOS EN QUE SE PONGA EN CONOCIMIENTO DEL JUZGADOR PREVIO A ORDENARSE EL EMPLAZAMIENTO, DEBE CORRÉRSELE TRASLADO A LA PARTE DEMANDADA CON LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE AL EFECTO SE APORTEN, CUYA OMISIÓN ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL.	VII.2o.C.223 C (10a.)	1728

	Número de identificación	Pág.
TÉRMINOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD SE LE NOTIFICA PERSONALMENTE EL PLAZO PARA AMPLIAR SU DEMANDA Y NO TIENE LA ASESORÍA DE UN DEFENSOR, A FIN DE GARANTIZAR SU ACCESO COMPLETO Y EFICAZ A LA JUSTICIA, NO DEBEN CORRERLE AQUÉLLOS NI PRECLUIR SU DERECHO PARA EFECTUARLA.	XXVII.1o.7 P (10a.)	1731
TORTURA. ES INOPERANTE EL RECLAMO E INATENDIBLE LA PRETENSIÓN DEL QUEJOSO, PARA EL EFECTO DE QUE LA RESPONSABLE ORDENE LA INVESTIGACIÓN PERTINENTE, DE LA ADUCIDA CON RELACIÓN A COIMPUTADOS NO QUEJOSOS.	V.2o.P.A.21 P (10a.)	1732
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO. SU RECONOCIMIENTO DE BASE DEBE RETROTRAERSE HASTA EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYAN ADQUIRIDO EL DERECHO DE INAMOVILIDAD, LO QUE SUCEDE CUANDO HAN LABORADO SEIS MESES ININTERRUMPIDOS Y SIN NOTA DESFAVORABLE EN UN PUESTO BASIFICABLE.	X.1o.T.4 L (10a.)	1733
TRABAJADORES DE CONFIANZA DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (NAFIN). HIPÓTESIS EN LA QUE TIENEN DERECHO AL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS.	PC.I.L. J/68 L (10a.)	1528
VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. CUANDO EN EL AMPARO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE TRAMITAR Y RESOLVER UNA DENUNCIA CIUDADANA POR REALIZARSE ESAS ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO LEGAL Y REGLAMENTARIAMENTE PERMITIDO Y EL QUEJOSO ADUCE VIOLACIÓN A SU DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR, POR EL EXCESO DE RUIDO Y LA ALTERACIÓN AL ORDEN QUE PRODUCEN,		

	Número de identificación	Pág.
EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DAR EFECTOS A SU SENTENCIA PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TOMEN TODAS LAS MEDIDAS POSITIVAS PARA SU PROTECCIÓN.	(IV Región)1o.27 A (10a.)	1735
VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS CELEBRADAS EN LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES. PARA LA VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE LAS CONTIENEN, NO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE SE HAGA CONSTAR QUE "ES COPIA FIEL Y EXACTA" DEL REGISTRO ORIGINAL.	PC.I.C. J/105 C (10a.)	1555
VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). LA CERTIFICACIÓN DE QUE SON COPIA AUTÉNTICA DEL REGISTRO AUDIOVISUAL NO REQUIERE QUE EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN EN LA MATERIALIDAD DEL DISCO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA.	PC.VI.P. J/7 P (10a.)	1650

Índice de Ejecutorias

	Número de identificación	Pág.
Contradicción de tesis 41/2019.—Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito.—Ministro Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Relativa a la tesis 1a./J. 53/2020 (10a.), de título y subtítulo: "CONCURSO IDEAL DE DELITOS. LA POTESTAD DE AUMENTAR LA PENA CORRESPONDIENTE AL DELITO MAYOR CON LA DE LOS RESTANTES, ESTÁ CONDICIONADA A LA OBLIGACIÓN DE FUNDAR Y MOTIVAR ESA DECISIÓN (ARTÍCULO 64 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016)."	1a.	300
Contradicción de tesis 34/2020.—Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México.—Ministro Ponente: Luis María Aguilar Morales. Relativa a la tesis 2a./J. 50/2020 (10a.), de título y subtítulo: "DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN III, Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL PREVER LA SANCIÓN CONSISTENTE EN TENERLA POR NO PRESENTADA ANTE LA OMISIÓN DEL ACCIONANTE		

	Número de identificación	Pág.
DE ADJUNTAR EL DOCUMENTO EN QUE CONSTE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO OBSTANTE EL REQUERIMIENTO FORMULADO, RESPETA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA."	2a.	363
Contradicción de tesis 16/2019.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Tercero, Cuarto y Quinto, todos en Materia Administrativa del Tercer Circuito.—Magistrado Ponente: Óscar Naranjo Ahumada. Relativa a la tesis PC.III.A. J/91 A (10a.), de título y subtítulo: "ABOGADO PATRONO. EL DESIGNADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO [ALCANCE Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 90/2012 (10a.)]."	PC.	397
Contradicción de tesis 2/2020.—Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito.—Magistrado Ponente: Alfredo Cid García. Relativa a la tesis PC.XVIII.P.A. J/12 K (10a.), de título y subtítulo: "ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO. NO LO CONSTITUYE EL COBRO DEL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EFECTUADO A TRAVÉS DEL AVISO-RECIBO EXPEDIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)."	PC.	506
Contradicción de tesis 11/2019.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero, Quinto y Sexto, todos del Décimo Quinto Circuito.—Magistrada Ponente: Blanca Evelia Parra Meza. Relativa a la tesis PC.XV. J/43 A (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO CONTRA LEYES. HIPÓTESIS EN LA QUE SE ACREDITA, DE MANERA IMPLÍCITA, LA APLICACIÓN EN PERJUICIO DEL QUEJOSO DEL ARTÍCULO 67, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ABROGADA)."	PC.	583

	Número de identificación	Pág.
Contradicción de tesis 31/2019.—Entre las sustentadas por el Noveno y el Décimo Quinto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito.—Magistrado Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Relativa a la tesis PC.I.C. J/106 C (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO QUE REVOCA EL PROVEÍDO DICTADO POR UN JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DESECHA UNA DEMANDA POR CONSIDERAR CARECER DE COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA, PARA CONOCER DE UN JUICIO ORDINARIO CIVIL."	PC.	621
Contradicción de tesis 3/2019.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito.—Magistrado Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Relativa a la tesis PC.XVI.A. J/29 A (10a.), de título y subtítulo: "CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN ORDENADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. OPERA UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SIN QUE ÉSTA DICTE LA RESOLUCIÓN QUE DEFINA LA SITUACIÓN DEL PARTICULAR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO."	PC.	690
Contradicción de tesis 6/2019.—Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito.—Magistrado Ponente: Javier Leonel Santiago Martínez. Relativa a la tesis PC.XXI. J/17 A (10a.), de título y subtítulo: "CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO. LA LEY RELATIVA NÚMERO 676, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 3 DE ENERO DE 1984, CARECE DE VALIDEZ Y ES INCONSTITUCIONAL AL NO		

	Número de identificación	Pág.
HABER REFRENDADO EL TITULAR DEL RAMO EL DECRETO CORRESPONDIENTE."	PC.	723
Contradicción de tesis 5/2019.—Entre las sustentadas por el Primer, el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados, todos en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, y el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México.—Magistrado Ponente: Guillermo del Castillo Vélez. Relativa a la tesis PC.XVIII.P.A. J/8 A (10a.), de título y subtítulo: "COMISIÓN DE MAGISTRADOS NOMBRADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS PARA EJERCER LAS ATRIBUCIONES ANTES ENCOMENDADAS AL EXTINTO CONSEJO DE LA JUDICATURA. ES CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE COMPETENTE PARA TRAMITAR Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SOMETIDOS A SU POTESTAD, HASTA LA FECHA EN QUE QUEDÓ INTEGRADA Y ENTRÓ EN FUNCIONES LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DISCIPLINA DEL PROPIO TRIBUNAL SUPERIOR."	PC.	777
Contradicción de tesis 1/2020.—Entre las sustentadas por el Primer, el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados, todos en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito.—Magistrado Ponente: Nicolás Nazar Sevilla. Relativa a la tesis PC.XVIII.P.A. J/11 K (10a.), de título y subtítulo: "COMPETENCIA. EL JUEZ DE DISTRITO AL QUE LE ES TURNADA UNA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE ACTUAR CONFORME A LA REGLA DE EXCEPCIÓN A LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 38 Y NO PLANTEAR IMPEDIMENTO CONFORME AL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN IV, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO."	PC.	859
Contradicción de tesis 1/2018.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y de Trabajo del Décimo		

	Número de identificación	Pág.
Noveno Circuito.—Magistrado Ponente: Osbaldo López García. Relativa a la tesis PC.XIX. J/16 A (10a.), de título y subtítulo: "INDEMNIZACIÓN JUSTA POR CAUSA DE EXPROPIACIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN, OCUPACIÓN TEMPORAL O LIMITACIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, SU INTERPRETACIÓN A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE PREVALENCIA DE INTERPRETACIÓN DE NORMAS Y PRO PERSONA, PERMITEN SATISFACERLA."	PC.	948
Contradicción de tesis 27/2019.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Quinto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito.—Magistrado Ponente: Moisés Muñoz Padilla. Relativa a la tesis PC.III.A. J/90 A (10a.), de título y subtítulo: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA PROPUESTA DE COBRO Y RECEPCIÓN DEL PAGO DE LOS DERECHOS DE PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Y/O URBANIZACIÓN, CONSTITUYEN UN ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)."	PC.	1002
Contradicción de tesis 4/2020.—Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.—Magistrado Ponente: José Martín Hernández Simental. Relativa a la tesis PC.XVI. J/29 P (10a.), de título y subtítulo: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO."	PC.	1065
Contradicción de tesis 8/2019.—Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.—Magistrado Ponente: Rogelio Cepeda Treviño. Relativa a		

	Número de identificación	Pág.
la tesis PC.IV.A. J/50 A (10a.), de título y subtítulo: "JUICIO DE NULIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE IMPONE MULTA A UN SUJETO OBLIGADO POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE LA MATERIA."	PC.	1157
Contradicción de tesis 3/2019.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito.—Magistrado Ponente: Guillermo Erik Silva González. Relativa a la tesis PC.IV.L. J/21 L (10a.), de título y subtítulo: "PENSIONES OTORGADAS AL AMPARO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA. SU INCREMENTO DEBE EFECTUARSE ANUALMENTE EN EL MES DE FEBRERO, CONFORME AL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) CORRESPONDIENTE AL AÑO CALENDARIO ANTERIOR."	PC.	1201
Contradicción de tesis 1/2020.—Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad.—Magistrado Ponente: Refugio Noel Montoya Moreno. Relativa a la tesis PC.XVII. J/28 P (10a.), de título y subtítulo: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. SE INTERRUMPE CON LA SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO DE AUDIENCIA PARA FORMULAR LA IMPUTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)."	PC.	1226
Contradicción de tesis 7/2019.—Entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito.—Magistrado Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Relativa a las tesis PC.XVII. J/26 C (10a.), PC.XVII. J/27 C (10a.) y PC.XVII. J/25 C (10a.), de títulos y subtítulos: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.		

	Número de identificación	Pág.
DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS.", "RECURSO DE APELACIÓN. LA INCLUSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE ESTABLECE SU PROCEDENCIA, NO REQUIERE DE INTERPRETACIÓN ADICIONAL PARA FIJAR EL MONTO A QUE ALUDE EL PROPIO PRECEPTO." y "RECURSO DE APELACIÓN. SU PROCEDENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS, NO ESTÁ SUJETA A INTERPRETACIÓN ADICIONAL DE LOS ARTÍCULOS 626 Y 168 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA."	PC.	1288
Contradicción de tesis 6/2019.—Entre las sustentadas por el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito.—Magistrado Ponente: Nicolás Nazar Sevilla. Relativa a la tesis PC.XVIII.P.A. J/9 K (10a.), de título y subtítulo: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO ACATARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A UN DECRETO PENSIONARIO EN RELACIÓN CON EL AUMENTO SALARIAL CORRESPONDIENTE."	PC.	1358
Contradicción de tesis 10/2019.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos del Décimo Quinto Circuito.—Magistrado Ponente: Raúl Martínez Martínez. Relativa a la tesis PC.XV. J/42 P (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL TRIBUNAL DE ALZADA, LUEGO DE LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DE LA RACIONALIDAD DEL		

	Número de identificación	Pág.
EJERCICIO DE MOTIVACIÓN REALIZADO POR EL JUEZ DE CONTROL SOBRE LA APRECIACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA, ESTÁ FACULTADO PARA REASUMIR JURISDICCIÓN Y CORREGIRLA, SIN VULNERAR EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN."	PC.	1399
Contradicción de tesis 9/2019.—Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.—Magistrado Ponente: José Manuel Blanco Quihuis. Relativa a la tesis PC.V. J/30 K (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO EN EL QUE SE RESERVA ACORDAR SOBRE EL OFRECIMIENTO DE PRUEBAS HASTA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. QUEDA SIN MATERIA CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO TENGA CONOCIMIENTO DE QUE SE DICTÓ SENTENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."	PC.	1440
Contradicción de tesis 8/2019.—Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito.—Magistrado Ponente: Guillermo del Castillo Vélez. Relativa a la tesis PC.XVIII.P.A. J/10 K (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE DECRETARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, SI DE LA DEMANDA O DE SUS ANEXOS SE ADVIERTE QUE SE EMITIÓ Y EJECUTÓ SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL."	PC.	1469
Contradicción de tesis 29/2019.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo, Tercero y Noveno, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito.—Magistrado Ponente: Raúl Valerio Ramírez. Relativa a la tesis PC.I.L. J/68 L (10a.), de título y subtítulo: "TRABAJADORES DE CONFIANZA DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,		

	Número de identificación	Pág.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (NAFIN). HIPÓTESIS EN LA QUE TIENEN DERECHO AL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS."	PC.	1489
Contradicción de tesis 23/2019.—Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.—Magistrado Ponente: Alejandro Villagómez Gordillo. Relativa a la tesis PC.I.C. J/105 C (10a.), de título y subtítulo: "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS CELEBRADAS EN LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES. PARA LA VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE LAS CONTIENEN, NO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE SE HAGA CONSTAR QUE 'ES COPIA FIEL Y EXACTA' DEL REGISTRO ORIGINAL."	PC.	1530
Contradicción de tesis 3/2019.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Penal del Sexto Circuito.—Magistrado Ponente: José Salvador Roberto Jiménez Lozano. Relativa a la tesis PC.VI.P. J/7 P (10a), de título y subtítulo: "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). LA CERTIFICACIÓN DE QUE SON COPIA AUTÉNTICA DEL REGISTRO AUDIOVISUAL NO REQUIERE QUE EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN EN LA MATERIALIDAD DEL DISCO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA."	PC.	1557
Amparo en revisión 231/2019.—Daniel Guzmán Aguado, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Relativo a la tesis I.9o.P.289 P (10a.), de título y subtítulo:		

	Número de identificación	Pág.
"RECURSO DE APELACIÓN O REVOCACIÓN EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONE PREVIAMENTE A LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAERÁ A LA PETICIÓN RESPECTIVA, NO OBSTANTE QUE EL RECURRENTE SE ENCUENTRE PRIVADO DE SU LIBERTAD (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO ABROGADA)."	TC.	1703

Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.—Acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018.—Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Relativo a la ejecutoria de temas síntesis: "Acción de inconstitucionalidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene legitimación para promoverla cuando considere que una norma general viola derechos humanos.", "Acción de inconstitucionalidad. La legitimación de las Comisiones de Derechos Humanos de las entidades federativas se surte cuando en su demanda aduzcan una violación a derechos humanos por leyes expedidas por las Legislaturas Locales.", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Constituye un mandato convencional en la elaboración de leyes y adopción de políticas sobre cuestiones relacionadas con la condición de aquéllas.", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Ante su falta de regulación interna en el Estado Mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe señalar estándares mínimos para cumplir con esa obligación.", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Elementos conforme a los cuales debe interpretarse.", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Principios rectores.", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Lineamientos establecidos por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas.", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Lineamientos contenidos en la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Elementos mínimos para su cumplimiento.", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Constituye un requisito procedimental de rango constitucional cuya omisión representa un vicio formal e invalidante del procedimiento legislativo.", "Derecho a la

Pág.

consulta de las personas con discapacidad. Omisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de satisfacerlo en torno a una legislación que las afecta directamente (Invalidez de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México).", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. La celebración de una mesa de análisis entre el Poder Legislativo y los representantes de distintas asociaciones civiles en torno a una legislación que las afecta directamente no implica su acatamiento (Invalidez de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México)." y "Acción de inconstitucionalidad. Declaración de invalidez que surte efectos a partir de los ciento ochenta días naturales siguientes al día en que se publique en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de que no se prive a las personas con Síndrome de Down de los posibles efectos benéficos de la norma invalidada (Invalidez de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México)."..... 57

Ministro José Fernando Franco González Salas.—Acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018.—Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Relativo a la ejecutoria de temas síntesis: "Acción de inconstitucionalidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene legitimación para promoverla cuando considere que una norma general viola derechos humanos.", "Acción de inconstitucionalidad. La legitimación de las Comisiones de Derechos Humanos de las entidades federativas se surte cuando en su demanda aduzcan una violación a derechos humanos por leyes expedidas por las Legislaturas Locales.", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Constituye un mandato convencional en la elaboración de leyes y adopción de políticas sobre cuestiones relacionadas con la condición de aquéllas.", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Ante su falta de regulación interna en el Estado Mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe señalar estándares mínimos para cumplir con esa obligación.", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Elementos conforme a los cuales debe interpretarse.", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Principios rectores.", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Lineamientos establecidos por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas.", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Lineamientos contenidos en la Convención

Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Elementos mínimos para su cumplimiento.", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Constituye un requisito procedimental de rango constitucional cuya omisión representa un vicio formal e invalidante del procedimiento legislativo.", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Omisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de satisfacerlo en torno a una legislación que las afecta directamente (Invalidez de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México).", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. La celebración de una mesa de análisis entre el Poder Legislativo y los representantes de distintas asociaciones civiles en torno a una legislación que las afecta directamente no implica su acatamiento (Invalidez de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México)." y "Acción de inconstitucionalidad. Declaración de invalidez que surte efectos a partir de los ciento ochenta días naturales siguientes al día en que se publique en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de que no se prive a las personas con Síndrome de Down de los posibles efectos benéficos de la norma invalidada (Invalidez de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México)." 64

Ministro José Ramón Cossío Díaz.—Acción de inconstitucionalidad 128/2015.—Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Relativo a la ejecutoria de temas síntesis: "Acción de inconstitucionalidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene legitimación para promoverla cuando considere que una norma general viola derechos humanos.", "Derecho humano a la igualdad y no discriminación. Sus alcances.", "Discriminación normativa. Formas de exclusión tácita y por diferenciación expresa.", "Discriminación normativa. Su justificación a partir de un análisis de razonabilidad o test ordinario de igualdad.", "Derecho humano a la igualdad y no discriminación. La distinción entre Jueces de primera instancia menores de sesenta y cinco años y los que hayan cumplido esta edad, para efectos de la remoción del cargo, se realiza con base en la categoría sospechosa de edad (Artículo 84, párrafo último, de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala).", "Autonomía e independencia judicial. Garantías constitucionales que gravitan a su alrededor.", "Autonomía e independencia judicial. La garantía de estabilidad de los Jueces y Magistrados en el cargo comprende la

determinación en las Constituciones Locales del tiempo de duración en su ejercicio y la posibilidad de ser ratificado en términos del periodo señalado.", "Autonomía e independencia judicial. La fijación de la duración vitalicia en el cargo, así como el establecimiento de una edad límite y de un periodo fijo, son criterios que aseguran las garantías de inamovilidad y de estabilidad judicial.", "Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. El establecimiento de un periodo de duración en el cargo de Juez de primera instancia para asegurar un relevo generacional en aquel Poder es una finalidad constitucionalmente imperiosa (Artículo 84, párrafo último, de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala).", "Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Para considerar que el retiro forzoso se trata de una medida estrechamente vinculada con los fines de garantizar la estabilidad en el empleo de los juzgadores y el acceso igualitario a la función jurisdiccional, es imperativo que se diseñe como una medida que opera por ministerio de ley (Artículo 84, párrafo último, de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala).", "Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. La previsión de que los Jueces de primera instancia podrán ser removidos de su cargo por el Consejo de la Judicatura por haber cumplido sesenta y cinco años debe interpretarse en el sentido de que establece el retiro forzoso por ministerio de ley (Interpretación conforme del artículo 84, párrafo último, de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala)." y "Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. La previsión de un retiro forzoso para los Jueces de primera instancia que hayan cumplido sesenta y cinco años no impide que éstos puedan ejercer como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso, por lo que constituye la medida menos restrictiva para garantizar el acceso igualitario a la función jurisdiccional (Artículo 84, párrafo último, de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala)." 109

Ministro José Fernando Franco González Salas.—Acción de inconstitucionalidad 100/2016.—Procurador General de la República. Relativo a la ejecutoria de temas síntesis: "Acción de inconstitucionalidad. Lineamientos mínimos requeridos para considerar que la norma general impugnada constituye un nuevo acto legislativo.", "Principio de exacta aplicación de la ley en su vertiente de taxatividad. Constituye una exigencia de racionalidad lingüística que exige al legislador la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta típica y sus consecuencias jurídicas.", "Principio de exacta aplicación de la ley en su vertiente de taxatividad. Sólo puede obligar al legislador a una determinación suficiente y no a la mayor precisión imaginable.", "Principio de exacta aplicación

Pág.

de la ley en su vertiente de taxatividad. Elementos para analizar el grado de suficiencia en la claridad y precisión de una norma.", "Principio de legalidad constitucional. Directrices a partir de las cuales se verifica.", "Normas penales en blanco. Sus tipos conforme a la jurisprudencia.", "Principio de reserva de ley. Su naturaleza y alcances.", "Delitos en materia de tránsito y transporte en el Estado de Jalisco. La referencia indeterminada de un tipo penal a cualquier otra infracción a la normativa en dicha materia vulnera el principio de exacta aplicación de la ley en su vertiente de taxatividad (Invalidez del artículo 122 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco).", "Delitos en materia de tránsito y transporte en el Estado de Jalisco. La referencia indeterminada de un tipo penal a cualquier otra infracción a la normativa en dicha materia vulnera el principio de reserva de ley (Invalidez del artículo 122 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco).", "Acción de inconstitucionalidad. Declaración de invalidez de una norma general en vía de consecuencia (Invalidez de los artículos 123 y 124 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco).", "Acción de inconstitucionalidad. Debe declararse la invalidez de todo el contenido de la norma impugnada, ante la posibilidad de dejar un tipo penal carente de sentido y que no ha sido el pretendido por el legislador local (Invalidez del artículo 122 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco).", "Acción de inconstitucionalidad. Declaración de invalidez de una norma penal con efectos retroactivos al momento de su entrada en vigor (Invalidez de los artículos 122, 123 y 124 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco)." y "Acción de inconstitucionalidad. Los efectos de la declaración de invalidez de una norma penal no se ven afectados por su reforma con posterioridad a su impugnación en ese medio de control (Invalidez de los artículos 123 y 124 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco)"..... 188

Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.—Acción de inconstitucionalidad 100/2016.—Procurador General de la República. Relativo a la ejecutoria de temas síntesis: "Acción de inconstitucionalidad. Lineamientos mínimos requeridos para considerar que la norma general impugnada constituye un nuevo acto legislativo.", "Principio de exacta aplicación de la ley en su vertiente de taxatividad. Constituye una exigencia de racionalidad lingüística que exige al legislador la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta típica y sus consecuencias jurídicas.", "Principio de exacta aplicación de la ley en su vertiente de taxatividad. Sólo puede obligar al legislador a una determinación suficiente y

Pág.

no a la mayor precisión imaginable.", "Principio de exacta aplicación de la ley en su vertiente de taxatividad. Elementos para analizar el grado de suficiencia en la claridad y precisión de una norma.", "Principio de legalidad constitucional. Directrices a partir de las cuales se verifica.", "Normas penales en blanco. Sus tipos conforme a la jurisprudencia.", "Principio de reserva de ley. Su naturaleza y alcances.", "Delitos en materia de tránsito y transporte en el Estado de Jalisco. La referencia indeterminada de un tipo penal a cualquier otra infracción a la normativa en dicha materia vulnera el principio de exacta aplicación de la ley en su vertiente de taxatividad (Invalidez del artículo 122 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco).", "Delitos en materia de tránsito y transporte en el Estado de Jalisco. La referencia indeterminada de un tipo penal a cualquier otra infracción a la normativa en dicha materia vulnera el principio de reserva de ley (Invalidez del artículo 122 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco).", "Acción de inconstitucionalidad. Declaración de invalidez de una norma general en vía de consecuencia (Invalidez de los artículos 123 y 124 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco).", "Acción de inconstitucionalidad. Debe declararse la invalidez de todo el contenido de la norma impugnada, ante la posibilidad de dejar un tipo penal carente de sentido y que no ha sido el pretendido por el legislador local (Invalidez del artículo 122 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco).", "Acción de inconstitucionalidad. Declaración de invalidez de una norma penal con efectos retroactivos al momento de su entrada en vigor (Invalidez de los artículos 122, 123 y 124 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco)." y "Acción de inconstitucionalidad. Los efectos de la declaración de invalidez de una norma penal no se ven afectados por su reforma con posterioridad a su impugnación en ese medio de control (Invalidez de los artículos 123 y 124 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco)." 190

Ministro Luis María Aguilar Morales.—Acción de inconstitucionalidad 108/2019 y su acumulada 118/2019.—Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Partido Político Más por Hidalgo. Relativo a la ejecutoria de temas síntesis: "Acción de inconstitucionalidad. Requisitos para que puedan promoverla los partidos políticos.", "Consulta indígena. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a ser consultados previamente a través de sus representantes ante medidas legislativas que puedan afectarlos directamente.", "Consulta indígena. Omisión del Congreso del Estado de

Hidalgo de realizarla previamente a la reforma de una legislación que afecta directamente a aquel grupo de personas (Invalidez del Decreto Núm. 203 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de septiembre de 2019).", "Consulta indígena. Omisión del Congreso del Estado de Hidalgo de establecer comunicación constante entre las autoridades representativas de aquellas comunidades y el Poder Legislativo Local en relación con una legislación que afecta directamente a aquel grupo de personas (Invalidez del Decreto Núm. 203 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de septiembre de 2019).", "Consulta indígena. Omisión del Congreso del Estado de Hidalgo de entregar información culturalmente adecuada a aquel grupo de personas en relación con una legislación que los afecta directamente (Invalidez del Decreto Núm. 203 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de septiembre de 2019).", "Consulta indígena. Omisión del Congreso del Estado de Hidalgo de otorgar participación al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en relación con una legislación que afecta directamente a aquel grupo de personas (Invalidez del Decreto Núm. 203 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de septiembre de 2019).", "Consulta indígena. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es la autoridad competente en la materia.", "Consulta indígena. Omisión del Congreso del Estado de Hidalgo de otorgar participación a la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas en relación con una legislación que afecta directamente a aquel grupo de personas (Invalidez del Decreto Núm. 203 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de septiembre de 2019).", "Consulta indígena. La invitación a diversas autoridades por parte del Congreso del Estado de Hidalgo, a efecto de su participación en asambleas regionales, con cinco o seis días de anticipación a éstas y sin haberla extendido respecto de una etapa informativa, constituye una convocatoria inoportuna (Invalidez del Decreto Núm. 203 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de septiembre de 2019).", "Consulta indígena. La habilitación de teléfonos y páginas electrónicas para transmitir información a los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Hidalgo, así

como la publicación de las convocatorias respectivas en periódicos, radio y televisión, no son medios idóneos para garantizar una participación culturalmente adecuada y completa de aquéllos, atendiendo al contexto geográfico en el que se sitúan (Invalidez del Decreto Núm. 203 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de septiembre de 2019).", "Consulta indígena. No existe una participación suficiente que represente los intereses de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Hidalgo en relación con una legislación que los afecta directamente cuando, a pesar de las convocatorias realizadas por el Congreso del Estado y de las propuestas recibidas, a las asambleas sólo asiste el punto veintiuno por ciento del total de los indígenas de la entidad (Invalidez del Decreto Núm. 203 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de septiembre de 2019)." y "Acción de inconstitucionalidad. Declaración de invalidez que surte efectos a partir del día siguiente a aquel en que concluya el próximo proceso electoral ordinario del Estado de Hidalgo, en la inteligencia de que, inmediatamente después de finalizado, el legislador local deberá actuar para subsanar el vicio de inconstitucionalidad decretado, observando como mínimo los lineamientos del 'Protocolo para la Implementación de Consultas a Pueblos y Comunidades Indígenas de Conformidad con Estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes' (Invalidez del Decreto Núm. 203 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de septiembre de 2019)." 277

Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.—Acción de inconstitucionalidad 108/2019 y su acumulada 118/2019.—Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Partido Político Más por Hidalgo. Relativo a la ejecutoria de temas síntesis: "Acción de inconstitucionalidad. Requisitos para que puedan promoverla los partidos políticos.", "Consulta indígena. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a ser consultados previamente a través de sus representantes ante medidas legislativas que puedan afectarlos directamente.", "Consulta indígena. Omisión del Congreso del Estado de Hidalgo de realizarla previamente a la reforma de una legislación que afecta directamente a aquel grupo de personas (Invalidez del Decreto Núm. 203 que reforma, deroga y

adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de septiembre de 2019).", "Consulta indígena. Omisión del Congreso del Estado de Hidalgo de establecer comunicación constante entre las autoridades representativas de aquellas comunidades y el Poder Legislativo Local en relación con una legislación que afecta directamente a aquel grupo de personas (Invalidez del Decreto Núm. 203 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de septiembre de 2019).", "Consulta indígena. Omisión del Congreso del Estado de Hidalgo de entregar información culturalmente adecuada a aquel grupo de personas en relación con una legislación que los afecta directamente (Invalidez del Decreto Núm. 203 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de septiembre de 2019).", "Consulta indígena. Omisión del Congreso del Estado de Hidalgo de otorgar participación al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en relación con una legislación que afecta directamente a aquel grupo de personas (Invalidez del Decreto Núm. 203 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de septiembre de 2019).", "Consulta indígena. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es la autoridad competente en la materia.", "Consulta indígena. Omisión del Congreso del Estado de Hidalgo de otorgar participación a la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas en relación con una legislación que afecta directamente a aquel grupo de personas (Invalidez del Decreto Núm. 203 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el periódico oficial de la entidad el 9 de septiembre de 2019).", "Consulta indígena. La invitación a diversas autoridades por parte del Congreso del Estado de Hidalgo, a efecto de su participación en asambleas regionales, con cinco o seis días de anticipación a éstas y sin haberla extendido respecto de una etapa informativa, constituye una convocatoria inoportuna (Invalidez del Decreto Núm. 203 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de septiembre de 2019).", "Consulta indígena. La habilitación de teléfonos y páginas electrónicas para transmitir información a los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Hidalgo, así como la publicación de las convocatorias respectivas en periódicos, radio y televisión, no son medios idóneos para garantizar una participación culturalmente adecuada

Pág.

y completa de aquéllos, atendiendo al contexto geográfico en el que se sitúan (Invalidez del Decreto Núm. 203 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de septiembre de 2019).", "Consulta indígena. No existe una participación suficiente que represente los intereses de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Hidalgo en relación con una legislación que los afecta directamente cuando, a pesar de las convocatorias realizadas por el Congreso del Estado y de las propuestas recibidas, a las asambleas sólo asiste el punto veintiuno por ciento del total de los indígenas de la entidad (Invalidez del Decreto Núm. 203 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de septiembre de 2019)." y "Acción de inconstitucionalidad. Declaración de invalidez que surte efectos a partir del día siguiente a aquel en que concluya el próximo proceso electoral ordinario del Estado de Hidalgo, en la inteligencia de que, inmediatamente después de finalizado, el legislador local deberá actuar para subsanar el vicio de inconstitucionalidad decretado, observando como mínimo los lineamientos del 'Protocolo para la Implementación de Consultas a Pueblos y Comunidades Indígenas de Conformidad con Estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes' (Invalidez del Decreto Núm. 203 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de septiembre de 2019)." 284

Magistrado Oscar Naranjo Ahumada.—Contradicción de tesis 16/2019.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Tercero, Cuarto y Quinto, todos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó a la tesis PC.III.A. J/91 A (10a.), de título y subtítulo: "ABOGADO PATRONO. EL DESIGNADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO [ALCANCE Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 90/2012 (10a.)]." 477

Magistrado Raúl Martínez Martínez.—Contradicción de tesis 11/2019.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero, Quinto y Sexto, todos del Décimo Quinto Circuito. Relativo a la

Pág.

ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.XV. J/43 A (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO CONTRA LEYES. HIPÓTESIS EN LA QUE SE ACREDITA, DE MANERA IMPLÍCITA, LA APLICACIÓN EN PERJUICIO DEL QUEJOSO DEL ARTÍCULO 67, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ABROGADA)." 616

Magistrados Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo, Fernando Alberto Casasola Mendoza e Ismael Hernández Flores.—Contradicción de tesis 31/2019.—Entre las sustentadas por el Noveno y el Décimo Quinto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.I.C. J/106 C (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO QUE REVOCA EL PROVEÍDO DICTADO POR UN JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DESECHA UNA DEMANDA POR CONSIDERAR CARECER DE COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA, PARA CONOCER DE UN JUICIO ORDINARIO CIVIL." 683

Magistrado Guillermo del Castillo Vélez.—Contradicción de tesis 5/2019.—Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.XVIII.P.A. J/8 A (10a.), de título y subtítulo: "COMISIÓN DE MAGISTRADOS NOMBRADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS PARA EJERCER LAS ATRIBUCIONES ANTES ENCOMENDADAS AL EXTINTO CONSEJO DE LA JUDICATURA. ES CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE COMPETENTE PARA TRAMITAR Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SOMETIDOS A SU POTESTAD, HASTA LA FECHA EN QUE QUEDÓ INTEGRADA Y ENTRÓ EN FUNCIONES LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DISCIPLINA DEL PROPIO TRIBUNAL SUPERIOR." 838

Magistrado Jacob Troncoso Ávila.—Contradicción de tesis 27/2019.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Quinto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.III.A. J/90 A (10a.), de título y subtítulo: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA PROPUESTA DE COBRO Y RECEPCIÓN DEL PAGO DE LOS DERECHOS DE PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Y/O

Pág.

URBANIZACIÓN, CONSTITUYEN UN ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)." 1059

Magistrado Refugio Noel Montoya Moreno.—Contradicción de tesis 4/2020.—Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.XVII. J/29 P (10a.), de título y subtítulo: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO." 1140

Magistrados María del Carmen Cordero Martínez, José Martín Hernández Simental y Cuauhtémoc Cuéllar De Luna.—Contradicción de tesis 1/2020.—Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.XVII. J/28 P (10a.), de título y subtítulo: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. SE INTERRUMPE CON LA SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO DE AUDIENCIA PARA FORMULAR LA IMPUTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)." 1269

Magistrados María Teresa Zambrano Calero, Cuauhtémoc Cuéllar De Luna y Juan Carlos Zamora Tejeda.—Contradicción de tesis 7/2019.—Entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentaron las tesis PC.XVII. J/26 C (10a.), PC.XVII. J/27 C (10a.) y PC.XVII. J/25 C (10a.), de títulos y subtítulos: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS.", "RECURSO DE APELACIÓN. LA INCLUSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y

Pág.

ACTUALIZACIÓN (UMA) EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE ESTABLECE SU PROCEDENCIA, NO REQUIERE DE INTERPRETACIÓN ADICIONAL PARA FIJAR EL MONTO A QUE ALUDE EL PROPIO PRECEPTO." y "RECURSO DE APELACIÓN. SU PROCEDENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS, NO ESTÁ SUJETA A INTERPRETACIÓN ADICIONAL DE LOS ARTÍCULOS 626 Y 168 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA." 1325

Magistrado José Martín Hernández Simental.—Contradicción de tesis 7/2019.—Entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentaron las tesis PC.XVII. J/26 C (10a.), PC.XVII. J/27 C (10a.) y PC.XVII. J/25 C (10a.), de títulos y subtítulos: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS.", "RECURSO DE APELACIÓN. LA INCLUSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE ESTABLECE SU PROCEDENCIA, NO REQUIERE DE INTERPRETACIÓN ADICIONAL PARA FIJAR EL MONTO A QUE ALUDE EL PROPIO PRECEPTO." y "RECURSO DE APELACIÓN. SU PROCEDENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS, NO ESTÁ SUJETA A INTERPRETACIÓN ADICIONAL DE LOS ARTÍCULOS 626 Y 168 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA."..... 1329

Magistrado Gilberto Romero Guzmán.—Contradicción de tesis 29/2019.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo, Tercero y Noveno, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.I.L. J/68 L (10a.), de título y subtítulo: "TRABAJADORES DE CONFIANZA DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (NAFIN). HIPÓTESIS EN LA QUE TIENEN DERECHO AL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS."..... 1523

Pág.

Magistrado José Luis Caballero Rodríguez.—Contradicción de tesis 29/2019.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo, Tercero y Noveno, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.I.L. J/68 L (10a.), de título y subtítulo: "TRABAJADORES DE CONFIANZA DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (NAFIN). HIPÓTESIS EN LA QUE TIENEN DERECHO AL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS." 1524

Magistrado Ricardo Paredes Calderón.—Amparo en revisión 231/2019.—Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis I.9o.P.289 P (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE APELACIÓN O REVOCACIÓN EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONE PREVIAMENTE A LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAERÁ A LA PETICIÓN RESPECTIVA, NO OBSTANTE QUE EL RECURRENTE SE ENCUENTRE PRIVADO DE SU LIBERTAD (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO ABROGADA)." 1711

Índice de Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales

Acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018.—Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y Comisión Nacional de los Derechos Humanos.—Ministro Ponente: Luis María Aguilar Morales. Relativa a los temas síntesis: "Acción de inconstitucionalidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene legitimación para promoverla cuando considere que una norma general viola derechos humanos.", "Acción de inconstitucionalidad. La legitimación de las Comisiones de Derechos Humanos de las entidades federativas se surte cuando en su demanda aduzcan una violación a derechos humanos por leyes expedidas por las Legislaturas Locales.", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Constituye un mandato convencional en la elaboración de leyes y adopción de políticas sobre cuestiones relacionadas con la condición de aquéllas.", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Ante su falta de regulación interna en el Estado Mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe señalar estándares mínimos para cumplir con esa obligación.", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Elementos conforme a los cuales debe interpretarse.", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Principios rectores.", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Lineamientos establecidos por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas.", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Lineamientos contenidos en la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las

	Instancia	Pág.
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Elementos mínimos para su cumplimiento.", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Constituye un requisito procedimental de rango constitucional cuya omisión representa un vicio formal e invalidante del procedimiento legislativo.", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Omisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de satisfacerlo en torno a una legislación que las afecta directamente (Invalidez de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México).", "Derecho a la consulta de las personas con discapacidad. La celebración de una mesa de análisis entre el Poder Legislativo y los representantes de distintas asociaciones civiles en torno a una legislación que las afecta directamente no implica su acatamiento (Invalidez de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México)." y "Acción de inconstitucionalidad. Declaración de invalidez que surte efectos a partir de los ciento ochenta días naturales siguientes al día en que se publique en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de que no se prive a las personas con Síndrome de Down de los posibles efectos benéficos de la norma invalidada (Invalidez de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México)."	P.	5

Acción de inconstitucionalidad 128/2015.—Comisión Nacional de los Derechos Humanos.—Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Relativa a los temas síntesis: "Acción de inconstitucionalidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene legitimación para promoverla cuando considere que una norma general viola derechos humanos.", "Derecho humano a la igualdad y no discriminación. Sus alcances.", "Discriminación normativa. Formas de exclusión tácita y por diferenciación expresa.", "Discriminación normativa. Su justificación a partir de un análisis de razonabilidad o test ordinario de igualdad.", "Derecho humano a la igualdad y no discriminación.

La distinción entre Jueces de primera instancia menores de sesenta y cinco años y los que hayan cumplido esta edad, para efectos de la remoción del cargo, se realiza con base en la categoría sospechosa de edad (Artículo 84, párrafo último, de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala).", "Autonomía e independencia judicial. Garantías constitucionales que gravitan a su alrededor.", "Autonomía e independencia judicial. La garantía de estabilidad de los Jueces y Magistrados en el cargo comprende la determinación en las Constituciones Locales del tiempo de duración en su ejercicio y la posibilidad de ser ratificado en términos del periodo señalado.", "Autonomía e independencia judicial. La fijación de la duración vitalicia en el cargo, así como el establecimiento de una edad límite y de un periodo fijo, son criterios que aseguran las garantías de inamovilidad y de estabilidad judicial.", "Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. El establecimiento de un periodo de duración en el cargo de Juez de primera instancia para asegurar un relevo generacional en aquel Poder es una finalidad constitucionalmente imperiosa (Artículo 84, párrafo último, de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala).", "Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Para considerar que el retiro forzoso se trata de una medida estrechamente vinculada con los fines de garantizar la estabilidad en el empleo de los juzgadores y el acceso igualitario a la función jurisdiccional, es imperativo que se diseñe como una medida que opera por ministerio de ley (Artículo 84, párrafo último, de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala).", "Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. La previsión de que los Jueces de primera instancia podrán ser removidos de su cargo por el Consejo de la Judicatura por haber cumplido sesenta y cinco años debe interpretarse en el sentido de que establece el retiro forzoso por ministerio de ley (Interpretación conforme del artículo 84, párrafo último, de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala)." y "Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. La previsión de un retiro forzoso para los Jueces de primera instancia que hayan cumplido sesenta y cinco años no impide que éstos puedan ejercer como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso, por lo

	Instancia	Pág.
que constituye la medida menos restrictiva para garantizar el acceso igualitario a la función jurisdiccional (Artículo 84, párrafo último, de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala)."	P.	73

Acción de inconstitucionalidad 100/2016.—Procurador General de la República.—Ministro Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Relativa a los temas síntesis: "Acción de inconstitucionalidad. Lineamientos mínimos requeridos para considerar que la norma general impugnada constituye un nuevo acto legislativo.", "Principio de exacta aplicación de la ley en su vertiente de taxatividad. Constituye una exigencia de racionalidad lingüística que exige al legislador la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta típica y sus consecuencias jurídicas.", "Principio de exacta aplicación de la ley en su vertiente de taxatividad. Sólo puede obligar al legislador a una determinación suficiente y no a la mayor precisión imaginable.", "Principio de exacta aplicación de la ley en su vertiente de taxatividad. Elementos para analizar el grado de suficiencia en la claridad y precisión de una norma.", "Principio de legalidad constitucional. Directrices a partir de las cuales se verifica.", "Normas penales en blanco. Sus tipos conforme a la jurisprudencia.", "Principio de reserva de ley. Su naturaleza y alcances.", "Delitos en materia de tránsito y transporte en el Estado de Jalisco. La referencia indeterminada de un tipo penal a cualquier otra infracción a la normativa en dicha materia vulnera el principio de exacta aplicación de la ley en su vertiente de taxatividad (Invalidez del artículo 122 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco).", "Delitos en materia de tránsito y transporte en el Estado de Jalisco. La referencia indeterminada de un tipo penal a cualquier otra infracción a la normativa en dicha materia vulnera el principio de reserva de ley (Invalidez del artículo 122 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco).", "Acción de inconstitucionalidad. Declaración de invalidez de una norma general en vía de consecuencia (Invalidez de los artículos 123 y 124 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco).", "Acción de in-

	Instancia	Pág.
constitucionalidad. Debe declararse la invalidez de todo el contenido de la norma impugnada, ante la posibilidad de dejar un tipo penal carente de sentido y que no ha sido el pretendido por el legislador local (Invalidez del artículo 122 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco).", "Acción de inconstitucionalidad. Declaración de invalidez de una norma penal con efectos retroactivos al momento de su entrada en vigor (Invalidez de los artículos 122, 123 y 124 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco)." y "Acción de inconstitucionalidad. Los efectos de la declaración de invalidez de una norma penal no se ven afectados por su reforma con posterioridad a su impugnación en ese medio de control (Invalidez de los artículos 123 y 124 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco)."	P.	112

Acción de inconstitucionalidad 108/2019 y su acumulada 118/2019.—Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Partido Político Más por Hidalgo.—Ministra Ponente: Yasmín Esquivel Mossa. Relativa a los temas síntesis: "Acción de inconstitucionalidad. Requisitos para que puedan promoverla los partidos políticos.", "Consulta indígena. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a ser consultados previamente a través de sus representantes ante medidas legislativas que puedan afectarlos directamente.", "Consulta indígena. Omisión del Congreso del Estado de Hidalgo de realizarla previamente a la reforma de una legislación que afecta directamente a aquel grupo de personas (Invalidez del Decreto Núm. 203 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de septiembre de 2019).", "Consulta indígena. Omisión del Congreso del Estado de Hidalgo de establecer comunicación constante entre las autoridades representativas de aquellas comunidades y el Poder Legislativo Local en relación con una legislación que afecta directamente a aquel grupo de personas (Invalidez del Decreto Núm. 203 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado

de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de septiembre de 2019).", "Consulta indígena. Omisión del Congreso del Estado de Hidalgo de entregar información culturalmente adecuada a aquel grupo de personas en relación con una legislación que los afecta directamente (Invalidez del Decreto Núm. 203 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de septiembre de 2019).", "Consulta indígena. Omisión del Congreso del Estado de Hidalgo de otorgar participación al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en relación con una legislación que afecta directamente a aquel grupo de personas (Invalidez del Decreto Núm. 203 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de septiembre de 2019).", "Consulta indígena. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es la autoridad competente en la materia.", "Consulta indígena. Omisión del Congreso del Estado de Hidalgo de otorgar participación a la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas en relación con una legislación que afecta directamente a aquel grupo de personas (Invalidez del Decreto Núm. 203 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el periódico oficial de la entidad el 9 de septiembre de 2019).", "Consulta indígena. La invitación a diversas autoridades por parte del Congreso del Estado de Hidalgo, a efecto de su participación en asambleas regionales, con cinco o seis días de anticipación a éstas y sin haberla extendido respecto de una etapa informativa, constituye una convocatoria inoportuna (Invalidez del Decreto Núm. 203 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de septiembre de 2019).", "Consulta indígena. La habilitación de teléfonos y páginas electrónicas para transmitir información a los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Hidalgo, así como la publicación de las convocatorias respectivas en periódicos, radio y televisión, no son medios idóneos para garantizar una par-

	Instancia	Pág.
ticipación culturalmente adecuada y completa de aquéllos, atendiendo al contexto geográfico en el que se sitúan (Invalidez del Decreto Núm. 203 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de septiembre de 2019).", "Consulta indígena. No existe una participación suficiente que represente los intereses de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Hidalgo en relación con una legislación que los afecta directamente cuando, a pesar de las convocatorias realizadas por el Congreso del Estado y de las propuestas recibidas, a las asambleas sólo asiste el punto veintiuno por ciento del total de los indígenas de la entidad (Invalidez del Decreto Núm. 203 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de septiembre de 2019)." y "Acción de inconstitucionalidad. Declaración de invalidez que surte efectos a partir del día siguiente a aquel en que concluya el próximo proceso electoral ordinario del Estado de Hidalgo, en la inteligencia de que, inmediatamente después de finalizado, el legislador local deberá actuar para subsanar el vicio de inconstitucionalidad decretado, observando como mínimo los lineamientos del 'Protocolo para la Implementación de Consultas a Pueblos y Comunidades Indígenas de Conformidad con Estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes' (Invalidez del Decreto Núm. 203 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de septiembre de 2019)."	P.	193

Índice de Normativa, Acuerdos Relevantes y Otros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Pág.

Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el siete de diciembre de dos mil veinte, en virtud del cual se prorroga del siete al treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, la vigencia de los puntos del tercero al noveno del Acuerdo General Número 14/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se reanudan los plazos procesales suspendidos desde el dieciocho de marzo de dos mil veinte. 1741

Índice de Normativa, Acuerdos Relevantes y Otros del Consejo de la Judicatura Federal

Pág.

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la designación de los Consejeros que integrarán la Comisión que debe proveer los trámites y resolver los asuntos de notoria urgencia que se presenten durante el receso correspondiente al segundo periodo de sesiones de 2020. 1747

Acuerdo General 28/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transformación de los Juzgados Cuarto, Quinto, Séptimo y Octavo de Distrito en Materia Mercantil Especializados en Juicios de Cuantía Menor con sede en la Ciudad de México, y del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado en Extinción de Dominio con jurisdicción en la República Mexicana, en Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con competencia en la República Mexicana y Especializados en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, respectivamente; a la creación del Juzgado Sexto de Distrito con la misma semiespecialidad y residencia; la oficina de correspondencia común que les prestará servicio, así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos; y que reforma los similares 20/2009, que crea el Centro Auxiliar de la Primera Región, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán; y 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 1750

Acuerdo General 29/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito,

Pág.

así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados en el circuito indicado; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 1767

Acuerdo General 30/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en el Estado y residencia indicados; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 1773

Acuerdo General 31/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en el Estado y residencia indicados; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 1780

Acuerdo General 32/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en el Estado y residencia indicados; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territo-

Pág.

rial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 1787

Acuerdo General 33/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, en la Ciudad de México; así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas en la entidad federativa indicada y jurisdicción en toda la República; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 1794

Acuerdo CCNO/6/2020, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio de los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México y de la Oficina de Correspondencia Común. 1801

Índice en Materia Constitucional

	Número de identificación	Pág.
AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. LA VÍCTIMA U OFENDIDO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN EN SU CONTRA, PORQUE AFECTA INDIRECTAMENTE SU DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, EN LOS CASOS EN QUE ÉSTA PROCEDA, Y PORQUE CON DICHA LEGITIMACIÓN SE ASEGURA SU DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.	1a./J. 54/2020 (10a.)	295
CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO. LA LEY RELATIVA NÚMERO 676, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 3 DE ENERO DE 1984, CARECE DE VALIDEZ Y ES INCONSTITUCIONAL AL NO HABER REFRENDADO EL TITULAR DEL RAMO EL DECRETO CORRESPONDIENTE.	PC.XXI. J/17 A (10a.)	775
COMISIÓN DE MAGISTRADOS NOMBRADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS PARA EJERCER LAS ATRIBUCIONES ANTES ENCOMENDADAS AL EXTINTO CONSEJO DE LA JUDICATURA. ES CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE COMPETENTE PARA TRAMITAR Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SOMETIDOS A SU POTESTAD, HASTA LA FECHA EN QUE QUEDÓ INTEGRADA Y ENTRÓ EN FUNCIONES LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DISCIPLINA DEL PROPIO TRIBUNAL SUPERIOR.	PC.XVIII.P.A. J/8 A (10a.)	857
COMPROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDE-		

	Número de identificación	Pág.
RACIÓN ABROGADO, AL DESARROLLAR LOS REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER PARA IDENTIFICAR BIENES O MERCANCÍAS, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 29-A, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.	XVII.2o.P.A.62 A (10a.)	1663
COMPROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ABROGADO, AL ESTABLECER DETERMINADOS REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER PARA IDENTIFICAR BIENES O MERCANCÍAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY.	XVII.2o.P.A.61 A (10a.)	1665
CONCUBINATO. EL ARTÍCULO 65 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MORELOS AL ESTABLECER COMO REQUISITO QUE AMBOS CONCUBINOS ESTÉN LIBRES DE MATRIMONIO PARA ACTUALIZARLO, RESULTA INCONSTITUCIONAL POR ESTABLECER UNA DISTINCIÓN BASADA EN CATEGORÍA SOSPECHOSA QUE NO SUPERA UN EXAMEN ESTRICTO DE CONSTITUCIONALIDAD.	1a. LV/2020 (10a.)	351
CONTROL DEL TABACO. EL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN VI, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.	**REPUBLICADA POR CORRECCIÓN EN EL PRECEDENTE** 1a. XVI/2020 (10a.)	352
CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS IMPUESTOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. POR REGLA GENERAL, NO CONSTITUYEN UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA TRASCENDENTAL O UN ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL Y, POR TANTO, NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN AL TÉRMINO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA.	1a./J. 63/2020 (10a.)	324
COSTAS. EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL SEGUIR UN SISTEMA DE CRI-		

	Número de identificación	Pág.
TERIOS OBJETIVOS PARA SU CONDENA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.	1a. LII/2020 (10a.)	354
DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL EL JUEZ DE ENJUICIAMIENTO ESTÁ OBLIGADO A CORROBORAR LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR AL INICIO DE SU INTERVENCIÓN.	1a./J. 41/2020 (10a.)	327
DELITO DE VIOLACIÓN. EL ARTÍCULO 265 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO VULNERA LOS DERECHOS HUMANOS DE IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER, Y NO DISCRIMINACIÓN ANTE LA LEY, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.	I.9o.P.288 P (10a.)	1671
DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN III, Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL PREVER LA SANCIÓN CONSISTENTE EN TENERLA POR NO PRESENTADA ANTE LA OMISIÓN DEL ACCIONANTE DE ADJUNTAR EL DOCUMENTO EN QUE CONSTE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO OBSTANTE EL REQUERIMIENTO FORMULADO, RESPETA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.	2a./J. 50/2020 (10a.)	385
DERECHO DE DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. LA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DE LOS DEFENSORES EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL NO IMPLICA PER SE UNA VIOLACIÓN AL DERECHO DE LOS IMPUTADOS.	1a./J. 42/2020 (10a.)	329
DERECHO DE PETICIÓN. CONCEPTO DE "BREVE TÉRMINO" PARA EFECTOS DE LA RESPUESTA QUE DEBE DARSE AL PARTICULAR QUE LO EJERCIÓ.	XVII.2o.P.A.1 CS (10a.)	1674

	Número de identificación	Pág.
INDEMNIZACIÓN JUSTA POR CAUSA DE EXPROPIACIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN, OCUPACIÓN TEMPORAL O LIMITACIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, SU INTERPRETACIÓN A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE PREVALENCIA DE INTERPRETACIÓN DE NORMAS Y PRO PERSONA, PERMITEN SATISFACERLA.	PC.XIX. J/16 A (10a.)	1000
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. EL ESTÁNDAR DE REAL MALICIA RESULTA APLICABLE CUANDO LA INFORMACIÓN DIVULGADA SE RELACIONA CON CUESTIONES DE INTERÉS PÚBLICO, AUN CUANDO EL SUJETO QUE SE DICE AFECTADO NO SEA UNA FIGURA PÚBLICA.	1a. LIII/2020 (10a.)	355
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. LOS ABOGADOS NO DEBEN SER CONSIDERADOS COMO PERSONAS PRIVADAS CON PROYECCIÓN PÚBLICA POR EL SOLO HECHO DE EJERCER ESA PROFESIÓN EN EL APARATO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA O POR SU DESEMPEÑO EN CIERTA MATERIA DEL DERECHO.	1a. LIV/2020 (10a.)	357

Índice en Materia Penal

	Número de identificación	Pág.
AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. LA VÍCTIMA U OFENDIDO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN EN SU CONTRA, PORQUE AFECTA INDIRECTAMENTE SU DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, EN LOS CASOS EN QUE ÉSTA PROCEDA, Y PORQUE CON DICHA LEGITIMACIÓN SE ASEGURA SU DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.	1a./J. 54/2020 (10a.)	295
CONCURSO IDEAL DE DELITOS. LA POTESTAD DE AUMENTAR LA PENA CORRESPONDIENTE AL DELITO MAYOR CON LA DE LOS RESTANTES, ESTÁ CONDICIONADA A LA OBLIGACIÓN DE FUNDAR Y MOTIVAR ESA DECISIÓN (ARTÍCULO 64 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016).	1a./J. 53/2020 (10a.)	321
CONFLICTO COMPETENCIAL POR RAZÓN DE FUERO ENTRE JUECES DE EJECUCIÓN PENAL. ES INEXISTENTE SI LOS CONTENDIENTES ADUJERON CARECER DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DEL SENTENCIADO, SIN QUE EXISTA UNA PRETENSIÓN CONCRETA DE LAS PARTES SOMETIDA A SU JURISDICCIÓN.	I.9o.P.290 P (10a.)	1667
CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS IMPUESTOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. POR REGLA GENERAL,		

	Número de identificación	Pág.
NO CONSTITUYEN UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA TRASCENDENTAL O UN ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL Y, POR TANTO, NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN AL TÉRMINO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA.	1a./J. 63/2020 (10a.)	324
DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL EL JUEZ DE ENJUICIAMIENTO ESTÁ OBLIGADO A CORROBORAR LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR AL INICIO DE SU INTERVENCIÓN.	1a./J. 41/2020 (10a.)	327
DELITO DE VIOLACIÓN. EL ARTÍCULO 265 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO VULNERA LOS DERECHOS HUMANOS DE IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER, Y NO DISCRIMINACIÓN ANTE LA LEY, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.	I.9o.P.288 P (10a.)	1671
DERECHO A INTERROGAR TESTIGOS DE CARGO EN EL PROCESO PENAL. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A LA OBLIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE OBTENER LA COMPARECENCIA DE LA VÍCTIMA DEL DELITO ANTE EL JUEZ, SI POR RAZONES DE GÉNERO Y VULNERABILIDAD, NO FUE POSIBLE LOCALIZARLA.	I.9o.P.287 P (10a.)	1673
DERECHO DE DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. LA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DE LOS DEFENSORES EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL NO IMPLICA PER SE UNA VIOLACIÓN AL DERECHO DE LOS IMPUTADOS.	1a./J. 42/2020 (10a.)	329
EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PARA ASEGURAR LA DEFENSA ADECUADA EN EL PRO-		

	Número de identificación	Pág.
CESO PENAL. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE VERIFICAR QUE LA PERSONA QUE ASISTIÓ AL IMPUTADO EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL CUENTE CON LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO; EL TRIBUNAL DEBE CONCEDER EL AMPARO CON LA FINALIDAD DE QUE SE HAGA LA VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.	1a./J. 62/2020 (10a.)	331
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO.	PC.XVII. J/29 P (10a.)	1154
ORDEN DE APREHENSIÓN. AL SER UN ACTO FUERA DE PROCESO QUE ATENTA CONTRA LA LIBERTAD, LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA NO ESTÁ CONDICIONADA AL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, POR ACTUALIZARSE LA HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SALVO CUANDO EL QUEJOSO HAYA TENIDO CONOCIMIENTO PLENO DE AQUÉLLA POR CUALQUIER MEDIO.	XI.P.43 P (10a.)	1695
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. SE INTERRUMPE CON LA SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO DE AUDIENCIA PARA FORMULAR LA IMPUTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).	PC.XVII. J/28 P (10a.)	1285
QUERELLA. PARA SATISFACER ESTE REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN LA ETAPA DE JUICIO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, LA LEGITIMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL OFENDIDA PARA FORMULARLA, DEBE DEMOSTRARSE DURANTE EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA RESPECTIVA MEDIANTE LA INCORPORACIÓN		

	Número de identificación	Pág.
AL JUICIO DEL PODER NOTARIAL CORRESPONDIENTE.	I.9o.P.280 P (10a.)	1701
RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL TRIBUNAL DE ALZADA, LUEGO DE LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DE LA RACIONALIDAD DEL EJERCICIO DE MOTIVACIÓN REALIZADO POR EL JUEZ DE CONTROL SOBRE LA APRECIACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA, ESTÁ FACULTADO PARA REASUMIR JURISDICCIÓN Y CORREGIRLA, SIN VULNERAR EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN.	PC.XV. J/42 P (10a.)	1438
RECURSO DE APELACIÓN O REVOCACIÓN EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONE PREVIAMENTE A LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAERÁ A LA PETICIÓN RESPECTIVA, NO OBSTANTE QUE EL RECURRENTE SE ENCUENTRE PRIVADO DE SU LIBERTAD (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO ABROGADA).	I.9o.P.289 P (10a.)	1713
REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DE LA SALA QUE LA ORDENA CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.	I.9o.P.286 P (10a.)	1719
SENTENCIA DE AMPARO QUE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE NIEGA REQUERIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE SU CUMPLIMIENTO INMEDIATO.	1a./J. 59/2020 (10a.)	345
TÉRMINOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD SE LE NOTIFICA		

	Número de identificación	Pág.
PERSONALMENTE EL PLAZO PARA AMPLIAR SU DEMANDA Y NO TIENE LA ASESORÍA DE UN DEFENSOR, A FIN DE GARANTIZAR SU ACCESO COMPLETO Y EFICAZ A LA JUSTICIA, NO DEBEN CORRERLE AQUÉLLOS NI PRECLUIR SU DERECHO PARA EFECTUARLA.	XXVII.1o.7 P (10a.)	1731
TORTURA. ES INOPERANTE EL RECLAMO E INATENDIBLE LA PRETENSIÓN DEL QUEJOSO, PARA EL EFECTO DE QUE LA RESPONSABLE ORDENE LA INVESTIGACIÓN PERTINENTE, DE LA ADUCIDA CON RELACIÓN A COIMPUTADOS NO QUEJOSOS.	V.2o.P.A.21 P (10a.)	1732
VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). LA CERTIFICACIÓN DE QUE SON COPIA AUTÉNTICA DEL REGISTRO AUDIOVISUAL NO REQUIERE QUE EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN EN LA MATERIALIDAD DEL DISCO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA.	PC.VI.P. J/7 P (10a.)	1650

Índice en Materia Administrativa

	Número de identificación	Pág.
ABOGADO PATRONO. EL DESIGNADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO [ALCANCE Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 90/2012 (10a.)].	PC.III.A. J/91 A (10a.)	504
ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO. NO LO CONSTITUYE EL COBRO DEL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EFECTUADO A TRAVÉS DEL AVISO-RECIBO EXPEDIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE).	PC.XVIII.P.A. J/12 K (10a.)	580
AMPARO CONTRA LEYES. HIPÓTESIS EN LA QUE SE ACREDITA, DE MANERA IMPLÍCITA, LA APLICACIÓN EN PERJUICIO DEL QUEJOSO DEL ARTÍCULO 67, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ABROGADA).	PC.XV. J/43 A (10a.)	619
ASPIRANTE AL EJERCICIO DEL NOTARIADO Y NOTARIO TITULAR. LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE PUEBLA PARA OBTENER LAS PATENTES RELATIVAS, NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PARA SER CONSIDERADOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.	VI.1o.A.123 A (10a.)	1659

	Número de identificación	Pág.
CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN ORDENADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. OPERA UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SIN QUE ÉSTA DICTE LA RESOLUCIÓN QUE DEFINA LA SITUACIÓN DEL PARTICULAR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.	PC.XVI.A. J/29 A (10a.)	722
CANCELACIÓN DE DERECHOS SOBRE UNA PARCELA. CUANDO SE EMITE CON MOTIVO DE LO ORDENADO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS Y NO EN FORMA AUTÓNOMA POR EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.	XVII.2o.P.A.59 A (10a.)	1661
CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO. LA LEY RELATIVA NÚMERO 676, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 3 DE ENERO DE 1984, CARECE DE VALIDEZ Y ES INCONSTITUCIONAL AL NO HABER REFRENDADO EL TITULAR DEL RAMO EL DECRETO CORRESPONDIENTE.	PC.XXI. J/17 A (10a.)	775
COMISIÓN DE MAGISTRADOS NOMBRADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS PARA EJERCER LAS ATRIBUCIONES ANTES ENCOMENDADAS AL EXTINTO CONSEJO DE LA JUDICATURA. ES CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE COMPETENTE PARA TRAMITAR Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SOMETIDOS A SU POTESTAD, HASTA LA FECHA EN QUE QUEDÓ INTEGRADA Y ENTRÓ EN FUNCIONES LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DISCIPLINA DEL PROPIO TRIBUNAL SUPERIOR.	PC.XVIII.P.A. J/8 A (10a.)	857
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. AL TRATARSE DE UN ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO, LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE		

	Número de identificación	Pág.
UNA MULTA A UN SUJETO OBLIGADO EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, NO ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL.	IV.2o.A.149 A (10a.)	1662
COMPROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ABROGADO, AL DESARROLLAR LOS REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER PARA IDENTIFICAR BIENES O MERCANCÍAS, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 29-A, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.	XVII.2o.P.A.62 A (10a.)	1663
COMPROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ABROGADO, AL ESTABLECER DETERMINADOS REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER PARA IDENTIFICAR BIENES O MERCANCÍAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY.	XVII.2o.P.A.61 A (10a.)	1665
CONTROL DEL TABACO. EL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN VI, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.	**REPUBLICADA POR CORRECCIÓN EN EL PRECEDENTE** 1a. XVI/2020 (10a.)	352
COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS COMPETENCIA DE LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS COORDINADORES DE ÁREA QUE PERTENEZCAN A ÉSTAS ESTÁN FACULTADOS PARA EXPEDIRLAS, AL ACTUAR EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE SU TITULAR.	(IV Región)1o.25 A (10a.)	1670
DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN III, Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL PREVER LA SANCIÓN CONSISTENTE EN		

	Número de identificación	Pág.
TENERLA POR NO PRESENTADA ANTE LA OMISIÓN DEL ACCIONANTE DE ADJUNTAR EL DOCUMENTO EN QUE CONSTE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO OBSTANTE EL REQUERIMIENTO FORMULADO, RESPETA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.	2a./J. 50/2020 (10a.)	385
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. PARA QUE UNA EMPRESA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE EJERCIÓ LA OPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6, NUMERAL 5, DEL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE DICHA CONTRIBUCIÓN, PUEDA DEDUCIR EL PAGO DE INTERESES CON CARGO A LAS RENTAS INMOBILIARIAS PROCEDENTES DE MÉXICO O POR HABER TOMADO EN PRÉSTAMO EL CAPITAL AQUÍ INVERTIDO, DEBE REALIZAR LA RETENCIÓN RELATIVA.	I.4o.A.205 A (10a.)	1679
INDEMNIZACIÓN JUSTA POR CAUSA DE EXPROPIACIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN, OCUPACIÓN TEMPORAL O LIMITACIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, SU INTERPRETACIÓN A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE PREVALENCIA DE INTERPRETACIÓN DE NORMAS Y PRO PERSONA, PERMITEN SATISFACERLA.	PC.XIX. J/16 A (10a.)	1000
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT). CUANDO EN EL AMPARO SE RECLAME LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR DE FONDOS, NO ES PROCEDENTE DAR VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME JUSTIFICADO PARA QUE AMPLÍE SU DEMANDA CONTRA LA RESPUESTA EMITIDA.	V.2o.P.A.33 A (10a.)	1681
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DOBLE		

	Número de identificación	Pág.
TRIBUTACIÓN. AL REALIZARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA TANTO SUS PREVISIONES Y TERMINOLOGÍA, COMO LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL.	I.4o.A.206 A (10a.)	1682
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA PROPUESTA DE COBRO Y RECEPCIÓN DEL PAGO DE LOS DERECHOS DE PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Y/O URBANIZACIÓN, CONSTITUYEN UN ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).	PC.III.A. J/90 A (10a.)	1063
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA FALTA DEL PAGO ESTIPULADO EN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ES INNECESARIA UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O NEGATIVA FICTA, SI TANTO LA LEY APLICABLE COMO EL CLAUSULADO RESPECTIVO PRECISAN LA FORMA Y FECHA PARA CUMPLIR ESA OBLIGACIÓN.	XVII.1o.P.A.31 A (10a.)	1685
JUICIO DE NULIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE IMPONE MULTA A UN SUJETO OBLIGADO POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE LA MATERIA.	PC.IV.A. J/50 A (10a.)	1199
MAGISTRADO INSTRUCTOR EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CARECE DE FACULTADES PARA DESECHAR LA DEMANDA DE NULIDAD, BAJO EL ARGUMENTO DE QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO ES DEFINITIVA, PUES ÉSA NO ES UNA CAUSA NOTORIA NI MANIFIESTA PARA ELLO.	XVII.2o.P.A.58 A (10a.)	1687
NOTARIO TITULAR. EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE PUEBLA, QUE ESTABLECE LA IMPROCEDENCIA DE RECURSO		

	Número de identificación	Pág.
ALGUNO CONTRA LAS DECISIONES DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO Y DEL JURADO EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PATENTE RELATIVA, TIENE EL EXCLUSIVO EFECTO DE DAR DEFINITIVIDAD A DICHOS ACTOS, LO QUE HACE PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL.	VI.1o.A.124 A (10a.)	1689
NOTARIO TITULAR. LAS ETAPAS O FASES QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE PUEBLA PARA OBTENER LA PATENTE RELATIVA, NO SON RECLAMABLES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO ACTOS DESTACADOS, AL CONSTITUIR UNA UNIDAD.	VI.1o.A.122 A (10a.)	1690
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS SENTENCIAS DE NULIDAD. CONSISTE EN ASEGURAR LA RESPUESTA AL TEMA ESENCIAL MATERIA DE LA LITIS.	(IV Región)1o.28 A (10a.)	1698
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. SUS REGISTRADORES SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO CALIFICAN UNILATERALMENTE UNA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN O POR LOS VICIOS PROPIOS DE LA EJECUTADA POR ORDEN DE DIVERSA AUTORIDAD.	(IV Región)1o.26 A (10a.)	1715
VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. CUANDO EN EL AMPARO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE TRAMITAR Y RESOLVER UNA DENUNCIA CIUDADANA POR REALIZARSE ESAS ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO LEGAL Y REGLAMENTARIAMENTE PERMITIDO Y EL QUEJOSO ADUCE VIOLACIÓN A SU DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR, POR EL EXCESO DE		

	Número de identificación	Pág.
RUIDO Y LA ALTERACIÓN AL ORDEN QUE PRODUCEN, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DAR EFECTOS A SU SENTENCIA PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TOMEN TODAS LAS MEDIDAS POSITIVAS PARA SU PROTECCIÓN.	(IV Región)1o.27 A (10a.)	1735

Índice en Materia Civil

	Número de identificación	Pág.
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. AL EXCEDERSE EL PLAZO DE EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY RELATIVA, SE CONTRAVIENE LA FINALIDAD PARA LAS QUE FUERON ESTABLECIDAS.	I.9o.C.51 C (10a.)	1657
ALIMENTOS DEL ACREEDOR MAYOR DE EDAD. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE VALORAR PARA DETERMINAR SI SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DEL DEUDOR DE PROPORCIONARLOS CUANDO LA SECUENCIA ENTRE LA TERMINACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y EL INICIO DE LA SUPERIOR NO ES INMEDIATA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO).	XXII.2o.A.C.9 C (10a.)	1658
AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN.	1a./J. 52/2020 (10a.)	293
CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR LA FALTA O RETRASO EN LA RETRIBUCIÓN DE LAS CANTIDADES SUSTRAÍDAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.	1a./J. 61/2020 (10a.)	298

	Número de identificación	Pág.
CONCUBINATO. EL ARTÍCULO 65 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MORELOS AL ESTABLECER COMO REQUISITO QUE AMBOS CONCUBINOS ESTÉN LIBRES DE MATRIMONIO PARA ACTUALIZARLO, RESULTA INCONSTITUCIONAL POR ESTABLECER UNA DISTINCIÓN BASADA EN CATEGORÍA SOSPECHOSA QUE NO SUPERA UN EXAMEN ESTRICTO DE CONSTITUCIONALIDAD.	1a. LV/2020 (10a.)	351
COSTAS. EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL SEGUIR UN SISTEMA DE CRITERIOS OBJETIVOS PARA SU CONDENA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.	1a. LII/2020 (10a.)	354
EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL DEMANDADO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. DEBE DECRETARSE LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL ACTOR DE PUBLICAR LOS EDICTOS.	1a./J. 57/2020 (10a.)	335
INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO MERCANTIL. LA PERSONA AUTORIZADA EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO CUENTA CON FACULTADES PARA INTERPONERLO.	1a./J. 55/2020 (10a.)	339
JUICIO ORAL MERCANTIL. EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA NO APLICA LA EXIGENCIA DE ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 1061 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.	1a./J. 60/2020 (10a.)	341
PENSIÓN ALIMENTICIA. LA ACCIÓN PARA SOLICITAR SU MODIFICACIÓN PUEDE EJERCERSE, INDISTINTAMENTE, EN UN PROCEDIMIENTO PRINCIPAL O EN UNO INCIDENTAL (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y VERACRUZ).	1a./J. 56/2020 (10a.)	343

	Número de identificación	Pág.
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS.	PC.XVII. J/26 C (10a.)	1350
RECURSO DE APELACIÓN. LA INCLUSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE ESTABLECE SU PROCEDENCIA, NO REQUIERE DE INTERPRETACIÓN ADICIONAL PARA FIJAR EL MONTO A QUE ALUDE EL PROPIO PRECEPTO.	PC.XVII. J/27 C (10a.)	1352
RECURSO DE APELACIÓN. SU PROCEDENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS, NO ESTÁ SUJETA A INTERPRETACIÓN ADICIONAL DE LOS ARTÍCULOS 626 Y 168 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	PC.XVII. J/25 C (10a.)	1355
SEPARACIÓN DEL DOMICILIO FAMILIAR. CONTRA LA MEDIDA PROVISIONAL DECRETADA EN UN PROCEDIMIENTO PRIVILEGIADO, PREVIA A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE DIVORCIO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA) [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA VI.2o.C.31 C (10a.)].	VI.2o.C.71 C (10a.)	1723
SUSTITUCIÓN PROCESAL DE LA PARTE ACTORA. EN LOS CASOS EN QUE SE PONGA EN CONOCIMIENTO DEL JUZGADOR PREVIO A ORDENARSE EL EMPLAZAMIENTO, DEBE CORRÉRSELE TRASLADO A LA PARTE DEMANDADA CON LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE AL EFECTO SE APORTEN, CUYA OMISIÓN ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL.	VII.2o.C.223 C (10a.)	1728

	Número de identificación	Pág.
VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS CELEBRADAS EN LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES. PARA LA VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE LAS CONTIENEN, NO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE SE HAGA CONSTAR QUE "ES COPIA FIEL Y EXACTA" DEL REGISTRO ORIGINAL.	PC.I.C. J/105 C (10a.)	1555

Índice en Materia Laboral

	Número de identificación	Pág.
CONFESIÓN FICTA PARA HECHOS PROPIOS. ES SUFICIENTE LA DEL FUNCIONARIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) PARA DEMOSTRAR LA PROMESA DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE LA CLÁUSULA 56 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO A CAMBIO DE LA RENUNCIA ESCRITA DEL TRABAJADOR, SIN QUE ÉSTE TENGA LA CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE LAS FACULTADES DEL PROMITENTE.	I.3o.T.65 L (10a.)	1666
CONSTANCIA DE NEGATIVA DE PENSIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES INNECESARIO EXHIBIRLA EN EL JUICIO PARA ACCEDER A LOS RECURSOS ACUMULADOS EN LOS RUBROS DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ Y CUOTA SOCIAL, CUANDO EL ACTOR SEA BENEFICIARIO SUSTITUTO O DESIGNADO POR MERA DEPENDENCIA ECONÓMICA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 501 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.	I.11o.T.52 L (10a.)	1668
EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. CASO EN QUE EL DOMICILIO PARA TAL FIN ES SEÑALADO SIN NÚMERO.	I.3o.T.66 L (10a.)	1677
NOTIFICADORES/LOCALIZADORES CONTRATADOS EN PLAZAS NO PRESUPUESTARIAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). EL "INFORME		

	Número de identificación	Pág.
DE LOS SERVICIOS PERSONALES EN EL IMSS 2014", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE JUNIO DE 2015, CARECE DE EFICACIA JURÍDICA PARA JUSTIFICAR SU CONTRATACIÓN POR TIEMPO DETERMINADO.	I.11o.T.70 L (10a.)	1692
PENSIÓN POR INVALIDEZ, VEJEZ, O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. EL SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN LA FECHA EN QUE SE OTORGA CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE LA JUNTA TIENE OBLIGACIÓN DE CONSULTAR AL RESOLVER EL JUICIO.	III.4o.T.60 L (10a.)	1697
PENSIONES OTORGADAS AL AMPARO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA. SU INCREMENTO DEBE EFECTUARSE ANUALMENTE EN EL MES DE FEBRERO, CONFORME AL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) CORRESPONDIENTE AL AÑO CALENDARIO ANTERIOR.	PC.IV.L. J/21 L (10a.)	1224
RENUNCIA. ES ANÁLOGA A LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR CAUSA IMPUTABLE AL EMPLEADOR, COMO SUPUESTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DENOMINADOS "PLAN DE AHORRO" Y "PATRIMONIO PARA EL RETIRO", PREVISTOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES.	I.14o.T.41 L (10a.)	1716
RENUNCIA. SI EL TRABAJADOR QUE LA OBJETÓ EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD DE CONTENIDO Y FIRMA NO COMPARECE AL DESAHOGO DE LA PRUEBA EN CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA QUE OFRECIÓ, LA JUNTA DEBE APERCIBIRLO CON DECLARAR SU DESERCIÓN.	I.11o.T.39 L (10a.)	1717
SEGURO SOCIAL. CUANDO SE AJUSTE UNA PENSIÓN POR INVALIDEZ, VEJEZ O CESANTÍA EN EDAD		

	Número de identificación	Pág.
AVANZADA, DEBE CONSIDERARSE EL LÍMITE SUPERIOR DE DIEZ VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL ENTONCES DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO) AL MOMENTO EN QUE FUE OTORGADA [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA III.4o.T.47 L (10a.)].	III.4o.T.57 L (10a.)	1721
SEGURO SOCIAL. PARA LA PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DEL TOPE SALARIAL DE LOS SEGUROS DE INVALIDEZ, VEJEZ O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, NO ES OBLIGACIÓN DEL INSTITUTO PROBAR QUE EL ASEGURADO COTIZÓ MENOS QUE EL LÍMITE SUPERIOR DE DIEZ VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL ENTONCES DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO).	III.4o.T.59 L (10a.)	1722
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO. SU RECONOCIMIENTO DE BASE DEBE RETROTRAERSE HASTA EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYAN ADQUIRIDO EL DERECHO DE INAMOVILIDAD, LO QUE SUCEDE CUANDO HAN LABORADO SEIS MESES ININTERRUMPIDOS Y SIN NOTA DESFAVORABLE EN UN PUESTO BASIFICABLE.	X.1o.T.4 L (10a.)	1733
TRABAJADORES DE CONFIANZA DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (NAFIN). HIPÓTESIS EN LA QUE TIENEN DERECHO AL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS.	PC.I.L. J/68 L (10a.)	1528

Índice en Materia Común

	Número de identificación	Pág.
ABOGADO PATRONO. EL DESIGNADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO [ALCANCE Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 90/2012 (10a.)].	PC.III.A. J/91 A (10a.)	504
AMPARO CONTRA LEYES. HIPÓTESIS EN LA QUE SE ACREDITA, DE MANERA IMPLÍCITA, LA APLICACIÓN EN PERJUICIO DEL QUEJOSO DEL ARTÍCULO 67, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ABROGADA).	PC.XV. J/43 A (10a.)	619
AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO QUE REVOCA EL PROVEÍDO DICTADO POR UN JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DESECHA UNA DEMANDA POR CONSIDERAR CARECER DE COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA, PARA CONOCER DE UN JUICIO ORDINARIO CIVIL.	PC.I.C. J/106 C (10a.)	687
AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN.	1a./J. 52/2020 (10a.)	293

	Número de identificación	Pág.
ASPIRANTE AL EJERCICIO DEL NOTARIADO Y NOTARIO TITULAR. LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE PUEBLA PARA OBTENER LAS PATENTES RELATIVAS, NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PARA SER CONSIDERADOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.	VI.1o.A.123 A (10a.)	1659
CANCELACIÓN DE DERECHOS SOBRE UNA PARCELA. CUANDO SE EMITE CON MOTIVO DE LO ORDENADO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS Y NO EN FORMA AUTÓNOMA POR EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.	XVII.2o.P.A.59 A (10a.)	1661
COMPETENCIA. EL JUEZ DE DISTRITO AL QUE LE ES TURNADA UNA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE ACTUAR CONFORME A LA REGLA DE EXCEPCIÓN A LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 38 Y NO PLANTEAR IMPEDIMENTO CONFORME AL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN IV, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO.	PC.XVIII.P.A. J/11 K (10a.)	946
CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS IMPUESTOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. POR REGLA GENERAL, NO CONSTITUYEN UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA TRASCENDENTAL O UN ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL Y, POR TANTO, NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN AL TÉRMINO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA.	1a./J. 63/2020 (10a.)	324
DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL RECLAMO NO DERIVA DE LA APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INVÁLIDA.	2a. XLVI/2020 (10a.)	391

	Número de identificación	Pág.
EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PARA ASEGURAR LA DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE VERIFICAR QUE LA PERSONA QUE ASISTIÓ AL IMPUTADO EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL CUENTE CON LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO; EL TRIBUNAL DEBE CONCEDER EL AMPARO CON LA FINALIDAD DE QUE SE HAGA LA VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.	1a./J. 62/2020 (10a.)	331
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO ORDENA, POR SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.	1a./J. 58/2020 (10a.)	337
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT). CUANDO EN EL AMPARO SE RECLAME LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR DE FONDOS, NO ES PROCEDENTE DAR VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME JUSTIFICADO PARA QUE AMPLÍE SU DEMANDA CONTRA LA RESPUESTA EMITIDA.	V.2o.P.A.33 A (10a.)	1681
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO.	PC.XVII. J/29 P (10a.)	1154
NOTARIO TITULAR. LAS ETAPAS O FASES QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE PUEBLA PARA OBTENER LA PATENTE RELATIVA, NO SON RECLAMABLES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO ACTOS DESTACADOS, AL CONSTITUIR UNA UNIDAD.	VI.1o.A.122 A (10a.)	1690

	Número de identificación	Pág.
NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD. CUANDO NO SE REALIZAN PERSONALMENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTE HAYA SEÑALADO DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA TAL EFECTO, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO Y AMERITA SU REPOSICIÓN.	XVII.2o.P.A.15 K (10a.)	1690
ORDEN DE APREHENSIÓN. AL SER UN ACTO FUERA DE PROCESO QUE ATENTA CONTRA LA LIBERTAD, LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA NO ESTÁ CONDICIONADA AL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, POR ACTUALIZARSE LA HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SALVO CUANDO EL QUEJOSO HAYA TENIDO CONOCIMIENTO PLENO DE AQUÉLLA POR CUALQUIER MEDIO.	XI.P.43 P (10a.)	1695
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL. SI EN EL JUICIO DE AMPARO EL JUEZ NO PUEDE DETERMINAR A QUÉ COLECTIVO LGBTI (LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNEROS E INTERSEXUALES) PERTENECE EL QUEJOSO, NO DEBE PRONUNCIARSE EN CUANTO A UNA IDENTIDAD ESPECÍFICA, A EFECTO DE NO ETIQUETARLO CON NOMBRES O DEFINICIONES QUE PODRÍAN NO CORRESPONDER A LA PERCEPCIÓN DE SÍ MISMO.	I.9o.P.17 K (10a.)	1697
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS.	PC.XVII. J/26 C (10a.)	1350
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO ACATARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE		

	Número de identificación	Pág.
AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A UN DECRETO PENSIONARIO EN RELACIÓN CON EL AUMENTO SALARIAL CORRESPONDIENTE.	PC.XVIII.P.A. J/9 K (10a.)	1398
RECURSO DE APELACIÓN. LA INCLUSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE ESTABLECE SU PROCEDENCIA, NO REQUIERE DE INTERPRETACIÓN ADICIONAL PARA FIJAR EL MONTO A QUE ALUDE EL PROPIO PRECEPTO.	PC.XVII. J/27 C (10a.)	1352
RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO EN EL QUE SE RESERVA ACORDAR SOBRE EL OFRECIMIENTO DE PRUEBAS HASTA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. QUEDA SIN MATERIA CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO TENGA CONOCIMIENTO DE QUE SE DICTÓ SENTENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.	PC.V. J/30 K (10a.)	1467
RECURSO DE QUEJA EN EL AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE FUE MATERIA DE IDÉNTICO MEDIO DE IMPUGNACIÓN, AL CONSTITUIR COSA JUZGADA.	I.10o.P.2 K (10a.)	1714
RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO. EN EL INTERPUESTO CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA POR NO HABERSE DESAHOGADO UN REQUERIMIENTO PARA SU ACLARACIÓN, PUEDE PLANTEARSE LA ILEGALIDAD DE ÉSTE.	(I Región)4o.19 K (10a.)	1715
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. SUS REGISTRADORES SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL		

	Número de identificación	Pág.
JUICIO DE AMPARO, CUANDO CALIFICAN UNILATERALMENTE UNA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN O POR LOS VICIOS PROPIOS DE LA EJECUTADA POR ORDEN DE DIVERSA AUTORIDAD.	(IV Región)1o.26 A (10a.)	1715
REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DE LA SALA QUE LA ORDENA CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.	I.9o.P.286 P (10a.)	1719
SENTENCIA DE AMPARO QUE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE NIEGA REQUERIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE SU CUMPLIMIENTO INMEDIATO.	1a./J. 59/2020 (10a.)	345
SEPARACIÓN DEL DOMICILIO FAMILIAR. CONTRA LA MEDIDA PROVISIONAL DECRETADA EN UN PROCEDIMIENTO PRIVILEGIADO, PREVIA A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE DIVORCIO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA) [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA VI.2o.C.31 C (10a.)].	VI.2o.C.71 C (10a.)	1723
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE A FAVOR DE MENORES DE EDAD. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y SE APORTAN INDICIOS SOBRE SU EXISTENCIA, AQUÉLLA PROCEDE PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO RECABE DE OFICIO PRUEBAS TENDENTES A DESVIRTUAR ESA NEGATIVA Y DESPLIEGUE UNA POSTURA ACTIVA EN SU RECEPCIÓN Y DESAHOGO.	XXVII.1o.8 K (10a.)	1725
SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE DECRETARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN		

	Número de identificación	Pág.
CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, SI DE LA DEMANDA O DE SUS ANEXOS SE ADVIERTE QUE SE EMITIÓ Y EJECUTÓ SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL.	PC.XVIII.P.A. J/10 K (10a.)	1487
SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS JUICIOS DE AMPARO, PREVISTA EN EL ACUERDO GENERAL 8/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). OPERA EN FAVOR DE LOS QUEJOSOS EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA URGENTE DEL ASUNTO.	XVII.2o.8 K (10a.)	1726
TÉRMINOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD SE LE NOTIFICA PERSONALMENTE EL PLAZO PARA AMPLIAR SU DEMANDA Y NO TIENE LA ASESORÍA DE UN DEFENSOR, A FIN DE GARANTIZAR SU ACCESO COMPLETO Y EFICAZ A LA JUSTICIA, NO DEBEN CORRERLE AQUÉLLOS NI PRECLUIR SU DERECHO PARA EFECTUARLA.	XXVII.1o.7 P (10a.)	1731
TORTURA. ES INOPERANTE EL RECLAMO E INATENDIBLE LA PRETENSIÓN DEL QUEJOSO, PARA EL EFECTO DE QUE LA RESPONSABLE ORDENE LA INVESTIGACIÓN PERTINENTE, DE LA ADUCIDA CON RELACIÓN A COIMPUTADOS NO QUEJOSOS.	V.2o.P.A.21 P (10a.)	1732
VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. CUANDO EN EL AMPARO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE TRAMITAR Y RESOLVER UNA DENUNCIA CIUDADANA POR REALIZARSE ESAS ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO LEGAL Y REGLAMENTARIAMENTE PERMITIDO Y EL QUEJOSO ADUCE VIOLACIÓN A SU DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO PARA EL DESARROLLO Y		

	Número de identificación	Pág.
BIENESTAR, POR EL EXCESO DE RUIDO Y LA ALTERACIÓN AL ORDEN QUE PRODUCEN, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DAR EFECTOS A SU SENTENCIA PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TOMEN TODAS LAS MEDIDAS POSITIVAS PARA SU PROTECCIÓN.	(IV Región)1o.27 A (10a.)	1735

Índice de Jurisprudencia por Contradicción

	Número de identificación	Pág.
ABOGADO PATRONO. EL DESIGNADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO [ALCANCE Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 90/2012 (10a.)].	PC.III.A. J/91 A (10a.)	504
ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO. NO LO CONSTITUYE EL COBRO DEL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EFECTUADO A TRAVÉS DEL AVISO-RECIBO EXPEDIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE).	PC.XVIII.P.A. J/12 K (10a.)	580

Contradicción de tesis 1/2019. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del Séptimo Circuito, en Boca del Río, Veracruz. 29 de septiembre de 2020. Unanimidad de cinco votos de los Magistrados, presidente Anastacio Martínez García, Luis García Sedas, Víctor Hugo Mendoza Sánchez, Roberto Castillo Garrido y Eliel Enedino Fitta García. Ponente: Roberto Castillo Garrido. Secretario: Lic. Abdiel Andrés Zepeda Aguilar.

Contradicción de tesis 2/2020. Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito. 7 de octubre de 2020. Unanimidad de tres votos de los Magistrados Guillermo del Castillo Vélez, Nicolás Nazar Sevilla y Alfredo Cid García. Ponente: Alfredo Cid García. Secretario: Marcelo Guerrero Rodríguez.

	Número de identificación	Pág.
AMPARO CONTRA LEYES. HIPÓTESIS EN LA QUE SE ACREDITA, DE MANERA IMPLÍCITA, LA APLICACIÓN EN PERJUICIO DEL QUEJOSO DEL ARTÍCULO 67, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ABROGADA). Contradicción de tesis 11/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero, Quinto y Sexto, todos del Décimo Quinto Circuito. 27 de octubre de 2020. Mayoría de siete votos de los Magistrados Blanca Evelia Parra Meza, Alfredo Manuel Bautista Encina, David Guerrero Espriú, Faustino Cervantes León, José Encarnación Aguilar Moya, Jorge Salazar Cadena y Mario Alejandro Moreno Hernández. Disidente: Raúl Martínez Martínez, quien formuló voto particular. Ponente: Blanca Evelia Parra Meza. Secretario: Óscar Jaime Carrillo Maciel.	PC.XV. J/43 A (10a.)	619
AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO QUE REVOCA EL PROVEÍDO DICTADO POR UN JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DESECHA UNA DEMANDA POR CONSIDERAR CARECER DE COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA, PARA CONOCER DE UN JUICIO ORDINARIO CIVIL. Contradicción de tesis 31/2019. Entre las sustentadas por el Noveno y el Décimo Quinto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 8 de septiembre de 2020. Mayoría de doce votos de los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas, Alejandro Villagómez Gordillo, Víctor Francisco Mota Cienfuegos, Walter Arellano Hobelsberger, Ismael Hernández Flores, Fernando Alberto Casasola Mendoza, Abraham Sergio Marcos Valdés, Víctor Hugo Díaz Arellano, Fernando Rangel Ramírez, Gonzalo Arredondo Jiménez, Alejandro Sánchez López y Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo, quien formuló voto con salvedades al que se adhieren los Magistrados Fernando Alberto Casasola Mendoza e Ismael	PC.I.C. J/106 C (10a.)	687

	Número de identificación	Pág.
Hernández Flores. Disidentes: Gonzalo Hernández Cervantes, José Rigoberto Dueñas Calderón y Daniel Horacio Escudero Contreras. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretario: Francisco Javier Arredondo Campuzano.		
AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Contradicción de tesis 343/2018. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 26 de agosto de 2020. Cinco votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso.	1a./J. 52/2020 (10a.)	293
AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. LA VÍCTIMA U OFENDIDO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN EN SU CONTRA, PORQUE AFECTA INDIRECTAMENTE SU DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, EN LOS CASOS EN QUE ÉSTA PROCEDA, Y PORQUE CON DICHA LEGITIMACIÓN SE ASEGURA SU DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Contradicción de tesis 355/2019. Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito. 5 de agosto de 2020. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo	1a./J. 54/2020 (10a.)	295

	Número de identificación	Pág.
Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat. Secretario: Ramón Eduardo López Saldaña.		
CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN ORDENADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. OPERA UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SIN QUE ÉSTA DICTE LA RESOLUCIÓN QUE DEFINA LA SITUACIÓN DEL PARTICULAR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Contradicción de tesis 3/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. 20 de octubre de 2020. Unanimidad de cinco votos de los Magistrados Alberto Emilio Carmona, Ariel Alberto Rojas Caballero, Arturo Hernández Torres, José Gerardo Mendoza Gutiérrez y Arturo González Padrón. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Javier Cruz Vázquez.	PC.XVI.A. J/29 A (10a.)	722
CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR LA FALTA O RETRASO EN LA RETRIBUCIÓN DE LAS CANTIDADES SUSTRAÍDAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. Contradicción de tesis 354/2018. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 4 de noviembre de 2020. Cinco votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto concurrente.	1a./J. 61/2020 (10a.)	298

	Número de identificación	Pág.
Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Gabriela Eleonora Cortés Araujo.		
CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO. LA LEY RELATIVA NÚMERO 676, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 3 DE ENERO DE 1984, CARECE DE VALIDEZ Y ES INCONSTITUCIONAL AL NO HABER REFRENDADO EL TITULAR DEL RAMO EL DECRETO CORRESPONDIENTE. Contradicción de tesis 6/2019. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 28 de octubre de 2020. Unanimidad de cinco votos de los Magistrados Fernando Rodríguez Escárcega, Xóchitl Guido Guzmán, Othón Manuel Ríos Flores, Javier Leonel Santiago Martínez y Ricardo Alejandro González Salazar. Ponente: Javier Leonel Santiago Martínez. Secretaria: Azucena Vázquez Garzón.	PC.XXI. J/17 A (10a.)	775
COMISIÓN DE MAGISTRADOS NOMBRADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS PARA EJERCER LAS ATRIBUCIONES ANTES ENCOMENDADAS AL EXTINTO CONSEJO DE LA JUDICATURA. ES CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE COMPETENTE PARA TRAMITAR Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SOMETIDOS A SU POTESTAD, HASTA LA FECHA EN QUE QUEDÓ INTEGRADA Y ENTRÓ EN FUNCIONES LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DISCIPLINA DEL PROPIO TRIBUNAL SUPERIOR. Contradicción de tesis 5/2019. Entre las sustentadas por el Primer, el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados, todos en Materias Penal y Administrativa del	PC.XVIII.P.A. J/8 A (10a.)	857

	Número de identificación	Pág.
Décimo Octavo Circuito, y el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. 2 de septiembre de 2020. Mayoría de dos votos de los Magistrados Nicolás Nazar Sevilla y Alfredo Cid García. Disidente y Ponente: Guillermo del Castillo Vélez. Encargado del engrose: Alfredo Cid García. Secretaria: Olga Lydia Núñez Agüero.		
COMPETENCIA. EL JUEZ DE DISTRITO AL QUE LE ES TURNADA UNA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE ACTUAR CONFORME A LA REGLA DE EXCEPCIÓN A LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 38 Y NO PLANTEAR IMPEDIMENTO CONFORME AL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN IV, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Contradicción de tesis 1/2020. Entre las sustentadas por el Primer, el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados, todos en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito. 7 de octubre de 2020. Unanimidad de tres Guillermo votos de los Magistrados del Castillo Vélez, Nicolás Nazar Sevilla y Alfredo Cid García. Ponente: Nicolás Nazar Sevilla. Secretaria: Claudia María Martínez Reyes.	PC.XVIII.P.A. J/11 K (10a.)	946
CONCURSO IDEAL DE DELITOS. LA POTESTAD DE AUMENTAR LA PENA CORRESPONDIENTE AL DELITO MAYOR CON LA DE LOS RESTANTES, ESTÁ CONDICIONADA A LA OBLIGACIÓN DE FUNDAR Y MOTIVAR ESA DECISIÓN (ARTÍCULO 64 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016). Contradicción de tesis 41/2019. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito y el Segundo	1a./J. 53/2020 (10a.)	321

	Número de identificación	Pág.
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito. 21 de octubre de 2020. Cinco votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Jorge Vázquez Aguilera.		
CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS IMPUESTOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. POR REGLA GENERAL, NO CONSTITUYEN UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA TRASCENDENTAL O UN ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL Y, POR TANTO, NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN AL TÉRMINO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA. Contradicción de tesis 266/2015. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito. 22 de enero de 2020. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Héctor Vargas Becerra.	1a./J. 63/2020 (10a.)	324
DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL EL JUEZ DE ENJUICIAMIENTO ESTÁ OBLIGADO A CORROBORAR LA CALIDAD DE LICENCIADO EN	1a./J. 41/2020 (10a.)	327

	Número de identificación	Pág.
DERECHO DEL DEFENSOR AL INICIO DE SU INTERVENCIÓN. Contradicción de tesis 1/2020. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito. 27 de mayo de 2020. Cinco votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Carlos Manuel Baráibar Tovar.		
DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN III, Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL PREVER LA SANCIÓN CONSISTENTE EN TENERLA POR NO PRESENTADA ANTE LA OMISIÓN DEL ACCIONANTE DE ADJUNTAR EL DOCUMENTO EN QUE CONSTE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO OBSTANTE EL REQUERIMIENTO FORMULADO, RESPETA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Contradicción de tesis 34/2020. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 5 de agosto de 2020. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Liliana Hernández Paniagua.	2a./J. 50/2020 (10a.)	385
DERECHO DE DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. LA FALTA DE	1a./J. 42/2020 (10a.)	329

	Número de identificación	Pág.
ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DE LOS DEFENSORES EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL NO IMPLICA PER SE UNA VIOLACIÓN AL DERECHO DE LOS IMPUTADOS. Contradicción de tesis 1/2020. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito. 27 de mayo de 2020. Cinco votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Carlos Manuel Baráibar Tovar.		
EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PARA ASEGURAR LA DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE VERIFICAR QUE LA PERSONA QUE ASISTIÓ AL IMPUTADO EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL CUENTE CON LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO; EL TRIBUNAL DEBE CONCEDER EL AMPARO CON LA FINALIDAD DE QUE SE HAGA LA VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. Contradicción de tesis 1/2020. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito. 27 de mayo de 2020. Cinco votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente en el que precisó que el efecto de la concesión de amparo no siempre debe ser reponer hasta la audiencia de juicio, sino una reposición parcial dependiendo del caso concreto, Ana	1a./J. 62/2020 (10a.)	331

	Número de identificación	Pág.
Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Carlos Manuel Baráibar Tovar.		
EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL DEMANDADO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. DEBE DECRETARSE LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL ACTOR DE PUBLICAR LOS EDICTOS. Contradicción de tesis 26/2020. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito. 7 de octubre de 2020. Mayoría de tres votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat. Secretario: José Manuel del Río Serrano.	1a./J. 57/2020 (10a.)	335
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO ORDENA, POR SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Contradicción de tesis 144/2019. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 14 de octubre de 2020. Mayoría de tres votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat. Secretaria: Irlanda Denisse Ávalos Núñez.	1a./J. 58/2020 (10a.)	337

	Número de identificación	Pág.
INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO MERCANTIL. LA PERSONA AUTORIZADA EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO CUENTA CON FACULTADES PARA INTERPONERLO. Contradicción de tesis 412/2019. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 14 de octubre de 2020. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto concurrente y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat. Secretario: Juan Jaime González Varas.	1a./J. 55/2020 (10a.)	339
INDEMNIZACIÓN JUSTA POR CAUSA DE EXPROPIACIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN, OCUPACIÓN TEMPORAL O LIMITACIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, SU INTERPRETACIÓN A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE PREVALENCIA DE INTERPRETACIÓN DE NORMAS Y PRO PERSONA, PERMITEN SATISFACERLA. Contradicción de tesis 1/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito. 22 de septiembre de 2020. Unanimidad de cinco votos de los Magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Osbaldo López García, Jorge Holder Gómez, Guillermo Cuautle Vargas y Juan Manuel Díaz Núñez. Ausente: Javier Loyola Zosa. Ponente: Osbaldo López García. Secretario: Edgar Filemón Luna Cruz.	PC.XIX. J/16 A (10a.)	1000
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA PROPUESTA DE COBRO Y RECEPCIÓN DEL PAGO DE	PC.III.A. J/90 A (10a.)	1063

Número de identificación Pág.

LOS DERECHOS DE PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Y/O URBANIZACIÓN, CONSTITUYEN UN ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Contradicción de tesis 27/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Quinto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 7 de septiembre de 2020. Mayoría de cinco votos de los Magistrados Salvador Murguía Munguía, Roberto Charcas León, Juan José Rosales Sánchez, Óscar Naranjo Ahumada y Moisés Muñoz Padilla. Ausente: René Olvera Gamboa. Disidente: Jacob Troncoso Ávila. Ponente: Moisés Muñoz Padilla. Secretario: Carlos Abraham Domínguez Montero.

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. PC.XVII. J/29 P (10a.) 1154

Contradicción de tesis 4/2020. Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 27 de octubre de 2020. Mayoría de seis votos de los Magistrados José Elías Gallegos Benítez, quien formula voto concurrente, María Teresa Zambrano Calero, Juan Carlos Zamora Tejeda, María del Carmen Cordero Martínez, José Martín Hernández Simental y Cuauhtémoc Cuéllar de Luna (presidente). Disidente: Refugio Noel Montoya Moreno, quien formula voto particular. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretaria: Martha Cecilia Zúñiga Rosas.

JUICIO DE NULIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL

	Número de identificación	Pág.
ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE IMPONE MULTA A UN SUJETO OBLIGADO POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE LA MATERIA.		
Contradicción de tesis 8/2019. Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 20 de octubre de 2020. Unanimidad de tres votos de los Magistrados Pedro Daniel Zamora Barrón, Jorge Meza Pérez y Rogelio Cepeda Treviño. Ponente: Rogelio Cepeda Treviño. Secretaria: Adairis Rodríguez Rocha.	PC.IV.A. J/50 A (10a.)	1199
JUICIO ORAL MERCANTIL. EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA NO APLICA LA EXIGENCIA DE ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 1061 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.	1a./J. 60/2020 (10a.)	341
Contradicción de tesis 314/2019. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Octavo Circuito. 7 de octubre de 2020. Mayoría de tres votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto particular y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat. Secretario: Raúl Mendiola Pizaña.		
PENSIÓN ALIMENTICIA. LA ACCIÓN PARA SOLICITAR SU MODIFICACIÓN PUEDE EJERCERSE, INDISTINTAMENTE, EN UN PROCEDIMIENTO PRINCIPAL O EN UNO INCIDENTAL (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y VERACRUZ).	1a./J. 56/2020 (10a.)	343
Contradicción de tesis 497/2019. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito. 13 de mayo de 2020. Cinco votos		

	Número de identificación	Pág.
de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat. Secretario: José Luis Cruz Martínez.		
PENSIONES OTORGADAS AL AMPARO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA. SU INCREMENTO DEBE EFECTUARSE ANUALMENTE EN EL MES DE FEBRERO, CONFORME AL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) CORRESPONDIENTE AL AÑO CALENDARIO ANTERIOR. Contradicción de tesis 3/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 20 de octubre de 2020. Unanimidad de cuatro votos de los Magistrados Luis Alfonso Hernández Núñez (presidente), Sergio García Méndez, Arcelia de la Cruz Lugo y Guillermo Erik Silva González. Ponente: Guillermo Erik Silva González. Secretario: Carlos Alán González Arce.	PC.IV.L. J/21 L (10a.)	1224
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. SE INTERRUMPE CON LA SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO DE AUDIENCIA PARA FORMULAR LA IMPUTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Contradicción de tesis 1/2020. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad. 13 de octubre de 2020. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados Refugio Noel Montoya Moreno, José Elías Gallegos Benítez, María Teresa Zambrano Calero y Juan Carlos Zamora Tejeda. Disidentes: María del Carmen Cordero Martínez, José Martín Hernández Simental y Cuauhtémoc Cuéllar de Luna (presidente), quienes formularon voto particular	PC.XVII. J/28 P (10a.)	1285

	Número de identificación	Pág.
minoritario. Ponente: Refugio Noel Montoya Moreno. Secretarios: Martha Cecilia Zúñiga Rosas y Julio César Montes García.		
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS.	PC.XVII. J/26 C (10a.)	1350
Contradicción de tesis 7/2019. Entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 6 de octubre de 2020. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados José Elías Gallegos Benítez, María del Carmen Cordero Martínez, José Martín Hernández Simental y Refugio Noel Montoya Moreno. Disidentes: Cuauhtémoc Cuéllar de Luna (presidente), María Teresa Zambrano Calero y Juan Carlos Zamora Tejeda, quienes formularon voto particular. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Gerardo González Torres.		
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO ACATARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A UN DECRETO PENSIONARIO EN RELACIÓN CON EL AUMENTO SALARIAL CORRESPONDIENTE.	PC.XVIII.P.A. J/9 K (10a.)	1398
Contradicción de tesis 6/2019. Entre las sustentadas por el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito. 2 de septiembre de 2020. Unanimidad de tres votos de los Magistrados Guillermo del Castillo Vélez, Nicolás Nazar Sevilla y Alfredo Cid García. Ponente: Nicolás Nazar Sevilla. Secretario: Juan Manuel Aguirre Garza.		

	Número de identificación	Pág.
RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL TRIBUNAL DE ALZADA, LUEGO DE LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DE LA RACIONALIDAD DEL EJERCICIO DE MOTIVACIÓN REALIZADO POR EL JUEZ DE CONTROL SOBRE LA APRECIACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA, ESTÁ FACULTADO PARA REASUMIR JURISDICCIÓN Y CORREGIRLA, SIN VULNERAR EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. Contradicción de tesis 10/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos del Décimo Quinto Circuito. 27 de octubre de 2020. Unanimidad de ocho votos de los Magistrados Raúl Martínez Martínez, Blanca Evelia Parra Meza, Alfredo Manuel Bautista Encina, David Guerrero Espriú, Faustino Cervantes León, José Encarnación Aguilar Moya, Jorge Salazar Cadena y Mario Alejandro Moreno Hernández. Ponente: Raúl Martínez Martínez. Secretario: Fausto Armando López Delgado.	PC.XV. J/42 P (10a.)	1438
RECURSO DE APELACIÓN. LA INCLUSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE ESTABLECE SU PROCEDENCIA, NO REQUIERE DE INTERPRETACIÓN ADICIONAL PARA FIJAR EL MONTO A QUE ALUDE EL PROPIO PRECEPTO. Contradicción de tesis 7/2019. Entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 6 de octubre de 2020. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados José Elías Gallegos Benítez, María del Carmen Cordero Martínez, José Martín Hernández Simental y Refugio Noel Montoya Moreno. Disidentes: Cuauhtémoc Cuéllar de Luna (presidente), María Teresa Zambrano Calero y Juan Carlos Zamora Tejeda, quienes formularon voto particular. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Gerardo González Torres.	PC.XVII. J/27 C (10a.)	1352

	Número de identificación	Pág.
RECURSO DE APELACIÓN. SU PROCEDENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS, NO ESTÁ SUJETA A INTERPRETACIÓN ADICIONAL DE LOS ARTÍCULOS 626 Y 168 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. Contradicción de tesis 7/2019. Entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 6 de octubre de 2020. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados José Elías Gallegos Benítez, María del Carmen Cordero Martínez, José Martín Hernández Simental y Refugio Noel Montoya Moreno. Disidentes: Cuauhtémoc Cuéllar de Luna (presidente), María Teresa Zambrano Calero y Juan Carlos Zamora Tejeda, quienes formularon voto particular. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Gerardo González Torres.	PC.XVII. J/25 C (10a.)	1355
RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO EN EL QUE SE RESERVA ACORDAR SOBRE EL OFRECIMIENTO DE PRUEBAS HASTA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. QUEDA SIN MATERIA CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO TENGA CONOCIMIENTO DE QUE SE DICTÓ SENTENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Contradicción de tesis 9/2019. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 6 de octubre de 2020. Unanimidad de seis votos de los Magistrados José Manuel Blanco Quihuis, Gabriel Alejandro Palomares Acosta, Mario Pedroza Carbajal, David Solís Pérez, Luis Fernando Zúñiga Padilla y Óscar Javier Sánchez Martínez. Ponente: José Manuel Blanco Quihuis. Secretario: Germán Gutiérrez León.	PC.V. J/30 K (10a.)	1467
SENTENCIA DE AMPARO QUE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE UNA	1a./J. 59/2020 (10a.)	345

	Número de identificación	Pág.
ORDEN DE APREHENSIÓN. PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE NIEGA REQUERIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE SU CUMPLIMIENTO INMEDIATO. Contradicción de tesis 392/2019. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. 1 de julio de 2020. Cinco votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat. Secretaria: Irlanda Denisse Ávalos Núñez.		
SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE DECRETARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, SI DE LA DEMANDA O DE SUS ANEXOS SE ADVIERTE QUE SE EMITIÓ Y EJECUTÓ SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Contradicción de tesis 8/2019. Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito. 2 de septiembre de 2020. Unanimidad de tres votos de los Magistrados Guillermo del Castillo Vélez, Nicolás Nazar Sevilla y Alfredo Cid García. Ponente: Guillermo del Castillo Vélez. Secretario: Óscar Rojas Cota.	PC.XVIII.P.A. J/10 K (10a.)	1487
TRABAJADORES DE CONFIANZA DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (NAFIN). HIPÓTESIS EN LA QUE TIENEN DERECHO AL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS. Contradicción de tesis 29/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo, Tercero y	PC.I.L. J/68 L (10a.)	1528

Número de identificación Pág.

Noveno, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 19 de octubre de 2020. Mayoría de dieciséis votos a favor de los Magistrados José Manuel Hernández Saldaña, Rosa María Galván Zárate, Elisa Jiménez Aguilar, María Eugenia Olascuaga García, Antonio Rebollo Torres, Raúl Valerio Ramírez, Joel Darío Ojeda Romo, Edna Lorena Hernández Granados, Miguel Ángel Ramos Pérez, Gilberto Romero Guzmán, Héctor Pérez Pérez, Salvador Hernández Hernández, Miguel Bonilla López, Juan Manuel Alcántara Moreno, Juan Manuel Vega Tapia y Andrés Sánchez Bernal. Disidente: José Luis Caballero Rodríguez. Ponente: Raúl Valerio Ramírez. Secretaria: Gladys Eliza González León.

VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS CELEBRADAS EN LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES. PARA LA VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE LAS CONTIENEN, NO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE SE HAGA CONSTAR QUE "ES COPIA FIEL Y EXACTA" DEL REGISTRO ORIGINAL. PC.I.C. J/105 C (10a.) 1555

Contradicción de tesis 23/2019. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 8 de septiembre de 2020. Unanimidad de quince votos de la Magistrada Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo y los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas, Alejandro Villagómez Gordillo, Víctor Francisco Mota Cienfuegos, Walter Arellano Hobelsberger, Ismael Hernández Flores, Fernando Alberto Casasola Mendoza, Abraham Sergio Marcos Valdés, Gonzalo Hernández Cervantes, Víctor Hugo Díaz Arellano, Fernando Rangel Ramírez, Gonzalo Arredondo Jiménez, José Rigoberto Dueñas Calderón, Alejandro Sánchez López y Daniel Horacio Escudero Contreras. Ponente: Alejandro Villagómez Gordillo. Secretaria: Mariana Gutiérrez Olalde.

Número de identificación	Pág.
PC.VI.P. J/7 P (10a.)	1650

VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). LA CERTIFICACIÓN DE QUE SON COPIA AUTÉNTICA DEL REGISTRO AUDIOVISUAL NO REQUIERE QUE EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN EN LA MATERIALIDAD DEL DISCO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA.

Contradicción de tesis 3/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Penal del Sexto Circuito. 14 de octubre de 2020. Unanimidad de tres votos de los Magistrados José Salvador Roberto Jiménez Lozano, Gabriel Alejandro Zúñiga Romero y Carla Isselin Talavera. Ponente: José Salvador Roberto Jiménez Lozano. Secretaria: Marcela Aguilar Loranca.

Tabla General Temática de Tesis de Jurisprudencia y Aisladas

	Número de identificación	Pág.
Acceso a la educación básica, derecho fundamental de.—Véase: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE A FAVOR DE MENORES DE EDAD. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y SE APORTAN INDICIOS SOBRE SU EXISTENCIA, AQUÉLLA PROCEDE PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO RECABE DE OFICIO PRUEBAS TENDENTES A DESVIRTUAR ESA NEGATIVA Y DESPLIEGUE UNA POSTURA ACTIVA EN SU RECEPCIÓN Y DESAHOGO."	XXVII.1o.8 K (10a.)	1725
Acceso a la jurisdicción, principio de.—Véase: "SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS JUICIOS DE AMPARO, PREVISTA EN EL ACUERDO GENERAL 8/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). OPERA EN FAVOR DE LOS QUEJOSOS EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA URGENTE DEL ASUNTO."	XVII.2o.8 K (10a.)	1726
Acceso a la justicia de las víctimas o partes ofendidas, derecho de.—Véase: "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. LA VÍCTIMA U OFENDIDO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN EN SU CONTRA, PORQUE AFECTA INDIRECTAMENTE SU DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, EN LOS CASOS EN QUE ÉSTA		

	Número de identificación	Pág.
PROCEDA, Y PORQUE CON DICHA LEGITIMACIÓN SE ASEGURA SU DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA."	1a./J. 54/2020 (10a.)	295
Acceso a la justicia, derecho de.—Véase: "COSTAS. EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL SEGUIR UN SISTEMA DE CRITERIOS OBJETIVOS PARA SU CONDENA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA."	1a. LII/2020 (10a.)	354
Acceso a la justicia, derecho de.—Véase: "DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN III, Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL PREVER LA SANCIÓN CONSISTENTE EN TENERLA POR NO PRESENTADA ANTE LA OMISIÓN DEL ACCIONANTE DE ADJUNTAR EL DOCUMENTO EN QUE CONSTE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO OBSTANTE EL REQUERIMIENTO FORMULADO, RESPETA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA."	2a./J. 50/2020 (10a.)	385
Acceso a la justicia, derecho de.—Véase: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO."	PC.XVII. J/29 P (10a.)	1154
Acceso a la justicia, derecho de.—Véase: "SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS JUICIOS DE AMPARO, PREVISTA EN EL ACUERDO GENERAL 8/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). OPERA EN FAVOR DE LOS		

	Número de identificación	Pág.
QUEJOSOS EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA URGENTE DEL ASUNTO."	XVII.2o.8 K (10a.)	1726
Actos de imposible reparación.—Véase: "REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DE LA SALA QUE LA ORDENA CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."	I.9o.P.286 P (10a.)	1719
Agravio personal y directo, principio de.—Véase: "ABOGADO PATRONO. EL DESIGNADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO [ALCANCE Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 90/2012 (10a.)]."	PC.III.A. J/91 A (10a.)	504
Agravio personal y directo, principio de.—Véase: "TORTURA. ES INOPERANTE EL RECLAMO E INATENDIBLE LA PRETENSIÓN DEL QUEJOSO, PARA EL EFECTO DE QUE LA RESPONSABLE ORDENE LA INVESTIGACIÓN PERTINENTE, DE LA ADUCIDA CON RELACIÓN A COIMPUTADOS NO QUEJOSOS."	V.2o.P.A.21 P (10a.)	1732
Amparo indirecto, improcedencia del.—Véase: "CANCELACIÓN DE DERECHOS SOBRE UNA PARCELA. CUANDO SE EMITE CON MOTIVO DE LO ORDENADO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS Y NO EN FORMA AUTÓNOMA POR EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD."	XVII.2o.P.A.59 A (10a.)	1661
Amparo indirecto, procedencia del.—Véase: "ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO ORDENA, POR SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN."	1a./J. 58/2020 (10a.)	337

	Número de identificación	Pág.
Amparo indirecto, procedencia del.—Véase: "REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DE LA SALA QUE LA ORDENA CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."	I.9o.P.286 P (10a.)	1719
Audiencia, derecho de.—Véase: "ASPIRANTE AL EJERCICIO DEL NOTARIADO Y NOTARIO TITULAR. LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE PUEBLA PARA OBTENER LAS PATENTES RELATIVAS, NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PARA SER CONSIDERADOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO."	VI.1o.A.123 A (10a.)	1659
Buena fe, principio de.—Véase: "RENUNCIA. ES ANÁLOGA A LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR CAUSA IMPUTABLE AL EMPLEADOR, COMO SUPUESTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DENOMINADOS 'PLAN DE AHORRO' Y 'PATRIMONIO PARA EL RETIRO', PREVISTOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES."	I.14o.T.41 L (10a.)	1716
Congruencia de las sentencias, principio de.—Véase: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS SENTENCIAS DE NULIDAD. CONSISTE EN ASEGURAR LA RESPUESTA AL TEMA ESENCIAL MATERIA DE LA LITIS."	(IV Región)1o.28 A (10a.)	1698
Contradicción, principio de.—Véase: "DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL EL JUEZ DE ENJUICIAMIENTO ESTÁ OBLIGADO A CORROBORAR LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR AL INICIO DE SU INTERVENCIÓN."	1a./J. 41/2020 (10a.)	327

	Número de identificación	Pág.
Debido proceso, principio de.—Véase: "RENUNCIA. SI EL TRABAJADOR QUE LA OBJETÓ EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD DE CONTENIDO Y FIRMA NO COMPARECE AL DESAHOGO DE LA PRUEBA EN CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA QUE OFRECIÓ, LA JUNTA DEBE APERCIBIRLO CON DECLARAR SU DESERCIÓN."	I.11o.T.39 L (10a.)	1717
Defensa adecuada, derecho a una.—Véase: "EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PARA ASEGURAR LA DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE VERIFICAR QUE LA PERSONA QUE ASISTIÓ AL IMPUTADO EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL CUENTE CON LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO; EL TRIBUNAL DEBE CONCEDER EL AMPARO CON LA FINALIDAD DE QUE SE HAGA LA VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE."	1a./J. 62/2020 (10a.)	331
Defensa adecuada, derecho de.—Véase: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO."	PC.XVII. J/29 P (10a.)	1154
Definitividad en el amparo, principio de.—Véase: "CANCELACIÓN DE DERECHOS SOBRE UNA PARCELA. CUANDO SE EMITE CON MOTIVO DE LO ORDENADO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS Y NO EN FORMA AUTÓNOMA POR EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD."	XVII.2o.P.A.59 A (10a.)	1661
Definitividad en el amparo, principio de.—Véase: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS		

	Número de identificación	Pág.
CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS."	PC.XVII. J/26 C (10a.)	1350
Definitividad en el amparo, principio de.—Véase: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO ACATARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A UN DECRETO PENSIONARIO EN RELACIÓN CON EL AUMENTO SALARIAL CORRESPONDIENTE."	PC.XVIII.P.A. J/9 K (10a.)	1398
Definitividad en el amparo, principio de.—Véase: "RECURSO DE APELACIÓN. LA INCLUSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE ESTABLECE SU PROCEDENCIA, NO REQUIERE DE INTERPRETACIÓN ADICIONAL PARA FIJAR EL MONTO A QUE ALUDE EL PROPIO PRECEPTO."	PC.XVII. J/27 C (10a.)	1352
Definitividad en el amparo, principio de.—Véase: "RECURSO DE APELACIÓN. SU PROCEDENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS, NO ESTÁ SUJETA A INTERPRETACIÓN ADICIONAL DE LOS ARTÍCULOS 626 Y 168 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA."	PC.XVII. J/25 C (10a.)	1355
Equidad, principio de.—Véase: "RENUNCIA. ES ANÁLOGA A LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR CAUSA IMPUTABLE AL EMPLEADOR, COMO SUPUESTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DENOMINADOS 'PLAN DE AHORRO' Y 'PATRIMONIO PARA EL RETIRO', PREVISTOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INS-		

	Número de identificación	Pág.
TITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES."	I.14o.T.41 L (10a.)	1716
Honor, derecho al.—Véase: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. EL ESTÁNDAR DE REAL MALICIA RESULTA APLICABLE CUANDO LA INFORMACIÓN DIVULGADA SE RELACIONA CON CUESTIONES DE INTERÉS PÚBLICO, AUN CUANDO EL SUJETO QUE SE DICE AFECTADO NO SEA UNA FIGURA PÚBLICA."	1a. LIII/2020 (10a.)	355
Honor, derecho al.—Véase: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. LOS ABOGADOS NO DEBEN SER CONSIDERADOS COMO PERSONAS PRIVADAS CON PROYECCIÓN PÚBLICA POR EL SOLO HECHO DE EJERCER ESA PROFESIÓN EN EL APARATO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA O POR SU DESEMPEÑO EN CIERTA MATERIA DEL DERECHO."	1a. LIV/2020 (10a.)	357
Igualdad, derecho de.—Véase: "PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL. SI EN EL JUICIO DE AMPARO EL JUEZ NO PUEDE DETERMINAR A QUÉ COLECTIVO LGBTI (LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNEROS E INTERSEXUALES) PERTENECE EL QUEJOSO, NO DEBE PRONUNCIARSE EN CUANTO A UNA IDENTIDAD ESPECÍFICA, A EFECTO DE NO ETIQUETARLO CON NOMBRES O DEFINICIONES QUE PODRÍAN NO CORRESPONDER A LA PERCEPCIÓN DE SÍ MISMO."	I.9o.P.17 K (10a.)	1697
Igualdad entre el varón y la mujer, derecho humano de.—Véase: "DELITO DE VIOLACIÓN. EL ARTÍCULO 265 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO VULNERA LOS DERECHOS HUMANOS DE IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER, Y NO DISCRIMINACIÓN ANTE LA LEY, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL."	I.9o.P.288 P (10a.)	1671

	Número de identificación	Pág.
Igualdad procesal, derecho de.—Véase: "DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN III, Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL PREVER LA SANCIÓN CONSISTENTE EN TENERLA POR NO PRESENTADA ANTE LA OMISIÓN DEL ACCIONANTE DE ADJUNTAR EL DOCUMENTO EN QUE CONSTE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO OBSTANTE EL REQUERIMIENTO FORMULADO, RESPETA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA."	2a./J. 50/2020 (10a.)	385
Igualdad, violación al principio de.—Véase: "CONCUBINATO. EL ARTÍCULO 65 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MORELOS AL ESTABLECER COMO REQUISITO QUE AMBOS CONCUBINOS ESTÉN LIBRES DE MATRIMONIO PARA ACTUALIZARLO, RESULTA INCONSTITUCIONAL POR ESTABLECER UNA DISTINCIÓN BASADA EN CATEGORÍA SOSPECHOSA QUE NO SUPERA UN EXAMEN ESTRICTO DE CONSTITUCIONALIDAD."	1a. LV/2020 (10a.)	351
Igualdad, violación al principio de.—Véase: "CONTROL DEL TABACO. EL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN VI, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD."	REPUBLICADA POR CORRECCIÓN EN EL PRECEDENTE 1a. XVI/2020 (10a.)	352
Inamovilidad en el empleo, derecho de.—Véase: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO. SU RECONOCIMIENTO DE BASE DEBE RETROTRAERSE HASTA EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYAN ADQUIRIDO EL DERECHO DE INAMOVILIDAD, LO QUE SUCEDE CUANDO HAN LABORADO SEIS MESES ININTERRUMPIDOS Y SIN NOTA DESFAVORABLE EN UN PUESTO BASIFICABLE."	X.1o.T.4 L (10a.)	1733
Indemnización justa, garantía de.—Véase: "INDEMNIZACIÓN JUSTA POR CAUSA DE EXPROPIACIÓN.		

	Número de identificación	Pág.
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN, OCUPACIÓN TEMPORAL O LIMITACIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, SU INTERPRETACIÓN A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE PREVALENCIA DE INTERPRETACIÓN DE NORMAS Y PRO PERSONA, PERMITEN SATISFACERLA."	PC.XIX. J/16 A (10a.)	1000
Información, derecho a la.—Véase: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. EL ESTÁNDAR DE REAL MALICIA RESULTA APLICABLE CUANDO LA INFORMACIÓN DIVULGADA SE RELACIONA CON CUESTIONES DE INTERÉS PÚBLICO, AUN CUANDO EL SUJETO QUE SE DICE AFECTADO NO SEA UNA FIGURA PÚBLICA."	1a. LIII/2020 (10a.)	355
Inmediación, principio de.—Véase: "RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL TRIBUNAL DE ALZADA, LUEGO DE LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DE LA RACIONALIDAD DEL EJERCICIO DE MOTIVACIÓN REALIZADO POR EL JUEZ DE CONTROL SOBRE LA APRECIACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA, ESTÁ FACULTADO PARA REASUMIR JURISDICCIÓN Y CORREGIRLA, SIN VULNERAR EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN."	PC.XV. J/42 P (10a.)	1438
Instancia de parte agraviada, principio de.—Véase: "ABOGADO PATRONO. EL DESIGNADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO [ALCANCE Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 90/2012 (10a.)]."	PC.III.A. J/91 A (10a.)	504
Instancia de parte agraviada, principio de.—Véase: "TORTURA. ES INOPERANTE EL RECLAMO E INATENDIBLE LA PRETENSIÓN DEL QUEJOSO, PARA EL EFECTO DE QUE LA RESPONSABLE ORDENE LA		

	Número de identificación	Pág.
INVESTIGACIÓN PERTINENTE, DE LA ADUCIDA CON RELACIÓN A COIMPUTADOS NO QUEJOSOS."	V.2o.P.A.21 P (10a.)	1732
Integridad personal, derecho a la.—Véase: "VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. CUANDO EN EL AMPARO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE TRAMITAR Y RESOLVER UNA DENUNCIA CIUDADANA POR REALIZARSE ESAS ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO LEGAL Y REGLAMENTARIAMENTE PERMITIDO Y EL QUEJOSO ADUCE VIOLACIÓN A SU DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR, POR EL EXCESO DE RUIDO Y LA ALTERACIÓN AL ORDEN QUE PRODUCEN, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DAR EFECTOS A SU SENTENCIA PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TOMEN TODAS LAS MEDIDAS POSITIVAS PARA SU PROTECCIÓN."	(IV Región)1o.27 A (10a.)	1735
Intimidad, violación al derecho humano a la.—Véase: "ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO ORDENA, POR SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN."	1a./J. 58/2020 (10a.)	337
Inviolabilidad del domicilio, violación al derecho a la.—Véase: "ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO ORDENA, POR SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN."	1a./J. 58/2020 (10a.)	337
Legalidad, derecho de.—Véase: "DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN III, Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL PREVER LA SANCIÓN CONSISTENTE EN TENERLA POR NO PRESENTADA ANTE LA OMISIÓN DEL ACCIONANTE DE ADJUNTAR EL DOCUMENTO EN QUE CONSTE LA		

	Número de identificación	Pág.
RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO OBSTANTE EL REQUERIMIENTO FORMULADO, RESPETA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA."	2a./J. 50/2020 (10a.)	385
Legalidad, principio de.—Véase: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. SUS REGISTRADORES SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO CALIFICAN UNILATERALMENTE UNA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN O POR LOS VICIOS PROPIOS DE LA EJECUTADA POR ORDEN DE DIVERSA AUTORIDAD."	(IV Región)1o.26 A (10a.)	1715
Legalidad, principio de.—Véase: "RENUNCIA. SI EL TRABAJADOR QUE LA OBJETÓ EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD DE CONTENIDO Y FIRMA NO COMPARECE AL DESAHOGO DE LA PRUEBA EN CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA QUE OFRECIÓ, LA JUNTA DEBE APERCIBIRLO CON DECLARAR SU DESERCIÓN."	I.11o.T.39 L (10a.)	1717
Medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, derecho humano a un.—Véase: "VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. CUANDO EN EL AMPARO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE TRAMITAR Y RESOLVER UNA DENUNCIA CIUDADANA POR REALIZARSE ESAS ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO LEGAL Y REGLAMENTARIAMENTE PERMITIDO Y EL QUEJOSO ADUCE VIOLACIÓN A SU DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR, POR EL EXCESO DE RUIDO Y LA ALTERACIÓN AL ORDEN QUE PRODUCEN, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DAR EFECTOS A SU SENTENCIA PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TOMEN TODAS LAS MEDIDAS POSITIVAS PARA SU PROTECCIÓN."	(IV Región)1o.27 A (10a.)	1735

	Número de identificación	Pág.
No discriminación ante la ley, derecho humano de.—Véase: "DELITO DE VIOLACIÓN. EL ARTÍCULO 265 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO VULNERA LOS DERECHOS HUMANOS DE IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER, Y NO DISCRIMINACIÓN ANTE LA LEY, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL."	I.9o.P.288 P (10a.)	1671
No discriminación, derecho de.—Véase: "PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL. SI EN EL JUICIO DE AMPARO EL JUEZ NO PUEDE DETERMINAR A QUÉ COLECTIVO LGBTI (LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNEROS E INTERSEXUALES) PERTENECE EL QUEJOSO, NO DEBE PRONUNCIARSE EN CUANTO A UNA IDENTIDAD ESPECÍFICA, A EFECTO DE NO ETIQUETARLO CON NOMBRES O DEFINICIONES QUE PODRÍAN NO CORRESPONDER A LA PERCEPCIÓN DE SÍ MISMO."	I.9o.P.17 K (10a.)	1697
No discriminación, violación al principio de.—Véase: "CONCUBINATO. EL ARTÍCULO 65 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MORELOS AL ESTABLECER COMO REQUISITO QUE AMBOS CONCUBINOS ESTÉN LIBRES DE MATRIMONIO PARA ACTUALIZARLO, RESULTA INCONSTITUCIONAL POR ESTABLECER UNA DISTINCIÓN BASADA EN CATEGORÍA SOSPECHOSA QUE NO SUPERA UN EXAMEN ESTRICTO DE CONSTITUCIONALIDAD."	1a. LV/2020 (10a.)	351
Petición, derecho de.—Véase: "DERECHO DE PETICIÓN. CONCEPTO DE 'BREVE TÉRMINO' PARA EFECTOS DE LA RESPUESTA QUE DEBE DARSE AL PARTICULAR QUE LO EJERCIÓ."	XVII.2o.P.A.1 CS (10a.)	1674
Petición, derecho de.—Véase: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT). CUANDO EN EL AMPARO SE RECLAME LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR DE FONDOS, NO ES PROCEDENTE DAR VISTA		

	Número de identificación	Pág.
AL QUEJOSO CON EL INFORME JUSTIFICADO PARA QUE AMPLÍE SU DEMANDA CONTRA LA RESPUESTA EMITIDA."	V.2o.P.A.33 A (10a.)	1681
Presunción de inocencia, principio de.—Véase: "DERECHO A INTERROGAR TESTIGOS DE CARGO EN EL PROCESO PENAL. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A LA OBLIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE OBTENER LA COMPARECENCIA DE LA VÍCTIMA DEL DELITO ANTE EL JUEZ, SI POR RAZONES DE GÉNERO Y VULNERABILIDAD, NO FUE POSIBLE LOCALIZARLA."	I.9o.P.287 P (10a.)	1673
Prevalencia de interpretación de normas, principio de.—Véase: "INDEMNIZACIÓN JUSTA POR CAUSA DE EXPROPIACIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN, OCUPACIÓN TEMPORAL O LIMITACIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, SU INTERPRETACIÓN A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE PREVALENCIA DE INTERPRETACIÓN DE NORMAS Y PRO PERSONA, PERMITEN SATISFACERLA."	PC.XIX. J/16 A (10a.)	1000
Principio pro persona.—Véase: "INDEMNIZACIÓN JUSTA POR CAUSA DE EXPROPIACIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN, OCUPACIÓN TEMPORAL O LIMITACIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, SU INTERPRETACIÓN A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE PREVALENCIA DE INTERPRETACIÓN DE NORMAS Y PRO PERSONA, PERMITEN SATISFACERLA."	PC.XIX. J/16 A (10a.)	1000
Propiedad, derecho humano de.—Véase: "INDEMNIZACIÓN JUSTA POR CAUSA DE EXPROPIACIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN, OCUPACIÓN TEMPORAL O LIMITACIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, SU INTERPRETACIÓN A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE PREVALENCIA DE INTERPRETA-		

	Número de identificación	Pág.
CIÓN DE NORMAS Y PRO PERSONA, PERMITEN SATISFACERLA."	PC.XIX. J/16 A (10a.)	1000
Protección de la salud, derecho a la.—Véase: "VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. CUANDO EN EL AMPARO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE TRAMITAR Y RESOLVER UNA DENUNCIA CIUDADANA POR REALIZARSE ESAS ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO LEGAL Y REGLAMENTARIAMENTE PERMITIDO Y EL QUEJOSO ADUCE VIOLACIÓN A SU DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR, POR EL EXCESO DE RUIDO Y LA ALTERACIÓN AL ORDEN QUE PRODUCEN, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DAR EFECTOS A SU SENTENCIA PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TOMEN TODAS LAS MEDIDAS POSITIVAS PARA SU PROTECCIÓN."	(IV Región)1o.27 A (10a.)	1735
Relatividad de las sentencias de amparo, principio de.—Véase: "TORTURA. ES INOPERANTE EL RECLAMO E INATENDIBLE LA PRETENSIÓN DEL QUEJOSO, PARA EL EFECTO DE QUE LA RESPONSABLE ORDENE LA INVESTIGACIÓN PERTINENTE, DE LA ADUCIDA CON RELACIÓN A COIMPUTADOS NO QUEJOSOS."	V.2o.P.A.21 P (10a.)	1732
Réplica, derecho de.—Véase: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. EL ESTÁNDAR DE REAL MALICIA RESULTA APLICABLE CUANDO LA INFORMACIÓN DIVULGADA SE RELACIONA CON CUESTIONES DE INTERÉS PÚBLICO, AUN CUANDO EL SUJETO QUE SE DICE AFECTADO NO SEA UNA FIGURA PÚBLICA."	1a. LIII/2020 (10a.)	355
Reserva de ley, principio de.—Véase: "COMPROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ABROGADO, AL ESTABLECER DETERMINADOS		

	Número de identificación	Pág.
REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER PARA IDENTIFICAR BIENES O MERCANCÍAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY."	XVII.2o.P.A.61 A (10a.)	1665
Seguridad jurídica, derecho de.—Véase: "DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN III, Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL PREVER LA SANCIÓN CONSISTENTE EN TENERLA POR NO PRESENTADA ANTE LA OMISIÓN DEL ACCIONANTE DE ADJUNTAR EL DOCUMENTO EN QUE CONSTE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO OBSTANTE EL REQUERIMIENTO FORMULADO, RESPETA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA."	2a./J. 50/2020 (10a.)	385
Solidaridad en materia de seguridad social, principio de.—Véase: "SEGURO SOCIAL. PARA LA PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DEL TOPE SALARIAL DE LOS SEGUROS DE INVALIDEZ, VEJEZ O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, NO ES OBLIGACIÓN DEL INSTITUTO PROBAR QUE EL ASEGURADO COTIZÓ MENOS QUE EL LÍMITE SUPERIOR DE DIEZ VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL ENTONCES DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)."	III.4o.T.59 L (10a.)	1722
Subordinación jerárquica, principio de.—Véase: "COMPROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ABROGADO, AL DESARROLLAR LOS REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER PARA IDENTIFICAR BIENES O MERCANCÍAS, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 29-A, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA."	XVII.2o.P.A.62 A (10a.)	1663
Tutela judicial, derecho fundamental de.—Véase: "DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN III, Y		

	Número de identificación	Pág.
PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL PREVER LA SANCIÓN CONSISTENTE EN TENERLA POR NO PRESENTADA ANTE LA OMISIÓN DEL ACCIONANTE DE ADJUNTAR EL DOCUMENTO EN QUE CONSTE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO OBSTANTE EL REQUERIMIENTO FORMULADO, RESPETA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA."	2a./J. 50/2020 (10a.)	385
Tutela judicial efectiva, derecho humano de.—Véase: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA PROPUESTA DE COBRO Y RECEPCIÓN DEL PAGO DE LOS DERECHOS DE PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Y/O URBANIZACIÓN, CONSTITUYEN UN ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)."	PC.III.A. J/90 A (10a.)	1063
Tutela judicial efectiva, principio de.—Véase: "SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS JUICIOS DE AMPARO, PREVISTA EN EL ACUERDO GENERAL 8/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). OPERA EN FAVOR DE LOS QUEJOSOS EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA URGENTE DEL ASUNTO."	XVII.2o.8 K (10a.)	1726
Tutela jurisdiccional efectiva, derecho a la.—Véase: "TÉRMINOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD SE LE NOTIFICA PERSONALMENTE EL PLAZO PARA AMPLIAR SU DEMANDA Y NO TIENE LA ASESORÍA DE UN DEFENSOR, A FIN DE GARANTIZAR SU ACCESO COMPLETO Y EFICAZ A LA JUSTICIA, NO DEBEN CORRERLE AQUÉLLOS NI PRECLUIR SU DERECHO PARA EFECTUARLA."	XXVII.1o.7 P (10a.)	1731
Vida, derecho a la.—Véase: "VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESTABLECIMIENTOS		

	Número de identificación	Pág.
COMERCIALES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. CUANDO EN EL AMPARO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE TRAMITAR Y RESOLVER UNA DENUNCIA CIUDADANA POR REALIZARSE ESAS ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO LEGAL Y REGLAMENTARIAMENTE PERMITIDO Y EL QUEJOSO ADUCE VIOLACIÓN A SU DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR, POR EL EXCESO DE RUIDO Y LA ALTERACIÓN AL ORDEN QUE PRODUCEN, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DAR EFECTOS A SU SENTENCIA PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TOMEN TODAS LAS MEDIDAS POSITIVAS PARA SU PROTECCIÓN."	(IV Región)1o.27 A (10a.)	1735
Vida privada, derecho a la.—Véase: "ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO ORDENA, POR SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN."	1a./J. 58/2020 (10a.)	337
Vida privada, derecho a la.—Véase: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. LOS ABOGADOS NO DEBEN SER CONSIDERADOS COMO PERSONAS PRIVADAS CON PROYECCIÓN PÚBLICA POR EL SOLO HECHO DE EJERCER ESA PROFESIÓN EN EL APARATO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA O POR SU DESEMPEÑO EN CIERTA MATERIA DEL DERECHO."	1a. LIV/2020 (10a.)	357
Violación a las leyes del procedimiento.—Véase: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD. CUANDO NO SE REALIZAN PERSONALMENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTE HAYA SEÑALADO DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA TAL EFECTO, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO Y AMERITA SU REPOSICIÓN."	XVII.2o.P.A.15 K (10a.)	1690

Índice de Ordenamientos

	Número de identificación	Pág.
100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, reglas 1 a 4.—Véase: "RECURSO DE APELACIÓN O REVOCACIÓN EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONE PREVIAMENTE A LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAERÁ A LA PETICIÓN RESPECTIVA, NO OBSTANTE QUE EL RECURRENTE SE ENCUENTRE PRIVADO DE SU LIBERTAD (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO ABROGADA)."	I.9o.P.289 P (10a.)	1713
100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, reglas 22 y 23.—Véase: "RECURSO DE APELACIÓN O REVOCACIÓN EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONE PREVIAMENTE A LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAERÁ A LA PETICIÓN RESPECTIVA, NO OBSTANTE QUE EL RECURRENTE SE ENCUENTRE PRIVADO DE SU LIBERTAD (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO ABROGADA)."	I.9o.P.289 P (10a.)	1713
Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, artículo 1.—Véase: "SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS JUICIOS DE AMPARO, PREVISTA EN EL ACUERDO		

	Número de identificación	Pág.
GENERAL 8/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). OPERA EN FAVOR DE LOS QUEJOSOS EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA URGENTE DEL ASUNTO."	XVII.2o.8 K (10a.)	1726
Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, artículo 4.—Véase: "SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS JUICIOS DE AMPARO, PREVISTA EN EL ACUERDO GENERAL 8/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). OPERA EN FAVOR DE LOS QUEJOSOS EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA URGENTE DEL ASUNTO."	XVII.2o.8 K (10a.)	1726
Código Civil del Estado de Querétaro, artículo 293.—Véase: "ALIMENTOS DEL ACREEDOR MAYOR DE EDAD. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE VALORAR PARA DETERMINAR SI SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DEL DEUDOR DE PROPORCIONARLOS CUANDO LA SECUENCIA ENTRE LA TERMINACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y EL INICIO DE LA SUPERIOR NO ES INMEDIATA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO)."	XXII.2o.A.C.9 C (10a.)	1658
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 319, fracción III.—Véase: "SEPARACIÓN DEL DOMICILIO FAMILIAR. CONTRA LA MEDIDA PROVISIONAL DECRETADA EN UN PROCEDIMIENTO PRIVILEGIADO, PREVIA A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE DIVORCIO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)		

	Número de identificación	Pág.
[ABANDONO DE LA TESIS AISLADA VI.2o.C.31 C (10a.)]."	VI.2o.C.71 C (10a.)	1723
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, artículos 320 y 321.—Véase: "SEPARACIÓN DEL DOMICILIO FAMILIAR. CONTRA LA MEDIDA PROVISIONAL DECRETADA EN UN PROCEDIMIENTO PRIVILEGIADO, PREVIA A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE DIVORCIO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA) [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA VI.2o.C.31 C (10a.)]."	VI.2o.C.71 C (10a.)	1723
Código de Comercio, artículo 338.—Véase: "CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR LA FALTA O RETRASO EN LA RETRIBUCIÓN DE LAS CANTIDADES SUSTRAÍDAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO."	1a./J. 61/2020 (10a.)	298
Código de Comercio, artículo 362.—Véase: "CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR LA FALTA O RETRASO EN LA RETRIBUCIÓN DE LAS CANTIDADES SUSTRAÍDAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO."	1a./J. 61/2020 (10a.)	298
Código de Comercio, artículo 1061, fracción V.—Véase: "JUICIO ORAL MERCANTIL. EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA NO APLICA LA EXIGENCIA DE ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 1061 DEL CÓDIGO DE COMERCIO."	1a./J. 60/2020 (10a.)	341
Código de Comercio, artículo 1063.—Véase: "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS CELEBRADAS EN LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES. PARA LA VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE LAS CONTIENEN, NO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE SE HAGA CONSTAR		

	Número de identificación	Pág.
QUE ‘ES COPIA FIEL Y EXACTA’ DEL REGISTRO ORIGINAL."	PC.I.C. J/105 C (10a.)	1555
Código de Comercio, artículo 1069.—Véase: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO MERCANTIL. LA PERSONA AUTORIZADA EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO CUENTA CON FACULTADES PARA INTERPONERLO."	1a./J. 55/2020 (10a.)	339
Código de Comercio, artículo 1076.—Véase: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL DEMANDADO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. DEBE DECRETARSE LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL ACTOR DE PUBLICAR LOS EDICTOS."	1a./J. 57/2020 (10a.)	335
Código de Comercio, artículo 1348.—Véase: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO MERCANTIL. LA PERSONA AUTORIZADA EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO CUENTA CON FACULTADES PARA INTERPONERLO."	1a./J. 55/2020 (10a.)	339
Código de Comercio, artículo 1390 Bis 28.—Véase: "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS CELEBRADAS EN LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES. PARA LA VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE LAS CONTIENEN, NO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE SE HAGA CONSTAR QUE ‘ES COPIA FIEL Y EXACTA’ DEL REGISTRO ORIGINAL."	PC.I.C. J/105 C (10a.)	1555
Código de Comercio, artículos 332 a 335.—Véase: "CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR LA FALTA O RETRASO EN LA RETRIBUCIÓN DE		

	Número de identificación	Pág.
LAS CANTIDADES SUSTRAÍDAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO."	1a./J. 61/2020 (10a.)	298
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, artículo 159, fracción III.—Véase: "COSTAS. EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL SEGUIR UN SISTEMA DE CRITERIOS OBJETIVOS PARA SU CONDENA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA."	1a. LII/2020 (10a.)	354
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, artículo 626.—Véase: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS."	PC.XVII. J/26 C (10a.)	1350
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, artículo 626.—Véase: "RECURSO DE APELACIÓN. LA INCLUSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE ESTABLECE SU PROCEDENCIA, NO REQUIERE DE INTERPRETACIÓN ADICIONAL PARA FIJAR EL MONTO A QUE ALUDE EL PROPIO PRECEPTO."	PC.XVII. J/27 C (10a.)	1352
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, artículo 626.—Véase: "RECURSO DE APELACIÓN. SU PROCEDENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS, NO ESTÁ SUJETA A INTERPRETACIÓN ADICIONAL DE LOS ARTÍCULOS 626 Y 168		

	Número de identificación	Pág.
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA."	PC.XVII. J/25 C (10a.)	1355
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, artículos 168 y 169.—Véase: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS."	PC.XVII. J/26 C (10a.)	1350
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, artículos 168 y 169.—Véase: "RECURSO DE APELACIÓN. LA INCLUSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE ESTABLECE SU PROCEDENCIA, NO REQUIERE DE INTERPRETACIÓN ADICIONAL PARA FIJAR EL MONTO A QUE ALUDE EL PROPIO PRECEPTO."	PC.XVII. J/27 C (10a.)	1352
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, artículos 168 y 169.—Véase: "RECURSO DE APELACIÓN. SU PROCEDENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS, NO ESTÁ SUJETA A INTERPRETACIÓN ADICIONAL DE LOS ARTÍCULOS 626 Y 168 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA."	PC.XVII. J/25 C (10a.)	1355
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 47.—Véase: "SEPARACIÓN DEL DOMICILIO FAMILIAR. CONTRA LA MEDIDA PROVISIONAL DECRETADA EN UN PROCEDIMIENTO PRIVILEGIADO, PREVIA A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE DIVORCIO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE		

	Número de identificación	Pág.
PUEBLA) [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA VI.2o.C.31 C (10a.)]."	VI.2o.C.71 C (10a.)	1723
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 683, fracción V.—Véase: "SEPARACIÓN DEL DOMICILIO FAMILIAR. CONTRA LA MEDIDA PROVISIONAL DECRETADA EN UN PROCEDIMIENTO PRIVILEGIADO, PREVIA A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE DIVORCIO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA) [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA VI.2o.C.31 C (10a.)]."	VI.2o.C.71 C (10a.)	1723
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla artículos 686 y 687.—Véase: "SEPARACIÓN DEL DOMICILIO FAMILIAR. CONTRA LA MEDIDA PROVISIONAL DECRETADA EN UN PROCEDIMIENTO PRIVILEGIADO, PREVIA A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE DIVORCIO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA) [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA VI.2o.C.31 C (10a.)]."	VI.2o.C.71 C (10a.)	1723
Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, artículo 276 (vigente hasta el 12 de junio de 2016).—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. SE INTERRUMPE CON LA SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO DE AUDIENCIA PARA FORMULAR LA IMPUTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)."	PC.XVII. J/28 P (10a.)	1285
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, artículo 409 (abrogado).—Véase: "RECURSO DE APELACIÓN O REVOCACIÓN EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONE PREVIAMENTE A LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAERÁ A LA PETICIÓN RESPECTIVA, NO OBSTANTE QUE EL RECURRENTE SE		

	Número de identificación	Pág.
ENCUENTRE PRIVADO DE SU LIBERTAD (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO ABROGADA)."	I.9o.P.289 P (10a.)	1713
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, artículo 413 (abrogado).—Véase: "RECURSO DE APELACIÓN O REVOCACIÓN EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONE PREVIAMENTE A LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAERÁ A LA PETICIÓN RESPECTIVA, NO OBSTANTE QUE EL RECURRENTE SE ENCUENTRE PRIVADO DE SU LIBERTAD (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO ABROGADA)."	I.9o.P.289 P (10a.)	1713
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, artículo 416 (abrogado).—Véase: "RECURSO DE APELACIÓN O REVOCACIÓN EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONE PREVIAMENTE A LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAERÁ A LA PETICIÓN RESPECTIVA, NO OBSTANTE QUE EL RECURRENTE SE ENCUENTRE PRIVADO DE SU LIBERTAD (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO ABROGADA)."	I.9o.P.289 P (10a.)	1713
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, artículo 65 (vigente hasta el 4 de julio de 2016).—Véase: "CONCUBINATO. EL ARTÍCULO 65 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MORELOS AL ESTABLECER COMO REQUISITO QUE AMBOS CONCUBINOS ESTÉN LIBRES DE MATRIMONIO PARA ACTUALIZARLO, RESULTA INCONSTITUCIONAL POR ESTABLECER UNA DISTINCIÓN BASADA EN CATEGORÍA SOSPECHOSA QUE NO SUPERA UN EXAMEN ESTRICTO DE CONSTITUCIONALIDAD."	1a. LV/2020 (10a.)	351
Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 88.—Véase: "PENSIÓN POR INVALIDEZ, VEJEZ, O		

	Número de identificación	Pág.
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. EL SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN LA FECHA EN QUE SE OTORGA CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE LA JUNTA TIENE OBLIGACIÓN DE CONSULTAR AL RESOLVER EL JUICIO."	III.4o.T.60 L (10a.)	1697
Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 179.—Véase: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE A FAVOR DE MENORES DE EDAD. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y SE APORTAN INDICIOS SOBRE SU EXISTENCIA, AQUÉLLA PROCEDE PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO RECABE DE OFICIO PRUEBAS TENDENTES A DESVIRTUAR ESA NEGATIVA Y DESPLIEGUE UNA POSTURA ACTIVA EN SU RECEPCIÓN Y DESAHOGO."	XXVII.1o.8 K (10a.)	1725
Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 217.—Véase: "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS CELEBRADAS EN LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES. PARA LA VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE LAS CONTIENEN, NO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE SE HAGA CONSTAR QUE 'ES COPIA FIEL Y EXACTA' DEL REGISTRO ORIGINAL."	PC.I.C. J/105 C (10a.)	1555
Código Fiscal de la Federación, artículo 29-A, fracción V.—Véase: "COMPROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ABROGADO, AL DESARROLLAR LOS REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER PARA IDENTIFICAR BIENES O MERCANCÍAS, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 29-A, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA."	XVII.2o.P.A.62 A (10a.)	1663
Código Fiscal de la Federación, artículo 29-A, fracción V.—Véase: "COMPROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ABROGADO, AL ESTABLECER DETERMINADOS REQUISITOS QUE DEBEN		

	Número de identificación	Pág.
CONTENER PARA IDENTIFICAR BIENES O MERCANCÍAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY."	XVII.2o.P.A.61 A (10a.)	1665
Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 61.—Véase: "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). LA CERTIFICACIÓN DE QUE SON COPIA AUTÉNTICA DEL REGISTRO AUDIOVISUAL NO REQUIERE QUE EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN EN LA MATERIALIDAD DEL DISCO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA."	PC.VI.P. J/7 P (10a.)	1650
Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 211.—Véase: "ORDEN DE APREHENSIÓN. AL SER UN ACTO FUERA DE PROCESO QUE ATENTA CONTRA LA LIBERTAD, LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA NO ESTÁ CONDICIONADA AL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, POR ACTUALIZARSE LA HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SALVO CUANDO EL QUEJOSO HAYA TENIDO CONOCIMIENTO PLENO DE AQUÉLLA POR CUALQUIER MEDIO."	XI.P.43 P (10a.)	1695
Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 211.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. SE INTERRUMPE CON LA SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO DE AUDIENCIA PARA FORMULAR LA IMPUTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)."	PC.XVII. J/28 P (10a.)	1285
Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 350.—Véase: "QUERELLA. PARA SATISFACER ESTE REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN LA ETAPA DE JUICIO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, LA LEGITIMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL OFENDIDA PARA FORMULARLA,		

	Número de identificación	Pág.
DEBE DEMOSTRARSE DURANTE EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA RESPECTIVA MEDIANTE LA INCORPORACIÓN AL JUICIO DEL PODER NOTARIAL CORRESPONDIENTE."	I.9o.P.280 P (10a.)	1701
Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 459, fracción I.—Véase: "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. LA VÍCTIMA U OFENDIDO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN EN SU CONTRA, PORQUE AFECTA INDIRECTAMENTE SU DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, EN LOS CASOS EN QUE ÉSTA PROCEDA, Y PORQUE CON DICHA LEGITIMACIÓN SE ASEGURA SU DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA."	1a./J. 54/2020 (10a.)	295
Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 467.—Véase: "RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL TRIBUNAL DE ALZADA, LUEGO DE LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DE LA RACIONALIDAD DEL EJERCICIO DE MOTIVACIÓN REALIZADO POR EL JUEZ DE CONTROL SOBRE LA APRECIACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA, ESTÁ FACULTADO PARA REASUMIR JURISDICCIÓN Y CORREGIRLA, SIN VULNERAR EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN."	PC.XV. J/42 P (10a.)	1438
Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 479.—Véase: "RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL TRIBUNAL DE ALZADA, LUEGO DE LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DE LA RACIONALIDAD DEL EJERCICIO DE MOTIVACIÓN REALIZADO POR EL JUEZ DE CONTROL SOBRE LA APRECIACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA, ESTÁ FACULTADO PARA REASUMIR JURISDICCIÓN Y CORREGIRLA, SIN VULNERAR EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN."	PC.XV. J/42 P (10a.)	1438

	Número de identificación	Pág.
Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 480.—Véase: "EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PARA ASEGURAR LA DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE VERIFICAR QUE LA PERSONA QUE ASISTIÓ AL IMPUTADO EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL CUENTE CON LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO; EL TRIBUNAL DEBE CONCEDER EL AMPARO CON LA FINALIDAD DE QUE SE HAGA LA VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE."	1a./J. 62/2020 (10a.)	331
Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 482.—Véase: "EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PARA ASEGURAR LA DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE VERIFICAR QUE LA PERSONA QUE ASISTIÓ AL IMPUTADO EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL CUENTE CON LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO; EL TRIBUNAL DEBE CONCEDER EL AMPARO CON LA FINALIDAD DE QUE SE HAGA LA VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE."	1a./J. 62/2020 (10a.)	331
Código Penal del Estado de Chihuahua, artículo 105.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. SE INTERRUMPE CON LA SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO DE AUDIENCIA PARA FORMULAR LA IMPUTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)."	PC.XVII. J/28 P (10a.)	1285
Código Penal del Estado de Chihuahua, artículo 114.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. SE INTERRUMPE CON LA SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO DE AUDIENCIA PARA FORMULAR LA IMPUTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)."	PC.XVII. J/28 P (10a.)	1285
Código Penal Federal, artículo 64.—Véase: "CONCURSO IDEAL DE DELITOS. LA POTESTAD DE AUMENTAR LA PENA CORRESPONDIENTE AL DELITO		

	Número de identificación	Pág.
MAYOR CON LA DE LOS RESTANTES, ESTÁ CONDICIONADA A LA OBLIGACIÓN DE FUNDAR Y MOTIVAR ESA DECISIÓN (ARTÍCULO 64 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016)."	1a./J. 53/2020 (10a.)	321
Código Penal Federal, artículo 265.—Véase: "DELITO DE VIOLACIÓN. EL ARTÍCULO 265 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO VULNERA LOS DERECHOS HUMANOS DE IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER, Y NO DISCRIMINACIÓN ANTE LA LEY, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL."	I.9o.P.288 P (10a.)	1671
Condiciones Generales de Trabajo de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 1994-1997, artículo 220, fracción III.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (NAFIN). HIPÓTESIS EN LA QUE TIENEN DERECHO AL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS."	PC.I.L. J/68 L (10a.)	1528
Condiciones Generales de Trabajo de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 1994-1997, artículos 216 a 218.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (NAFIN). HIPÓTESIS EN LA QUE TIENEN DERECHO AL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS."	PC.I.L. J/68 L (10a.)	1528
Condiciones Generales de Trabajo de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 2006, artículo 220, fracción III.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO		

	Número de identificación	Pág.
(NAFIN). HIPÓTESIS EN LA QUE TIENEN DERECHO AL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS."	PC.I.L. J/68 L (10a.)	1528
Condiciones Generales de Trabajo de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 2006, artículos 216 a 218.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (NAFIN). HIPÓTESIS EN LA QUE TIENEN DERECHO AL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS."	PC.I.L. J/68 L (10a.)	1528
Condiciones Generales de Trabajo entre el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, artículo 95.—Véase: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO. SU RECONOCIMIENTO DE BASE DEBE RETROTRAERSE HASTA EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYAN ADQUIRIDO EL DERECHO DE INAMOVILIDAD, LO QUE SUCEDE CUANDO HAN LABORADO SEIS MESES ININTERRUMPIDOS Y SIN NOTA DESFAVORABLE EN UN PUESTO BASIFICABLE."	X.1o.T.4 L (10a.)	1733
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN III, Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL PREVER LA SANCIÓN CONSISTENTE EN TENERLA POR NO PRESENTADA ANTE LA OMISIÓN DEL ACCIONANTE DE ADJUNTAR EL DOCUMENTO EN QUE CONSTE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO OBSTANTE EL REQUERIMIENTO FORMULADO, RESPETA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA."	2a./J. 50/2020 (10a.)	385
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "INDEMNIZACIÓN JUSTA POR CAUSA DE EXPROPIACIÓN. INTERPRETACIÓN DEL		

	Número de identificación	Pág.
ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN, OCUPACIÓN TEMPORAL O LIMITACIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, SU INTERPRETACIÓN A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE PREVALENCIA DE INTERPRETACIÓN DE NORMAS Y PRO PERSONA, PERMITEN SATISFACERLA."	PC.XIX. J/16 A (10a.)	1000
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL. SI EN EL JUICIO DE AMPARO EL JUEZ NO PUEDE DETERMINAR A QUÉ COLECTIVO LGBTI (LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNEROS E INTERSEXUALES) PERTENECE EL QUEJOSO, NO DEBE PRONUNCIARSE EN CUANTO A UNA IDENTIDAD ESPECÍFICA, A EFECTO DE NO ETIQUETARLO CON NOMBRES O DEFINICIONES QUE PODRÍAN NO CORRESPONDER A LA PERCEPCIÓN DE SÍ MISMO."	I.9o.P.17 K (10a.)	1697
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3o.—Véase: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE A FAVOR DE MENORES DE EDAD. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y SE APORTAN INDICIOS SOBRE SU EXISTENCIA, AQUÉLLA PROCEDE PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO RECABE DE OFICIO PRUEBAS TENDENTES A DESVIRTUAR ESA NEGATIVA Y DESPLIEGUE UNA POSTURA ACTIVA EN SU RECEPCIÓN Y DESAHOGO."	XXVII.1o.8 K (10a.)	1725
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o.—Véase: "CONCUBINATO. EL ARTÍCULO 65 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MORELOS AL ESTABLECER COMO REQUISITO QUE AMBOS CONCUBINOS ESTÉN LIBRES DE MATRIMONIO PARA ACTUALIZARLO, RESULTA INCONSTITUCIONAL POR ESTABLECER UNA DISTINCIÓN BASADA EN CATEGORÍA SOSPECHOSA QUE NO SUPERA UN EXAMEN ESTRICTO DE CONSTITUCIONALIDAD."	1a. LV/2020 (10a.)	351

	Número de identificación	Pág.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o.—Véase: "DELITO DE VIOLACIÓN. EL ARTÍCULO 265 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO VULNERA LOS DERECHOS HUMANOS DE IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER, Y NO DISCRIMINACIÓN ANTE LA LEY, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL."	I.9o.P.288 P (10a.)	1671
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o.—Véase: "PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL. SI EN EL JUICIO DE AMPARO EL JUEZ NO PUEDE DETERMINAR A QUÉ COLECTIVO LGBTI (LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNEROS E INTERSEXUALES) PERTENECE EL QUEJOSO, NO DEBE PRONUNCIARSE EN CUANTO A UNA IDENTIDAD ESPECÍFICA, A EFECTO DE NO ETIQUETARLO CON NOMBRES O DEFINICIONES QUE PODRÍAN NO CORRESPONDER A LA PERCEPCIÓN DE SÍ MISMO."	I.9o.P.17 K (10a.)	1697
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o.—Véase: "VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. CUANDO EN EL AMPARO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE TRAMITAR Y RESOLVER UNA DENUNCIA CIUDADANA POR REALIZARSE ESAS ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO LEGAL Y REGLAMENTARIAMENTE PERMITIDO Y EL QUEJOSO ADUCE VIOLACIÓN A SU DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR, POR EL EXCESO DE RUIDO Y LA ALTERACIÓN AL ORDEN QUE PRODUCEN, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DAR EFECTOS A SU SENTENCIA PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TOMEN TODAS LAS MEDIDAS POSITIVAS PARA SU PROTECCIÓN."	(IV Región)1o.27 A (10a.)	1735
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 6o.—Véase: "COMISIÓN DE TRANSPARENCIA		

	Número de identificación	Pág.
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. AL TRATARSE DE UN ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO, LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA A UN SUJETO OBLIGADO EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, NO ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL."	IV.2o.A.149 A (10a.)	1662
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 6o.—Véase: "JUICIO DE NULIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE IMPONE MULTA A UN SUJETO OBLIGADO POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE LA MATERIA."	PC.IV.A. J/50 A (10a.)	1199
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8o.—Véase: "DERECHO DE PETICIÓN. CONCEPTO DE 'BREVE TÉRMINO' PARA EFECTOS DE LA RESPUESTA QUE DEBE DARSE AL PARTICULAR QUE LO EJERCIÓ."	XVII.2o.P.A.1 CS (10a.)	1674
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8o.—Véase: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT). CUANDO EN EL AMPARO SE RECLAME LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR DE FONDOS, NO ES PROCEDENTE DAR VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME JUSTIFICADO PARA QUE AMPLÍE SU DEMANDA CONTRA LA RESPUESTA EMITIDA."	V.2o.P.A.33 A (10a.)	1681
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "RENUNCIA. SI EL TRABAJADOR QUE LA OBJETÓ EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD DE CONTENIDO Y FIRMA NO COMPARECE		

	Número de identificación	Pág.
AL DESAHOGO DE LA PRUEBA EN CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA QUE OFRECIÓ, LA JUNTA DEBE APERCIBIRLO CON DECLARAR SU DESERCIÓN."	I.11o.T.39 L (10a.)	1717
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "COMPETENCIA. EL JUEZ DE DISTRITO AL QUE LE ES TURNADA UNA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE ACTUAR CONFORME A LA REGLA DE EXCEPCIÓN A LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 38 Y NO PLANTEAR IMPEDIMENTO CONFORME AL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN IV, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO."	PC.XVIII.P.A. J/11 K (10a.)	946
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "CONCURSO IDEAL DE DELITOS. LA POTESTAD DE AUMENTAR LA PENA CORRESPONDIENTE AL DELITO MAYOR CON LA DE LOS RESTANTES, ESTÁ CONDICIONADA A LA OBLIGACIÓN DE FUNDAR Y MOTIVAR ESA DECISIÓN (ARTÍCULO 64 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016)."	1a./J. 53/2020 (10a.)	321
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "RENUNCIA. SI EL TRABAJADOR QUE LA OBJETÓ EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD DE CONTENIDO Y FIRMA NO COMPARECE AL DESAHOGO DE LA PRUEBA EN CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA QUE OFRECIÓ, LA JUNTA DEBE APERCIBIRLO CON DECLARAR SU DESERCIÓN."	I.11o.T.39 L (10a.)	1717
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "COSTAS. EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL SEGUIR		

	Número de identificación	Pág.
UN SISTEMA DE CRITERIOS OBJETIVOS PARA SU CONDENA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA."	1a. LII/2020 (10a.)	354
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN III, Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL PREVER LA SANCIÓN CONSISTENTE EN TENERLA POR NO PRESENTADA ANTE LA OMISIÓN DEL ACCIONANTE DE ADJUNTAR EL DOCUMENTO EN QUE CONSTE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO OBSTANTE EL REQUERIMIENTO FORMULADO, RESPETA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA."	2a./J. 50/2020 (10a.)	385
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA PROPUESTA DE COBRO Y RECEPCIÓN DEL PAGO DE LOS DERECHOS DE PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Y/O URBANIZACIÓN, CONSTITUYEN UN ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)."	PC.III.A. J/90 A (10a.)	1063
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS JUICIOS DE AMPARO, PREVISTA EN EL ACUERDO GENERAL 8/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). OPERA EN FAVOR DE LOS QUEJOSOS EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA URGENTE DEL ASUNTO."	XVII.2o.8 K (10a.)	1726

	Número de identificación	Pág.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20, apartado A, fracción I.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. SE INTERRUMPE CON LA SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO DE AUDIENCIA PARA FORMULAR LA IMPUTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)."	PC.XVII. J/28 P (10a.)	1285
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 22.—Véase: "CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS IMPUESTOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. POR REGLA GENERAL, NO CONSTITUYEN UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA TRASCENDENTAL O UN ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL Y, POR TANTO, NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN AL TÉRMINO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA."	1a./J. 63/2020 (10a.)	324
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DOBLE TRIBUTACIÓN. AL REALIZARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA TANTO SUS PREVISIONES Y TERMINOLOGÍA, COMO LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL."	I.4o.A.206 A (10a.)	1682
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 94.—Véase: "COMPETENCIA. EL JUEZ DE DISTRITO AL QUE LE ES TURNADA UNA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE ACTUAR CONFORME A LA REGLA DE EXCEPCIÓN A LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 38 Y NO PLANTEAR IMPEDIMENTO CONFORME AL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN IV, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO."	PC.XVIII.P.A. J/11 K (10a.)	946

	Número de identificación	Pág.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción I.—Véase: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO QUE REVOCA EL PROVEÍDO DICTADO POR UN JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DESECHA UNA DEMANDA POR CONSIDERAR CARECER DE COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA, PARA CONOCER DE UN JUICIO ORDINARIO CIVIL."	PC.I.C. J/106 C (10a.)	687
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción III.—Véase: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO."	PC.XVII. J/29 P (10a.)	1154
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracciones V y VII.—Véase: "COMPETENCIA. EL JUEZ DE DISTRITO AL QUE LE ES TURNADA UNA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE ACTUAR CONFORME A LA REGLA DE EXCEPCIÓN A LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 38 Y NO PLANTEAR IMPEDIMENTO CONFORME AL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN IV, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO."	PC.XVIII.P.A. J/11 K (10a.)	946
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 116, fracción VIII.—Véase: "COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. AL TRATARSE DE UN ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO, LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA A UN SUJETO OBLIGADO EN MATERIA DE ACCESO		

	Número de identificación	Pág.
A LA INFORMACIÓN, NO ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL."	IV.2o.A.149 A (10a.)	1662
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 122, apartado C, base primera, fracción V (texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016).—Véase: "COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. AL TRATARSE DE UN ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO, LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA A UN SUJETO OBLIGADO EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, NO ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL."	IV.2o.A.149 A (10a.)	1662
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 16 y 17.—Véase: "ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. AL EXCEDERSE EL PLAZO DE EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY RELATIVA, SE CONTRAVIENE LA FINALIDAD PARA LAS QUE FUERON ESTABLECIDAS."	I.9o.C.51 C (10a.)	1657
Constitución Política del Estado de Jalisco, artículo 61.—Véase: "DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL RECLAMO NO DERIVA DE LA APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INVÁLIDA."	2a. XLVI/2020 (10a.)	391
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, artículo 76 (vigente en 1984).—Véase: "CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO. LA LEY RELATIVA NÚMERO 676, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 3 DE ENERO DE 1984, CARECE DE VALIDEZ Y ES INCONSTITUCIONAL AL NO HABER REFRENDADO EL		

	Número de identificación	Pág.
TITULAR DEL RAMO EL DECRETO CORRESPONDIENTE."	PC.XXI. J/17 A (10a.)	775
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, artículo 86.—Véase: "COMISIÓN DE MAGISTRADOS NOMBRADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS PARA EJERCER LAS ATRIBUCIONES ANTES ENCOMENDADAS AL EXTINTO CONSEJO DE LA JUDICATURA. ES CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE COMPETENTE PARA TRAMITAR Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SOMETIDOS A SU POTESTAD, HASTA LA FECHA EN QUE QUEDÓ INTEGRADA Y ENTRÓ EN FUNCIONES LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DISCIPLINA DEL PROPIO TRIBUNAL SUPERIOR."	PC.XVIII.P.A. J/8 A (10a.)	857
Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, cláusula 56.—Véase: "CONFESIÓN FICTA PARA HECHOS PROPIOS. ES SUFICIENTE LA DEL FUNCIONARIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) PARA DEMOSTRAR LA PROMESA DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE LA CLÁUSULA 56 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO A CAMBIO DE LA RENUNCIA ESCRITA DEL TRABAJADOR, SIN QUE ÉSTE TENGA LA CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE LAS FACULTADES DEL PROMITENTE."	I.3o.T.65 L (10a.)	1666
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1.—Véase: "DELITO DE VIOLACIÓN. EL ARTÍCULO 265 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO VULNERA LOS DERECHOS HUMANOS DE IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER, Y NO DISCRIMINACIÓN ANTE LA LEY, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL."	I.9o.P.288 P (10a.)	1671
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8, numeral 1.—Véase: "DEMANDA EN EL		

	Número de identificación	Pág.
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN III, Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL PREVER LA SANCIÓN CONSISTENTE EN TENERLA POR NO PRESENTADA ANTE LA OMISIÓN DEL ACCIONANTE DE ADJUNTAR EL DOCUMENTO EN QUE CONSTE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO OBSTANTE EL REQUERIMIENTO FORMULADO, RESPETA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA."	2a./J. 50/2020 (10a.)	385
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8, numeral 1.—Véase: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA PROPUESTA DE COBRO Y RECEPCIÓN DEL PAGO DE LOS DERECHOS DE PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Y/O URBANIZACIÓN, CONSTITUYEN UN ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)."	PC.III.A. J/90 A (10a.)	1063
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 21, numeral 2.—Véase: "INDEMNIZACIÓN JUSTA POR CAUSA DE EXPROPIACIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN, OCUPACIÓN TEMPORAL O LIMITACIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, SU INTERPRETACIÓN A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE PREVALENCIA DE INTERPRETACIÓN DE NORMAS Y PRO PERSONA, PERMITEN SATISFACERLA."	PC.XIX. J/16 A (10a.)	1000
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 24.—Véase: "DELITO DE VIOLACIÓN. EL ARTÍCULO 265 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO VULNERA LOS DERECHOS HUMANOS DE IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER, Y NO DISCRIMINACIÓN ANTE LA LEY, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL."	I.9o.P.288 P (10a.)	1671

	Número de identificación	Pág.
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 25, numeral 1.—Véase: "DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN III, Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL PREVER LA SANCIÓN CONSISTENTE EN TENERLA POR NO PRESENTADA ANTE LA OMISIÓN DEL ACCIONANTE DE ADJUNTAR EL DOCUMENTO EN QUE CONSTE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO OBSTANTE EL REQUERIMIENTO FORMULADO, RESPETA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA."	2a./J. 50/2020 (10a.)	385
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 25, numeral 1.—Véase: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA PROPUESTA DE COBRO Y RECEPCIÓN DEL PAGO DE LOS DERECHOS DE PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Y/O URBANIZACIÓN, CONSTITUYEN UN ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)."	PC.III.A. J/90 A (10a.)	1063
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículos 31 y 32.—Véase: "INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DOBLE TRIBUTACIÓN. AL REALIZARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA TANTO SUS PREVISIONES Y TERMINOLOGÍA, COMO LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL."	I.4o.A.206 A (10a.)	1682
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, artículo 6, numeral 5.—Véase: "IMPUESTO SOBRE LA RENTA. PARA QUE UNA EMPRESA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE EJERCIÓ LA OPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6, NUMERAL 5, DEL		

	Número de identificación	Pág.
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE DICHA CONTRIBUCIÓN, PUEDA DEDUCIR EL PAGO DE INTERESES CON CARGO A LAS RENTAS INMOBILIARIAS PROCEDENTES DE MÉXICO O POR HABER TOMADO EN PRÉSTAMO EL CAPITAL AQUÍ INVERTIDO, DEBE REALIZAR LA RETENCIÓN RELATIVA."	I.4o.A.205 A (10a.)	1679
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, artículo 6, numeral 5.—Véase: "INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DOBLE TRIBUTACIÓN. AL REALIZARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA TANTO SUS PREVISIONES Y TERMINOLOGÍA, COMO LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL."	I.4o.A.206 A (10a.)	1682
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, artículo 11.—Véase: "IMPUESTO SOBRE LA RENTA. PARA QUE UNA EMPRESA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE EJERCIÓ LA OPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6, NUMERAL 5, DEL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE DICHA CONTRIBUCIÓN, PUEDA DEDUCIR EL PAGO DE INTERESES CON CARGO A LAS RENTAS INMOBILIARIAS PROCEDENTES DE MÉXICO O POR HABER TOMADO EN PRÉSTAMO EL CAPITAL AQUÍ INVERTIDO, DEBE REALIZAR LA RETENCIÓN RELATIVA."	I.4o.A.205 A (10a.)	1679

	Número de identificación	Pág.
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, artículo 11.—Véase: "INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DOBLE TRIBUTACIÓN. AL REALIZARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA TANTO SUS PREVISIONES Y TERMINOLOGÍA, COMO LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL."	I.4o.A.206 A (10a.)	1682
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo II.—Véase: "DELITO DE VIOLACIÓN. EL ARTÍCULO 265 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO VULNERA LOS DERECHOS HUMANOS DE IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER, Y NO DISCRIMINACIÓN ANTE LA LEY, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL."	I.9o.P.288 P (10a.)	1671
Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 1 y 2.—Véase: "DELITO DE VIOLACIÓN. EL ARTÍCULO 265 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO VULNERA LOS DERECHOS HUMANOS DE IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER, Y NO DISCRIMINACIÓN ANTE LA LEY, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL."	I.9o.P.288 P (10a.)	1671
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, artículo décimo primero transitorio (D.O.F. 20-XII-2001).—Véase: "PENSIONES OTORGADAS AL AMPARO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA. SU INCREMENTO DEBE EFECTUARSE ANUALMENTE EN EL MES DE FEBRERO, CONFORME AL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) CORRESPONDIENTE AL AÑO CALENDARIO ANTERIOR."	PC.IV.L. J/21 L (10a.)	1224
Ley Agraria, artículo 163.—Véase: "CANCELACIÓN DE DERECHOS SOBRE UNA PARCELA. CUANDO		

	Número de identificación	Pág.
SE EMITE CON MOTIVO DE LO ORDENADO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS Y NO EN FORMA AUTÓNOMA POR EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD."	XVII.2o.P.A.59 A (10a.)	1661
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, artículo 62.—Véase: "ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. AL EXCEDERSE EL PLAZO DE EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY RELATIVA, SE CONTRAVIENE LA FINALIDAD PARA LAS QUE FUERON ESTABLECIDAS."	I.9o.C.51 C (10a.)	1657
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, artículo 72.—Véase: "ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. AL EXCEDERSE EL PLAZO DE EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY RELATIVA, SE CONTRAVIENE LA FINALIDAD PARA LAS QUE FUERON ESTABLECIDAS."	I.9o.C.51 C (10a.)	1657
Ley de Amparo, artículo 17.—Véase: "SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS JUICIOS DE AMPARO, PREVISTA EN EL ACUERDO GENERAL 8/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). OPERA EN FAVOR DE LOS QUEJOSOS EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA URGENTE DEL ASUNTO."	XVII.2o.8 K (10a.)	1726
Ley de Amparo, artículo 17, fracción IV.—Véase: "CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS IMPUESTOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. POR REGLA GENERAL,		

	Número de identificación	Pág.
NO CONSTITUYEN UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA TRASCENDENTAL O UN ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL Y, POR TANTO, NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN AL TÉRMINO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA."	1a./J. 63/2020 (10a.)	324
Ley de Amparo, artículo 17, fracción IV.—Véase: "ORDEN DE APREHENSIÓN. AL SER UN ACTO FUERA DE PROCESO QUE ATENTA CONTRA LA LIBERTAD, LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA NO ESTÁ CONDICIONADA AL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, POR ACTUALIZARSE LA HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SALVO CUANDO EL QUEJOSO HAYA TENIDO CONOCIMIENTO PLENO DE AQUÉLLA POR CUALQUIER MEDIO."	XI.P.43 P (10a.)	1695
Ley de Amparo, artículo 26, fracción I.—Véase: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD. CUANDO NO SE REALIZAN PERSONALMENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTE HAYA SEÑALADO DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA TAL EFECTO, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO Y AMERITA SU REPOSICIÓN."	XVII.2o.P.A.15 K (10a.)	1690
Ley de Amparo, artículo 38.—Véase: "COMPETENCIA. EL JUEZ DE DISTRITO AL QUE LE ES TURNADA UNA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE ACTUAR CONFORME A LA REGLA DE EXCEPCIÓN A LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 38 Y NO PLANTEAR IMPEDIMENTO CONFORME AL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN IV, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO."	PC.XVIII.P.A. J/11 K (10a.)	946

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículo 51, fracción IV.—Véase: "COMPETENCIA. EL JUEZ DE DISTRITO AL QUE LE ES TURNADA UNA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE ACTUAR CONFORME A LA REGLA DE EXCEPCIÓN A LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 38 Y NO PLANTEAR IMPEDIMENTO CONFORME AL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN IV, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO."	PC.XVIII.P.A. J/11 K (10a.)	946
Ley de Amparo, artículo 61, fracción XI.—Véase: "RECURSO DE QUEJA EN EL AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE FUE MATERIA DE IDÉNTICO MEDIO DE IMPUGNACIÓN, AL CONSTITUIR COSA JUZGADA."	I.10o.P.2 K (10a.)	1714
Ley de Amparo, artículo 61, fracción XVIII.—Véase: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS."	PC.XVII. J/26 C (10a.)	1350
Ley de Amparo, artículo 61, fracción XVIII.—Véase: "RECURSO DE APELACIÓN. LA INCLUSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE ESTABLECE SU PROCEDENCIA, NO REQUIERE DE INTERPRETACIÓN ADICIONAL PARA FIJAR EL MONTO A QUE ALUDE EL PROPIO PRECEPTO."	PC.XVII. J/27 C (10a.)	1352
Ley de Amparo, artículo 61, fracción XVIII.—Véase: "RECURSO DE APELACIÓN. SU PROCEDENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS, NO ESTÁ SUJETA		

	Número de identificación	Pág.
A INTERPRETACIÓN ADICIONAL DE LOS ARTÍCULOS 626 Y 168 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA."	PC.XVII. J/25 C (10a.)	1355
Ley de Amparo, artículo 61, fracción XX.—Véase: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO ACATARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A UN DECRETO PENSIONARIO EN RELACIÓN CON EL AUMENTO SALARIAL CORRESPONDIENTE."	PC.XVIII.P.A. J/9 K (10a.)	1398
Ley de Amparo, artículo 75.—Véase: "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS CELEBRADAS EN LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES. PARA LA VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE LAS CONTIENEN, NO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE SE HAGA CONSTAR QUE 'ES COPIA FIEL Y EXACTA' DEL REGISTRO ORIGINAL."	PC.I.C. J/105 C (10a.)	1555
Ley de Amparo, artículo 77.—Véase: "SENTENCIA DE AMPARO QUE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE NIEGA REQUERIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE SU CUMPLIMIENTO INMEDIATO."	1a./J. 59/2020 (10a.)	345
Ley de Amparo, artículo 79, fracción II.—Véase: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE A FAVOR DE MENORES DE EDAD. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y SE APORTAN INDICIOS SOBRE SU EXISTENCIA, AQUÉLLA PROCEDE PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO RECABE DE OFICIO PRUEBAS TENDENTES A DESVIRTUAR ESA NEGATIVA Y DESPLIEGUE UNA POSTURA ACTIVA EN SU RECEPCIÓN Y DESAHOGO."	XXVII.1o.8 K (10a.)	1725

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículo 93, fracción IV.—Véase: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD. CUANDO NO SE REALIZAN PERSONALMENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTE HAYA SEÑALADO DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA TAL EFECTO, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO Y AMERITA SU REPOSICIÓN."	XVII.2o.P.A.15 K (10a.)	1690
Ley de Amparo, artículo 93, fracción IV.—Véase: "RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO EN EL QUE SE RESERVA ACORDAR SOBRE EL OFRECIMIENTO DE PRUEBAS HASTA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. QUEDA SIN MATERIA CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO TENGA CONOCIMIENTO DE QUE SE DICTÓ SENTENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."	PC.V. J/30 K (10a.)	1467
Ley de Amparo, artículo 97, fracción I.—Véase: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO. EN EL INTERPUESTO CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA POR NO HABERSE DESAHOGADO UN REQUERIMIENTO PARA SU ACLARACIÓN, PUEDE PLANTEARSE LA ILEGALIDAD DE ÉSTE."	(I Región)4o.19 K (10a.)	1715
Ley de Amparo, artículo 97, fracción I.—Véase: "SENTENCIA DE AMPARO QUE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE NIEGA REQUERIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE SU CUMPLIMIENTO INMEDIATO."	1a./J. 59/2020 (10a.)	345
Ley de Amparo, artículo 107, fracción IV.—Véase: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME		

	Número de identificación	Pág.
LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN."	1a./J. 52/2020 (10a.)	293
Ley de Amparo, artículo 107, fracción V.—Véase: "ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO ORDENA, POR SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN."	1a./J. 58/2020 (10a.)	337
Ley de Amparo, artículo 107, fracción V.—Véase: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO."	PC.XVII. J/29 P (10a.)	1154
Ley de Amparo, artículo 107, fracción VIII.—Véase: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO QUE REVOCA EL PROVEÍDO DICTADO POR UN JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DESECHA UNA DEMANDA POR CONSIDERAR CARECER DE COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA, PARA CONOCER DE UN JUICIO ORDINARIO CIVIL."	PC.I.C. J/106 C (10a.)	687
Ley de Amparo, artículo 114.—Véase: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO. EN EL INTERPUESTO CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA POR NO HABERSE DESAHOGADO UN REQUERIMIENTO PARA SU ACLARACIÓN, PUEDE PLANTEARSE LA ILEGALIDAD DE ÉSTE."	(I Región)4o.19 K (10a.)	1715

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículo 114, fracción IV (abrogada).—Véase: "ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO ORDENA, POR SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN."	1a./J. 58/2020 (10a.)	337
Ley de Amparo, artículo 117.—Véase: "ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO. NO LO CONSTITUYE EL COBRO DEL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EFECTUADO A TRAVÉS DEL AVISO-RECIBO EXPEDIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)."	PC.XVIII.P.A. J/12 K (10a.)	580
Ley de Amparo, artículo 117.—Véase: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD. CUANDO NO SE REALIZAN PERSONALMENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTE HAYA SEÑALADO DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA TAL EFECTO, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO Y AMERITA SU REPOSICIÓN."	XVII.2o.P.A.15 K (10a.)	1690
Ley de Amparo, artículo 119.—Véase: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD. CUANDO NO SE REALIZAN PERSONALMENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTE HAYA SEÑALADO DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA TAL EFECTO, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO Y AMERITA SU REPOSICIÓN."	XVII.2o.P.A.15 K (10a.)	1690
Ley de Amparo, artículo 124.—Véase: "ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO. NO LO CONSTITUYE EL COBRO DEL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EFECTUADO A TRAVÉS		

	Número de identificación	Pág.
DEL AVISO-RECIBO EXPEDIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)."	PC.XVIII.P.A. J/12 K (10a.)	580
Ley de Amparo, artículo 126.—Véase: "SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE DECRETARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, SI DE LA DEMANDA O DE SUS ANEXOS SE ADVIERTE QUE SE EMITIÓ Y EJECUTÓ SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL."	PC.XVIII.P.A. J/10 K (10a.)	1487
Ley de Amparo, artículo 170, fracción I.—Véase: "ORDEN DE APREHENSIÓN. AL SER UN ACTO FUERA DE PROCESO QUE ATENTA CONTRA LA LIBERTAD, LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA NO ESTÁ CONDICIONADA AL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, POR ACTUALIZARSE LA HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SALVO CUANDO EL QUEJOSO HAYA TENIDO CONOCIMIENTO PLENO DE AQUÉLLA POR CUALQUIER MEDIO."	XI.P.43 P (10a.)	1695
Ley de Amparo, artículo 172, fracciones I, VI y VIII.—Véase: "SUSTITUCIÓN PROCESAL DE LA PARTE ACTORA. EN LOS CASOS EN QUE SE PONGA EN CONOCIMIENTO DEL JUZGADOR PREVIO A ORDENARSE EL EMPLAZAMIENTO, DEBE CORRÉRSELE TRASLADO A LA PARTE DEMANDADA CON LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE AL EFECTO SE APORTEN, CUYA OMISIÓN ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL."	VII.2o.C.223 C (10a.)	1728
Ley de Amparo, artículo 210.—Véase: "DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL RECLAMO NO DERIVA DE		

	Número de identificación	Pág.
LA APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INVÁLIDA."	2a. XLVI/2020 (10a.)	391
Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas, artículo 12.—Véase: "INDEMNIZACIÓN JUSTA POR CAUSA DE EXPROPIACIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN, OCUPACIÓN TEMPORAL O LIMITACIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, SU INTERPRETACIÓN A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE PREVALENCIA DE INTERPRETACIÓN DE NORMAS Y PRO PERSONA, PERMITEN SATISFACERLA."	PC.XIX. J/16 A (10a.)	1000
Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2015, artículo 63.—Véase: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA PROPUESTA DE COBRO Y RECEPCIÓN DEL PAGO DE LOS DERECHOS DE PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Y/O URBANIZACIÓN, CONSTITUYEN UN ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)."	PC.III.A. J/90 A (10a.)	1063
Ley de Instituciones de Crédito, artículo 46.—Véase: "CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR LA FALTA O RETRASO EN LA RETRIBUCIÓN DE LAS CANTIDADES SUSTRAÍDAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO."	1a./J. 61/2020 (10a.)	298
Ley de Instituciones de Crédito, artículo 48, fracción I.—Véase: "CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR LA FALTA O RETRASO EN LA RETRIBUCIÓN DE LAS CANTIDADES SUSTRAÍDAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO."	1a./J. 61/2020 (10a.)	298

	Número de identificación	Pág.
Ley de Instituciones Crédito, artículo 48 Bis 2.—Véase: "CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR LA FALTA O RETRASO EN LA RETRIBUCIÓN DE LAS CANTIDADES SUSTRAÍDAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO."	1a./J. 61/2020 (10a.)	298
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, artículo 7.—Véase: "ABOGADO PATRONO. EL DESIGNADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO [ALCANCE Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 90/2012 (10a.)]."	PC.III.A. J/91 A (10a.)	504
Ley de Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Nuevo León, artículo 1o.—Véase: "JUICIO DE NULIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE IMPONE MULTA A UN SUJETO OBLIGADO POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE LA MATERIA."	PC.IV.A. J/50 A (10a.)	1199
Ley de Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Nuevo León, artículo 17.—Véase: "JUICIO DE NULIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE IMPONE MULTA A UN SUJETO OBLIGADO POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE LA MATERIA."	PC.IV.A. J/50 A (10a.)	1199
Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, artículo 1o.—Véase: "COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. AL TRATARSE DE UN ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO,		

	Número de identificación	Pág.
LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA A UN SUJETO OBLIGADO EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, NO ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL."	IV.2o.A.149 A (10a.)	1662
Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, artículo 17, fracción IV.—Véase: "COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. AL TRATARSE DE UN ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO, LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA A UN SUJETO OBLIGADO EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, NO ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL."	IV.2o.A.149 A (10a.)	1662
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, artículo 8o., fracción I.—Véase: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO. SU RECONOCIMIENTO DE BASE DEBE RETROTRAERSE HASTA EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYAN ADQUIRIDO EL DERECHO DE INAMOVILIDAD, LO QUE SUCEDE CUANDO HAN LABORADO SEIS MESES ININTERRUMPIDOS Y SIN NOTA DESFAVORABLE EN UN PUESTO BASIFICABLE."	X.1o.T.4 L (10a.)	1733
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, artículo 66, fracción VIII (vigente hasta el 31 de diciembre de 2017).—Véase: "AMPARO CONTRA LEYES. HIPÓTESIS EN LA QUE SE ACREDITA, DE MANERA IMPLÍCITA, LA APLICACIÓN EN PERJUICIO DEL QUEJOSO DEL ARTÍCULO 67, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ABROGADA)."	PC.XV. J/43 A (10a.)	619
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, artículo 67 (vigente hasta el 31 de diciembre de 2017).—Véase: "AMPARO		

	Número de identificación	Pág.
CONTRA LEYES. HIPÓTESIS EN LA QUE SE ACREDITA, DE MANERA IMPLÍCITA, LA APLICACIÓN EN PERJUICIO DEL QUEJOSO DEL ARTÍCULO 67, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ABROGADA)."	PC.XV. J/43 A (10a.)	619
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, artículos 183 y 184.—Véase: "JUICIO DE NULIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE IMPONE MULTA A UN SUJETO OBLIGADO POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE LA MATERIA."	PC.IV.A. J/50 A (10a.)	1199
Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 6, fracción I.—Véase: "PENSIONES OTORGADAS AL AMPARO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA. SU INCREMENTO DEBE EFECTUARSE ANUALMENTE EN EL MES DE FEBRERO, CONFORME AL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) CORRESPONDIENTE AL AÑO CALENDARIO ANTERIOR."	PC.IV.L. J/21 L (10a.)	1224
Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 186 (abrogada).—Véase: "IMPUESTO SOBRE LA RENTA. PARA QUE UNA EMPRESA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE EJERCIÓ LA OPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6, NUMERAL 5, DEL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE DICHA CONTRIBUCIÓN, PUEDA DEDUCIR EL PAGO DE INTERESES CON CARGO A LAS RENTAS INMOBILIARIAS PROCEDENTES DE MÉXICO O POR HABER TOMADO EN PRÉSTAMO EL CAPITAL AQUÍ INVERTIDO, DEBE REALIZAR LA RETENCIÓN RELATIVA."	I.4o.A.205 A (10a.)	1679

	Número de identificación	Pág.
Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 186 (abrogada).—Véase: "INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DOBLE TRIBUTACIÓN. AL REALIZARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA TANTO SUS PREVISIONES Y TERMINOLOGÍA, COMO LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL."	I.4o.A.206 A (10a.)	1682
Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 195 (abrogada).—Véase: "IMPUESTO SOBRE LA RENTA. PARA QUE UNA EMPRESA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE EJERCIÓ LA OPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6, NUMERAL 5, DEL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE DICHA CONTRIBUCIÓN, PUEDA DEDUCIR EL PAGO DE INTERESES CON CARGO A LAS RENTAS INMOBILIARIAS PROCEDENTES DE MÉXICO O POR HABER TOMADO EN PRÉSTAMO EL CAPITAL AQUÍ INVERTIDO, DEBE REALIZAR LA RETENCIÓN RELATIVA."	I.4o.A.205 A (10a.)	1679
Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 195 (abrogada).—Véase: "INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DOBLE TRIBUTACIÓN. AL REALIZARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA TANTO SUS PREVISIONES Y TERMINOLOGÍA, COMO LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL."	I.4o.A.206 A (10a.)	1682
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, artículos 52 y 53.—Véase: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT). CUANDO EN EL AMPARO SE RECLAME LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR DE FONDOS, NO ES PROCEDENTE DAR VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME		

	Número de identificación	Pág.
JUSTIFICADO PARA QUE AMPLÍE SU DEMANDA CONTRA LA RESPUESTA EMITIDA."	V.2o.P.A.33 A (10a.)	1681
Ley del Notariado del Estado de Puebla, artículo 53.—Véase: "NOTARIO TITULAR. EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE PUEBLA, QUE ESTABLECE LA IMPROCEDENCIA DE RECURSO ALGUNO CONTRA LAS DECISIONES DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO Y DEL JURADO EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PATENTE RELATIVA, TIENE EL EXCLUSIVO EFECTO DE DAR DEFINITIVIDAD A DICHOS ACTOS, LO QUE HACE PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL."	VI.1o.A.124 A (10a.)	1689
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículos 8 y 9.—Véase: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA PROPUESTA DE COBRO Y RECEPCIÓN DEL PAGO DE LOS DERECHOS DE PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Y/O URBANIZACIÓN, CONSTITUYEN UN ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)."	PC.III.A. J/90 A (10a.)	1063
Ley del Seguro Social, artículo 33 (derogada).—Véase: "SEGURO SOCIAL. CUANDO SE AJUSTE UNA PENSIÓN POR INVALIDEZ, VEJEZ O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, DEBE CONSIDERARSE EL LÍMITE SUPERIOR DE DIEZ VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL ENTONCES DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO) AL MOMENTO EN QUE FUE OTORGADA [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA III.4o.T.47 L (10a.)]."	III.4o.T.57 L (10a.)	1721
Ley del Seguro Social, artículo 33 (derogada).—Véase: "SEGURO SOCIAL. PARA LA PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DEL TOPE SALARIAL DE LOS SEGUROS DE INVALIDEZ, VEJEZ O CESANTÍA EN EDAD		

	Número de identificación	Pág.
AVANZADA, NO ES OBLIGACIÓN DEL INSTITUTO PROBAR QUE EL ASEGURADO COTIZÓ MENOS QUE EL LÍMITE SUPERIOR DE DIEZ VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL ENTONCES DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)."	III.4o.T.59 L (10a.)	1722
Ley del Seguro Social, artículo 84, fracciones III a IX.—Véase: "CONSTANCIA DE NEGATIVA DE PENSIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES INNECESARIO EXHIBIRLA EN EL JUICIO PARA ACCEDER A LOS RECURSOS ACUMULADOS EN LOS RUBROS DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ Y CUOTA SOCIAL, CUANDO EL ACTOR SEA BENEFICIARIO SUSTITUTO O DESIGNADO POR MERA DEPENDENCIA ECONÓMICA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 501 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO."	I.11o.T.52 L (10a.)	1668
Ley del Seguro Social, artículo 167 (derogada).—Véase: "SEGURO SOCIAL. CUANDO SE AJUSTE UNA PENSIÓN POR INVALIDEZ, VEJEZ O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, DEBE CONSIDERARSE EL LÍMITE SUPERIOR DE DIEZ VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL ENTONCES DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO) AL MOMENTO EN QUE FUE OTORGADA [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA III.4o.T.47 L (10a.)]."	III.4o.T.57 L (10a.)	1721
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, artículo 6o.—Véase: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO. SU RECONOCIMIENTO DE BASE DEBE RETROTRAERSE HASTA EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYAN ADQUIRIDO EL DERECHO DE INAMOVILIDAD, LO QUE SUCEDE CUANDO HAN LABORADO SEIS MESES ININTERRUMPIDOS Y SIN NOTA DESFAVORABLE EN UN PUESTO BASIFICABLE."	X.1o.T.4 L (10a.)	1733
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículo 16, fracción X.—Véase: "CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN ORDENADO POR LA		

	Número de identificación	Pág.
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. OPERA UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SIN QUE ÉSTA DICTE LA RESOLUCIÓN QUE DEFINA LA SITUACIÓN DEL PARTICULAR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO."	PC.XVI.A. J/29 A (10a.)	722
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículo 17.—Véase: "CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN ORDENADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. OPERA UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SIN QUE ÉSTA DICTE LA RESOLUCIÓN QUE DEFINA LA SITUACIÓN DEL PARTICULAR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO."	PC.XVI.A. J/29 A (10a.)	722
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículo 57, fracción I.—Véase: "CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN ORDENADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. OPERA UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SIN QUE ÉSTA DICTE LA RESOLUCIÓN QUE DEFINA LA SITUACIÓN DEL PARTICULAR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO."	PC.XVI.A. J/29 A (10a.)	722
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículo 60.—Véase: "CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN ORDENADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. OPERA UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SIN QUE ÉSTA DICTE LA RESOLUCIÓN QUE DEFINA LA SITUACIÓN DEL PARTICULAR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO."	PC.XVI.A. J/29 A (10a.)	722
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículos 62 a 69.—Véase: "CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN ORDENADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. OPERA UNA VEZ		

	Número de identificación	Pág.
TRANSCURRIDO EL PLAZO SIN QUE ÉSTA DICTE LA RESOLUCIÓN QUE DEFINA LA SITUACIÓN DEL PARTICULAR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO."	PC.XVI.A. J/29 A (10a.)	722
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 5o.—Véase: "ABOGADO PATRONO. EL DESIGNADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO [ALCANCE Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 90/2012 (10a.)]."	PC.III.A. J/91 A (10a.)	504
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 14.—Véase: "MAGISTRADO INSTRUCTOR EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CARECE DE FACULTADES PARA DESECHAR LA DEMANDA DE NULIDAD, BAJO EL ARGUMENTO DE QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO ES DEFINITIVA, PUES ÉSA NO ES UNA CAUSA NOTORIA NI MANIFIESTA PARA ELLO."	XVII.2o.P.A.58 A (10a.)	1687
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 15.—Véase: "DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN III, Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL PREVER LA SANCIÓN CONSISTENTE EN TENERLA POR NO PRESENTADA ANTE LA OMISIÓN DEL ACCIONANTE DE ADJUNTAR EL DOCUMENTO EN QUE CONSTE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO OBSTANTE EL REQUERIMIENTO FORMULADO, RESPETA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA."	2a./J. 50/2020 (10a.)	385
Ley Federal del Trabajo, artículo 37.—Véase: "NOTIFICADORES/LOCALIZADORES CONTRATADOS EN PLAZAS NO PRESUPUESTARIAS EN EL INSTITUTO		

	Número de identificación	Pág.
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). EL 'INFORME DE LOS SERVICIOS PERSONALES EN EL IMSS 2014', PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE JUNIO DE 2015, CARECE DE EFICACIA JURÍDICA PARA JUSTIFICAR SU CONTRATACIÓN POR TIEMPO DETERMINADO."	I.11o.T.70 L (10a.)	1692
Ley Federal del Trabajo, artículo 501.—Véase: "CONSTANCIA DE NEGATIVA DE PENSIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES INNECESARIO EXHIBIRLA EN EL JUICIO PARA ACCEDER A LOS RECURSOS ACUMULADOS EN LOS RUBROS DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ Y CUOTA SOCIAL, CUANDO EL ACTOR SEA BENEFICIARIO SUSTITUTO O DESIGNADO POR MERA DEPENDENCIA ECONÓMICA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 501 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO."	I.11o.T.52 L (10a.)	1668
Ley Federal del Trabajo, artículo 743.—Véase: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. CASO EN QUE EL DOMICILIO PARA TAL FIN ES SEÑALADO SIN NÚMERO."	I.3o.T.66 L (10a.)	1677
Ley Federal del Trabajo, artículo 780.—Véase: "RENUNCIA. SI EL TRABAJADOR QUE LA OBJETÓ EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD DE CONTENIDO Y FIRMA NO COMPARECE AL DESAHOGO DE LA PRUEBA EN CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA QUE OFRECIÓ, LA JUNTA DEBE APERCIBIRLO CON DECLARAR SU DESERCIÓN."	I.11o.T.39 L (10a.)	1717
Ley Federal del Trabajo, artículo 802.—Véase: "RENUNCIA. SI EL TRABAJADOR QUE LA OBJETÓ EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD DE CONTENIDO Y FIRMA NO COMPARECE AL DESAHOGO DE LA PRUEBA EN CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA QUE OFRECIÓ, LA JUNTA DEBE APERCIBIRLO CON DECLARAR SU DESERCIÓN."	I.11o.T.39 L (10a.)	1717

	Número de identificación	Pág.
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, artículo 267.—Véase: "CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR LA FALTA O RETRASO EN LA RETRIBUCIÓN DE LAS CANTIDADES SUSTRAÍDAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO."	1a./J. 61/2020 (10a.)	298
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, artículos 271 a 273.—Véase: "CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR LA FALTA O RETRASO EN LA RETRIBUCIÓN DE LAS CANTIDADES SUSTRAÍDAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO."	1a./J. 61/2020 (10a.)	298
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 158 a 160.—Véase: "JUICIO DE NULIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE IMPONE MULTA A UN SUJETO OBLIGADO POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE LA MATERIA."	PC.IV.A. J/50 A (10a.)	1199
Ley General de Víctimas, artículo 12, fracción III.—Véase: "REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DE LA SALA QUE LA ORDENA CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."	I.9o.P.286 P (10a.)	1719
Ley General para el Control del Tabaco, artículo 16, fracción VI.—Véase: "CONTROL DEL TABACO. EL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN VI, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD."	REPUBLICADA POR CORRECCIÓN EN EL PRECEDENTE 1a. XVI/2020 (10a.)	352

	Número de identificación	Pág.
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, artículo 18, fracción IV.—Véase: "CANCELACIÓN DE DERECHOS SOBRE UNA PARCELA. CUANDO SE EMITE CON MOTIVO DE LO ORDENADO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS Y NO EN FORMA AUTÓNOMA POR EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD."	XVII.2o.P.A.59 A (10a.)	1661
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, artículo 4, numeral 1, fracción I.—Véase: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA PROPUESTA DE COBRO Y RECEPCIÓN DEL PAGO DE LOS DERECHOS DE PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Y/O URBANIZACIÓN, CONSTITUYEN UN ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)."	PC.III.A. J/90 A (10a.)	1063
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, artículo 4.—Véase: "NOTARIO TITULAR. EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE PUEBLA, QUE ESTABLECE LA IMPROCEDENCIA DE RECURSO ALGUNO CONTRA LAS DECISIONES DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO Y DEL JURADO EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PATENTE RELATIVA, TIENE EL EXCLUSIVO EFECTO DE DAR DEFINITIVIDAD A DICHOS ACTOS, LO QUE HACE PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL."	VI.1o.A.124 A (10a.)	1689
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, artículo 36, fracción I.—Véase: "MAGISTRADO INSTRUCTOR EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CARECE DE FACULTADES PARA DESECHAR LA DEMANDA DE NULIDAD, BAJO EL ARGUMENTO DE QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO ES DEFINITIVA,		

	Número de identificación	Pág.
PUES ÉSA NO ES UNA CAUSA NOTORIA NI MANIFIESTA PARA ELLO."	XVII.2o.P.A.58 A (10a.)	1687
Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3o.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (NAFIN). HIPÓTESIS EN LA QUE TIENEN DERECHO AL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS."	PC.I.L. J/68 L (10a.)	1528
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 47.—Véase: "DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL RECLAMO NO DERIVA DE LA APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INVÁLIDA."	2a. XLVI/2020 (10a.)	391
Ley Reglamentaria del Registro Público de la Propiedad y del Comercio para el Estado de Nuevo León, artículo 8o., fracciones I y VI.—Véase: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. SUS REGISTRADORES SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO CALIFICAN UNILATERALMENTE UNA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN O POR LOS VICIOS PROPIOS DE LA EJECUTADA POR ORDEN DE DIVERSA AUTORIDAD."	(IV Región)1o.26 A (10a.)	1715
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 26.—Véase: "DELITO DE VIOLACIÓN. EL ARTÍCULO 265 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO VULNERA LOS DERECHOS HUMANOS DE IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER, Y		

	Número de identificación	Pág.
NO DISCRIMINACIÓN ANTE LA LEY, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL."	I.9o.P.288 P (10a.)	1671
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 2 y 3.—Véase: "DELITO DE VIOLACIÓN. EL ARTÍCULO 265 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO VULNERA LOS DERECHOS HUMANOS DE IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER, Y NO DISCRIMINACIÓN ANTE LA LEY, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL."	I.9o.P.288 P (10a.)	1671
Reglamento del Código Fiscal de la Federación, artículo 40.—Véase: "COMPROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ABROGADO, AL DESARROLLAR LOS REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER PARA IDENTIFICAR BIENES O MERCANCÍAS, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 29-A, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA."	XVII.2o.P.A.62 A (10a.)	1663
Reglamento del Código Fiscal de la Federación, artículo 40.—Véase: "COMPROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ABROGADO, AL ESTABLECER DETERMINADOS REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER PARA IDENTIFICAR BIENES O MERCANCÍAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY."	XVII.2o.P.A.61 A (10a.)	1665
Reglamento del Código Fiscal de la Federación, artículo 50 (abrogado).—Véase: "COMPROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ABROGADO, AL DESARROLLAR LOS REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER PARA IDENTIFICAR BIENES O MERCANCÍAS, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 29-A, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA		

	Número de identificación	Pág.
FEDERACIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA."	XVII.2o.P.A.62 A (10a.)	1663
Reglamento del Código Fiscal de la Federación, artículo 50 (abrogado).—Véase: "COMPROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ABROGADO, AL ESTABLECER DETERMINADOS REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER PARA IDENTIFICAR BIENES O MERCANCÍAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY."	XVII.2o.P.A.61 A (10a.)	1665
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, artículo 3.—Véase: "COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS COMPETENCIA DE LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS COORDINADORES DE ÁREA QUE PERTENEZCAN A ÉSTAS ESTÁN FACULTADOS PARA EXPEDIRLAS, AL ACTUAR EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE SU TITULAR."	(IV Región)1o.25 A (10a.)	1670
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, artículo 6, fracción III.—Véase: "COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS COMPETENCIA DE LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS COORDINADORES DE ÁREA QUE PERTENEZCAN A ÉSTAS ESTÁN FACULTADOS PARA EXPEDIRLAS, AL ACTUAR EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE SU TITULAR."	(IV Región)1o.25 A (10a.)	1670
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, artículo 7, fracción I.—Véase: "COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS COMPETENCIA DE LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.		

	Número de identificación	Pág.
LOS COORDINADORES DE ÁREA QUE PERTENEZCAN A ÉSTAS ESTÁN FACULTADOS PARA EXPEDIRLAS, AL ACTUAR EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE SU TITULAR."	(IV Región)1o.25 A (10a.)	1670
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, artículo 25.—Véase: "COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS COMPETENCIA DE LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS COORDINADORES DE ÁREA QUE PERTENEZCAN A ÉSTAS ESTÁN FACULTADOS PARA EXPEDIRLAS, AL ACTUAR EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE SU TITULAR."	(IV Región)1o.25 A (10a.)	1670

La compilación y formación editorial de esta Gaceta estuvieron al cuidado de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se utilizaron tipos Helvetica Lt Std 7, 8, 9 y 10 puntos. Se terminó de editar el 15 de diciembre de 2020. Se publicó en la página de internet *https://www.scjn.gob.mx* de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.